Del genocidio y robo de tierras al "Boom Sojero"

Del genocidio y robo de tierras al "Boom Sojero"

OSCAR AINSUAIN

Una investigación realizada con la
colaboración de Alejandro Hugolini

Participaron de este trabajo
Pablo DIMASO
Carlos MENEGUZZI
Carlos Alberto MINETTI (h)

A modo de reconocimiento

A Vicente Mancini
Al arrendatario
Al cooperativista
Al luchador...

Vicente Mancini nació el 24 de febrero de 1926 en Bigand, una localidad ubicada al sur de la provincia de Santa Fe. Era el hijo menor de una familia de inmigrantes italianos.

Ni bien llegaron al país, sus padres arrendaron a la familia Bemberg un campo de 70 hectáreas, ubicado en la zona de Cuco (Bombal). Durante su niñez y juventud, además de trabajar como peón rural en distintas estancias de la zona, Vicente colaboró con su familia en diversas tareas rurales. En 1948, junto a su madre y sus dos hermanos italianos, se trasladó a la localidad de Chabás. Luego de realizar distintos trabajos –venta de pollos y de ropa, compra-venta de vehículos, conserjería del Club Atlético Chabás, etc.– adquirió la vieja sodería de Domingo Bussi y montó una empresa familiar.

Por esos años asomaron sus dos grandes pasiones: **el fútbol y la política**, que tiñeron toda su vida.

Creía fervientemente en el deporte amateur y lo concebía "*como uno de los pilares de la educación de la juventud*". Además de ser presidente del Club Atlético Chabás, entrenó a cientos de chicos, que aún hoy lo recuerdan con cariño.

En política, y como expresión de sus orígenes de clase, sostuvo desde su juventud ideas de izquierda. A fines de la década del '50, tras la ruptura del radicalismo, pasó a militar en el sector intransigente del partido, la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI) y posteriormente adhirió al Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). A principios de la década

del '70, luego de años de discrepancias y con posiciones críticas sobre la gestión de Frondizi, rompió con el desarrollismo abrazando los ideales del comunismo revolucionario, ideales que enarboló hasta su muerte acaecida el 27 de mayo de 1999.

En 1974 ingresó al Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Chabás, ocupando distintos cargos hasta su muerte. Fue presidente entre 1974 y 1981.

A partir de pregonar un "*cooperativismo no complaciente*" con los gobiernos de turno, su figura trascendió el plano local para adquirir proyección provincial, ya que llegó a presidir la Mesa Directiva de la Regional de Cooperativas Eléctricas de la Provincia de Santa Fe, dependiente de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE).

Luego de prolongadas discrepancias con este organismo al que calificaba de "*burocrático*" fundó en 1978, en Chabás, y junto a otros cooperativistas de la región, la Federación Santafesina de Cooperativas Eléctricas (FESCOE). Esta organización disidente estuvo integrada por las cooperativas de Chabás, Rufino, Hughes, Chovet, San Gregorio, Carmen, Elortondo, Mugueta y Fuentes. Como delegado de la cooperativa local ante FESCOE se opuso firmemente a la privatización de la DPE.

Vicente Mancini concebía al cooperativismo como un "*instrumento para asistir a los más necesitados*". Debido a esto, los principales servicios que brinda actualmente la Cooperativa Eléctrica de Chabás –sepelio gratuito que incluye cajón, sala velatoria y nicho; servicio gratuito de ambulancia; préstamos gratuitos de aparatos ortopédicos y tubos de oxígenos; y el gabinete psicopedagógico, que atiende a más de 100 chicos respaldándolos en el aprendizaje del ciclo primario, gabinete del que participan psicólogos y maestros de las escuelas primarias– se generaron a partir de esta concepción que perduró a través del tiempo.

Vicente Mancini también fue fundador y primer presidente del Centro de Jubilados de la localidad; y por iniciativa suya, la Cooperativa Eléctrica, además de integrar la Comisión del Hospital de Chabás (SAMCO), es la entidad que más aporta para el sostenimiento de este vital centro de salud.

A más de seis años de su muerte, la Cooperativa Eléctrica de Chabás, dirigida por un Consejo de Administración que reivindica y lleva adelante sus ideales cooperativistas, es la institución más prestigiada y respetada de esta próspera localidad. En esto, sin dudas, mucho tuvo que ver Vicente Mancini.

El Autor

Prólogo

El haber sido convocadas para la lectura de este libro e invitadas a escribir unas breves palabras a manera de prólogo, representa una satisfacción para el Movimiento de Mujeres en Lucha (MML) de Santa Fe.

Nosotras surgimos durante la llamada "década menemista", cuando ante la pérdida inminente de su patrimonio, y mientras embalaba sus cosas para irse, una sencilla mujer, Lucy de Cornelis, en un pequeño pueblo de La Pampa, Winifreda, decide que "algo debe hacer" y acude a una radio de su pueblo convocando a una asamblea que daría origen a nuestro Movimiento.

Un tiempo antes, Ingaramo, el subsecretario de Agricultura del gobierno de Menem, se constituía en vocero de los terratenientes declarando que la mitad de los productores agropecuarios eran "inviables" y debían abandonar el campo, ya que sus explotaciones "no eran rentables".

Si bien hoy muchos chacareros han podido salir de la situación de endeudamiento, principalmente en esta zona de la pampa húmeda (sur de Santa Fe, sureste de Córdoba y norte de Buenos Aires), el modelo que actualmente se aplica es, en esencia, el mismo de los '90 y no difiere tampoco de aquel que comenzó a regir a partir de 1976, como lo demuestra la persistente crisis de numerosas economías regionales como las del algodón, la pera o la manzana. Es un modelo que lleva adelante una política de desregulación en lo agrario con respecto a temas como uso y tenencia de la tierra, extranjerización de la misma, comercialización de granos y de carnes (concentrada en manos del capital especulativo), la imposición de precios, etc. Un modelo que, en definitiva, conlleva a la desaparición de miles de pequeños y medianos productores, mientras campean orgullosos los terratenientes y latifundistas, creando una seria amenaza para la soberanía nacional y sometiendo a nuestras familias a la misma opresión que sufrieron nuestros padres y abuelos.

Las mujeres que conformamos este movimiento somos tercera o cuarta generación desde que los primeros inmigrantes vinieron al país a trabajar la tierra, a colonizarla. Algo hemos leído sobre la gloriosa historia de Santa Fe en el gremialismo agrario. No olvidamos que María Bulzani fue quien dio comien-

zo a la primera huelga agraria que desembocó en la gesta del Grito de Alcorta. La experiencia indirecta volcada en los libros y la tradición oral, en la heterogeneidad del devenir histórico, así como nuestra práctica, fueron conformando nuestra identidad. De alguna manera, ésta también contiene la de los pueblos originarios de estas tierras, saqueados a partir de la Conquista.

Lo que vemos en este libro es que, tanto las tradiciones orales referidas como la experiencia indirecta, se reflejan y reinterpretan en un relato de la historia comprometido con las luchas de nuestro pueblo. Es un libro que toma posición desde el ángulo de las clases y capas más explotadas, de las que nos sentimos parte.

Antes eran las casas cerealeras, las casas de exportación, el almacén de ramos generales, y hoy son los grandes monopolios exportadores los que se quedan con nuestro sacrificio, constituyendo una sangría para la producción y el trabajo de nuestra patria.

A través de las páginas de este libro fuimos viendo cómo la historia se repite. Y que esa historia es una historia de luchas, con avances y retrocesos.

Este libro, si bien habla del pasado de nuestra provincia, también nos refiere el presente y el futuro. Es de palpitante actualidad. Porque ya desde su título nos alerta alrededor de la línea de continuidad que **une al genocidio y saqueo de los pueblos originarios con el llamado "boom" de la soja,** como fenómeno emergente del desarrollo deforme que tiene nuestro país, producto del latifundio. Y nos plantea desafíos y perspectivas, acerca de cómo pensamos un porvenir independiente sin dominación de ningún tipo.

Parafraseando al poeta, al igual que nosotras, este libro se asienta en esa línea que practica "*al andar se hace camino...*". O en la enseñanza de Simón Rodríguez, maestro del libertador Bolívar, quien dijo que "*tuvimos que inventar para no errar*".

Creemos que ésta no es una obra más, se inscribe en la literatura comprometida y militante y para nosotras se constituye en una herramienta, en una guía, en material de consulta cotidiano para ir buscando la verdad en los hechos, en nuestra larga lucha de caminantes por la dignidad.

Seguramente este libro será una ayuda; estamos convencidas de que nos debe orientar para evitar que nuestras chacras sean fagocitadas por inversores inmobiliarios internos y externos, y podamos orgullosas, mostrar cifras récord de producción pero en **chacras argentinas y de familias argentinas**.

Movimiento de Mujeres en Lucha
Provincia de Santa Fe
Rosario, diciembre de 2005

A modo de introducción
La Historia como pasión y compromiso

Contar la historia de Santa Fe desde la Conquista hasta la actualidad supone construir un relato que dé cuenta de la vida de los habitantes y la transformación de la sociedad civil, la economía y las formas de gobierno a lo largo de los últimos quinientos años.

El autor pudo haber seguido el fácil camino de relatar una sucesión de hechos políticos, económicos, sociales y culturales de acuerdo a la historia cristalizada en un cúmulo de datos: cuándo y cómo se fundaron los pueblos y colonias, cuándo se construyó tal puerto, la primera cosecha o el primer ferrocarril, la cantidad de habitantes, la progresión de la ocupación de la tierra, la formación y desintegración de los grupos políticos, la instalación de industrias nacionales y extranjeras, los nombres de los gobernantes..., etc.

Pero cuando el periodismo se ejerce comprometidamente, desde un punto de vista nacional y popular, ya no es posible abordar la historia como una simple sucesión temporal de hechos, sino como el resultado de determinadas luchas, con avances y retrocesos, para modificar las estructuras que mantienen la concentración de las riquezas en un territorio como el santafesino que produce –por dar un ejemplo– diez o más veces la cantidad de alimentos necesarios para satisfacer las necesidades de sus habitantes.

En este punto el autor, que no toma distancia sino que se ve como sujeto y protagonista de al menos los últimos treinta años de la historia, acomete honestamente la búsqueda de la verdad histórica, investiga la existencia de un hilo conductor, muchas veces subterráneo o deliberadamente oculto, y elabora su hipótesis de trabajo.

¿Por qué Argentina, y en especial Santa Fe, presentan los índices de pobreza y marginalidad que todos conocemos? ¿Cómo es posible que mientras crece el PBI disminuye la participación de los trabajadores en el ingreso? ¿Por qué la propiedad de la tierra está concentrada en los niveles de principios del siglo XX y, a la vez, los pueblos originarios tienen que emprender una larga lucha para acceder a pequeños terrenos donde edificar

sus viviendas? ¿La estructura del transporte y la inversión en obras públicas obedece a las necesidades del mercado interno o a la reducción de costos de las empresas multinacionales que drenan las riquezas de nuestra tierra? ¿Y la degradación de la educación pública, de la salud pública, de la justicia y la seguridad tiene relación con todo esto?

Cuando un amigo le preguntó a Arturo Jauretche por qué había tanta pobreza si en la Argentina "*llueve la abundancia*", éste contestó: "*porque la Argentina está techada, y la abundancia que llueve se va por distintas canaletas*" (en ese momento se refería a Inglaterra y EE.UU.). Lo que hay que hacer, decía, es "*sacar el techo, o por lo menos hacerle un buen agujero, y que nos mojemos todos*". El enigma, supuestamente inexplicable, de la "decadencia argentina" fue revelado magistralmente por Jauretche. Su respuesta, en la actualidad, supone recuperar plenamente –en la teoría y en la práctica– los conceptos de imperialismo y dependencia, que volvieron a discutirse en las fábricas, las calles y las aulas luego de los oscuros '90.

La investigación periodística, que medulosa y profesionalmente realizó Oscar Ainsuain, tiene por hipótesis que las barreras que frenan el desarrollo autónomo de la nación y la justa distribución de sus riquezas están construidas sobre dos ejes: la permanencia del latifundio y la dependencia del exterior que condiciona –y muchas veces determina– las decisiones de los gobernantes.

El autor sostiene que Argentina es, desde sus orígenes hasta la actualidad, un país en disputa. Asevera que se está pagando una ilegítima y fraudulenta deuda externa y que distintos sectores del bloque dominante acceden a porciones de la riqueza nacional que, en muchos casos, transfieren al exterior. Por último, afirma que los terratenientes, las grandes multinacionales que controlan el complejo agroexportador y la burguesía intermediaria –que no está ni se siente obligada a favorecer el mercado interno y el consumo popular– son los principales beneficiarios del fruto del esfuerzo de los trabajadores y de la feracidad de nuestras tierras, explotadas intensivamente durante los últimos ciento cincuenta años.

Develar, tanto la trama secreta de la dependencia como el papel –muchas veces oculto– que ha jugado y juega la oligarquía, son pasos necesarios para reconstruir la verdadera historia. Sólo así será posible refutar aquello de que "*nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio*". La verdad es triste en la Argentina, pero el remedio está en nuestras manos: comprender el pasado y el presente para avanzar en la conciencia y en la acción.

Este es un libro de ideas y no de citas –aunque las tenga– y en su concepción se respira un aire nacional latinoamericano, popular y revolucionario. Los que se sumerjan en sus páginas verán caer muchos próceres de barro y sabrán de las penurias ocultadas de nuestra gente.

Esta historia de Santa Fe podrá ser opinable y hasta polémica, pero es apasionadamente seria, políticamente comprometida y abierta a los apor-

tes de todos los luchadores santafesinos que puedan enriquecerla con información y experiencias.

Un importante líder argentino del siglo XX dijo "*Sólo el Pueblo salvará al Pueblo*". Hace pocos días, el presidente de la hermana República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, citando a otro gran líder tercermundista y revolucionario recordó que "*Los imperialismos son tigres de papel. Tigres de acero somos los pueblos cuando nos unimos*". Con este espíritu se ofrece, humildemente, el resultado de esta decisión de contar la historia de Santa Fe desde los intereses de nuestro pueblo y de la Nación.

Alejandro Hugolini
Diciembre de 2005

Ainsuain, Oscar
Del genocidio y robo de tierras al boom sojero: historia política y económica de la provincia de Santa Fe - 1a ed. - Rosario : UNR Editora Universidad Nacional de Rosario, 2006.
376 p.; 23x16 cm.

ISBN 950-673-546-8

1. Historia Política-Santa Fe (prov.).
2. Historia Económica-Santa Fe (prov.). I. Título
CDD 982.47

Diseño de tapa Carlos Meneguzzi
Diseño interior Ernesto Ibañez

ISBN 10: 950-673-546-8
ISBN 13: 978-950-673-546-3

© Oscar Roberto Ainsuain. 2006
Hecho el depósito que marca la ley 11.723

IMPRESO EN LA ARGENTINA / PRINTED IN ARGENTINA
UNR EDITORA
EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
SECRETARÍA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

EL PERÍODO COLONIAL

Conformación de la nueva sociedad

Según sostiene James R. Scobie, durante más de tres siglos las necesidades económicas y el modo de vida de los españoles no impusieron a la Corona exigencia alguna de conquistar y colonizar la pampa gringa, la primera frontera de pastos que encontró el hombre europeo al llegar a América.

Pero fue fundamentalmente la resistencia de los pueblos originarios la que determinó que con posterioridad a la Conquista las amplias praderas pampeanas, entre ellas la santafesina, continuaran perteneciendo al venado, al avestruz, al zorro, a la vizcacha o al flamenco, y más tarde a los caballos y vacas salvajes o cimarrones. Una gran cantidad de tribus nómades consideraba a estas tierras como su hogar, y luego de que los europeos introdujeran el caballo, los nativos comenzaron a recorrer la pampa en toda su extensión. Debido a esto, los más de quince pueblos originarios que transitaban la actual geografía provincial, eran denominados por los españoles como los indígenas pampeanos.

El gaucho, descendiente del conquistador y la mujer originaria, también se encontraba a sus anchas en estas vastas llanuras, en las que cazaba vacas y caballos cimarrones para satisfacer sus necesidades alimentarias. A pesar de que el español primero y el argentino después parcelaron estas tierras no colonizadas, debido a la férrea resistencia de los nativos muy pocos pobladores hispánicos de las ciudades se lanzaron a la aventura de poblar lugares tan remotos y desolados. Los que se atrevían al desafío terminaban llevando una vida sacrificada, similar a la del gaucho. La dieta de éste estaba compuesta de carne y de la infusión de yerba mate o té paraguayo; la vestimenta era simple y se adecuaba al viento, la lluvia y el polvo. La vivienda consistía en un rancho con techo de paja, un camastro hecho de cueros, algunos cráneos de vaca usados como asiento y unas pocas estacas para colgar las espuelas o las riendas.

Como afirma Scobie, recién en el siglo XIX comenzaron a aparecer algunos ricos o adinerados que aspiraban a un modo europeizado de vida. Construían largos cobertizos de adobe en derredor de un patio central. Plantaban sauces y frutales, cultivaban verduras y criaban gallinas. En los límites de

la propiedad cavaban zanjones para protegerse del cimarrón o algún eventual ataque de los nativos. Los más pudientes trajeron las alambradas y también importaron padrillos, ovejas, toros de cría y árboles y flores de adorno.

La relativa importancia que le asignaba el español a estas tierras –las consideraban territorio de paso– contrastaba con la actitud que adoptaron en otros lugares de América a los que consideraban objetivos centrales para la expoliación. En esas zonas los conquistadores derribaron poderosos imperios mientras exploraban metro a metro el territorio en busca del mineral (oro y plata), al que accedían explotando como esclavos a los pobladores nativos.

A la vez, la firme determinación de los pueblos originarios de evitar la ocupación, explica que en el momento en que tuvo lugar la Revolución de Mayo sólo existieran en el centro y sur de la provincia, la ciudad de Santa Fe junto a los pueblos de Rosario, Coronda, San Lorenzo y La Bajada (hoy Paraná, Entre Ríos); y en el norte, las reducciones de San Javier, San Jerónimo y, desde 1760, la de San Pedro.

A lo largo de trescientos años, los habitantes de Santa Fe no tuvieron necesidad de modificar la naturaleza, dado que desde la fundación se fue desarrollando una corriente de intercambio comercial con Europa y el resto del interior del país. En la región pampeana, los vacunos, ovinos, equinos y mulas se duplicaban cada tres años. Las vacas producían una carne magra y fibrosa que era ideal para el tasajo, un buen sebo o un cuero grueso y durable. Las yeguas, que en Argentina no se utilizaban para montar, contribuían con sus cueros y grasas para la exportación. El ovino, a pesar de la baja calidad de su lana (tenía varios colores), era requerido por las fábricas europeas de alfombras y las mulas eran vendidas a los propietarios de las minas del Alto Perú.

Debido al esquema productivo imperante, los habitantes de la costa provincial –gauchos, abogados, hacendados, comerciantes, etc.– se acostumbraron a una fuente de riqueza natural fácilmente exportable, que no requería de mucha fuerza de trabajo. Por ejemplo, y como ya vimos, la subsistencia del gaucho se basaba en la carne y la yerba mate, no porque le desagradara la fruta y la hortaliza, sino porque la obtención de éstas requería de un trabajo continuado y una residencia permanente, muy ajenos a sus hábitos y posibilidades. El gaucho se pasaba hasta veinte horas arriba de un caballo exhibiendo valentía y una enorme fortaleza en sus ocupaciones habituales.

En el siglo XIX, al observar el modo de vida de los habitantes nativos (reacios a labrar la tierra y a ejercer el trabajo manual), los extranjeros interpretaban esta adaptación como pereza, desidia, negligencia y los calificaban con el peyorativo mote de "vagos". La visión eurocéntrica de la vida y el trabajo de los extranjeros no admitía la negativa de los criollos a adoptar las formas de producción que ellos traían desde sus países de origen.

El escenario colonial se mantuvo inalterable hasta 1850, por lo que la zona que hacia 1910 llegaría a ser una de las principales productoras de

trigo del mundo, permanecería durante varios siglos bajo el dominio de los duros jinetes gauchos y de los nativos originarios.

La llegada del ferrocarril y las colonizaciones determinaron el inicio de una era de cambios trascendentes. El gaucho se transformaba en leyenda y era reemplazado por el peón rural, un trabajador hábil y capaz. Paralelamente a la desaparición de los rebaños, se producía un fenomenal, inédito e injusto reparto de tierras. Primero, a través de expediciones militares se mataba, expulsaba o sometía al habitante nativo y luego, con las colonizaciones públicas o privadas –o peor aún: mediante fraudulentas concesiones– se procedía a poblar las amplias llanuras pampeanas. **Genocidio y robo de tierras iban de la mano.**

Algunos dirigentes visionarios, como Nicasio Oroño, plantearon que si el país quería crecer, estas tierras tendrían que ser colonizadas y cultivadas, que "*gobernar es poblar*" según razonaba un importante pensador argentino.

Y fue así como nacieron los primeros pueblos o villas rurales. Dondequiera que pasaran las vías del ferrocarril, aparecían poblados cada 15 ó 30 kilómetros. En general, se trataba de dos hileras de casas sencillas, frente a un ancho camino de tierra, una estación ferroviaria de ladrillos vistos de estilo inglés, una iglesia, alguna mansión importante y un edificio municipal, todo ello en torno a una plaza.

El desarrollo poblacional, tanto como el de la agricultura y la ganadería, estuvieron estrechamente vinculados a la expansión ferroviaria. Un quintal de cereal (trigo, maíz o lino) o un buen novillo, tenían más valor si podían ser transportados con facilidad a Buenos Aires, Córdoba o Bahía Blanca.

Se podría afirmar que desde el momento mismo en que las cuchillas del arado de rejas múltiples cortaron el suelo santafesino, permitiendo que comenzaran a florecer los cultivos, se produjo un cambio total en la fisonomía de la provincia. Fue el momento en que se instalaron los molinos de viento, se parcelaron los campos con alambrados de púa y se construyeron los primeros caminos de tierra.

También se abandonó la explotación exclusiva de los flacos animales salvajes. En cuanto la refrigeración permitió que la carne soportase el viaje oceánico, el consumidor inglés comenzó a exigir cortes vacunos de primera calidad. Fue entonces cuando los alambrados comenzaron a encerrar ejemplares Shorthorn, Hereford y Black Angus en cuidadas praderas de alfalfa.

De esta manera quedó radicalmente modificada la vieja geografía colonial dominada por los gauchos y los originarios. El primero, cuando ya no fue necesario para arriar al cimarrón, perdió su identidad económica y cultural, en tanto que el segundo fue sometido en una bárbara campaña militar. Y aparecieron los inmigrantes europeos que, con mucha audacia, penetraron hasta lo más profundo de la provincia, produciendo una transformación total de la fisonomía de la región. Trabajaron como aparceros,

peones golondrinas o arrendatarios para cultivar maíz, trigo, lino o alfalfa.

Los cambios llevaron a una valorización de estas tierras que en el lapso de una década aumentaron su cotización hasta en un mil por ciento, proporcionando a sus dueños ingresos anuales equivalentes al 15% del valor de lo producido. Es decir, que los que poseían las tierras eran los que monopolizaban las riquezas recientemente desarrolladas y, en cambio, los sacrificados inmigrantes afrontaban una dura lucha por la subsistencia. Si bien no morían de hambre, en la mayoría de los casos no podían acceder a la posesión de los suelos. Si eran peones, vivían en cobertizos ubicados cerca de los corrales; y si eran arrendatarios o colonos podían construirse una casa de adobe. Su dieta estaba compuesta por los alimentos más baratos: carne para el pastor y trigo para el agricultor.

Por su parte, los terratenientes, que necesitaban de esta fuerza de trabajo, parecían dispuestos a impedir que los inmigrantes abandonaran su condición de trabajadores y accedieran a la propiedad de la tierra.

La fundación de Santa Fe

A principios del siglo XVI, la disputa entre España y Portugal requería que la Corona encontrara un paso directo al Pacífico, para garantizar así la salida de las riquezas del Alto Perú. Magallanes localizó el estrecho que hoy lleva su nombre y une a los dos grandes océanos.

Previamente, en 1516, Juan Díaz Solís creyó haber encontrado el paso, pero se trataba del Río de la Plata. Luego, en el año 1526, Gaboto resolvió explorar este río aguas arriba y terminó fundando el primer establecimiento español en suelo argentino: el fuerte de Sancti Spíritus, donde hoy está ubicada la localidad de Puerto Gaboto. Al año siguiente Gaboto y Diego García remontaron los ríos Paraná y Paraguay, internándose luego en aguas del Pilcomayo dejando desguarnecido el fuerte de Sancti Spíritus. Esta situación fue aprovechada por los nativos del Carcarañá que destruyeron totalmente la fortaleza, obligando a los conquistadores a regresar a España.

Este episodio fue una anticipación de cuánto le costaría a España primero, y a la oligarquía después, vencer y dominar a los más de quince pueblos originarios que habitaron temporal o permanentemente el actual territorio santafesino y que presentaron una épica resistencia a la ocupación colonial.

Con el objetivo de contrarrestar el decidido avance de los portugueses, que habían ocupado una parte importante del sur de Brasil, la Corona apresuró el envío de nuevas expediciones al Río de la Plata. Fue así como en 1536, Pedro de Mendoza fundó Santa María de los Buenos Aires.

La precariedad en el abastecimiento del asentamiento llevó al propio Mendoza a ordenar a Juan de Ayolas remontar el Río Paraná y fundar otro fuerte. Así nació Corpus Christi, ubicado al norte del destruido fuerte Sancti

Spíritus. Poco tiempo después, y tratando de consolidar una logística acorde a las necesidades del nuevo asiento, Pedro de Mendoza fundó otro enclave al que llamó Nueva Esperanza.

Mientras tanto, Ayolas intentó hallar una ruta al Alto Perú y murió en el camino. Mendoza retornó a España e Irala quedó al frente de la expedición. En 1541, Irala ordenó despoblar y evacuar Buenos Aires. Las defensas habían caído en manos de los Querandíes, quienes mantuvieron sitiada a la población y amenazaron con un ataque generalizado. Irala concentró la totalidad de las fuerzas en el puerto de Asunción para luego fundar la ciudad que es hoy la capital de Paraguay.

Tras la huida obligada de Irala por la presión querandí, los españoles perdieron durante años el control del Río de la Plata y el Paraná a manos de los nativos. En 1573, y con el objetivo de revertir esta situación, Juan de Garay fundó Santa Fe, tratando de garantizar una línea de salida más directa y más segura hacia España de las enormes riquezas del Alto Perú y de Asunción.

La fundación de Santa Fe se realizó prácticamente sin recursos. Refiriéndose a esto Juan Álvarez cuenta:

> *"...que los subalternos de Garay eran tan andrajosos que los indios los llamaban ahumados (...) y que hasta faltaron sacerdotes para santificar el acto porque no había quien quisiera ir a aquella miseria..."*
>
> (Álvarez, Juan, *Ensayo sobre la historia de Santa Fe*, Ed. Malena, Buenos Aires,1910)

Si bien la jurisdicción de la nueva ciudad era enorme, el área realmente dominada por los españoles llegaba a las dos o tres leguas. En el Acta de Fundación, Juan de Garay estableció los límites en 25 leguas hacia el camino de Paraguay, es decir, hacia el norte; 25 desde Sancti Spíritus hacia el sur; 50 leguas hacia el este y otras 50 hacia el oeste. Santa Fe, hacia el este, abarcaba más de la mitad de la actual provincia de Corrientes, la totalidad de la de Entre Ríos, parte de Uruguay y una pequeña franja de Brasil, cercana a Uruguayana. Por el sur, se extendía hasta las actuales localidades de Colón, Pergamino y Baradero. Hacia el oeste, el límite se ubicaba en la actual provincia de Santiago del Estero, cerca de Estación Herrera y en la de Córdoba a la altura de La Para al norte y Canals al sur.

Como se puede observar, desde su propia fundación, Santa Fe tuvo lazos estrechos con Entre Ríos y la República Oriental del Uruguay que eran parte de su territorio. Más adelante analizaremos las posiciones políticas de dos figuras emblemáticas de esta región: el brigadier Estanislao López y José Gervasio Artigas.

A 87 años de su fundación, el sitio elegido por Garay debió ser abandonado. El cambio constante del nivel del río lo hacía totalmente vulnerable y, además, la ciudad era atacable desde tres puntos cardinales. Esto llevó a las autoridades del Cabildo a decidir en 1651 el traslado de Santa Fe de la Vera Cruz al lugar que hoy ocupa.

Escaso desarrollo económico y extrema pobreza

Desde su fundación hasta el año 1810, Santa Fe estuvo bajo el control de las autoridades españolas. Durante ese período, la mayoría de las tierras que años después constituirían el actual territorio provincial, permanecieron en manos de los pueblos originarios que las habían habitado durante siglos.

Los vecinos de la provincia, que contaban con grandes extensiones de suelos fértiles, vivían, paradójicamente, en una situación de extrema pobreza, debiendo apelar al ganado libre o cimarrón para paliar las dificultades alimenticias. Entre 1619 y 1621, los conquistadores recogieron más de 50.000 cabezas y poblaron las estancias a ambos lados del Río Paraná.

Según Félix de Azara, hacia 1797 se estimaba que no más de 12.600 personas habitaban el territorio santafesino, de las cuales 4.000 residían en la ciudad de Santa Fe y 3.500 en Rosario. La escasa población ni siquiera podía garantizar la seguridad frente a la amenaza de los habitantes nativos. Éstos, al ser esclavizados, lejos de resolverle al ocupante la fuerza de trabajo como sucedió en otras regiones, constituyeron un verdadero peligro para los españoles. Los nuevos pobladores se veían obligados a levantar defensas y vigilar permanentemente a los encomendados.

A juzgar por los relatos de Álvarez y Cervera, los más reconocidos historiadores de Santa Fe, la vida de los habitantes de la provincia transcurría en medio del atraso y la pobreza. La esperanza de los vecinos estaba centrada en el puerto. Refiriéndose a la escasa o nula actividad que éste tenía, Juan Álvarez explica:

> "*...Que Santa Fe era un puerto de escasísima importancia lo prueban las cuentas oficiales reales. En el período 1582-1587 el producto de los impuestos al 10 por ciento no excedía de veinte pesos mensuales y esta suma debía repartirse entre el Rey, el cura y la fábrica de la Iglesia...*"
>
> Álvarez, Juan *(Op. Cit.)*

La desesperanza se prolongaría hasta el año 1662 cuando, a pesar de las protestas del interior, fundamentalmente de Paraguay, Santa Fe se convirtió, por Real Cédula, en "puerto preciso", aunque pasarían muchos años para que entrara en vigencia el nuevo estatus.

Hasta el año 1720, la economía provincial se encontraba casi totalmente restringida a la ganadería primitiva y si bien el predominio de la actividad pastoril se extendería hasta la segunda mitad del siglo XIX, indudablemente a partir de ese año, con Santa Fe ya convertida en un activo puerto, el desarrollo del comercio ayudó a diversificar la vida económica de la región.

Desde 1779, al quedar abolidos por Real Orden los privilegios otorgados al puerto de Santa Fe, la actividad comercial de la zona sufrió un gran impacto. Dos factores ayudaron a superar la declinación comercial: el desarrollo de la ganadería tradicional, facilitado por la mayor seguridad que se registraba en las fronteras, y la nueva actividad de cría de mulas que se

exportaban al Alto Perú. En su libro *"Lazarillos de ciegos caminantes"*, Concolorcorvo cuenta que hacia 1773, en la feria de Salta "*se vendían anualmente 60.000 mulas*", de las cuales la mayor parte provenía de Corrientes, Buenos Aires y Santa Fe y tenía como destino el Virreinato del Alto Perú.

El valor de una mula de tres años oscilaba entre siete y ocho pesos, mientras que un caballo regular costaba entre tres y cuatro. Algunos terratenientes santafesinos visualizaron rápidamente este negocio. Tal fue el caso de Antonio Francisco Candioti, quien llegó a exportar 20.000 cabezas anuales. Según Johan Parish Robertson, amigo de Candioti, éste era:

> *"...el verdadero príncipe de los gauchos, señor de trescientas leguas cuadradas de tierras, propietario de doscientos cincuenta mil cabezas de ganado, dueño de trescientos mil caballos y mulas y más de quinientos mil pesos atesorados en sus cofres en onzas de oro, importadas de Perú..."*
>
> (Citado por Ensinck, Oscar Luis, *Historia económica de la provincia de Santa Fe*, Servicio de Publicaciones de la UNR, Rosario, 1985)

Sin embargo, el comercio mular entre la provincia y el Alto Perú no pudo ser más fructífero debido a que existía una disposición de la Corona que, salvo contadísimas excepciones, prohibía la salida de metales a otros lugares del continente. Por esto, la plata de esa región no venía a Santa Fe y, en consecuencia, la relación comercial, en un alto porcentaje, se basaba en el intercambio. Como contrapartida a la importación de mulas, los comerciantes de Lima enviaban productos –alimentos, vestidos, calzados, hierros, etc.– a precios excesivos, de difícil acceso para la mayoría de la población que contaba con un magro poder adquisitivo.

Más adelante, cuando el deterioro progresivo de la industria minera llevó a la actividad mular a una profunda crisis, que se expresaría en una caída pronunciada en el precio del animal, la economía provincial entró nuevamente en un período de amesetamiento.

Años después, luego de que las provincias del Virreinato del Río de la Plata decidieran proclamar su independencia de la tutela de España, en Santa Fe se produjeron importantes cambios institucionales. La Provincia contaba con una administración local, un Ejército importante y una Iglesia sumamente influyente; estas instituciones dependían no sólo del Virrey sino también de las autoridades de Buenos Aires. Con la Independencia, Santa Fe se convirtió en una provincia autónoma de la flamante nación, lo cual quedó reflejado en la Constitución Provincial sancionada en 1819. Sin embargo, estos cambios no estuvieron acompañados por avances significativos en el terreno económico; es más, las guerras de la independencia y las luchas civiles provocaron el estancamiento de la economía local.

La economía en el período previo a las colonizaciones

Los enfrentamientos armados, especialmente contra el centralismo de Buenos Aires, hicieron que las autoridades descuidaran las fronteras inter-

nas. Esta situación terminó facilitando las incursiones de los nativos sobre las estancias y poblados, incursiones que afectaron al conjunto de la economía colonial y centralmente causaron estragos en la ganadería.

Además, las guerras de la independencia provocaron el aislamiento completo del mercado altoperuano, lo que afectó la actividad comercial de la provincia. A esta compleja situación habría que agregarle que Santa Fe, debido a las políticas restrictivas empleadas por Buenos Aires y Entre Ríos respecto de la navegación del Río Paraná, también se hallaba aislada del Paraguay.

Woodbine Parrish, luego de describir la bonanza de la época del auge comercial, cuando Santa Fe tenía el privilegio de ser "puerto preciso", explica cómo era la situación económica provincial veinte años después de la Revolución de Mayo:

> *"...la interrupción de su tráfico con Bolivia y Paraguay los ha reducido a un estado de miserable pobreza... La población ha disminuido excesivamente: quizá hoy en toda la provincia no hay más de 15 a 20.000 almas, una gran porción es de origen guaraní, descendiente de los emigrados de las misiones jesuitas del Paraguay, que las abandonaron después de la expulsión de sus padres en 1748..."*.
>
> (Parrish, Woodbine, *Buenos Aires y las Provincias del Río de la Plata*, Ed. Solar, Buenos Aires, 1958)

Hacia 1840, las guerras internas habían disminuido considerablemente y la economía de la provincia comenzaba a reactivarse, aunque a un ritmo muy lento. Fue un complejo proceso de recuperación. La vida comercial seguía restringida por las barreras fiscales impuestas por distintas provincias y el Río Paraná permanecía cerrado a la navegación de ultramar. El poblamiento de las nuevas estancias se dificultaba por el accionar de los habitantes nativos, en tanto que la invasión del general Lavalle, en 1842, volvía a complicar la actividad económica de las zonas afectadas.

Recién con las colonizaciones de la segunda mitad del siglo XIX, la economía de Santa Fe comenzaría a progresar a un ritmo relativamente sostenido. Al respecto convendría aclarar que, como sucede en todo ciclo económico, durante ese período se produjeron amesetamientos e incluso retrocesos, como el registrado luego de 1870, y también picos de notable crecimiento como el que tuvo lugar en la última parte de la década del '60, con motivo de la Guerra del Paraguay.

Como hemos visto, las condiciones de extrema indigencia de la mayoría de los santafesinos persistieron hasta mediados del siglo XIX.

Por último, habría que señalar que la crisis también afectaba a los hacendados. Bastará una breve reseña de lo ocurrido para transmitir el impacto que ocasionarían las luchas internas en este sector. Entre 1812 y 1815 varias incursiones nativas arrasaron más de la mitad de las estancias ubicadas en la región norte. Tres de los hacendados más importantes de la provincia (Candioti, Larramendi y Andino) prácticamente perdieron toda su vacada

con estas irrupciones. Hacia 1815, la destrucción del ganado había llegado a tal extremo que el gobierno provincial sólo pudo reunir 5.000 cabezas para proveer al ejército de la independencia. La situación empeoraría aún más en 1816, con el estallido de la guerra civil contra el gobierno central. Ese año, tras la invasión de las fuerzas de Díaz Vélez, la carne desapareció durante un breve período del mercado local. Refieren los santafesinos que sus antepasados recordaban que de esa época data el consumo del sábalo, especie que hasta ese momento era devuelta al río por los pescadores.

También durante 1816 se produjeron varias incursiones de los originarios desde la frontera sur, algunas de las cuales llegaron hasta Coronda, uno de los lugares mejor defendidos de la provincia. Estas incursiones afectaron seriamente a la mayoría de los hacendados de esa zona. Desde 1816 hasta 1820, para complicar aún más la situación, una gran invasión de langostas destrozó los escasos sembradíos y en 1819 se registró una de las más grandes sequías de la historia. Posteriormente, en 1820, las tropas militares encabezadas por Manuel Dorrego volvieron a asolar el sur provincial, llevándose prácticamente todo el ganado que quedaba.

Esta difícil situación se pudo revertir cuando, luego de invadir la provincia de Buenos Aires, las tropas santafesinas comandadas por Estanislao López retornaron con miles de cabezas de ganado –saqueadas en el estado bonaerense– que permitieron volver a poblar las estancias. Tras la victoria militar sobre Buenos Aires y dejando de lado los intereses provinciales, el caudillo santafesino firmaba el Tratado de Pilar en el que reconocía la supremacía del puerto porteño. Este acuerdo, que para muchos fue la gran claudicación de López frente a los intereses hegemónicos, le permitió a la Provincia –en realidad a los hacendados– recibir 25.000 cabezas de ganado enviadas por Buenos Aires en recompensa por la firma del Tratado. De esta manera, Santa Fe asistía a la definitiva recuperación de este importante sector de la economía.

Hacia 1834, el sector ganadero entró nuevamente en crisis. Todas las nuevas estancias instaladas en los distritos sureños de Melincué y Guardia de la Esquina, debido a la oleada de ataques de los pueblos originarios, eran abandonadas por sus dueños.

Las guerras locales, que continuarían hasta la década del setenta, arruinaron económicamente a muchos de los más importantes hacendados provinciales. Por esta razón, no resulta extraño que los catastros de 1872 y 1874 mostraran que sólo un reducido número de familias de origen colonial mantuviera la posesión de sus tierras, o que muchas de ellas, como los Candioti o los Gómez Recio, tuvieran extensiones más reducidas que las que poseían antes de la Revolución de Mayo. La única familia que detentaba todavía una situación privilegiada era la que descendía de Juan Andino.

Mejor suerte corrieron algunos terratenientes que habían adquirido tierras con posterioridad a la declaración de la Independencia, dado que durante la época de expansión de las fronteras lograron ampliar sus estancias. Tal fue el caso de familias como Zavalla, Oroño, Iriondo, Aldao e Iturraspe.

Al tiempo que era visible una declinación de los viejos propietarios, surgían nuevos terratenientes que provenían del floreciente comercio de Rosario y de otras ciudades y pueblos recientemente fundados, o representaban a empresarios extranjeros, o bien eran ricos hacendados de Buenos Aires.

La ganadería en la etapa colonial

Con la fundación de Santa Fe, Juan de Garay introdujo el ganado vacuno y caballar que, a principios del siglo XVII, comenzó a extenderse por las pampas del litoral, reproduciéndose rápidamente en regiones apropiadas por su clima, pastos, aguadas, etc.

Al respecto dice Manuel Cervera:

> "*...la producción y extensión del ganado ha de haber sido rápida, pues sabemos que las estancias de San Antonio Norte, y las de la Costa del Salado y Saladillo en 1607, ya se hallaban llenas de ganado...*"
>
> (Cervera, Manuel *Historia de la ciudad y provincia de Santa Fe, 1573-1853*, Ed. La Unión, Santa Fe, 1907, tomo II)

Durante el primer período colonial tenía más importancia el derecho a vaquear que el derecho a la propiedad de la tierra. A partir de 1577, el Cabildo dictó resoluciones sobre la obligatoriedad del registro de "marcas" para intervenir en las actividades ganaderas. Como sucedió en todos los lugares ocupados por potencias colonialistas, casi la totalidad de las "marcas" estuvieron concentradas en poder de los funcionarios, en su mayoría españoles. Según las Actas del Cabildo de Santa Fe, el Teniente de Gobernador Sierra, el regidor Miguel Luján, Juan de Martín, Antón Romero, el sacerdote Álvaro Xil, fueron algunos de los primeros ciudadanos que obtuvieron el privilegio Real. Además podían obtener licencia para vaquerías los "accioneros", que eran los que habiendo perdido sus ganados alzados, estaban autorizados a recoger cimarrones. Se los denominaba "accioneros" porque tenían "derecho de acción" sobre los ganados.

Por otra parte, el ganado libre –sin marca– o cimarrón era usufructuado por el conjunto de la población. Esta situación dificultaba el ejercicio del monopolio a los que tenían el derecho a vaquear.

En su visita a Santa Fe, en el año 1610, el licenciado Alfaro, de la Audiencia de Charcas, convalidó esta situación dictaminando mediante Ordenanza que "*cualquier vecino podía acceder libremente al cimarrón*". Esto motivaría que el poderoso Hernandarias –primer gobernador criollo del Río de la Plata y yerno de Garay– protestara ante el Rey por la Ordenanza Alfaro y comenzara a perseguir a los "vagabundos" que cazaban vacas libremente. Los obligaba a trabajar bajo sus órdenes y de hecho se reservaba los derechos sobre el ganado cimarrón.

Alrededor de este tema se había originado el primer conflicto importante en el seno de la sociedad santafesina.

En el año 1618, el Cabildo de la ciudad dictaba una resolución prohibiendo:

> *"...que se pudiera entrar a vaquear en la jurisdicción de Santa Fe, ni en la provincia de Calchaquí, sinó son los vecinos de esta ciudad, ni sacar cebo, cueros y ganados por el término de tres años, para que el ganado que queda se multiplique pues es mancomún de todos..."*
>
> (Cervera, Manuel, *Op.Cit.*)

Quedaba totalmente claro que el cimarrón no se reproducía tan fácilmente, por tanto la decisión de Hernandarias de impedir a la población el libre acceso al mismo iba a ser imitada por otros terratenientes que, además, apelarían al rodeo y la conformación de las estancias para asegurarse la propiedad de los ganados.

Las primeras estancias

Como vimos en el capítulo anterior, la modalidad aplicada hasta las postrimerías del siglo XVI de cazar vacas y caballos cimarrones, fundamentalmente para aprovechar su cuero, fue reemplazada gradualmente por el sistema de los "rodeos y su marcación". El reemplazo de la caza por el rodeo permitiría llevar a los animales a los mercados, en pie, en lugar de andar vagando interminablemente por las pampas en busca del cimarrón. Los gauchos reunían a los caballos y vacunos en enormes rodeos, por lo general con buenos pastos, drenaje y agua. De este modo nacieron las estancias coloniales, sin cercas ni límites.

Reemplazada la caza por el rodeo, el tema de la tenencia de la tierra pasó a ser central. Hacía falta fijar claramente los límites para acabar con las disputas por el cimarrón.

Las Leyes de Indias facultaban a las autoridades a otorgar "peonías" y "caballerías", o sea **extensiones de tierra reguladas según la categoría social y los servicios "prestados" a la Corona y al Fundador**.

Los beneficiarios tenían la obligación de construir vivienda, explotar los campos y contribuir a la defensa común. Los sectores de menores recursos, si bien podían acceder a este beneficio, tenían muchas dificultades para cumplir con estas demandas y a menudo se veían obligados a ceder la tierra adquirida.

El ingeniero español Pedro Antonio Cerviño, describió muy agudamente este sistema de venta de tierras realengas:

> *"...el que intente poblar debe tener prontos mil pesos para la compra de tierras y emplear un año en presentaciones, mensura, pregones y demás formalidades inseparables de este caso, en cuyo tiempo ha de abandonar todos sus quehaceres, con conocido menoscabo de sus intereses... al disminuir los gastos proporcionalmente con la mayor extensión del campo*

adquirido, se beneficiaba, sin duda, a los más ricos que, obviamente, tenían un mayor poder adquisitivo...".

(Citado por Weinberg, Félix, en su *Estudio Preliminar* a la obra de Juan Hipólito Vieytes: *Antecedentes históricos de la Revolución de Mayo*, Raigal, Buenos Aires, 1956)

Luego explica que:

"*...'las suertes de estancias' adquiridas de esta forma tenían 1875 hectáreas cada una*".

(Citado por Weinberg, Félix, *Op. Cit.*)

Teniendo en cuenta la superficie que refiere Weinberg y las condiciones de explotación de la época, cabe suponer que esas propiedades podían soportar novecientas cabezas de ganado que generaban unos noventa cueros anuales. Producciones de estas características no tenían mayores perspectivas económicas. Por tanto, se podría afirmar que en Santa Fe una parte del latifundio colonial nació del progresivo acaparamiento de gran cantidad de lotes o, como sostuvo brillantemente Miguel Ángel Cárcano:

"*...siempre las causas concurrían para facilitar el despojo, ayudar al amigo, premiar al favorito, condensar grandes extensiones entre manos rapaces e influyentes...*".

(Cárcano, Miguel Ángel, *Evolución histórica del régimen de la tierra pública 1810-1816*, Eudeba, Buenos Aires 1972)

Así surgieron las primeras estancias en Santa Fe. Así nació el latifundio que durante siglos, junto a la dependencia, impidió e impide el desarrollo independiente como nación. Y a pesar de que la "pureza de sangre" en general no se mantuvo, en ese período surgieron las primeras familias "ilustres" santafesinas: los Garay y sus descendientes, los Vera Mujica o los Echagüe y Andía.

Santa Fe: "puerto preciso"

Durante el período colonial, la provincia desempeñó un papel sumamente importante en las comunicaciones y los transportes, dado que unía el Río de la Plata con Paraguay, Córdoba, Chile, Tucumán y Perú. Además, el territorio provincial era la ruta obligada por la que pasaba la hacienda criada en las regiones situada al este del Río Paraná, camino a Buenos Aires.

También a fines del siglo XVII, con el auge de las vaquerías en Entre Ríos, Santa Fe fue el paso del ganado vacuno y de carga –especialmente mular– al Alto Perú. En esta época, para llegar a ese Virreinato se seguía el camino directo a Santiago del Estero por el Salado y Los Sunchales; sin embargo, el asedio de los originarios del Chaco obligaría a cambiar el itinerario durante toda la primera mitad del siglo XVIII.

La navegación comercial del Río Paraná fue monopolizada por los Jesuitas de Paraguay que se valían de la destreza de los nativos. Ésta se hacía en botes, barcos o lanchas que disponían de una capacidad de almacenaje de hasta 16 toneladas. Este sistema, muy costoso, constituyó para los santafesinos una importante fuente de recursos.

La Corona, concentrada fundamentalmente en la expoliación del Virreinato del Alto Perú, durante años no habilitó ningún puerto.

Con el tratado de Utrecht de 1579 surgen los asientos para la trata de esclavos de Inglaterra y Francia. El Virreinato necesitaba una salida al mar y en el año 1670 España convertía a Buenos Aires en el único puerto al exterior. Años más tarde, Santa Fe adquiriría una especie de monopolio interno –"puerto preciso"– que llegó a aplicarse realmente recién entrado el siglo XVIII.

Este privilegio, acordado por la autoridad Real al puerto de Santa Fe, tenía como objetivo recaudar fondos para la defensa de la frontera. La decisión implicaba que los barcos que provenían de Asunción debían fondear obligatoriamente en el puerto de Santa Fe y abonar derechos a las autoridades aduaneras por la mercadería que generalmente tenía como destino final alguna ciudad del interior o el Alto Perú. Los derechos recaudados mejoraron notoriamente la situación económica local y, paralelamente, se desarrollaron algunas actividades comerciales hasta ese entonces inimaginables. Por ejemplo, a los pocos años de entrar en funcionamiento el "puerto preciso", en la ciudad de Santa Fe y Coronda había mil carretas que trabajaban distribuyendo mercaderías en todo el mercado interno.

Por su parte, los navegantes que estaban acostumbrados al contrabando, resistieron la reglamentación de obligatoriedad. Este sistema les imponía el abono de tasas y además perdían mucho tiempo dado que en la mayoría de los casos la carga tenía otro destino.

La bonanza económica que trajo el "puerto preciso" se revirtió a mediados del siglo XVIII, cuando algunos avances en la lucha contra los originarios posibilitaron que nuevamente se hiciera transitable el camino del Salado y Los Sunchales. Por esta ruta se acortaba en más de 100 leguas la distancia con el Perú. No obstante, para estos largos viajes se requería de grandes inversiones y muy pocos acarreadores estaban en condiciones económicas de afrontarlas. Fue así como surgieron transportistas que monopolizaron el traslado del ganado y la carga comercial. Algunos llegaron a acumular fortunas, como fue el caso de Francisco Antonio Candioti que, gracias a esta actividad, se transformó en el hombre más rico y poderoso de Santa Fe. Comerciaba y transportaba por cuenta propia o representando a terceros, con sus pares de Chile, Perú, Buenos Aires, Asunción y Córdoba. Además controlaba la mayoría de los comercios de la ciudad y adquirió miles de hectáreas en las que concentraba las más de 6.000 mulas (llegó a enviar hasta 20.000) que anualmente exportaba al Alto Perú.

En el tráfico de hacienda también intervinieron activamente los Jesuitas. En el año 1666 compraron una estancia en Santo Tomé y en 1719 adqui-

rieron grandes extensiones de campos y organizaron la estancia de San Miguel (ubicada en la actual localidad de Andino), la más importante propiedad del Pago de los Arroyos, que por entonces se extendía al sur del Río Carcarañá. En ambos casos se hicieron cargo del abastecimiento de carnes para el consumo de la ciudad de Santa Fe y del Pago de los Arroyos.

También tuvo importancia el comercio que la Compañía de Jesús hacía con los productos de Misiones, fundamentalmente la yerba, que en el siglo XVIII llegó a consumirse masivamente.

Los originarios santafesinos

Durante los primeros años, ya sea en el asentamiento inicial de la ciudad o en el actual, la relación entre los santafesinos y los habitantes originarios se caracterizó por los continuos enfrentamientos. En la primera etapa, los españoles sólo pudieron reducir a unos pocos nativos a los que sometieron a trabajos forzados.

Recién a partir de 1657, con la derrota de los Calchaquíes a manos de Hernando Juan Arias de Saavedra, sobrevino un período de relativa calma entre los nuevos moradores del asentamiento y los pobladores históricos. Santa Fe era el único centro poblado de la jurisdicción asignada por Juan de Garay al Cabildo, en tanto que el Pago de los Arroyos (el actual Rosario) estuvo totalmente deshabitado hasta entrado el siglo XVII.

Hacia el norte la situación no era muy distinta. El único centro poblado era la reducción jesuita de San Bartolomé de los Chaná, ubicada en la desembocadura del arroyo Monje. Esta reducción, poblada por los indios Chaná, fue destruida a fines del siglo XVI por los Charrúas, que constituyeron una verdadera pesadilla para las vaquerías primero y las estancias después.

La situación cambió con las expediciones de Hernandarias del año 1632, que no sólo perseguía a los nativos sino también a los mozos perdidos –vagos y cazadores de ganado– para incorporarlos como fuerza de trabajo de las primeras estancias. Así se logró sofocar la lucha de los Charrúas.

Los propios Charrúas fueron también quienes, en acuerdo con sectores santafesinos, derrotaron en 1680 y 1705 a los portugueses recuperando las islas San Gabriel. Luego de la segunda liberación y el retiro definitivo de los lusitanos, muchos santafesinos se dedicaron a vaquear en la Banda Oriental del Uruguay.

Los Charrúas, ahora del otro lado del Paraná, comenzaron a principios del siglo XVIII un largo bloqueo del camino que une Santa Fe con Corrientes. Esta medida, que fue acompañada de todo tipo de ataques, se tomó en represalia contra los Tapes de las Misiones Jesuitas, que los habían agredido en la guerra de exterminio que comenzó a partir del año 1701.

Asimismo, en esos años, los Mocovíes, Aguilotes y Abipones, atacados desde Salta, invadieron las tierras santafesinas. Luego de un período

de resistencia, las reducciones Calchaquíes de Cululú y Capilla del Rosario fueron derrotadas debiendo retirarse a San José del Rincón. Desde allí, en 1719, a causa de la peste, los Calchaquíes se marcharon hacia las orillas del Río Carcarañá, donde se establecieron de manera definitiva.

▲ Monte agustinillo con un solar de indios.
(Biblioteca y Archivo del Museo Histórico Provincial "Dr. Julio Marc"- Colección Fotografías).

Desde principios del siglo XVIII, y como producto de las continuas invasiones, muchos vecinos huyeron a Entre Ríos, incrementándose así notablemente la cantidad de "vagos".

También en ese período, varias etnias incendiaron la estancia jesuita del Rincón de San Antonio determinando que los esclavos, bienes y animales salvados fueran trasladados a la estanzuela de Santo Tomé, adquirida por esta congregación en el año 1666.

La resistencia de los pobladores originarios que repetidamente bloquearon las vías de comunicación con Buenos Aires y Córdoba, llevando adelante continuos ataques que provocaron un masivo éxodo de la población, fue de tal magnitud que en el año 1725 el Cabildo ordenó al ejército prohibir la salida de los habitantes santafesinos.

Recién en 1742, con la guerra ofensiva llevada adelante por Manuel de la Sota y Francisco Javier de Echagüe y Andía, se logró el cese de los ataques.

A modo de conclusión se podría afirmar que durante todo el período colonial, debido a la resistencia de los habitantes originarios a la ocupación de los españoles, la aristocracia terrateniente y los grandes comerciantes hegemónicos en el Cabildo poblaron sólo una pequeña porción de territorio

de la actual provincia de Santa Fe. No fue sino en la segunda mitad del siglo XIX, con la expedición militar de Obligado, que se logró quebrar definitivamente la resistencia de los nativos y conquistar sus tierras.

La sociedad colonial

Siempre se ha definido a la sociedad colonial como una sociedad de castas. En Santa Fe había un bloque hegemónico que detentaba el poder y otro que era sometido y obligado a trabajar como siervo o directamente como esclavo.

El bloque gobernante tenía una cabeza visible, conformada por los funcionarios reales –en su gran mayoría españoles– encargados de ejecutar la política colonial y recaudar los tributos reales.

El conjunto de la jerarquía eclesiástica formaba parte de este bloque y algunas órdenes, como las de los Franciscanos y los Jesuitas, jugaron un papel importante ayudando a los funcionarios a concretar los proyectos reales. La Iglesia tenía asignada la tarea de reducir y pacificar a los indios. Los sacerdotes –frecuentemente mulatos y mestizos– eran reclutados sin tener en cuenta ni su origen social ni su fortuna. Esto hacía que gozaran de gran prestigio y estima entre la mayoría de la población.

El bloque dominante también estaba integrado por los hacendados y los comerciantes, en su gran mayoría españoles, que eran los que controlaban el Cabildo, institución que tenía la responsabilidad de garantizar el abastecimiento y el orden, tanto en la ciudad como en los alrededores.

Por último, los mancebos de la tierra, es decir: los criollos, no sólo participaban de la vida pública sino que, como descendientes de los conquistadores, también estaban facultados para ejercer cargos. En todo el proceso colonial este sector tuvo posiciones contradictorias; si bien es cierto que muchos respondieron a los intereses de la Corona ocupando cargos públicos e integrando el Cabildo, no es menos cierto que en Mayo de 1810 la gran mayoría trabajó activamente contra los españoles e inclusive algunos llegaron a ser parte de la vanguardia revolucionaria.

A los pocos años de la fundación de Santa Fe, los mancebos superaban numéricamente a los peninsulares y surgían las primeras divisiones entre criollos y españoles. Estos últimos llevaron continuas críticas a España, inclusive ante el propio Rey, calificando hasta de "desvergonzados" a los jóvenes criollos.

Las diferencias tuvieron su pico máximo en el año 1580, con la "Revolución de los Siete Jefes". Los mancebos de la tierra tomaron el Cabildo y llegaron a dictar un bando expulsando del mismo a los españoles. La revuelta fue aplastada y los cabecillas ejecutados. Esta revolución fue sólo el comienzo de largos años de disputas que derivaron en grandes conflictos entre los gobernadores y el Cabildo y entre éste y los Jesuitas.

Manuel Cervera cuenta que en una carta enviada al Rey por un español de la época, éste definía a los mancebos como:

> "*...gente levantisca, sin respeto a la justicia, ni al poder paterno, viviendo con toda libertad desde jóvenes, mezclados con los indios"* y terminaba diciendo: "*sin embargo, casi todos ellos ocupan los puestos del Cabildo, como alcaldes, regidores y alguaciles...*".
>
> (Cervera, Manuel M., *Historia de la ciudad y provincia de Santa Fe*, Ed. La Unión, Santa Fe, 1907)

En el otro extremo de la pirámide social se encontraban los sectores más oprimidos de la sociedad colonial, entre las que sobresalían los pobladores originarios. Como ocurriera en otras colonias españolas de América, el nativo dominado entró en una relación de total sojuzgamiento respecto del encomendero.

En sintonía con la Ordenanza que "*autorizaba al conjunto de la población a participar de la explotación del cimarrón*", en el año 1610, el oidor Alfaro, de la Audiencia de Charcas, tomaba medidas tendientes a proteger los derechos de los residentes originarios. Dictó una serie de instrucciones en las que prohibía todas las encomiendas con servicio personal, limitaba la duración de muchas de ellas y disponía la asignación de una recompensa a los nativos. Estas obligaciones fueron cumplidas con limitaciones; no obstante, es muy probable que las mismas hayan contribuido a la formación del sistema de peonaje.

El traslado de la ciudad de Santa Fe a su actual destino requirió del empleo de una importante cantidad de pobladores originarios. Según las actas del Cabildo, se contrataron "*cincuenta indios*" para los trabajos, "*a real y sustento de cada uno*". Éste es el primer registro cierto de retribución de la fuerza de trabajo a los nativos. También, el desarrollo de las vaquerías y de los transportes tuvo gran importancia en cuanto a las relaciones contractuales, pero hay que señalar que el jornal generalmente se cobraba en especie y que las deudas por adelantos eternizaban la sujeción a un patrón.

Tampoco se puede dejar de mencionar la explotación de la mujer en la sociedad colonial. El ejemplo de las "casas de doncellas" instaladas por el gobernador Hernandarias en Asunción y Santa Fe, grafica el grado de explotación a que eran sometidas. En estas casas las muchachas, obligadas a un régimen de trabajo forzado, fabricaban hilados y tejidos. Cuenta al respecto Juan Álvarez que años después de la experiencia de las "casas de doncellas" de Hernandarias, el Cabildo le informaba al gobernador Góngora lo siguiente:

> "*...él, con la mano poderosa de gobernador sacó algunas mozas doncellas de esta ciudad de casas de sus padres y sus parientes, y por fuerza las hizo llevar a la dicha casa donde estuvieron algunos meses hilando lana y tejiendo sayal que él tenía. Y les puso de maestro a un hombre de treinta años nombrado Lorenzo Gutiérrez que les enseñaba a tejer como*

si fueran esclavas. Y su sustento era maíz y vaca. Y la comodidad y trato que tenían era riguroso. Y porque alguna de ella se volvió a casa de su madre, la trajeron, la asolaron y sucedieron otras cosas...".

(Álvarez, Juan, *Ensayo sobre la historia de Santa Fe*, Ed. Malena, Buenos Aires,1910)

Por último habría que destacar que a mediados del siglo XVIII se incrementó el aporte de los esclavos negros que servían en las huertas, en las casas de familias ricas y en las estancias. A fines de siglo también funcionaban algunas curtiembres que contaban con hasta doce esclavos negros.

Los agricultores y los artesanos se ubicaban fuera del bloque gobernante, pero distantes también de los sectores más explotados. Trabajaban de forma independiente y debido a los escasos recursos de que disponían, tenían serias dificultades para procurar mano de obra.

EL FEDERALISMO CLAUDICANTE DE SANTA FE

Los sucesos revolucionarios de 1810

En la Revolución de Mayo confluyeron desde los intereses de la aristocracia terrateniente y los grandes comerciantes perjudicados por el monopolio español, hasta los sectores más oprimidos del sistema colonial. Los originarios, mestizos, negros y mulatos fueron los más afectados por el dominio colonial y el régimen feudal.

El proceso revolucionario de 1810 contó con algunos elementos de la situación interna e internacional que contribuyeron a su desarrollo.

En primer lugar, los levantamientos insurgentes de Chuquisaca y La Paz, que fueron violentamente reprimidos por las autoridades coloniales. Estos acontecimientos repercutieron profundamente en la población exacerbando los ímpetus revolucionarios.

Asimismo, habría que destacar que el estado de ánimo de la mayoría de la población era de mucha efervescencia, ya que los criollos venían de la Reconquista y la posterior defensa de Buenos Aires. El levantamiento contra el invasor, sumado a su organización en milicias armadas, le había permitido al pueblo adquirir conciencia de sus propias fuerzas. Habían logrado un significativo triunfo frente al agresor inglés y otro frente a las autoridades españolas, a las que le impusieron a Liniers –jefe militar de la resistencia– como Virrey.

Otro elemento que favoreció el proceso revolucionario fue el accionar de las potencias rivales de España, particularmente Francia e Inglaterra. Éstas trabajaban, local y mundialmente, para esmerilar el poderío español con el objetivo de imponer sus intereses.

Por último, a nivel mundial se vivía una época de revoluciones burguesas. Sus ideales incidieron profundamente en la vanguardia revolucionaria de Mayo, expresándose claramente en el "*Plan de operaciones que el gobierno provisional de las Provincias Unidas del Río de la Plata debe poner en práctica para consolidar la grande obra de nuestra Libertad e Independencia*", una iniciativa de Manuel Belgrano plasmada por la magistral pluma de Mariano Moreno.

Con la caída de la Junta Central de Sevilla a manos de Francia se precipitaron los sucesos revolucionarios en el Virreinato del Río de la Plata. Se destituyó al virrey Cisneros que fue reemplazado por una Junta integrada en su mayoría por criollos descendientes de españoles. Ésta, expresando diferencias en su seno y serias vacilaciones, se comprometió a "*no reconocer otro soberano que a Fernando VII*".

La primera medida del gobierno fue la de enviar expediciones militares al interior, con el fin de conseguir la adhesión al levantamiento criollo. Estas fuerzas marcharon primero a Córdoba, donde derrotaron y fusilaron a Liniers, para luego trasladarse al norte.

Hegemonizados por la aristocracia criolla, los distintos Cabildos del interior se pronunciaron respaldando el proceso revolucionario y nombrando delegados al Congreso convocado por la Junta. También el Alto Perú, Cochabamba y Oruro se manifestaron a favor del movimiento, por lo que sólo Montevideo y Asunción seguían reconociendo al Consejo de Regencia de Cádiz.

La Junta decidió que Belgrano marchara sobre Asunción, pero fue vencido en Paraguarí y Tacuarí. No obstante, las mismas masas populares que derrotaron a Belgrano por considerarlo un invasor, destituyeron luego a Velazco e impusieron un gobierno criollo.

En la Banda Oriental, Artigas organizó las milicias campesinas que derrotaron a los españoles en Las Piedras, obligándolos a retirarse a Montevideo, motivo por el cual en 1811 comenzaría el primer sitio a esta ciudad.

A pesar de estos importantes éxitos políticos y militares, en la Primera Junta aparecieron divisiones. Las posiciones revolucionarias de Moreno chocaban con las moderadas de Saavedra. Éste expresaba a los sectores más conservadores de la aristocracia terrateniente criolla, partidaria de la independencia pero opuesta a alterar el orden económico-social que garantizaba el predominio de sus intereses.

De las disputas a la declaración de la Independencia

Saavedra realizó una hábil maniobra con el objetivo de desplazar al sector de Moreno, e integró a la Junta a los diputados del interior impuestos por la aristocracia de los Cabildos, creando así la Junta Grande. Fue de este modo como los conservadores lograron obtener la mayoría en el nuevo gobierno, forzaron la renuncia de Moreno y demoraron el llamamiento al Congreso hasta observar el curso de los sucesos en España. Con esta táctica lograron debilitar a los partidarios de declarar inmediatamente la independencia, porque, como sostuvo el historiador Ernesto Palacios, "*no habiendo Congreso, no habría Constitución ni Independencia*".

Moreno, a quien la Junta rechazó suspicazmente la renuncia, fue enviado a Inglaterra y falleció en alta mar el 4 de marzo de 1811.

Las diferencias que estallaron en el seno del gobierno también se ex-

presaron en el frente militar. La Junta Grande nombró a Rondeau, en desmedro de Artigas, como jefe del sitio a Montevideo, mientras que en el norte respaldó a Viamonte contra el morenista Castelli. Producto de estas contradicciones se produjo la derrota del poderoso ejército criollo –integrado por las masas insurgentes del Alto Perú– en Huaqui.

▲ Convento franciscano de principios del S. XIX, en sus adyacencias se libró la batalla de San Lorenzo en 1813. (Biblioteca y Archivo del Museo Histórico Provincial "Dr. Julio Marc" - Colección Fotografías)

Algunos sectores morenistas, al borde ya de la debacle total, desataron una contraofensiva e impusieron el Triunvirato. Si bien consiguió barrer a la Junta Grande, reivindicar a Belgrano y quitar prerrogativas de casta al Ejército de Patricios, el nuevo gobierno, hegemonizado por la aristocracia local, no lograría avanzar en la organización nacional. A pesar de los referidos intentos transformadores, el Triunvirato terminó firmando un tratado de paz con Elío, lo que llevaría a Artigas a romper con Buenos Aires y convocar al éxodo del pueblo oriental.

En Paraguay, el jefe revolucionario José Gaspar Rodríguez de Francia fue quien propuso por primera vez un pacto de Confederación. El gobierno patrio de Asunción, instaurado el 15 de mayo de 1811, manifestaba en su primer bando su voluntad de unirse a Buenos Aires y demás provincias, utilizando por primera vez el término Confederación. El Triunvirato también contabilizó en su haber la responsabilidad de romper el Pacto de la Confederación con el gobierno patrio de Paraguay, lo que llevaría a la separación definitiva de la república hermana de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

En julio de 1812 fue aplastada en Buenos Aires la conspiración de Álzaga, en tanto desde el norte los españoles se pusieron en marcha sobre Salta y Tucumán. Belgrano, no pudiendo presentar batalla, organizó la

retirada encabezando una de las epopeyas más gloriosas del ejército patrio: **el éxodo jujeño**. Todo el pueblo respondió al bando del general que decía:

> "*...estancieros, retirad vuestra hacienda; comerciantes, retirad vuestros géneros; labradores, retirad vuestros frutos; que nada quede al enemigo, en la inteligencia que lo que quedase será entregado a las llamas...*".
>
> (Belgrano, Manuel, *Escritos Económicos*, Raigal, Buenos Aires, 1954)

Belgrano, una vez instalado en Tucumán, estableció pesadas cargas sobre los vecinos más acaudalados, llamó al pueblo de la provincia a resistir al enemigo y contrariando la orden del Triunvirato de retirarse a Córdoba, derrotó a los españoles en la batalla de Tucumán.

Sin embargo, ni este triunfo, ni el aplastamiento de la rebelión de Álzaga lograrían acrecentar la popularidad del Triunvirato, y el 8 de octubre estalló el movimiento que instaló el Segundo Triunvirato. El alzamiento, que tuvo como blanco principal a Rivadavia junto a morenistas como Agrelo y Monteagudo, marcaría la irrupción en la política criolla del general José de San Martín. Éste, al frente del Regimiento de Granaderos a Caballo, custodió el Río Paraná para impedir el aprovisionamiento de las tropas sitiadas en Montevideo y el 3 de febrero de 1813 venció a los españoles en la batalla de San Lorenzo.

Las derrotas del Ejército del Norte en Vilcapugio y Ayohuma junto a las crecientes diferencias con Artigas llevaron a los alvearistas, que controlaban la Asamblea General y el Triunvirato, a establecer un ejecutivo unipersonal denominado Directorio. Posadas fue el primer Director Supremo.

El Directorio, después de que el mismísimo Alvear conquistara Montevideo, se lanzó a la guerra contra Artigas. El representante del gobierno nacional en Río de Janeiro, Manuel García, hizo gestiones para que los portugueses presionaran sobre la Banda Oriental a fin de eliminar la influencia de Artigas. **Está claro que tanto para los españoles, como para la aristocracia criolla e inclusive para los colonialistas portugueses, Artigas representaba un peligro para sus intereses ya que, no sólo empalmaba con los sectores revolucionarios de Mayo, sino que era quien más se apoyaba en las masas oprimidas.**

En 1815 renunció Posadas asumiendo Alvear como Director Supremo. Éste ofreció a Artigas la "*independencia de la provincia*" e hizo evacuar las tropas porteñas de la Banda Oriental. Artigas rechazó el ofrecimiento manifestando su voluntad de pertenecer a las Provincias Unidas bajo el sistema federal, al tiempo que reclamaba la independencia y convocaba a un "*congreso de los pueblos*" libres, siendo su iniciativa apoyada por Corrientes, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe.

En contraposición a este llamamiento, el gobierno central convocó al Congreso de Tucumán con el apoyo de las provincias de Cuyo y del Norte. Este Congreso finalmente declaró la Independencia, que en un primer momento era sólo **respecto de Fernando VII**. **Pero luego de diez días de discu-**

sión, y en sesión secreta, a iniciativa de San Martín y Belgrano se logró agregar: "*...y de toda dominación extranjera*".

La invasión de los portugueses a la Banda Oriental, producida en septiembre de 1816, obligó a Artigas a concentrar allí sus fuerzas. Pueyrredón, que contaba con el aval del Congreso de Tucumán, dejando en claro quién era el enemigo de Buenos Aires, prosiguió la lucha contra Artigas. No obstante, y hasta el aciago año veinte, los directoriales no pudieron doblegar a las provincias del litoral, entre ellas a Santa Fe; esto fue así debido a que, a pesar de las vacilaciones de los dirigentes locales, la provincia siempre terminó enfrentando al centralismo.

Cuando Santa Fe derrotó a Belgrano

Prudencio María Gastañaduz fue desde 1793 el comandante militar de Santa Fe y luego de los sucesos de Mayo de 1810 se disciplinó a la Junta de Buenos Aires. Por su parte, el Cabildo local, una vez alineado con el poder central, solicitó que fuera designado Teniente de Gobernador un ciudadano santafesino. La Junta desoyó el pedido nombrando en el cargo al coronel Manuel Ruiz.

El pueblo de Santa Fe, descontento con la decisión, no se incorporó activamente durante los primeros meses al movimiento revolucionario, pese a la difícil situación que atravesaba el gobierno provincial jaqueado desde el Alto Perú, Asunción y Montevideo. Recién en octubre de 1810, con la llegada de Belgrano a la provincia, se hizo evidente el apoyo a la revolución. Fue así como al ejército nacional se sumaron masivamente muchísimos ciudadanos locales, entre ellos el joven Estanislao López.

En 1812, durante el sitio de Montevideo, Santa Fe se involucró directamente en la guerra por la independencia. Para contener la navegación española por el Río Paraná aguas arriba, la Junta Provincial solicitó al Triunvirato la construcción de una batería en la Capilla del Rosario, tarea realizada por Belgrano con tropas llegadas desde Buenos Aires.

A pesar de la importante definición de la Junta Provincial, el ánimo local no era bueno. La obligación de realizar contribuciones y las posteriores requisas y empréstitos forzosos que reclamaba la guerra por la independencia, influyeron negativamente sobre el espíritu de los habitantes. Por esto es probable que sea acertada la hipótesis que sostiene que para galvanizar y levantar el ánimo de la población local, el 27 de febrero de 1812 a las seis y media de la tarde, Belgrano ordenó al vecino Cosme Maciel izar la bandera celeste y blanca, e instó a las tropas a jurar lealtad a la que a partir de ese momento sería la insignia patria.

Poco tiempo después San Martín obtenía una gran victoria en las barrancas de San Lorenzo, en tanto las fuerzas navales de Brown tomaban las islas Martín García provocando la caída de Montevideo.

Santa Fe, que durante todo el período colonial había pertenecido a la Gobernación de Buenos Aires, a partir de 1813 adhirió a las ideas federales respaldando a Artigas en la Asamblea del año XIII. Desde su fundación se habían establecido lazos económicos y comerciales primero, y políticos después, entre Santa Fe y el resto del litoral: Corrientes, Entre Ríos y la Banda Oriental.

Ya rotas las relaciones de Artigas con el centralismo porteño y ante un pedido de ayuda de Santa Fe para enfrentar el asedio de los pueblos originarios, el gobierno de Buenos Aires envió una expedición militar al mando del general Viamonte. Esta operación tuvo un objetivo claro: evitar la ingerencia de Artigas en tierras santafesinas y establecer un gobierno afín al Directorio.

Ante este hecho, el 13 de agosto de 1815, Artigas escribía al Cabildo de Santa Fe alertándolo e indicándole que expusiese a Buenos Aires la necesidad del retiro de sus tropas; a la vez, advertía que se *"perpetuarán las hostilidades y yo no respondo por los desastres"*.

A los pocos meses, en marzo de 1816, la primera Compañía de Blandengues al mando del teniente Estanislao López se sublevaba contra el ejército de Viamonte. Vera, Maciel y Ávalos, jefes militares del movimiento, atacaron en Coronda a la cañonera *Americana* facilitando el ingreso de las tropas de Artigas, motivo por el cual Viamonte, superado militarmente, debió capitular. Reconquistada la autonomía de Santa Fe, Mariano Vera fue elegido gobernador, en tanto que Estanislao López era nombrado Comandante de Armas de la provincia.

El gobierno central dio a Manuel Belgrano el mando del ejército acantonado en San Nicolás y le ordenó sofocar la rebelión. Éste entendió que el conflicto se podría solucionar pacíficamente y nombró a Díaz Vélez como emisario, quien tras ocupar militarmente la ciudad de Santa Fe fue derrotado por las tropas y el pueblo de la provincia. Fue la lucha de los habitantes de Rosario, Coronda y Santa Fe que primero resistieron tenazmente, luego se replegaron para finalmente volver y sitiar durante treinta días a la ciudad de Santa Fe, lo que obligó a Díaz Vélez a rendirse y celebrar con Cosme Maciel el convenio de Santo Tomé. En el mismo se exigía la remoción del director supremo Álvarez Thomas acordándose la firma de un tratado de paz entre Buenos Aires, Santa Fe y Artigas. En el acuerdo firmado el 28 de mayo de 1816 Buenos Aires reconocía a Santa Fe "*por libre e independiente*", en tanto Belgrano se retiraba a Tucumán y Álvarez Thomas presentaba la renuncia.

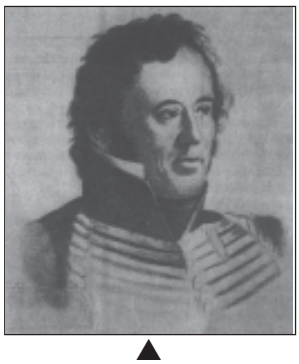
A pesar de la adhesión del Cabildo a la figura de Artigas, tanto Vera como Estanislao López plantearon una posición independiente del caudillo oriental y del poder central, ya que por un lado rechazaban la postura centralista de Buenos Aires, pero por el otro sostenían que no los convencía la Confederación de Estados que proponía Artigas.

Sin embargo, en los años posteriores, Santa Fe se mantuvo del lado del federalismo y soportó varias invasiones militares por parte de Buenos Aires. Pero al no tener una clara posición contra el centralismo, no reivindicar plenamente el sistema federal y fundamentalmente no apoyarse en los sec-

tores más oprimidos de la sociedad, el gobierno de Mariano Vera acabó desgastándose y el 23 de julio de 1818 asumía el poder Estanislao López.

La claudicación de López y el ocaso de Artigas

En febrero de 1819 Viamonte invadió nuevamente Santa Fe y López aceptó un armisticio. Producto del acuerdo firmado en San Lorenzo, Buenos Aires se comprometía a retirar sus tropas y Santa Fe a no obstaculizar la comunicación porteña con el interior. Para Artigas se trataba de un signo de debilidad de López. Insistía en que cualquier pacto con el poder central debía darse sobre la base del compromiso de Buenos Aires de declarar la guerra a Portugal.



Retrato del caudillo santafesino Brigadier Estanislao López, litografía de Hipólito Bacle.

En enero de 1820, en momentos en que casi toda la Banda Oriental estaba en poder de los portugueses, el Ejército del Norte se sublevaba en Arequito negándose a ser utilizado contra Artigas. El 1 de febrero, las fuerzas conjuntas de López y Ramírez derrotaron en Cepeda a las fuerzas directoriales comandadas por Rondeau obligando a la renuncia de las autoridades nacionales y la disolución del Congreso.

El 23 de febrero se firmó el tratado de Pilar entre Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. El acuerdo significó la claudicación final de López frente a Buenos Aires. Ramírez fue más lejos aún ya que junto a Sarratea, gobernador de Buenos Aires, declaró la guerra a Artigas.

Dorrego, que estaba en el exilio, luego de ser nombrado gobernador derrotó a Alvear en San Nicolás y a López en Pavón. A pesar de las victorias militares, tanto Rosas como Martín Rodríguez no acordaron con la designación de Dorrego. Éste, debilitado y sin el apoyo de los terratenientes bonaerenses, fue vencido por López en Gamonal, lo que motivó que tras la derrota debiera resignar su cargo siendo reemplazado por Martín Rodríguez, quien asumió como gobernador de Buenos Aires.

El afianzamiento definitivo del nuevo gobernador llegó el 5 de octubre, cuando una rebelión en su contra fue sofocada por Rosas y sus Colorados del Monte, que lo repusieron en el cargo. Este hecho también marcó el inicio de un período en el cual Juan Manuel de Rosas pasó a ocupar el centro de la escena política, no sólo bonaerense sino también nacional.

Rosas, que ya había concentrado mucho poder en sus manos, invitó a Estanislao López a firmar el Pacto de Banegas. A cambio, López recibió 25.000 cabezas de ganado a modo de resarcimiento por las continuas inva-

siones que sufrió la provincia. Esta claudicación frente a Rosas lo llevaría a separarse de Ramírez, quien murió en 1821.

Artigas, luego del Tratado de Pilar y con el litoral dividido, perseguido e impotente por no poder articular una alianza contra Buenos Aires, fue a pasar el resto de sus días a Asunción.

La derrota de Artigas cerró un ciclo que había comenzado a gestarse con el desplazamiento de Moreno. Si bien la lucha por la independencia continuaría con Güemes en el norte, para culminar con la campaña de San Martín al Perú y el triunfo de los ejércitos bolivarianos en 1824, el ala revolucionaria de Mayo había sido vencida, lo que significaría un importante revés para las aspiraciones de acabar con el régimen feudal. Se podría afirmar que debido a la derrota de lo que algunos historiadores definen como la izquierda de Mayo, aún hoy el latifundio y la dependencia son los dos pilares sobre los que se asienta nuestra opresión y los que impiden nuestro desarrollo autónomo como nación.

La izquierda de Mayo

Cuando se analizan las distintas posiciones de los hombres de Mayo, es necesario tener presentes las características de nuestro desarrollo económico –entonces frenado por el dominio colonial y el régimen feudal– y de los sectores sociales participantes en el proceso revolucionario. **Todos los actores estaban interesados en acabar con el dominio colonial, pero solamente algunos querían terminar con el régimen feudal.**

En el proceso revolucionario iniciado en 1810 existió un complejo frente político, en el que se incluían desde republicanos hasta monárquicos y desde partidarios de la independencia total hasta pro-ingleses y pro-franceses. Es decir, se conformó un frente nacional donde sólo estaban excluidos los partidarios del monopolio comercial español y de la Corona.

Si bien todos los miembros de la Primera Junta eran partidarios de la independencia, los más activos y más identificados con una transformación revolucionaria fueron Moreno, Castelli y Belgrano.

Para algunos historiadores marxistas hubo una izquierda de Mayo, que fue la vanguardia política e intelectual de la revolución. Esta vanguardia, a iniciativa de Belgrano, presentó a la Junta el "*Plan de operaciones que el gobierno provisional de las Provincias Unidas del Río de la Plata debe poner en práctica para consolidar la grande obra de nuestra Libertad e Independencia*" de Mariano Moreno, que a pesar de sus limitaciones era un programa revolucionario. Con este plan, la izquierda de Mayo llegó a exponer un camino de avance del país, dándole una importancia decisiva al poder del Estado y a la violencia organizada "*como única garantía de aplicación de los planes revolucionarios*". Esto requería firmeza política y la subversión del orden colonial feudal, apoyándose en las masas

más oprimidas, a semejanza de lo que trataron de hacer Castelli en el Alto Perú o Belgrano en la campaña al Paraguay; éste, al llegar a Misiones, les otorgó tierras a los originarios y los integró al Cabildo local.

En lo económico plantearon el monopolio del comercio exterior, de la explotación de la minería y del tráfico monetario, además de la expropiación a cinco mil o seis mil familias pudientes. Así se lograría un capital que sería aplicado en diferentes emprendimientos para facilitar la creación de fábricas, ingenios y a un aumento de la producción agrícola, entre otros beneficios.

Desde distintos lugares se planteó la protección a la agricultura e industrias locales. Belgrano en el *Correo de Comercio* explicaba que:

> "*...la importación de mercaderías que impiden el consumo de las del país, o que perjudican el progreso de sus manufacturas y de su cultivo, lleva tras de sí, necesariamente, la ruina de una nación...*".
>
> (Belgrano, Manuel, *Escritos Económicos*, Raigal, Buenos Aires, 1954)

En esto coincidía con Vieytes, exponente de una incipiente burguesía industrial que transformaba el sebo, un producto de la ganadería, en jabón. Una industria nacional de 1810, en sus primeros pasos y con escaso desarrollo. En la jabonería trabajaban cuatro esclavos negros y dos originarios siervos.

Como sostiene Eugenio Gastiazoro, Moreno fue tal vez quien mejor comprendió el significado de la revolución, propagando desde *La Gaceta* estas ideas que estaban en la base de la Revolución Francesa. Moreno se desprendió de su clase y fue más lejos en sus postulaciones, reivindicando la necesidad del apoyo de las masas oprimidas del interior. También se convirtió en exponente de sectores como el de Vieytes, que expresaban un potencial desarrollo burgués. Al igual que los jacobinos franceses, no veía claramente el problema campesino y no avizoraba que a éstos les correspondía el papel principal en la ruptura del orden feudal. Sin embargo, desde *La Gaceta* logró ganar a Artigas, que fue quien mejor entendió y resolvió este problema.

Hombres como Moreno (nuestro Robespierre, como lo llamaba sarcásticamente Saavedra), Artigas, Belgrano, Castelli, Monteagudo o Agrelo lograron encender en los sectores más oprimidos de la sociedad colonial el entusiasmo revolucionario. Indudablemente expresaron la izquierda de Mayo.

Artigas y López: dos posturas frente al centralismo

Artigas impulsaba una Confederación al estilo de las que se habían organizado en las ex colonias inglesas en Norteamérica. Planteaba los principios del federalismo levantando el lema "Independencia y República", inspirado en las ideas iniciales de Moreno y Monteagudo. Este pensamiento chocaba con los intereses de los terratenientes bonaerenses, cuyo federalismo se caracterizaba por tratar de mantener para sí la exclusividad del

puerto y de la Aduana. Para éstos, la única federación posible era bajo su hegemonía. En este punto, el pensamiento de Artigas confluía con el de muchos caudillos del interior, entre ellos con el de Estanislao López.

Artigas, sin embargo, a diferencia de López, fue ganado para la revolución por la prédica de Moreno en *La Gaceta*. Como integrante de la vanguardia revolucionaria de Mayo, además de pelear por la independencia, siempre buscó acabar con el dominio feudal. A pesar de provenir de una familia de terratenientes, trató de avanzar en propuestas democráticas y revolucionarias que le permitieran fusionarse con los sectores populares –originarios, mestizos, negros y mulatos– para poder concretar sus aspiraciones económicas y políticas.

En 1815 levantó un programa agrario de reparto de tierras que se regía por el principio: *"los más infelices serán los más privilegiados"*. El programa de 29 puntos contemplaba la entrega de suertes de estancias a negros, originarios, zambos y criollos, además de la expropiación de las tierras de *"los malos europeos y peores americanos"*. Huelga decir que con estas ideas Artigas se fue ganando el odio de los grandes terratenientes, no sólo de la Banda Oriental, sino también del resto del Litoral y Buenos Aires.

Para mantener encendida la llama revolucionaria fueron muy importantes los planteos reivindicativos de Artigas respecto de los pobladores originarios, que fueron incorporados masivamente a sus tropas e inclusive llegaron a ser su principal base de apoyo, en particular los que provenían de las ex misiones jesuíticas, los heroicos Tapes.

En 1815, Andrés Guaycurarí –*Andresito*– fue designado comandante general de Misiones por Artigas. Bajo el mando de este mestizo guaraní distintas comunidades originarias, incluidas las pampeanas, se apoderaron durante cuatro años de esa región del país extendiendo su poder en 1818 hasta Corrientes. *Andresito* decretó la inmediata libertad de los nativos sometidos a la servidumbre y además, cumpliendo con el reglamento promulgado por Artigas en 1815, inició el reparto de tierras. Por orden de éste, el caudillo guaraní defendió con patriotismo hasta 1819 la frontera norte frente a la expansión portuguesa. Derrotado y aislado por el general Chagas, *Andresito* fue sorprendido y detenido por las tropas invasoras. "*Artiguinhas*", como lo llamaban los portugueses, fue llevado a Porto Alegre para luego ser trasladado a la prisión de la isla Das Cobras, en el océano Atlántico, donde murió en 1822.

El ejemplo de la obra de *Andresito* expresa con nitidez las diferencias que separaban a Artigas de otros caudillos del interior como Estanislao López, respecto de temas como el latifundio.

Casi ninguno de los caudillos del interior pudo romper con el aislamiento al que los condenaban los intereses de la clase predominante. Esto era así porque ellos eran expresión de la aristocracia terrateniente y comercial que tenía posiciones de hegemonía en los Cabildos. Todos querían romper con el dominio colonial pero sin alterar el orden económico-social,

o sea sin acabar con el régimen feudal, y en este sentido Estanislao López no fue la excepción.

El federalismo, en manos de los terratenientes, fue convertido en un instrumento de preservación del latifundio y la opresión feudal. Como se vería claramente después de 1820, estos terratenientes feudales, aunque defendieron la soberanía nacional, no pudieron facilitar el desarrollo de una Argentina independiente.

A diferencia de Artigas, esta condición de clase inhibió a López y a la mayoría de los caudillos de encabezar una verdadera opción de unificación nacional; es decir, ser consecuentemente federalistas. La actitud de López y Ramírez en 1820 frente al poder central fue reflejo de ello. Llegados a Buenos Aires por el impulso antiporteñista, los caudillos del litoral arribaron a la conclusión de que no podían prometer algo distinto de lo que ofrecían los terratenientes y comerciantes del puerto único. Entonces firmaron un acuerdo –el Pacto del Pilar– que dejaba la organización nacional en manos de Buenos Aires. Ni siquiera reivindicaron los derechos de las provincias a la Aduana. Luego de este pacto, Artigas, totalmente aislado y perseguido, se exilió en Paraguay.

◀ Estanislao López: placa existente en la iglesia del Convento de San Francisco.

López, a diferencia de Artigas, reclutaba nativos para utilizarlos como punta de lanza contra sus hermanos originarios. Llegó a reunir a cientos de Abipones para integrar *Los lanceros del Sauce*. De ese grupo surgió Domingo Pajón (a) *Chula* que fue designado con el grado de comandante para el resguardo de la frontera norte, pero no como *Andresito* para enfrentar a los portugueses, sino para aniquilar a sus hermanos Mocovíes. López encabezó hasta su muerte, en 1836, varias campañas contra los Mocovíes y sus tolderías, provocando grandes matanzas. En una de esas incursiones murió su lugarteniente *Chula*.

Si bien Artigas y Estanislao López tuvieron muchos acuerdos, los ejemplos de *Andresito* y *Chula* sintetizan en buena medida las diferencias que también los separaban en temas como el de los pueblos originarios.

Buenos Aires mantuvo la supremacía sobre Santa Fe

Hacia 1820, producto de las continuas guerras con Buenos Aires, la economía de la provincia se encontraba en ruinas y hasta los propios ganaderos, ante el riesgo de saqueos, se vieron obligados a liquidar sus rebaños. No sucedió lo mismo con los hacendados de Buenos Aires, que bastante alejados del teatro de batalla lograron imponer sus intereses en su provincia, predominando inclusive sobre los grandes comerciantes que controlaban la economía y la política de la ciudad.

A pesar de las victorias militares obtenidas junto a otras provincias del interior sobre el gobierno del Directorio, los beneficios económicos logrados por Santa Fe fueron escasos, con excepción de las 25.000 cabezas de ganado obtenidas a modo de indemnización con la firma del Pacto de Banegas.

Buenos Aires reconoció a Santa Fe como libre e independiente aunque esa autonomía sólo fue formal. El poder central continuó detentando el monopolio del comercio exterior y, por tanto, siguió cobrando las rentas de Aduana, reteniendo para sí la facultad de clausurar el Río Paraná a los buques extranjeros. El Tratado de Pilar –que dejaba en manos de Buenos Aires la Organización Nacional– fue de muy poca utilidad para Santa Fe, dado que por el mismo sólo se le reconocía el derecho al cabotaje fluvial.

En este período tampoco se logró la pacificación interior debido a que persistió la implacable resistencia de los pueblos originarios. Se firmaron acuerdos con Rosas para contener los ataques de los nativos del sur, pero los mismos no se cumplieron por los altos costos de destinar tropas permanentes durante todo el año en la frontera. En el norte la situación no era distinta, ya que tampoco se lograba apaciguar la frontera con el Chaco, aunque habría que destacar que con el establecimiento de la reducción de San Jerónimo del Sauce, Santa Fe se transformó en una ciudad algo más segura.

A partir de 1820, y a nivel nacional, se incrementó notablemente la actividad ganadera. El elevado precio de los cueros en el mercado mundial, la

necesidad de abastecimiento de Buenos Aires y el gran desarrollo de los saladeros –producción de tasajo– fueron el motor del auge de la actividad. Los ganaderos, sin introducir cambios de técnicas, aumentaron las superficies territoriales aprovechables explotando más intensamente la fuerza de trabajo.

A pesar de tener un crecimiento mucho más modesto que Buenos Aires, Santa Fe también usufructuaba esta situación. El excelente nivel de lluvias junto a una constante demanda de abastecedores y propietarios de saladeros, posibilitaron el establecimiento de nuevas estancias, fundamentalmente en el sur, al tiempo que se reactivaron la mayoría de las existentes hasta ese momento.

Al igual que en Buenos Aires, la aristocracia ganadera santafesina fue consolidando su poder en el territorio. La comunidad de intereses de los empresarios de ambas provincias, hizo posible que el estado porteño subvencionase a López en sus guerras contra los generales unitarios y los pueblos originarios.

Las diferencias económicas entre Santa Fe y Buenos Aires, sin embargo, siguieron siendo abismales. Pese a sus grandes victorias militares, el caudillo santafesino siempre cedió ante Buenos Aires, lo que determinaría que durante su gestión la economía provincial no haya crecido al ritmo de la bonaerense. Por ejemplo, en la década del treinta había una enorme diferencia entre lo que recaudaba uno u otro erario: por cada peso que ingresaba al fisco de Buenos Aires, el de Santa Fe sólo recibía 0,006 pesos.

Cuando declinó el peso político y militar de López, fue el gobernador correntino Pedro Ferré quien se puso a la cabeza de los intereses de las provincias del Litoral frente al gobierno central.

La derrota unitaria y la Convención de Santa Fe

El unitarismo, como propuesta de unificación de la Nación, fracasó en su pretensión de imponer por la fuerza al interior los intereses de Buenos Aires y su puerto. Al igual que en el federalismo, dentro de las propias fuerzas unitarias militaban muchos caudillos terratenientes como el santafesino Domingo Cullen, Javier López, de Tucumán o Ángel Peñaloza, de La Rioja, quien en los últimos años de su vida encabezó las revoluciones federales del interior aplastadas a sangre y fuego por el mitrismo. Previamente, en 1836, Peñaloza, lugarteniente de Quiroga, se pasó al bando unitario uniéndose a Brizuela. Convencido de que Rosas había matado a Quiroga, y para defender sus tierras, se alzó contra el caudillo bonaerense y al fracasar en su intento de apoderarse de La Rioja debió exiliarse en Chile. Muchos caudillos unitarios, en función de sus intereses terratenientes, tuvieron buenas relaciones con sus pares federales; esto explicaría, por ejemplo, la amistad entre Domingo Cullen y Estanislao López.

Con Rivadavia, los unitarios trataron de imponer sus principios por la fuerza. Lamadrid, llamado "el apóstol en la obediencia y el campeón de las

autoridades constituidas", enviado por el gobierno central a trasladar tropas al interior para la guerra con Brasil, se apoderó de Tucumán e inició una campaña contra las demás provincias. De hecho contó con el apoyo de Rivadavia.

Esta práctica de los unitarios provocó una reacción en cadena de las provincias, que fue acaudillada por terratenientes feudales como Rosas o Facundo Quiroga. Estos caudillos, que descreían de la posibilidad de avanzar en la unificación nacional, enarbolaron las banderas federales fundamentalmente para defender sus intereses particulares.

Pero creer, como explican la mayoría de los historiadores liberales, que el federalismo se agotaba en este tema sería un serio error. No sólo Artigas, sino muchos otros caudillos del interior buscaban algún tipo de organización nacional que permitiera ampliar los espacios comerciales a los mercados provinciales. Los líderes de distintas regiones trataban de evitar el aislamiento económico de sus provincias, producto de la dependencia del mercado o el puerto de Buenos Aires. Esto explica el federalismo de comerciantes como el correntino Pedro Ferré o el santafesino Domingo Cullen, que enfrentaron a Rosas.

Derrotado el intento unitario de imponer una constitución con Rivadavia como presidente, la mayoría de las provincias propició la reunión de una convención nacional en Santa Fe que permitiera organizar al país bajo la forma representativa, republicana y federal. Dorrego, el gobernador de Buenos Aires, estuvo de acuerdo con esta iniciativa. Luego de varios enfrentamientos entre unitarios y federales, que culminaron con el fusilamiento del propio Dorrego y la derrota de Lavalle a manos de López, Rosas, el gobernador de Buenos Aires, organizó una reunión con las provincias del Litoral ofreciendo una alianza para la guerra y una promesa de organización nacional una vez finalizada ésta.

La Convención que dio origen al Pacto Federal de 1831 se celebró en Santa Fe. Buenos Aires estuvo representada por José María Roxas y Patrón, Entre Ríos por Diego Miranda, Corrientes por Pedro Ferré y Santa Fe por Domingo Cullen.

Ferré enfrentó a Buenos Aires enarbolando las banderas de lo que tiempo después sería llamado el federalismo doctrinario. Reclamaba el mantenimiento de una representación de las provincias ligadas hasta tanto se organice la Nación, que tuviera la facultad de regular el comercio exterior y la navegación de los ríos. Además, Ferré exigió la prohibición de importar los artículos que el país producía y la habilitación del puerto de Santa Fe para el comercio exterior. Por último, sostuvo que los ingresos de la Aduana de Buenos Aires debían ser considerados nacionales, con el objetivo de destinarlos para gastos de empleo, de defensa nacional y para erogaciones en materia de relaciones exteriores.

El delegado de Rosas defendió el librecambio en aras de los intereses de

la ganadería que es, según sostuvo Roxas, "*la industria casi exclusiva de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos; y aún en Corrientes es como la base de las demás*". El delegado de Buenos Aires también argumentó que "*los productos importados eran mejores y más baratos que los que podían fabricar las industrias del interior*". Respecto de la Aduana y el Puerto, reivindicó la exclusividad del derecho de Buenos Aires sobre los mismos, oponiéndose firmemente a la libre navegación de los ríos. Solo aceptó incluir en el pacto una cláusula que manifestara la necesidad de lograr la organización nacional.

Si bien el interior finalmente firmó el Pacto Federal, cuando se evalúan las dos posiciones (Ferré y Roxas) se observa que las diferencias entre el Litoral y Buenos Aires persistían, ya que el programa que levantó Ferré fue el de la incipiente burguesía nacional, que había asomado con Hipólito Vieytes. Una burguesía que reclamaba para ella medidas proteccionistas, pero que era incapaz de ver el problema agrario y sobre todo el sistema feudal dominante que impedía su desarrollo.

Santa Fe apoya a Urquiza

Debido a la importancia que tuvo Rosas durante más de treinta años en la vida política argentina, convendría hacer una reflexión acerca de su figura y también del meneado y manido tema del nacionalismo rosista. Rosas nunca se enfrentó con los intereses de la clase a la que pertenecía y a la que representaba desde la función pública. Algunos autores reivindican su paternalismo por la controvertida Ley de Aduana de 1835 –modifica parcialmente su postura respecto a la Convención de Santa Fe– y sobre todo por su firme actitud frente a la agresión extranjera.

En el tema de la Ley de Aduana, si bien contó con la adhesión de una parte del interior, la mencionada norma mantuvo todas las prerrogativas de los terratenientes y comerciantes bonaerenses, dado que no modificó el esquema del puerto único y retuvo para Buenos Aires la exclusividad de la Aduana. También al respecto habría que decir que se trataba de una ley provincial, que en lo central contemplaba los intereses de la producción de Buenos Aires y sólo favorecía, de manera indirecta, a algunas producciones del interior.

En la misma se contemplaba la prohibición de entrada de artículos que se producían en la provincia de Buenos Aires como lazos, cinchas, rebenques, maneadores y otros productos de cuero. Como explica Eugenio Gastiazoro, fue una ley "*claramente proteccionista de los intereses bonaerenses y en muchos casos discriminatoria de las economías regionales*". Por ejemplo, impulsaba la aplicación de un gravamen a la yerba mate y al tabaco provenientes de Paraguay, Corrientes y Misiones.

Durante su gobierno, Rosas tuvo excelentes relaciones con los comerciantes extranjeros, especialmente con los británicos, que monopolizaban el comercio exterior.

Si bien podría afirmarse que no existió el supuesto nacionalismo económico de Rosas, tampoco debería negarse su patriotismo a la hora de enfrentar a los franceses e ingleses que intentaban imponerse por la fuerza. Frente a la agresión extranjera directa, Rosas tuvo una actitud de defensa de la soberanía nacional y fue apoyado por la inmensa mayoría del pueblo, que relegaba a un segundo plano las contradicciones que lo separaban del caudillo bonaerense. Nada –ni la Mazorca, ni su carácter de Restaurador de las leyes feudales– puede justificar la decisión de los unitarios de pasarse al bando francés o anglo francés contra los intereses de la Nación.

Esta posición alejó definitivamente a los unitarios de las grandes mayorías populares, que a pesar de tener contradicciones objetivas con Rosas, reivindicaron para sí el 20 de noviembre de 1845, jornada en la que nuestras fuerzas al mando de Mansilla, enfrentaron al invasor en la Vuelta de Obligado. El sentimiento nacional se vio estimulado el 4 de junio de 1846, cuando en la localidad santafesina de Puerto General San Martín –en Angostura del Quebracho o Punta Quebracho, un lugar histórico hoy ocupado por la multinacional Cargill– las baterías de la costa santafesina bajo la dirección del general Lucio N. Mansilla, provocaron graves daños a la flota anglo-francesa hundiendo dos barcos de guerra y varios de carga, cuando regresaba llena de mercaderías de Vuelta de Obligado. La decisión del general San Martín de enviar a Rosas el sable corvo que utilizara en las guerras de la independencia y ofrecer sus servicios para la defensa de la patria, aún hoy no puede ser digerida por los liberales y debería considerarse como parte del sentimiento patriótico de las mayorías nacionales.

La derrota de Rosas en Caseros, aunque permitió abrir un proceso que concluyó en la unificación nacional, no significó un cambio en la estructura de poder. Tampoco fue la llave de grandes transformaciones económicas y sociales. El proceso siguió estando en manos de hacendados como Urquiza que se inclinaban cada vez más al liberalismo.

Urquiza recibió un rotundo apoyo en la provincia de Santa Fe. Cuando las tropas del caudillo entrerriano se acercaron a Rosario, los comerciantes con la consigna de "*basta de restricciones aduaneras*" le brindaron todo tipo de ayuda y organizaron el movimiento urquicista que culminó con el pronunciamiento de Hueco de Cardozo. Mil hombres, todo tipo de piezas de artillería, carretas con municiones y dos mil quinientas cabezas de ganado fueron el aporte inicial rosarino al movimiento. A la vez esta decidida participación demuestra que a pesar de los acuerdos que firmó oportunamente el brigadier López las diferencias con Buenos Aires persistían, fundamentalmente en el tema aduanero.

El Acuerdo de San Nicolás de mayo de 1852, fue muy resistido por los habitantes de Buenos Aires. El mismo dejaría a esa provincia afuera de la Confederación hasta 1859, cuando tras el triunfo de Urquiza en la batalla de Cepeda se firmó el Pacto de San José de Flores que abriría paso a la reinte-

gración bonaerense. De todos modos el proceso de "Organización Nacional" recién culminaría en 1880, sobre el fin de la presidencia de Avellaneda, con la derrota del gobernador Tejedor y las tropas de Buenos Aires a manos de las tropas nacionales comandadas por Julio A. Roca.

▲ Cuadro de la pintora Leónie Mattis, que muestra la Catedral y la Plaza Mayor de Rosario en 1840.

En 1853 sobre la base de lo acordado en San Nicolás, se reunió el Congreso General Confederativo, que sancionó la Constitución Nacional. Entre muchas otras cuestiones quedó establecido el sistema federativo, la eliminación de las aduanas interiores y la libre navegación de los ríos. Al no asistir Buenos Aires, se tuvo que dejar pendiente el tema de la aduana nacional y la residencia del gobierno federal.

Se consolida el modelo oligárquico

Entre 1820 y 1850, con la derrota de la vanguardia revolucionaria de Mayo, en el país se afirmaba de manera definitiva el modo de producción, basado en la propiedad latifundista y la ganadería extensiva. La aristocracia terrateniente sostenida por los financistas y los comerciantes, fundamentalmente europeos, manejaba las riendas del estado federal y los gobiernos provinciales. Debido a esto, el naciente estado se puso plenamente al servicio de ese modelo.

A modo de ejemplo habría que decir que en el año 1830 en la provincia de Buenos Aires había 538 grandes estancieros, mientras que diez años después el número disminuía a 293. Éstos se repartían nada menos que 8.600.000 hectáreas. Atacando esta fenomenal concentración, en 1858 se sancionó una ley que declaraba pública toda la tierra donada durante el

gobierno de Rosas. Asombrosamente, la mayoría de nuestros historiadores no han investigado las razones por las cuales esta norma bonaerense jamás se puso en práctica.

Sin dudas, nuestra oligarquía no quería dar un solo paso atrás. Es más, sabía que el reparto final de la tierra pública aún no había concluido. El mismo recién se concretaría con la derrota en la década del '70 de los pueblos originarios del Chaco Santafesino, y con la expulsión definitiva, en la década del '80, de los nativos de La Pampa, recortando el conjunto de las tierras conquistadas en inmensas propiedades privadas o estancias, siguiendo el modelo que se había impuesto entre 1820 y 1850.

En el período comprendido entre 1876 y 1893, durante el apogeo de Roca, se enajenaron 42 millones de hectáreas de tierras públicas. El propio general Roca con posterioridad informaría al Congreso que hasta 1904 el Estado había otorgado títulos de propiedad de 32.447.045 hectáreas.

Millones de hectáreas fueron lisa y llanamente donadas para pagar favores. Varios millones más, rematadas por el Estado a precios viles. En época de Roca se llegó a subastar en una sola operación en Londres 400 leguas cuadradas a $ 0,48 la hectárea. El negocio de los terratenientes fue estupendo y con la llegada de los ferrocarriles se multiplicó la fortuna de los propietarios en forma considerable.

Para darnos una idea de la vertiginosa valorización de la tierra, habría que recordar que Jacinto Oddone calculó que el valor de una hectárea en 1836 era de 0,42 pesos, mientras que en 1927 ascendía a 1.840. Esto quiere decir que por cada peso invertido en tierras en 1836, se obtenían 4.836 pesos en el año 1927. Que quede claro que Oddone hablaba de pesos con respaldo oro ($F).

LAS COLONIZACIONES ABREN UNA ERA DE CAMBIOS

Supremacía de los Autonomistas sobre los Liberales

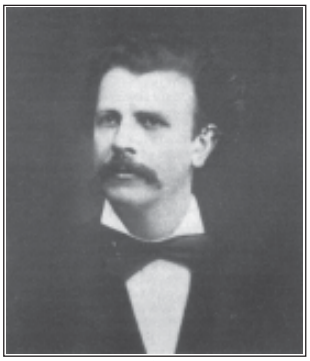
Los Oroño, los Aldao, los Iturraspe, los Iriondo, los Zavalla, los Cabal eran algunos de los grandes terratenientes que habían adquirido enormes extensiones de campos vírgenes luego de la Revolución de Mayo de 1810. Tras la muerte de López, y fundamentalmente de la derrota de Rosas en Caseros, estos terratenientes entendieron que había llegado la hora de conformar una nueva fuerza política en Santa Fe. Con las primeras conversaciones asomaron serias diferencias. Nicasio Oroño planteaba una Santa Fe liberal al estilo de los modelos predominantes en Europa; también era partidario del denominado camino americano de distribución de tierras y propiciaba el desarrollo de la agricultura. En el otro extremo, resistiendo los cambios, aparecía Simón de Iriondo, un claro representante de los ganaderos de carnes duras, que pregonaba un catolicismo sin concesiones y proclamaba "*el autonomismo frente al mundo*". En política compartía las posiciones de los terratenientes bonaerenses, y tuvo una estrecha vinculación con los más notorios representantes de lo que luego fue la Generación del '80.

Oroño, Cullen y Aldao fundaron el Partido Liberal; en tanto, Iriondo y Cabal fueron los mentores del Partido Autonomista.

Producto de las diferencias que tenían estas fuerzas, entre 1852 y 1870 estallaron seis revoluciones provinciales (1852, dos en 1856, 1857, 1859 y 1867), tres de las cuales, la de 1857, 1859 y 1867 (gobernaba el mismísimo Oroño) concluyeron con el derrocamiento del gobierno establecido.

Simón de Iriondo era un terrateniente dueño de casi todo Calchaquí. Pertenecía a una familia oligárquica cuyos miembros residían durante varios meses del año en Londres o París. Retuvo en sus feudos, en calidad de esclavos, a cientos de nativos a los que sometía a una dura explotación. Era la típica familia conservadora que gastaba fortunas en juergas y política pensando que sus bienes nunca se iban a agotar. Finalmente, algunos descendientes de Iriondo evolucionaron políticamente y pasaron a integrar las

filas del radicalismo. El último de la dinastía (Manuel o "*Manucho*"), siendo radical, llegó a ser gobernador de la Provincia.



Dr. Simón de Iriondo, gobernador de la Provincia. Fundador y líder del Partido Autonomista de Santa Fe.

En el otro extremo, Oroño, a pesar de tener una inmensa fortuna, no representaba a la Santa Fe de tradición católica y vacuna. Sostenía que "*el pueblo que no saca de la tierra su principal riqueza removiéndola con el arado y fecundándola con el sudor de su frente, no es nada o poca cosa*". Además acuñó el eslogan que tanto irritaba a la aristocracia ganadera: "*El lazo embrutece, el arado civiliza*". Conceptos similares habían expresado años antes sectores liberales del sur santafesino, para quienes la condición de pastor significaba "*atraso, ignorancia y abandono*", y la del agricultor "*civilización, progreso y amor al trabajo*".

Como gobernador, en 1865, impulsó y logró la aprobación de la Ley de Fomento de la Colonización, que era la contracara del modelo nacional imperante, ya que propiciaba la distribución de la tierra y alentaba el trabajo individual del propietario del suelo. Con el objetivo de educar a la juventud en la tarea de la agricultura, proyectó una Escuela Agraria que funcionaría en los terrenos del Convento de San Lorenzo, que llegó a expropiar. Esto causó un gran malestar en la Curia, que pasó a apoyar decididamente a los autonomistas y logró que la iniciativa no prosperara. En 1867, a iniciativa de Oroño, la Cámara de Representantes, con el fin de evitar problemas a los inmigrantes no católicos, sancionó el Matrimonio Civil y secularizó los cementerios. Esto terminó de irritar a la jerarquía de la Iglesia que acusó a Oroño de haber caído en "*pena de excomunión*".

Nicasio Oroño, fundador y líder del Partido Liberal de Santa Fe, antes de asumir la gobernación de la Provincia.

En respuesta, el Gobernador ordenó la detención de los párrocos de distintas localidades como Rosario, Coronda y Calchines. La Iglesia, junto a los autonomistas, encabezó el golpe que derrocó a Oroño y como consecuencia del mismo Mariano Cabal asumiría la gobernación. Simón de Iriondo, mentor y líder de la asonada, se consolidó como el hombre fuerte de la política provincial. Oroño encabezó varias rebeliones liberales contra el "régimen" de los Autonomistas. Todas fracasaron y en uno de los frustrados levantamientos cayó muerto a manos

de las fuerzas gubernamentales su compañero de ruta y colaborador más apreciado: Patricio Cullen.

Liberales y Autonomistas dominaron durante años la escena política santafesina y recién en 1890, con el surgimiento del radicalismo, el liderazgo de estas fuerzas entró en crisis. Durante todos esos años de intensos cambios, la política estuvo restringida a un limitado círculo de terratenientes (clanes autonomistas o liberales) que residían en la ciudad capital.

Los comerciantes rosarinos y los nuevos núcleos sociales que aparecieron con la fundación de las colonias, tuvieron escasa participación en la vida política provincial. Salvo el caso de Cafferata, todos los gobernadores santafesinos de la segunda mitad del siglo XIX, provenían de familias que habían tenido una destacada participación en la vida política y social durante la primera mitad de ese siglo y sólo uno, Servando Bayo, había nacido en Rosario. Para Juan Álvarez se trataba de *"gobiernos de familias"*.

A pesar de que los autonomistas hicieron concesiones a los sectores influyentes rosarinos, por ejemplo le otorgaron el control del Banco Provincial, las clases altas de esta ciudad se identificaban más con el proyecto de los liberales, razón por la cual el diario *La Capital* continuamente editorializaba castigando las políticas de los autonomistas, particularmente las de Simón de Iriondo.

Para Nicasio Oroño, Iriondo era un *"caudillo de frac y levita"*. Ramón Lassaga, un opositor político del jefe autonomista recordaba:

> *"...que le gustaba (por Iriondo) confundirse con la masa popular (...) teniendo para todo el mundo una frase llena de benevolencia y cariño..."*
> (Lassaga, Ramón, *Biografía de Iriondo*, Archivo General de la Provincia de Santa Fe, citado por Gallo, Ezequiel, *La pampa gringa*, Editorial Sudamericana, Buenos Aires,1983)

El caudillismo de Iriondo, el apoyo nacional que recibía de los sectores conservadores, una red de caudillos regionales (especialmente ganaderos) que aseguraban la lealtad a la causa partidaria, y el control de las milicias provinciales (las guardias santafesinas), fueron las bases sobre las cuales se asentaba el enorme poder de los autonomistas, poder que les permitía ganar elecciones o impulsar golpes de estado. Esta afinada organización explica la supremacía que tuvieron los autonomistas sobre los liberales en esa segunda mitad del siglo XIX.

A la vez también fue muy importante el papel de los caudillos autonomistas locales o regionales. Era la época en la que según el diario *La Capital* "*al coronel Barrera, en Villa Constitución y al comandante Córdoba, en San Lorenzo, no se les ganaban elecciones*".

Los grandes propietarios exigen seguridad jurídica

Durante siglos, la gran mayoría del actual territorio santafesino no estuvo bajo el control de las autoridades constituidas. Por ejemplo, en 1820,

de los 113.007 km^2 que componen el actual territorio provincial, solamente 12.000 km^2 se habían incorporado al control oficial, lo que significa que cerca del 90% de la superficie seguía en manos de los pueblos originarios, que durante siglos habían habitado estas tierras. Esta situación comenzó a cambiar con las campañas del gobernador Fraga (1858), las expediciones de Cabal (1864 y 1869) y la de Obligado (1870-1880).

Como se verá en los capítulos siguientes, el proceso de expansión territorial se vio acompañado por un acelerado traspaso de tierras de propiedad del estado provincial a manos privadas, para cuyo fin se necesitó legislar. Los beneficiarios de ese traspaso exigían que se les garantizara seguridad jurídica para establecer nuevas empresas rurales (estancias).

La Constitución Nacional de 1853 había establecido con claridad meridiana el lugar central de la propiedad privada en la vida económica y social argentina. Este precedente fue recogido por las constituciones provinciales de 1863 y especialmente la de 1872, que había puesto más énfasis en reafirmar la supremacía de la propiedad privada que la bisoña norma de 1853. Finalmente, en el Código Civil de 1869 quedaron totalmente asegurados tanto la primacía de la propiedad privada como el respeto a los contratos libremente acordados.

Para implementar con éxito la nueva legislación se requería de medidas complementarias con el objetivo de superar tanto los "reglamentarismos" vigentes desde la época colonial como la carencia de catastros adecuados, que provocaban una gran confusión con respecto a los límites de las propiedades rurales. La solución de estos problemas era sumamente necesaria para posibilitar el traspaso de tierras.

Fue así como entre 1855 y 1869, los distintos gobiernos se abocaron a regularizar los catastros y los registros de propiedad de la Provincia. En ese lapso se dictaron disposiciones que obligaban a los propietarios a registrar oficialmente sus títulos y también se resolvieron la mayoría de los conflictos entre particulares. Además, durante las gestiones de Oroño e Iriondo, se reorganizaron las escribanías para acelerar la inscripción de títulos y resolver distintos conflictos surgidos en torno de la propiedad inmobiliaria.

Con la expansión compulsiva de las fronteras, el traspaso de los suelos públicos "conquistados" a manos privadas y las garantías jurídicas otorgadas a la propiedad y a las transacciones entre personas, se concretó el despojo de tierras pertenecientes a los pueblos originarios, a la vez que se garantizó jurídicamente a los "nuevos propietarios" la propiedad de las mismas.

Diferentes modelos de colonización

En contraposición al modelo impuesto en la mayoría de la nación, en la segunda mitad de la década del '50 se diseñaba en la provincia de Santa Fe un segundo tipo de ocupación del suelo: la pequeña explotación agrícola que

se oponía al modelo de la aristocracia pastoril. Este proyecto alternativo también estuvo diseñado y más tarde orientado por la oligarquía provincial.

Debido a una errónea apreciación técnica, varias de las primeras colonias agrícolas se instalaron en zonas que luego serían consideradas no aptas para el cultivo de cereales. Luego de 1860 y durante muchos años, el especialista alemán en suelos Herman Burmeister sostuvo en ámbitos nacionales e internacionales que las tierras de la región pampeana no eran aptas para el desarrollo de los cultivos cerealeros. Posteriormente volcó estas ideas en su trabajo *Viajes por los Estados del Plata con referencia especial a la constitución y el estado de la cultura en la República Argentina.*

En Santa Fe esta teoría fue respaldada por Simón de Iriondo, quien afirmaba que la región más apropiada para los cultivos estaba ubicada al norte de la provincia. Recién a principios de la década del '80 comenzaron a desmoronarse las ideas de Burmeister. En 1883 el gobierno norteamericano, a través del consulado de ese país en Buenos Aires, informaba al gobierno argentino que los estudios de los profesores Girsebach y Doening refutaban los argumentos de Burmeister, señalando al mismo tiempo que la región pampeana era tan favorable para el desarrollo del cultivo agrícola como el lejano oeste norteamericano.

El proceso colonizador tuvo dos tramos. Una etapa inicial de colonización oficial entre el año 1856 y 1862 y otra de colonización privada que se extendió hasta 1895. Durante ambos períodos es posible encontrar, por lo menos, cuatro sistemas organizativos diferentes.

Bajo el primer sistema, algunas colonias fueron fundadas en forma directa por el gobierno provincial o nacional. Éstas se erigieron en zonas de la provincia peligrosamente expuestas a los ataques de los nativos, motivo por el cual la venta de tierras a los inmigrantes se realizaba a muy módicos precios. El número de asentamientos fundados bajo este sistema fue muy bajo. Según el Censo Nacional de 1895, solamente 15 de las 360 colonias existentes hasta ese momento fueron clasificadas como gubernamentales. Reconquista y Avellaneda en el norte y Guardia de la Esquina en el sur fueron las más importantes.

El segundo sistema comprende a las colonias oficiales que fueron establecidas por empresarios privados bajo control gubernamental. En este caso, el gobierno vendía al intermediario tierras a muy bajos precios y exigía condiciones en cuanto al número de chacras a radicar y a las facilidades que debían otorgarse a los nuevos productores, en general inmigrantes. El empresario debía conceder al colonizador plazos flexibles para el pago y además entregarle vivienda, maquinarias, etc. El número de colonias fundadas bajo este sistema no resultó tampoco muy significativo. Fueron 13 asentamientos que abarcaron una superficie de aproximadamente 200.000 hectáreas. Bajo este sistema se conformaron las dos primeras colonias de la provincia: Esperanza y San Carlos.

La gran mayoría de los poblados existentes hacia 1895 fueron concebidos bajo el régimen conocido como colonización privada. En este sistema el

empresario era beneficiado con la entrega de tierras, como el caso del "*Central Argentine Land Company*" que recibió una legua a cada lado de la traza del ferrocarril Rosario-Córdoba, o directamente la compraba al precio del mercado. En ambos casos, el empresario luego las vendía al mejor postor y el estado durante tres años lo eximía del pago de impuestos. Si bien teóricamente las tierras adquiridas bajo este método en caso de ser arrendadas perdían los privilegios fiscales, no se registran antecedentes de intervención estatal para retirar este beneficio, a pesar de la alta cantidad de contratos de alquiler celebrados por los beneficiarios de este tipo de colonización.

El funcionamiento del sistema era sencillo. Luego de obtener la tierra, el empresario subdividía el campo en varios lotes para proceder a su venta, restringiéndose su papel a partir de ese momento a recolectar los pagos anuales. Hubo excepciones ya que algunas empresas como "Central Argentino" o "La Candelaria" de Carlos Casado, fueron importantes transmisoras de nuevas técnicas de producción agrícola y además otorgaron otro tipo de apoyo a los colonos como instalaciones, adelantos y facilidades de pago –financiamiento– para las deudas. Hacia 1895 prácticamente habían desaparecido las casas de administración de estas empresas privadas.

Por último, a comienzos de la década del '90 aparecieron las llamadas colonias particulares. La única diferencia con el sistema anterior era que las tierras no contaban con facilidades impositivas, y por lo tanto, el empresario tampoco tenía obligaciones. En este sistema el comprador entregaba la tierra a un intermediario, que a la vez la arrendaba fraccionada a distintos colonos. El intermediario en general era el propietario del almacén mayorista del lugar, por lo que era común observar que en los contratos de arrendamiento figuraran cláusulas que obligaban a vender la cosecha, adquirir las semillas o alquilar maquinarias a una persona determinada. Solamente cuatro colonias se fundaron bajo este sistema; no obstante, este esquema productivo se popularizaría en los años siguientes.

Hacia 1895, la inmensa mayoría de las colonias eran privadas, quedando de esta manera superados los debates de la década del '70, donde se polemizaba acerca de si el estado debía estar presente o no en el ámbito rural.

En todos los casos los emprendimientos fueron llevados adelante por grandes propietarios, comerciantes, financistas e, inclusive, empresas inmobiliarias, fundamentalmente extranjeras. En el último período participaron del proceso colonizador importantes ganaderos y terratenientes bonaerenses como Diego de Alvear y Bernardo de Irigoyen. También intervinieron en el mismo hombres como Castellanos, Casado, Cabal o empresas como la inglesa "Central Argentino", la suiza "Berck y Herzog" (fundadora de San Carlos y San Jerónimo), la firma de banqueros británicos "Thompson, Bonard & Co." (que fundó la colonia Alejandra en la ribera norte del Río Paraná) y otras extranjeras como "Werner y Cía.", "Wilcken y Vernet", "Romang, Rams y Rubert Franck y Cía." y "Navarro y Cía.".

Tampoco faltaron aventureros como Carlos De Mot, de nacionalidad belga y de origen noble, que a través de un contrato otorgado por Cabal colonizó Los Sunchales. La historia oficial de esta localidad explica que para esa época "*no había sacerdotes, ya que se había destruido el templo para construir sobre sus cimientos el palacio (la mansión) de De Mot*". El belga, que tanto había irritado a la Iglesia, contaba con escasos recursos económicos por lo que no pudo cumplir con lo pactado, frustrándose de esta manera el emprendimiento original. En medio de la ira contra De Mot, los inmigrantes alemanes y franceses se trasladaron a Humboldt, en tanto los italianos optaron por San Carlos y Pilar. No obstante el fracaso de la experiencia, en medio de la fiebre colonizadora, de las ruinas del asentamiento nació la actual y pujante Sunchales.

La experiencia de colonización de Esperanza (1856) y de los asentamientos San Carlos y San Jerónimo (1859) tardaron en rendir frutos, motivo por el cual las autoridades provinciales decidieron suspender el incipiente proceso. Pero desde 1862 las tres colonias comenzaron un camino de prosperidad que sirvió de estímulo a nuevos emprendimientos.

A partir de 1865, la Guerra del Paraguay dio un impulso decisivo al proceso de colonizaciones agrícolas. El conflicto bélico, al crear un importante mercado consumidor a corta distancia de los emprendimientos de las colonias, estimuló notablemente el desarrollo de los cultivos cerealeros. Esto explica cómo, a diferencia de la mayoría de las provincias argentinas (que no acordaban con la guerra de exterminio del pueblo paraguayo), Santa Fe fue el único estado provincial que expresó reiteradamente su solidaridad con la política del gobierno central.

Entre 1865 y 1869 se fundaron 13 colonias agrícolas más y en 1872 el área dedicada a los cereales alcanzaba las 62.500 hectáreas.

Los terratenientes imponen los arrendamientos

En sus orígenes, los arrendamientos fueron implementados en las estancias lanares de la región pampeana. En las décadas del '60 y del '70 comenzaron a generalizarse y ya no se limitaron sólo a las estancias ganaderas sino que también se impusieron en las colonias agrícolas. Muchos de los empresarios colonizadores reservaron lotes para ponerlos en venta sólo después de fundar las colonias, hecho que invariablemente desataba un incremento del valor de la tierra. En el ínterin, los terrenos se ofrecían en arriendo; esto mismo sucedía en períodos de dificultades económicas cuando era difícil conseguir compradores para los lotes. Por ejemplo, la "*Central Argentine Land Company*", durante la severa crisis de 1875 prácticamente no vendió tierras.

De acuerdo con las cifras publicadas en el censo de 1895, más de la mitad de los agricultores de la provincia no eran propietarios (36% arren-

datarios y 15% medieros). El departamento con menos cantidad de contratos de alquiler era Las Colonias, el primero en denotar la presencia de colonias agrícolas; mientras que los que registraban los más altos porcentajes eran General López (71%), Constitución (75%) y Belgrano (78%), los últimos en incorporarse al proceso colonizador.

Al igual de lo que sucede actualmente, los arriendos se pactaban en dinero efectivo o en un porcentaje de la cosecha. La característica común de ambos tipos (en efectivo o en porcentaje) era que el propietario entregaba la tierra y que todos los gastos, salvo los impuestos, corrían por cuenta del arrendatario. Las mejoras introducidas en la explotación no eran reembolsadas, e inclusive en algunos casos había cláusulas que obligaban al arrendatario a alquilar las maquinarias, comprar los insumos y vender la cosecha en los lugares indicados por el terrateniente.

Una de las principales causas del incremento de los arrendamientos ha sido atribuida a la aparición de los cultivos combinados (cultivar trigo o sembrar alfalfa). Éstos se irrumpieron luego de 1895, cuando la creciente demanda internacional de carne vacuna de alta calidad obligaba a importar sementales de raza, a dividir las estancias en más potreros –en ese período comenzaba a generalizarse el uso de alambrados– y fundamentalmente a mejorar la calidad de las pasturas. En los veinte años siguientes, más de ocho millones de hectáreas de pastos duros fueron convertidas en fértiles praderas de hierbas blandas. Como consecuencia de este desarrollo, Argentina se convertiría en uno de los principales productores mundiales de carne vacuna de alta calidad, novedad con la que los arrendamientos tuvieron mucho que ver.

Refieren los descendientes de los colonos italianos que hacia 1895 el lema de éstos era: "*el primer año peón; el segundo, mediero; el tercero arrendatario; y el cuarto, propietario*". Este pensamiento tal vez tenga más que ver con un anhelo de los inmigrantes que con la realidad. Pero en 1896 el propio cónsul italiano refiriéndose a la posibilidad de acceder a la tierra sostenía que los arrendatarios podían "*convertirse en propietarios luego de tres o cuatro años de buenas cosechas*".

Esta situación cambió drásticamente a partir de principios del siglo XX como consecuencia de la espectacular alza de los precios de la tierra. Roberto Campolieti lo explicó así:

> "*...El testimonio de propietarios e hijos de propietarios apunta en todos los casos a señalar que después del período 1900-1905 se tornó difícil para los inmigrantes acceder a la propiedad de la tierra...*"
>
> (Campolieti, Roberto, *La chacra argentina*, Buenos Aires, 1914)

Luego de 1895 no sólo se registraron cambios en los precios de las tierras, sino que se modificaron las condiciones de los arrendamientos. Si bien no hay datos precisos sobre los valores que se cobraban en el período 1860-1895, las estimaciones coinciden en que a partir de 1884 y hasta 1895

los precios variaban entre un mínimo del 8 y un techo del 15% de la cosecha, en tanto hacia 1914 en el 80% de la tierra arrendada se pagaba más del 30%. En el lapso 1884-1895 los contratos oscilaban entre los tres y los seis años de duración, llegando en algunos casos hasta los ocho; mientras que en el período posterior, el 75% de los alquileres se pactaban como máximo a tres años.

Los primeros flujos inmigratorios

Las estadísticas de los censos nacionales de 1869, 1887 y 1914 demostraban la magnitud de la inmigración y la concentración de la misma en la zona costera de los ríos Paraná y Uruguay. En 1869, sobre un total nacional de 1.800.000 habitantes, 200.000 habían nacido en el extranjero. Según Félix de Azara, en Santa Fe, en el año 1887, residían 136.117 argentinos (el 61,8%) y 84.215 extranjeros (el 38,2%) y en 1914 esos porcentajes se ubicaban en el 64,9 y 35,1% respectivamente; en tanto al comenzar la Primera Guerra Mundial 2.300.000 habitantes sobre una población de más de 8.000.000, habían llegado al país procedentes de otros lugares del mundo.

El mayor flujo inmigratorio provenía de Italia. Datos oficiales de ese país indicaban que entre 1876 y 1900 se registraba una emigración de 444.000 personas provenientes de los distritos agrícolas del norte del país y 263.000 del empobrecido sur. En ese mismo período, la Italia meridional enviaba a Estados Unidos 523.000 de sus hijos, en tanto que el norte derivaba solamente 73.000. Los datos demuestran la fuerte influencia que tuvo y que tiene el sur italiano en Estados Unidos y a la vez refuerza la impresión sobre la importancia del norte de Italia en el desarrollo de Argentina. También llegaron a nuestro país importantes contingentes de franceses, vascos, gallegos, suizos, alemanes y yugoslavos.

Con la derrota de los pueblos originarios y la expansión de la frontera, grandes extensiones de tierras fueron ofrecidas en subasta pública, pero solamente quienes poseían capital, crédito e influencia –terratenientes, militares, grandes comerciantes o políticos influyentes– podían acceder a las mismas. Por el contrario, la mayoría de los inmigrantes residentes en el país se debían conformar con arrendar parcelas a corto plazo, ya sea para cultivar trigo o sembrar alfalfa. Éstos eran a menudo desplazados por los estancieros, que periódicamente disponían que los suelos se destinaran de nuevo a la cría de vacunos y ovinos.

La colonización oficial o semioficial constituyó el primer esfuerzo realizado por las autoridades provinciales para atraer a masas de trabajadores de Europa. Los primeros resultados fueron limitados, dado que el número de inmigrantes era pequeño y el impacto agrícola y económico prácticamente nulo. Pero estas primeras experiencias, además de mostrar el camino para la utilización de tierras fiscales, desnudaron **el principal problema que tenía y tiene el campo argentino: la renta terrateniente que frena su desarrollo.**

A pesar de su aparente fracaso inicial, colonias oficiales como la de Esperanza sobrevivieron y los inmigrantes, aunque en un reducido número, por primera vez fueron realmente asentados en la tierra. La radicación de mano de obra experimentada junto a la introducción del trigo, fueron los dos grandes logros iniciales de la colonización oficial.

Con excepción de lo que sucedía en la zona central santafesina, el difícil o casi imposible acceso a la propiedad de la tierra pampeana determinó que el extranjero encontrara en la ciudad, antes que en el campo, la posibilidad de progreso. Era común que un inmigrante llegara a un asilo u hotel de inmigrantes, desde allí se trasladara a la colonia, y al poco tiempo volviera al hotel para buscar trabajo en la ciudad. En Rosario el primer hotel de inmigrantes funcionó en la calle Urquiza Nº 20, esquina Puerto (hoy San Martín), en la ochava NE y tenía habitaciones para 300 personas.

Refiriéndose a este fenómeno Ensinck sostiene:

> "*...Colonización, puede ser tomado como sinónimo de inmigración, o como consecuencia de la misma, pero inmigración no da como consecuencia colonización...*"
>
> (Ensinck, Oscar Luis *Historia económica de la provincia de Santa Fe*, Servicio de Publicaciones de la UNR, Rosario, 1985)

La mayoría de los inmigrantes que acudieron al país atraídos por los períodos de auge económico 1882-1889 y 1904-1912, y optaron por intentar suerte en la zona rural, terminaron trabajando por muchos años como peones golondrinas, medieros o arrendatarios. Salvo en algunas zonas de Santa Fe (centro y centro sur), **el resultado del modelo con supremacía del latifundio fue la consolidación de una pampa sin colonos.**

Luego de 1890, en la región pampeana se multiplicaron los trabajadores golondrinas. Se trataba de europeos, fundamentalmente españoles e italianos, que en octubre o noviembre de cada año venían en atestados barcos para trabajar durante tres o cuatro meses en la cosecha de trigo y maíz. Esta actividad le permitía al extranjero, además de solventar los gastos y pasajes, retornar al viejo continente con algunos ahorros.

Desde Europa también arribaron inmigrantes para trabajar como aparceros o arrendatarios y, a diferencia de los peones golondrinas, fueron los que produjeron importantes cosechas, los que sembraron pasturas, los que en definitiva conquistaron económicamente la pampa. Como contrapartida, cuando los terratenientes tomaban la decisión de volver a la cría de vacunos u ovinos, estos abnegados agricultores eran conminados a abandonar los campos y poblados.

El inmigrante cultivaba trigo y sembraba alfalfa para el ganado de raza, pero por cada agricultor extranjero que roturaba la tierra, otros diez se ganaban la vida trabajando en los centros urbanos. Éste parecía ser su inexorable destino, dado que en las actividades rurales sólo se los consideraba trabajadores temporarios.

Se modifica la vieja geografía colonial

Muchos historiadores sostienen que para evaluar el avance colonizador habría que dividir a la provincia en seis grandes regiones, a saber: central-norte, sur, centro sur, extremo sur, norte y costera.

La zona central-norte (comprende los departamentos Las Colonias, Castellanos y San Cristóbal) fue la que lideró desde un principio el proceso colonizador provincial. Con la fundación de Esperanza, San Carlos y San Jerónimo comenzó a partir de la segunda mitad de la década del '50 la colonización agrícola, y con excepción del período 1870-1874, la zona mantuvo hasta 1895 su liderazgo productivo sobre los demás lugares. El primer departamento colonizado fue Las Colonias, en tanto la ocupación de tierras en Castellanos comenzó a principios de la década del '70 y estuvo impulsada por colonos provenientes de los primeros asentamientos. Estos movimientos continuarían hasta 1890, período en que culminó la ocupación de los suelos de ambas jurisdicciones.

Entre 1890 y 1895 se produjo un desplazamiento de los asentamientos en dirección noroeste, hacia el departamento San Cristóbal. En éste, durante el mencionado período fueron repartidas cerca de 460.000 hectáreas. A diferencia de lo experimentado en Las Colonias y Castellanos, las tierras de San Cristóbal demostraron no ser suficientemente aptas para la agricultura, por lo que en poco tiempo esta actividad fue sustituida por la ganadería.

La región del sur está constituida por los departamentos San Lorenzo, Caseros, Belgrano y Rosario. En la zona, el proceso de colonización comenzó alrededor de 1870, período en que se construyó el ferrocarril Rosario-Córdoba. La región rápidamente se convirtió en la segunda en importancia de la provincia. Hacia 1895 la gran mayoría de sus tierras estaban destinadas al cultivo, aunque persistían algunas grandes estancias dedicadas a la cría de vacunos y lanares.

La zona centro-sur, integrada por los departamentos San Jerónimo, Iriondo y San Martín, fue poblada por colonos provenientes de las regiones centro-norte y sur, con excepción de los distritos costeros de San Jerónimo que ya habían sido habitados desde la época de la dominación colonial. Habría que señalar que este departamento, que proveía de legumbres y hortalizas a las ciudades de Santa Fe y Rosario, fue el menos influenciado por la experiencia colonizadora, en tanto que en la localidad de Coronda persistían grandes estancias con tierras aptas para la cría de ovejas.

El extremo sur de la provincia, formado por los departamentos Constitución y General López, fue la última zona en ser colonizada y sólo hacia fines de la década del '80 el proceso de asentamiento alcanzó significación.

Hubo diferencias entre ambos desarrollos; mientras General López tenía una buena parte de su territorio ocupado por los habitantes originarios, en Constitución, departamento contiguo a los distritos del nordeste bonaerense, las tierras fueron invadidas desde mediados de siglo por maja-

das de ovejas provenientes de la provincia vecina. A diferencia de lo que sucedía en este departamento, en General López la ganadería se desarrolló en combinación con la agricultura, ya que luego de la derrota de los nativos, muchos propietarios dedicaron sus campos al cultivo de cereales dando lugar a la aparición de los "cultivos combinados", forma de producción que requería la fuerza de trabajo de una gran masa de arrendatarios.

En la región norte, salvo algunos pocos campos de los departamentos San Justo y la Capital (ambos vecinos a los de la zona central-norte), la mayoría de las colonias no se dedicaron a la agricultura. La actividad predominante fue la cría de ganado de baja calidad que estuvo acompañada de la explotación forestal en Vera y del cultivo de la caña de azúcar en Reconquista.

Los departamentos costeros de Garay y San Javier se especializaron en la cría de ganado, por lo menos a partir de la década del '80. En el período previo, en relación con la cantidad de hectáreas dedicadas a la agricultura, esta zona sólo era superada por la región centro-norte. Estos distritos vivieron su máximo esplendor económico en la época de la Guerra del Paraguay.

Colonia Esperanza, la primera experiencia

Aarón Castellanos fue el encargado de poner en práctica el nuevo modelo colonizador. Nacido en Salta, el empresario hizo fortuna trabajando en el famoso centro de producción de oro y plata ubicado en Pasco, principal reducto minero del Perú. Luego de varias gestiones fallidas ante los gobiernos de Buenos Aires y Santa Fe para realizar acuerdos en temas como inmigración y ferrocarriles (fue el primero en proponer la realización del trazado Rosario-Córdoba), en el año 1853 Castellanos lograba firmar con el gobierno de Santa Fe, encabezado por Domingo Crespo, el primer contrato de colonización.

Este convenio autorizaba al colonizador a introducir "*mil familias de labradores europeos*". El ingreso se haría en "*grupos de a doscientos cada uno*" y se establecía que cada contingente "*será destinado a formar una colonia*". Las treinta y tres hectáreas a entregar a cada familia "*para establecer cinco colonias*", serían escogidas por Castellanos "*en la margen derecha del Río Paraná y ambas márgenes del Río Salado*". A los cinco años, si no existieran deudas con el Fundador y con el estado provincial, los colonos podrían acceder a la propiedad de la tierra.

Por el trabajo y los gastos realizados –para seleccionar colonos contrató a la compañía agropecuaria francesa "Vanderest", a la alemana "Textor" y a la suiza "Berck y Herzog"– el gobierno de Santa Fe compensaría a Castellanos con 32 leguas cuadradas de tierra fiscal.

Además, el convenio autorizaba a Castellanos a realizar con los inmigrantes "*las convenciones que juzgare convenientes*". Según lo establecido en el contrato que firmó con los colonos, el contratista les cobraría los adelantos entregados –pasajes, maquinarias, ropa, etc.– más un interés anual

del 10%, asimismo los obligaba a entregar un tercio de todos los productos que cosechasen durante los primeros cinco años. Como se puede apreciar, para Castellanos se trataba de un ventajoso negocio.

Bajo estas condiciones, en marzo de 1856 se establecieron en Esperanza los primeros 200 colonos, en su inmensa mayoría, suizos.

La colonización privada, fundación de La Candelaria

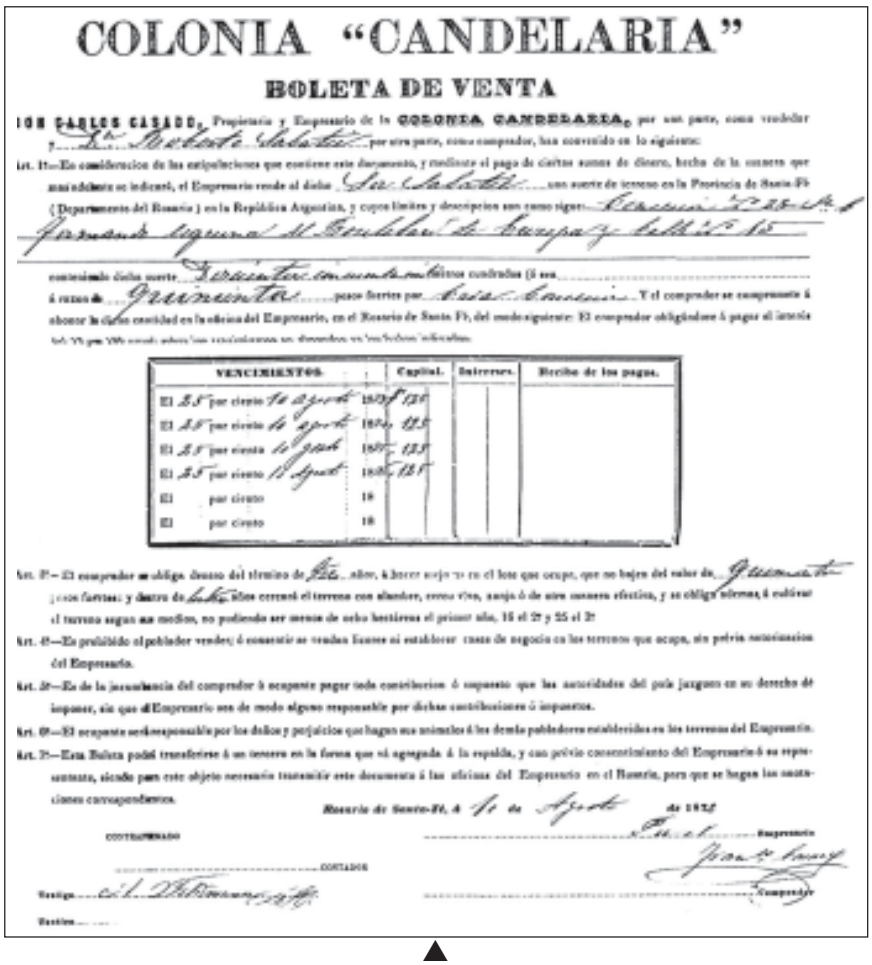
En este sistema la iniciativa correspondía a particulares que iban adquiriendo tierras –en su gran mayoría fiscales– a bajísimos precios. Con la llegada de la colonización y el posterior desarrollo de la agricultura los suelos se valorizaron rápidamente, lo que permitió a los empresarios obtener en pocos años entre cinco y diez veces lo que habían invertido. La magnitud de los negocios inmobiliarios era extraordinaria, con algunos casos emblemáticos, como el de Mariano Cabal que llegó a tener dos millones de hectáreas o el de Carlos Casado, otro gran adquirente y fraccionador de tierras no sólo de Santa Fe sino también del norte argentino y Paraguay. Tal vez el ejemplo de colonización de La Candelaria (hoy Casilda), que llevó adelante Carlos Casado, sea el que mejor grafique cómo funcionaba este fabuloso negocio de la colonización privada.

La trayectoria de Carlos Casado fue una de las más fulgurantes. Nacido en España en 1834, llegó a Rosario en 1851 y se empleó en la casa de importación y exportación de Chavarri. Pronto comenzaría a trabajar por su cuenta como importador, por lo que a fines de la década del '50 se transformaría en un próspero comerciante que colocaba sus productos dentro y fuera de la Confederación, particularmente en Paraná, Buenos Aires y Asunción.

Carlos Casado fue uno de los primeros en incursionar en la venta de cereales a Brasil y a varios mercados europeos. Como importador y exportador necesitó introducirse en la actividad bancaria rosarina fundando en 1864 el Banco Carlos Casado, que un par de años después fue vendido al Banco de Londres y Río de la Plata. Durante la década siguiente ocupó varias veces la presidencia del directorio del Banco Provincial de Santa Fe. Sus actividades fueron múltiples ya que también incursionó en la explotación industrial del quebracho en Paraguay (allí participó junto a empresarios y terratenientes brasileños y paraguayos del remate de las tierras públicas tras la Guerra de la Triple Alianza) o en emprendimientos ferroviarios como el que concretó en la década del '70 con la construcción del Ferrocarril Oeste que unía Rosario con La Candelaria.

En 1865 decidió ingresar al todavía incipiente negocio de la compra y venta de tierras, adquiriendo a bajo precio y mediante subasta, 10.000 hectáreas pertenecientes a Mariano Grandoli, ubicadas en la posta de Candelaria.

Fue así cómo, en 1871, Carlos Casado lanzó el proceso de colonización privada. El negocio fue organizado sobre la base de una unidad tipo de



COLONIA "CANDELARIA"

BOLETA DE VENTA

ION CARLOS CASADO, Propietario y Empresario de la COLONIA CANDELARIA, por una parte, como vendedor y Dn. Roberto Sabatier por otra parte, como comprador, han convenido en lo siguiente:

Art. 1º—En consideracion de las estipulaciones que contiene este documento, y mediante el pago de ciertas sumas de dinero, hecho de la manera que mas adelante se indicará, el Empresario vende al dicho Sr. Sabatier una suerte de terreno en la Provincia de Santa-Fé (Departamento del Rosario) en la República Argentina, y cuyos límites y descripcion son como sigue: Concesion Nº 28 Sº 1 Fernando Laguna al Boulevard de Campo y calle Nº 15

conteniendo dicha suerte Treinta y cinco mil metros cuadrados (ó sea ..... á razon de Quinientos pesos fuertes por cada concesion. Y el comprador se compromete á abonar la dicha cantidad en la oficina del Empresario, en el Rosario de Santa Fé, del modo siguiente: El comprador obligándose á pagar el interés del 7% por 100 anual sobre las cantidades no abonadas en los dichos vencimientos.

VENCIMIENTOS		Capital.	Intereses.	Recibo de los pagos.
El 25 por ciento 10 agosto	1873	$ 125		
El 25 por ciento 10 agosto	1874	125		
El 25 por ciento 10 agosto	1875	125		
El 25 por ciento 10 agosto	1876	125		
El por ciento	18			
El por ciento	18			

Art. 2º—El comprador se obliga dentro del término de Tres años, á hacer mejoras en el lote que ocupe, que no bajen del valor de Quinientos pesos fuertes; y dentro de Diez años cercará el terreno con alambre, cerco vivo, zanja ó de otra manera efectiva, y se obliga ademas, á cultivar el terreno segun sus medios, no pudiendo ser menos de ocho hectáreas el primer año, 16 el 2º y 25 el 3º

Art. 3º—Es prohibido al poblador vender, ó consentir se vendan licores ni establecer casas de negocio en los terrenos que ocupa, sin prévia autorizacion del Empresario.

Art. 4º—Es de la incumbencia del comprador ó ocupante pagar toda contribucion ó impuesto que las autoridades del país juzguen en su derecho de imponer, sin que el Empresario sea de modo alguno responsable por dichas contribuciones ó impuestos.

Art. 5º—El ocupante será responsable por los daños y perjuicios que hagan sus animales á los demás pobladores establecidos en los terrenos del Empresario.

Art. 6º—Esta Boleta podrá transferirse á un tercero en la forma que va agregada á la espalda, y con prévio consentimiento del Empresario ó su representante, siendo para este objeto necesario transmitir este documento á las oficinas del Empresario en el Rosario, para que se hagan las anotaciones correspondientes.

Rosario de Santa-Fé, á 10 de Agosto de 1873

CONTRAPRESADO ..... Empresario

..... CONTADOR

Testigo ..... Comprador

Testigo .....

Boleto de Venta de lotes al contado o en cuotas realizado por Carlos Casado en La Candelaria.

treinta y tres hectáreas, estableciéndose tres modalidades diferentes de acceso a la tierra: pago al contado, a plazo o arriendo. De las primeras 324 concesiones, el 14% se había pactado al contado, el 45% a plazo con financiamiento otorgado por el propio Casado, en tanto el 41% restante se formalizó mediante la modalidad del arriendo. Además, la empresa dispuso la instalación de un almacén para aprovisionar a los colonos, tanto en la esfera productiva como en el consumo directo, e impuso el monopolio por seis años del abastecimiento en toda el área.

Finalmente, y como parte del "programa", se instaló una granja modelo que fue utilizada como referente para conocer los posibles rindes del cereal en la zona, distribuyéndose árboles frutales, legumbres y otras especies arbóreas con el objetivo de diversificar el tipo de explotación e incentivar el régimen de lluvias.

Con estas medidas, el empresario logró que se multiplicara rápidamente el valor de la tierra. La posterior construcción del ramal ferroviario Casilda-Rosario –emprendimiento llevado adelante también por Casado– consolidó este proceso de revalorización de los suelos. Hay que tener en cuenta que en un principio la producción agropecuaria del lugar era llevada a Carcarañá y desde allí, a través del Ferrocarril Central Argentino, trasladada al puerto de Rosario.

A diferencia de cualquier colono, Casado disponía de una estructura que le permitía almacenar el cereal con el objetivo de esperar el momento justo para venderlo y además contaba con un transporte directo para el traslado del mismo al lugar de embarque. La forma en que fue concebido y desarrollado el proyecto le permitió al empresario obtener importantes ganancias en todo el circuito de producción, desde el aprovisionamiento a los colonos y la etapa productiva, hasta la colocación de la mercadería en el puerto.

Pero ¿cuál era el centro de este formidable negocio? Sin dudas, el valor de la tierra. En la primera etapa este valor se incrementó diez veces. Además, la propia modalidad de la concesión –el 86% de las unidades productivas fueron arrendadas o adquiridas a plazo– impidió a una gran parte de los colonos acceder definitivamente a la propiedad de los suelos. La mayoría había contraído importantes deudas financieras con el propio Casado, o con el "almacén", el monopolio proveedor impuesto por éste.

La conclusión de este proceso podría ser sintetizada de la siguiente manera: la fuerza de trabajo de los agricultores valorizaba las tierras, y éstas, debido al endeudamiento de los colonos, en su gran mayoría retornaban a manos del empresario que las volvía a poner a la venta.

Predominio de los inmigrantes italianos

La mayoría de los habitantes de las colonias –el pequeño productor agropecuario, el chacarero arrendatario, e inclusive el trabajador migratorio– provenían de distintas zonas superpobladas de Europa, especialmente de Lombardía y Piemonte, ubicadas en el norte italiano. Los inmigrantes habían cruzado en barcos con la esperanza de acumular capital para luego retornar a Italia, España, Suiza o Francia. En su tierra, en general trabajaban en pequeñas parcelas como granjeros o peones rurales, motivo por el cual conocían perfectamente la aparcería y estaban al tanto de los elevados arriendos.

Se trataba de trabajadores infatigables, gente humilde, pero por sobre todo temerosa de los terratenientes, de los ricos, de los políticos, de los educados y de la autoridad (policía y justicia). Muchos de ellos eran fervientes creyentes, como por ejemplo los yugoslavos, que rezaban en las chacras varias veces al día.

En un principio, la mayoría de los chacareros llegaron desde Suiza. Hacia 1870 sobre 10.000 inmigrantes de esa nacionalidad, 5.900 se habían asentado en zonas agrícolas. Comparadas con las de otras nacionalidades estas cifras eran muy altas. Por ejemplo, de 120.000 inmigrantes italianos,

▲ Familia de inmigrantes del norte italiano de 1910. De *Argentine Plains and Andine Glaciers*, por Walter Larden.

sólo 4.200 se habían establecido en el campo. En ese período residían en la campaña 1.900 franceses, 1.500 alemanes, 500 ingleses y sólo 200 españoles.

Los italianos, sin embargo, pasaron rápidamente a predominar en materia de mano de obra agrícola. La primera gran colonia con preponderancia de esa nacionalidad fue Tortugas, fundada en 1871 por la "Compañía Central Argentina de Tierras" y habitada principalmente por piamonteses y lombardos.

Si bien no existen estadísticas que indiquen cuántos italianos que ingresaron a Argentina eran agricultores, se podría conjeturar que una gran cantidad de los mismos tenían antecedentes agrícolas, ya que provenían mayoritariamente de Piemonte, Lombardía, Venecia o Liguria. Recién a principios del siglo XX comenzaría a registrarse un mayoritario ingreso al país de inmigrantes del deprimido sur de Italia.

Pero como ya ha sido analizado, la inmensa mayoría de los extranjeros finalmente optaban por las tentadoras ofertas que existían en las florecientes ciudades costeras. A pesar de su pasado de agricultor, al no poder acceder a la propiedad de la tierra, la mayoría retornaba a las ciudades donde a partir de la década del '80 comenzaban a multiplicarse los conventillos, atestados de inmigrantes.

Ensinck sostuvo que algunos barrios del Rosario de principios del siglo XX tenían el sello de los inmigrantes que lo habitaban:

> *"...Sunchales. Variados son los motivos que presentan a este próspero*

barrio de Rosario (...) puede confundírsele con cierta parte de los arrabales de Nápoles..."

(Citado por Ensinck Oscar Luis, *Historia económica de la provincia de Santa Fe*, Servicio de Publicaciones de la UNR, Rosario, 1985)

Los extranjeros que aceptaron el duro desafío de trabajar el campo se radicaron en las primeras colonias donde lograron una especie de unidad lingüística o étnica. Las dimensiones poblacionales de cada asentamiento iban de las 20 a las 200 familias, y en algunos casos como el de Esperanza o Casilda, éstos rápidamente se convirtieron en la base de importantes ciudades.

En general, las Compañías o los Fundadores proporcionaban a los habitantes tiendas de ramos generales y les alquilaban trilladoras. También se edificaba una escuela y una iglesia, cuyos gastos de construcción y mantenimiento eran afrontados por los colonos.

Sin embargo, dado el hecho de que la inmensa mayoría de las colonias se habían conformado como emprendimientos comerciales, se prestaba muy poca atención a los proyectos que no generasen beneficios financieros inmediatos, por tanto los asentamientos tendían a convertirse en un conjunto de granjas individuales dispersas en varios kilómetros cuadrados.

La agricultura extensiva condicionaba la vida en las chacras

Los terratenientes, principalmente a partir de 1890, se lanzaron a la búsqueda de fuerza de trabajo. El arrendatario se iniciaba como mediero, ya que recibía del propietario semillas e implementos de labranza cediendo a cambio la mitad de su cosecha. El mediero era la capa inferior de los arrendatarios y su contrato con el terrateniente se limitaba al cultivo de determinados lotes, para luego pasar a otros. El terrateniente se hacía cargo de los riesgos, en tanto el mediero proporcionaba la mano de obra y si las cosechas eran buenas durante algunos años, podía acceder a la categoría de arrendatario. A medida que se expandía el cultivo de trigo, el número de medieros comenzaba a declinar.

El arrendatario era un capitalista rural, dado que además de su trabajo había efectuado inversiones personales en equipos, caballos y bueyes. En algunos casos se trataba de personas económicamente fuertes, que alquilaban grandes extensiones a terratenientes para luego subalquilar parcelas a otros arrendatarios.

La última alternativa abierta para el inmigrante fue la que tuvieron que escoger obligatoriamente miles y miles de italianos y españoles: convertirse en peones rurales o trabajadores golondrinas. Como ya se ha señalado, los objetivos de éstos se diferenciaban de los del colono con mentalidad de dueño o de los pequeños capitalistas arrendatarios. Los trabajadores golondrinas venían a estas tierras por un corto período de tiempo para ganar un poco de dinero. Llegaban sin sus familias y pernoctaban en galpones o

en los campos a la intemperie. Trabajaban cuatro o cinco meses en la cosecha de trigo y maíz para luego retornar a sus lugares de origen.

Empleados por arrendatarios, colonos y estancieros, los golondrinas se transformaron en la mano de obra que no disponía Argentina para recoger las sucesivas cosechas récord de trigo. Cuando se casaban o traían su familia de Europa dejaban de ser golondrinas.

De lo expuesto se desprende que los colonos y arrendatarios fueron los principales sectores que participaron en la formación social de la zona agrícola. Por lo general no vivían en los poblados y además, debido a las grandes distancias que separaban a las chacras entre sí, permanecían sumamente aislados.

El largo viaje al pueblo o la ciudad más próxima solamente se justificaba para acudir a acontecimientos extraordinarios como bodas, funerales o fiestas religiosas. Los niños, como eran necesarios para el trabajo, en general no concurrían a los lejanos establecimientos escolares. Los Clubes de Canto, los Círculos de Caza y las Sociedades de Ayuda Mutua estaban localizadas en las ciudades y pueblos importantes, pero no en el campo. Por tanto los colonos alemanes, suizos o italianos en general no visitaban estas instituciones dado que, en promedio, residían a varios kilómetros –entre 10 y 25– de la estación de ferrocarril más cercana. Así como el agricultor estaba alejado de los pueblos, éstos estaban muy distantes, cultural y socialmente, de las grandes ciudades como Rosario, Buenos Aires o Bahía Blanca.

El pueblo rural medio tenía una población promedio de 2.000 habitantes; su estructura estaba compuesta de una calle principal sin pavimentar, una plaza, unas pocas tiendas y algunas manzanas de casas de adobe, una iglesia, algunos galpones y una estación ferroviaria. El juez de paz junto al cura, el comisario, el jefe del ferrocarril y el maestro-director de la escuela, representaban la aristocracia y la autoridad del pueblo. No había médicos, por tanto el boticario –el actual farmacéutico– atendía las enfermedades graves.

Las viviendas, en general, eran extremadamente humildes; las prolijas y pulcras chacras de los agricultores suizos (casas de ladrillo, vaca lechera, aves, huertos, canteros de flores, etc.) eran la excepción. En la inmensa mayoría de los casos, el hogar de los colonos y los arrendatarios era un mísero refugio construido en apenas unos pocos días. Se medía en la tierra un rectángulo, se lo apisonaba, y en los extremos se colocaban postes. A partir de ese momento se construía el rancho de adobe y techo de paja. Medían alrededor de 15 metros cuadrados y se dividían en dos ambientes. Un alero al costado protegía al horno de adobe y al fogón que se usaba para cocinar.

El mobiliario era sencillo. Unas pocas sillas y bancos hechos manualmente servían de asiento y en el centro del salón principal se ubicaba una mesa. Los lechos estaban compuestos de cueros de oveja y ponchos apilados en los rincones. La vestimenta era usada hasta que quedaba hecha jirones, luego se la emparchaba para volver a ser usada, y las mejores prendas se reservaban para las fiestas, visitas al pueblo o eventualmente a otra chacra. Las instalaciones sanitarias eran desconocidas.

Los agricultores, especialmente los piamonteses y lombardos, durante la época de siembra y cosecha trabajaban en la roturación, la siembra, la siega o la trilla hasta dieciocho horas por día, para luego caer durante meses en un pronunciado descanso, ya que no prestaban atención al cuidado de sus chacras. En la mayoría de los casos, el contrato de arrendamiento les prohibía criar animales y además, tanto las sequías como el peligro de la langosta tampoco alentaban a desarrollar huertas. El único momento en que el agricultor comía carne era durante la época de cosecha, en tanto el vino tinto sólo aparecía en los acontecimientos sociales importantes.

Con la irrupción de la agricultura extensiva –consistía en una roturación superficial de amplias extensiones– el colono dejaba de lado las pocas comodidades disponibles, ya que en cada cosecha se veía obligado a incrementar la superficie sembrada y por tanto su trabajo. Inducido por el terrateniente, el agricultor se aferraba cada vez más a la producción extensiva de trigo negándose a diversificar los cultivos; **esto muchas veces le terminaba ocasionando grandes desastres económicos: las pérdidas ante el fracaso de una cosecha eran enormes con relación al escaso capital disponible**. Con frecuencia un invierno suave, imprevistas o excesivas heladas, prolongadas sequías, la llegada de langostas o abundantes lluvias en épocas de cosecha llevaban al agricultor a la ruina.

Al mismo tiempo, la agricultura extensiva de monocultivo convenía a los intereses pastoriles y terratenientes. En el nuevo escenario rural argentino la mano de obra de los inmigrantes era necesaria, ya sea para plantar alfalfa para el ganadero o para proporcionarle rentas al dueño de la tierra, mediante la siembra y cosecha de cereales. Como esta fuerza de trabajo era escasa en relación con las extensiones territoriales, el gran propietario alentaba la firma de contratos de arrendamiento negando a la vez al agricultor la posibilidad de criar animales (cerdos, vacas y ovejas), construir casas permanentes o desarrollar huertas. Por lo expuesto se puede observar que los intereses terratenientes fueron decisivos para consolidar un sistema de agricultura extensiva.

Concentración y subdivisión de tierras

El mapa catastral de la provincia de Santa Fe de 1872 (del ingeniero E.C. Chaperaurouge) muestra que una proporción significativa de las tierras privadas se hallaba concentrada en pocas manos.

En la zona norte un solo propietario, Mariano Cabal, poseía más de 2.000.000 de hectáreas; en la región central, si bien debido a la presencia de algunas colonias agrícolas se registraba un panorama más diversificado, aparecían grandes propiedades como la de Armstrong, Lafone, Quintana, Zubelzú o Aldao, ubicadas en la frontera oeste; y en la zona sur Armstrong, Alvear y los hermanos Sotomayor poseían 555.000 hectáreas, lo que indicaba que menos del 1% del total de los propietarios (367) poseía el 40% del total de tierras (1.147.000 hectáreas) centralizadas en manos privadas.

Esta fuerte concentración asombraba a los europeos. Por ejemplo en 1876, el cónsul italiano informaba con sorpresa a su gobierno, que 12 propietarios poseían 900.000 hectáreas. Este cálculo no contemplaba los territorios de Cabal en el norte y Diego de Alvear en el sur.

En los dos extremos provinciales (norte y sur) tanto Cabal como Alvear, tal vez hayan sido en esa época, los terratenientes más influyentes no sólo en el ámbito económico, sino también en el político. Ambos integraban las filas del conservadorismo autonomista.

Mariano Cabal residía en la ciudad de Santa Fe. Fue uno de los más activos empresarios rurales de las décadas del '60 y del '70, desempeñándose como gobernador de la Provincia en el período 1868-1871. Nacido en Uruguay, era hijo de padres argentinos. Se había iniciado como comerciante en ese país, actividad que continuó en la provincia de Santa Fe, donde adquirió varias embarcaciones a vapor que le permitieron transformarse en uno de los primeros exportadores de cereales. Fue, sin dudas, el principal proveedor de los ejércitos aliados durante el conflicto con Paraguay. Esta guerra impulsada por los ingleses, guerra en la que el pueblo paraguayo enfrentó heroicamente a la Triple Alianza (Brasil, Argentina y Uruguay), le permitió a los terratenientes y comerciantes santafesinos realizar grandes negocios e inclusive participar en el posterior reparto de la tierra pública de ese país. Éste fue uno de los grandes objetivos de las naciones agresoras dado que durante el gobierno del doctor Francia, el estado paraguayo no sólo mantuvo la propiedad de la tierra, sino que la puso a disposición de las masas campesinas para ser trabajadas.

En 1866, Cabal, que ofrecía financiar la campaña contra los pueblos originarios a cambio de acceder a la propiedad de la tierra fiscal a un precio mínimo, conseguía que su propuesta fuera aceptada por las autoridades de la Provincia. Con la colonización del Chaco Santafesino lograría una concesión de 2.000.000 de hectáreas en retribución a la campaña que realizó para erradicar a los nativos. Como veremos más adelante, a pesar de fundar tres colonias, sus actividades rurales no tuvieron un desenlace acorde con el enorme poder adquirido en un principio.

Por su parte, Diego de Alvear, hijo de Carlos de Alvear, quien ya en la década del '20 bajo la Ley de Enfiteusis del gobierno de Rivadavia había accedido a campos en Buenos Aires, tal vez haya sido durante esa época el más importante propietario de tierras de la República Argentina. En la provincia de Buenos Aires, Diego de Alvear poseía campos próximos al límite con Santa Fe, los que habían sido adquiridos en la década del '50 y del '60. Es probable que desde allí hayan salido las ovejas que luego poblaron sus tierras santafesinas.

Hacia 1874, las posesiones territoriales de Alvear sumaban 300.000 hectáreas ubicadas en el entonces departamento Rosario (luego subdividido en Rosario, Constitución y General López). El grueso de esas tierras (270.000 hectáreas) estaba ubicado en el extremo sur y eran lindantes con sus campos bonaerenses. Las había adquirido al gobierno provincial en el

año 1868 a un precio tan bajo, que se asemejaba más a una concesión que a una compra. En sus posesiones fundó Teodelina (10.800 hectáreas), la primera colonia del extremo sur provincial. Alvear mantuvo los campos hasta su muerte, acaecida en la década del '80; luego las tierras pasaron a manos de sus cuatro herederos, quienes en los años subsiguientes vendieron partes importantes de las mismas.

A principios de la década del '80, Diego de Alvear resultó electo senador nacional por la provincia de Buenos Aires. También fue el principal organizador de la campaña que llevó a Roca a la presidencia de la Nación. Junto a Manuel Quintana (luego presidente de la República) y Bernardo de Irigoyen (varias veces ministro y gobernador de Buenos Aires) fueron los más importantes terratenientes bonaerenses que extendieron sus dominios a la provincia de Santa Fe.

El mapa catastral de 1883 revelaba la existencia de cuatro grandes zonas provinciales: 1) la región del norte, donde predominaban las grandes propiedades; 2) la región del centro y el extremo norte de la región sur, que mostraban un gran avance de las colonias agrícolas que pasaron a ocupar territorio donde hasta poco tiempo atrás reinaba el latifundio; 3) el sur provincial, donde seguían predominando las grandes estancias, aunque de menor extensión a las existentes en el norte; y 4) la zona este costera, poblada desde la época colonial, donde predominaban las pequeñas y medianas estancias que iban aumentando su extensión a medida que se aproximaban a la región norte.

Como veremos más adelante, entre 1872 y 1883 continuó el reparto de la tierra pública. En el norte, la casa bancaria londinense "Murrieta y Cía.", obtuvo la propiedad de 1.400.000 hectáreas; y en el sur 1.000.000 pasaron a manos de terratenientes bonaerenses (el valor de la hectárea pastoril en Santa Fe era cuatro veces menor que en Buenos Aires) como Alvear, Cernadas, Rufino, Casey, Randel y Villanueva.

Simultáneamente, en ese período muchas de las grandes propiedades comenzaron a subdividirse, siendo reemplazadas por medianas estancias lanares y colonias agrícolas. Éstas, en la región central, ocuparon parte de los latifundios de Lafone, Quintana, Zubelzú, Aldao y Verdugo. En el sur se desprendieron de sus campos, o de fracciones de los mismos, los hermanos Sotomayor, Chavarri, Ibarlucea, Lanús, Alvear y Carlos Casado. Por ejemplo en el año 1882, Casey vendía a criadores de ovejas de origen irlandés más de 200.000 hectáreas recientemente adquiridas en la zona de Venado Tuerto. También en el norte los grandes latifundios comenzaron un proceso de subdivisión o cambio de propiedad.

En 1866, Cabal, en retribución a la campaña que encabezó para expulsar a los nativos, había recibido 2.000.000 de hectáreas. La "concesión" o "compra" fue acordada a un precio irrisorio y se concretó a través de un crédito obtenido por el empresario en el Banco de Londres y Río de la Plata.

Cabal, quien fue uno de los grandes proveedores de los ejércitos aliados durante el conflicto con el Paraguay, debido a la crisis económica desatada tras la finalización de la guerra, tuvo que ceder una parte significativa de sus propiedades al Banco. Su imperio se desmoronó en 1876, cuando debió desprenderse de casi la totalidad de sus tierras para saldar sus deudas. Muchos atribuyeron el desenlace a la crisis financiera de ese año.

Este proceso de subdivisión tomó mayor impulso entre 1883 y 1895, período en el que se multiplicaron las colonias agrícolas tanto en el área central como en la parte norte de la zona sur. En ese período también se verificó un avance de la subdivisión de tierras en la zona sur de Santa Fe, donde los terratenientes ganaderos se retiraron cada vez más hacia los límites australes de la provincia; de todos modos, y a pesar del avance de la agricultura, las estancias laneras persistieron y en varias zonas continuaron dominando el panorama.

En líneas generales, hacia 1895 la campaña santafesina mostraba una geografía totalmente distinta a la exhibida en el referido mapa catastral de 1872. Las colonias agrícolas ocupaban zonas antes dedicadas a la ganadería, y las grandes estancias tenían en general menos hectáreas que en 1872.

La experiencia agrícola tuvo procesos diferentes en el centro y en el sur provincial. Mientras que en el centro el cultivo de cereales se realizó a través de colonias formadas principalmente por agricultores propietarios, en el sur la característica dominante fue, por el contrario, la presencia de empresas mixtas que combinaban agricultura y ganadería. Durante ese período, en esta zona el cultivo de cereales estuvo a cargo de chacareros arrendatarios provenientes en su gran mayoría de distintas zonas de Europa, fundamentalmente italianos, españoles y yugoslavos.

Los principales colonizadores

Según Ezequiel Gallo (*La pampa gringa*, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1983), de las 366 colonias fundadas entre 1856 y 1895, el 22% fue realizado por comerciantes, el 20,8% por compañías o sociedades, el 16,3% por hacendados, el 15,5% por miembros de colonias agrícolas, el 4,7% por oficiales del ejército y el 4,7% por el gobierno.

En este trabajo también se señala que la participación estatal y de las grandes compañías fue importante ya que alcanzó al 25,5% del total, pero el sector que tuvo un rol preponderante en las colonizaciones fue el privado. El 74,5% de las colonias fueron proyectos impulsados por empresarios particulares.

Entre éstos, además de los casos ya analizados de Cabal y Diego de Alvear, habría que agregar otros nombres que participaron activamente en la fundación de la mayoría de las 366 colonias que dieron el puntapié inicial hacia la conformación del actual diseño provincial. Nos referimos a hombres que provenían de diferentes sectores y actividades.

Por ejemplo, Rufino era descendiente de una humilde familia puntana. Fue a cursar estudios universitarios a Buenos Aires y allí se relacionó con un miembro de la familia Pereyra Iraola e ingresó a trabajar como mayordomo en una de sus estancias. Posteriormente con los ahorros –aunque muchos sostienen que fue un testaferro– compró una importante cantidad de tierras en el sur provincial, las que luego colonizó.

Los santafesinos Zavalla, Cullen, Iriondo, Iturraspe (gobernador provincial entre 1898-1902 y fundador de 15 colonias y 8 pueblos), a diferencia de los terratenientes bonaerenses como Alvear o Cernadas, que estaban concentrados en la cría de ovejas, dedicaron sus tierras al ganado vacuno de mala calidad y a la colonización. Hacia 1880 todavía permanecían influenciados por teorías ya referidas como la de Burmesteir, que sostenían que las mejores tierras para la agricultura estaban ubicadas en la región nordeste.

Otro origen tenía Casey, vinculado a capitales británicos con fuertes inversiones en Sierra de la Ventana, quien en 1880 compró 270.000 hectáreas en el departamento General López.

Como ya se ha señalado, estas tierras fueron vendidas a pastores irlandeses que transformaron a Venado Tuerto en la primera colonia ovina del sur provincial. Casey, luego de haber emprendido nuevos negocios en Córdoba y Buenos Aires, al igual que Cabal acabó sus días en la ruina.

La comunidad mercantil rosarina también compartía sus negocios comerciales con la actividad rural. Una parte importante de los miembros fundadores de la Bolsa de Comercio de esta ciudad y de los principales empresarios del comercio cerealero, también intervinieron en el proceso colonizador. Zubelzú y Sotomayor se dedicaron a la compra-venta de tierras; Casado y Godeken a la colonización agrícola y Pinasco, Castagnino, Chiesa (inmigrantes) o los hermanos Ledesma (una familia tucumana) a la cría de ovejas o vacunos.

Comerciantes de Buenos Aires como Otto Bunge (exportador), Ernesto Tornsquit (dueño de enormes extensiones territoriales en el norte provincial, banquero e industrial propietario de una importante refinería de Rosario), Lafone, Duguid y Armstrong (todos inmigrantes) también participaron de este proceso.

Muchos de los imperios que se construyeron en ese período se desmoronaron en pocos años. El caso de Thomas Armstrong, director de la línea férrea Central Argentino, fue tal vez uno de los más emblemáticos. El mapa catastral de 1874 mostraba que poseía 140.000 hectáreas en el entonces departamento Rosario y 90.000 en la jurisdicción de San Jerónimo. Armstrong murió en 1877 dejando una fortuna en tierras calculada en un millón de libras esterlinas, que pasaron a poder de sus herederas Isabel A. de Dose y Clara A. de Elortondo que fundaron cinco colonias y vendieron parte de los campos a otros empresarios colonizadores como Pascual Chabás, quien se inició en el comercio en la ciudad de Casilda transformándose luego en un activo coloni-

zador y ganadero. Según datos del Censo Agropecuario de 1895, poco quedaba del imperio Armstrong. Su hija Isabel solo retenía la estancia de Melincué, el primer establecimiento comprado por don Thomas.

Pascual Chabás llegó a la ciudad de Rosario en 1867. En 1879 se radicó en Casilda para incursionar en el comercio mayorista, lo que le permitió entablar una amistad con Carlos Casado. Ingresó al negocio inmobiliario adquiriendo tierras a los descendientes de Armstrong en distintos lugares del sur provincial. En 1883 logró la posesión de las 3.775 hectáreas que conformaban Colonia Pampa (la actual localidad de Chabás); las mismas fueron adquiridas a su amigo Carlos Casado y a los señores César Benedetti, Aquiles Vicario y Francisco Fontana.

Algunos empresarios rurales que provenían de las propias colonias, como Guillermo Lehmann, el colonizador más importante de la provincia, tuvieron un papel fundamental en la estructura construida a partir del poblamiento provincial. Nacido en 1840 en Watherthur, Suiza, emigró hacia Argentina en 1862 y luego de un breve paso por Buenos Aires se instaló en Esperanza. Allí abrió un comercio y producto del "boom" económico producido por la Guerra del Paraguay, alcanzó rápidamente una sólida posición económica. En 1875 y 1876 había fundado Pilar y Nueva Torino; y entre 1881 y 1885 surgieron de su empuje nueve colonias más, entre ellas Rafaela, que rápidamente se transformó una de las ciudades más pujantes de la provincia. El final de la carrera empresaria y la vida de Lehmann fue dramático. El fracaso de su proyecto de establecer una gran destilería en Esperanza, sumado a problemas de salud lo empujaron en 1886 al suicidio. La quiebra de sus negocios provocó asombro en la región y hasta el día de hoy no se ha podido explicar la caída de empresas que gozaban de prestigio, poder y crédito ilimitado.

Algunos profesionales también participaron del proceso colonizador. Tal fue el caso de J. Bustinza, un agrimensor rosarino que fundó seis colonias agrícolas con una extensión de cerca de 100.000 hectáreas. Bustinza mensuró las tierras que el estado provincial había otorgado a la Compañía del Ferrocarril Central Argentino. Su fortuna fue amasada en la actividad especulativa.

En un complejo proceso del que participaron todo tipo de especuladores, empresas y particulares, terratenientes y comerciantes locales y bonaerenses, militares, banqueros, profesionales y hasta algunos colonos emprendedores, desde la segunda mitad del siglo XIX se fue modificando la geografía provincial a partir de la entrega dolosa de la tierra pública.

Escasa asistencia de los bancos

Las dos primeras instituciones financieras santafesinas facultadas para emitir billetes fueron el Banco Mauá y Cía. –que comenzó a operar en 1858–, y el Banco Carlos Casado, que inició sus actividades en 1864. El primero era propiedad del financista brasileño Ireneo Evangelista de Souza (el

Barón de Mauá) y el segundo de Carlos Casado de Alisal. El Banco Mauá finalizó sus actividades (los clientes fueron invitados a canjear sus billetes en metálico) el último día de 1872, en tanto el Banco Casado fue adquirido a fines de 1865 por el Banco de Londres y Río de la Plata.

En 1874 se fundaba el Banco Provincial de Santa Fe. Con la promulgación de la Ley del 22 de junio de 1875, el Banco Provincial y el Banco Nacional pasaron a monopolizar la emisión de billetes, en tanto las demás instituciones fueron conminadas a "*retirar sus billetes en el transcurso de un año*".

El diario *La Capital* criticaba la libertad de emisión ya que:

> "*...no es otra cosa que la libertad de estafar (...) sabemos bien cómo se garanten las emisiones. Algunos lo han hecho con bolsas de arena y valores falsos en la cartera...*"
>
> (Diario *La Capital*, Rosario, julio de 1875)

Hacia 1895, la cantidad de créditos bancarios otorgados a los colonos de la provincia –tanto por la banca pública como por la privada– era insuficiente. La principal fuente de financiamiento en la campaña eran los comerciantes locales, que adelantaban a los chacareros el dinero que les habían prestado las casas exportadoras.

Durante la década del '70 y hasta 1885 solamente dos bancos operaban en la provincia: el Banco Provincial (institución semioficial fundada en 1874) y la sucursal Rosario del Banco de Londres y Río de la Plata, que había abierto sus puertas en el año 1866.

Si bien no se dispone de información precisa acerca de la asistencia que proporcionaba el Banco Provincial a los agricultores, según datos brindados por los gobernadores Gálvez y Cafferata hacia fines de la década del '80 (durante los años 1887, 1888, y 1889), la institución destinaba una parte relativamente importante del crédito a las colonias. Mientras tanto, no sucedía lo mismo con el Banco de Londres, que hasta 1885 había preferido no intervenir en operaciones rurales a las que consideraba de alto riesgo. Refiriéndose a los adelantos otorgados por la sucursal Rosario de esta institución a Mariano Cabal (recordemos que al no poder afrontar su devolución el empresario pagó con cientos de miles de hectáreas), la casa central del Banco de Londres había sentenciado:

> "*...pero ahí está (por el dinero) enterrado en varias leguas de campos y la experiencia nos ha demostrado que no es la mejor forma en que podemos emplear nuestro dinero...*"
>
> (Gallo, Ezequiel, *La pampa gringa*, Editorial Sudamericana, Buenos Aires,1983)

Resulta evidente que la reticencia era aún mayor cuando se trataba de auxiliar a la actividad agrícola. Esta institución se negaba a otorgar créditos a los agricultores, e inclusive, importantes agentes de granos como "Wildermuth

& Co." de Rosario o el comerciante Luis Soldini de San José de la Esquina, tropezaron con la negativa del banco a prestarles dinero, aduciendo que la actividad era riesgosa. Demás está aclarar que tanto los arrendatarios como los medieros tenían vedado el acceso a la entidad financiera inglesa.

No fue sino hacia fines de la década del '80 que el Banco de Londres comenzó a financiar las cosechas. Los préstamos eran otorgados a las casas exportadoras que entregaban pagarés firmados por los colonos y avalados por ellas mismas. En ese período algunos terratenientes importantes comenzaron a tomar créditos sin la intervención de las mencionadas casas exportadoras.

Hasta la aparición, en 1886, de algunas nuevas instituciones financieras como el caso del Banco de Crédito Territorial y Agrícola (BCTyA), que fundó diez colonias agrícolas y prestó dinero a empresarios de colonización, y el Banco Hipotecario, entidad oficial que abrió una sucursal en Rosario ese mismo año, los intereses que cobraba el Banco de Londres oscilaban entre el 12 y el 18% anual. En ese mismo período, los terratenientes bonaerenses que participaron en el proceso colonizador santafesino y los grandes comerciantes locales conseguían préstamos en Buenos Aires a un 7% anual.

En todo el proceso de colonización, aunque con limitaciones, ya que tanto el BCTyA como el Banco Hipotecario sólo destinaron a la agricultura el 23% del crédito y la asistencia del Banco Provincial probablemente rondaría el 35% (no hay datos oficiales), **la banca pública fue la única que brindó apoyo crediticio a los nuevos productores.**

GENOCIDIO, ROBO Y REBELIONES

Las primeras luchas de los inmigrantes

Hasta 1893 se desarrollaron en la provincia una serie de protestas de distinta magnitud que fueron encabezadas por los inmigrantes. Las mismas tuvieron lugar en el centro-sur, en el sur y hasta en la zona costera aledaña al Río Paraná. Algunas, como la acaecida en 1877 en San Javier, alcanzaron tal magnitud que se transformaron en levantamientos armados contra el régimen constituido.

La primera de estas luchas tuvo lugar en Esperanza. Algunos historiadores sostienen que la enemistad entre Castellanos y los colonos provenía de la decisión del Fundador de esta colonia de irse a vivir a Rosario con una joven inmigrante suiza. Indudablemente esto no había caído nada bien entre los casi 1.500 pobladores de la primera colonia. Pero, sin dudas, fueron los contratos leoninos los que originaron el descontento de los agricultores, llevando al fracaso y la posterior anulación del acuerdo firmado entre Castellanos y el gobierno de Santa Fe. El Fundador impuso a los colonos condiciones que estipulaban que los mismos deberían reembolsar en uno, dos o tres años, con el 10% de interés, los adelantos que éste había hecho para la compra de pasaje, manutención durante la travesía y transporte al lugar destinado para la colonización. Además, los colonos se obligaban a partir con Castellanos los productos de su cosecha, en proporción de una parte para el último y dos partes para ellos, por el término de cinco años.

Con la llegada del invierno comenzaron las primeras protestas. Éstas motivaron la visita al país del funcionario del gobierno de Berna (Suiza), Jacob Sommer-Geiser, quien refiriéndose a Aarón Castellanos escribía:

> "*...Transparentó demasiado su tendencia a cobrar sus derechos sobre el tercio de la producción de la colonia, suscitando en todas partes el descontento y entre los colonos una diaria resistencia hacia su persona, que a veces llegaba hasta el agravio, de suerte que ya no consideró prudente aparecer por la colonia...*".
>
> (Citado por Oggier, P. Gabriel, S.V.D. y Jullier, Emilio, *Historia de San Jerónimo Norte*, Ed. Apis, Rosario, 1984)

A esta protesta contra Aarón Castellanos se la puede considerar como el primer conflicto de clase en el proceso agrario santafesino y un adelanto de lo que unos años después sucedería en Alcorta.

Finalmente, el 2 de julio de 1856 el gobierno nacional resolvió pagarle a Castellanos 110.000 pesos fuertes (550.000 francos) por los gastos hechos, apartándolo del proyecto de Colonia Esperanza que quedaría bajo su administración. Las autoridades también otorgaron algunas ventajas a los colonos, a saber: se obligaba a dar a cada familia en vez de dos, cuatro bueyes; en vez de uno, dos caballos; a perdonar el 10% de interés anual que debían pagar a Castellanos sobre el valor de sus pasajes y gastos hasta su llegada a Santa Fe; y a reducir del 33 al 25% la parte de las cosechas que por contrato debían ceder. Este último punto fue importante ya que el gobierno se comprometía a destinar el importe abonado a obras (puentes) y a fundar escuelas en la colonia.

Las luchas de los colonos continuaron, inclusive en el terreno político, por lo que el 4 mayo de 1861 se convocaba a los habitantes de Esperanza para que eligieran, de acuerdo a lo establecido en el contrato de colonización, a diez vecinos que debían organizar la Municipalidad.

Por su parte, Castellanos terminó radicándose en Rosario. Allí, en 1859, compró un muelle privado al que puso rápidamente en funcionamiento y en el que trabajó hasta su muerte. Entre 1861 y 1869 fue jefe político y presidente del Consejo Ejecutivo Municipal.

Luego de la experiencia de Esperanza, en el actual departamento Las Colonias se establecieron los asentamientos de San Jerónimo, San Carlos y La Colonia.

San Carlos nació de un convenio similar al firmado por Castellanos, entre la "Berck y Herzog" (recientemente radicada en el país) y el estado provincial. Al poco tiempo San Carlos se transformaría en la colonia más importante de la provincia, ya que en 1884 llegó a albergar a 4.800 habitantes. Al igual que en Esperanza, durante ese período se desarrollaron importantes luchas como la originada contra la expulsión del colono Kappeler que cosechó patatas "*sin dar el aviso obligatorio a la compañía suiza*", para pagarle a las familias que trabajaban con él. Le embargaron la cosecha, lo mandaron a prisión y luego lo expulsaron ante la protesta e indignación de los vecinos. O la importante lucha de 1863, durante la cual los colonos exigieron y lograron una rebaja en los intereses de la deuda contraída con la compañía "Berck y Herzog".

Cinco años después de la fundación de La Colonia, la empresa "Berck y Herzog" entraba en un proceso de liquidación y era sustituida por una nueva sociedad con acciones del mismo origen. La flamante compañía concretaba las fundaciones de Humbolt y Las Tunas.

A diferencia de lo sucedido en La Esperanza y San Carlos, en los lugares recientemente colonizados, la nueva empresa constituida subdividía y vendía parcelas a plazo con el interés del mercado. Como se puede apreciar, sobre la base de disponer de importantes extensiones de tierras

fiscales, la compañía extranjera lograba manejar un gigantesco negocio inmobiliario rural.

Asimismo, en la región sur de la provincia se producían algunas luchas importantes como la protagonizada en 1876 por la colectividad italiana de Cañada de Gómez, una de las colonias más prósperas de la provincia. Esta localidad contaba con 500 habitantes (300 en la colonia y 200 en el pueblo), en su mayoría de origen suizo e italiano. El juez de paz era el carnicero del lugar y un policía de la comisaría realizaba el reparto. Éste, un día embiste con su carro a un inmigrante italiano, luego le asesta un "planazo" para que se levante y posteriormente lo lleva detenido. Todo esto se realizó con el visto bueno del juez de paz.

La colectividad italiana reaccionó airadamente concentrándose en la plaza y exigiendo la remoción de Cirilo Peralta del cargo de juez de paz. También informaba de los sucesos al cónsul Petich en Rosario quien, a su vez, reclamaba enérgicamente ante las autoridades provinciales. Sin embargo, éstas respaldaron a Peralta, un caudillo del autonomismo conservador protegido de Pedro Correa, importante terrateniente y concuñado del gobernador.

El clima no era más tranquilo en la región costera del norte santafesino. En marzo de 1877, Patricio Cullen encabezó una revolución que culminó con una decena de muertos y un número importante de heridos y detenidos. De la misma participaron importantes contingentes de extranjeros de las colonias Cayastá, Francesa, San Javier, Santa Rosa, Helvecia y California.

Al comenzar la revuelta los insurrectos detuvieron al juez de paz de San Javier, quien ese mismo año afirmaba:

> *"...que uno de los principales jefes del movimiento era el inmigrante estadounidense Moore de la colonia de Alejandra..."*
>
> (Archivo de Gobierno, tomo 47, legajo 37, 1877, citado por Gallo, Ezequiel, *La pampa gringa*, Editorial Sudamericana, Buenos Aires,1983)

La protesta armada –producto de la crisis económica por la que atravesaban los colonos debido a los magros rindes de la cosecha y las incursiones de los nativos– no se extendió al resto de las colonias agrícolas.

La pueblada de Humboldt y los levantamientos de 1893

Un incidente ocurrido el 3 de febrero de 1893 entre un colono de Humboldt, que se rehusaba a pagar tributos, y el recaudador de impuestos, provocó la airada respuesta de los habitantes de la colonia. Ante el rumor que daba cuenta de que el gobierno se proponía enviar un contingente de soldados para calmar los exacerbados ánimos de los habitantes, entre 300 y 400 colonos armados se reunieron para defenderse. En Santa Clara, San Jerónimo, Josefina y Santa María alrededor de mil pobladores se prepararon para auxiliar a sus vecinos de Humboldt.

A los pocos días de haber comenzado los incidentes llegaron al lugar las tropas enviadas por la provincia, capitaneadas por el ministro de Gobierno Luciano Leiva, quien adoptó una actitud conciliadora para evitar los enfrentamientos. A pesar de que los dirigentes de la revuelta negaron que la misma tuviera fines políticos, los sucesos de Humboldt estuvieron ligados a la fundación de la Unión Agraria, entidad estrechamente ligada al Partido Radical, que por ese entonces protagonizaba un importante levantamiento provincial con epicentro en Rosario.

El núcleo central del movimiento agrario estaba ubicado en Humboldt y desde algunas colonias como San Carlos, Clucellas, Las Tunas y Guttly se enviaron contingentes armados en apoyo de los insurrectos. En localidades como Esperanza, Frank y Pujato se organizaron mitines de solidaridad con la lucha de los colonos.

Mientras esto sucedía en la región central, en distintas localidades del sur como Jesús María, Aldao, Ortiz y Correa también se realizaron actos de apoyo al levantamiento de Humboldt. De las protestas participaron principalmente inmigrantes descendientes de suizos alemanes y en menor medida de italianos.

La culminación, más o menos pacífica del levantamiento, no puso fin al clima de tensión existente. Hacia fines de marzo de 1893, miles de colonos solicitaban mediante nota la devolución del voto a los extranjeros en las elecciones municipales. Recordemos que las colonias agrícolas santafesinas fueron una de las primeras regiones del país, si no la primera, en la que funcionó un régimen municipal relativamente autónomo ejercido, de hecho, desde la misma fundación de Esperanza y San Carlos, e impuesto constitucionalmente con la sanción de la Carta Magna provincial de 1872. En el petitorio los agricultores también exigieron la derogación del impuesto a los cereales.

Ante la negativa de las autoridades a conceder lo solicitado, en la mayoría de las colonias como Humboldt, Esperanza, San Carlos, San Jerónimo, etc., los colonos se rehusaron a pagar impuestos y la protesta agrícola comenzó a desbordarse tomando el camino de la rebelión armada.

En julio, acompañando el levantamiento nacional de los radicales, grupos de colonos armados de la zona de Esperanza se apoderaron sin mayor resistencia de la Jefatura Política, el Juzgado de Paz y la Comisaría, procediendo a nombrar como autoridades a representantes del Partido Radical. Refieren las crónicas de la época que había 2.000 colonos armados, 500 de los cuales –la columna Las Colonias– marcharon y tomaron la ciudad de Santa Fe. El apellido de los jefes de la columna –Yost, Schneider, Spies Nussbam– denotaba la ascendencia suizo-alemana de los revolucionarios.

Estos levantamientos no se limitaron a la zona central sino que se extendieron, aunque con menor intensidad, a distintas localidades del sur como Casilda, Rafaela y San Lorenzo. Otros pueblos como Helvecia, Gálvez, Irigoyen y Santa Teresa fueron tomados por los rebeldes. En todos los casos la primera

medida que ejecutaron los revolucionarios fue destituir al juez de paz, que centralizaba prácticamente todo el poder político y administrativo del lugar.

El levantamiento de julio se extendió mucho más que el de Humboldt; no obstante, en el sur provincial los colonos volvieron a mantenerse al margen de la protesta; en esta zona fueron los peones rurales de las grandes estancias que respondiendo al llamamiento de los terratenientes autonomistas –que exacerbaban la contradicción entre gringos y criollos o "negros"– tomaron las armas para tratar de establecer un movimiento contrarrevolucionario. A pesar de haber reclutado un número cercano a los mil hombres, los jueces de paz de Melincué, Venado Tuerto, Carmen del Sauce, Elortondo y La Picaza desistieron de combatir contra los colonos armados, debido a la abrumadora superioridad numérica de estos últimos.

Con la participación de fuerzas nacionales, el levantamiento radical de Santa Fe fue derrotado (Ver ***"A partir de 1890 comienza un período revolucionario..."***). Para tranquilizar a los revolucionarios de las colonias, el interventor provincial, Bartolomero Llerena, confirmó en su cargo a una parte importante de las autoridades impuestas en los sucesos de julio. La agitación reinante y la actitud conciliadora del Interventor coadyuvaron para que los colonos se reorganizaran, y nuevamente solicitaran la restitución de los derechos municipales a los extranjeros y la supresión de los impuestos que gravaban la producción agrícola.

A pesar de la derrota, la rebeldía de los productores no finalizaba y, como veremos más adelante, resurgiría en los sucesos de septiembre de ese mismo año.

Un hecho acaecido en la colonia Carcarañá dio origen a una importante campaña xenófoba, impulsada por los autonomistas contra los agricultores extranjeros. Allí, un grupo de delincuentes mató a una familia de colonos inmigrantes. Algunos pobladores se organizaron, apresaron a los asesinos y luego de un juicio sumarísimo les aplicaron la ley Lynch. Según refiere la prensa de la época, este episodio no era novedoso ya que durante 1893 en la provincia se habrían ejecutado nueve linchamientos. Esta dudosa información aparecida en el diario *La Nación* dio lugar a una campaña de los autonomistas, quienes sostenían que el linchamiento era consecuencia de la tibia política ejecutada por la Intervención. De esta manera comenzaba una campaña hostil contra los extranjeros, fomentada por los autonomistas, para tratar de dividir el movimiento de protesta.

A diferencia de la revolución de julio, que tuvo el respaldo de distintos sectores sociales y políticos, el levantamiento de septiembre, si bien fue apoyado por los agricultores, no contó con la adhesión de otras capas de la sociedad que sostenían que la asonada respondía a los intereses sectoriales de la Unión Cívica Radical.

Esta situación creó las condiciones para que se desatara una dura represión que fue ejecutada por tropas nacionales provenientes de Entre Ríos y Buenos Aires. Derrotada la revolución, fueron detenidos los dirigen-

tes radicales, cerrados los diarios opositores y destituidas las autoridades impuestas por los colonos durante los sucesos de julio.

La participación de éstos, si bien no alcanzó los índices de julio, fue bastante importante. Por ejemplo, una columna de 250 hombres armados de Rafaela junto a grupos que provenían de Cañada de Gómez, Casilda y San José de la Esquina, se unieron a los revolucionarios que combatían en Rosario; en lo que se refiere a la ciudad de Santa Fe marcharon sobre ella contingentes de colonos de Esperanza, San Carlos, Humboldt y Helvecia. El grado de participación de la campaña fue importante y según informaba el diario *La Capital*:

> "*...de los 900 detenidos con motivo del levantamiento, las tres cuartas partes eran colonos...*"
>
> (*La Capital*, Rosario, 12 de octubre de 1893, citado por Ezequiel Gallo, *La pampa gringa*, Editorial Sudamericana, Buenos Aires,1983)

Por su parte, el semanario londinense *The Economist*, refiriéndose a la participación de los agricultores en los enfrentamientos entre los revolucionarios y las tropas federales acaecidos en Santa Fe y Rosario, sostenía:

> "*...Alrededor de mil colonos suizos que muy tontamente permitieron ser arrastrados al movimiento (...) la pasaron bastante mal durante su retirada...*"
>
> (*The Economist*, Londres, 11 de noviembre de 1893, citado por Ezequiel Gallo, *La pampa gringa*, Editorial Sudamericana, Buenos Aires,1983)

Luego de los combates volvía a instalarse la discusión acerca de si los inmigrantes participaron o no en la revuelta. Al respecto habría que decir que según Juan Álvarez cuando la columna procedente de Esperanza y localidades vecinas ingresó a Santa Fe lo hizo enarbolando una bandera suiza.

Como había sucedido durante los hechos de julio, los extranjeros de origen suizo tuvieron una activa participación en la revolución, y aunque en menor medida, también intervinieron alemanes, franceses e italianos.

Tras los sucesos de septiembre se desató una verdadera "caza de brujas" contra los colonos extranjeros. Los caudillos autonomistas, aprovechando los linchamientos de Carcarañá, atizaron las diferencias entre gringos y criollos con el objetivo de facilitar la represión. El gobernador Cafferata advertía que se corría el peligro de retornar a las épocas en que "*los odios entre criollos y gringos se levantaban como un antemural de la conquista*".

El 5 de octubre, el caudillo autonomista Arteaga entraba a San Agustín, destruía y saqueaba varias viviendas de colonos, deteniendo a diez extranjeros. Sucesos similares ocurrían en Crespo, Recreo, San Justo, Guadalupe, San Cristóbal y Nueva Lehmann. Producto de la violencia, en Constanza murió un colono y tres resultaron heridos; en Ceres, los terratenientes (caudillos autonomistas) mataron al hijo de un dirigente radical quien, en res-

puesta, juntó a varios partidarios y fusiló a ocho de los responsables; en Helvecia fue degollado "a lo chancho" el jefe revolucionario Von Will.

Desde las páginas del diario *La Capital* y desde muchísimos sectores se protestaba enérgicamente contra la persecución de los colonos reclamando la intervención federal para frenar el accionar de militares como Lacroix y de caudillos autonomistas como Larrechea y Arteaga. Producto de las presiones ejercidas desde distintas vertientes de la sociedad, en noviembre de 1893 cesaba completamente la represión a los gringos.

Pero recién bajo el gobierno de José B. Iturraspe (1898-1902) se reuniría la Convención Constituyente que procedería a modificar la Carta Magna aprobada por la Convención de 1890. Uno de los temas más debatidos fue el derecho de los extranjeros a intervenir en las elecciones municipales. Luego de muchas discusiones, los convencionales decidieron restituir este derecho –suspendido en 1890– a los inmigrantes. También durante la gestión de Iturraspe se decidió reducir el resistido impuesto a los cereales. De esta manera se satisfacían los dos reclamos enarbolados por los habitantes de las nuevas colonias durante los sucesos revolucionarios de 1893.

Algunas conclusiones del proceso de colonización

A diferencia de los ganaderos de la provincia de Buenos Aires, que rechazaron la ley provincial sobre Centros Agrícolas, los terratenientes santafesinos terminaron aceptando el proceso colonizador que había comenzado en zonas marginales en las que los precios de las tierras estaban totalmente depreciados. Los grandes propietarios visualizaron que con la llegada de la agricultura se produciría una revalorización ascendente de los suelos. Por tanto aprovechando las aceitadas relaciones políticas que disponían, se lanzaron a la búsqueda de tierras fiscales a través de contratos, concesiones, o simplemente adquiriendo enormes extensiones a precios irrisorios.

Tal como fuera señalado se podría aseverar que, en lo fundamental, este modelo de distribución –la colonización estatal o privada– de tierras, estuvo avalado y condicionado por los intereses terratenientes predominantes.

En algunas zonas de Santa Fe irrumpió un modelo distinto al impuesto nacionalmente entre 1820 y 1850. Y si bien en la provincia se sancionaron normas jurídicas que llevaron a pensar en condiciones de igualdad para acceder a la tenencia de la tierra, el privilegio o la desigualdad aparecieron rápidamente debido a la hegemonía terrateniente. Éstos se expresaron desde concesiones "honoríficas" otorgadas a "prohombres" como Castellanos y Mariano Cabal, hasta las cesiones que se hicieron a empresas extranjeras de colonización como la suiza "Berck y Herzog" o la compañía ferroviaria "Central Argentino". Asimismo, la venta a precios irrisorios de enormes extensiones a terratenientes bonaerenses como Diego de Alvear o Cernadas llevó a que el latifundio ganadero se afianzara en la mayoría del territorio provincial.

Como contrapartida, los agricultores de la región centro-sur de Santa Fe recibían pequeñas parcelas, lo que fue un factor determinante para que la colonización minifundista quedara reducida a áreas –en algunos casos marginales– de la zona pampeana y de una parte de la región costera.

Indudablemente, el proceso de colonización santafesino poco y nada tuvo que ver con el que se dio en Estados Unidos después de la guerra civil.

Según lo afirmado por Efimov y Freiberg:

> *"...La victoria del Norte y del Oeste fue el triunfo de ese curso de desarrollo del capitalismo en la economía agrícola, que se denomina el "camino americano". La significación fundamental de la guerra civil estriba en la abolición del sistema esclavista y en la solución revolucionaria del sistema agrario. Las tierras del Oeste fueron arrebatadas a los grandes hacendados y puesta en manos de los agricultores para su colonización. El "camino americano" del desarrollo del capitalismo en la agricultura es por consiguiente un camino revolucionario en el que la economía del agricultor libre barre con los latifundios de esclavos y siervos..."*
>
> (Efimov, A. y Freiberg, N., *Historia de la época del capitalismo industrial*, Ed. Problemas, Buenos Aires, 1941)

Ni en Argentina, ni en Santa Fe se impuso este camino. No hubo "asentamientos libres" al estilo norteamericano y se podría decir como sostenía Nicasio Oroño:

> *"...que la mayoría de nuestros inmigrantes fueron engañados y tratados como siervos. Idéntica suerte correría la peonada de las estancias, que cuando querían salir de la condición de esclavos eran perseguidos y metidos a la fuerza en los fortines..."*
>
> (Academia Nacional de la Historia, *Nicasio Oroño, Síntesis biográfica. Primera parte. 1852-1864*, en *Investigaciones y Ensayos*, Buenos Aires. 1852)

Sin bien la colonización permitió que una parte de los inmigrantes pasara a disponer del título de propiedad de las parcelas, habría que subrayar que accedieron a través de contratos leoninos –muchos de ellos no los pudieron cumplir y se mudaron a otros lugares– impuestos por los terratenientes locales o las compañías extranjeras.

En Santa Fe, a pesar de que la cesión de tierras se hizo con el objetivo de colonizar, el método adoptado de otorgar enormes cantidades a empresas o particulares llevó a que se generase un gigantesco negocio inmobiliario rural, montado sobre la base de la especulación. **Los beneficiarios de los emprendimientos distribuían entre los inmigrantes una pequeña fracción de lo recibido. Éstos desarrollaban la agricultura y se conformaban los pueblos o colonias. De esta manera, los responsables de las colonizaciones lograban que se valorizaran enormemente las grandes extensiones de tierra que les quedaban.**

Recordemos que la Ley de Tierras de Nicasio Oroño determinaba que a cada cien familias de inmigrantes se les entregarían dos leguas de tierras fiscales; y que en el caso de la primera colonización, a Aarón Castellanos el estado santafesino le concedió treinta y dos leguas por la gestión hecha en Europa para atraer inmigrantes.

A pesar de semejante asimetría, este período fue uno de los más ricos en el desarrollo de elementos que hubieran podido ser la base para el desarrollo de un capitalismo autónomo, y aunque limitado por una concepción reformista liberal, Nicasio Oroño trabajó en este sentido.

Por otro lado habría que destacar que tampoco se daba ninguna posibilidad de acceso a la tierra a los nativos, ni siquiera en las abusivas condiciones imperantes. Éstos seguían siendo la fuerza de trabajo de las grandes estancias. Es que nuestra oligarquía no concebía un proceso de colonización libre, similar al que se había dado en Estados Unidos, que implicara la disolución de las relaciones feudales imperantes y posibilitara que nuestros colonos se transformasen en chacareros independientes.

A pesar de lo expuesto, no se podrá obviar que este modelo de colonización fue muy importante para el desarrollo de la región centro-sur de la provincia, ignorada por la elite del latifundio ganadero que tenía puesta su mirada en el sur provincial (los departamentos Constitución y General López).

Es cierto que entre 1856 y 1873 se establecieron en la provincia 32 colonias con cerca de 40.000 hectáreas sembradas y hacia 1895 se habían creado 366 asentamientos que abarcaban cientos de miles de hectáreas; pero tampoco es menos cierto que hasta la primera mitad del siglo XX en las zonas colonizadas del centro sur convivían las pequeñas y medianas propiedades con grandes estancias como la de los Fuentes ubicadas en distintos lugares del departamento Caseros, los Larriviere en Chabás o los Castagnino en Arteaga y que esta situación, en la medida que se avanzaba más al sur o al norte provincial se revertía, pasando a predominar las grandes estancias.

De todos modos, en la región central las colonizaciones lograron quebrar la monotonía del latifundio, motivo por el cual hasta el día de hoy las pequeñas y medianas explotaciones agropecuarias son mayoritarias.

Finalmente, el cambio interno dentro de la propia economía ganadera –el paso a la producción de carnes selectas– fue un factor que alentó el desarrollo colonizador, fundamentalmente privado, y a la vez éste hizo posible el enorme aumento en la producción de trigo, que hasta ese entonces se importaba desde EE.UU. y Chile principalmente.

La expansión territorial: campaña de Obligado

La provincia de Santa Fe tiene en la actualidad un territorio de 113.007 km^2. En 1820, sólo 12.000 km^2 estaban incorporados al dominio de las autoridades provinciales. Entre 1820 y 1850 debido a las guerras civiles, no se

habían producido avances en el despojo territorial de los pueblos originarios que permitieran una extensión de la superficie ocupada.

Durante la década del '50 la frontera del sur seguía la ruta que unía Mendoza con Candelaria (hoy Casilda) a través de San Luis y Río Cuarto. Hacia el sur, la línea de fortines se extendía hasta Junín, Nueve de Julio, Azul y Tandil. Una línea igualmente vulnerable delimitaba la frontera norte que seguía sujeta a los ataques de los nativos del Chaco. Nacía en Santa Fe y continuaba hacia el oeste, hasta llegar a unos 80 kilómetros de la ciudad Córdoba y luego se dirigía al norte, hacia el Río Dulce y Santiago del Estero.

En 1858, el gobernador Fraga conquistó 12.000 kilómetros cuadrados de tierras vírgenes ubicadas en el centro de la provincia. Entre 1864 y 1869 una exitosa expedición militar al mando de Cabal, lograba "incorporar" 57.000 km² más. Entre 1858 y 1869 el territorio conquistado se incrementó cuatro veces.

La valorización de las tierras por la crianza de lanares, junto a la necesidad de ofrecer garantías de seguridad y estabilidad al capital extranjero, fueron los principales motivos esgrimidos por las autoridades nacionales para lanzar las dos grandes operaciones militares que acabaron con la resistencia de los pueblos originarios: las conquistas del Desierto y del Chaco Santafesino. La primera se inició en 1879 y fue encabezada por el general Roca; la segunda, que comenzó en el año 1870 para extenderse hasta 1880, fue comandada por el coronel Manuel Obligado.

Estas campañas, junto al genocidio del pueblo paraguayo (prácticamente todos los hombres murieron a manos de las fuerzas de la Triple Alianza) **y el aplastamiento de las revoluciones federales del interior, encabezadas por caudillos como Peñaloza y Felipe Varela, permitieron a la oligarquía bonaerense, como analizaremos más adelante, lograr la Unión Nacional**.

Ésta se concretó en un proceso complejo en el que muchos terratenientes y comerciantes santafesinos, como Cabal o Carlos Casado, alentaron por razones económicas la guerra de agresión a Paraguay. Asimismo, las diferencias que otros sectores oligárquicos tenían con Buenos Aires llevaron a que terratenientes como el hijo de Estanislao López se incorporaran a las tropas paraguayas para combatir al mitrismo, dejando en claro la persistencia de las contradicciones entre Buenos Aires y el interior.

En Santa Fe, las campañas militares sometieron a los pueblos originarios, eliminando a los "vagos" y "mal entretenidos", que fueron incorporados compulsivamente al ejército de Obligado. Con esta última operación militar quedó prácticamente definida la mayor parte del actual territorio provincial.

En 1870, el coronel Manuel Obligado, con fuerzas unificadas de Santa Fe, Santiago del Estero y Córdoba, logró extender la frontera norte hasta el Río Salado (Santiago del Estero). Hacia 1871 había conseguido adelantar en cien kilómetros las líneas de fortines "liberando" más de 600.000 hectáreas; un año

después los límites habían sido llevados a la altura de Reconquista y Fortín Tostado. Este avance en la zona norte continuaría durante toda la década.

La frontera sur de la provincia seguía una evolución muy compleja, relacionada con los enfrentamientos entre la Confederación y Buenos Aires, y también con los avances y retrocesos de los pueblos originarios en su lucha contra la expulsión. Por ejemplo, en 1855 la frontera sur pasaba por Melincué y Guarda de la Esquina (hoy San José de la Esquina), en tanto que en la década del '60, luego de varios avances y retrocesos, se estableció definitivamente entre Melincué y el límite oeste de la provincia.

Durante ese período se sucedieron varios ataques a distintas estancias del sur de la provincia. Los más importantes fueron los del cacique Pincén. En 1872, sus fuerzas, luego de rechazar durante varios años invasiones a lo largo de toda la frontera sur, fueron derrotadas por el coronel Rivas en la batalla de San Carlos (hoy Bolívar), lo que permitiría a los ejércitos conquistadores llevar la frontera sur prácticamente a los límites actuales de la provincia.

Finalmente habría que agregar que a fines del siglo XIX se incorporaron 5.500.000 hectáreas de la zona norte al territorio provincial. Se trataba de llanuras deprimidas y anegadizas. Con esta última anexión quedó definitivamente constituido el actual territorio de Santa Fe.

La resistencia de los pueblos originarios

El éxito de las dos últimas grandes expediciones contra los nativos significó la culminación de un proceso de persecución y genocidio comenzado por España y continuado por la oligarquía vernácula contra los pueblos originarios que habitaban el actual territorio nacional. A lo largo de más de trescientos años en el Chaco Santafesino se persiguió a las quince etnias que habían habitado temporal o permanentemente el actual territorio provincial, para "reducirlas" o "aniquilarlas". Nos referimos a los Guaraníes, Tobas, Mocovíes, Abipones, Calchaquíes, Mecoretáes, Quiloazás, Calchines, Corondas, Timbúes, Caracáes, Chanaes y Querandíes.

La mayoría de estos pueblos lucharon valientemente, primero contra la ocupación colonial y luego contra las campañas organizadas por los terratenientes para apropiarse de sus tierras.

En el período colonial tal vez hayan sido los bravos Querandíes, que habitaban en La Pampa y el sur del Litoral, los que mejor sintetizaron en memorables batallas el valor de estos pueblos. Junto a los Guaraníes rechazaron los primeros desembarcos españoles y en 1516 retuvieron al primer cautivo español del que se tenga noticias, Francisco del Puerto, que fue rescatado por Gaboto diez años más tarde.

Asimismo, fueron los Querandíes, con su valiente accionar, quienes dificultaron los primeros intentos de los ocupantes españoles de remontar el

Río Paraná. La resistencia proseguiría luego con la llegada al Río de la Plata de la poderosa expedición de Pedro de Mendoza que contaba con 10 naves y 2.500 hombres armados, la misma que en el año 1536 fundó Santa María del Buen Ayre. Este enclave fue hostigado desde su nacimiento por los Querandíes, quienes en 1541 lograron destruir los puestos de avanzada para luego rodear la ciudad forzando su evacuación total hacia Asunción. Durante casi cuarenta años este territorio permaneció en manos de sus verdaderos dueños.

Los indios (querandíes) atacan a Buenos Aires. *Grabado de Hulsius incluido en el* Viaje al Río de la Plata *de Ulrico Schmidl, 1599. Schmidl, soldado mercenario alemán, acompañó a Pedro de Mendoza en la fundación de Buenos Aires, 1536.*

▲

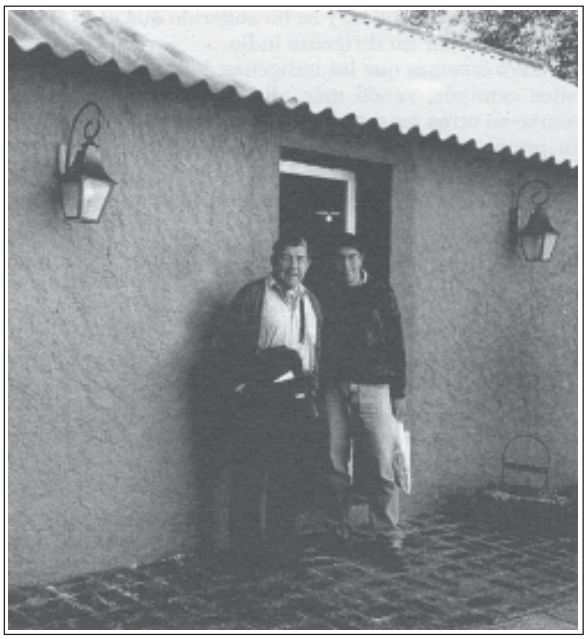
Los Querandíes atacan el Buenos Aires de Pedro de Mendoza. Grabado del libro de Ulrico Schmidt "Viaje por el Río de la Plata".

En el año 1580, Juan de Garay fundó Buenos Aires por segunda vez. Los Querandíes atacaron la nueva ciudad en varias oportunidades pero fueron permanentemente rechazados y sufrieron importantes pérdidas como la del gran cacique Tabobá. En 1583, tras la muerte de Garay, acaecida en el Río Paraná a manos de otra parcialidad Querandí, éstos llevaron adelante

un último ataque sobre Buenos Aires. Fueron rechazados y durante décadas de continuos combates se diluyeron entre los grupos Tehuelches hasta desaparecer de forma definitiva.

Superado el período colonial, continuó la persecución y el despojo de tierras. En la campaña al Chaco Santafesino, el desalojo que sufrió el nativo fue violento; lo apartaron de la caza y buscando quebrar su identidad cultural le impusieron ritos cristianos. Las reservas de originarios eran verdaderos campos de concentración en los que, además de esclavizar al nativo, se llevaba adelante una planificada tarea tratando de imponerles una nueva cultura. Los que lograban escapar de las reservas deambulaban por los montes sin saber qué hacer, mientras que una minoría se asoció a grupos de bandidos blancos, que aterrorizaban los poblados practicando todo tipo de pillaje.

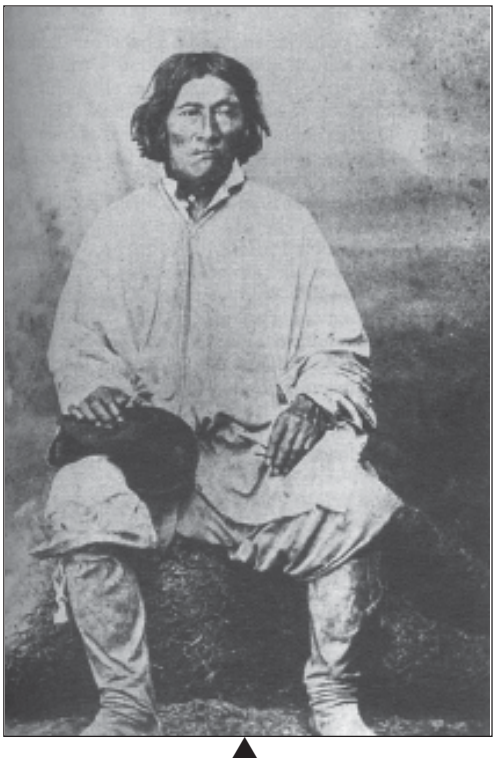
En 1871, como parte de la generalizada resistencia a la campaña de Obligado, los nativos saquearon las colonias de Alejandra y San Justo; en 1874 Emilia sufrió dos invasiones y Reconquista fue devastada. En 1875 sufrieron ataques Santa Rosa, San Javier y, nuevamente, Alejandra; en 1876 Grutly; y en 1877 fueron atacadas Pilar, Humbolt, Romang y, otra vez, Alejandra. Iriondo, una colonia muy alejada de la frontera, también sufrió las consecuencias de la incursión del malón.



◀ Inocencio Pincén, bisnieto del famoso cacique, junto a su hijo frente a la casa donde estuvo detenido su bisabuelo en la isla Martín García. Foto año 1998.

En su excelente trabajo *"Tiempos de Huelgas"* (Ed. Anteo, Buenos Aires 1985), Arturo Loza cuenta que ante la invasión, la mayoría de los habitantes originarios se fueron reagrupando en torno a los caciques más combativos

y protagonizaron grandes luchas por las tierras y sus derechos. Ahí está el ejemplo de la reducción de San Antonio, fundada por Obligado para militarizar a los tobas prisioneros con el fin de obligarlos a combatir contra sus propios hermanos. Luego de aprender a manejar las armas, los tobas se sublevaron, mataron al comandante de la guarnición y huyeron con todos los pertrechos. Otro ejemplo es lo que sucedió en 1873, en los bosques Napalpí, en el corazón del Chaco, cuando los hombres del cacique Juanelrai libraron batalla contra las tropas de usurpación y, a pesar de ser derrotados, lograron provocar infinidad de bajas a las fuerzas enemigas. Y, por último, ahí está también la larga lucha del cacique Cambá y su pueblo, que recién pudo ser acallada con la muerte del jefe insurgente en la batalla de La Cangayé.



El cacique Pincén en 1878. Tras su derrota se ocuparon definitivamente los territorios del Chaco Santafesino, fotografía de Antonio Pozzo.

Esta verdadera epopeya ha sido silenciada por la mayoría de los historiadores, pero de las matanzas, de la heroica resistencia y de la disgregación de los originarios quedaron constancias materiales desparramadas por las pampas santafesinas. Al respecto refiere Loza que en las estancias San Pedro, Los Galpones y La Angelita, que fueron heredadas por la hija de Obligado, se reunía a los indios y desde la cúspide del mangrullo, a modo de juego, se les disparaba a la cabeza como si fueran piezas de caza.

Luego de la derrota definitiva, sobrevino la dispersión de los originarios, con la consecuente disgregación de las familias. Hambrientos y desnutridos, los descendientes del Guaycurú, del Toba y del Mataco morían de pulmonía, mientras sus mujeres, convertidas en sirvientas del hombre blanco, eran violadas sistemáticamente por el amo, el capataz o algún jefe militar.

En la frontera sur la situación no fue muy distinta. En 1867 el gobierno provincial tuvo que otorgar franquicias fiscales a los ganaderos de la zona cuyas haciendas habían sido diezmadas por los malones. En 1872 fue ata-

cada San José de la Esquina y ese mismo año colonias bien protegidas como Cañada de Gómez y Tortugas fueron asoladas por distintos contingentes originarios. Ante estos acontecimientos el cónsul inglés en Rosario envió a su país un informe en el que sostenía dramáticamente:

> *"...Es increíble pero es melancólicamente cierto que los indios estuvieron a 21 millas de Rosario durante dos días, y sólo entonces las autoridades se enteraron del hecho enviando un destacamento para oponérseles..."*
>
> (*Registro Oficial*, Mac Donnell, Rosario, 15 de junio de 1872, citado por Gallo, Ezequiel, *La pampa gringa*, Editorial Sudamericana, Buenos Aires,1983)

La culminación del reparto (robo) de la tierra fiscal

Tras la entrega de tierras a la compañía "Central Argentino" (una legua a cada lado de la traza ferroviaria Rosario-Córdoba), a Carlos Casado (130.000 Ha) o a Mariano Cabal (2.000.000 de Ha), en la provincia de Santa Fe tomó vigencia el negocio de la venta de tierras a precios venales, tal cual sucedió con las extensiones cedidas a terratenientes bonaerenses como Diego de Alvear y Cernadas.

En 1880, el gobierno provincial sancionó disposiciones que permitirían la utilización del suelo público para pagar la deuda externa que la Provincia había contraído con la firma "Murrieta y Cía.". En el año 1873, en el mercado de Londres se había obtenido a través de la mencionada firma británica un crédito de L 300.000 con el objetivo de capitalizar el Banco Provincial y construir un ferrocarril que uniría Santa Fe con la región oeste. Como pago del préstamo, la provincia debía abonar aproximadamente L 30.000 (150.000 pesos fuertes) por año. Si bien no se cuenta con abundante información acerca de las cancelaciones de cuotas realizadas por el gobierno provincial, se conoce que en el año 1876 los banqueros londinenses comunicaron a las autoridades de Santa Fe, que la institución se había hecho cargo del pago de la deuda y, por tanto, exigía el reembolso de las sumas adelantadas.

Refiriéndose a la deuda que había contraído la provincia con los capitalistas del Banco Provincial de Santa Fe, el diario La Capital sostenía:

> *"...los únicos tenedores de bonos de dicha deuda externa en la provincia, eran los miembros de la firma Murrieta y Cía. (...) el gobierno de la provincia, a consecuencia de lo ya expresado, entregó al señor González, cuatrocientas leguas de tierras fiscales, cuya base son veinte leguas frente a la costa del río Paraná por veinte de fondo, para que ellas sean negociadas en Londres, fijando el precio mínimo en mil doscientos patacones la legua cuadrada y con cuyo producto se pagarán los intereses y amortizaciones devengadas de la deuda en cuestión..."*

COMPAÑIA DE TIERRAS CENTRAL ARGENTINA, ANONIMA

CONTRATA DE ARRENDAMIENTO

El Gerente Rentas, Superintendente de la COMPAÑIA DE TIERRAS CENTRAL ARGENTINA, y en representación de dicha Compañía de una parte; y Joseph Bianchi de la Suiza vecino de Santa Fé en el departamento de Caseros en la provincia de Santa Fé República Argentina de la otra parte de la convención todos: la Compañía del Ferrocarril Central Argentino por el Gerente Gerente Rentas y nombrado por el Mismo Propio, y designado en los planos en las oficinas de la Compañía en el Pueblo de Santa Fé del modo siguiente

Una suerte de chacra en la Colonia de Carcarañá con el Numero 44 en la Legua 10

contenido dicho modo — 20 — cuadras cuadradas, menos el espacio necesario para caminos públicos, situado según este

Artículo 1.—Esta contrata será por el término de — 5 — años desde la fecha, y el precio de arrendamiento será de — 5 — pesos cada cuadra cuadrada, pagadero en el mes de Enero de cada año.

Art. 2.—Se cobrará al arrendatario el interés del 10 por ciento anual sobre cualesquiera sumas pagadas en el tiempo prefijado, y sobre adelantos hechos por la Compañía; y faltando seis meses en el pago del arrendamiento, la Compañía puede pedirle en lote sin interpelación alguna. También tiene la Compañía el derecho de expulsar de las concesiones á los colonos quienes por indolencia ó otros vicios abandonen su trabajos, dejen incultos sus terrenos ó turben la paz y buen orden de la Colonia.

Art. 3.—El arrendatario tendrá el derecho de comprar el terreno arriba indicado, al precio de — 20 — pesos fuertes por cuadra cuadrada durante los tres primeros años, continuando siempre en la ocupación de ello; lo que puede hacerse pagando el dicho por cuenta por el primer vencimiento, según el "Sistema" sancionado por la Compañía en Junio de 1870.

Art. 4.—Si el arrendatario dejase su terreno antes del tiempo prefijado en el artículo 1.° (sino por cuenta á arreglo especial con la Compañía), todas las mejoras que haya hecho pertenecerán á la Compañía; y si después de los dichos — 5 — años, continúa en la ocupación del terreno, y no hay un convenio especial, se le considerará como arrendatario anual, cuyo arrendamiento podrá terminarse por cualquiera de las dos partes con una notificación de seis meses de anticipo.

Art. 5.—El arrendatario tiene la obligación de cercar su lote con alambre, cerco viva, zanja ó otra manera efectiva, dentro del término de esta contrata.

Art. 6.—Durante la continuación de su tenencia, el arrendatario mejorará y cultivará el terreno que ocupe con diligencia y constancia, y cuidará con esmero todos los edificios, cercos, corrales y mejoras que le pertenezcan; y permitirá á los Agentes de Compañía á todo tiempo oportuno pasar por el, para inspeccionar su condición; y cuidará de dicho terreno, y particularmente cercará el mismo, con todos sus edificios y mejoramientos, en buena condición y conservación á la conclusión de su arrendamiento, si así lo deseare la Compañía.

Art. 7.—Es prohibido al arrendatario tener otros animales en los terrenos destinados para chacras ó el cultivo, que los necesarios para la labranza ó el uso doméstico, á menos de no cercar seguramente su chacra, guardando en ella sus animales; y será responsable por los daños que aún estos animales puedan causar á los vecinos.

Art. 8.—Al concluir el término de esta contrata, es entendido que el arrendatario tendrá la preferencia en cuanto á nuevo arrendamiento, ó en caso de venta del terreno, la opción de comprar el lote que ocupaba, al precio que se establezcase por la Compañía por terrenos en la localidad; y la Compañía no podrá aumentar el precio del terreno por causas de las mejoras hechas por el arrendatario, las que son de la exclusiva propiedad de éste, sujetas y comprometidas, sin embargo, al pago de cualquier deuda por alquileres atrasados, ó adelantos, si hubieren, hechos por la Compañía; ó si la Compañía durante el término de esta contrata necesitara el lote para pueblos, edificios, establecimientos, etc., puede tomarlo; pero el arrendatario tendrá el derecho de exigir otro terreno en iguales condiciones agrícolas en las tierras de la Compañía, y la compra de sus mejoras é indemnización según tasación.

Art. 9.—Los arrendatarios tendrán que conformarse con los reglamentos que hiciere la Compañía para el mutuo beneficio de todos, y reconocer y respetar los caminos y las calles que marcan los planos.

Art. 10. Es prohibido absolutamente cortar leña ó maderas sin con autorización, será expulsado de su concesión, sin perjuicio de ser demandado por daños y perjuicios, delante de las autoridades.

Art. 11.—Toda disputa entre los vecinos y que se relacione con la propiedad ó intereses de la Compañía y sus reglamentos, tal como cuestiones de límites, obligaciones recíprocas para cercar, etcétera, se arreglará por el Sr. Superintendente, sin recursos. Las que se relacionen con la Jurisprudencia del país, son de incumbencia de las autoridades, sean provinciales ó nacionales.

Art. 12—La Compañía no es responsable por las contribuciones ó impuestos que las Autoridades Provinciales juzguen en su derecho imponer. Estos deben ser satisfechos por el arrendatario.

Art. 13—Es prohibido absolutamente tener pulpería donde se venda licor por menor en los terrenos de la Compañía, sino por autorización del Superintendente, cuya autorización puede retirarse por él, sin la obligación de espresar sus razones.

Esta Contrata se hizo y firmó por el Superintendente en representación de la Compañía, y por el arrendatario, cada uno de la otra parte quedando una copia. Pueblo de Santa Fé en este departamento — 31 — de Julio de 1875.

Testigos: Joseph S. Baines. Patricio D. Rooney

ROSARIO 31 JUL 1875

Jno. W. Rakins Superintendente

Francisco Bianchi Arrendatario

▲

Contrato de Arrendamiento de la Compañía de Tierras Central Argentino, Anónima.

Finalmente agregaba:

"...El referido señor Gonzáles, al recibir las tierras en compensación de lo enunciado, aprovechó un viaje del doctor Juan Bautista Alberdi a Londres, para que tratara de conseguir algo así como la refinanciación de la deuda, mediante la venta de dichos campos a colonos y, mediante el producto de las ventas, refinanciar las deudas correspondientes..."

(Diario *La Capital*, Rosario 10 de diciembre de 1880)

En septiembre de 1881, el mencionado señor González, que fue ministro de Hacienda de Mitre y Avellaneda, llegó a un acuerdo con Murrieta de Londres, mediante el cual ésta compraba la "módica" cantidad de 504 leguas cuadradas a 1.500 pesos cada una. Posteriormente, y al mismo irrisorio precio, esta firma adquiriría 164 leguas más. En el decreto que aprobaba la enajenación de 1.800.000 hectáreas, Iriondo destacaba el papel de González y de Alberdi señalando:

> *"...han llevado patriótica y legalmente sus mandatos, pues no sólo han salvado el honor y el crédito de la provincia sino que los han asegurado para el porvenir..."*
>
> (Diario *La Capital*, Rosario, 10 de diciembre de 1880)

En 1914, con la incorporación de la Compañía de Tierras de Santa Fe (Murrieta y Cía.) a La Forestal, este monopolio pasó a controlar los tres departamentos santafesinos linderos con la provincia del Chaco.

Desde la oposición, el Partido Liberal junto a otros sectores criticaron duramente estas políticas de los Autonomistas. Refiriéndose al festival de corrupción que generó el reparto de tierras en Santa Fe, Ovidio Lagos escribía:

> *"...Con el mayor cinismo se ha repartido la propiedad entre los círculos personales que han dominado Santa Fe, pasando sus mandatarios sobre ellas como una calamidad pública. Sin darse cuenta de la temeridad de los abusos y de los medios inmorales de que se han valido para enriquecerse a costa de los despojos más inauditos hechos a la provincia, a títulos de fiscales, unas veces con el objetivo de colonizar y otras de dividir a los palaciegos del poder..."*
>
> (Diario *La Capital*, Rosario, abril de 1884)

Más adelante, conociendo detalles del robo agregaba:

> *"...La tierra pública no se ha vendido en Santa Fe; se han regalado centenares de leguas... Últimamente se negociaron cien leguas entre gallos y media noche a $ 800 fuertes pagados moneda provincial en billetes que tenían un desmérito del 25 por ciento. Especulación leonina y si se quiere ilegal, no obstante haber merecido la sanción de las cámaras por orden del finado Iriondo, a quien los titulados legisladores obedecían ciegamente sin poder observar una coma en la redacción absurda de la ley que autorizó ese escándalo..."*
>
> (Diario *La Capital*, Rosario, abril de 1884)

Para concluir habría que decir que en la década del '80, mientras se consolidaba a nivel nacional el modelo impuesto por Roca, en Santa Fe se rifaba la poca tierra pública que quedaba. En octubre de 1880 mediante ley

provincial se autorizaba al gobernador Simón de Iriondo a contratar a una empresa particular con el objetivo de organizar una rifa de tierras. Las mencionadas tierras públicas habían sido mensuradas por el departamento topográfico de la Provincia con el fin de destinarlas a premiar los billetes que se pondrían en venta. El programa fue conocido con el nombre de *"Enajenación de tierras fiscales de la provincia de Santa Fe"*.

La empresa comercial de referencia abonaba la suma de mil quinientos pesos fuertes por cada legua cuadrada. Como contrapartida hay que señalar que mientras el estado enajenaba la tierra a este increíble importe, en Lomas de Avila (hoy Funes), Tomás de la Torre, dueño del territorio sobre el que se fundó la villa, vendía a 3.000 pesos fuertes cada lote de 50 por 50 metros, un valor que llegaba a los 4.500 pesos cuando estaban ubicados frente a la estación ferroviaria o la plaza.

Los nuevos príncipes del latifundio

El fin de la Guerra del Paraguay produjo una fuerte caída de los precios de la tierra. Como ya se ha analizado, en ese período sucumbió la más grande empresa de colonización de la época, perteneciente a Mariano Cabal. Desde ese momento y hasta fines de la década del '70, los precios se estancaron y en algunos casos llegaron, incluso, a registrar una baja. Por ejemplo, en 1877, la empresa "Central Argentino" vendía sus tierras a un 20% menos que en 1870.

La década del '80 fue testigo de un formidable boom en el mercado de la tierra. El gobierno provincial estimaba que el precio se había triplicado entre 1873 y 1883, y que el fenómeno alcista se había acentuado desde finales de la década del '70. En 1888, un prestigioso semanario inglés señalaba:

> *"...que los precios habían aumentado, en promedio, de 12 francos en 1883 a 50 francos en 1887. En Venado Tuerto, por ejemplo, el precio de la legua cuadrada trepó de 300 libras en 1880, a 1.000 en 1881 y a 3.500 en 1887..."*
>
> (Fournier, F. en *The Economist*, Londres, 1888, citado por Gallo, Ezequiel, *La pampa gringa*, Editorial Sudamericana, Buenos Aires,1983)

En el alza del valor de la tierra incidió significativamente la actividad agrícola que había crecido como consecuencia de la mayor seguridad en la frontera, del abaratamiento en el costo del transporte (ferrocarril) y de la incorporación de mano de obra calificada procedente de la inmigración.

Durante esos años, las ganancias obtenidas en la agricultura superaban largamente el 30% del total de lo producido. Esta situación determinó que durante ese período los grandes propietarios de los campos del sur provincial fueran abandonando la producción ovina para volcarse masivamente al cultivo de cereales. El área de trigo sembrada en esa zona aumentó de 152.861 hectáreas en 1884 a 1.068.366 en 1895. Tan pronunciada como la expansión triguera fue la caída del número de ovejas registrada en los mismos campos sureños que pasaron de 4.500.000 cabezas en 1876 a 1.900.000 en 1895.

Estancia con ganado lanar "La Buena Esperanza" junto al lago Chañar, fines del Siglo XIX. (Biblioteca y Archivo del Museo Histórico Provincial "Julio Marc". Colección Fotografías).

A principios de la década del '90, como había sucedido durante los años '70, se verificó una caída del precio de las tierras que fue seguida por numerosas quiebras de colonizadores y propietarios. Hacia 1895 esta tendencia comenzó a revertirse.

Con el desarrollo de la red ferroviaria nacieron en la provincia colonias o pueblos que llevaban los nombres de los terratenientes fundadores o el de sus hijos o esposas o, simplemente, el de sus santos predilectos.

Durante esos años la inmigración ya no estaba orientada por las autoridades, ya que los extranjeros arribaban, en barcos, en grandes contingentes, sin nada material, e inclusive sin destino prefijado. Esta situación fue aprovechada por los terratenientes fundadores de estos pueblos y colonias, que lograron imponer con fuerza incontenible la modalidad del arrendamiento de tierras. Lejos habían quedado las experiencias de Castellanos o de Casado de Alisal. Ya no se vendían parcelas al agricultor, se las arrendaban bajo severas condiciones. Fue así como grandes arrebatadores, Bernardo de Iturraspe, Armstrong, los hermanos Rufino, Alvear y tantos otros, en general hombres de "aventuras", pasaron a ser los "señores" de la tierra y a tener un peso preponderante en la economía y la política provincial.

Tal vez el ejemplo más emblemático de esta nueva camada de terratenientes santafesinos haya sido el de Juan Fuentes quien, según refiere Arturo Marcos Lozza en su libro "*Tiempos de Huelgas*" (Ed. Anteo, Buenos Aires, 1985), había sido un simple cochero que tenía la "parada" en la estación Rosario Central. Su destino de aventurero cambió abruptamente cuando una her-

mosa dama de acento afrancesado alquiló su carruaje para ser trasladada a su estancia. Cuenta Lozza que en medio de una pavorosa tormenta la dama le rogó encarecidamente a don Juan que se resguardara dentro del carruaje, y a partir de esa noche de "amor" el conductor se convertiría en el dueño de todas sus tierras.

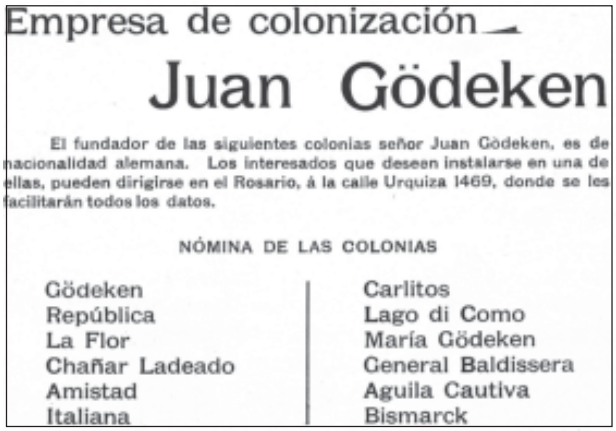
Juan Fuentes, un inmigrante gallego de baja estatura que no sabía leer ni escribir, le dispensaba un trato brutal a los arrendatarios, se vanagloriaba de haber "*comenzado desde abajo*" y su ostentación llegó a tal grado que construyó en Rosario un palacio marmolado. Edificado en Santa Fe y Sarmiento, es hoy uno de los edificios históricos de la ciudad.

Juan Fuentes fue propietario de las dos más grandes es-tancias de la zona, "La Libertad" y "San Justo", ubicadas al norte de Firmat. Sus tierras nacían en Arminda, cruzaban el departamento Caseros extendiéndose hasta Corral de Bustos. Los cientos o miles de arrendatarios que trabajaban en sus campos eran traídos de Galicia, una de las zonas más miserables de España. Refieren los antiguos pobladores del sur provincial que Fuentes llegó a ejercer el "derecho de pernada" medieval, según el cual el amo tenía el privilegio de "montar" a la novia del campesino antes del casamiento. Nunca estuvo casado pero fue padre de cuarenta o cincuenta hijos. Con la sanción de la Ley 13.246 de 1948, en épocas de la primera presidencia de Perón, y luego de varias subdivisiones, este imperio comenzó a desmoronarse cuando la mayoría de los arrendatarios accedió a la propiedad de la tierra.

Producto del brutal trato que Juan Fuentes brindaba a los arrendadores, en su imperio se desarrolló una poderosa corriente anarquista que colaboró activamente en la gran lucha agraria de 1912, conocida como el Grito de Alcorta.

Los terratenientes de linaje, como los Cullen, los Iriondo, los Aldao o los Oroño debieron aceptar la irrupción de otros grandes propietarios, como los Fuentes o los Armstrong, que no provenían de familias tradicionales.

El dominio de la tierra pasó a manos de los Murphy, los Chovet, los Elortondo, los Armstrong, los Funes, los Reutemann, los Canals, los Bosch... que en muchos casos se unieron con los vie-



Empresa de colonización

Juan Gödeken

El fundador de las siguientes colonias señor Juan Gödeken, es de nacionalidad alemana. Los interesados que deseen instalarse en una de ellas, pueden dirigirse en el Rosario, á la calle Urquiza 1469, donde se les facilitarán todos los datos.

NÓMINA DE LAS COLONIAS

Gödeken	Carlitos
República	Lago di Como
La Flor	María Gödeken
Chañar Ladeado	General Baldissera
Amistad	Aguila Cautiva
Italiana	Bismarck

Facsímil de un aviso aparecido en el año 1900, convocando a interesados en adquirir tierras en las nuevas colonias.

jos terratenientes dando lugar a la aparición de los Cullen Funes, los Elortondo de Bemberg o los Bosch de Alvear.

Cómo opera el imperialismo

Según Lenin, el imperialismo es la etapa monopolista del capitalismo. Se caracteriza, en primer lugar, por la concentración de la producción y del capital en un grado tal que da origen a los monopolios que desempeñan un rol decisivo en la economía mundial.

En esta etapa se produce la fusión del capital bancario con el industrial y la creación, sobre la base de este capital financiero, de la oligarquía financiera. Además, en este período la exportación de capitales, a diferencia de la exportación de mercancías, adquiere una importancia decisiva. Ésta es la época de la formación y desarrollo de asociaciones internacionales monopolistas de capitalistas que se reparten el mundo; pero es también la época en que las potencias capitalistas más importantes concluyen con este reparto.

Los orígenes del capitalismo monopolista se ubican en la segunda mitad del siglo XIX, más exactamente, a partir de 1870.

El desarrollo del capital monopolista puso en primer plano el problema de la exportación de capitales al que se subordina la exportación de mercancías. Las grandes empresas no sólo buscan mercados para colocar sus excedentes de producción, sino también fuentes de ganancias para sus excedentes de capital. Las relaciones entre los países compradores y vendedores se transforman en relaciones entre deudores y acreedores, generándose así relaciones de dependencia. El país u organismo financiero acreedor tiene mayores derechos a interferir para asegurarse el cobro del capital prestado y el interés devengado, o lo que es peor aún, puede disponer directamente el uso que debe darse al capital, en tanto conserva su propiedad.

La exportación de capitales afianza la dependencia con lazos financieros, asegurando ganancias extras a los excedentes de capital de las potencias. Además, coadyuva a la expansión de las exportaciones, no sólo de productos ligados a la inversión misma, sino también a la apertura de mercados para otros productos. Asimismo, la exportación de capitales permite obtener altas tasas de ganancias en la metrópoli y, a la vez, evita la caída generalizada de las mismas que traería inevitablemente la sobreabundancia de capitales.

En la etapa monopolista, además, las potencias buscan mercados fuera de sus fronteras, lo que genera una fuerte resistencia de los pueblos oprimidos que intentan acabar con la dominación imperialista. Por esto en esta época el mundo se divide entre un puñado de potencias imperialistas y un gran número de naciones oprimidas, cuyo atraso y dependencia junto al saqueo de sus riquezas y la explotación de sus pueblos, constituyen la base del creciente poderío de los grandes monopolios de los países imperialistas.

La expansión del imperialismo ha desempeñado un papel importante en la transformación capitalista de los países atrasados y dependientes, ya que precipitó la desintegración del régimen económico anterior.

Éste es sólo un aspecto del cambio operado. El otro, y tal vez el principal, es que la penetración se apoya en las clases más reaccionarias, especialmente los terratenientes, que se alían a los imperialistas para impedir un desarrollo independiente o autónomo.

A la vez, los imperialistas no intervienen buscando el desarrollo del capitalismo en los países atrasados, sino que lo hacen con el claro objetivo de convertir a esos países en dependientes, semicoloniales o coloniales. Para lograr sus objetivos utilizan todos los medios de opresión militar, política, económica y cultural para sojuzgar a la mayoría del pueblo. Asimismo, controlan y limitan la posibilidad de desarrollo de una industria nacional transformando a los terratenientes y a la burguesía intermediaria –fundamentalmente la compradora– en sus intermediarios.

En el caso específico de Argentina, con la irrupción del imperialismo la política colonial entró en una nueva fase. Las potencias que se disputaban el control del mundo no sólo intervinieron para garantizar la libertad de comercio, sino para preservar las inversiones y abrir nuevos negocios para asegurar, en la medida de lo posible, el predominio de sus capitales privados.

Como ya se ha señalado, **a partir de 1880 se inició una nueva etapa en la historia argentina, etapa en la que vivimos todavía hoy. Como parte del proceso de exportación de capitales y bajo el liderazgo de la oligarquía "modernista", el país resignó definitivamente sus aspiraciones de independencia eligiendo el rumbo de país dependiente del imperialismo.** En definitiva, en 1880 se impuso totalmente el proyecto de unificación nacional en función de los intereses de los terratenientes y el imperialismo.

Los ferrocarriles facilitan la penetración extranjera

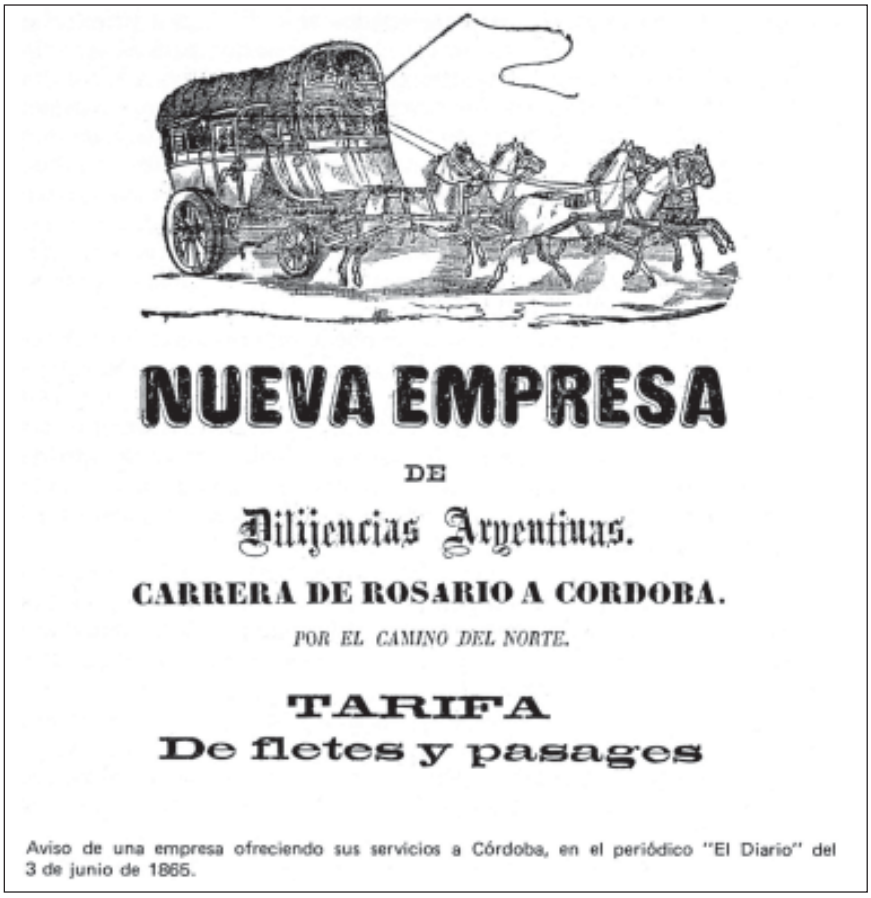
Con la llegada del ferrocarril que reemplazó a la carreta de bueyes o diligencia, el principal medio de transporte hasta la década del '50, comenzó una nueva era de progreso.

El viaje en carreta de Rosario a Córdoba –113 leguas– contaba con un servicio de cuatro salidas mensuales, y el de Buenos Aires a Mendoza –244 leguas– era de una salida por mes. El monto de gastos, sumado a la lentitud de este tipo de transporte, hacía que hasta ese entonces transportar una tonelada de mercadería de Salta a Buenos Aires costara tres veces más caro que llevarla de Buenos Aires a Liverpool.

La construcción de líneas ferroviarias que fueron uniendo distintas regiones entre sí, y a éstas con los puertos, tuvo un impacto decisivo en el proceso colonizador, como así también en el desarrollo de la agricultura. Hay que tener en cuenta que a partir de la década del '70 la comunicación con Europa era fluida.

En 1870 ya funcionaba un servicio marítimo regular que unía Europa con la pampa húmeda a través de un viaje directo conocido como "carrera de Génova y Nápoles al Rosario de Santa Fe y escalas". En 1872, la Compañía de Navegación a vapor "Río Paraná Ltda." anunciaba la salida de un barco

mensual con destino a Liverpool y Amberes vía Buenos Aires y Montevideo. Hacia 1883 se ofrecían viajes regulares desde Rosario a Gibraltar, Barcelona, Marsella, Génova y Nápoles en los que se agasajaba a los pasajeros con pan, vino y carne fresca argentinos.



NUEVA EMPRESA

DE

Dilijencias Argentinas.

CARRERA DE ROSARIO A CORDOBA.

POR EL CAMINO DEL NORTE.

TARIFA

De fletes y pasages

Aviso de una empresa ofreciendo sus servicios a Córdoba, en el periódico "El Diario" del 3 de junio de 1865.

▲

Aviso ofreciendo los servicios de *Diligencias Argentinas*, carrera de Rosario a Córdoba. Periódico *El Diario*, Córdoba, año 1865.

A partir de 1880, para satisfacer las necesidades del capitalismo europeo de alimentos baratos, se requería de un transporte ágil para trasladar los productos primarios (cereales y carnes) a los países centrales.

Resuelta la comunicación con Europa, resultaba imprescindible que el ferrocarril entrara hasta lo más profundo de la pampa húmeda para transportar las riquezas de la región hacia los puertos, desde donde se exportaban al viejo mundo.

Los ingleses –los capitalistas más importantes de fines del siglo XIX– optaron por el método de las inversiones directas, que les aseguraba el

control de las empresas en el exterior y la obtención de enormes beneficios. En Argentina su primer objetivo fueron los ferrocarriles.

El negocio ferroviario, tal como veremos más adelante, fue tan beneficioso para el imperialismo que en apenas unos años un reducido grupo de empresas extranjeras llegó a monopolizar el control de los ferrocarriles. La concentración se reflejaba en estos datos de 1899, aportados por Scalabrini Ortiz:

> *"...el 85% de los pasajeros y el 60% de la carga correspondió al conjunto de los cuatro grandes: Sur, Central Argentino, Oeste y Buenos Aires-Rosario..."*
>
> (Scalabrini Ortiz, Raúl, *Historia de los Ferrocarriles Argentinos*, Ed. Plus Ultra, Buenos Aires, 1971)

Scobie corroboraba las aseveraciones de Scalabrini Ortiz afirmando que en los ferrocarriles tanto:

> *"...la carga como los pasajeros serían transportados por una de esas cuatro compañías para llegar a las zonas agrícolas más productivas, o para arribar y salir del puerto de Buenos Aires, así como de los otros dos grandes puertos de Rosario y Bahía Blanca..."*
>
> (Scobie, James R., *Revolución en las pampas*, Ed. Solar Hachette, Buenos Aires, 1968)

Junto a la concentración, el control directo de los ferrocarriles les garantizaba a los imperialistas la venta de materiales ferroviarios a sus propias industrias, además de la posibilidad de especular con grandes extensiones de tierras adquiridas mediante contratos leoninos.

Por otra parte, la propiedad de las empresas ferroviarias les permitía orientar la economía de la Nación en función de sus necesidades. El control de este medio de transporte les facilitaba la obtención de las materias primas que requerían sus industrias, permitiéndoles, además, canalizar el tráfico hacia los puertos que, en muchos casos, también eran de su propiedad. Por último, y no por esto menos importante, los ferrocarriles les posibilitaron ampliar los mercados para sus productos y manejar las tarifas a discreción.

Además de estas ventajas esenciales para la penetración imperialista, las empresas ferroviarias recurrieron al método de abultamiento de "capital" para cobrar mayores garantías. Sólo así se puede explicar:

> *"...que la inversión por kilómetro de los ferrocarriles particulares era superior a los 30 mil pesos oro, en tanto que la correspondiente a los del Estado que se desarrollaba en zona montañosa era de 20 mil pesos oro..."*
>
> (Scobie, James R., *Op. Cit.*)

La primera obra que realizaron los ingleses fue el ferrocarril Rosario-Córdoba. Urquiza, mediante decreto del 5 de septiembre de 1854, le propuso al ingeniero norteamericano Allan Campbell que auscultara el camino por el cual se habría de extender la línea ferroviaria y confeccionara el proyecto de la

misma. Campbell elevó una nota al ministro del interior Benjamín Gorostiaga formulando una propuesta de proyecto y solicitando una remuneración de 40.000 $F oro, que fue aceptada por las autoridades de la Confederación.

El Congreso de la Nación, a través de una Ley promulgada el 27 de junio de 1855, autorizó al general Urquiza para que se encargara de la suscripción de acciones para la realización del ramal y a la vez analizara la posibilidad de extenderlo hasta Cuyo y Chile. Previamente, el propio Congreso, mediante la Ley N° 22 de fecha 21 de junio de 1855, "*aprueba en todas sus partes el contrato celebrado por el Presidente de la República con el mencionado señor Campbell*". El ferrocarril tendría una extensión de 396 kilómetros y para realizar las obras se contratarían algunos obreros especializados en Europa, además de 600 a 800 trabajadores criollos. Según el "*Informe*" de Campbell el costo de la construcción sería de 5.000.000 $F.

Guillermo Wheelwright, impulsor del Ferrocarril Rosario-Córdoba, construido por la Empresa Central Argentino (Biblioteca y Archivo del Museo Histórico Provincial "Dr. Julio Marc". Colección Fotografías).

El 2 de septiembre de 1862, ya bajo la presidencia de Bartolomé Mitre, el Congreso autorizaba a Guillermo Wheelwright a "*formar una sociedad anónima bajo el título de Ferrocarril Central Argentino con el objeto de construir y explotar locomotoras a vapor, un ferrocarril de una sola vía que una Rosario con Córdoba, según la traza presentada por el ingeniero Campbell*".

El capital accionario inicial fue estipulado en 1.600.000 libras esterlinas u 8.000.000 de pesos fuertes, en 80.000 acciones de 20 libras esterlinas o 100 pesos fuertes cada una.

Finalmente, el 9 de mayo de 1863, el Senado aprobaba el contrato de construcción del ferrocarril entre Rosario y Córdoba. El artículo 12 de la Ley estipulaba:

> "*...El Gobierno concede a la Compañía, en plena propiedad, una legua de terreno a cada lado del camino en toda su extensión, comenzando a distancia de cuatro leguas de las estaciones Rosario y Córdoba...*"
>
> (Citado por Grela, Plácido, *Loma de Avila*, Ed. de la Sociedad de Historia de Rosario, Rosario, 1981)

Esta oprobiosa entrega fue la culminación de presiones de los británicos que amenazaban con no realizar la obra si no recibían las tierras reclamadas. El ministro Guillermo Rawson, un fiel representante de nuestra aristocracia ganadera, argumentaba a favor de los ingleses sosteniendo "*que eran justas las observaciones del concesionario*" y llegó a decirle a Mitre, entre otras cosas, lo siguiente:

> *"...Pero sería una dolorosa excepción para la República el que este proyecto caritativo, cuya realización se anhela con tantas ansias, volviera a caer nuevamente en las sombras de la nada y habría sido no menos penoso para los pueblos el ver al señor Wheelwright, en quien se cifran hace ocho años estas vivas y legítimas esperanzas, regresar a Inglaterra desconcertado..."*
>
> (Citado por Grela, Plácido, *Op. Cit.*)

Indudablemente estábamos en presencia de una "puesta en escena" clásica de la oligarquía entreguista: los ingleses y sus aliados locales presionaban al Estado Argentino para que le concediera al Ferrocarril Central Argentino una legua a cada lado de la traza Rosario-Córdoba. ¿Cuál era el valor real de decenas de miles de hectáreas de nuestras tierras más fértiles, cruzadas por un ferrocarril y con decenas de colonias y pueblos en su interior? Inconmensurable. A la vez que conseguía la explotación del servicio, y como consecuencia de la entrega del patrimonio nacional, la Compañía inglesa montó un fabuloso negocio inmobiliario.

Apenas transcurridos dos años de la inauguración del ferrocarril, la "Compañía de Tierras Central Argentino" se reconstituyó en Sociedad Anónima denominada "*Argentine Land and Investment Company Limited*", estableciéndose su directorio en Londres.

Los acuerdos con Inglaterra para la construcción del ferrocarril Rosario-Córdoba son un claro ejemplo de cómo la penetración imperialista se apoya en las clases más reaccionarias, en este caso la oligarquía, y de qué manera saquean juntos las riquezas y conspiran contra el desarrollo independiente de la nación.

Nicasio Oroño planteó en reiteradas oportunidades ante Urquiza la necesidad estratégica de esta obra. Su sueño progresista se había cumplido, pero al muy alto costo de haber sometido el país al imperialismo.

El ferrocarril Central Argentino, que revolucionó la economía y la fisonomía de la provincia, tenía al momento de la inauguración las siguientes estaciones: Rosario, Funes (San José de Avila), Roldán (Bernstadt), San Jerónimo, Carcarañá, Cañada de Gómez y Tortugas.

Durante los primeros años, las ganancias del Central Argentino fueron enormes. Según Gabriel Carrasco, del movimiento económico de la empresa se desprende:

> *"...el hecho notable de que esta empresa ha tenido una ganancia de un millón setecientos mil pesos en el solo año 1884, siendo así que el capital invertido sólo alcanza a ocho millones". "Esa cantidad equivale al enorme interés del 21 por ciento anual para capital extranjero, que apenas reditúan el 3 o 4 por ciento al año en mercados europeos...".*
>
> (Carrasco, Gabriel *Descripción geográfica y estadística de la provincia de Santa Fe*, Stiller & Laas, Buenos Aires 1886)

▶ Coche comedor perteneciente al Ferrocarril Central Argentino. (Biblioteca y Archivo del Museo Histórico Provincial "Dr.Julio Marc"-Colección Fotografías).

◀ Estación Rosario Central del Ferrocarril Central Argentino ubicada en las actuales calles Corrientes y Wheelwrigth, año 1880. (Biblioteca y Archivo del Museo Histórico Provincial "Dr. Julio Marc"-Colección Fotografías).

A la vez, como el gobierno nacional había garantizado un interés del 7% anual sobre el capital que la empresa empleara en la construcción, el país pagó durante años a los británicos grandes sumas para cubrir esa garantía.

Durante los difíciles años '70, en Santa Fe no se inició ninguna obra ferroviaria. En 1874 el gobierno provincial tomó un importante préstamo en el mercado de Londres para construir una línea que uniera toda la región central con la ciudad de Santa Fe, pero las dificultades económicas retrasaron las obras durante una década.

Fue durante el boom económico de los '80, ya analizado, cuando se inició la construcción de una serie de líneas férreas que transformaron por completo la geografía rural santafesina.

En 1881 el comerciante rosarino Carlos Casado construyó el Ferrocarril del Oeste (49 kilómetros) que unía La Candelaria (hoy Casilda) con Rosario. Por Ley Nº 228 de octubre de 1881, se acordaba una garantía del 7% sobre el capital invertido, a razón de $15.000 moneda nacional por kilómetro y durante veinte años, la excepción de impuestos durante quince años y el otorgamiento de tierras fiscales por cada una de las secciones, bajo ciertas condiciones de colonización.

El 4 de noviembre de 1887 se inauguró la prolongación de la vía desde Casilda hasta Colonia Iriondo y fue puesta al servicio público pocos días después hasta San José de la Esquina. Hacia 1889, el ferrocarril de Casado tenía una extensión de 210 kilómetros con las siguientes estaciones: Pérez, Zavalla, Pujato, Casilda, Palacios, Arequito, San José de la Esquina, Arteaga, Juárez Celman, Sanford, Chabás, Villada, Firmat y Melincué.

Según la "*Memoria*" de la empresa de 1894, el superávit que en 1893 había llegado a 752.829,48 pesos moneda nacional, ese año se había incrementado a 822.953,08. En el año 1900, el Ferrocarril Oeste Santafesino (F.C.O.S.) fue adquirido por el Central Argentino.

En 1885 se inauguraba el primer tramo del Provincial de Santa Fe o Ferrocarril de Santa Fe a las Colonias (F.C.P.S.F.) que vinculaba las colonias del oeste con la ciudad de Santa Fe. En 1883 el Poder Ejecutivo autorizó a contratar con los señores John C. Meiggs & Sons Londres, por cuenta de la Provincia, la construcción de un ferrocarril de trocha angosta –un metro– que uniría el Río Paraná con las colonias, cruzando el Río Salado.

La obra fue financiada por la firma Murrieta de Londres, que designó como apoderado en la provincia al Dr. Lucas González. El primer día de enero de 1885 se inauguró el tramo Santa Fe-Esperanza. En marzo, la traza llegaba hasta Rafaela y Lehmann. Por ley de la provincia de 1885 se autorizó la construcción de varias líneas: de Santa Fe hasta Reconquista, de San Carlos a Rosario, de Lehmann o San Carlos a Córdoba y de Lehmann a Santiago del Estero. En 1887 se habilitó el tramo Lehmann-San Cristóbal.

Finalmente, por Ley Nº 237 del 19 de septiembre de 1888, se autorizaba al Poder Ejecutivo a contratar la concesión de los ferrocarriles de la

provincia a la compañía francesa *Five Lille*. Se entregaron 490 kilómetros y el contrato se refería a "*las líneas construidas, en construcción o a construirse*". La concesión era por 55 años y el gobierno participaba de la mitad de las utilidades, cuando éstas excedieran del 7% del capital empleado.

La *Five Lille* transfirió el contrato, así como la concesión de los 490 kilómetros de líneas nuevas a la Compañía Francesa de los Ferrocarriles de Santa Fe. En diciembre de 1891, la red general de los ferrocarriles de la provincia –arrendada por los franceses– llegaba a los 1.152 kilómetros de extensión.

En el año 1900, y dado que a la Provincia no le "quedaban utilidades", ésta se desligó de los Ferrocarriles de Santa Fe, transfiriéndolos a la Compañía Francesa de los Ferrocarriles. **La operación incluyó todos los terrenos, estaciones, galpones, edificios, talleres, muelles, embarcaderos, tren rodante, maquinarias, etc. que pasarían a manos de los franceses, "libres de todo gravamen"**.

Tal como veremos más adelante, después de que la Provincia entregara a precios irrisorios a la firma inglesa Murrieta y Cía. decenas de miles de hectáreas de tierras para saldar el crédito contraído para construir el Ferrocarril Provincial, se transfería sin cargo el patrimonio ferroviario a la compañía francesa. En el año 1910 los bienes de la empresa eran los siguientes: 1.709 kilómetros de vías, 132 locomotoras, 158 coches, 116 furgones y 4.756 vagones. En 1933 la red alcanzaba los 2.054 kilómetros.

Sucesivas extensiones de las líneas establecidas y la incorporación de tres nuevas empresas británicas en todo el sur de la provincia, permitieron extender la red ferroviaria hacia 1895 a 3.300 kilómetros. Desde ya, el desarrollo de la misma se concentró en la región central y sur de la provincia, que hacia 1895 representaba más del 80% de la tierra dedicada al cultivo de cereales. En la práctica, no había ninguna colonia que estuviera a más de 30 kilómetros de una estación ferroviaria, mientras que la distancia promedio se calculaba en 15 kilómetros.

El impacto del tendido ferroviario fue importante. Por un lado alentó la fundación de colonias en los lugares más remotos y, por el otro, el ferrocarril bajó considerablemente los precios del transporte. Según Juan Álvarez, el costo de acarrear una tonelada desde Rosario a Mendoza, a partir de 1884, disminuyó de 4,7 pesos oro por cada 100 kilómetros a 1,5 para igual distancia.

Otro dato a tener en cuenta es que a diferencia de lo que sucedía en otros lugares, en Santa Fe el ferrocarril recorría zonas despobladas que luego se convertirían en ricas. **Es decir que las líneas no se tendieron en pos de una demanda ya existente sino que la construcción ferroviaria fue acompañando la sustracción de las tierras fiscales, favoreciendo a los grandes propietarios y al negocio inmobiliario en general.**

Por otra parte, el agricultor santafesino también logró beneficios, ya

que las cortas distancias que separaban a las chacras del puerto de Rosario originaban los fletes más baratos del mundo.

Conjuntamente con los ferrocarriles, otros medios de comunicación como el correo y el telégrafo se desarrollaron en ese período, ya que a mediados de la década del '80 el teléfono había llegado a Rosario, Santa Fe y Esperanza, en aquella época la colonia más pujante de la provincia.

SANTA FE ENFRENTÓ EL MODELO OLIGÁRQUICO

La Generación del '80

En 1880, la Argentina presentaba condiciones internas e internacionales inmejorables para el desarrollo de la economía.

En lo interno, con las campañas de Obligado y Roca, se "ganaron" cientos de miles de hectáreas a los pueblos originarios, se cerró un ciclo de sesenta años de guerras civiles y, con la capitalización de Buenos Aires, la oligarquía hegemónica logró la tan ansiada Organización Nacional.

En lo externo, el gran auge del capitalismo –que había entrado en su fase monopolista– generó una extraordinaria demanda de materias primas, fundamentalmente alimentos. Estas excepcionales condiciones nacionales y mundiales se combinaron con adelantos tecnológicos como la navegación a vapor, la utilización de los alambrados, la construcción de los ferrocarriles y el desarrollo de la industria frigorífica.

Sin embargo los importantes avances logrados no garantizarían el máximo crecimiento económico ni un desarrollo independiente como nación. Esto fue consecuencia de que un grupo de terratenientes y ganaderos bonaerenses, junto a los grandes comerciantes –particularmente los del puerto de Buenos Aires–, hegemonizaron el proceso iniciado en 1880.

Muchos historiadores, cuando se refieren a la Generación del '80, la definen como progresista, democrática e inclusive hasta con rasgos nacionalistas.

Tal es el caso de Luis V. Sommi, quien además veía al roquismo como una fuerza positiva y, a pesar de deslizar alguna crítica de "izquierda", aseveraba:

> "*...En el proceso histórico de la unificación del país y de la creación del estado nacional fue necesario un fuerte poder central para someter al localismo provincial. Terminado ese proceso era indispensable democratizar el gobierno...*"
>
> (Sommi, Luis V. *La revolución del '90*, González Pineda, Buenos Aires, 1947. Citado por Gastiazoro, Eugenio, *Historia Argentina, 1880-1930*, Tomo III, Ed. Agora, Buenos Aires. 1986)

Más adelante afirmaba que estos hombres:

> "*...realizaron la obra de modernización económica e institucional del país...*"
> (Sommi Luis V., *La revolución del 90*, González Pineda, Buenos Aires, 1947.
> Citado por Gastiazoro, Eugenio, *Op. Cit.*)

Para Sommi, dirigentes como Mitre, opositor de Roca en los ochenta, Pellegrini, Juárez Celman o el mismísimo Roca, exhibían rasgos antiimperialistas.

Si repasáramos la historia de la mayoría de los gobernantes de ese período, podríamos observar cuán lejos estaban del progresismo, el nacionalismo o las ideas democráticas. Es más, muchos de ellos, ganados por el pensamiento oligárquico, abandonaron algunas justas posiciones que habían tenido en el pasado. Tal es el caso de Pellegrini, vicepresidente de Juárez Celman en 1886, que pasó de enarbolar ideas proteccionistas a ser, junto a Victorino de la Plaza, el gestor de usurarios créditos europeos; y de haber sido el responsable, en la década del '70, de la creación del Club Mercantil y de fundar el Jockey Club de Buenos Aires.

En la clase dirigente que instauró el modelo de 1880, no existieron los rasgos que describió Sommi. Todo lo contrario. Uno de los aspectos sobresalientes de este proceso fue el acercamiento definitivo de Argentina al capitalismo europeo; esto convirtió a nuestro país en proveedor de productos agropecuarios y, a la vez, en receptor de los adelantos tecnológicos desarrollados con la segunda revolución industrial.

La oligarquía, como analizaremos más adelante, fue la que abrió las puertas a la penetración de capitales extranjeros, fundamentalmente de Europa, en emprendimientos como La Forestal, frigoríficos, ferrocarriles, tranvías, puertos, electricidad, etc.

De esta manera, Argentina se incorporó a la llamada división internacional del trabajo, un sistema impuesto por el imperialismo para oprimir a los pueblos y naciones periféricas.

Como sostiene Eugenio Gastiazoro:

> "*...Sobre la base de la preservación del latifundio, que posibilita la relación con la burguesía internacional en expansión, y estando el poder político concentrado en manos de los terratenientes y mercaderes intermediarios, se conforma entonces, a partir de 1880, la república oligárquica. Remedo de las repúblicas burguesas europeas e impregnada de su espíritu liberal, pero carente de toda democracia...*"
> (Gastiazoro, Eugenio, *Op. Cit.*)

Fraude electoral, violencia, policías bravas, intervención a las provincias, Ley de Residencia… son ejemplos que demuestran que ésa no fue una "era de paz", como pretenden muchos historiadores.

Algunos rasgos de su proyecto económico y político

El acercamiento a Europa junto a la consolidación del latifundio y la corrupción, tal vez hayan sido los rasgos sobresalientes de la política aplicada por los mentores de la república oligárquica.

Los defensores de este modelo reconocen algunos errores y, sin embargo, presentan al programa impuesto por la Generación del '80 como el trampolín hacia los "grandes logros económicos" obtenidos por entonces. Es más, hasta el día de hoy, ex presidentes como Alfonsín, Menem o De la Rúa consideran que esta generación y su proyecto de país serían los ejemplos a emular.

En la década del '70, analizando una propuesta de Videla, que planteaba que el país necesitaba otra Generación del '80, Osiris Troiani, uno de los voceros de la dictadura, escribía en el diario *La Opinión*:

> *"...La Argentina (la de 1880) (...) supo entonces conquistar su lugar al sol. Llegó a ser una de las primeras diez entidades del mundo y ya no figura entre las treinta primeras. Ahora las Fuerzas Armadas –requeridas por la inminencia de un desastre nunca visto– se han fijado una misión cuyo éxito debería ya vislumbrarse hacia 1980 (...) El presidente Videla propuso desde la Patagonia una 'actualización' y una 'modernización'... La nueva clase dirigente será formada por quienes acudan a ese llamado. El país espera otra Generación del '80..."*
>
> (Troiani, Osiris, *La Opinión*, 1 de agosto de 1976)

Como puede observarse, desde dictadores genocidas como Videla hasta la inmensa mayoría de la dirigencia política democrática ve rasgos destacables en la Generación del '80.

Sin embargo **nadie puede soslayar que esa generación, que tuvo su máxima expresión en Roca, fue la que impuso un proyecto que adaptó al país a los requerimientos del mercado y los capitales europeos. Tampoco se puede pasar por alto que fue esa dirigencia la que llevó adelante un reparto (robo) de la tierra pública,** que llegaría a escandalizar, incluso, a los representantes de los gobiernos europeos.

Con la Ley Avellaneda se entregaron 198 concesiones por un total de más de 11.000.000 de hectáreas, un promedio de 56.150 hectáreas por familia. La Ley de 1878 de Bonos para la Campaña del Desierto, redimibles por tierras, determinó que más de 5.000.000 de hectáreas fueran a engrosar el latifundio. Con la Ley de Remates de 1882 se entregaron 6.000.000 más de hectáreas y con la Ley de Derechos Provisorios de 1884, se traspasaron otros 3.300.000.

Otro tanto ocurrió con la Ley de Premios Militares, mediante la cual se entregaba hasta 15.000 hectáreas a cada oficial que había participado en las campañas de conquista. Por ejemplo, Alsina recibió 15.000 hectáreas mientras que Roca, por ser presidente de la Nación, se exceptuaría de este beneficio, aunque algún tiempo después aceptaría una donación de 20 leguas cuadradas que le hizo la provincia de Buenos Aires.

En sólo unos pocos años, y gracias a estas leyes, el latifundio se apropió de más de 30 millones de hectáreas del territorio nacional.

A este dato habría que agregarle que, entre 1883 y 1887, el precio de la tierra en Buenos Aires se había incrementado en un mil por ciento, mientras que en Santa Fe y Entre Ríos el alza fue apenas de un 400%.

Esta valoración asimétrica explicaría las diferencias que separaban a los ganaderos bonaerenses –el sector hegemónico– de los terratenientes del interior, como los santafesinos Lisandro de la Torre y Candioti, divergencias que hicieron eclosión con los levantamientos armados radicales de 1890 y 1893.

Como señalara Eugenio Gastiazoro, tampoco existió la tan mentada transparencia y honestidad de la Generación del '80 a la que hacen alusión algunos de nuestros historiadores. En este sentido, no fue casual que al unicato instalado por el roquismo se lo haya rebautizado popularmente como el "uñicato" debido a los grandes robos públicos que lo acompañaron, y que el programa "Paz y Administración" de Roca fuera satirizado lúcidamente por Sarmiento, quien lo calificaría como de "Remigton y Empréstitos".

Roca no acaudilló ningún proceso revolucionario; al contrario, para imponer su proyecto económico y político aplastó todo posible germen de levantamiento. Como veremos más adelante, la oligarquía –aliada definitivamente a los europeos– acalló con represiones todo tipo de resistencia, incluida la de la incipiente burguesía nacional. Esto quedó demostrado en el levantamiento armado de la Unión Cívica de 1890, como así también en las rebeliones radicales provinciales de 1893, hechos en los que esa burguesía participó activamente.

En Santa Fe, la revolución de la Unión Cívica, que estalló en julio de 1893, fue liderada por Candioti –un terrateniente antirroquista– y fue aplastada con la asistencia de fuerzas represivas nacionales.

El propio Candioti y Lisandro de la Torre –también de origen terrateniente pero con posiciones más democráticas– volvieron a levantarse en septiembre de ese mismo año, proclamando en Rosario a Leandro N. Alem como presidente de la Nación. Esta rebelión fue sofocada personalmente por el mismísimo general Roca, quien encarceló a varios de los líderes.

El programa del roquismo fue resistido por los trabajadores de las ciudades, los chacareros, los arrendatarios, aparceros y peones rurales o golondrinas, la incipiente burguesía nacional y hasta por algunas capas de terratenientes que tenían contradicciones con el sector ganadero hegemónico, capas que temían una salida revolucionaria producto de una hipotética unidad de los trabajadores del campo y de la ciudad con la burguesía nacional.

Como ya ha sido mencionado, esta unidad se expresaría en parte –no participaron los obreros de las ciudades– en los dos levantamientos provinciales de 1893, cuando los productores y trabajadores del campo de Rafaela, Reconquista, Humboldt, Cañada de Gómez, Casilda y otras localidades del interior santafesino irrumpieron armados en las ciudades de Santa Fe y Rosario.

Las secuelas del modelo conservador

El único mérito de esta generación fue saber aprovechar las favorables condiciones nacionales e internacionales para sus propios intereses. Las transformaciones impulsadas no fueron contra el latifundio, sino en función de su consolidación. El acercamiento de nuestro país a Europa, bajo la batuta de la oligarquía, trajo la dependencia. Del mismo modo en que en la década menemista, se hablaba de "relaciones carnales" con Estados Unidos, en aquel entonces los opositores definían como "relaciones maritales" a la amistad de Argentina con Europa.

El acercamiento entre países no era –ni es– malo en sí mismo; lo criticable fue que se hizo en función de las necesidades de la oligarquía y del naciente imperialismo y no en beneficio de los intereses del pueblo y la nación.

El relativo éxito económico alcanzado (se extendería hasta la Primera Guerra Mundial) se debió en primer lugar a la demanda internacional de nuestros productos primarios, que originaría una rápida valorización de las tierras arrebatadas a los pueblos originarios. En segundo lugar, a los escandalosos negociados en la contratación de empréstitos extranjeros y el otorgamiento de garantías a los ferrocarriles; y, por último, a la superexplotación de los trabajadores de la ciudad y el campo, donde los grandes propietarios habían impuesto leoninos contratos de arrendamientos y aparcerías.

El boom de la década del '80 fue una gran impostura sobre la que se asentaron las bases del atraso y la dependencia. Si bien durante ese período se registraron importantes inversiones extranjeras, fundamentalmente de origen inglés (pero también de franceses, alemanes y norteamericanos, y en menor medida de belgas e italianos), la estructura impuesta por estas inversiones, junto al predominio de los terratenientes, impidió la capitalización del país, como había sucedido, por ejemplo, en Estados Unidos.

Los franceses, aunque no lograron hacer pie en obras de infraestructura, salvo el ferrocarril de Santa Fe y el puerto de Rosario, iniciaron emprendimientos como el de Bieckert, en cervezas, Rigolleau, en vidrios o Nelson en la industria frigorífica.

Los alemanes fundaron en 1887 la Compañía Telegráfica y la Telefónica del Plata y dos años después la Cervecería Quilmes. Además, sus capitales participaron en la constitución de firmas exportadoras de cereales, como Bunge y Born, Dreyfus o Weil Bruders.

Los estadounidenses entraron al país apropiándose de algunos frigoríficos, sustituyendo la carne enfriada (*chilled beef*) norteamericana por la carne argentina, y sus empresas locales hacia 1910, exportaban a Inglaterra siete veces más que sus frigoríficos de Estados Unidos.

Como se puede observar, ya desde esa época, además de Inglaterra, varias potencias de primer orden se disputaban el control de Argentina. Pero habría que dejar perfectamente aclarado que todas las inversiones realizadas no lograrían que el país alcanzara un desarrollo significativo en la minería o en la industria, como había sucedido en los Estados Unidos.

Es más, en un primer momento ni siquiera hubo un avance significativo en lo agrario. En 1888, Argentina exportaba 340.000 toneladas entre trigo y maíz, frente 8.600.000 de Rusia, 3.900.000 de los Estados Unidos o 1.700.000 de Rumania.

Durante este período, el poder de la oligarquía se consolidó definitivamente: subordinándose a los intereses extranjeros se convirtió en un eslabón fundamental para la dominación imperialista de nuestro país.

Desarrollo ganadero e irrupción de los frigoríficos

Si bien hasta 1900 se exportaban principalmente ovinos en pie, los viajes de "*Le Frigorifique*" y "*Le Paraguay*", realizados en la década del '70 del siglo XIX, habían demostrado que era posible enviar carne congelada a Inglaterra.

A partir de entonces comenzaría un período de creciente demanda de nuestras carnes (principalmente del mercado inglés), lo que motivaría la instalación de los primeros frigoríficos en Argentina. En 1883 se fundaron El Sansinena, ubicado en San Nicolás, un emprendimiento económico de origen nacional, y los dos Anglos, uno en Las Palmas y el otro en Campana, ambos de capitales ingleses.

La instalación de los primeros frigoríficos en Buenos Aires produjo el desplazamiento de los mejores campos a la cría del ganado vacuno. En este período se incorporaron los reproductores ingleses Shorthorn, que mejoraron notablemente la calidad de nuestros productos.

En la pampa húmeda, a principios del siglo XX, se consolidaba la supremacía definitiva del ganado vacuno sobre el ovino. Ya en 1914, los campos bonaerenses albergaban 3.179.000 vacunos y solamente 563.000 ovinos. Una situación totalmente inversa a la registrada cuarenta años atrás, cuando en esa misma provincia había 4.500.000 cabezas de ganado ovino y sólo 1.100.000 de vacunos.

En 1907, con el predominio del ganado vacuno, los estadounidenses introducían un revolucionario método que preserva el aspecto y el gusto de la carne: el enfriado (*chilled beef*). Éste, a fines de la primera guerra mundial, desplazaba totalmente el congelado (*frozen beef*) en las exportaciones a Inglaterra.

El área de cría del ganado vacuno comprendía a las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, San Luis, La Pampa y Santa Fe; y la de engorde, por su proximidad a los frigoríficos, abarcaba el sur de Entre Ríos y Santa Fe, sureste de Córdoba, nordeste de La Pampa y noroeste de Buenos Aires.

En Santa Fe, debido al ya analizado proceso de colonización, la ganadería fue desplazada hacia el norte y el extremo sur. En el norte, los campos de San Cristóbal se convirtieron en el corazón de la zona de invernada. A fines del siglo XIX, la estancia de Saralegui tenía 50.000 cabezas, la firma Murrieta y Cía. 50.000 y La Verde 60.000 vacunos.

Al igual que San Cristóbal, el norte de Castellanos y Las Colonias se transformó en zona de invernada. Esta región, además de abastecer el mercado interno, también exportaba carnes utilizando el ferrocarril que llegaba al extremo noroeste del país, al norte de Chile y a Bolivia.

En 1882, sobre el Río San Javier, al norte del departamento Garay, Cabal instalaba un saladero. Esta actividad, que tuvo su auge en la primera mitad de ese siglo, ya estaba en retroceso en todo el país. De todos modos, este saladero llegaría a tener una demanda anual de 130.000 vacunos criollos. Sin embargo, las restricciones del mercado brasileño junto a la competencia de los saladeros uruguayos perjudicaron enormemente el emprendimiento. Al no poder resistir el avance de la industria frigorífica cerró sus puertas en los primeros años del siglo pasado.

En el otro extremo, en el sur provincial, con la colonización iniciada por el Central Argentino se produjo el rápido desplazamiento del ovino. A pesar de que la industria frigorífica seguía reclamando al mercado ejemplares Lincoln, el ferrocarril favorecería el desarrollo del ganado refinado, por lo que muchos hacendados de los departamentos Constitución y General López pasarían a integrar esa especie de elite ganadera dedicada a la invernada.

En 1924, como parte de su disputa con los ingleses por el control de las exportaciones de carnes, los estadounidenses instalaron un gran frigorífico en la zona de Rosario: el Swift, iniciando lo que para algunos historiadores sería la "guerra de las carnes". En este negocio, los ingleses eran fuertes en Campana, Zárate, Las Palmas, etc., y, en consecuencia, consideraban a Rosario como parte de su área de influencia. Los yanquis, con el Wilson, eran hegemónicos en Avellaneda y Berisso. En respuesta a la decisión norteamericana de radicarse en Rosario, en 1926 los ingleses devolvieron "gentilezas" e instalaron el frigorífico Anglo en Avellaneda. Hacia 1930 había en Argentina ocho frigoríficos de capitales yanquis y seis de los ingleses.

El Swift estableció la primacía de las conservas de carnes enlatadas que terminaría dando un fuerte impulso a la ganadería provincial. A los pocos años se había transformado en la locomotora de la industria frigorífica argentina, llegando a faenar 360.000 vacunos en el año 1927.

Se consolida el estado oligárquico provincial

A partir de 1880, y tal como había sucedido en otras zonas del país, se fue consolidando en Santa Fe el modelo económico impuesto a nivel nacional, lográndose un significativo desarrollo económico.

En el norte, la locomotora llegaba hasta el último confín de la provincia, uniendo Tucumán con el puerto de Colastiné (cercano a la capital provincial). La línea férrea también vinculaba Reconquista con Buenos Aires, y con la llegada del ferrocarril a la localidad de Villa Constitución, la provincia quedaba conectada con la zona de Cuyo.

En 1894, al culminar la gestión de Cafferata, Santa Fe superaba en kilómetros de vías a naciones europeas como Suiza, Dinamarca, Holanda,

Grecia o Portugal y, con excepción de Brasil, tenía más extensión ferroviaria que el resto de los países sudamericanos.

En ese período se creó la Universidad Provincial, se nacionalizaron los estudios del Colegio de la Inmaculada Concepción de los padres Jesuitas y la Congregación Salesiana puso en funcionamiento en Rosario la primera escuela de Artes y Oficios (actual Colegio San José).

En 1891 y 1892 se consiguieron importantes logros en la lucha contra la langosta. En esos dos años se habían abatido sobre la provincia las más importantes mangas de esa plaga de toda la historia, con el consabido riesgo para los campos. Fue tan exitoso el combate que se logró alejar durante años el peligro, sentándose las bases para la lucha contra la calamidad.

También en esa época se registró el pico más alto de inmigrantes ingresados a la provincia. En 1886, bajo el gobierno de Gálvez, las colonias rurales eran 98, y en 1893, durante la gobernación de Cafferata, se elevaron a 311. Además, durante ese período se aceleraría la construcción del puerto de Santa Fe.

Por Ley provincial del 31 de diciembre de 1890, se crearon los 18 departamentos en que se subdividiría la provincia, con la consiguiente reestructuración de las cámaras legislativas. En 1907 se sancionó la última división departamental hasta hoy vigente, creándose el departamento 9 de Julio con partes de los territorios de Vera y San Cristóbal. Debido al predominio de los autonomistas, la inmensa mayoría de los funcionarios de la administración pública pertenecían al partido hegemónico.

Las gobernaciones de Gálvez y Cafferata fueron las que más avanzaron para imponer en Santa Fe el programa de la Generación del '80 y durante sus gestiones se terminaron de consolidar las bases del estado oligárquico provincial.

En 1893, al imponerse Roca sobre los revolucionarios santafesinos, se cerró un ciclo de levantamientos de la Unión Cívica Radical. Los levantamientos estuvieron orientados contra la expresión política del régimen, pero no cuestionaron la base económica que lo sustentaba, ni la propiedad terrateniente, ni la imperialista. Si bien de hecho las revoluciones mencionadas expresaban la necesidad de instaurar un régimen burgués y democrático, las mismas carecían de un programa específico al respecto.

Tras la derrota radical, no fue casual que el hombre más admirado por Roca en la provincia, Luciano Leiva, ganara las elecciones del 11 de febrero de 1894, derrotando a la Unión Popular. Leiva –sin ser galvista– retomaría la política de Gálvez interrumpida por la revolución radical de 1893. Con la firme decisión de acallar el movimiento de protesta social, el nuevo gobernador profesionalizó la policía y construyó la cárcel modelo de Rosario. También durante su gestión, en 1897 se instalaría la Diócesis de Santa Fe, siendo Agustín Boneo su primer obispo.

Durante las gobernaciones de José Iturraspe (1898-1902), Rodolfo Freyre (1902-1906), Pedro Echagüe (1906-1910) e Ignacio Crespo (1910-1914) se materializaron los lineamientos del programa galvista, inspirados en el modelo

nacional instaurado en 1880. A pesar de la clara orientación oligárquica impuesta, habría que decir que durante la gobernación de Iturraspe se bajaron los impuestos que gravaban la producción agrícola y se restituyeron los derechos municipales a los extranjeros (cercenados en 1890 por los progresistas "democráticos" de la Generación del '80), las dos principales banderas que habían enarbolado los colonos en las revoluciones de 1893. Resulta evidente que estas dos medidas estuvieron vinculadas al creciente descontento de los productores rurales, motivado por los altos precios de los arrendamientos, y el generalizado repudio hacia las autoridades designadas desde la capital provincial. Descontento que haría eclosión en 1912 con el Grito de Alcorta.

A la vez, durante esos años se desarrollaron importantes luchas de los trabajadores, que permitieron a los empleados del estado lograr incrementos salariales en los sectores más castigados por el ajuste de 1890-1894. Docentes, policías y empleados del Poder Judicial recompusieron sus ingresos.

Con la crisis de 1890 irrumpe el radicalismo

En 1886, cuando Juárez Celman asumió la presidencia de la Nación, la oligarquía se ilusionó pensando que se había iniciado un período de prosperidad indefinida. En sólo tres años se multiplicaron los kilómetros de vías, la inmigración y la producción de carnes y lanas que aceleraron la valorización del precio de la tierra. Además, las importaciones crecieron notablemente. Debido a la agudización de las disputas anglo-francesas y a la creciente ingerencia alemana, se había abierto una alocada carrera por colocar fondos en el país, lo que derivó en un formidable endeudamiento nacional.

Durante ese período se aceleró la emisión de papel moneda –40% en 1886– y avanzaron de manera importante las concesiones garantizadas al capital extranjero. El entreguismo fue total, ofreciéndose en venta hasta las obras sanitarias.

Con los préstamos del exterior se cubría tanto el creciente déficit comercial como los servicios de la deuda. Éstos representaban en 1888 el 50% del monto total de las exportaciones, lo que hacía presagiar que ni bien se interrumpiera la afluencia de préstamos se cortaría la "cadena", hecho que sucedió en 1889 generando la primera gran crisis de la Bolsa.

En ese año, se evaporaron rápidamente los dineros de los empréstitos. Aquel peso oro de 1884 pasó a valer tres pesos papel en 1890. Se interrumpió el crédito bancario y debido al sistema legal vigente no se podía emitir dinero.

En 1890, en el periódico *El Obrero*, el dirigente socialista Germán Avé Lallemant analizaba el modo en que el capital utilizó el caudillaje de la oligarquía para tender sus redes. Mientras ésta aceptó la porción de las riquezas que le fue asignada, todo marchó sobre ruedas. En cambio, cuando abusó de su poder para proteger a sus propios miembros de las consecuencias de la ley sobre libre competencia, se abrió un período en el que no se respetaron las leyes capitalistas y se produjeron enfrentamientos. Y concluía:

> *"...Entonces el capital internacional le echó el guante al caudillaje y estalló la guerra. La Bolsa, este templo del gran sacerdocio capitalista, hostilizó al gobierno caudillero por medio del agio, del precio del oro, y la completa ignorancia de nuestros hombres de Estado en todo lo que a la estructura del capitalismo concierna, llevó al país a la bancarrota..."*
>
> (Lallemant, Germán Avé, *La clase obrera y el nacimiento del marxismo en la Argentina*, introducción y selección de Leonardo Paso, Ed. Anteo, Buenos Aires, 1967. Citado por Gastiazoro Eugenio, *Op. Cit.*)

Simultáneamente a la crisis, se había ido incubando un amplio movimiento de protesta social que abarcaba a trabajadores urbanos y rurales, productores agropecuarios, la pequeña burguesía y la incipiente burguesía nacional donde predominaba un estadio artesanal. Solamente en 1886 los salarios habían perdido un 40% con relación al costo de vida. Esto llevaría a que los trabajadores de sectores como panaderos, maquinistas de trenes, carpinteros, albañiles, sombrereros, ferroviarios, etc., desarrollaran novedosas formas organizativas que facilitarían un proceso de importantes luchas, fundamentalmente por aumentos de salarios.

Paralelamente, comenzó a desarrollarse un amplio movimiento democrático, que excedía el marco de las reivindicaciones sectoriales, del que participaban núcleos de la pequeña burguesía urbana, fundamentalmente estudiantes y profesionales. Rápidamente se agregaron los trabajadores, los pequeños comerciantes, patrones y hasta sectores cada vez más importantes de la propia oligarquía e inclusive algunos "inversores" extranjeros.

Debido a que estos dos últimos sectores lograron hegemonizar el heterogéneo movimiento, la revolución radical de 1890 no puso en la mira la base económica que sustentaba el régimen, ni la propiedad terrateniente, ni imperialista. Se atacaba solamente a Juárez Celman, la expresión política del sistema. Del movimiento participaron Bernardo de Irigoyen y Aristóbulo del Valle junto a figuras ilustres de la oligarquía como Alvear, Lanusse, Pereyra Iraola, Beccar Varela, etc., que tuvieron un papel destacado en los sucesos revolucionarios del '90.

El ala más contestataria del movimiento estaba encabezada por Leandro N. Alem, que representaba a los sectores más radicalizados de la pequeña burguesía urbana (en realidad la burguesía nacional no había logrado un desarrollo que le permitiera plantear un proyecto industrial autónomo). Alem, influenciado por la Revolución Francesa, fue radicalizando su discurso, dejó de hablar de "personas" e impuso el término "régimen".

Al tiempo que definía a sus ideas como "radicales", llegó a plantear que prefería:

> *"...una vida modesta, autónoma, a una vida esplendorosa sometida al tutelaje..."*
>
> (Gastiazoro, Eugenio, *Op. Cit.*)

Pero sus colaboradores, en especial su principal amigo, Aristóbulo del Valle, nunca dejaron de ser la expresión de los hacendados. Del Valle denunció la falsificación de la moneda, poniendo además en la mira tanto el despilfarro del producto de los empréstitos como el manejo de la obra pública; sin embargo, nunca cuestionó el endeudamiento ni la deuda pública, sino el uso de los fondos. Es como si de la pasada década menemista se concluyera que no estuvieron mal las privatizaciones, sino que fueron equivocadas las formas en que se realizaron (despilfarro, coimas, etc.).

Los grandes terratenientes retuvieron para sí la hegemonía del movimiento revolucionario de 1890. Tanto la incipiente burguesía nacional como la pequeña burguesía y los sectores populares fueron de arrastre detrás de sus intereses.

Sólo así puede explicarse que las posiciones de Alem –que en ningún momento planteó una asonada militar con apoyo civil, sino que era partidario de dar protagonismo al pueblo– hayan sido dejadas de lado. La hegemonía terrateniente también explica que los mitristas, siendo minoría en el movimiento y partidarios solamente de separar a algunos hombres del gobierno, hayan tenido la dirección militar con el general Manuel Campos. Éstos, aunque aceptaron que Alem fuera proclamado presidente provisional, obtuvieron del sector revolucionario el compromiso de no postular como candidatos en las futuras elecciones a los miembros del nuevo gobierno.

El 26 de julio estalló la revolución. El mitrismo logró imponer su plan militar y, contra la opinión de Alem, que planteaba una ofensiva generalizada, la totalidad de las fuerzas rebeldes se concentraron en el Parque, en una táctica defensiva. Debido a esto, a pesar del gran apoyo popular obtenido, e incluso después de rechazar varios intentos militares de las fuerzas gubernamentales, esa noche las posiciones de ambos bandos se mantenían estables. Pellegrini y Roca lograron persuadir a Juárez Celman para que dejara la ciudad.

Como para los mitristas la demostración estaba hecha, en la madrugada del 27 se acordó un alto del fuego a pedido del propio general Campos, quien arguyó falta de municiones. Esto fue sólo el preludio de la posterior rendición. La traición del mitrismo generó confusión en las fuerzas rebeldes ya que los radicales, civiles y militares, se opusieron al cese del fuego prosiguiendo con los combates. Mientras tanto los mitristas seguían negociando la rendición condicionada y el gobierno lograba traer unidades militares del interior, que terminaron favoreciendo los argumentos capituladores de los mitristas. El día 29, a las 11, sobrevino la rendición total y definitiva.

Ni uno solo de los acuerdos asumidos por Campos con Alem se habían cumplido. No se encarceló a Roca ni a Pellegrini; no se tomaron las estaciones ferroviarias ni el Arsenal de Guerra y para muchos, tras todos estos hechos estuvo la mano de Roca.

Esta experiencia demostró que fue un error de la incipiente burguesía nacional, la pequeña burguesía y los sectores populares que estaban en la

base de la Unión Cívica, haber depositado la dirección del movimiento en manos de los grandes hacendados cívicos. Pero más grave aún fue entregar la dirección militar de la revolución al mitrismo y no haber movilizado al pueblo. Esto posibilitó que Roca y Pellegrini –los grandes enemigos de la causa popular– se dieran el lujo de "alentar" la revuelta primero, para luego aparecer como "mediadores".

No obstante esto, la revolución del '90 y sus efectos no pudieron ser acallados por la derrota. Al año siguiente se produjeron nuevos levantamientos militares tanto en Córdoba como en Catamarca, y la triunfal gira nacional que realizó Alem lo proyectó como la gran figura política popular argentina. Todos estos acontecimientos fueron el preludio de los grandes levantamientos radicales de 1893.

El 10 de abril de 1892 triunfaba la fórmula acuerdista encabezada por Luis Sáenz Peña y respaldada por Roca y Pellegrini. Una semana antes, pretextando una conspiración, se había decretado el estado de sitio con el objetivo de detener y deportar al Uruguay a los principales líderes radicales, entre ellos Leandro N. Alem. Pero como quedó demostrado con el apoteótico recibimiento popular que tuvo Alem en su retorno al país, la revolución aún estaba viva, por lo que se aceleraron los preparativos que desembocarían en los sucesos de 1893.

En agosto se levantó Corrientes y en septiembre Tucumán, Santiago del Estero y Santa Fe escogieron ese camino. Al igual que en 1890, la dirección de estos movimientos fue controlada por sectores de la oligarquía. En Santa Fe la encabezaron Candioti y Lisandro de la Torre que proclamaron, en Rosario, a Alem como presidente. La rebelión fue sofocada rápidamente por Roca, que capitaneó personalmente la represión de las fuerzas federales en esta ciudad del sur santafesino.

La derrota de 1890 y la de los levantamientos radicales posteriores, cerraron toda posibilidad de iniciar un proceso capitalista "puro" e independiente en nuestro país.

A partir de 1890 comienza un período revolucionario

La crisis financiera de 1889 afectó profundamente la economía provincial y sobrevino un desastre económico.

El movimiento juvenil, iniciado en el Jardín Florida de Buenos Aires, que dio origen a la Unión Cívica de la Juventud, tuvo una amplia repercusión en la provincia de Santa Fe. En medio de una catarata de quiebras comerciales, acompañadas de todo tipo de comentarios sobre peculados y coimas políticas, los jóvenes reclamaban la libertad de sufragio y una correcta administración de los dineros públicos. A nivel local se cuestionaba duramente al presidente del Banco Provincial, a quien se acusaba de retribuir con dineros de la institución las adhesiones políticas.

El erario no disponía de fondos para afrontar los sueldos de los empleados estatales. Esto llevó al gobernador Cafferata a emitir bonos por tres millones y medio de pesos, sin autorización de la Legislatura, para afrontar esta obligación. La economía provincial se encontraba en una etapa caótica.

En medio de esta situación se produjo el levantamiento del 26 de julio de 1890. Rápidamente un grupo de santafesinos encabezados por Candioti, Lisandro de la Torre, Belisario Sívori y Agustín Landó apoyaron esperanzados la asonada, en la que vislumbraron la posibilidad de un cambio.

Por su parte, el ex gobernador Gálvez junto al gobernador Cafferata, movilizaron las fuerzas militares del sur logrando reunir más de mil hombres para aplastar la revolución. Era tan grande la afinidad de Juárez Celman con los gobernantes santafesinos que hasta se llegó a discutir la posibilidad de establecer el cuartel general oficial en la ciudad de Rosario, idea de la que se desistió debido a la rápida rendición de los rebeldes.

La sintonía que se observaba entre el gobierno provincial y nacional no se expresaba en la población, que el 6 de agosto salió a festejar masivamente tanto en Rosario como en Santa Fe la renuncia de Juárez Celman. "*¡Ya se fue!, ¡Ya se fue!, el burrito cordobés*" coreaba el ingenio popular. La alegría de los ciudadanos llevó a Roca a acuñar la famosa frase: "*En Rosario hasta las piedras son radicales*".

Producto de la presión popular, que reclamaba transparencia en el manejo de los fondos públicos, el 17 de septiembre fue intervenido el Banco Provincial. El Poder Ejecutivo Nacional autorizó a la Comisión Investigadora –creada por la Provincia para aclarar presuntas irregularidades de la institución– a denunciar ante la justicia la violación de la Ley de Bancos. El escándalo era gigantesco ya que, **todo el oro que había conseguido la Municipalidad de Rosario en Europa por medio de empréstitos, resultó canjeado por billetes que fueron a parar a las arcas de empresas insolventes.**

Además, en el informe acusatorio se imputaba a los administradores del banco la responsabilidad de haber hecho circular trece millones de pesos nuevos cuando, en realidad, sólo tenían facultades para emitir cinco.

Con relación al vaciamiento, en su obra *"Historia de Rosario. 1689-1939"* Juan Álvarez explica que también "*aparecieron balances dobles registrándose la falta de protesto de la mayoría de los documentos vencidos*". Se comprobó que depósitos de la Municipalidad fueron puestos a nombre de un particular y que un director del Banco Provincial fue favorecido por gruesos préstamos. Por último, relata Álvarez que la Comisión denunciaría que "*cinco particulares*" recibieron créditos por valor de once millones y medio en papel, y dos y medio en oro, logrando de esta manera acaparar la mayor parte del crédito bancario.

Es indudable que sobraban los motivos para condenar a los acusados; pero a poco de conocido el informe, el Poder Ejecutivo retiró la intervención al Banco Provincial, por lo que las denuncias quedaron paralizadas.

Esta situación sería un verdadero anticipo de lo que pasaría cien años después, cuando como consecuencia de escandalosos negociados, el Banco Provincial fue vaciado y las conclusiones a las que arribó la Comisión Nogueras –encargada de investigar el vaciamiento– no fueron tenidas en cuenta. Es más, el entonces gobernador Jorge Obeid, a pesar de la cerrada oposición de la mayoría de las fuerzas de la producción y del trabajo, privatizó la institución entregándosela a los hermanos Rhom, luego prófugos de la justicia local e internacional, acusados de asociación ilícita, vaciamientos, estafas reiteradas y varias causas penales más.

Lamentablemente, el banco de los santafesinos que, a diferencia de la banca extranjera, había asistido desde su fundación tanto al agro como a la industria, se transformó en el botín de los sectores de poder. Refieren los memoriosos que en aquella época circulaba una anécdota que relataba que un poeta "anónimo" de extracción oligárquica había logrado sintetizar en una sola frase el comportamiento que tuvieron las altas clases sociales santafesinas con relación al banco. Cuentan que el mencionado poeta, tras obtener un crédito y ya con el dinero en el bolsillo, después de atravesar la puerta de salida de la casa central de Rosario, observando el edificio sentenciaba: "*horrible monstruo de mármol, jamás me volverás a ver*". El imaginario popular fue transmitiendo este episodio de diferentes maneras, pero todas las versiones concluían en la siguiente moraleja: desde su fundación, las arcas del Banco Provincial fueron saqueadas permanentemente por los sectores vinculados al poder.

La paralización de la investigación del vaciamiento del Banco Provincial y el aumento de las tarifas de la compañía de cloacas y desagües, terminaron exacerbando los ánimos de la población, a la vez que el clima político se enrarecía. El 9 de septiembre, a raíz de un enfrentamiento en la intersección de Buenos Aires y Santa Fe –hoy Plaza 25 de Mayo– entre simpatizantes de la Unión Cívica con los autonomistas, las fuerzas de seguridad desataron una embestida de la que participaron efectivos de la cañonera "*Bermejo*". El saldo fue de seis muertos y decenas de heridos.

En 1891, en Rosario, la Unión Cívica proclamó la fórmula Bartolomé Mitre - Bernardo de Irigoyen. A su regreso de Europa, como en todos los momentos claves de la historia, el general Mitre llegó a un acuerdo con Roca que llevaría a la Unión Cívica a dividirse en Radicales y Acuerdistas.

La situación económica de la mayoría de la población era crítica. Hacia 1890 también las arcas de la Municipalidad de Rosario atravesaban una realidad comprometida, motivo por el cual la Plaza López era concesionada con el objetivo de conseguir algunos recursos. Un particular instalaba un gran despacho de bebidas y varias canchas de bochas. Además, y como producto del hambre popular, la Municipalidad inauguraba en el predio las primeras cocinas públicas, desde las que entregaba raciones a los menesterosos a cambio de vales que los particulares adquirían para darlos de limosna al pobrerío.

Era la época de la intendencia de Agustín Mazza. Este italiano dejó un imborrable recuerdo entre los carenciados rosarinos. Preocupado por el sufrimiento de los necesitados, se ocupaba personalmente de procurar mantas, comida y albergue para todos los desvalidos de la ciudad. Además, a pesar de la crisis, se preocupó por la obra pública, fundando el barrio Sorrento y el Mercado Modelo. Pero muchos rosarinos lo recuerdan por ser el intendente que donó los dos leones que hasta el día de hoy adornan la entrada del palacio municipal.

El 12 de octubre de 1892, Luis Sáenz Peña asumió la presidencia de la República. En Santa Fe la oposición radical era calificada como "*importante y temible*". En la convención de noviembre de ese año, los radicales provinciales se definían claramente contra el "régimen".

La crisis abierta en 1889 no amainaba. Las malas cosechas, producto de la plaga de langostas, junto a los bajos precios de los productos, aumentaron la irritación de los labradores y hacendados. Estos hechos, sumados al hambre que padecían vastos sectores que habitaban en las ciudades, coadyuvaron al endurecimiento de las posiciones radicales.

Triunfo de la revolución y contraofensiva del "régimen"

Con estas sombrías perspectivas se ingresaba al año '93. Como ya ha sido reflejado, en el mes de febrero algunos grupos de colonos –fundamentalmente extranjeros– se levantaban en armas en Humboldt. El movimiento recibiría el apoyo de Esperanza, San Jerónimo y otras localidades próximas a la capital provincial. Los sublevados exigían la devolución del voto a los extranjeros y la eliminación de los impuestos que gravaban la producción agrícola. En muchas colonias los vecinos comenzaban una huelga impositiva.

El movimiento de protesta fue reprimido por orden de las autoridades provinciales y sus cabecillas fueron detenidos. Sin embargo, fueron indultados a los pocos días como consecuencia de la explosiva situación social.

Para tener una idea aproximada de la magnitud de la crisis, habría que recordar que la misma no estaba concentrada en las nuevas colonias del centro-sur sino que se había generalizado al conjunto de la provincia. Por ejemplo la recaudación de la Aduana de Rosario en 1893 fue un 55% más baja que la de 1889.

La disminución de los gastos de la Provincia y de la ciudad de Rosario reflejó la estrepitosa caída de la recaudación. Sin embargo, ambos presupuestos continuarían en déficit, a pesar de las emisiones de títulos y bonos que terminarían resultando insuficientes para nivelarlos. La situación provincial y local era tan grave que hasta se llegó a pagar con "papel sellado" ("bonos") a los empleados de la administración de justicia, que se veían obligados a venderlos a los litigantes con importantes descuentos.

▲ Colonos de la localidad de Gálvez durante los sucesos revolucionarios de 1893.

A nivel nacional, y argumentando razones presupuestarias, Aristóbulo del Valle, ministro de guerra de Juárez Celman, iniciaba un plan de reducción de las fuerzas de seguridad de las provincias.

El gobernador Cafferata acompañó la iniciativa pasando a disponibilidad a 100 celadores de Santa Fe y 150 bomberos de Rosario. A la hora de analizar los sucesos revolucionarios de ese año, éste es un dato importante, ya que los hechos transcurrieron en un período en el que el estado disponía de un escaso, mal entrenado y mal pago personal policial. Un comisario ganaba 150 pesos, en tanto los agentes bomberos o vigilantes cobraban apenas 30 ó 40 pesos.

Como se desprende de la experiencia histórica mundial, el éxito en el terreno militar de los movimientos revolucionarios depende mucho del poder de fuego de cada bando. Es muy difícil, o casi imposible, que una revolución como la del '93 hubiese triunfado si los revolucionarios no lograban dividir a las fuerzas de seguridad del estado, neutralizando un sector y logrando que otro apoyase activamente el levantamiento popular. Si bien en 1893 esto no sucedió, indudablemente la escasez de fuerzas represivas frente a la magnitud de la insurgencia terminó facilitando el triunfo de la revolución.

En Rosario, y en medio de un clima de agitación, se comenzaban a usar las bombas lanzapanfletos que disparaban boletines con las novedades políticas. Cualquier movimiento de tropas, mitin, renuncia de ministros, etc., eran motivo de la aparición "extra" de diarios que los canillitas voceaban alarmados y vendían a 10 centavos.

Los estudiantes, contagiados por el clima, repudiaban con estruendosas silbatinas a las autoridades frente a la sede de la Jefatura Política –Buenos Aires y Córdoba– cuando regresaban en tranvía desde el Colegio Nacional Nº 1. En las calles de Rosario se popularizó la consigna "*es acción santa matar a Roca*". Se vivía un clima revolucionario.

El 12 de julio de 1893, la intendencia prohibía los llamados dramas criollos, representados en un circo ubicado en calle Mitre entre Córdoba y Santa Fe. El motivo argumentado era que tales espectáculos, simples arreglos del "*Juan Moreira*" de Eduardo Gutiérrez, incitaban al público a reaccionar contra las autoridades sacando la daga o el trabuco, acción que repetían los asistentes a la salida de cada función ante los vigilantes del orden.

Mientras tanto, los revolucionarios llamaban en forma secreta a conseguir armas y llevarlas a la Casa de Vila, alquilada para una pacífica sociedad filarmónica.

Al respecto, Juan Álvarez cita un comentario del diario *La Capital*:

> "*...Varios de ellos (por los revolucionarios) se preparaban a manejarlas, concurriendo al excelente stand que la sociedad Tiro Suizo mantiene sobre la calle San Martín, camino del Saladillo...*".
>
> (Antecedentes sobre esta asociación, en *La Capital*, abril 6 de 1940. Citado por Álvarez, Juan, *Historia de Rosario 1689-1939*, UNL, Santa Fe, 1981)

La revolución, minuciosamente preparada, estalló el 29 de julio mientras se realizaba un concierto y baile en la sociedad alemana Lyra, del que participaba una parte importante de las autoridades locales. Apenas pasada la medianoche, los grupos rebeldes dando *¡mueras!* al gobierno provincial, iniciaron el ataque a la Jefatura Política desde los distintos barrios de la ciudad.

La Junta Revolucionaria dirigía el operativo desde el hotel Universal, en tanto José Chiozza, Lisandro de la Torre y Mariano Candioti, armas en mano, encabezaban la asonada cívico-militar.

Las fuerzas gubernamentales se concentraron en la Jefatura Política, en el Palacio Municipal –en construcción– y en la casa del jefe de policía Manuel Cilveti, pero luego de 38 horas de duros combates debieron capitular.

El total de muertos, entre ellos dos comisarios, ascendió a un centenar y los heridos a más de doscientos cincuenta. El edificio de la Jefatura Política quedó acribillado a balazos y en lo alto llegó a flamear, junto a la bandera nacional, el estandarte rojo y blanco de los radicales. Mientras tanto, según refieren las crónicas de la época, "*en medio del júbilo popular resonaban clamorosas dianas que anunciaban la victoria*".

El día 30, cuando aún no habían cesado los combates en Rosario, en el Senado Nacional se libraba una batalla parlamentaria en torno a la intervención de Santa Fe. El ministro Del Valle apoyaba el pedido de su colega de Interior Luis V. López de intervención, basándose en los sucesos revolucionarios y de corrupción (aludiendo al saqueo del Banco Provincial). Desde otra

▲ Frente de la Jefatura Política de Rosario durante los sucesos revolucionarios de julio de 1893. Junto a la bandera nacional flamea el estandarte de los radicales. (Foto Escuela Municipal de Museología de Rosario).

posición el senador por Santa Fe, José Gálvez, argumentaba su negativa sosteniendo que los levantamientos fueron obra de extranjeros y criminales. Del Valle declaraba que se cortaría las manos antes de poner su firma a una ley para sostener a un gobernador (por Cafferata) que se derrumbaba y aludiendo al Banco Provincial exclamaba "*¡Por qué no aparecen los catorce millones!*".

Luego de un arduo debate, el Senado autorizaba al Poder Ejecutivo a intervenir la Provincia, más al pasar el tema a Diputados, el pedido era rechazado por la gran mayoría.

En tanto, tras lograr apoderarse de la ciudad, los revolucionarios que disponían del control del ferrocarril, enviaron a Santa Fe un convoy con trescientos hombres armados al mando de Lisandro de la Torre y Candioti con el objetivo de derrocar al odiado "régimen" conservador autonomista. El arribo de los insurgentes provocó la renuncia de Cafferata asumiendo Mariano Candioti la Gobernación y Agustín Landó la Vicegobernación. Por su parte, Lisandro de la Torre, Galisteo y Lejarza eran nombrados ministros, en tanto al frente de la Jefatura de Rosario quedaba Belisario Sívori, revolucionario y hombre de acción, muy respetado entre los sectores populares. **En la provincia habían triunfado los "cívicos"**.

El prestigio de la revolución y el temor a una catarata de sublevaciones terminarían por persuadir al gobierno de Sáenz Peña y al parlamento nacional de decidir la intervención a Santa Fe, que era votada por ambas

cámaras el 15 de agosto. Tres días después, Baldomero Llerena sería nombrado comisionado federal.

Los revolucionarios, por intermedio de Joaquín Cullen, intentaron impedir la intervención ante la Suprema Corte, presentando un recurso de inconstitucionalidad de la ley votada por el Congreso. El alto tribunal, controlado por los conservadores, desestimó el pedido y los revolucionarios entregaron sin ningún tipo de objeciones el gobierno a Llerena.

El 22 de agosto culminaba la efímera gobernación de Candioti dejando en evidencia las vacilaciones de los dirigentes revolucionarios, quienes, al no poner en la mira el modelo impuesto en 1880, sólo cuestionaban al "régimen" exigiendo reivindicaciones democráticas. Su reformismo determinó que finalmente respetaran los acuerdos que tenían con un sector del gobierno nacional (Aristóbulo del Valle) y aceptaran la intervención.

A pesar de la cuestionable decisión del radicalismo local, y debido al masivo respaldo popular que tenían en la provincia, la dirigencia nacional decidió trasladar el centro de operaciones a Rosario. El 24 de septiembre se ensayaron rebeliones simultáneas en Rosario y Santa Fe. En el sur se sublevó el Batallón 11, mientras que idéntica actitud tomaría en Santa Fe el 3 de Línea, con apoyo civil acaudillado por Candioti.

Como ya se ha analizado, a la ciudad de Santa Fe ingresaron los colonos de Esperanza y pueblos vecinos empuñando horquillas y escopetas. Ante la gravedad de la situación, el interventor de la Provincia solicitó refuerzos de tropas, que arribaron rápidamente procedentes de Paraná. Luego de varios días de cruentos enfrentamientos, en los que murieron muchísimos revolucionarios, nuevamente fue arriado el pabellón rojo y blanco de los cívicos.

En cambio, en Rosario, totalmente desguarnecida desde el punto de vista militar, el 24 de septiembre los revolucionarios volvieron a apoderarse del gobierno. Previamente, Leandro N. Alem se había instalado en esta ciudad junto a un grupo de dirigentes nacionales y en pocos días, recorriendo personalmente las calles de la ciudad, lograría formar un ejército de más de 5.000 civiles, organizados en batallones que se conformaban en torno de los clubes radicales existentes.

En ciudades y pueblos del interior, como Cañada de Gómez, Melincué, San Lorenzo, Rafaela, Gálvez, Helvecia y otras localidades, fundamentalmente del sur provincial, esta experiencia se repetía y generalizaba. Recordemos que en cada colonia los campesinos designaron a sus gobernantes exigiendo al poder central que aprobara la autonomía provincial.

Algunos sectores vinculados a la escuadra de mar habían comprometido su apoyo al levantamiento. Se repartieron armas entre la población y se bloquearon las vías férreas para impedir el avance de varias divisiones adictas al gobierno nacional provenientes de Córdoba, Tucumán y Buenos Aires, estas últimas comandadas por el mismísimo general Roca.

Pese al apoyo prometido de la Marina, fueron los navíos progubernamentales *"Independencia"* y *"Espora"* los que el día 29 bombardearon la ciudad e intercambiaron ataques con el barco rebelde *"Los Andes"*, recientemente arribado, y que rápidamente quedaría fuera de combate. Tras los ataques, los revolucionarios abandonaron la Jefatura Política que fue ocupada por los marinos gubernamentales. Luego de duros combates, las tropas procedentes de Tucumán comandadas por el general Bosch ocuparon Rosario deteniendo a Candioti.

El interventor Baldomero Llerena fue reemplazado por Luciano Leiva, ex ministro de Cafferata, quien desató una implacable persecución sobre los revolucionarios, especialmente los agricultores. Las colonias fueron escenarios de periódicos saqueos llevados adelante por bandas armadas de la oligarquía encabezadas por Lacroix, Larrechea y Arteaga que, además de asesinar opositores, destrozaban todo a su paso, incluidas las cosechas. Las autoridades impuestas por los campesinos fueron reemplazadas por hombres fieles al autonomismo.

Tras el arresto de Alem, comenzaría un proceso judicial donde el líder declaraba que había venido a ponerse al frente de la revolución y no necesitaba defensor. Asumiendo la responsabilidad que como jefe revolucionario le correspondía, no contestó preguntas y de sus labios no salieron nombres ni direcciones que comprometieran la seguridad de sus compañeros de ruta, poniendo de relieve la dignidad que lo caracterizó como dirigente político.

Luego de distintas batallas judiciales, donde no se le respetaron los fueros legislativos, recuperó su libertad por la Ley de Amnistía de 1895. Previamente, había sido reelecto senador por Capital.

La enorme trascendencia que tuvieron los sucesos acaecidos en Santa Fe durante 1893 merece ser estudiada minuciosamente, a fin de arribar a conclusiones que permitan explicar las causas de la derrota del movimiento revolucionario.

En este sentido, y en primer lugar, el movimiento revolucionario gozaba de un masivo apoyo popular, fundamentalmente de las clases más afectadas por la crisis, entre ellas la incipiente burguesía nacional, con un desarrollo importante en Rosario. Este respaldo se expresaba en las grandes ciudades y también en el campo. Sin embargo, y debido a la dirección prooligárquica que tuvo la protesta, los sectores socialistas y anarquistas observaron con recelo el movimiento no participando del mismo, a pesar de que, como ya señalamos, había generado enormes expectativas entre los sectores populares, no sólo de la provincia sino del resto del país. A tal punto se había nacionalizado el enfrentamiento que la batalla final se dirimió en Rosario, participando de la misma los dos hombres que dominaron la escena política y militar de esos años: Alem y Roca.

En segundo lugar, y tal como se ha analizado, habría que señalar que el movimiento revolucionario de 1893 no puso en la mira ni la propiedad

terrateniente, ni imperialista, o sea que no atacó la base económica del régimen. Su accionar se centró en reclamos democráticos y contra la corrupción. Es más, los revolucionarios tenían un cierto grado de afinidad y acuerdo con un sector del poder central (Aristóbulo Del Valle), lo que llevaría a que ubicaran como objetivo principal de su accionar al gobierno provincial y terminaran aceptando la intervención de la Provincia.

Si bien tanto en la ciudad como en el campo se gestó un movimiento de miles de comprovincianos armados, éstos delegaron la dirección del mismo en hombres que, a pesar de tener contradicciones con el modelo y con la elite de la aristocracia ganadera bonaerense hegemónica, provenían del riñón de los terratenientes locales. Candioti, Lisandro de la Torre o Landó expresaban a los grandes comerciantes, como así también a los propietarios de enormes extensiones de tierras y no a la incipiente burguesía nacional. Hasta el día de hoy, si se verifica la lista de los miembros de la Comisión Directiva o la Comisión de Carreras del Jockey Club de Rosario, seguramente aparecerá algún descendiente de Agustín Landó. Esto fue así a lo largo de los más de 100 años de historia de esa institución.

Para concluir, se podría afirmar que, al igual que lo sucedido nacionalmente en 1890, cuando se repasan los sucesos locales se corrobora que la clave de la derrota de los revolucionarios hay que ubicarla en los intereses de clase que representaban los líderes del proceso. A diferencia de otros sectores que participaron activamente en la protesta, la dirigencia de la revuelta no cuestionaba el modelo impuesto en 1880. A la vez, como sosteníamos en el capítulo anterior, la derrota de 1893 cerró toda posibilidad de que se iniciara un proceso capitalista autónomo en nuestro país.

El papel del movimiento obrero en las revoluciones de 1893

Como se señalaba en el capítulo anterior, el movimiento obrero de Rosario observó con recelo los acontecimientos revolucionarios. En realidad, sus dirigentes desconfiaban, y con atendibles razones, de la dirección del mismo.

A pesar de que ya en 1871 los serenos –que custodiaban la ciudad de las andanzas de los malandrines– habían constituido el primer sindicato local, protagonizando la primera huelga en respuesta al atraso de tres meses en el pago de sueldos, el proceso de organización sindical fue complejo.

Los aguateros, en su gran mayoría vascos, que acarreaban y distribuían el agua que recogían del Río Paraná, obtuvieron en 1877 el primer triunfo de los trabajadores organizados de la provincia. Por una reglamentación del municipio, la distribución se concentraba en un único tanque de agua, lo que motivó que se duplicara el costo del servicio. Ante esta medida los aguateros iniciaron una huelga por tiempo indeterminado, logrando que luego de treinta días de paro el municipio reviera la reglamentación. También

durante ese período se sucedieron huelgas de tipógrafos, panaderos, peones, etc., que tuvieron suerte disímil.

El gremio de los aguadores fue el primero en realizar una huelga triunfante en Rosario (Biblioteca y Archivo del Museo Histórico Provincial "Dr. Julio Marc" - Colección Fotografías).

Pero la protesta que realmente conmovió tanto a la ciudad como al país fue la del sindicato "La Fraternidad". La huelga se precipitó cuando la locomotora piloteada por el maquinista Carlos Smith embistió y mató a Pedro Alsamendi. A pesar de que Smith accionó el freno dejando clavada la máquina, no pudo evitar la tragedia, razón por la cual fue detenido y conducido a Buenos Aires.

Como no hubo negligencia, la indignación de los trabajadores se hizo sentir rápidamente: el gremio declaró una huelga general que se extendió a todo el país. Los capitales ingleses y franceses, que dominaban los rieles, comenzaron a sobresaltarse ante el peligro de que el cereal no llegara a los puertos. Luego de tres días de huelga, Smith tuvo que ser dejado en libertad, levantándose el paro en todo el país, excepto en Rosario.

El gremio local decidió que sólo dejaría sin efecto la medida de fuerza cuando el maquinista estuviera en la ciudad y en su puesto de trabajo. El directorio del Ferrocarril Central Argentino, con sede en Londres, debió fletar un tren especial para trasladar al maquinista a la ciudad. Smith fue recibido por sus compañeros con una enorme ovación: fue el primer triunfo de los ferroviarios, ya que la empresa había sido obligada a ceder.

La mayoría de los dirigentes sindicales de esa época provenían de

Europa y adherían a las ideas anarquistas y socialistas. Tal vez haya sido Arturo Dupont –activo militante de la Comuna de París– el más destacado. Con apenas 13 años de edad fue correo y colaborador de la dirigente revolucionaria Luisa Michel. Tras la derrota obrera de 1871, en la que fueron fusilados 70.000 trabajadores, fue encarcelado y deportado a Argelia. En alta mar lideró un motín en el que fue muerto el capitán del barco. Luego de cuatro años de detención, una amnistía del gobierno francés lo dejó en libertad y se trasladó a Chile junto a su mujer y sus cinco hijos.

Allí rápidamente comenzó a difundir sus ideales anarquistas. Perseguido, decidió huir cruzando junto a su familia, y a pie, la cordillera de Los Andes, en invierno, donde debido a las bajas temperaturas murieron dos de sus hijos. Dupont se instalaría en Villa María para trabajar en una carpintería, desde donde comenzó a agitar sus ideales libertarios, motivo por el cual sería obligado a dejar esa localidad cordobesa. Tras un breve paso por la ciudad de Casilda, donde se reencontró con un compañero francés de la escuela primaria, el cura Moyaret, se radicó en Rosario. Años después volvería a Casilda para fundar el Partido Comunista local.

En abril de 1890, tras años de militancia en la ciudad de Rosario, el anarquista Dupont junto a su compañero Pallás, el socialista Schulze, y el anarco sindicalista Bolthen constituían una filial del Comité Obrero y preparaban la primera demostración obrera de conmemoración del 1º de Mayo.

Ese histórico día de 1890 amaneció lluvioso en la ciudad. No obstante esto, mil trabajadores –argentinos, italianos, españoles, franceses, polacos, alemanes, suizos, etc.– se movilizaron. Recorrieron calle Comercio –hoy Maipú– hasta Mendoza, tomaron por Buenos Aires hasta plaza 25 de Mayo y desde allí por Santa Fe se trasladaron hasta el baldío de Entre Ríos y Urquiza. Allí se celebró el primer acto de homenaje a los mártires de Chicago en la ciudad. Ese día irrumpió políticamente en Rosario una nueva clase social, la obrera, uniéndose a todos los trabajadores del mundo en la conmemoración del 1º de Mayo.

Por eso, cuando se analizan los sucesos revolucionarios de 1893, inevitablemente surge el interrogante del porqué de la ausencia de esa clase en los acontecimientos. Es que a pesar de estar organizada y haber protagonizado importantes luchas, a pesar del hambre y del descontento generalizado por la corrupción, la mayoría de los trabajadores no se integraron al levantamiento.

Si bien algunos dirigentes obreros como Dupont participaron de la experiencia de la Comuna de París, tanto las corrientes sindicales como la mayoría de los dirigentes obreros no tenían un plan concreto ni tampoco un programa revolucionario para acceder al poder. Su accionar estaba centrado casi exclusivamente en reivindicaciones económicas. Esto explica que tanto socialistas como anarquistas hayan tenido una mirada crítica de los sucesos revolucionarios de 1893.

La desconfianza en la dirección del movimiento revolucionario, el incipiente desarrollo como clase y el carácter exclusivamente economicista de sus reclamos, fueron los principales elementos que impidieron a esa dirección obrera elaborar una táctica que le permitiera empalmar con los revolucionarios, tratando de hegemonizar el movimiento para lograr una salida en beneficio de los trabajadores y la nación.

EXPANSIÓN ECONÓMICA, PERO PARA POCOS

El boom cerealero

En el territorio provincial, entre 1886 y 1895, las colonias pasaron de 98 a 366. Asimismo, el crecimiento poblacional fue vertiginoso. En 1860 Santa Fe era la séptima provincia del país en cuanto a población, y en 1895, fundamentalmente debido a la llegada de contingentes europeos, pasó a ocupar el segundo lugar detrás de Buenos Aires con 397.200 habitantes. En 1914 esa cifra llegaría a 899.640.

Habría que destacar que en ese período Santa Fe contaba con mayor número de extranjeros que argentinos en edad de plena producción. Esto no sólo se expresaba en el campo, sino también entre los trabajadores de las urbes y los comerciantes. El Censo Municipal de Rosario de 1906, determinaba que el 37% de los comerciantes eran argentinos y el 63% extranjeros, esta misma tendencia se mantenía entre los empleados, dado que el 30% eran argentinos y el 70% inmigrantes.

Santa Fe fue el epicentro del boom cerealero nacional de fines de siglo XIX y la primera década del siglo XX. De acuerdo a datos del Censo Nacional Agropecuario de 1895, en la provincia se cultivaban 598.000 hectáreas, mientras que en 1906 esta cifra ascendía a 3.800.000. Hacia 1908, Santa Fe se ubicaba como el primer productor nacional de lino y el segundo de trigo y maíz, detrás de Buenos Aires.

Si se observara solamente la evolución demográfica, se podría concluir erróneamente que el enorme desarrollo de la producción de granos, se debió pura y exclusivamente al proceso de colonización. Este pudo haber contribuido, pero como quedó demostrado en el levantamiento agrario de 1912 conocido como el "Grito de Alcorta", el motor del crecimiento fue el sistema de arrendamientos imperante. Un sistema que le permitió a los dueños de la tierra obtener enormes ganancias, mientras la inmensa mayoría de los arrendatarios eran arrastrados a la ruina.

El crecimiento económico se dio sobre la base de la explotación de los peones rurales y la pauperización de los arrendatarios. Las cifras de los arrendamientos que arrojaba el Censo de 1895 eran elocuentes. En Santa Fe, el 51,4% del total de las explotaciones agropecuarias eran trabajadas por arrendatarios, mientras que en el sur –epicentro de la protesta agraria de 1912–, esa cifra se elevaba al 67%.

El "boom cerealero" no sólo benefició a los terratenientes, sino también a los imperialistas. Como se ha señalado, la expansión del cereal fue acompañada por una oleada de construcciones ferroviarias encaradas fundamentalmente por los ingleses, ya no en líneas troncales, sino en el armado de una inmensa red, una verdadera telaraña sobre la zona pampeana, que le permitiría a esa potencia tener el monopolio del transporte para sacar las riquezas hacia los puertos de Rosario y Santa Fe.

También intereses belgas, pero fundamentalmente alemanes, participaron de esta expoliación. Lo hacían a través del manejo monopólico del sistema de comercialización de granos. Estaban asociados a los ingleses, debido a que éstos habían pasado a ser no sólo el principal comprador de trigo, sino también el principal adquirente de maíz y semilla de lino.

Según Vázquez-Presedo:

> "*...Un ejemplo de esta asociación es la que se da a través de Bunge y Born. Este, 'con incentivos del gobierno', construye los molinos harineros de Puerto Madero y funda en 1901, la Sociedad Anónima Molinos Harineros y Elevadores de Granos, hoy Molinos Río de la Plata...*".
>
> (Vázquez-Presedo, Vicente, *El caso argentino, Migración de factores, comercio exterior y desarrollo. 1874-1914*, Eudeba, Buenos Aires, 1971. Citado por Gastiazoro, Eugenio, *Op. Cit.*)

Resulta evidente que en Santa Fe (al igual que en Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y La Pampa), la expansión cerealera del período 1895-1914 se dio sobre la base de un extraordinario aumento del número de arrendatarios y aparceros.

Esta expansión fue posible por la existencia de condiciones externas favorables –fundamentalmente la retracción de ventas de Estados Unidos– que permitieron una creciente exportación de cereales y lino. El desarrollo agrícola e industrial norteamericano hacía que su mercado interno absorbiera lo fundamental de su producción.

En cambio en Argentina, producto del latifundio y la dependencia, se registraba una escasa demanda interna de cereales, motivo por el cual se generaba una enorme desproporción entre el consumo y la producción. A diferencia de lo que sucedía en Estados Unidos, en nuestro país el crecimiento de la agricultura no estuvo vinculado al desarrollo interno del capitalismo (expansión del mercado interno y secundariamente del externo), sino que este desarrollo se daría manteniendo el latifundio y respondiendo exclusivamente a las necesidades del mercado mundial.

Argentina y Estados Unidos tuvieron dos modelos de desarrollo distintos, lo que se reflejaría claramente en las ventas al exterior que realizaban ambas naciones. En el período 1911-1914, Argentina exportaba el 61% de su producción de trigo, el 77% de la de maíz y el 82% de la de semilla de lino; y Estados Unidos el 17,5 % de trigo, el 1,7% de maíz y el 0,04% de semilla de lino.

Rosario y su "época de oro"

La libre navegación de los ríos de 1852 y los derechos diferenciales de Aduana adquiridos en 1856, permitieron la "explosión" económica y demográfica de Rosario, una pequeña aldea que por entonces contaba con algo más de 4.000 habitantes.

El predominio político y económico del litoral, la inauguración del ferrocarril Rosario-Córdoba en 1870, la centralización del comercio de exportación de la mayoría del norte argentino y la colonización agrícola, llevaron a Rosario a un vertiginoso crecimiento, que se expresó en una serie importante de obras.

En ese período, la ciudad se ubicaba como la principal proveedora de mercancías importadas que consumía el interior. Los poderosos comerciantes locales fundaron en 1853 el primer "Club Mercantil".

En 1874, en 9 de Julio y Necochea, se inauguraba el Colegio Nacional Nº 1. Ese mismo año, en la intersección de Sargento Cabral y Avenida Belgrano se construía el primer edificio de la Aduana, que sería remodelado en 1938.

▲ Primer edificio de la Aduana de Rosario en 1874, ubicado en la actual Avenida Belgrano (Biblioteca y Archivo del Museo Histórico Provincial "Dr. Julio Marc". Colección Fotografias).

En 1857, en terrenos del actual Centro Cultural Bernardino Rivadavia y Plaza Montenegro, el gobierno provincial inauguraba el Mercado Sur; y en 1870, en la actual Plaza de la Cooperación (Mitre y Tucumán), comenzaba a funcionar el Mercado Norte.

En 1890 la ciudad contaba con agua corriente y cloacas y, además, el gobierno local autorizaba la prosecución de las obras de construcción del lujoso palacio municipal. Ese mismo año se extendía considerablemente el pavimento, se llevaba a cabo la apertura del Bulevar Santafesino (hoy Oroño) y la Municipalidad conseguía importantes empréstitos en Europa que irían a parar, como ya se ha analizado, a manos de un puñado de vaciadores del Banco Provincial.

En enero de 1892 se instalaba la primera sucursal del Banco Nación y se inauguraba el Hospital Italiano Garibaldi; poco tiempo después –en abril de ese mismo año– se llevaba a cabo la apertura del Buen Pastor (cárcel de mujeres), obra de las Damas de Caridad. También en ese año, y en las instalaciones del Palacio de Justicia, aún a medio terminar, comenzaban a funcionar los Tribunales Provinciales.

Banco Nación Argentina
Edificio ubicado en la esquina de Córdoba y San Martín de Rosario.

En 1895 se fundó la Sociedad Rural y el 7 de noviembre de 1902 se realizaría la primera exposición en el predio del Parque Independencia. Allí estuvieron presentes muchos de los más importantes criadores como Juan José Andino, Guillermo Aldao, Carlos Arijón, Juan Birmingham, Felisa R. de Bouquet, Dickinson Hnos., Escurra Hnos., Echesortu y Casas, Miguel Martínez de Hoz, F. A. Martínez de Hoz, Saturnino Unzué, Bernardo de Irigoyen, Alfredo Urquiza, etc. El acto fue presidido por el ministro de Agricultura de la Nación, Wenceslao Escalante, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Ezequiel Ramos Mexía y el gobernador de la Provincia, Rodolfo Freyre.

En 1899, y tras reiterados intentos, se constituyó la Bolsa de Comercio, haciendo realidad los esfuerzos de poderosos sectores económicos de con-

tar con una entidad gremial vinculada al movimiento de barcos, precios de las acciones y de los cereales, operaciones de cambio, transporte, etc.

Durante la intendencia de Luis Lamas (1898-1904), los reclusos de la cárcel de Rosario construyeron el Parque Independencia, inaugurado en 1901, y dos años después, en las remodeladas instalaciones del Mercado Sur, comenzaría a funcionar el Mercado Central.

Foto del Parque de la Independencia construido por los presos de la cárcel de Rosario (1902) (Biblioteca y Archivo del Museo Histórico Provincial "Dr. Julio Marc". Colección Fotografias).

En 1870 se revolucionaba el transporte provincial con la inauguración del Ferrocarril Central Argentino, de capitales ingleses, que unía Rosario con Córdoba. Era la primera línea que se construía fuera de la provincia de Buenos Aires y conectaba el litoral con el interior. También durante ese período se produciría una importante transformación en el transporte local, ya que a partir de 1872 comenzarían a circular los tranvías a caballo. En 1907, este sistema de traslado de pasajeros sufrió una significativa transformación cuando fue reemplazado por el tranvía eléctrico.

El 10 de septiembre de 1882, por iniciativa de Carlos Casado, iniciaba su actividad el Ferrocarril Oeste Santafesino –primer emprendimiento ferroviario de capitales nacionales– que unía Rosario con Casilda; ese día, en horas de la tarde, arribó a la estación ferroviaria ubicada en 9 de Julio y Chacabuco –hoy Parque Urquiza– el primer tren procedente de esa localidad del sur santafesino. Poco tiempo después, esta línea ferroviaria se extendería hasta distintas colonias de los departamentos Caseros y General López, para

terminar siendo absorbida, en el año 1900, por el monopolio ferroviario inglés Central Argentino.

En 1885 comenzó a funcionar la línea ferroviaria Buenos Aires-Rosario. En realidad se trataba de una prolongación de la vía que llegaba hasta Campana. Hacia 1909 esta estratégica línea también pasó a formar parte de la empresa inglesa Central Argentino.

En 1891 se inauguraba el Ferrocarril Central Córdoba que unía Rosario con Córdoba, por San Francisco. La empresa estaba controlada por capitales ingleses. Ese mismo año, la red ferroviaria construida por el gobierno provincial era arrendada por una compañía francesa que ponía en funcionamiento la línea Santa Fe-Rosario.

En 1907, esta empresa francesa inauguraba una segunda línea que unía Rosario con Buenos Aires, a través de Pergamino; y en 1910 comenzaba a funcionar el ferrocarril Rosario-Puerto Belgrano, también de capitales franceses.

A partir de ese año, Rosario quedó convertida en el centro de convergencia de varias líneas ferroviarias, lo que produjo un notable incremento de las exportaciones que salían del puerto local, construido por una empresa francesa e inaugurado en 1903.

Un ambicioso proyecto para modernizar las viejas instalaciones se había puesto en marcha hacia fines de la década del '80, pero debió ser pospuesto por la crisis del '90. La iniciativa había correspondido al comerciante rosarino Juan Canals y sólo se pudo materializar a principios del siglo XX, momento en que se produjo una aceleración en la construcción de los nuevos muelles y se avanzó en la refacción de los existentes.

Primeros galpones de la empresa Bunge y Born, a principios de Siglo XX.

Aunque la ciudad de Santa Fe era también un puerto de ultramar y cabecera de varias líneas ferroviarias, Rosario tuvo un crecimiento económico, comercial y demográfico mucho más dinámico, con un desarrollo poblacional impactante. Según datos del primer Censo Nacional de 1869, Rosario tenía 26.169 pobladores; en tanto en 1895, los resultados del segun-

do Censo Nacional determinaron que la cifra se había elevado a 94.025. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial la población ya superaba los 225.000 habitantes.

En 1869, y debido a la importante actividad comercial de la ciudad, se instalaba el telégrafo, y en 1874 el cable transatlántico, que terminaría facilitando el desarrollo de las exportaciones de cereales, monopolizadas por grandes empresas controladas por capitales extranjeros.

Por su parte, los grandes comerciantes locales –excluidos de este negocio– luego de la crisis del '90, reafirmarían su rol de importadores de mercancías para ubicarlas tanto en el mercado local como en distintas zonas del norte argentino.

Al mismo tiempo, el auge de la agricultura y del ferrocarril determinaron una rápida valoración de los precios de la tierra que en muchos casos fue adquirida por los comerciantes importadores rosarinos, que orientaron sus inversiones a esta actividad. A modo de ejemplo habría que decir que en el año 1903, en el departamento Rosario, el valor de la hectárea era de 9 pesos y que en el año 1929, las operaciones de venta se realizaban a un precio de 650 pesos.

Como se puede apreciar, en pocas décadas Rosario evidenció transformaciones estructurales –económicas, comerciales, edilicias, etc.– impactantes. La ciudad vivió su "*belle époque*", en la que se impuso el jabón York o el perfume, la literatura, la moda y la comida francesa. El "*bon vivant*" (buen vivir) como decían los franceses, fue el eslogan que acuñaron las clases acomodadas. Durante esos años, el Bulevar Santafesino (hoy Oroño) dejó de albergar a las multitudes que concurrían a los "*meeting*" políticos, para pasar a ser el paseo obligado de los carruajes franceses, en el que las elegantes damas de la sociedad local exhibían todo el *glamour* de la moda parisina.

Tranvía a caballo que realizaba un recorrido de 27 cuadras. Foto del 16 de noviembre de 1872. (Biblioteca y Archivo del Museo Histórico Provincial "Dr. Julio Marc"-Colección Fotografías).

Rosario, a su vez, y tal como vimos en el capítulo anterior, también fue la sede del levantamiento radical de 1893 y, como veremos más adelante, la ciudad de las grandes luchas obreras de principios de siglo, y la protagonista de acontecimientos sociales y políticos históricos como el 17 de octubre de 1945, el Rosariazo o el Argentinazo.

Los puertos en la provincia de Santa Fe

El control de los puertos y del comercio exterior ha desempeñado un papel muy importante en la historia nacional y provincial. En el siglo XIX, durante el período de las luchas internas previas a la consolidación de la definitiva Organización Nacional, distintas potencias extranjeras –en 1838 los franceses y en 1845 los franceses e ingleses– bloquearon los puertos y ríos argentinos con el objetivo de garantizar sus intereses comerciales en la región.

Las luchas internas entre el interior y Buenos Aires, que culminaron en las batallas de Cepeda y Pavón fueron esencialmente disputas protagonizadas por los terratenientes y los grandes mercaderes de ambos bandos por el control de las rentas aduaneras y la libre navegación de los ríos.

Luego de 1880, unificado definitivamente el país bajo la hegemonía bonaerense, y tal cual hemos analizado, las actividades económicas fundamentales cayeron en manos del capital imperialista. Esto sucedió con las finanzas, los ferrocarriles, la industria y los puertos, conformándose así el carácter dependiente de la economía nacional en la etapa del imperialismo que se había iniciado a partir de 1870.

Hacia 1940, los puertos argentinos seguían en poder de los extranjeros, particularmente ingleses y franceses, potencias que, además, controlaban los ferrocarriles, las importaciones y las exportaciones (estas últimas junto con los alemanes). El puerto de Rosario, que con los años se transformó en el puerto granelero más importante del país, fue concesionado a los franceses en 1902 por el término de 40 años.

En la década del '20, el puerto de Rosario junto al de New York y Montreal eran los puertos cerealeros más importantes del mundo. En 1935 contaba con importantes elevadores de granos pertenecientes a Dreyfus SA, Asociación de Cooperativas Argentinas, La Plata Cereal SA, Luis de Ridder SA y la Sociedad Puerto de Rosario (el grupo francés concesionario del puerto).

A partir de 1943 comenzó la administración directa por parte del Estado en materia portuaria con la nacionalización de todas las instalaciones. En 1949, Perón creaba la Dirección de Puertos y Vías Navegables que posteriormente, en 1956, se transformaría en Administración General de Puertos, organismo estatal que tenía a su cargo la administración de todos los puertos nacionales.

Como analizaremos más adelante, la dictadura militar instaurada en 1976 dictó la "ley" 22108/79 para permitir que grupos privados instalaran puertos propios, principalmente en la zona del Gran Rosario.

El nuevo puerto de Santa Fe

En 1895, la Ley 3220 autorizó al Poder Ejecutivo de la Nación a construir un nuevo puerto en la ciudad de Santa Fe. La iniciativa no se materializaba y, en abril de 1899, distintos sectores de la producción local realizaron una asamblea popular en el Club Comercial para presionar por la reanudación de los trabajos. Posteriormente, los participantes marcharon hasta la residencia del gobernador Bernardo de Iturraspe, ante quien exteriorizaron el descontento.

▲ Centro de la ciudad de Santa Fe en 1890, se observa un tranvía a caballo (Biblioteca y Archivo del Museo Histórico Provincial "Dr. Julio Marc"-Colección Fotografías).

En 1902, con motivo de la visita de Julio A. Roca a esa ciudad, los vecinos le elevaron la preocupación por la paralización de la obra, obteniendo por parte del presidente el compromiso de finalizar los trabajos.

Con la sanción de la Ley 4269, del 6 de noviembre de 1903, se autorizó la construcción del puerto, y el 16 de julio de 1904 Provincia y Nación firmaban el contrato para la realización del emprendimiento. El artículo 7 del acuerdo establecía que las "*obras del puerto y sus anexos quedan exceptuados del pago de impuestos por 40 años, al cabo de los cuales pasarán todas ellas a propiedad de la Nación sin cargo ni gravamen alguno*".

El estado aportó 500.000 pesos de oro sellado e inmediatamente comenzaron los trabajos, conforme al proyecto de los señores Dirks, Dates y Cía. El nivel adoptado fue 0.12 metros más alto que el alcanzado por la fenomenal creciente del Río Paraná de 1905. Los trabajos concluyeron en 1910.

En 1913 entraron al puerto de Santa Fe 158 transatlánticos y 1.300

embarcaciones de cabotaje que garantizaron la salida de los productos primarios de las colonias de la zona central.

Prácticamente desde que se inauguraron las nuevas instalaciones, empezaron una serie de problemas que conspiraron contra la eficacia del puerto. La falta de calado y de dragado fueron algunos de los principales inconvenientes. En 1976, con el puerto semiparalizado, la Comisión Permanente de Reactivación Económica Portuaria de la Provincia de Santa Fe señalaba: "*jamás la ruta de ultramar del Paraná había estado tan abandonada*".

Previamente, al vencer el término de la explotación establecida, el 2 de mayo de 1951 el puerto de Santa Fe había pasado al Superior Gobierno de la Nación.

El puerto de Rosario

En la época de la colonia, el Pago de los Arroyos se limitaba a ver pasar las embarcaciones, ya que la aldea no tenía importancia económica, ni puerto, como para que las mismas se detuvieran.

Esta situación se mantuvo prácticamente hasta la década del '30 del siglo XIX, período en el que el puerto de Rosario comenzaría a ser considerado como exportador, especialmente a Montevideo, a la vez que era eximido de todo impuesto. Por Decreto del 30 de enero de 1835, firmado por el gobernador Estanislao López, también se declararon libres de derechos de importación a todos los productos de Cuyo que se embarcaran por la Villa del Rosario.

Al producirse, en 1852, la apertura del Río Paraná a la navegación extranjera, el puerto de Rosario se convirtió en la escala obligada de toda la Confederación Argentina. Los carros llevaban al interior la mercancía que llegaba por el río y las embarcaciones cargaban en sus bodegas los productos del interior pampeano con destino a distintos lugares del mundo.

A partir de 1856, la actividad portuaria registraría un salto espectacular, cuando desde distintos países europeos se proponía el comercio directo desde y hacia Rosario. Además, el 19 de julio de 1856, el Congreso Nacional reunido en Paraná sancionó la Ley de Derechos Diferenciales. Según dicha ley, las mercaderías procedentes de "cabos afueras" (traídas de Buenos Aires y Montevideo) deberían pagar adicionales que iban del 30% al doble de los derechos ordinarios.

La primera construcción importante realizada en Rosario fue el muelle de Hopkins, inaugurado el 7 de agosto de 1856. En 1859, Aarón Castellanos compró estas instalaciones por la suma de 7.100 pesos. Tras la muerte de Castellanos, acaecida en 1887, sus herederos vendieron el muelle a los señores Camilo Aldao y Manuel Díaz.

El Gobierno de la Nación, por Contrato del 31 de diciembre de 1888, aceptó la propuesta de Juan Canals de construcción de una parte del puerto (Sección Primera). El empresario, en compensación por la inversión realizada, percibiría los derechos de muelles, eslingaje y depósitos del sector por él

construido y explotado. La vigencia de estos derechos se extendería por tres años con opción a dos más.

También se firmó con Canals un contrato para la construcción de otra fracción en el puerto de Rosario (Sección Sur). Según la propuesta se construirían muelles, un murallón y explanada, una estación de carga y pasajeros, y un depósito. Como compensación, y mientras estuviese vigente el contrato de 40 años, el concesionario cobraría todos los derechos de muelles, eslingaje y depósito, bajo el control del gobierno.

En 1892, el Gobierno Nacional resolvió rescindir los contratos por "*no hacer lugar a la prórroga pedida por don Juan Canals*". Un juicio concluido en abril de 1900 determinó que el Gobierno Nacional debía resarcir al empresario con 40.000 pesos en concepto de gastos realizados.

En octubre de 1889, Julio A. Roca enviaba al Congreso un mensaje donde se refería al llamado a concurso para la construcción y explotación del puerto de Rosario, determinando las bases y condiciones de dicho concurso. El Congreso, por medio de la Ley 3885, autorizó al Poder Ejecutivo a otorgar la construcción, o la concesión de la construcción y explotación del puerto de Rosario.

Por Decreto de septiembre de 1900, se llamó a "*concurso para la construcción y explotación*" de un puerto comercial en Rosario. En abril de 1902, el Poder Ejecutivo adjudicó a "*Hersent et Fils Schneider et Cie.*" la construcción y explotación de las obras y el 16 de octubre se firmaba el contrato entre el gobierno nacional y la empresa concesionaria, representada por el ingeniero Abel Pagnard.

El acuerdo disponía la edificación de 3.870 metros de muelles, dragados y obras de corrección, vías férreas y alzadas, depósitos y edificios necesarios hasta un presupuesto máximo de 11.600.000 pesos oro sellado. Se fijó un plazo de 40 años para la concesión, debiendo los empresarios formar una Sociedad Anónima. A la empresa se le reconocía, para gastos de explotación, un 40% de las entradas brutas y las ganancias; luego de deducir interés y amortización de las obras, se repartían las utilidades por mitades entre el gobierno y la Sociedad Anónima.

Se edificaron cuatro kilómetros de muelles. Se construyeron vías férreas y se adquirieron varias locomotoras. Se instaló un elevador para 30.000 m^3 de cereales, con un edificio central de 40 metros de altura y 120 silos cuadrados; una usina eléctrica con cinco grupos electrógenos de 1.200 a 1.800 HP, además de una serie de inmuebles para distintas reparticiones. Un total de 17 grúas eléctricas formaban parte de las instalaciones.

La inauguración de las obras del puerto de Rosario tuvo lugar el 26 de octubre de 1902 con la presencia del presidente de la Nación, Julio Argentino Roca, y el gobernador de Santa Fe, doctor Rodolfo Freyre.

El 16 de septiembre de 1942, al vencer la concesión, el representante de la empresa francesa, Andrés Stevenin, entregó bajo protesta las instala-

Muelles nacionales del Puerto de la ciudad de Rosario, año 1893 (Biblioteca y Archivo del Museo Histórico Provincial "Dr. Julio Marc"-Colección Fotografías).

ciones, mientras la empresa iniciaba un juicio contra el Estado Nacional. Esa misma tarde llegaba a Rosario el presidente de la Nación, doctor Ramón S. Castillo, para tomar el control de las instalaciones. Veinticinco años después, la Justicia ordenaba pagar a la empresa francesa 10.000.000 de dólares más intereses, en concepto de "*obras no abonadas*", que habían sido dispuestas por el concesionario en su beneficio exclusivo y por las que reclamaba 90.000.000 de francos.

Origen de los pueblos de la Provincia

En todo el territorio nacional, y por ende en el provincial, el trazado de los núcleos urbanos se basó en los principios sentados por la colonización española. Se trataba de un trazado estándar, sin imaginación, que se repetía constantemente. El criterio de los conquistadores fue el de parcelar alrededor de una plaza central y calles perpendiculares o paralelas unas a otras. Los terrenos que rodeaban la plaza se repartieron entre los gobernantes y la Iglesia, en tanto las calles se repetían cada cien o ciento cincuenta metros. La planta urbana estaba rodeada por parcelas rurales que prolongaban, en mayores extensiones, el mismo trazado.

Los españoles, durante el período de lucha contra los pueblos origina-

rios, erigieron líneas de defensa de las fronteras, que se afianzaron con la construcción de fortines en los que se instalaron algunos soldados para la defensa del territorio.

De estos fortines nacieron muchas poblaciones santafesinas como Colastiné, Cululú, La Pelada, San Juan Bautista, Monigotes, Sunchales, Melincué (o San Urbano), San José de la Esquina, etc. Sin embargo, el fuerte en sí no fijaba la población en un lugar.

Urquiza determinó, con un decreto de 1858, la consolidación del sistema de poblamiento de las fronteras. La reglamentación del mencionado decreto establecía la entrega de fracciones de 20 cuadras a cada integrante de la tropa, 40 cuadras a los oficiales y 80 a los jefes. Las familias que lo solicitaban recibían 10 ó 20 cuadras. El avance de los fortines permitió la urbanización de vastas porciones de territorio, incluyendo poblaciones como Reconquista, ubicadas sobre el Arroyo del Rey.

Las reducciones también fueron importantes en la conformación de los pueblos. Además de un núcleo central y una plaza alrededor de la cual se agrupaban la capilla y las viviendas, disponían de una colonia agrícola circundante. De las reducciones nacieron localidades como San Pedro, San Javier, San Jerónimo y San Lorenzo; en esta última, el núcleo originario se remonta al año 1791 cuando los Franciscanos establecieron allí el Convento de San Carlos.

Sin embargo, fue sin duda durante el período 1870-1914 –etapa de prosperidad económica en la que se fundaron la mayoría de las colonias y pueblos– cuando se produjo en Santa Fe un notable crecimiento de los centros urbanos y una marcada declinación de las zonas rurales. Éstas abarcaban un 62% de la población total en 1869, y debido a las colonizaciones esta cifra se incrementaría a un 67% en 1895, para caer drásticamente a un 43% en 1914. Este último dato es relativo ya que en el censo de ese año las autoridades decidieron considerar como centros urbanos a todos aquellos pueblos que tuvieran más de 500 habitantes. Este exiguo rango terminaba ocultando el rasgo principal del período 1895-1914, que fue el nacimiento de innumerables villas rurales en toda la zona centro-sur de Santa Fe.

En 1869 sólo existían cuatro pueblos o villas rurales que tenían entre 500 y 2.000 habitantes; en 1895, su número aumentó a 56. No cabe duda de que el crecimiento de los pequeños ejidos urbanos durante ese período fue realmente espectacular. Tampoco se puede negar que fue en la región afectada por la colonización agrícola donde surgió la mayor cantidad de pueblos. En 1895, de las 62 localidades que contaban entre 500 y 5.000 habitantes, 45 se hallaban ubicadas en la región cerealera y en esa zona solamente seis tenían más de 2.000 habitantes (Esperanza, Cañada de Gómez, Casilda, Rafaela, San Carlos y Reconquista).

El paso de una economía ganadera a otra con predominio del cereal, incidió decididamente en el surgimiento de los pueblos rurales. A través de la

▲

Familia y vivienda típica de inmigrantes italianos a principios del S. XX. De *Wheat Production and Farm Life in Argentina*, por Frank W. Bicknell.

Ley de Centros Urbanos, dictada en 1887, las autoridades provinciales intervinieron en este proceso transformador, otorgando todo tipo de franquicias para hacer atractiva la radicación de industrias y comercios en los centros urbanos.

Las empresas o individuos que habían establecido las colonias agrícolas fueron los responsables de la fundación de la mayoría de los pueblos o villas rurales. Pero hubo alrededor de 55 localidades que se desarrollaron por iniciativa de otras personas, principalmente comerciantes o ganaderos del lugar. Esto sucedió, por ejemplo, con la fundación de Rufino. En 1886, los hermanos Rufino habían constituido la colonia y previeron, además, la fundación del pueblo, reservando para ello un conjunto de lotes. Como consecuencia de la crisis de 1890, la venta de los lotes se hizo excesivamente lenta, motivo por el cual los Rufino suscribieron un contrato con el almacenero G. Daireaux para que vendiera los terrenos y diagramara la instalación y funcionamiento del pueblo. Experiencias similares se produjeron en la formación de Venado Tuerto y Rafaela.

Con el desarrollo de la red de transporte, algunos pueblos se estancaron o declinaron debido a la atracción ejercida por otras localidades, que habían tenido un interesante desarrollo comercial. Por ejemplo, los importantes enclaves de Humboldt e Irigoyen decayeron debido al gran atractivo que ejercían localidades pujantes como Esperanza o Rafaela.

A fines del siglo XIX, Santa Fe y Rosario eran las principales ciudades de la provincia.

Esperanza, por su parte, luego de un crecimiento vertiginoso y desordenado, se estabilizaba como una ciudad importante con grandes tiendas, buenos edificios y una gran plaza de cuatro manzanas, contando además con grandes fundiciones, molinos y destilerías. En menor medida se registraba un proceso similar en la joven Rafaela, San Carlos, Casilda y Cañada de Gómez.

La rebelión agraria de Alcorta

El 25 de junio de 1912, en los inicios del movimiento conocido como "el Grito de Alcorta", se leyó en la Sociedad Italiana un contrato tipo de arrendamiento, usado en el sur santafesino –Alcorta, Estación Bombal, Bigand, Chabás, Sanford, etc.– cuyos puntos más conflictivos eran los siguientes:

"Art. 2°) *El señor... (arrendatario) destinará este terreno puramente para agricultura obligándose a sembrar totalmente el campo, pudiendo dejar solamente para pastoreo de sus animales, un diez por ciento por el cual pagará treinta pesos moneda nacional c/l, por cada cuadra cuadrada y por año, y cincuenta pesos de lo que excediera del diez por ciento.*

"Art. 3°) *El señor... (arrendatario) pagará a los señores... (propietarios) por arrendamiento el 45% del producto total de lo que coseche trillado y embolsado libre de todo gasto a elegir del producto cosechado.*

"Art. 4°) *El señor... (arrendatario) se obliga a vender a los señores... (propietarios) la parte que le corresponde de los cereales que coseche, al precio corriente y condiciones de plaza.*

"Art. 5°) *El señor... (arrendatario) se obliga a trillar y desgranar los cereales de su cosecha con las máquinas de los señores... (propietarios) o con las que estos señores autoricen y comprar a los mismos señores, las bolsas vacías para el embolse de los cereales.*

"Art. 6°) *El señor... (arrendatario) no podrá disponer en forma alguna de los productos que coseche sin antes haber retirado los señores... (propietarios) las partes que le corresponda por arrendamiento y haberles pagado lo que les adeudare.*

"Art. 8°) *El señor... (arrendatario) se obliga a trabajar bien la tierra, sembrando semillas de buena calidad, y en cantidad suficiente. Hará la siembra de maíz dando dos rejas, rastreando y carpiendo en tiempo oportuno. Y si el maíz naciera mal o fuese comido por la langosta o destruido por la helada, el señor... (arrendatario) se obliga resembrarlo siempre que los señores... (propietarios) se lo indiquen. Todas las semillas, antes de ser sembradas serán inspeccionadas por el Administrador del Establecimiento, quien podrá desechar y prohibir que sea sembrada la que no está en condiciones.*

"Art. 10°) *El señor... (arrendatario) no podrá tener más que cuatro cerdos, de los cuales entregará a los señores... (propietarios) uno*

> *anualmente de ciento veinte kilos más o menos en el mes de julio.*
> (Biblioteca Popular Vigil, Santa Fe: el paisaje y los hombres, Editorial Biblioteca, Rosario, 1971)

En la asamblea, de la que participaron más de 300 agricultores, y en medio de manifestaciones combativas, se declaró la huelga por tiempo indeterminado, hasta conseguir entre otras reivindicaciones: "*1) rebaja general de los arrendamientos y aparcerías; 2) entregar en las aparcerías el producto en parva o troje, como salga; 3) contratos por un plazo mínimo de cuatro años*".

La convocatoria había surgido de los campesinos de Alcorta, dirigidos por Francisco Bulzani, quienes además del aval de los curas de esa localidad y Máximo Paz, Pascual y José Netri, también contaban con el respaldo de los comerciantes de la zona. El abogado rosarino –hermano de estos párrocos– Francisco Netri tuvo un papel destacado en la asamblea, y fue quien enfatizó que los chacareros debían "*constituir su organización gremial autónoma*".

Esta explosión del campo santafesino sobrevino a otras luchas agrarias como la de La Pampa. En agosto de 1910 se producía en esa provincia el levantamiento de los colonos de Macachín que reclamaban: "*Abolición de los contratos esclavistas y de los pagarés en blanco, harina para alimentarse y semillas para nuevas siembras*". Pese al envío de un tren con tropas para reprimir el alzamiento, la huelga triunfó, fortaleciéndose el espíritu de lucha de la mayoría de los chacareros que estaban sometidos a una dura explotación, similar a la que pudimos observar cuando analizamos los contratos de arrendamientos impuestos en el sur santafesino.

Francisco Netri, como ya señalamos, tuvo un destacado papel en el movimiento que se inició en Alcorta y, analizando los motivos del levantamiento, escribió:

> "*...Los trabajadores de la tierra, sin reparar en el peligro, confiados en la fecundidad del suelo, pagaban a los especuladores todo cuanto les pedían, mientras éstos aumentaban los arrendamientos en una forma espantosa... En su afán de trabajar y producir, los colonos se hacían entre sí una competencia digna de mejor causa. Así se llegó a pagar hasta el 45% de la producción y 50 pesos por hectárea. Una situación así no podía durar, ya que el suelo no produce lo suficiente para permitir a los colonos el cumplimiento de sus obligaciones. Terratenientes y comerciantes, encontráronse al fin, en una situación peligrosa, motivada por sus afanes de ganancias inmediatas, tomaron a los colonos entre dos fuegos y los desangraron hasta arrancarles el grito de rebelión del año 1912.*
> *La justicia de la rebelión del colono, y la verdad de nuestro aserto, resulta del hecho de que, en sólo veinte días, no quedó una sola colonia de la república que no se hubiese plegado, con más o menos energía, al movimiento que originó la primera huelga agraria argentina. Tal era el*

> *malestar que en todas partes sufrían los agricultores con la misma intensidad. Es que, olvidado de las autoridades en una forma casi culpable, el colono había caído en un estado penoso. Terratenientes, intermediarios y comerciantes, conservándolo como un instrumento de gran valor, pero como una bestia inconsciente al servicio de sus intereses...".*
>
> (García Serrano, Thomas, *Esteban Piacensa, Apuntes biográficos*, Librería y Editorial Ruiz, Rosario, 1966)

El proceso que desembocó en el levantamiento fue muy complejo. La inmensa mayoría de los arrendatarios y medieros (en algunas zonas llegaban al 80%) eran extranjeros. En el campo primaba el individualismo y la desconfianza que dificultaban la organización gremial, una situación que era aprovechada por los terratenientes para dividir a los inmigrantes de los criollos. A su vez, la Ley de Residencia, que permitía la deportación de extranjeros, causaba mucho temor entre los mismos. En definitiva, el origen inmigrante de la mayoría de los colonos se transformaba en un obstáculo para la unidad con los criollos.

A principios de 1912, y a pesar de estas dificultades objetivas, los chacareros organizaron sus primeras reuniones en las chacras, comercios e incluso algunas parroquias, ayudados por los sindicatos de estibadores y oficios varios, los Centros de Estudios Sociales dirigidos por los anarquistas y los braceros ("*linyeras*") que tenían una gran tradición de lucha.

Las colonias del sur de Santa Fe y el norte de Buenos Aires fueron escenario del desarrollo de estas iniciativas. En esas zonas, y en lugares como Firmat, Bigand, Colonia Bombal, Pergamino, etc. surgieron organizaciones que jugaron un rol importante en la convocatoria del 25 de junio, en Alcorta.

Cuenta Plácido Grela que, tras la reunión fundacional, los chacareros fueron organizándose en todo el sur de Santa Fe. El 7 de julio de 1912 los campesinos de Alcorta, Bombal y Pergamino, luego de analizar el conflicto, dispusieron:

> "*Se invita a los agricultores y propietarios de tierras de la jurisdicción de Chabás, Sanford y colonias vecinas a una reunión con el fin de cambiar las ideas referentes al conflicto pendiente, la misma se celebrará en este pueblo el día 10 del actual, a las 10 de la mañana, con asistencia del letrado, doctor Netri. Juan Averaus, presidente del comité de huelgas....*"
>
> (Grela, Plácido, *El grito de Alcorta.* Ed. Tierra Nueva, Rosario, 1958)

Como se puede observar, a medida que se desarrollaba la huelga, se avanzaba en la organización de la misma; a la vez, se iba instalando la necesidad de la creación de una organización única o central de chacareros, idea ya planteada por Francisco Netri en la mencionada asamblea de Alcorta.

Fue así como el 15 de agosto de 1912, en la Sociedad Italiana de Rosario, se fundó la Federación Agraria Argentina. Delegados del sur santafesino eligieron el primer Comité Central de la entidad que a partir de ese momento

nuclearía a la mayor parte de los chacareros pobres y medios de Argentina. El primer presidente de la entidad fue Antonio Nogueras, precursor y titular del Centro de Estudios Sociales Karl Marx, y el 21 de septiembre aparecía el primer número del periódico *Boletín Oficial*, que a partir del 25 de junio de 1913, y hasta la actualidad, pasaría a llamarse *La Tierra*.

De la fundación de Federación Agraria Argentina participaron varias corrientes políticas y sindicales que confluyeron en la huelga agraria. Entre ellas sobresalían un sector agrarista, católico, antiterrateniente, reformista (con influencia en toda la pampa húmeda) que años después sería liderado por Esteban Piacensa, quien llegó a manifestarse a favor de la Italia fascista; y otro socialista, con fuerte predicamento en el norte de Buenos Aires (Pergamino) y La Pampa. Dirigentes importantes del Partido Socialista como Juan B. Justo o Di Tomaso tenían significativas extensiones de tierras.

La respuesta de los terratenientes y las fuerzas represivas a los huelguistas no se hizo esperar, motivo por el cual los chacareros tuvieron sus primeros mártires. En un acto de los agricultores realizado en la localidad de Firmat fueron asesinados los dirigentes agrarios anarquistas Francisco Mena y Eduardo Barros; en tanto en la ciudad de Rosario era fusilado Francisco Netri.

A pesar del violento accionar de los terratenientes, los huelguistas –que combinaban muy bien el trabajo secreto con la movilización– fueron logrando cada vez más adhesiones. Al apoyo inicial de los anarquistas y socialistas, los curas y los pequeños comerciantes, se sumaron los profesionales y amplios sectores populares. La solidaridad lograda por el movimiento de protesta entorpeció los planes represivos de la oligarquía y el Estado.

Ante el temor de tener que afrontar grandes pérdidas económicas, algunos sectores de la oligarquía santafesina mediaron para solucionar el conflicto. Como señalaba Jimena Sáenz:

> "*...Hasta Lisandro de la Torre intervino en el asunto, para recomendar a sus colegas de la Rural que era preferible ceder, a fin de salvar la cosecha del año y no perderla totalmente...*".
>
> (Sáenz, Jimena, *Entre dos centenarios 1910-1916*, Ed. La Bastilla, Buenos Aires,1971. Citado por Gastiazoro, Eugenio, *Op. Cit.*)

Los terratenientes fueron cediendo lentamente y hacia mediados de 1913, cuando finalizaba la huelga, la inmensa mayoría de los arrendatarios habían obtenido una importante rebaja de los arrendamientos. De todos modos, la oligarquía logró mantener cláusulas leoninas, como las de los artículos 3, 4, 5 y 6 de los contratos tipos, que imponían restricciones a la libertad de comprar y vender.

Asimismo, habría que decir que esta huelga favoreció el desarrollo de organizaciones campesinas en otros lugares del país, como la Liga Agraria de Bahía Blanca y la Liga Agraria de La Pampa. Estos nucleamientos con-

vocaron a un congreso nacional campesino del que participó la Federación Agraria Argentina. En este encuentro, además de los reclamos puntuales a los terratenientes y comerciantes, se reivindicaron los postulados de la Revolución Mexicana encabezada por Emiliano Zapata.

Como señaló Antonio Diecidue, por primera vez en Argentina se enarboló el principio de:

> *"...La tierra debe pertenecer en propiedad del que la trabaja..."*
> (Diecidue, Antonio, *Netri, líder y mártir de una gran causa*, Federación Agraria Argentina, Rosario, 1969)

La rebelión obrera de La Forestal

La política de distribución de tierras implementada por el gobierno santafesino dio lugar a la formación de enormes latifundios en el norte provincial.

La colonización de esa zona comenzó con Emilia y San Justo, ambas fundadas en 1864 por Mariano Cabal. Buscando las tierras del oeste santafesino, los colonos de los primeros asentamientos cercanos a la ciudad de Santa Fe fundaron Rafaela en 1883. Los irrisorios precios de los suelos facilitaron la fundación de Santurce (1887) y San Cristóbal (1890). En esa época también nacían Hersilia y Ceres, situadas en la línea ferroviaria Rosario-Tucumán. En todas estas colonias, la actividad económica principal estaba orientada exclusivamente a la ganadería.

Las colonizaciones del extremo nordeste –Departamento General Obligado– datan de la década del '70. Las Toscas, Florencia y Ocampo se dedicaron al cultivo de la caña de azúcar. En un primer momento, a través del Río Paraná, llevaban la producción a las refinerías de Rosario. Ya en la década del '80 aparecieron los ingenios Mercedes, Germania y Tacuarendí, pero debido a su producción irregular, como así también a la competencia extranjera y de los grandes establecimientos del noroeste argentino, los ingenios santafesinos quedaron en desventaja.

Durante esos años, la producción forestal pasó a ser hegemónica en el norte de la provincia, especialmente en el ángulo nordeste, el epicentro del quebracho colorado. Además de poseer propiedades curtientes, el quebracho proveía de postes y durmientes para consumo interno y para a la exportación.

En ese período se establecieron dos fábricas de tanino, una en Empedrado y otra en Paraguay, ambas pertenecientes a Carlos Casado. Este terrateniente y comerciante santafesino participó activamente del despojo de tierras que sobrevino tras el triunfo de las fuerzas invasoras de la Triple Alianza en la Guerra de Paraguay, apropiándose de 600.000 hectáreas en el extremo norte de ese país, lugar donde fundó un pueblo, Puerto Casado. En el año 2000, este latifundio con pueblo incluido, fue vendido por los herederos de Casado a la Secta Moon.

En 1890 se inauguraba el ferrocarril Santa Fe-Reconquista, obra vital que permitiría evacuar hacia el sur la producción de la zona.

A fines de ese siglo, "Harteneck y Cía." era la empresa de tanino más próspera de la zona, y en 1902 se fusionó con los hermanos Portalis constituyendo la Compañía Forestal del Chaco, que inició la industria forestal a gran escala. Esta empresa poseía cientos de miles de hectáreas ubicadas en las provincias de Santa Fe y Chaco. Además, contaba con grandes obrajes, fábricas, ferrocarriles y el puerto Piracuá.

El monopolio –que terminaba imponiendo precios– lograba adquirir a valores irrisorios la mayoría de los emprendimientos familiares que habían iniciado algún tipo de actividad vinculada al quebracho colorado. También pasaron a manos de la compañía las empresas "Urdaniz y Cía." del Chaco y "Teopecke y Cía.".

En 1906 se constituyó en París, mediante la adquisición de la Compañía Forestal del Chaco, y con la participación de capitales ingleses y alemanes, la "Compañía de Tierras, Maderas y Ferrocarriles, La Forestal Ltda.".

Previamente, en 1904, se fundó "Argentine Quebracho Company", empresa que tenía su sede en Nueva York. La nueva compañía instaló una fábrica de tanino en Tartagal, que llegó a emplear 2.000 obreros y a explotar 280.000 hectáreas, fusionándose con La Forestal a partir de 1913.

En 1914, este monopolio se integró a la compañía de Tierras de Santa Fe (Murrieta y Cía.) que poseía 1.800.000 hectáreas. **De esta manera, La Forestal se transformó en la empresa más grande de Argentina y llegó a controlar el mercado mundial del tanino.**

Con el surgimiento de este oligopolio, en unos años se triplicó el número de pobladores de los actuales departamentos General Obligado y Vera, que crecieron de 19.000 habitantes en 1894 a unos 60.000 en 1914. El grueso eran obrajeros correntinos y en menor medida santiagueños, registrándose también una fuerte presencia de Mocovíes y Tobas.

Toda la vida de la región dependía de La Forestal, una sociedad que lo monopolizaba todo si se tiene en cuenta que las escuelas, proveedurías de alimentos, viviendas, energía eléctrica junto a los teléfonos, hospitales o el transporte eran de la empresa.

El trato que la empresa brindaba a los obreros era inhumano. Los contratistas de obrajes, por su parte, parecían empleados del monopolio más que pequeños empresarios y tenían prohibido, incluso, contratar gente "marcada" por la empresa debido a su actividad sindical.

El total de los salarios de los trabajadores era prácticamente absorbido por la proveeduría o el almacén de la empresa, y de esta manera los obrajeros cobraban en especies y la empresa disponía libremente del dinero.

Las condiciones de trabajo eran de una precariedad total y en muchas oportunidades la gran cantidad de alimañas e insectos obligaban a suspender las tareas. Se comía la carne de los viejos bueyes que no servían más para

la producción. La mayoría de los obrajeros y su familia vivían en los "benditos", que eran fosas cubiertas con enramadas para protegerse del frío. Los más explotados fueron los Mocovíes y Tobas, que en su gran mayoría habían sido incorporados como hacheros de quebracho y eran estafados con mayor impunidad que los correntinos, tanto en el pesaje como en la proveeduría.

Monedas acuñadas por la Compañía La Forestal, 1915 (arriba); billete de un peso emitido a fines del S. XIX por el colonizador Ocampo Samanes (abajo).

La gran huelga que se desató a partir de 1919, dirigida por los anarquistas de la FORA y los socialistas, fue la respuesta de los trabajadores ante esta situación de explotación. Las reivindicaciones planteadas por los huelguistas consistían en: aumento de salarios, jornada de ocho horas y suspensión de los despidos.

En una segunda huelga, los obreros lograron que la empresa aceptara los dos primeros puntos; no obstante el acuerdo logrado, la zona se militarizó con tropas nacionales y de la policía provincial, comenzando una campaña de persecución contra los trabajadores más combativos. Muchos de los líderes de la protesta debieron huir o terminaron en las cárceles. La detención de los dirigentes del movimiento dio origen a la gran protesta de 1920, que exigiría la libertad de los presos.

Con el paro sobrevino un período de dura represión y, tras la muerte de un gerente, comenzaron las expulsiones masivas, clausurándose algunas fábricas como La Gallareta, Tartagal, Santa Felicia, etc. Estos cierres motivaron la huelga de enero de 1921, en defensa de la fuente de trabajo, huelga que contó con la adhesión de la Federación Obrera de Santa Fe, Rosario y Buenos Aires.

La violencia represiva no se hizo esperar. En las cercanías de Villa Ana se produjo un enfrentamiento con muchas muertes de ambos lados. Las milicias (o patotas) de La Forestal, los "*cardenales*", incendiaron el Centro Obrero de Villa Guillermina y los ranchos de aquellos que la empresa quería deportar de su territorio. Sólo a fines de 1921 se reanudaría la actividad de la fábrica.

La Forestal fue el monopolio más importante de la Argentina. Un complejo urbano industrial sólo comparable a los instalados por empresas ex-

tranjeras en los países centroamericanos y africanos. Eran de su propiedad las fábricas de tanino de Calchaquí, La Gallareta, Santa Felicia, Tartagal, Villa Ana y Villa Guillermina. Las líneas ferroviarias de la empresa alcanzaron una extensión de 400 kilómetros. Pueblos como Las Gamas, Santa Lucía, Colmena, Garabato, Golondrina, Olmos, Las Garzas, Ogilvie y Puerto Piracuá fueron fundados por La Forestal con el único objetivo de atender las necesidades de los obrajes. En estas poblaciones la empresa tenía el monopolio del comercio y el transporte.

La Forestal impuso su propia moneda para las compras que realizaban sus trabajadores en las proveedurías, donde el peso argentino era rechazado. De esta manera, la empresa se aseguraba que, eventualmente, cuando un trabajador ganaba una cifra superior a lo que consumía, como cobraba su salario con moneda de la compañía, obligatoriamente debía gastar el excedente en la proveeduría.

Además de disponer de una fuerza policial propia, La Forestal financiaba y manejaba la gendarmería volante creada a partir de las huelgas de 1919.

Las ganancias de La Forestal, según se refleja en la prensa de la época, eran calificadas como impresionantes en todo el mundo. Durante los primeros años del siglo XX produjo y exportó la mayor parte del tanino que se consumía en el mundo, llegando a tener pedidos dos millones de durmientes para ser destinados a distintos ferrocarriles de Sudamérica.

Como siempre sucede en los países dependientes y oprimidos por el imperialismo, las empresas extranjeras como La Forestal "que traían el progreso", gozaban de grandes exenciones impositivas.

En este sentido cabe destacar que en el año 1916, el monopolio británico pagó al Estado Provincial 290.000 pesos; mientras que al fisco de Inglaterra, donde la empresa tenía su casa matriz, aportó nueve millones de pesos. Unos años antes (el 29 de agosto de 1899), y para facilitar la radicación de inversiones extranjeras, ambas Cámaras provinciales habían sancionado con fuerza de ley la exoneración "*del pago de los impuestos de Contribución Directa y Patentes por el término de diez años, a contar desde la promulgación de esta Ley, a las fábricas para la extracción del tanino, establecidas o que se establezcan en la Provincia*". Se trataba de ventajas similares a las otorgadas en los últimos años por el gobierno provincial a las empresas extranjeras que se radicaron en Santa Fe, por ejemplo, General Motors.

Hacia 1923, la situación de la zona era de verdadera crisis. El gobernador Enrique Mosca sostenía: "*reducida la industria a un estado casi vegetativo, dentro del cual el esfuerzo de la producción es cada vez menor, padece con ello el capital, decrecen los índices de renta y llega a cobrar así, como derivativo lógico, contornos realmente pavorosos la miseria de los obreros*".

La Forestal abandonó Argentina cuando fue más rentable la planta de la mimosa en África y en unos años miles de desocupados y pueblos fantasmas reemplazaron el "progreso" de los ingleses. Junto a la destrucción sistemática de la riqueza natural, a nuestro país sólo le quedó un irreparable daño

ecológico y social, y sobre todo, el escarnio de observar semejante saqueo llevado adelante por una empresa que despreció al Estado Argentino y a su pueblo, hasta el punto de haber enarbolado la bandera inglesa en todo ese gran feudo que fue La Forestal.

Al agotarse la existencia de quebracho, las fábricas de tanino fueron cerrando poco a poco. En el año 1950 dejaba de producir Tartagal, en 1954 Villa Guillermina, en 1957 Villa Ana y en 1963 La Gallareta. En esa época, la explotación intensiva de los bosques había cambiado la fisonomía de la provincia ya que los campos talados fueron destinados a la ganadería.

Algunas conclusiones del modelo del '80

El modelo económico impuesto determinó que la mayoría de la riqueza que se producía en el país fuera a parar a los bolsillos de los terratenientes, los grandes intermediarios –como los comerciantes importadores de Rosario– y los inversores imperialistas (principalmente ingleses y alemanes y en menor medida franceses, belgas e italianos) que se disputaban el control de la Argentina.

Contra este modelo se rebelaron los obreros y empleados de las grandes ciudades, los sectores de la incipiente burguesía nacional que participaron de las rebeliones de la Unión Cívica Radical de 1890 y 1893, los chacareros pobres y medios e inclusive algunos terrateniente menores y los trabajadores del campo como los obreros rurales –"golondrina"–, arrendatarios, aparceros, etc.

En las rebeliones de 1890 y 1893, tal como ya se ha analizado, los radicales se alzaron contra la expresión política del régimen pero sin cuestionar su base económica. A diferencia de éstos, los pequeños y medianos productores del campo y la ciudad junto al movimiento obrero, criticaron la esencia del modelo impuesto en 1880.

A partir de esos años la condición de vida de los trabajadores empeoró notablemente, no sólo en el interior, sino también en las grandes industrias, desde los frigoríficos a los ingenios azucareros, pasando por los puertos y los ferrocarriles.

Los vehementes relatos de Raúl Scalabrini Ortiz, desarrollados en "*Historia de los ferrocarriles argentinos*" y en otros trabajos, son suficientemente ilustrativos para hacerse una idea de la superexplotación a la que eran sometidos los trabajadores.

El ejemplo de La Forestal se reeditaba en todo el interior del país, desde las estancias de los Menéndez Behety en el sur hasta las de los Patrón Costas en el norte. Los salarios de hambre, sistemas de vales, proveeduría y policía propia eran moneda constante en las estancias o en los obrajes, en las zafras o en los yerbatales.

Los trabajadores comenzaban la cosecha con deudas que arrastraban de la anterior y la terminaban con nuevas obligaciones. Al igual que en La

Forestal, los obreros estaban obligados a comprar los alimentos y los trapos que vestían a la empresa que los contrataba.

En el campo, los inmigrantes y sus hijos no vivían mucho mejor. Con el Grito de Alcorta los colonos se levantaron. Pero a pesar de haber obtenido un triunfo parcial, no pudieron modificar la situación impuesta por los terratenientes. Observando las cifras que surgían del Censo Nacional de 1914 quedaba demostrado que la mayoría de las explotaciones agropecuarias eran trabajadas por arrendatarios o aparceros (casi el 70% en la provincia de Buenos Aires, el 74,4% en Santa Fe y el 60% en Córdoba).

Estos datos también indicaban que con la rebelión de 1912, si bien se logró una disminución del valor de los arrendamientos (bajaron del 45 al 30%), los colonos no lograron acceder a la propiedad de la tierra ni tampoco transformar las cláusulas de los contratos. Es más, la superficie trabajada bajo esta modalidad se había incrementado, y la duración de los contratos, en su gran mayoría eran menores o iguales a los tres años.

Los defensores del modelo del '80 sostienen que, si bien el interior permanecía estancado, en el litoral pampeano se había logrado un extraordinario progreso, dado que allí se producían la mayor cantidad de bienes exportables. Esta es una verdad a medias. Indudablemente, es cierto que en lugares como Rosario, donde se concentró la mayor parte de la población y de los "adelantos importados", se registró un importante crecimiento. También es cierto que en el litoral pampeano se producía la mayor parte de los productos exportables; pero lo que nadie podrá negar es que el Litoral, tal cual ha sido analizado, también sufrió los efectos del latifundio y la dependencia.

Cabe destacar que Pellegrini sostenía que la región pampeana podría llegar a albergar hasta 100 millones de habitantes. Sin embargo, en los momentos de mayor crecimiento demográfico, entre 1900 y 1910, entraron al país apenas un millón de extranjeros. En ese mismo período, los Estados Unidos recibieron más de ocho millones de inmigrantes.

Lo mismo sucedía con las hectáreas cultivadas (de trigo y maíz) y las exportaciones. Argentina producía casi exclusivamente para el mercado externo (61% del trigo y 77% del maíz), mientras que Estados Unidos exportaba apenas un 17% de su trigo y un 1,5% de su maíz.

Otro ejemplo estaba dado por el trato a los inmigrantes que, de hecho, en nuestro país eran considerados ciudadanos de segunda clase. No sólo no podían acceder a la tierra, sino que, como vimos en el caso de Santa Fe, la oligarquía se reservaba para sí hasta los derechos cívicos no permitiendo a los extranjeros votar en las elecciones locales. Estas retrógradas políticas determinarían que en Argentina, en 1914, sólo el 1,4% de los inmigrantes estuvieran naturalizados, mientras que en esa misma época, en Estados Unidos, entre el 64 y el 85% de las primeras corrientes y entre el 4 y el 30% de las nuevas, habían adquirido la ciudadanía.

En la educación sucedía algo similar. En 1914 recibían instrucción primaria sólo el 48% de los niños y "sobraban" maestros. Estábamos en

presencia de una situación similar a la que se vive hoy en Argentina con los profesionales de la salud. Se sostiene que "sobran" médicos y más del 50% de la población no tiene acceso a un sistema de salud confiable.

Al privilegiarse el sector externo, durante ese período no hubo un desarrollo significativo de la industria y mucho menos aún de la minería. En este último tema, parecería que la naturaleza se hubiera encaprichado con Argentina disponiendo que los yacimientos estén al norte de nuestras fronteras o del otro lado de la cordillera. Caso contrario no se podría explicar que países como Bolivia, Perú o Chile tuvieran un extraordinario desarrollo de este sector y Argentina no.

Como se ha sostenido, a partir de la derrota de la izquierda de Mayo se impuso un modelo que se consolidó definitivamente en 1880, basado en el latifundio y la dependencia, modelo que dejó de lado el mercado interno y la posibilidad de un desarrollo autónomo.

LA CRISIS DEL '30 POSIBILITA EL AUGE INDUSTRIAL

La preeminencia agropecuaria antes de la crisis

La producción agropecuaria fue el motor del proceso de desarrollo económico argentino en el período previo a la gran crisis mundial del año '30. La constante demanda de alimentos de los países capitalistas avanzados halló en nuestra región una respuesta favorable. Las carnes y los cereales producidos en la zona pampeana se transformaron en los principales productos exportados por nuestra nación.

En este contexto, las inversiones extranjeras llegaron al país con el objetivo de armar el aparato de transformación industrial, comercialización y circulación adecuado al movimiento del producto exportable. De esta manera, el capital foráneo también lograba beneficiarse en forma directa con la expansión de la producción mercantil local. El monopolio de los puertos, ferrocarriles y frigoríficos, más el control casi total de la comercialización, hizo posible que los inversionistas extranjeros se apropiaran de una buena parte de los beneficios del sector cerealero y ganadero.

Además, la radicación de capitales provenientes de los países centrales en las industrias elaboradoras de productos primarios, como por ejemplo las inversiones alemanas en "Refinería Argentina S.A.", de Rosario, facilitaron su participación en la producción de artículos de consumo.

Durante la Primera Guerra Mundial –período en el que se redujo el ingreso de capitales provenientes de Europa– surgieron y se desarrollaron algunos talleres textiles y metalúrgicos dedicados a la fabricación de mercancías que antes se importaban. No obstante, en el contexto de una economía escasamente diversificada, dependiente de la exportación de cereales y carnes, e importadora de la mayoría de los productos industriales consumidos, el desarrollo de la industria local fue de escasa relevancia.

Es indudable que hasta la gran crisis del año '30 fue el sector agropecuario –la llamada agricultura extensiva– la actividad característica de

la economía provincial. El epicentro de esta actividad estuvo en el sur provincial, poblado por colonos mayoritariamente italianos y razón por la cual esa zona adquirió el apodo de pampa gringa.

La sequía australiana de 1915, la escasa producción norteamericana por la sequía de 1917 y la desaparición de los cereales rusos del mercado europeo, producto de la guerra y de las luchas internas abiertas tras del triunfo de la revolución socialista, encabezada por Lenin, impusieron una mayor demanda internacional de los cereales, con el consiguiente aumento de sus precios.

Esta situación internacional favorable alentaría, sin duda, el camino agroexportador iniciado por Argentina e impondría cambios en la producción provincial, ya que algunas zonas eminentemente pecuarias pasaron a producir cereales. Cabe señalar al respecto que en el norte provincial, en los años previos a la crisis de 1929, algunos departamentos como San Justo y San Cristóbal se habían incorporado a la zona agrícola del país.

La utilización de implementos metálicos para la roturación de los suelos y demás tareas agrícolas facilitó estos cambios. También durante este período se incorporaron las cosechadoras y, a partir de 1919, los tractores.

La industria, a pesar de su carácter expansivo, presentaba hasta el año 1930 un escaso grado de diversificación. Su especialización, orientada a la rama alimenticia, la mostraba totalmente integrada a la producción agraria, cuyos productos debía transformar.

Durante ese período nuestra provincia tenía una economía totalmente abierta, importadora de la mayoría de los productos manufacturados y proveedora de carnes y de cereales.

El norte provincial tuvo un proceso distinto, aunque también dependiente de la demanda internacional. Como ya se ha analizado, una gran compañía extranjera –La Forestal– estableció en esa región, y en la provincia de Chaco, un enclave único en la historia argentina, llegando a cubrir una parte importante del consumo mundial de tanino, extraído del apreciado quebracho colorado.

Rosario define su perfil fabril

Hacia 1895, la introducción de los cultivos cerealeros había provocado profundos cambios en el panorama socio-económico de la mayor parte de la provincia de Santa Fe. A partir de 1870 ya se había registrado una muy rápida expansión de la actividad industrial, tanto en Rosario como en las nuevas colonias. Aunque no se conozcan datos precisos acerca de la evolución industrial en los primeros años de colonizaciones agrícolas, hacia 1882 Carrasco señalaba que en Rosario y en las colonias cerealeras "*habían emergido molinos harineros, destilerías, cervecerías, fábricas de pastas, fundiciones y otras*".

El Censo Nacional de 1887 determinó que en el departamento Las Colonias se contabilizaban 251 establecimientos entre carpinterías, herrerías y hornos de ladrillos. Fueron precisamente los departamentos más afec-

tados por la colonización agrícola (Las Colonias, San Lorenzo e Iriondo) los que registraron un mayor crecimiento industrial. Según datos del mencionado Censo, en el departamento Las Colonias existían 482 talleres (un 25% del total provincial), cifra sólo superada por el departamento Rosario que contaba con 547 establecimientos (un 29% del total).

Muchas de estas industrias surgieron como respuesta a la expansión de la demanda, producida por una población que crecía a un ritmo vertiginoso. En cambio, otras lo hicieron en directa relación con las explotaciones cerealeras, para proveerlas de insumos. Fue así como se radicaron establecimientos dedicados a la fabricación de alimentos, bebidas, implementos agrícolas, bolsas para empacar trigo o molinos harineros.

La mayoría de los implementos agrícolas eran importados, pero aparecieron cientos de herrerías que se dedicaron a proveer, reparar o adecuar sus piezas e, incluso lograron inventar otras que terminaron sustituyendo a las importadas. En 1872, un herrero de la colonia San Carlos, Luis Fabernig, construyó un arado que fue considerado superior al modelo norteamericano usado hasta ese momento.

En 1895 existían 15 talleres de dimensiones importantes dedicados a la fabricación de implementos agrícolas. En 1887, en la provincia se producían 24.369 arados, y hacia 1895 la suma llegaba a 50.068. Muchos establecimientos estaban localizados en Rosario, pero el más importante –la fundición Schneider– se encontraba ubicado en el corazón de la región agrícola, en la localidad de Esperanza.

Según datos proporcionados por el gobernador Cafferata, hacia 1890 la mencionada fundición producía anualmente:

> *" ...2.500 arados de una reja, 200 de dos, 400 rastras de hierro, 150 máquinas sembradoras y 150 ventiladores..."*.
>
> (Citado por Pla, Alberto y otros, *Rosario en la historia*, UNR Editora, Rosario, 1999)

La bolsa de arpillera fue uno de los principales insumos fabricados en establecimientos locales. Esta industria gozó de una alta protección aduanera y, hacia 1893, las firmas más destacadas del rubro eran "La Primitiva", "Seré y Cía.", y "Nortdmayer y Cía.", todas ubicadas en Rosario. Pero la industria harinera fue, sin duda, la más importante. En 1895, Santa Fe ocupaba el segundo lugar (detrás de Buenos Aires) entre las provincias argentinas productoras de harina.

Como resultado del desarrollo de la agricultura operado entre 1870 y 1895, Santa Fe poseía una incipiente industria que se había conformado en gran parte como consecuencia de la mencionada expansión cerealera. Algunos pueblos trigueros como San Carlos, Rafaela, Cañada de Gómez, Casilda y, fundamentalmente, Esperanza (la primera colonia agrícola del país), se habían transformado, debido a la instalación de numerosos talleres, en pequeños centros industriales.

Con posterioridad, ya en la época de consolidación de la exportación de capitales por parte de los países económicamente avanzados, Argentina fue incorporada definitivamente al mercado mundial. Su llegada se produjo a pesar del escaso desarrollo de nuestro país, lo que determinaría que el proceso industrial se basara en inversiones de capital extranjero, tanto en sectores de la alimentación como en ferrocarriles.

Durante ese período, fueron significativas las radicaciones industriales de capitales extranjeros que se produjeron en las ramas alimenticias, y que estuvieron en su mayor parte orientadas al mercado interno. En consecuencia, la importancia de la industria estaba determinada por los intereses de los inversionistas y los montos girados.

No obstante, quedaban algunos nichos para ser ocupados por capitales locales, ya sea de productos que no se importaban, de productos perecederos o de aquellos que ofrecían ventajas económicas si se producían en el país.

En Santa Fe, además de la ya mencionada industria del tanino de La Forestal, el creciente desarrollo de la red ferroviaria determinó la creación de talleres en Laguna Paiva, San Cristóbal, Santa Fe y Rosario, que en la primera década del siglo XX ocupaban cerca de 2.000 empleados y estaban dedicados a la fabricación y reparación de elementos para este transporte. Estas cifras se incrementaron notablemente a principios de la década del '50, ya que por esos años llegaron a funcionar 14 grandes talleres ferroviarios, rodeados de un sinnúmero de pequeños establecimientos de reparación de maquinarias y vehículos.

Simultáneamente, la expansión de la agricultura triguera también dio origen a la aparición de numerosos molinos, ubicados en distintos puntos de la provincia. Pero la rápida extinción de los bosques utilizados para generar combustible obligó a traer madera del norte, con fletes ferroviarios muy altos. Esta situación, sumada a la irregularidad de las cosechas y las restricciones impuestas por los países compradores, provocaría el cierre de un gran número de molinos que pasaron a concentrarse en Buenos Aires, Santa Fe y Rosario.

A pesar de las dificultades señaladas, la producción de harina fue creciendo. En 1887 existían 70 molinos que generaban 78.000 toneladas y en 1912 trabajaban sólo 31, pero con una producción de 130.000 toneladas. Como generalmente sucede, la crisis llevó a la concentración de molinos en un menor número de empresas, pero con mayor desarrollo técnico y mejor rentabilidad. Hasta la crisis de 1890, la industria molinera provincial era la principal abastecedora del mercado nacional, exportando también a Brasil y Paraguay. Esta situación sólo se revertiría unos años después con la expansión de la agricultura triguera en la provincia de Buenos Aires.

Rosario, ya sea por las dificultades que tenían los inmigrantes para acceder a la tierra o por la demanda de mano de obra del nudo ferro-portuario, atrajo a una gran cantidad de extranjeros, que fueron constituyendo un importante mercado de trabajo y consumo.

Esto fue determinante para el surgimiento de las primeras actividades industriales importantes de la época. A partir de 1870 comenzaron a desarrollarse ramas como la construcción y los alimentos. También en este período, y debido a su conocimiento, habilidad técnica y eficacia, los inmigrantes se convirtieron en los primeros artesanos y talleristas locales.

En esta ciudad, a principios del siglo XX, aparecieron algunas fundiciones que trabajaban materia prima importada, y durante ese mismo período comenzaría la sustitución industrial de importaciones en algunos rubros como azúcar y cervezas.

Por esos años, Rosario ya contaba con algunas plantas industriales importantes como la Refinería Argentina de Azúcar, que empleaba más de 700 trabajadores. Esta fábrica ocupaba un terreno de 27.000 metros cuadrados y fue uno de los establecimientos industriales más importantes del país.

Sus obreros sentaron las bases de la populosa barriada, en el norte de la ciudad, que adoptó el nombre de Refinería (actualmente barrio Las Malvinas). Las instalaciones comenzaron a construirse en 1887, y en 1889 la fábrica se puso en funcionamiento. Con máquinas modernas, la refinería podía competir con los más avanzados establecimientos europeos de su tipo. La empresa, de origen alemán –con el correr de los años incorporó capitales nacionales–, tenía una capacidad de producción de cerca de 200.000 kilos de azúcar refinada por día. Dejó de funcionar en 1928, después de 39 años de actividad.

Durante la Primera Guerra Mundial, con la reducción a la mitad de las importaciones, comenzó un pujante desarrollo de la rama metalúrgica y aparecieron las primeras industrias de implementos agrícolas.

Hacia 1911, las ventas industriales del departamento Rosario alcanzaron el 65% del total comercializado en la provincia.

La construcción, además, creció vertiginosamente. Según datos del ex Consejo de Ingenieros de la Provincia de Santa Fe, en la década del '20 se produjo un gran salto de esta industria. También en esa década, y a pesar de la falta de protección estatal, la industria frigorífica aumentaría en forma importante su producción y en el año 1924, como ya se ha señalado, se instalaba en Rosario el Frigorífico Swift.

Hacia 1930 Rosario ya había consolidado su perfil de ciudad con un importante peso industrial.

Las gestiones radicales previas a la crisis

Entre 1912 y 1929 distintas administraciones radicales dirigieron los destinos de la provincia. Durante ese período, Manuel Menchaca, Rodolfo Lehmann, Juan Cepeda, Enrique Mosca, Ricardo Aldao y Pedro Gómez Cello se sucedieron al frente de la gobernación de Santa Fe.

Manuel Menchaca asumió el poder en medio de una profunda división partidaria, producto de la cual debió soportar la dura oposición de los *coalicionistas* y *liguistas* en la Legislatura, lo que condicionaría su mandato.

Las disputas se dieron en el marco de las dificultades creadas por el efecto depresivo que la Primera Guerra Mundial tuvo sobre la economía provincial, y que puso de relieve la crisis de una estructura agroexportadora dependiente del comercio exterior, entonces paralizado. Esto provocaría una abrupta caída del movimiento portuario, con la consiguiente merma de ingresos de la recaudación aduanera.

Como consecuencia de esta situación, el estado provincial debió afrontar una crisis financiera que lo llevaría a un progresivo endeudamiento. Pero mucho más difícil aún fue la situación que debió soportar la población, ya que la desocupación alcanzó niveles alarmantes dando paso a una serie de importantes estallidos sociales.

Los saqueos no comenzaron en los '90. Ya en 1914, en Rosario, masas hambrientas asaltaban carros de pan y almacenes. Para paliar el hambre, la Municipalidad organizaba ollas populares y brigadas de trabajo –un símil de los planes Jefes y Jefas de la actualidad– que realizaban tareas comunitarias a cambio de un salario mísero.

El Gobernador apeló a la obra pública para salir de la crisis. En 1913 se realizó un censo escolar que detectó una población de 100.000 niños distribuidos en 365 escuelas fiscales. Con las inversiones realizadas por la provincia, éstas aumentaron a 429 en 1915. También durante la gestión de Menchaca se construyeron puentes, caminos y edificios, entre los que se destacaban la Legislatura Provincial y la Casa de Gobierno en Santa Fe, en tanto la Jefatura Política y la casa central del Banco Provincial eran concluidas en la ciudad de Rosario. En ésta, a iniciativa del capital privado, se construyeron los edificios del Jockey Club, el Palacio Fuentes y la Bolsa de Comercio.

El gobierno de Lehmann, además de lidiar con la situación recesiva desatada por la guerra, tuvo que enfrentarse con los efectos de una sequía sin precedentes. Al igual que su predecesor, eligió el camino del endeudamiento, realizando a la vez un fuerte recorte de los gastos.

El malestar y la protesta social continuaban evidenciándose, tanto en los obrajes del norte como entre los chacareros de los departamentos del sur, ya organizados a través de la Federación Agraria Argentina. Entre 1918 y 1919, en la zona agrícola se desarrollaron importantes luchas debido al estancamiento de las cosechas.

Durante la gestión de Lehmann se creó una red de Escuelas Normales mixtas de maestros rurales que, además de cumplir con su misión específica, se convirtieron en el eje de la vida cultural de ciudades como Casilda, Cañada de Gómez, Villa Constitución, Venado Tuerto, Reconquista o Rafaela. Durante ese período era común observar a muchos jóvenes de las pequeñas localidades aledañas trasladarse diariamente a esas ciudades para cursar la carrera docente.

En 1918, el periodista Salvador Caputto fundó en Santa Fe el diario *El Litoral*. Al año siguiente, mediante ley de la Nación, se creó la Universidad

Nacional del Litoral, correspondiendo a la ciudad de Santa Fe las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales y de Química industrial y agrícola. Por su parte, Rosario fue sede de la de Ciencias Médicas, Farmacia y ramos menores; Ciencias Económicas, Comerciales y Políticas; y Matemáticas, Físico-Químicas y Ciencias Naturales.

En medio de una ardorosa disputa partidaria, fundamentalmente con el *caballerismo*, a fines de 1919 Lehmann delegó el gobierno en el presidente del Senado, Juan Cepeda, ya que el vicegobernador Francisco Elizalde había renunciado al cargo en 1916.

Dividido en varias líneas internas –*nordistas, sudistas, nacionalistas, cepedistas*, etc.–, el radicalismo enfrentó en 1920 al Partido Demócrata Progresista, que llevaba como candidatos a Lejarza y Molinas. A pesar del profundo fraccionamiento, resultó triunfante la fórmula radical encabezada por Enrique Mosca y Juan Luis Ferrarotti, en medio de denuncias de fraude realizadas por Lisandro de la Torre.

La gestión de Mosca transcurrió en un clima de mucha agitación social que encontró su pico máximo en la huelga de los trabajadores de La Forestal de 1921. A esta lucha –una de las más importantes de la historia del movimiento obrero argentino– habría que sumarle las huelgas agrarias de Piamonte, Pellegrini, Cañada Rosquín y El Trébol. A raíz de estos conflictos, en 1922, el gobierno provincial creó el Departamento de Trabajo.

En medio de la profunda crisis política que dividía al radicalismo, la Convención de 1921 elaboró una nueva Constitución Provincial que no entraría en vigencia debido al veto del Poder Ejecutivo. Esta Constitución, considerada por muchos sectores como verdaderamente transformadora, eliminaba la religión Católica como culto oficial y también la obligación del gobernador y vicegobernador de profesarla.

Asimismo, establecía que la educación debía ser gratuita, integral y laica. Además, se prohibían los juegos de azar y las loterías, se declaraba la inamovilidad de los empleados públicos, se creaba la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, como así también un Jury de enjuiciamiento para los jueces y magistrados de las Cámaras. A la vez, flexibilizaba el mecanismo de reforma constitucional y dividía a los municipios en grandes, medianos y chicos.

Los municipios grandes, que tenían más de 25.000 habitantes, gozarían del régimen de "carta libre", es decir que podrían organizarse por sí mismos. Pero tal vez lo que más preocupaba a algunos sectores del poder era que la bisoña constitución autorizaba nuevas formas de democracia como el referéndum y la revocatoria de mandatos.

Los municipios medianos –entre 3.000 y 25.000 habitantes– contarían con una Intendencia y un Concejo; y los chicos –hasta 3.000 habitantes– serían administrados por una Comisión de Fomento.

La decisión del Gobernador de vetar la nueva Constitución invocando la "*falta de atribuciones de la Convención para excederse en la duración de su*

mandato" satisfizo a los sectores más reaccionarios de la sociedad, especialmente a la Iglesia Católica, que había cerrado filas contra la nueva norma. El veto provocó desazón en todo el arco opositor, fundamentalmente en los sectores más progresistas de la sociedad.

En la ciudad de Santa Fe, y también durante el gobierno de Mosca, se fundaron la Biblioteca de la Cámara de Diputados, la Biblioteca y Archivo Histórico de Gobierno y el Museo Rosa Galisteo de Rodríguez, en tanto que en Rosario se creaba el Museo Municipal de Bellas Artes. Además, durante esta gestión se produjo la transferencia a la Nación de la Universidad Provincial de Santa Fe.

Ricardo Aldao, acompañado del viejo caudillo antipersonalista Juan Cepeda, asumía la gobernación en 1924. Por entonces se había superado la crisis producida por la Primera Guerra Mundial y se observaba una mejora económica que se reflejaba en la intensa actividad que desplegaban los puertos de Villa Constitución, Santa Fe y, fundamentalmente, Rosario. Como analizaremos más adelante, al calor del proceso de sustitución de importaciones, surgieron varias industrias vinculadas a la metalurgia (implementos agrícolas), alimentación, construcción, etc. También habría que recordar, como ya ha sido señalado, que en 1924 se había instalado en Rosario el frigorífico Swift.

En ese mismo año comenzaría un vasto plan de tendido vial y se generalizaría la extensión del alumbrado público.

En el ámbito de lo social, se intentó acallar la protesta de los trabajadores con una legislación laboral que consagraba la jornada de trabajo de ocho horas, la indemnización por accidentes a los trabajadores rurales y una nueva reglamentación de jubilaciones y pensiones.

Como contrapartida, y como no podía ser de otra manera al tratarse de un gobierno de tinte alvearista, la abultada deuda externa provincial procuró paliarse con mayor presión impositiva. Se gravó el tabaco, las bebidas alcohólicas y los artículos suntuarios; en el campo se aplicó un impuesto al absentismo (una correcta medida que recaía sobre los propietarios de tierras que residían fuera de los suelos improductivos); y se procuró regularizar la situación de los morosos con el fisco a través de la dura Ley de Apremios de 1927.

El *personalista* o *irigoyenista* ex intendente de Santa Fe, Pedro Gómez Cuello, encabezó el último turno radical de ese período. El nuevo gobernador no lograría superar la profunda división que sacudía al radicalismo y luego de constantes cambios de gabinete, el gobierno de Irigoyen ordenó la intervención federal. Poco tiempo después, la Revolución de 1930 puso fin al primer ciclo democrático desarrollado en la provincia de Santa Fe.

La debacle económica mundial

La crisis de octubre de 1929, que produjo la quiebra de los valores de la Bolsa de Nueva York, excedió el marco financiero en que se había origi-

nado afectando todas las actividades económicas e industriales. Rápidamente fue más allá de los límites de Estados Unidos, convirtiéndose en mundial. En Argentina sus efectos comenzaron a notarse a principios de 1930, con la baja generalizada del precio de los granos y la desvalorización de la moneda. Las restricciones impuestas a la importación por los países compradores de nuestros productos primarios, junto al desmoronamiento de sus precios, afectaron severamente el ingreso de divisas, produciéndose también una importante caída de los niveles de empleo. Nuestra economía orientada en función del mercado externo, y basada en la dependencia del imperialismo y el latifundio, mostraría con crudeza su enorme fragilidad.

Tras la debacle capitalista de 1929, se agudizaron las disputas interimperialistas cuando las grandes potencias hegemónicas descargaron la crisis sobre los países y pueblos oprimidos.

El gobierno de Irigoyen, aunque no fue capaz de impedir que la hecatombe económica recayera sobre la mayoría del pueblo, tampoco se manifestó como un títere al servicio del imperialismo, los terratenientes y los grandes grupos intermediarios. Por ello, los representantes de los sectores dominantes comenzaron a elaborar planes para derrocarlo.

El programa que el caudillo radical había levantado en la campaña electoral de 1928 era antiimperialista, ya que en general contemplaba los intereses de la burguesía nacional. Planteaba la rebaja en el precio de los combustibles a través de YPF (creada en 1921 por el general Mosconi), la nacionalización del petróleo y relaciones económicas libres con todos las naciones del mundo, incluida la Unión Soviética. En el terreno social sostenía la necesidad de establecer la jornada legal de trabajo de ocho horas.

La fórmula encabezada por Irigoyen derrotó al radicalismo antipersonalista, que llevaba como candidato a Melo, por un margen nunca visto hasta ese momento. La diferencia fue de casi cuatro votos a uno.

A pesar de este respaldo popular, Irigoyen –totalmente desbordado por la crisis– no tomó medidas de fondo contra la oligarquía y los monopolios imperialistas, eligiendo el camino de la fuerza frente a las crecientes protestas sociales, fundamentalmente de los trabajadores. Asimismo, su intento de nacionalizar el petróleo fue derrotado por los conservadores en el Senado en el año 1928.

Durante 1929 y 1930, la mayoría de las huelgas obreras estuvieron organizadas y dirigidas por los comunistas, a través de los "Comité de Huelga". Fueron particularmente importantes tanto el paro por tiempo indeterminado de los metalúrgicos de la ciudad cordobesa de San Francisco, como la gran huelga portuaria de Rosario de 1930, ambas luchas dirigidas por cuadros provenientes de las filas del comunismo.

En San Francisco se desató una represión que acabó con la vida de cuatro trabajadores, dejando decenas de heridos y muchos detenidos, entre ellos la mayoría del Comité de Huelga. Tal vez la decisión del gobierno radi-

cal de Córdoba de acallar violentamente la protesta social, haya incidido en la posterior decisión de neutralidad que tomó la dirigencia gremial nacional durante los sucesos de 1930, que culminaron con la caída de Irigoyen.

En este contexto, las vacilaciones de los dirigentes políticos radicales fueron importantes. Ante los aprestos golpistas, el gobierno no tomó medidas contra los instigadores (terratenientes, intermediarios e imperialistas), lo que impidió que se formara un frente antigolpista para enfrentar la asonada militar. Además, la decisión de reprimir las protestas sociales acabó esmerilando el prestigio del caudillo radical.

Las fuerzas golpistas, con Irigoyen debilitado, promovieron una campaña de desprestigio en su contra. Lograron instrumentar a favor del golpe las movilizaciones juveniles, particularmente las estudiantiles, y el 6 de septiembre de 1930 derrocaron a Irigoyen e instauraron una dictadura militar encabezada por el general Uriburu.

El movimiento obrero, que había sido duramente reprimido, permaneció al margen de los sucesos. No contó con una dirección capaz de colocarlo en la trinchera contra el golpe pro-oligárquico y pro-imperialista de 1930. Las organizaciones gremiales, dirigidas en su mayoría por "sindicalistas" y socialistas, mantuvieron una posición neutral; y los comunistas, que habían estado a la cabeza de las grandes luchas de esos años, tampoco definieron claramente una posición contra el quiebre del orden institucional.

La dirigencia sindical cometió un grave error al caracterizar equivocadamente a Irigoyen, no viendo la diferencia entre un gobierno de la burguesía nacional y una dictadura pro-oligárquica y pro-imperialista. Este error se repetiría en forma agravada en 1976, elevándose a la categoría de deserción. Ese año, una parte importante de la dirigencia gremial, no sólo peronista sino de la mayoría de las fuerzas de izquierda, apoyó el golpe de estado encabezado por Videla.

Sin embargo, también habría que decir que otra parte del gremialismo peronista, junto a algunos sectores del sindicalismo de izquierda, después de estudiar y extraer justas conclusiones de la experiencia de 1930 y del período posterior de 1945-1955, tendrían una activa posición antigolpista, como fue el caso de la dirigencia clasista de la seccional Córdoba del SMATA, conducida por René Salamanca.

El golpe de 1930

El 6 de septiembre de 1930 se impuso el golpe que derrocó al gobierno radical de Hipólito Irigoyen. José Félix Uriburu, un hombre del riñón de la oligarquía salteña, estuvo a la cabeza de la sublevación. Al frente de 1.000 efectivos marchó desde la Base El Palomar hasta la Casa de Gobierno. Salvo un enfrentamiento con militantes radicales armados, que tuvo lugar en la zona del Congreso, no hubo oposición al alzamiento.

Como ha sucedido a lo largo de la historia Argentina, un país dependiente y disputado por distintos imperialismos, el golpe de estado de 1930 fue apoyado por varias potencias extranjeras. Los ingleses, los norteamericanos, los alemanes, los franceses, los italianos y los españoles tuvieron un activo papel en la ruptura del orden legal. Todas estas potencias tenían fuerte influencia en la economía argentina, ya sea en forma directa o a través de acuerdos con la oligarquía nativa.

En el ámbito continental, sin embargo, los británicos y los norteamericanos eran las potencias más influyentes. Aprovechando las contradicciones entre estas potencias, los italianos, los alemanes, y en menor medida los franceses y españoles, avanzarían en su penetración en Argentina.

Los medios de comunicación también participaron del quiebre institucional y desde las páginas de diarios oligárquicos como *La Prensa y La Nación,* o a través de *Crítica,* órgano vinculado a la socialdemocracia francesa, trabajaron activamente en el período previo para desgastar al gobierno de Irigoyen.

En el golpe de estado de 1930 confluyeron distintos sectores militares. José Félix Uriburu –ex inspector general del Ejército durante el gobierno de Alvear– era un hombre muy influenciado por el nazismo hitleriano en expansión en Alemania, como así también por los regímenes instalados en España e Italia con Primo de Rivera y Benito Mussolini. La de Uriburu era una corriente minoritaria con relación a la mayoritaria encabezada por Agustín P. Justo, que aglutinaba a elementos conservadores, radicales antipersonalistas y socialistas independientes.

Entre los miembros más influyentes de la corriente golpista se encontraban el general Arroyo y los coroneles Saroba y Descalzo, mientras que el primer Estado Mayor Revolucionario estuvo integrado, entre otros, por oficiales como el teniente coronel Álvaro Alsogaray (padre del conocido capitán-ingeniero que sería ministro de economía de Frondizi) y los capitanes Perón y Tauber, hombres que tuvieron muchísima influencia en los sucesos políticos y militares de las dos décadas siguientes.

Estas dos grandes corrientes –uriburistas y justistas– albergaron en su seno a notorios elementos de la derecha argentina como el radical antipersonalista Leopoldo Melo, el socialista independiente Federico Pinedo y los conservadores Rodolfo Moreno y Antonio Santamarina.

Por último, es importante subrayar el apoyo brindado al régimen por la Corte Suprema de Justicia encabezada por José Figueroa Alcorta, que mediante una acordada del 10 de septiembre de 1930 dio "legitimidad" al gobierno de Uriburu, sentando un ignominioso precedente en la justicia argentina.

Crece la industria y se desarrolla una gran cuenca lechera

A diferencia de lo sucedido durante la crisis de 1890, que afectó financieramente a Santa Fe, al punto de dejar al estado provincial al borde

la quiebra, la crisis mundial de 1929 marcó un punto crítico en la evolución de la agricultura provincial y nacional. Ese año, la producción había llegado al record de 3.700.000 hectáreas sembradas con trigo, lino y maíz, cifra que convertiría a Argentina en el principal exportador mundial de maíz y semilla de lino, como así también en un importante abastecedor de trigo en el mercado internacional.

La depresión de 1929 incidió en la caída de la cotización de los cereales. Los bajos precios internacionales, la existencia de trigo acumulado en Norteamérica, las barreras impuestas a las importaciones de productos agrícolas por parte de varias potencias europeas y la restricción total del crédito bancario a los productores locales, fueron factores que coadyuvaron para que la crisis tuviera efectos notorios en la agricultura.

En el campo santafesino se produjo una paralización en la línea ascendente que su producción había logrado durante la guerra y posguerra, paralización que originó la desaparición de 10.000 chacras en cuatro años, además de un proceso de desgaste y descapitalización en el plantel de maquinarias agrícolas. En esto, además de la crisis, también incidió la caída de las importaciones.

La sequía que soportó Estados Unidos en 1934 y 1936 atenuaría los efectos de la crisis argentina, dado que la nación del norte se vio obligada a comprar granos de forrajes. Entre 1935 y 1937 se exportaron más de 1.000.000 toneladas anuales de maíz, lo que significó un gran respiro para la economía agraria nacional y provincial. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, las exportaciones disminuyeron nuevamente y se produjo una caída pronunciada en la siembra de granos.

Como contrapartida, durante este período se iniciaría una etapa de crecimiento industrial. La paralización del mercado mundial, producto de la crisis de 1929, abrió un proceso de sustitución de importaciones –el cual será analizado con todo detalle– que dio impulso al desarrollo de distintas ramas de la economía. Este proceso influyó notablemente en la producción de manufacturas, y el Censo Industrial de 1935 registró que en la provincia se habían radicado 5.910 establecimientos que daban trabajo a 50.000 personas.

Las grandes industrias y establecimientos, como el frigorífico Swift, Celulosa y los talleres ferroviarios de Pérez, aparecían como los máximos consumidores de la energía eléctrica –que tenía precios subsidiados para la industria– producida por la usina Sorrento de Rosario.

La transformación industrial que propiciaba la utilización de la energía eléctrica, se expresaría en los cambios de infraestructura practicados y en las inversiones realizadas en establecimientos de menores dimensiones como "Talleres Metalúrgicos Chaina y Cía.", "Galvametal S.R.L.", "Fundición Repetto y Sforza", "Evaristo Alvarez carpintería metálica", "Minetti y Cía. Ltda.", "Molinos de Yerba S.A. Martín y Cía.", "Molino harinero y fideería", "Hilandería y Fábrica de Bolsas Alabern y Fábrega", etc.

La crisis del '30 produjo una disminución de las áreas destinadas al cultivo de granos y, en cambio, la evolución de la economía agropecuaria provincial se basó en el aumento de las cabezas de ganado. Este proceso se aceleró a principios de la década del '40, período en el que creció considerablemente la cantidad de ganado porcino, vacuno y caballar.

Durante la década del '30, este crecimiento fue significativo en los departamentos del centro y norte provincial, particularmente en Las Colonias y Castellanos, que se caracterizaban por haber realizado una importante subdivisión de la tierra a partir de la política de colonizaciones.

En esta región, y desde 1929, se agudizó la crisis de la agricultura, no sólo por la coyuntura mundial, sino también debido a que los suelos trabajados desde la segunda mitad del siglo XIX se encontraban al límite de la explotación intensiva. A causa de estos dos elementos, los propietarios –fundamentalmente los medianos– iniciaron un camino de transformación de las chacras en tambos. Comenzaba un proceso de explotación continua de la ganadería, y la región, junto a los departamentos lindantes de Córdoba y Santiago del Estero, se transformaba en la principal cuenca lechera del país.

Paralelamente al desarrollo de la nueva industria tambera se generó un amplio movimiento cooperativista, que se abocó a la transformación de la materia prima procurando asegurar la colocación de sus productos en el mercado.

El optimismo que generó la nueva industria hizo que la producción lechera se difundiera también en toda la zona específicamente ganadera, motivo por el cual esta nueva actividad terminó siendo incorporada en las estancias de cría e invernada.

En el año 1934, y como producto de esta nueva experiencia, las Cámaras Legislativas aprobaron una Ley de Colonización, con la intención de estimular la nueva producción en otras regiones de la provincia. La norma autorizaba al gobierno de Santa Fe a adquirir campos con el objetivo de subdividirlos en chacras de 150 hectáreas, para entregarlos posteriormente, con opción de compra, a los chacareros interesados.

Proteccionismo y asfalto para impulsar la producción

El colapso de los precios internacionales de los cereales, junto al proteccionismo de los mercados internacionales, determinaron que la crisis de 1929 golpeara con fuerza en el campo argentino. En este marco, el gobierno de Justo adoptó una serie de resoluciones que implicaban la intervención del Estado en áreas de la producción.

En 1933 se formó la Junta Reguladora de Granos y, tras la Segunda Guerra Mundial, este organismo estatal regulador de precios fue el único comprador de cereales al valor que establecía el Poder Ejecutivo Nacional. En 1935 se constituyó la Corporación Argentina de Productores de Carnes

y ese mismo año se fundaba la Junta Nacional de Carnes. En 1936 se crearon la Comisión Nacional de Granos y Elevadores y la Junta Nacional del Algodón; esta última ayudó tanto a experimentar como a fomentar el cultivo de ese producto en el litoral santafesino.

Hay muchos autores que consideran una paradoja que regímenes oligarcas, tan identificados con el liberalismo, a partir de 1930 tomaran medidas de carácter proteccionista, como las llevadas adelante por el gobierno de Justo con la llegada de Federico Pinedo al Ministerio de Hacienda.

En este sentido se podría afirmar que es cierto que el gobierno de Justo y los que lo sucedieron tuvieron que imponer medidas dirigistas para enfrentar la crisis. Pero también es cierto que no lo hicieron en defensa del interés nacional –lo que exigía cambiar las estructuras a favor de un desarrollo autónomo del país–, sino en defensa de los intereses de la oligarquía y su relación especial con el imperialismo.

A las medidas proteccionistas nacionales se les sumaron otras que se tomaron en la provincia y que tuvieron mucha importancia en el desarrollo de la producción regional.

En 1934, por "ley" provincial número 2447, se creó el Instituto Experimental de Investigación Agrícola de Santa Fe, y tres años después se incorporó a esta institución la Dirección General de Fomento Agrícola-Ganadero. Este organismo fue el único en su género en el país, con estaciones y subestaciones experimentales ubicadas en distintas localidades de la provincia, que realizaban estudios relacionados con el agua y el suelo.

En 1939 se creó la Junta de Agricultura. La misión de este organismo era proporcionar al gobierno provincial asesoramiento en materia agraria y, además, tuvo a su cargo la inspección de cooperativas y la organización del Registro de Contratos de Arrendamientos.

Un elemento decisivo para la producción fue la construcción, a partir de 1930, de una red de caminos asfaltados, lo que provocó que a ambos lados de la ruta se produjera una paulatina subdivisión de las propiedades. Como ocurrió con los ferrocarriles, estas redes se consolidaron en forma de abanico, desembocando en los puertos de salida de la producción primaria. Sobre Rosario (puerto de aguas profundas y ciudad en la cual terminan todas las redes ferroviarias) también convergían y convergen la mayoría de las rutas. Algo similar, aunque en menor medida, sucede con Santa Fe, Reconquista y Villa Constitución. La aparición del automóvil, en la década del '30, y la red de transporte carretero, en general acompañando las vías del ferrocarril, reforzó el esquema de radio concéntrico.

En 1933, el pavimento unió Santa Fe con Rosario; esta ruta se extendía por el norte hasta el departamento San Justo y por el sur hasta Capital Federal. En 1935 se habilitó la ruta Buenos Aires-Rosario, vía Pergamino y Arrecifes; un año más tarde se inauguraba el enlace Rosario-Córdoba; y en 1939 se habilitó el tramo Rosario-Casilda.

Con los caminos asfaltados se produciría un importante cambio en la vida productiva provincial. Del mismo modo en que había sucedido en otra época con los ferrocarriles, estas nuevas rutas marcaron el inicio de la prosperidad de las localidades que se desarrollaron a su vera y, a la vez, condenaron a la decadencia a las que quedaron fuera de esa esfera de influencia.

Dos años, cinco gobernadores

Por primera vez, desde la sanción de la Constitución de 1853, el 6 de septiembre de 1930 se produjo una ruptura del orden constitucional a través de un golpe de estado. El presidente Hipólito Irigoyen fue derrocado por el general José Félix Uriburu, que dirigió los destinos del país entre 1930 y 1932.

Durante ese período, Uriburu designó cinco interventores que gobernaron en la provincia con amplios poderes. Estos cambios, producidos en apenas dos años, se debieron a que en Santa Fe, como en el resto del país, había estallado un enorme movimiento de rebeldía popular y patriótica. La resistencia del pueblo impidió que el gobierno de facto se consolidara en la provincia.

En el ámbito nacional, la protesta pretendió ser acallada con la aplicación de la ley marcial, que se mantuvo hasta junio de 1931. Durante ese período fueron fusilados varios dirigentes de la resistencia, entre ellos Joaquín Penina, un obrero catalán que militaba en las filas de la FORA. Penina, acusado de difundir un volante denunciando el golpe de estado, fue ejecutado el 8 de septiembre de 1930 en Rosario, en un lugar conocido como "Las Quebraditas", a orillas del Saladillo.

La presión popular exigiendo el esclarecimiento de este crimen fue prolongada. En el año 1932, José Antelo, ministro de Gobierno de la gestión del Partido Demócrata Progresista (PDP), ordenaba mediante decreto a la Jefatura de Policía de Rosario llevar adelante las investigaciones. Nunca aparecieron los responsables del asesinato y este crimen impune quedaría inscrito en la historia de la ciudad como un antecedente de las masivas matanzas llevadas adelante años después por la dictadura militar impuesta en 1976 y en la violenta represión de diciembre de 2001.

En 1932, y mediante elecciones fraudulentas, asumía Agustín P. Justo la presidencia de la Nación y el doctor Julio A. Roca la vicepresidencia. Los candidatos de la Concordancia habían triunfado sobre los de la Alianza Civil.

Paralelamente, en la provincia de Santa Fe, el 20 de febrero de 1932 llegaba por primera vez al gobierno el Partido Demócrata Progresista, que había apoyado a la Intervención, al menos, en todo lo que significara el desmonte de la maquinaria electoral del radicalismo. Asumieron el doctor Luciano Molinas como gobernador e Isidro Carrera como vicegobernador.

La abstención del radicalismo –actitud tomada luego de que Uriburu anulara el triunfo obtenido por ese partido en la provincia de Buenos Aires, en el año 1931– facilitó la victoria de los Demócratas. Esta posición de los

radicales no era nueva, ya que a partir de la Revolución de 1890, y hasta el triunfo de Irigoyen, en 1916, esta fuerza política se volcó en reiteradas oportunidades al abstencionismo electoral.

La gestión de la Democracia Progresista

El primer y único gobierno provincial de este partido, encabezado por Luciano Molinas, tuvo como ministros a los doctores Juan Antelo, Abel Furno, Luis María de la Vega y al Ingeniero Alberto Casella.

La primera medida que tomó el nuevo gobernador fue la reimplantación de la Constitución de 1921, cuyos puntos ya fueron analizados con todo detalle.

El principal adversario de la reposición de la controvertida norma, a semejanza de lo sucedido una década atrás, fue la Iglesia Católica, que en esta oportunidad contó con el respaldo de la Acción Católica Argentina, recientemente instalada en la provincia. La Unión Cívica Radical del Comité Nacional y los conservadores acompañaron el reclamo de la Iglesia.

La entrada en vigencia de la nueva carta generó conflictos que monopolizaron los debates políticos y alentaron al radicalismo a alzarse en armas contra el gobierno demócrata. Los radicales, proscritos, perseguidos y forzados permanentemente a la abstención electoral, eligieron nuevamente ese camino.

Continuando las experiencias de 1890, 1893 y 1905, el 29 de diciembre de 1933, mientras se realizaba la Convención Nacional del partido en Santa Fe, con la presidencia de Alvear, un movimiento perteneciente a la tradicional corriente intransigente y personalista de Irigoyen atacó la Jefatura de Policía y las comisarías de la capital provincial. El movimiento fue sofocado por tropas nacionales instaladas en la ciudad.

En Rosario, se produjo simultáneamente otro levantamiento y los militantes asaltaron el cuartel de la Guardia de Caballería y las principales comisarías; esta situación se repitió en localidades como San Jerónimo y Cañada de Gómez. En el sur, la sublevación fue sofocada por tropas perfectamente organizadas, que estaban en conocimiento del plan radical tras la detención en Buenos Aires del coronel rebelde Atilio Cattaneo.

El programa Demócrata Progresista –de contenido liberal– no propiciaba una modificación de fondo del rumbo económico imperante: sólo planteaba reformas, aunque algunas de ellas eran realmente transformadoras, como las propuestas contra el latifundio.

El plan también era ambicioso en otras esferas. Atacaba al dirigismo estatal, que tendía a la centralización del Estado; y proponía modificar, y en algunos casos eliminar, instituciones y prácticas observadas desde la conformación del estado provincial conservador.

En el plano político sostenía la necesidad de suprimir los departamentos como unidades políticas y administrativas. Además, planteaba la instalación de la policía municipal electiva, el sufragio universal para am-

bos sexos, la elección directa del gobernador y vicegobernador, una amplia restricción a la facultad de veto del Poder Ejecutivo, una nueva ley orgánica de los partidos políticos, etc.

◀ Lisandro de la Torre, Fermín Lejarza y Pancho Correa en un día de elecciones. (Biblioteca y Archivo del Museo Histórico Provincial "Dr. Julio Marc". (Colección Fotografias).

En el plano económico se comprometía a derogar el impuesto a los cereales de 1891 (reducido durante la gestión de Iturraspe), a reformar la Ley de Contabilidad y a proceder a la elección directa, por parte del pueblo, del Contador General del Tesoro Provincial y transformar el Banco Provincial en una entidad mixta. Sin embargo, la medida más audaz que presentó el programa en este terreno, fue la propuesta de ***"dividir el latifundio por acción de la presión impositiva o la expropiación".***

▲ Lisandro de la Torre hablando a la multitud en un "*meeting*" político. (Archivo Diario *La Capital*).

Otra idea importante del programa de los demócratas tenía que ver con la necesidad planteada de reglamentar el trabajo de los obreros rurales.

En educación, la plataforma sostenía que la enseñanza debía ser gratuita, laica y obligatoria; en tanto en obras públicas proponía un ambicioso plan que incluía la resolución del problema de los desagües en la provincia, una amplia red de caminos pavimentados, la canalización de los ríos y la modernización de los puertos.

Castigando la decisión de reimplantar la Constitución de 1921, la oposición –fundamentalmente la Iglesia, los conservadores y algunos sectores radicales que aspiraban a recuperar el poder ilegítimamente arrebatado en 1930– cerraba filas contra el gobierno demócrata, atacando también su programa.

El gobierno del doctor Molinas, en medio de una profunda crisis política debida a sus limitaciones de clase, fue incapaz de poner en vigencia los puntos más conflictivos del programa partidario. Aprovechando estas vacilaciones, el Poder Ejecutivo Nacional –con la excusa de la reimplantación de la Constitución de 1921–, decretó en septiembre de 1935 la intervención de Santa Fe.

Ni bien fue conocida la decisión del gobierno nacional de intervenir la provincia, en lugares como Rosario, Santa Fe, Casilda o Villa Constitución se convocaba a un cese de actividades; las manifestaciones de repudio a la medida no pasaron de la resistencia pasiva y se limitaron fundamentalmente a los núcleos más politizados. La Junta "Pro-Defensa de la Democracia Provincial", conformada por el PDP con sectores independientes, y respaldada por el comunismo y el socialismo, se disolvería en cuanto concluyó la medida de fuerza.

La experiencia de los demócratas desnudó la imposibilidad manifiesta de realizar cambios estructurales por parte de un partido fundado y dirigido por terratenientes. Pese a mantener, durante más de cuarenta años, diferencias con el sector hegemónico representado por la aristocracia pastoril, el sector dirigente del Partido Demócrata Progresista fue incapaz de realizar transformaciones como las expuestas en el programa partidario.

Asimismo, quedó de manifiesto el idealismo de Lisandro de la Torre sobre la pureza del sufragio bajo el "régimen" y sus ilusiones de conformar un partido de principios con dirigentes regenerados del sistema. Como contrapartida, los demócratas progresistas dejaron el gobierno con el convencimiento de haber ejecutado una diáfana administración.

Los gobiernos de Iriondo y Argonz

El 7 de octubre de 1935 asumió el control de la Provincia el interventor doctor Manuel Alvarado. A éste lo sucedió el senador nacional Carlos A. Bruchman, que gobernó hasta abril de 1937. Durante su gestión, por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, se declaró abrogada la Constitución Provincial de 1921, por lo que volvió a entrar en vigencia la del año 1900.

El 21 de febrero de 1937 se realizaron elecciones para elegir gobernador y vicegobernador. Triunfó la fórmula encabezada por Manuel María *"Manucho"* de Iriondo y Rafael Araya. El descendiente de don Simón de Iriondo había abandonado el autonomismo pasando a integrar las filas del antipersonalismo radical. Lo que no había abandonado *"Manucho"* era esa vieja costumbre conservadora del fraude.

Refiriéndose al tema, Enrique Vieytes, empleado del correo y dirigente sindical de aquella época sostuvo:

> *"...Me tocó presenciar el famoso robo cuando ganó la fórmula Iriondo-Araya en la Provincia. Las elecciones se ganaron en el Correo... en la calle Urquiza al 1000, bueno ahí se hizo el vaciamiento de las urnas. Vino Juan Cepeda con Ricardo Caballero. Ellos, con el Jefe de Distrito y el Jefe de Interior del Correo, eran los encargados de llevar adelante el fraude por orden de Buenos Aires..."*.
>
> (Citado por Pla, Alberto y otros, *Rosario en la Historia*, UNR Editora, Rosario, 2000)

La Unión Cívica Radical del Comité Nacional y la Democracia Progresista denunciaron los comicios como fraudulentos.

"Manucho" Iriondo llevó adelante una política económica conservadora, con abundantes inversiones en obras públicas. En 1940, la Provincia soportó la influencia depresiva de la Segunda Guerra Mundial, que afectó severamente al erario público. El presupuesto preveía una recaudación del sector agropecuario de 3.300.000 pesos y sólo se obtuvieron 1.200.000. Esta merma tuvo su correlato en la recaudación de los impuestos de Contribución Directa y Patentes. Sin embargo, la gestión de Iriondo obtuvo algunos logros en salud y educación, producto de las inversiones antes mencionadas.

Al asumir los radicales, la provincia contaba con 38 dispensarios comunitarios. En 1941, los centros de salud llegaron a 63. Éste fue un importante logro por la magnitud que en aquellos años alcanzó la "anquilostomiasis", enfermedad de los sectores necesitados que se atendían en los dispensarios. **Iriondo construyó 72 hospitales rurales modelo, todos inaugurados en 1941: ésta fue la primera experiencia de construcción hospitalaria masiva que se desarrolló en Argentina.**

Además, se erigió el "Instituto de Maternidad y Puericultura" de Santa Fe y comenzó a funcionar el hospital "Doctor Mariano Freyre", en el barrio Arroyito de Rosario. En ese período se construyeron también el "Hospital Psiquiátrico de Santa Fe" y la "Colonia Psiquiátrica de Oliveros", dotados con los más modernos elementos para la atención mental

En cuanto a la educación, el gobierno de Iriondo construyó en la ciudad de Santa Fe las escuelas especializadas "Aureliano Argento", "Luis María Drago", "Nicolás Avellaneda" y "Estanislao López"; y, en la ciudad de Rosario, establecimientos como el "Juan J. Castelli", el "José M. Estrada" y el "Mariano Moreno".

En el interior se concluyeron las obras del "Normal de Coronda", se concretó la primera etapa de la "Escuela Normal de Rafaela" y comenzaron las obras de la "Escuela Manuel Belgrano" de Villa Constitución.

El gobierno radical construyó 122 escuelas –45 en 1940, el año de la crisis–, 10 de las cuales fueron de trabajo manual. A principios de la década del '40, la provincia contaba con 1.564 escuelas; el fisco santafesino sostenía económicamente al 68%, el nacional al 21% y los particulares al 11%.

La educación física fue declarada obligatoria en los colegios, creándose al efecto el Instituto de Educación Física de la Provincia. Por decreto del año 1940 se introdujo una reforma en la instrucción pública provincial. A partir de ese momento, las escuelas especiales se convertirían en "escuelas taller", con el objetivo de capacitar para oficios precisos. En este campo, Santa Fe pasó a ocupar un papel de vanguardia en relación a las restantes provincias argentinas.

Parte de las inversiones de esta gestión estuvieron destinadas a la construcción de caminos pavimentados. Con fecha 3 de septiembre de 1940 se aprobó el "plan carretero", presentado por el Ejecutivo a la Legislatura, para construir 1.000 kilómetros pavimentados con el fin de unir los distintos departamentos con la capital provincial. El gobernador Argonz, junto con Vialidad Nacional, prosiguió con las obras viales destinando importantes sumas del presupuesto a estos emprendimientos.

En el tema inundaciones también se tomaron medidas durante este período, destacándose la construcción de cuatro canales en el departamento San Cristóbal, uno en Laguna Paiva y una docena más en distintas localidades del norte provincial. En la ciudad de Rosario se realizaron obras de entubamiento ante los reclamos de los vecinos de Empalme Graneros y Arroyito afectados por los desbordes constantes del Arroyo Ludueña. Y en la ciudad de Santa Fe, por ley provincial, se iniciaron los trabajos de defensa del Río Salado.

En el terreno social, por Ley Nº 2607 de Vivienda Popular, el gobierno impulsó la construcción de barrios obreros, considerando que en la provincia de Santa Fe había 40.000 familias que vivían en forma inhumana.

Iriondo, dejando en claro sus diferencias con los postulados del partido fundado por Lisandro de la Torre, apoyó decididamente al obispo de Rosario, monseñor Antonio Caggiano, en la creación del Seminario Diocesano. La Provincia sostuvo económicamente la construcción del edificio de Capitán Bermúdez, participó con sus fondos en la restauración de los templos de la Capital y adhirió al III Congreso Eucarístico Nacional, realizado en 1939 en la ciudad de Santa Fe.

Tal como había sucedido durante la era galvista de la década del '80, gobiernos como los de Iriondo y Argonz representaron el orgullo del espíritu conservador. Primero "garantizaron" el orden social (entre 1937 y 1941 no se desarrollaron conflictos sociales de envergadura en la provincia); luego destinaron importantes fondos para la obra pública, planificada y ejecutada en beneficio de los intereses terratenientes; y, por último, fueron fieles defensores

del modelo impuesto por Uriburu y continuado por Justo, Ortiz y Castillo, quien, poco antes del golpe de 1943, premió la gestión de "*Manucho*" Iriondo, designándolo como compañero de fórmula de Robustiano Patrón Costas para las elecciones presidenciales de 1943.

Los comunistas y los conflictos europeos

El Partido Comunista (PC), desde su fundación, en 1918, tuvo una importante participación en la vida política provincial, tanto en las grandes ciudades como en la mayoría de los pueblos. En Rosario, en el año 1928, el PC logró su primer concejal; en 1929, la representación del partido se incrementó a dos ediles y en el año 1934, luego de un período de proscripciones, consiguió nuevamente dos escaños. Uno de los concejales electos, Francisco Mónaco, estaba preso en Villa Devoto en el momento de la elección.

El PC, debido al enorme prestigio de la Revolución Bolchevique, gozaba de una amplia adhesión entre los trabajadores, fundamentalmente entre los obreros portuarios, ferroviarios, de la carne, metalúrgicos, transporte, construcción, madereros, etc., y tenía mucha influencia en los sindicatos rurales.

En la ciudad de Rosario, los comunistas denunciaban el accionar de las empresas de servicio público –concesionarias de la Municipalidad– de propiedad extranjera, como la Sociedad Eléctrica de Rosario, La Compañía Consolidada de Aguas Corrientes y la Compañía de Obras de Salubridad, entre otras.

La Guerra Civil Española generó en la sociedad argentina en general, y en la provincial en particular, una polarización nunca antes vista entre los partidarios de la República y los franquistas. Tras el inicio de la Segunda Guerra Mundial, este fenómeno se profundizaría aún más.

Los comunistas, abordando claramente la antinomia, trazaron una táctica tendiente a unir a la mayoría de la sociedad, buscando aislar a los sectores afines al pensamiento franquista. Fue así como, a partir de 1935, el PC comenzó a formalizar alianzas antifascistas con sectores considerados democráticos y progresistas. Del Comité Antifascista de Rosario participaban partidos políticos como la UCR (Comité Nacional), el PDP, el PS y el PC, sindicatos, organizaciones estudiantiles y barriales, de mujeres, etc.

La actividad de denuncia del franquismo, el nazismo y el totalitarismo fue intensa. Hay que tener en cuenta que la tarea de los Comités Antifascistas era compleja ya que los inmigrantes españoles, y fundamentalmente los italianos, tenían una activa participación en el conjunto de las actividades de la sociedad santafesina y estaban políticamente divididos, por ejemplo, entre franquistas y republicanos. A pesar de las enormes dificultades expuestas, el abnegado trabajo de los comunistas dio sus frutos y las posiciones a favor de la República fueron mayoritarias en la ciudad.

La elección de los lugares donde se realizaban los actos, tanto a favor de los franquistas como de los republicanos, no era arbitraria, y expresaba no sólo el grado numérico de adhesión, sino también las extracciones socia-

les de los partidarios de una u otra postura. Mientras que los simpatizantes franquistas realizaban sus actividades en los elegantes salones de la Confitería Cifré (ubicada en el subsuelo del no menos lujoso Palacio Fuentes) o en las instalaciones del Círculo Católico de Obreros, los mitines republicanos generalmente se llevaban a cabo en el Cine Teatro Real, que podía albergar a una mayor cantidad de público.

La Guerra Civil Española dividió a la ciudad en dos bandos que día a día seguían los acontecimientos por la radio o a través de la prensa local y nacional.

Los sectores obreros –dirigidos por la CGT– organizaban actos y protestas a favor de la República, así como colectas solidarias para sus pares, los combatientes españoles. Las colectas eran organizadas por el Centro Socialista Casa del Pueblo, el Centro Unión Republicana, el Centro Asturiano, el Centre Catalá, la Agrupación Andaluza, el Partido Comunista y la CGT.

Por su parte, la derecha franquista se organizaba en torno a los conservadores autoritarios, los nacionalistas filofranquistas y los católicos integristas. Este sector contaba con el inestimable apoyo de la jerarquía de la Iglesia Católica que, tanto en España como en nuestro país, llamaba al combate contra el peor enemigo: "el comunismo".

En 1940, y para tratar de aislar a la derecha, se constituyó en Rosario la filial local de la "Acción Argentina". Es suficiente observar algunos nombres de la primera Comisión Directiva de la entidad para tener una idea de la amplitud del movimiento. Mario Antelo, Olga Cossetini, Francisco Bodetto, Alejandro Carrasco, Manuel Castagnino, Ceferino Campos, Cortés Pla, Manuel Rodríguez Araya, Carlos Sylvestre Begnis y Horacio Thedy eran ciudadanos que provenían de distintos arcos ideológicos, incluso oligárquicos, pero veían que el avance del nazismo era un peligro que no sólo asolaba a Europa.

La justa posición que tomaron los comunistas, en relación al conflicto bélico mundial, los acercaría a los partidos que en 1945 integrarían la Unión Democrática. Ese año, el PC seguiría considerando al imperialismo alemán –ya derrotado– como el enemigo principal, y por lo tanto compartía las tribunas con la mayoría de los integrantes de la "Acción Argentina" –muchos de los cuales pasaron a ser connotados antiperonistas– con el agravante de que a ese frente se había incorporado la embajada norteamericana.

Este error, como analizaremos más adelante, llevó a los comunistas a distanciarse de los sectores populares que mayoritariamente adherirían al proyecto nacionalista de Perón.

El golpe de Estado de 1943

Ese año, y como producto de la disputa interimperialista, Argentina entró en un período de convulsiones políticas y militares que culminaría con la pueblada del 17 de octubre y el posterior triunfo electoral de Perón.

El 4 de junio se producía el golpe militar que desalojó del gobierno a los conservadores y los radicales antipersonalistas. Primero, los sectores pro-ingleses impusieron al general Rawson –que no llegó a jurar– como presidente, pero rápidamente se vieron parcialmente desplazados por los partidarios pro-alemanes, que lograron situar al general Pedro Ramírez en la Presidencia de la Nación.

Los sectores pro-alemanes dentro ejército formaban parte de un amplio frente nacionalista: el Grupo de Oficiales Unidos (GOU). Su triunfo se dio en el momento en que los ejércitos nazis eran derrotados en Stalingrado y la mayoría de ese sector militar pensaba ya en el mundo de posguerra, con Estados Unidos y la Unión Soviética triunfantes. Entre quienes imaginaban esta nueva situación mundial estaba el entonces coronel Perón, quien desde la Secretaría de Trabajo y Previsión fue ganando cada vez más influencia entre los trabajadores.

Luego de varias renuncias producidas en el gabinete de Ramírez, Perón, cada vez con más fuerza en el sector militar nacionalista, era nombrado al frente de la Secretaría del Ministerio de Guerra. Por entonces, el movimiento obrero estaba dividido en dos confederaciones de trabajadores. Desde el Ministerio, Perón comenzó a estrechar relaciones con dirigentes de origen socialista como Borlenghi o Bramuglia, con quienes trabajó en la organización de la Secretaría de Trabajo y Previsión; mientras tanto, el otro sector del movimiento obrero, identificado con las estructuras orgánicas de los partidos Socialista y Comunista, era proscrito por orden de la dictadura militar.

En noviembre de 1943, el Departamento de Trabajo se transformaba en Secretaría de Trabajo y Previsión y ese mismo mes el gobierno militar tomaba una medida que irritaría a la Sociedad Rural: **decretó la rebaja y prórroga de los arrendamientos rurales, por iniciativa del secretario de Agricultura, general Diego Mason.**

El general Mason, con el objetivo de lograr un vuelco en la política ganadera a favor de la producción y el mercado interno, reorganizó la Cooperativa Argentina de Producción (CAP) y llamó a elecciones en la Junta Nacional de Carnes (JNC) con el objetivo de debilitar al poderoso sector de los terratenientes invernadores, hegemónicos en la entidad. El sector pronazi, predominante en la dictadura militar, se vio obligado a hacer estas concesiones para lograr algún tipo de apoyo popular.

A lo largo de este proceso se fueron acentuando los rasgos dictatoriales del gobierno. El 31 de diciembre de 1943, mediante decreto, se disolvían los partidos políticos, instaurándose, además, una severa censura de prensa. Por inspiración del ministro Martínez Zuviría (conocido también como el escritor Hugo Wast) se imponía la enseñanza religiosa en todas las escuelas.

Estas medidas, profundamente antipopulares, llevaron a que, a principios de 1944, se observara un retroceso del sector pronazi –hegemónico en la dictadura– al tiempo que avanzaba el liderazgo de Perón, tanto en el

Ejército como entre los trabajadores. Mientras tanto, la presión de la embajada norteamericana determinó que el 26 de enero nuestro país rompiera sus relaciones con Alemania y Japón.

El 25 de febrero de 1944, Ramírez delegaba la presidencia en Farrell y un día después Perón asumía interinamente en el Ministerio Guerra. Previamente, el 15 de enero, tuvo lugar el devastador terremoto de San Juan. La gran campaña de solidaridad nacional que encabezó Perón afianzó su liderazgo. Y fue durante esa campaña que comenzó la relación del líder justicialista con María Eva Duarte, a quien conoció siete días después del sismo, en un festival de solidaridad realizado en el estadio Luna Park de Buenos Aires.

La inmensa ayuda otorgada a la provincia y el pueblo de San Juan fue el producto de una conmovedora movilización nacional de solidaridad. Un ejemplo jamás imitado por los sucesivos gobernantes de nuestro país. La notoria ausencia oficial a la hora de asistir a los afectados por las inundaciones de la ciudad de Santa Fe de 2003, o a los familiares de las víctimas del incendio de fines de diciembre de 2004 de la discoteca "República de Cromañon", de Capital Federal, son sólo dos entre muchos ejemplos ilustrativos.

En junio de 1944 se produjo un nuevo avance de Perón, que fue designado vicepresidente de la Nación, reteniendo los otros cargos. A iniciativa de su corriente, el gobierno siguió avanzando en su rumbo de reformas sociales, siendo particularmente importante la sanción, en el mes de noviembre, del Estatuto del Peón Rural. El 4 de diciembre se realizó un acto de adhesión a Perón que reunió 200.000 simpatizantes.

El 27 de enero de 1945, el ejército soviético ocupaba el campo de concentración de Auschwitz y el mundo tomaba conocimiento de la verdadera dimensión del horror nazi. Esto repercutió profundamente en la sociedad argentina que comenzaba a exigir definiciones del gobierno en relación al conflicto bélico mundial.

Finalmente, el 27 de marzo, Argentina le declaraba la guerra a Alemania y Japón. El 19 de abril, Estados Unidos reconocía al gobierno militar del general Edelmiro Farell; el 2 de mayo el Ejército Rojo ocupaba Berlín y el 7 de mayo se producía la rendición total de Alemania. Estados Unidos y la Unión Soviética aparecían claramente como los grandes vencedores y esto repercutiría en la situación interna.

El embajador norteamericano Braden llegó al país y Farrell levantó el estado de sitio, permitiendo la reiniciación de las actividades políticas y concediendo, además, la legalidad al Partido Comunista.

Con la derrota de la Alemania nazi y de Japón, crecieron las luchas revolucionarias de los pueblos y países oprimidos del mundo. Estados Unidos se transformó en el gendarme y principal adversario de esos pueblos. Algunas fuerzas de izquierda, como el Partido Comunista, tuvieron una valoración equivocada de la nueva situación internacional. Señalaban como enemigo fundamental al imperialismo alemán (ya derrotado) sin en-

tender que el imperialismo norteamericano –con quien la Unión Soviética había coincidido en hechos y acciones hasta el fin de la guerra– había pasado a ser el más agresivo a escala mundial.

Esta equivocada valoración llevó al Partido Comunista a golpear centralmente a la burguesía nacional que expresaba el coronel Perón, aliándose con fuerzas reaccionarias locales y el imperialismo norteamericano.

Luego de haber dirigido importantes sindicatos como la construcción, gráficos, madera, carne, metalúrgicos, etc., la errónea línea practicada llevó a esa organización política a un importante aislamiento, perdiendo influencia política en relación al pujante peronismo. Lo mismo sucedió con otras fuerzas con arraigo popular como el radicalismo, los socialistas o los demócratas progresistas, que también se aliaron con los conservadores y la embajada norteamericana.

SE IMPONE LA BURGUESÍA INDUSTRIAL

El 17 de octubre de 1945

El desarrollo industrial determinó la incorporación a las fábricas de cientos de miles de obreros rurales y chacareros sin tierra del interior y de países vecinos pobres como Bolivia o Paraguay. Entre 1943 y 1945, la clase obrera creció de 80.000 a 500.000 trabajadores. Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, el coronel Perón estructuró una organización sindical fuerte, basada en la conciliación de clases y subordinada al Estado. Perón logró que, entre los años 1943 y 1945, el gobierno de facto otorgara mejoras sociales a los trabajadores, como incrementos salariales, aguinaldo, jubilación, convenios colectivos de trabajo, vacaciones pagas, además de la rebaja y congelamiento de alquileres y arrendamientos. Reivindicaciones por las que los trabajadores habían bregado durante años de lucha.

En relación a los peones rurales, los pobres del campo y la propiedad de la tierra, en conferencia de prensa realizada el 17 de noviembre de 1944, ya promovido el "Estatuto del Peón", Perón sostenía:

> *"... Este Estatuto tiende a solucionar uno de los problemas más fundamentales de la política social argentina. La situación del peón en el país es de extraordinario desmedro para los hombres que trabajan en el campo. La Constitución del '53 abolió la esclavitud, pero lo hizo teóricamente, porque no es menor la esclavitud de un hombre que en el año '44 trabaja para ganar 12, 15 ó 30 pesos por mes.*
> *La vergüenza actual es que casi medio millón de hombres esté ganando menos de 40 pesos por mes, mal cobijados, mal vestidos y mal comidos...*
> *...Tiene (el estanciero) 10, 5, 2 leguas de campo para hacerles producir una insignificancia. Y eso lo puede hacer merced a que no les paga a los hombres que le trabajan... este señor es el intermediario de la tierra. Pero la tierra no puede ser ya un bien de renta en nuestro país. El que tenga tierra tiene que sacarle el jugo, porque ella es la riqueza del Estado. El día que pueda ponerse la tierra al alcance de la gente se solucionará el problema..."*
>
> (Presidencia de la Nación - Subsecretaría de Informaciones, *El campo recuperado por Perón*, Buenos Aires, 1952)

Con esta política, Perón había ganado el apoyo incondicional de los pobres del campo y de la ciudad. Además, contaba con el aval de la mayoría de los sectores nacionalistas de las fuerzas armadas, de un sector de la intelectualidad y de los empresarios antibritánicos y antinorteamericanos.

La burguesía industrial había acumulado suficiente fuerza y pasó a disputar por primera vez en la historia argentina la hegemonía a los sectores oligárquicos e imperialistas.

Estos últimos, con el abierto apoyo del embajador Spruille Braden, lanzaron un plan para barrer a Perón: dirigentes de los partidos Radical, Conservador, Socialista, Demócrata Progresista y Comunista, convocaron a la "Marcha de la Constitución y la Libertad", reclamando la destitución de Perón y el paso del gobierno a la Suprema Corte de Justicia. A la convocatoria se sumaron fuerzas gremiales, universitarias, profesionales, la Unión Industrial, la Sociedad Rural, los grandes diarios y la mismísima embajada norteamericana. El 19 de septiembre de 1945, este gran frente opositor –el germen de lo que sería la Unión Democrática– se lanzaba con mucha fuerza a las calles.

En los primeros días de octubre, un sector del Ejército encabezado por el general Ávalos, con el apoyo de Campo de Mayo y otras unidades militares, le exigía al general Farrell separar al coronel Perón de todos sus cargos. El 8 de octubre, con las Fuerzas Armadas fracturadas, un comunicado oficial anunciaba la renuncia de Perón como ministro de Guerra, secretario de Trabajo y Previsión y vicepresidente de la Nación. Se había precipitado la crisis política.

El gabinete de Farell presentó su renuncia, pero antes, por decreto, había convocado elecciones para abril de 1946 y designaba a Ávalos como ministro de Guerra. Perón fue detenido y llevado a la isla Martín García, mientras una movilización de capas medias y altas se concentraba frente al Círculo Militar para exigir la entrega del poder a la Suprema Corte de Justicia.

Por su parte, los sectores más postergados de la sociedad vislumbraban que se venía un gobierno de "galeritas" de la oligarquía al que habría que enfrentar, en tanto que en las Fuerzas Armadas varios grupos se preparaban para rescatar de la cárcel a Perón. La sociedad argentina se dividía: **a favor o contra Perón.**

En Rosario, el 12 de octubre, una multitud se concentró en Plaza San Martín. Desde los balcones de la Jefatura de Policía, el Dr. Antille, que acababa de renunciar como ministro de Hacienda de Perón, llamaba a *"defender a Perón"* en un encendido discurso.

El 15 de octubre, la FOTIA declaró en Tucumán la huelga general y esa misma noche, en Rosario, varios sindicatos tomaron idéntica actitud. El 16, los obreros de la carne de Berisso entraron en Ensenada. Otro tanto sucedía en Valentín Alsina, Lanús y la mayoría de las localidades del sur del conurbano bonaerense. Ese mediodía abandonaron sus tareas los ferroviarios de Tafí Viejo, en Tucumán. El reclamo era uno solo: la libertad del coronel Perón.

El Comité Central Confederal de la CGT, como consecuencia de esta gran agitación, llamó a un paro nacional para el día 18, en defensa de las

conquistas gremiales pero sin exigir la libertad de Perón. La CGT de Rosario llevó una dura posición a esa reunión nacional. Su delegado advirtió:

> *"...si este cuerpo no resuelve la huelga general les puedo asegurar que se producirá lo mismo por el estado emotivo de los trabajadores... les aseguro, sin ánimo de presionarlos, que si aquí no se vota la huelga, en Rosario se irá al paro lo mismo..."*.
>
> (Salas Ernesto, *La Resistencia*, Citado por Pla, Alberto y otros, *Rosario en la Historia*, UNR Editora, Rosario, 1999)

La dirigencia sindical nacional, no obstante, se encontraba profundamente dividida. El sector más cercano a Perón había intentado que se aprobara un inmediato paro general. No logrando imponer ese criterio, aceptó la tibia medida y, al margen de la dirección de la CGT, impulsó desde las bases el cese de actividades, reclamando la libertad de su líder. Mientras tanto, en el otro extremo del arco sindical, quedaron los dirigentes gremiales de los partidos Socialista y Comunista que reclamaban la renuncia de Perón, tratando de legalizar su alejamiento del poder.

La firme actitud de muchos dirigentes gremiales peronistas determinó que varios sindicatos del gran Buenos Aires declararan la huelga general, pasando por encima de la dirección de la CGT. La huelga y la movilización obrera se inició el 17 a primera hora. Cipriano Reyes y el coronel Domingo Mercante encabezaron las marchas más numerosas: la de los obreros de la carne y los ferroviarios.

Las columnas de Berisso y Ensenada se dirigieron juntas a la ciudad de La Plata, mientras que en Capital los piquetes paralizaron los tranvías, apedrearon las sedes del Jockey Club y del diario *La Prensa*. La huelga se había generalizado y en los ferrocarriles el paro era total.

Los trabajadores que venían desde La Plata confluían en los accesos a Buenos Aires con los del frigorífico Anglo de Avellaneda. A media mañana, las columnas obreras provenientes de Lanús, Berisso y Avellaneda marcharon a Plaza de Mayo. Cruzaron nadando o por cualquier otro medio el Riachuelo. A ellos se sumaron los obreros de las fábricas de la Boca, Barracas, Patricios y la zona oeste de la Capital Federal. Miles de personas, hombres, mujeres y niños ocuparon la Plaza de Mayo vivando al coronel Perón.

Hacia la noche, el aparato del Estado estaba quebrantado; una parte del Ejército y la Policía apoyaba a Perón, otra quedó neutralizada, en tanto los opositores al coronel fueron desbordados por la pueblada. Lo mismo sucedía en el resto de las Fuerzas Armadas.

Entrada ya la noche, el coronel Perón fue liberado y debió ser presentado en los balcones de la Casa Rosada ante una enfervorizada multitud. El presidente Farrell anunció la aceptación de la renuncia de Perón a sus cargos y el adelantamiento de las elecciones generales para el 24 de febrero de 1946.

En el resto del país se produjeron grandes marchas de apoyo a Perón. En Rosario, en el centro de la ciudad, desde la mañana del 17 de octubre se fue concentrando una multitud que exigía la libertad del líder. Se trataba de hombres y mujeres que llegaban de distintos barrios de la ciudad como Tablada, Barrio Nuevo y Villa Manuelita. Por su parte, los trabajadores abandonaron las fábricas desde las primeras horas de la tarde y se volcaron a las calles.

La dura posición que llevó la CGT local a la reunión de la cúpula nacional estaba relacionada con la explosiva situación que vivía el movimiento obrero local. Desde los talleres de Pérez, la Unión Ferroviaria movilizó cinco mil trabajadores que recorrieron a pie las calles de la ciudad, exigiendo la libertad de Perón y recogiendo una amplia adhesión a su paso. Los demás gremios siguieron el camino de los ferroviarios. Se realizaron concentraciones en Plaza 25 de Mayo, en Plaza San Martín, la Secretaría de Trabajo y Previsión y el local de Tiro y Gimnasia.

Los manifestantes apedrearon las sedes del diario *La Tribuna* y la Junta Coordinadora de la Democracia. En la periferia hubo masivos actos en las tradicionales esquinas de Mendoza y Provincias Unidas, Mendoza y Avellaneda (ambas ubicadas en la zona oeste), avenida Alberdi y avenida Génova (zona norte) y San Martín y Ayolas (zona sur).

La crónica del diario *La Capital* describía:

> *"...desde la periferia del casco urbano de la ciudad, comenzaron a llegar grandes núcleos de hombres y mujeres vivando el nombre del Coronel Perón y portadores de carteles de identificación de sindicatos, y centros cívicos, banderas, retratos y leyendas alusivas..."*
>
> (*La Capital*, 18 de octubre de 1945)

Como se sostiene en "*Rosario en la historia*" (A. Pla *et al.,* UNR Editora, Rosario, 2000), la ciudad había modificado su fisonomía. Pocos sombreros asomaban entre la muchedumbre. Nuevos actores sociales se acercaban al centro de la ciudad, deteniéndose frente a los símbolos del poder para exigir cambios y manifestar su compromiso con el coronel preso. Silbando, entonado cánticos (adaptaciones de viejos y nuevos temas populares) que eran acompañados con ruidosos bombos, impusieron una novedosa forma de protesta; así se expresaron quienes protagonizaron esa histórica pueblada.

Un nuevo tono, un nuevo estilo de reclamo, una nueva forma de hacer política parecía estar surgiendo. En la disputa social, el 17 de octubre dejaba un claro ganador. Así fue en Plaza de Mayo, en Rosario y en el resto del país.

El proceso de sustitución de importaciones

Durante los períodos en que se paralizó el funcionamiento del mercado mundial –las dos grandes guerras y la crisis cíclica del capitalismo de 1930– en el país se crearon condiciones para la producción de bienes que antes se importaban.

Tras la Primera Guerra Mundial y la crisis de 1930 resurgieron grandes corrientes de intercambio que limitaron a márgenes estrechos el desarrollo de las industrias. En cambio, la decisión del gobierno del general Perón, de mantener medidas proteccionistas facilitó la diversificación y consolidación del proceso de desarrollo industrial.

La paralización del mercado mundial –que obligó a un "proteccionismo forzoso"– estuvo en la base del proceso de sustitución de importaciones, dando impulso al desarrollo de ramas textiles y metalúrgicas que sobre la base de capitales locales constituyeron la industria liviana nacional; industria que, utilizando los equipos y reelaborando los materiales que provee la industria pesada, obtiene artículos de consumo como automóviles, alimentos, viviendas, calzados, tejidos, artículos del hogar, etc.

A mediados de la década del '30 era notorio el peso del sector alimenticio en la provincia. En el año 1935, con el control del 36% de los establecimientos manufactureros, esta rama (alimentación) generaba el 38% del valor agregado industrial, es decir, la diferencia entre el valor de los insumos (materias primas) antes de comenzar el proceso de producción y el valor del producto al final del mismo.

Sin embargo, y como ya se ha señalado, tras el conflicto bélico y en tiempos de la presidencia de Perón, la provincia llegaría a producir una vasta gama de artículos industriales (alimenticios, textiles, artefactos metálicos, electrodomésticos, calzados, etc.). Los datos del Censo Nacional de 1954 determinarían que la industria metalúrgica había desplazado holgadamente a la alimenticia.

Este proceso de desarrollo industrial no hubiera sido posible sin una activa participación del Estado. Al respecto sostiene Juan Carlos Esteban:

> "*...que es evidente que en el crecimiento del capital industrial concurrieron, en diversa proporción, el capital bancario a través de una política crediticia orientada e impulsada por el Estado por medio del Banco de Crédito Industrial y el IAPI, mediante créditos con garantía prendaria y una redistribución de la renta a través del recurso inflacionario. Pero además, participó en la capitalización de la industria manufacturera el capital comercial nacional...*".
>
> (Esteban Juan Carlos. *Imperialismo y desarrollo económico*. Citado por Biblioteca Popular Vigil, *Santa Fe: el paisaje y los hombres*, Editorial Biblioteca, Rosario, 1971)

Como afirmaba Esteban, el desarrollo del sector metalúrgico se daba a partir de la reducción de las importaciones de maquinarias, motores, herrajería, artefactos eléctricos, hierro, etc., producto de la crítica situación que atravesaban las economías de posguerra de los países centrales.

En la nueva coyuntura, el comercio mediano de importación, sobre todo aquel no ligado al capital financiero, se asoció a talleres manufactureros y artesanos mediante la financiación de la compra de materias primas,

adelantos de capital circulantes y distribución de la producción. Esta asociación también determinó la instalación de innumerables talleres y fábricas nuevas.

Un proceso de industrialización autónomo requiere producir aceleradamente "medios de producción" antes que artículos o productos de consumo. Es decir, fabricar máquinas con las cuales se pueda ampliar la producción de artículos de consumo. En Argentina, como consecuencia de la dependencia, no se había desarrollado una vigorosa industria pesada (la que se dedica a la fabricación de máquinas, equipos industriales, motores, además de la producción o procesamiento de hierro, acero, aleaciones metálicas, cemento, celulosa y productos químicos) y las máquinas debían comprarse en el extranjero, lo que agravaba la dependencia.

Se consolida la industria provincial

En el período 1930-1952 se produjeron en Argentina dos fenómenos que afectaron a la provincia de Santa Fe de forma desigual.

El primero de ellos estuvo relacionado con la diversificación, a nivel nacional, de la producción agropecuaria, lo que trajo aparejado el crecimiento de ciertos cultivos con el fin de proveer de materias primas a las nuevas industrias.

El segundo fenómeno tuvo que ver con la diversificación de las actividades industriales, una consecuencia directa de la crisis mundial y la política de sustitución de importaciones. En todo este proceso de diversificación jugó un papel importante el gobierno de Perón, cuyas medidas analizaremos por separado con todo detalle.

La variación de la producción agropecuaria no tuvo mucha influencia en la región sur de la provincia, ya que a pesar de la caída del precio de los granos, en la economía de la zona siguió predominando el sector agrícola. Una situación distinta se dio en el norte provincial, donde alcanzaron cierta difusión algunos cultivos como el algodón y la caña de azúcar, o en toda la zona central, donde se fue consolidando la cuenca lechera más importante del país y se desarrollaron las hortalizas, legumbres y frutas.

En cambio, la diversificación industrial fue muy importante en el conjunto de la provincia. Hacia la década del '50, Santa Fe tenía un enorme peso industrial. Hubo un aumento de la producción de alimentos dirigida fundamentalmente al mercado interno, en franca expansión; y en otros casos, como el de las carnes, luego de la depresión y durante la Segunda Guerra Mundial, la producción se orientaba a cubrir las necesidades del mercado mundial.

Sin embargo, fue el sector metalúrgico el que más se desarrolló, alcanzando a principios de la década del '50 el rango de principal rama industrial de la provincia. Además, debido a la importante expansión productiva de la región, la siderurgia de Villa Constitución proveería de insumos a la industria liviana, particularmente a la instalada en el área de Rosario. De

todos modos se trataba de un abastecimiento insuficiente, ya que las distintas ramas industriales de la zona dependían, y hasta el día de hoy siguen dependiendo, de la obtención de insumos importados.

Asimismo, durante ese período comenzó a consolidarse la industria de maquinarias agrícolas que no tardó en proyectarse sobre el mercado nacional.

Por último habría que subrayar que hubo sectores que crecieron aprovechando las ventajas que presentaba Santa Fe, ya sea por la facilidad para la obtención de materias primas como por el fácil acceso a las vías de transporte del producto. Nos referimos a las industrias celulosa, química, y a las destilerías, que se instalaron en función de las ventajas mencionadas y no pensando en el mercado interno.

En 1929, el empresario alemán Eugenio Vogt, con el auxilio de créditos del entonces Banco Provincial de Santa Fe, instaló en la ciudad de Capitán Bermúdez la primera planta del país dedicada a elaborar pasta celulósica: Celulosa Argentina. Dos años después, con maquinarias importadas de Alemania, se producía la primera partida de papel. Con posterioridad, Celulosa terminó absorbiendo a Andino y Cía., a Papelera Argentina, ubicada en Zárate, y a la Compañía General Fabril Financiera cuya planta estaba en Bernal (Buenos Aires).

En 1939, Celulosa se asociaba con Electroclor (subsidiaria de la firma inglesa Duperial) para elaborar productos derivados del cloro sobrante de la fabricación de la celulosa. Ya en la década del '40, Celulosa sustituyó la paja de trigo como materia prima para la pasta, reemplazándola por la madera (pinos, abetos, etc.).

Paralelamente, en la década del '30 se cedieron los terrenos fiscales para que comenzara a funcionar la Destilería de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de San Lorenzo, con el objetivo de dotar de energía básica a un futuro polo petroquímico. Esta idea se materializaría, como veremos más adelante, en el año 1960, con la inauguración del oleoducto que uniría Campo Durán (Salta) con esa ciudad.

En 1933, con el propósito de abastecer a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, se creaba en Fray Luis Beltrán la primera Fábrica Militar, y en 1942 nacía en Rosario la Fábrica Militar de Armas Portátiles Domingo Matheu.

Ese mismo año, los ingenieros Arturo Acevedo y José María Aragón fundaron Acindar, cuya planta se estableció en la zona sur de Rosario. La creciente expansión industrial determinó que la empresa, que producía cien mil toneladas anuales de acero, abriera en 1951 una nueva planta en Villa Constitución.

Durante este período quedó definida en la provincia una economía abierta, ampliamente diversificada, en la cual la integración entre las distintas actividades productivas se resolvía a escala nacional y en muchos casos, a nivel mundial. Una economía que, a pesar de la crisis de la agricultura tradicional, tenía su centro en lo agrario, pero también contaba con un importantísimo peso industrial.

El papel del peronismo en desarrollo industrial

El peronismo planteó profundizar el incipiente desarrollo industrial existente en función del mercado interno, poniendo en la lupa los lazos tradicionales con el mercado externo. Su proyecto apuntó a promover la autonomía económica y una nueva redistribución de los ingresos a favor de los trabajadores, principales demandantes de la producción de la industria en desarrollo. Esta línea se expresaba claramente en las consignas de independencia económica, soberanía política y justicia social enarboladas por el fundador del movimiento, el general Perón.

Los postulados justicialistas ubicaban a la oligarquía y al imperialismo como los grandes enemigos y, no obstante, el gobierno peronista, salvo algunas medidas, como las expresadas en la Ley 13.246, no cuestionó de fondo el latifundio, ni la dependencia del nuevo desarrollo industrial. Sin embargo, convendría dejar en claro que la mencionada norma fue importante para el agro, ya que establecía la duración de los contratos de arrendamiento en cinco años con opción a tres años más, y como además el Banco Nación otorgaba una línea de créditos blandos para la adquisición de tierras, muchos arrendatarios pudieron acceder a la propiedad de los campos alquilados, especialmente en el centro sur provincial.

La ausencia de un proyecto industrial independiente tuvo su origen en las fuertes inversiones monopolistas y la falta de desarrollo de la industria pesada (máquinas y equipos de cierta complejidad que debían ser adquiridos en el extranjero).

La política peronista tendía a proteger la industrialización en general bloqueando paralelamente todo los intentos de retornar al viejo esquema agroexportador. Más que impulsar un desarrollo industrial autónomo, favoreció la profundización del existente y, en relación a los trabajadores, procuró en todo momento mejorar sus ingresos, pero dentro de las relaciones de producción imperantes. De esta manera, sin cuestionar a fondo el latifundio y la dependencia, garantizó un mercado para la burguesía nacional industrial, la clase social que Perón representaba.

Perón, como expresión de esta clase, tomó medidas económicas destinadas a favorecerla. La creación del Banco Industrial, la orientación del crédito a través del Banco Central nacionalizado, la compra de insumos externos a través del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), la imposición de tarifas aduaneras de carácter protector y el otorgamiento de divisas a un tipo de cambio favorable para los requerimientos externos de la industria, son sólo algunos ejemplos. Paralelamente, impulsó la sindicalización de los trabajadores y, como vimos más arriba, favoreció una redistribución del ingreso que benefició a los asalariados. Al mismo tiempo, impuso el control de precios sobre los productos de consumo masivo, impidiendo todo proceso inflacionario. Estos, sin duda, fueron los principales aportes del peronismo al desarrollo industrial argentino.

En 1949 culminaría el proceso de desarrollo económico capitalista argentino con base industrial iniciado con la crisis mundial de 1930. Durante la Segunda Guerra Mundial, y fundamentalmente en el período inmediato de posguerra, el desarrollo conoció un renovado impulso con una política de protección deliberada, que favoreció la expansión de las llamadas "sustituciones fáciles".

Durante ese período, la acumulación de capital en la industria se dio sobre la base del crecimiento de la mano de obra ocupada, lo que originaría la desaparición de la desocupación. Para satisfacer la demanda de fuerza de trabajo, a los grandes centros industriales como el de Rosario, llegaron trabajadores del campo, donde se mantenía la misma estructura que había hecho crisis en 1930.

También habría que agregar que el proceso de industrialización se vio favorecido por el aumento de los precios del sector, que durante este período prácticamente duplicaron a los agrícolas.

Sin embargo, a pesar de las importantes medidas industrialistas tomadas, a pesar de la coyuntura internacional favorable y a pesar de los buenos precios de los productos, el peronismo, al permitir que se conservara en el campo el predomino terrateniente sobre el desarrollo del capitalismo, y la hegemonía del capital monopolista internacional sobre el desarrollo industrial, dejó intactas a las fuerzas –los terratenientes y el imperialismo– que prepararían su derrota.

Agotadas las posibilidades de expansión generadas luego de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a ponerse en evidencia los límites de este proyecto industrial; por un lado, para su funcionamiento, la industria dependía crecientemente del abastecimiento extranjero y, por el otro, el sector agropecuario seguía siendo el principal proveedor de divisas. Incluso las justas medidas tomadas para disminuir la renta terrateniente como la congelación de los arrendamientos, llevaron a los terratenientes, que conservaban la propiedad del suelo, a retirar del mercado gran parte de sus tierras. En 1952, como consecuencia de esta situación, los argentinos tuvieron que apelar al consumo de harina de mijo (pan negro).

El peronismo no atacó a fondo las causas del atraso en el campo y no modificó el carácter básico del desarrollo industrial, y esto determinó que fuera perdiendo posiciones en su forcejeo con la oligarquía y el imperialismo.

Ya en la década del '50, el gobierno confiaba en que la guerra de Corea volvería a recrear la demanda internacional de nuestros productos, que llevaría a un nuevo auge de nuestra economía; es decir, seguía entendiendo que el capitalismo argentino podría desarrollarse a partir de condiciones externas favorables, sin romper con el imperialismo y los terratenientes.

Sin embargo, esta previsión no se produjo y los empresarios comenzaron a batallar por una nueva distribución del ingreso. Fue así como hacia 1951 el salario real de trabajadores cayó cerca de un 40% en relación al ingreso récord de 1948.

El gobierno, presionado por el imperialismo, promulgó en el año 1953 la Ley 14.222 que otorgaba ventajas para la radicación de capitales extranjeros, y que permitía la introducción libre de impuestos de maquinarias, equipos y otros bienes industriales.

La ley 14.222, a diferencia de la Ley de Radicaciones del gobierno de Frondizi, que analizaremos más adelante, controlaba la radicación efectiva del capital extranjero e imponía restricciones al giro de dividendos y a la repatriación de capital.

Por ejemplo, sólo al cabo de dos años se permitía remitir utilidades al exterior, pero con la condición de que estas remesas no superaran el 8% del capital original invertido. También la repatriación de capitales tenía limitaciones, y sólo se podría ejecutar luego de diez años, en cuotas que iban del 10 al 20% anual, "*siempre y cuando no afectaran el normal funcionamiento de la planta industrial*". Debido a los requerimientos de esta ley, hacia 1955 no se había registrado un incremento importante de la inversión extranjera, por lo que se podría decir que el intento de conciliación del gobierno de Perón con el imperialismo había fracasado.

Con un peronismo debilitado e impotente para profundizar las transformaciones necesarias para garantizar un camino independiente, la oligarquía, que había recuperado fuerzas debido a las vacilaciones de Perón, comenzaba a preparar su derrocamiento.

Las nacionalizaciones del gobierno peronista

Las políticas de nacionalizaciones y de limitaciones impuestas por el gobierno del general Perón al capital extranjero favorecieron el desarrollo de la industria nacional.

En 1946, el Estado adquirió los ferrocarriles franceses. En 1948 se pagaron 612 millones de dólares por la compra del capital ferroviario inglés que, según Scalabrini Ortiz, "*representaba más del 60% del capital ferroviario del país*". Así pasaron al Estado Nacional el total de las propiedades ligadas al ferrocarril como puertos, usinas, aguas corrientes, tranvías, empresas de transporte automotor, tierras, hoteles, Expreso Villalonga-Furlong, destilerías de petróleo y otros bienes de los ferrocarriles ingleses.

Es cierto, como sostienen los liberales, que en el momento de la nacionalización el estado de los ferrocarriles era deplorable y ya no daban beneficios significativos a los británicos; pero también es cierto lo que afirmaba Scalabrini Ortiz:

> "*...Que sin un gobierno dispuesto a expropiarle ese elemento de dominación, el imperialismo británico hubiera mantenido el control de los ferrocarriles y hubiera logrado el apoyo financiero del gobierno argentino para subvencionar el déficit de funcionamiento...*"
>
> (Scalabrini Ortiz, Raúl, *Historia de los ferrocarriles argentinos*, Editorial Plus Ultra, Buenos Aires, 1975)

Esta aseveración de Scalabrini Ortiz fue un anticipo de lo que sucedería a partir de las privatizaciones del menemismo de la década del '90: **durante este período, el estado siguió y sigue subvencionando a las empresas ferroviarias que pasaron a manos privadas.**

Asimismo, habría que destacar que durante el gobierno peronista no se realizó la tan necesaria reestructuración de los ferrocarriles ni tampoco de la industria siderúrgica, que había quedado paralizada tras la muerte del general Savio.

En el caso del petróleo, la actividad de extracción de YPF no se expandió en relación a las necesidades que imponía el pujante mercado interno. No obstante, se registraron importantes progresos en el tema de la destilación y el transporte. En este sentido, resulta ilustrativa la explicación de Pedro Santos Martínez:

> "*...aunque sí se amplió considerablemente su capacidad de destilación (para el procesamiento del petróleo importado) y de transporte (a lo que hay que sumar el gasoducto de Comodoro Rivadavia a Buenos Aires), que implicó un importante ahorro para el país, como lo reconocería posteriormente el propio Prebisch...*".
>
> (Citado por Gastiazoro, Eugenio, *Op. Cit.*)

Las nacionalizaciones afectaron principalmente a los intereses imperialistas ingleses en ferrocarriles, puertos, transportes, petróleo y gas; a los estadounidenses, en telefonía y electricidad; a los franceses, en puertos y ferrocarriles; y a los alemanes en el sector manufacturero, como sucedió con el Grupo Bemberg.

Las inversiones directas de los ingleses y norteamericanos quedaron reducidas a la industria frigorífica y al petróleo. Los primeros controlaban Anglo y Shell, y los últimos Swift Armour, Standard Oil y Esso.

Los alemanes, en sociedad con los belgas e italianos, siguieron manejando la electricidad de Capital Federal y el Gran Buenos Aires a través de CADE-Italo. Por su parte, los franceses y el resto de los imperialismos preservaron sus intereses en el sector manufacturero y en las propiedades territoriales. También habría que agregar que durante ese período llegaron algunas inversiones extranjeras, como la de los monopolios italianos (Techint, Fiat) o los alemanes (Mercedes Benz, Bayer, Siemens) o la norteamericana Kaiser que, a través de un convenio especial con el estado argentino, se instaló en Córdoba.

De todos modos, el peso de los monopolios extranjeros en el conjunto de la economía nacional se redujo notablemente durante ese período. En 1945, luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, la participación del capital extranjero había caído al 15,4% del capital fijo instalado en el país. En 1949, y debido al proceso de nacionalizaciones, esta cifra se redujo al 5,4%, manteniéndose en esos niveles hasta 1955.

Los más perjudicados por la política de nacionalizaciones fueron los

ingleses; por su parte, el capital de origen norteamericano, pese a su disminución en volumen mejoró su posición frente al resto de las potencias imperialistas, ya que en 1955 representaba el 30% del total de las inversiones extranjeras.

En relación al comercio exterior, durante ese período se observó un debilitamiento de los llamados mercados tradicionales, a la vez que se logró avanzar en una mayor diversificación. Sobre la base de acuerdos bilaterales forjados a través del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) y la Empresa de Líneas Marítimas del Estado (ELMA) –organismos que instrumentaron la política de nacionalización del comercio exterior–, Argentina logró incorporar nuevos mercados de importancia, como Chile, la Unión Soviética, India y Japón. También se reforzaron las ventas a Brasil y, como ejemplo de los cambios operados, por primera vez se compraría a India, sin la intervención de Inglaterra, el yute de las bolsas de arpillera.

Disputas en el peronismo provincial: Saadi profundiza la división

A principios de 1946 se vivieron en la provincia momentos de extrema tensión social, producto de las reformas impuestas por el gobierno nacional. La Unión Industrial Argentina encabezó un vasto movimiento de protesta contra las reformas, fundamentalmente contra el "decreto" 33.302 que establecía el aguinaldo. Además de la patronal empresaria, el sector estudiantil y algunos gremios calificaron las medidas como maniobras electoralistas, denunciando que había surgido "*un nuevo mesías de las luchas sociales argentinas*".

La dirigencia política tradicional se coaligaba, reeditando a nivel local la Unión Democrática, para frenar lo que denominaban el "*nazi-fascismo peronista*", en tanto la prensa local –en su gran mayoría opositora– advertía sobre las limosnas de los beneficios materiales otorgados por orden de Perón.

Haciendo caso omiso a estas presiones, los sectores más desprotegidos de la provincia, de la ciudad y del campo, se volcaron masivamente a favor del discurso claro y sencillo del coronel que pretendía llegar a la presidencia de la Nación.

El Partido Laborista estipulaba en su carta orgánica que su estructura estaría compuesta por "*sindicatos, agrupaciones gremiales, centros políticos, afiliados individuales, ni reaccionarios, ni totalitarios, ni oligarcas*". En Santa Fe, el nuevo partido se constituyó sobre la base de tres vertientes: una obrera, otra política y una última empresarial.

La Unión Ferroviaria jugó un papel protagónico en el diseño de la nueva fuerza. Demetrio Figueiras, Noguera y los hermanos Cesán, de los talleres de Pérez –todos impulsores y protagonistas del 17 de octubre–, tuvieron una activa participación en la confección de las listas a senadores y diputados provinciales y nacionales.

A partir de 1946, muchos ferroviarios llegaron a la función pública, como fue el caso del propio Figueiras, que integró el Directorio del entonces Banco Provincial de Santa Fe, o el de Giavarini, que fue ministro de Trabajo en el Gobierno Nacional. Galimberti, otro hombre proveniente del sindicalismo (empleado de comercio), ocupó el Palacio Vasallo.

La vertiente política, en lo fundamental, provenía del radicalismo. Perón brindaba un trato especial a los hombres de esa fuerza que se acercaban al laborismo. Por ejemplo, el Dr. Alejandro Antille se convirtió en el interlocutor de Perón en la provincia. Algunas notorias figuras del radicalismo se integraron al nuevo partido: los santafesinos Antonio Benítez y Antonio Pirani o los rosarinos Murúa y Ábalos. Este último, un prestigioso dirigente decididamente antialvearista y opositor a la hegemonía impuesta por Mosca en la provincia, provenía de FORJA y sustentaba ideas de izquierda.

También participaron de ese proceso electoral los Centros Cívicos, vinculados al nacionalismo de derecha con postulados similares a los de los actuales Centros Tradicionalistas. Estas unidades políticas se integraron definitivamente al laborismo a partir de 1946.

Asimismo, en Rosario apoyaron al peronismo Juan Lo Celso y su hermano Rogaciano, hombres de reconocida pertenencia clerical; lo mismo hicieron familias como los Casiello, los Casina, los Sánchez Almeyra o los Sánchez Granel, todas ellas provenientes de otras fuerzas políticas.

El sector industrial que integró el laborismo estaba encabezado por Agustín Repetto, un hombre que tenía estrechos lazos con la cúpula de Iglesia Católica. Este grupo logró imponer dos diputados nacionales en la lista partidaria.

La fórmula Leandro Meiners-Juan Pardal surgió de un acuerdo entre los sindicalistas ferroviarios y los radicales de la Junta Renovadora. Las listas legislativas estaban integradas por sindicalistas, radicales, nacionalistas e industriales.

El resultado que arrojaron las urnas en febrero de 1946 fue contundente: el Partido Laborista derrotó ampliamente a la Unión Democrática por 195.695 contra 147.567 votos, por lo que en la Provincia el doctor Leandro S. Meiners fue elegido como nuevo gobernador. A mediados de mayo, sin embargo, los santafesinos se estremecían con la noticia del confuso y nunca aclarado suicidio del mandatario electo.

La Unión Cívica Radical sostenía que el vicegobernador electo Pardal debía cubrir el cargo, mientras que el Partido Laborista se encontraba dividido entre los que los que postulaban a Waldino Suárez –respaldado por Borlenghi y Eva Perón– y los que sostenían a Oscar Aldrey, el interventor federal en la Provincia.

Para resolver la imprevista acefalía, se volvió a reunir el Colegio Electoral que consagró gobernador a Waldino Suárez, presidente del Círculo de Obreros de Santa Fe y, por tanto, un representante de los trabajadores.

La gestión de Suárez fue muy resistida por la oposición y también por una parte de su propio partido. Se lo acusó de desconocer la estabilidad de

los trabajadores del magisterio y de avanzar sobre el Poder Judicial, por lo que la Legislatura elevó un pedido de juicio político en su contra, bajo el cargo de "*no presentar el presupuesto*".

La ruptura del gobierno –pretendía un accionar autónomo– con la dirigencia del partido, en el marco del modelo de disciplina verticalista impuesto por Perón, agravaba las divisiones dificultando la gobernabilidad.

Para quitar presión y conseguir el respaldo de la población, el ejecutivo provincial presentó un presupuesto para el año 1947 con una importante alza del gasto social –implicaba un aumento de 40 millones con respecto a 1946 y se destinaban fundamentalmente a sueldos– que contrastaba con la escasa cifra reservada a la obra pública.

La discusión dentro del oficialismo se trasladó al gobierno central, desde donde se sugirió una renovación total del gabinete provincial. La medida no logró zanjar las diferencias entre el oficialismo y la oposición, por lo que a fines de 1947 fue intervenida la Junta Provincial del Partido Laborista.

El senador nacional Vicente Leónidas Saadi fue designado interventor y su misión consistió en armar una estructura partidaria con el conjunto de las vertientes políticas que habían contribuido a la victoria electoral, incluidas las que habían sido dejadas de lado por Suárez.

El representante de la Junta Nacional, lejos de unir al partido, favoreció abiertamente a los opositores al Gobernador, barriendo a la cúpula afín a éste, imponiendo nuevas direcciones y reservando para el nuevo sector hegemónico la totalidad de las candidaturas para la contienda electoral de marzo de 1948.

La posición de Saadi llevó a los partidarios del Gobernador a constituir una nueva entidad política: el Partido Obrero de la Revolución. La división aumentó los rumores de intervención institucional y arreciaron las críticas peronistas contra el gobierno provincial.

En las elecciones legislativas nacionales de marzo de 1948, se impuso holgadamente el Partido Peronista; en segundo lugar se ubicaba la Unión Cívica Radical y se relegaba a un lejano tercer puesto a los disidentes que respondían al gobernador Suárez.

A pesar de la división partidaria, el enorme prestigio del gobierno nacional posibilitó el triunfo peronista, y el fracaso electoral del Partido Obrero de la Revolución afectaría aún más la gestión del gobierno provincial.

Aprovechando las diferencias dentro del oficialismo, los sectores adversos al peronismo condenaban la política del gobierno de Santa Fe. El Partido Comunista denunciaba:

> "*...el avance de elementos pro nazis del peronismo en detrimento de los núcleos progresistas del laborismo...*".
>
> (De Marco, Miguel Ángel y otros, *Historia de Santa Fe*, Librería Apis, Rosario, 1992)

Los comunistas definían a los partidarios del Gobernador como pronazis y al oficialismo partidario, oportunamente organizado por Saadi, como progresista.

En cambio, los socialistas identificaban a la administración provincial con la nacional y sostenían que estaba:

> "*...lanzada a una carrera desenfrenada de apetitos y que en el fondo no tienen en común más que su obsecuencia hacia el magistrado de la Nación...*".
>
> (De Marco, Miguel Ángel y otros, *Op. Cit.*)

Los radicales y los demócratas progresistas también fustigaban en duros términos al gobierno provincial. Los radicales iban más lejos que los socialistas y equiparaban al gobierno argentino con el régimen de Mussolini.

A pesar de los continuos pedidos de la dirección partidaria para que la Nación intervenga la Provincia; a pesar de la continua turbulencia política; a pesar de la fractura partidaria que originó la expulsión del Gobernador y otros funcionarios del peronismo; a pesar de la intransigencia permanente expresada por la oposición; a pesar de la poco o nada convincente gestión de Suárez, no fue sino en 1949 cuando se ordenaría la Intervención Federal a la Provincia, designando en ese cargo al coronel Dalmiro J. Adaro. Quedarían muchas dudas acerca de cuál era la verdadera opinión de Perón acerca del conflicto partidario de Santa Fe. Es más, en la campaña electoral para elegir gobernador, reconociendo errores –y sin atacar a Suárez– Evita sostuvo:

> "*...me he de interesar porque el nuevo gobernador peronista cumpla los ideales revolucionarios que alienta nuestro presidente... He querido venir hoy hasta ustedes a decirles que ha llegado la hora de Santa Fe, la hora de las realizaciones...*".
>
> (Discurso de Eva Perón, CGT Rosario, mayo de 1949. Citado por De Marco Miguel Ángel y otros, Op. Cit.)

En 1949, el peronismo volvió a obtener un triunfo irrefutable en las urnas y el ingeniero Juan Caesar fue elegido gobernador. El mandatario electo, junto a legisladores santafesinos, se reunió con el general Perón, quien pidió la "unidad" del partido para evitar los errores cometidos durante la gobernación de Suárez.

Una de las medidas más reconocidas que tomó Caesar estuvo relacionada con el régimen municipal: se elevó del 25 al 50% el porcentaje de participación de los municipios en el impuesto inmobiliario. Asimismo, de lo que percibía la provincia de los impuestos nacionales a los réditos, a las ventas, a las ganancias eventuales y a los beneficios ordinarios, se destinaría un 5% adicional a las municipalidades.

A diferencia del presupuesto de Suárez –orientaba lo principal de la partida de gastos a sueldos–, la nueva administración cortó la tendencia al crecimiento laboral, disponiendo que quedasen sin cubrir los empleos vacantes.

Asimismo, con apoyo del gobierno federal, se ejecutó un ambicioso programa de viviendas tipo monoblock y se realizaron obras viales e hidráulicas. Además, a través del Banco Provincial se otorgaron créditos blandos a

los agricultores (incluso para la adquisición de campos arrendados). Esta medida facilitó el cumplimiento de los postulados de la Ley Agraria 13.246, que propiciaba el traspaso de la propiedad del suelo a los arrendatarios.

En Rosario, además de la mayoría de las escuelas industriales, se creó el Instituto Politécnico de Capacitación Obrera. También en esta ciudad, en 1950 se habilitó la Estación Fluvial de pasajeros, se dio impulso a la construcción de los Tribunales Provinciales y se construyó el actual edificio del otrora Banco Provincial de Santa Fe.

La Constitución Provincial de 1949

El artículo 5 de las disposiciones transitorias de la Constitución Nacional sancionada el 11 de junio de 1949, autorizaba por única vez a las legislaturas locales a reformar las constituciones provinciales en un plazo no mayor de noventa días.

El Poder Ejecutivo provincial convocó para el 1 de julio a la Asamblea Legislativa. Los representantes de la Unión Cívica Radical plantearon la nulidad de la misma y decidieron abstenerse de participar del debate.

La enmienda local, como había sucedido también en el ámbito nacional, tendió al fortalecimiento del Estado, dejando de lado todo atisbo de liberalismo.

Además de modificarse el Preámbulo, se incluyeron las definiciones de la nueva Constitución Nacional sobre los derechos del trabajador, la familia, los ancianos y los niños; y se consagró el principio de la función social de la propiedad, las actividades económicas y los servicios públicos. En el capítulo sobre el intervencionismo estatal, la nueva norma sostenía: "*incumbe al Estado fiscalizar la distribución y utilización del campo e intervenir con el objetivo de desarrollar e incrementar su rendimiento en interés de la comunidad*". De esta manera se facultaba al Estado a inmiscuirse en la economía.

En el terreno político se extendía la duración de los mandatos legislativos a seis años, para que los mismos coincidieran con los del presidente y vicepresidente. También se eliminaba la elección indirecta del gobernador y vicegobernador, quienes a partir de ese momento serían elegidos directamente a simple "pluralidad de sufragios".

Guerra de Corea: los ferroviarios se oponen a Perón

Los comicios de noviembre de 1951, realizados bajo el imperio de la nueva Constitución, depararon dos novedades institucionales de importancia: la reelección presidencial y el voto femenino.

Para cubrir los cargos de gobernador y vicegobernador, la oposición presentó los siguientes candidatos: la UCR proclamó la fórmula Alfredo Grassi-Félix Pagani; el Partido Socialista presentó el binomio Luis Bonaparte-Vicente Pucci; el Partido Comunista sostuvo a Francisco Mónaco y Anatilde Yuquerí Rojas de Sarrabayrouse y el PDP concurrió con una fórmula encabezada por Mario Mosset Iturraspe y Camilo J. Muniagurria.

Se impuso el candidato peronista –provenía del Partido Obrero de la Revolución del ex gobernador Suárez– doctor Luis Cárcamo, secundado por Enrique A. Roulet.

El nuevo gobernador tenía, a pesar de su juventud, una dilatada actuación en la actividad pública: fue director de la Empresa Municipal de Transporte de Rosario, director de la casa Rosario del Banco Provincial, Comisionado Municipal de Rosario y luego intendente de esa ciudad. También fue asesor político del Ministerio de Asuntos Técnicos de la Nación e interventor del Partido Peronista de Córdoba.

Cuando se analiza la gestión del doctor Cárcamo es conveniente observar algunas cuestiones de la situación política nacional que influyeron en la realidad provincial.

La primera tenía que ver con la situación económica, ya que a partir de 1950 se había producido un estancamiento y caída de las exportaciones (el promedio anual del período 1950-1954 fue de 1.056 millones de dólares, mientras que en el período 1945-1949 el promedio había sido de 1.072 millones). El peronismo, como se analizó oportunamente, confiaba en que la Guerra de Corea recrearía la demanda mundial de nuestros productos, permitiendo un nuevo auge de la economía.

El gobierno nacional, siguiendo este hilo de ideas, comenzó a presionar para participar en esa guerra con un contingente de soldados argentinos y junto al imperialismo norteamericano.

La gigantesca marcha de los obreros ferroviarios de Pérez repudiando la intromisión de Argentina en ese conflicto, pese a ser reprimida, logró su objetivo de paralizar la iniciativa. El gobierno provincial también pagó un alto costo político por esta posición incorrecta.

Otra de las cuestiones a tener en cuenta fue la importante caída del salario real –en 1951 se redujo un 40% en relación al ingreso récord per cápita de 1948– que influyó, al igual que el intento de participación en la Guerra de Corea, en el estado de ánimo de la población.

Además, la sanción de leyes como la 14.222 de Radicaciones del año 1953 (ya analizada), generaron en el sector políticamente más avanzado de la población la sensación de que se comenzaba a ceder frente a la presión del imperialismo y sus socios locales.

La relación entre el gobierno del doctor Cárcamo y el pueblo santafesino, con una situación económica distinta a la del primer período peronista y con un ánimo social muy diferente, no fue la mejor.

Fue así como la paralización del "Plan Perón" de reestructuración ferroviaria y del proyecto de saneamiento "Aglomerado Gran Rosario" –ejes del programa de gobierno– causaron un profundo malestar popular. Otras obras anunciadas, referidas al transporte urbano, a la provisión de energía y a la pavimentación corrieron idéntica suerte.

La inoperancia de la administración peronista dio origen a la intervención federal de la Provincia, que tuvo lugar a principios de marzo de 1955. El

interventor designado fue el capitán de fragata (RE) Ricardo Anzorena. Por ese entonces, el gobierno de Perón, en medio de grandes convulsiones políticas, transitaba sus últimos días.

Por su parte, el peronismo provincial, además de soportar profundas divisiones, cargó sobre sus hombros con dos intervenciones federales en diez años de gobierno, debido a irregularidades en sus gestiones.

Habría que decir que las divisiones dentro del peronismo provincial se sucedieron casi sin interrupción hasta la aparición de Carlos Alberto Reutemann, en la década del '90. El sector nacionalista del peronismo nunca llegó a hegemonizar el partido. Es más, en determinados momentos y para desplazar a este sector, sus rivales internos apelaron a candidatos extrapartidarios, como fue el caso de Sylvestre Begnis en 1973 y el propio Reutemann en 1991, que gobernaron a favor de los intereses oligárquicos e imperialistas.

Los enfrentamientos con la Iglesia

En el segundo período de su primer gobierno, el peronismo trató de conciliar con la oligarquía y el imperialismo. Hacia 1950, Argentina negociaba un crédito con el Eximbank de los Estados Unidos, intentaba atraer nuevas inversiones extranjeras sobre todo para la industria y limitaba las facultades del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI). Además, el gobierno peronista pretendió participar con tropas argentinas en la Guerra de Corea y en el año 1953 sancionó la controvertida Ley 14.222, tendiente a favorecer la radicación de capitales extranjeros en la industria y la minería.

A principios de 1955, la oposición sostenía que la nueva política petrolera violaba la Constitución Nacional, por lo que la administración justicialista era acusada de intentar modificar el artículo 40 de la Carta Magna –que establecía la propiedad inalienable del estado sobre el subsuelo– para facilitar la concesión petrolera a la Standard de California, empresa con la que nuestro país había sellado un convenio.

Dada la naturaleza de clase de su dirección, el peronismo no sólo concilió sino que no tocó en lo fundamental los intereses de los sectores dominantes –el latifundio y los monopolios imperialistas– principalmente de la industria de la carne y, además, al no resolverse las contradicciones económicas, se fueron abriendo brechas entre el gobierno y algunos sectores de la sociedad. Tal vez el enfrentamiento con la Iglesia Católica, en las condiciones que fue planteado, haya sido el que mayor costo político le causaría al partido gobernante.

Hasta 1954, la relación de Perón con la jerarquía de la Iglesia Católica había transcurrido por carriles normales, con algunos altibajos originados a raíz de la profunda división que separaba a la sociedad entre peronismo y antiperonismo.

A principios de su gestión, Perón, que se identificaba con la doctrina social católica, logró que el Congreso ratificara la enseñanza religiosa –instaurada con el golpe de 1943– en las escuelas. Debido a las posiciones contrarias al gobierno de muchos párrocos, la implementación de esa enseñanza fue conflictiva. La injerencia de la Iglesia en los asuntos públicos también trajo asperezas con el gobierno, como sucedió en 1946 cuando el Consejo Nacional de Educación debió suspender una encuesta sobre "*Perturbaciones que origina la crisis de pubertad*"; o en 1948, cuando el doctor Ramón Carrillo –ministro de Salud Pública– intentó reabrir los prostíbulos con el objetivo de combatir las enfermedades venéreas. En estos episodios la Iglesia criticó duramente la posición oficial.

Un punto importante de confrontación tuvo lugar en el año 1950, cuando el gobierno autorizó a los espiritistas de la Escuela Científica Basilio a realizar un acto en el Luna Park, cuyas instalaciones fueron copadas por centenares de militantes de la reaccionaria Acción Católica que silbaron estruendosamente el mensaje de salutación de Perón y Evita.

Las diferencias entre la Acción Católica y el gobierno se agravaron debido a la presentación de la película "*Bárbara Atómica*", como así también a causa de la decisión gubernamental de autorizar la exhibición de otros espectáculos considerados inmorales por este sector de militantes de la Iglesia. La disputa por el encuadramiento de los estudiantes secundarios entre la Acción Católica y la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), marcó el punto de máxima fricción del conflicto. En septiembre de 1954 esta disputa se transformaría en ruptura definitiva, cuando el gobierno tomó la decisión de retirar la personería jurídica a todas las "*asociaciones constituidas sobre la base de la religión, creencia, nacionalidad, raza o sexo*".

Luego de este hecho, la oposición política se solidarizó con la "Iglesia y sus prelados"; mientras tanto, el gobierno avanzaba en medidas demoradas como las leyes de "divorcio" o "profilaxis", como así también en la derogación de la enseñanza religiosa en las escuelas, dejando sin efecto la exención de impuestos a las instituciones religiosas.

Oponiéndose a estas disposiciones, la Iglesia comenzaba una campaña nacional y mundial contra Perón. La procesión de Corpus Christi del 11 de junio de 1955 se transformó en un acto político multitudinario contra el gobierno peronista. Al llegar al Congreso los manifestantes izaron la enseña patria y la bandera papal, mientras en un confuso incidente –los convocantes a la marcha hablaban de provocación– era incendiada una bandera argentina. Al día siguiente hubo manifestaciones de desagravio en todo el país y un ataque contra la Catedral de Buenos Aires perpetrado por militantes peronistas.

Los bombardeos de Plaza de Mayo

El día 13 de junio Perón habló al país por la cadena oficial, responsabilizando a la oligarquía y a la cúpula de la Iglesia por negarse a colaborar con

los pedidos de pacificación y haber provocado los desórdenes. Al día siguiente expulsaba del país a los monseñores Tato y Novoa, por lo que el Vaticano dispuso su excomunión.

El día 14 la CGT convocó a un paro de actividades a partir del 15, con una concentración frente al Congreso, en desagravio de la bandera nacional y en memoria de Evita. El 15, eran allanadas para luego ser clausuradas, las sedes episcopales y locales de la Acción Católica.

En este clima de extrema tensión, el 16 de junio de 1955 se produjo el levantamiento de la Marina que bombardeó la Casa Rosada en un intento de matar al general Perón. La acción de las fuerzas golpistas acabó con la vida de centenares de civiles que concurrieron desarmados a la Plaza de Mayo. Superados los primeros momentos de confusión, la artillería leal logró recuperar el aeropuerto de Ezeiza que había sido tomado por la Infantería de Marina. Además, las tropas que respaldaban al gobierno cañonearon el edificio del Ministerio de Marina y el jefe de la revuelta, contralmirante Samuel Toranzo Calderón, junto a otros militares rebeldes, se entregaron prisioneros. Esa misma noche eran saqueadas e incendiadas la Curia metropolitana y varias Iglesias.

En Santa Fe, el interventor provincial, capitán de fragata (RE) Ricardo Anzorena, promovió una verdadera caza de brujas contra militantes comunistas. A diferencia de la posición que tendría en el golpe de septiembre de 1955, el Partido Comunista provincial, a través de un volante, salió a denunciar la conspiración llamando a enfrentar el bombardeo. Sugestivamente, la Sección Orden Social y Leyes Especiales de la Policía de Rosario decidiría incautar ese volante e iniciar una redada en la que se detendría a sesenta militantes comunistas, entre los que se encontraba el doctor Ingalinella.

La policía provincial negó su detención durante varios días a través de diversos comunicados. Las masivas protestas reclamando la aparición con vida de Ingalinella obligaron al poder político a dar algún tipo de respuesta. Desde la Legislatura provincial se conformó una Comisión Bicameral Investigadora y un mes después el gobierno provincial informaba a la opinión pública que "*desgraciadamente el doctor Juan Ingalinella había fallecido a consecuencia de un síncope cardíaco durante el interrogatorio*".

Con el objetivo de apaciguar las protestas y evitar responsabilidades políticas, Francisco Lozón y Félix Monzón fueron acusados como los únicos responsables del crimen, para luego ser condenados a prisión. El asesinato de Ingalinella ahondó la división entre peronistas y comunistas que, a partir de ese momento y durante años, protagonizaron una serie de enfrentamientos que tuvieron su pico máximo de tensión en febrero de 1964, cuando en un plenario de gremios adheridos a la CGT, realizado en el salón del Sindicato de Cerveceros, murieron tres jóvenes trabajadores peronistas y seis resultaron heridos como consecuencia de un enfrentamiento en el que participaron militantes de la derecha católica, peronistas y comunistas.

El golpe del 16 de septiembre

Perón, muy golpeado a pesar del fracaso del alzamiento del 16 de junio, trasladó su despacho a la sede del Ejército y a fines de ese mes levantó el Estado de Sitio. El 5 de julio hizo un llamado a la conciliación nacional y el día 15 dio por finalizada la revolución peronista, anunciando que dejaba de ser jefe del movimiento para pasar a ser presidente de todos los argentinos. A esa altura, ya pocos dudaban que Perón había quedado prisionero del Ejército.

Debido a la tregua política acordada, desde los espacios radiales concedidos a los partidos políticos, los dirigentes opositores, particularmente el radical Arturo Frondizi, el conservador Vicente Solano Lima y el demoprogresista Luciano Molinas emitieron severas críticas contra el régimen.

El 15 de agosto la policía denunció el descubrimiento de un complot para asesinar al presidente, motivo por el cual Perón anunció el fin de la tregua política. Ante el fracaso de las negociaciones con las direcciones de los partidos opositores y la jerarquía de la Iglesia, el gobierno apuntó a la "vieja oligarquía" advirtiendo que la "*tolerancia ha tocado sus límites*".

Ante el avance de los planes golpistas, el 31 de agosto se conoció la noticia de que Perón había mandado la renuncia como presidente, no al Congreso, sino al Partido Peronista y a la CGT. Ésta llamó a un paro general convocando a los trabajadores a la Plaza de Mayo para impedir el retiro del líder. Perón habló desde el balcón de la Casa Rosada; en un histórico discurso denunció la infamia de los bombardeos del 16 de junio, agregando que se acababa la paciencia tanto del pueblo como del gobierno, para concluir que "*cuando uno de los nuestros caiga, caerán cinco de ellos*". Posteriormente aclaró que retiraba su renuncia, pero a condición de que "*cada uno se prepare de la mejor manera para luchar*" y terminó señalando que: "*si los adversarios y enemigos no comprenden, ¡pobres de ellos!*".

Sin embargo, el gobierno no tomó medidas contra los golpistas. Entendiendo que las advertencias de Perón no pasaban de una mera amenaza, las corrientes conspirativas de fuera y dentro de las Fuerzas Armadas apuraron los preparativos del derrocamiento. El 2 de septiembre, el general Balaguer intentó sublevar la guarnición de Río Cuarto pasando a la clandestinidad. Idéntica actitud tomó el coronel Osorio Arana. El día 6, la CGT propuso "*constituir una milicia civil armada*" ofreciendo para ello los seis millones de trabajadores nucleados en esa organización. El ministro de Guerra Lucero se apresuró a rechazar la oferta, por lo que Perón desistió de la idea de armar al pueblo. Se corroboraba que Perón estaba resignado a la "protección" del Ejército.

Por su parte, el general Lonardi viajaba a Córdoba para encabezar el levantamiento del Ejército programado para el 16 de septiembre. La asonada estaba acordada con otros sectores militares como el que respondía al general Aramburu, y así también con la Marina, a cuyo frente se pondría el director de la Escuela Naval almirante Isaac F. Rojas.

El 16 de septiembre de 1955 se inició el levantamiento que tras cuatro días de enfrentamientos armados culminó con la renuncia y el exilio de Perón.

En un principio, el grupo insurrecto no tuvo una correlación de fuerzas favorable. Es más, tropezó con muchas dificultades para levantar las unidades, como se demostró con el fracaso del general Aramburu en su intento de sublevar a la guarnición correntina de Curuzú Cuatiá. Además de no lograr el objetivo militar propuesto, el general golpista terminaría refugiándose en Brasil.

Tanto la base del Ejército como de la Aeronáutica se mantuvieron fieles al gobierno. Pero en la propia cúpula militar que se mantenía leal a Perón convivían desde elementos golpistas y núcleos reaccionarios preocupados por la posibilidad de que se produjera una rebelión obrera, hasta oficiales partidarios de armar al pueblo.

A pesar de la presencia de este último sector, la negativa final de Perón de repartir armas al movimiento obrero terminó restando posibilidades de articular un gran frente antigolpista entre la mayoría de la población y las fracciones nacionalistas de las Fuerzas Armadas. Probablemente una alianza de estas características, armada, hubiera permitido derrotar el levantamiento, enjuiciar a los responsables y allanar el camino hacia una salida a favor de los intereses del pueblo y la nación.

Del golpe triunfante participaron la mayoría de los partidos políticos que oportunamente conformaron la Unión Democrática. Hasta la propia dirección del Partido Comunista, contra la opinión de innumerables militantes que participaron en la resistencia, terminó avalando la Revolución Libertadora. Esta dirección, que el 16 de junio había levantado la correcta consigna de "*armar al pueblo contra el golpismo*", el 18 de septiembre, escudándose en una supuesta posición independiente planteó "*la necesidad de poner término a la guerra civil que estaba haciendo estragos*" y sus militantes –fundamentalmente los universitarios– concurrieron a Plaza de Mayo a festejar el triunfo del golpe de estado.

Pese a la resistencia popular y de los sectores nacionalistas de las Fuerzas Armadas, con cientos de detenidos, perseguidos y fusilados, el golpe había triunfado. Tal como había sucedido con los radicales en 1930, en 1955, la burguesía nacional peronista mostró su impotencia para impedir la restauración oligárquica imperialista.

LA RESISTENCIA Y EL VOTO EN BLANCO

Se reinstala el modelo liberal

La autodenominada Revolución Libertadora terminaría eliminando instrumentos básicos del proyecto económico peronista, como la nacionalización de los depósitos bancarios y el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), y también liberalizaría la economía para los capitales imperialistas, flexibilizando el control de cambios, modificando el régimen de inversiones, devaluando, etc. A partir de esta época se acentuó la dependencia de nuestro país, ya que se anudaron lazos con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales.

La política del gobierno de facto reforzó la penetración imperialista norteamericana y europea, favoreciendo un rápido proceso de concentración de ese capital en la industria, el comercio y las finanzas; a la vez, logró reconstruir el latifundio en el campo con instrumentos como la "ley" Mercier que liberaba los arrendamientos, y el "decreto-ley" 14.577 de agosto de 1956, que derogaba la Ley 13.995 de Colonización de Perón, garantizando la entrega de millones de hectáreas en el sur y el noreste del país a los terratenientes amigos del régimen. Entre el Río Colorado y Tierra del Fuego se "vendieron" millones de hectáreas al incomprensible valor de 22 dólares cada una.

Con estas medidas el gobierno dictatorial logró que se aumentara la explotación de los trabajadores, se recrearan relaciones de producción atrasadas en el campo y se avanzara en la penetración imperialista en la industria. Se reinstalaba en el país el modelo económico imperante hasta la irrupción del peronismo.

Esto explica cómo algunas grandes obras como la usina de San Nicolás, que en apariencia beneficiaban al conjunto de la provincia de Santa Fe, se concretaban para satisfacer las necesidades de las empresas imperialistas ya radicadas y favorecer el ingreso de nuevos capitales extranjeros. A principios de 1956, el capitán Álvaro Alsogaray, ministro de Industria de la Nación, anunciaba que antes de terminar el año se dispondría –debido al aporte de la

mencionada usina– de la energía suficiente para resolver la demanda industrial. Esta obra daría un fuerte impulso a la franja de la costa oeste del Paraná, especialmente al corredor industrial Santa Fe-Campana.

Durante dos años Santa Fe no da tregua

La provincia de Santa Fe enfrentó con firmeza a la autodenominada Revolución Libertadora. Prácticamente hasta la asunción del gobierno de Sylvestre Begnis, en las grandes ciudades, principalmente en Rosario, se observaba un clima de incontrolable agitación social. En los cuarteles provinciales, una buena parte de la oficialidad y prácticamente toda la suboficialidad del Ejército, se habían mantenido hasta último momento del lado del gobierno peronista. Idéntica actitud había tomado la Policía provincial.

A medida que fue avanzando la conspiración, en la provincia se exteriorizaron todo tipo de atentados contra la memoria de Evita. Paralelamente, se fueron multiplicando los actos políticos de desagravio, siendo particularmente importantes los organizados por la juventud nucleada en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), que levantaba la consigna: "*la oligarquía, enemiga irreconciliable de la Nueva Argentina*".

No obstante, tal como sucedía en el resto del país, el movimiento obrero fue la columna vertebral de la Resistencia peronista. Debido a los intentos golpistas fallidos del 16 de junio, las direcciones sindicales de Rosario, Santa Fe y otras ciudades del interior convocaron a los santafesinos a ganar las calles en prueba de lealtad a Perón y defensa de su gobierno. Posteriormente, el 31 de agosto, miles de trabajadores rosarinos se movilizaron a Buenos Aires confluyendo con el resto del movimiento obrero para rechazar categóricamente la renuncia que Perón había ofrecido.

Con el objetivo de enfrentar el posible quiebre institucional, la CGT, los sindicatos y las unidades básicas desarrollaron una febril actividad de agitación que fue coordinada por los jefes de manzana. Precisamente para el día 16 de septiembre se había programado un acto que no llegó a realizarse debido al estallido de la Revolución Libertadora.

Las primeras expresiones de repudio se manifestaron en el momento mismo del derrocamiento de Perón, cuando en algunas zonas fabriles los trabajadores impusieron el paro de actividades y acompañados por sectores provenientes de distintas barriadas tomaron por asalto las calles, desatándose verdaderas batallas campales entre manifestantes y los agentes de la represión. Las bases peronistas se expresaron espontáneamente ya que como sostenían algunos protagonistas de la Resistencia:

> "*...nada quedó de la frondosa estructura del partido (...) legisladores, dirigentes, funcionarios, se hicieron humo...*".
>
> (Citado por Pla Alberto J. y otros, *Op. Cit.*)

El paro se propagó rápidamente y los trabajadores, liberados de la valla de contención armada por la burocracia política y sindical, inundaron las calles dando origen a multitudinarias movilizaciones. Los obreros del frigorífico Swift, acompañados por los ferroviarios de los talleres de Rosario y Pérez, fueron la cabeza visible de estas primeras manifestaciones de oposición.

Mientras tanto, la población seguía con tensa expectación las noticias que eran transmitidas por radio. Por ese medio, el día 20 se difundió el texto de la renuncia del general Perón, que ya estaba refugiado en la cañonera Humaitá que lo llevó al exilio a Paraguay. En el mensaje, justificando su decisión de no enfrentar la asonada golpista, el mandatario renunciante sostenía: "*Si mi espíritu de luchador me impulsa a la pelea, mi patriotismo y mi amor al pueblo me inducen a todo renunciamiento personal*". Inmediatamente se sucedieron distintas exteriorizaciones de júbilo por parte de los sectores antiperonistas. Éstos, al igual que los peronistas, también ganaron las calles de las principales ciudades de la provincia dedicándose a "limpiar" todas las imágenes, pintadas y símbolos del gobierno depuesto. Por esos días, la división entre los habitantes del centro de las grandes ciudades y los de la periferia urbana era política además de social. **En el centro, la mayoría apoyaba el golpe de estado y en los barrios se lo enfrentaba.**

El día 22 de septiembre, en Rosario, mientras asumía Lonardi, se organizó una movilización con trabajadores de Granadero Baigorria, Empalme Graneros y toda la zona oeste de la ciudad. Al llegar las columnas al centro, con las fuerzas policiales desbordadas, aparecieron las primeras acciones de los comandos civiles, quienes desde los techos del edificio de Rioja y Alvear hirieron gravemente a un trabajador.

Pese a la orientación de la dirigencia sindical de "no interrumpir las tareas", el paro se prolongó por varios días y en el caso de los obreros de la carne, ferroviarios y metalúrgicos la medida se extendió hasta la primera semana de octubre.

El acuartelamiento de las tropas del Regimiento 11 de Infantería, que al mando del general Iñiguez permanecieron fieles al peronismo, demoró la irrupción del Ejército en la ciudad, que finalmente se produjo el 24 de septiembre con el arribo de unidades de Santa Fe y Corrientes que se dedicaron al patrullaje y rastrillaje de las calles, manteniendo una guardia militar en los ómnibus y tranvías. Hasta ese momento, sólo los efectivos de la Infantería de Marina y Gendarmería permanecían listos para reprimir los distintos alzamientos organizados por los adeptos a Perón.

Para Beba Balbé, en Rosario hubo una guerra civil que comenzó el 16 de septiembre y duró más de una semana:

> "*...La lucha se entabla entre sectores populares y obreros del cordón circundante de la ciudad, en avance hacia el territorio enemigo, el de los 'libertadores' del centro de la ciudad y las Fuerzas Armadas. Más de 400*

muertos entre mujeres, niños y hombres y el ejército jamás pudo entrar a los barrios para sacar las estatuas de Perón y Evita. Esto hizo que Perón la declare la capital del peronismo, y que la resistencia peronista de Rosario haya sido la más activa y exitosa en sus acciones..."

(Balvé, Beba, *Acerca de la relación: resistencia-lucha armada-huelga política de masas e insurrección proletaria*, Cicso, Buenos Aires, 2004)

El 24 de septiembre se hizo cargo de la provincia el coronel Juan Bautista Picca, pero el 2 de octubre se produjo un recambio de interventor asumiendo el gobierno el vicealmirante Carlos Garzón.

El 17 de octubre, una fecha emblemática para el peronismo, prácticamente de forma espontánea se realizó un nuevo paro de actividades que contó con un desigual acatamiento. En el frigorífico Swift, la adhesión fue casi total. El día 2 de noviembre, a pesar de que la CGT había dejado sin efecto la medida anunciada unos días antes, los trabajadores impusieron un nuevo paro reflejando de esta manera su voluntad de lucha. La huelga tuvo un alto acatamiento en metalúrgicos, el frigorífico Swift y la administración pública.

Coincidiendo con la caída de Lonardi, la CGT lanzó el 15 de noviembre un cese de actividades por tiempo indeterminado. El diario *La Capital* daba cuenta de un "*principio de huelga general con epicentro en la zona norte de la ciudad*".

Ese día paralizaron sus tareas los trabajadores de los talleres ferroviarios que barricaron el cruce Alberdi, acompañados por los obreros de Cin-delmet, Cura Hnos. y Centenera S.A. Paulatinamente el conflicto se fue extendiendo a las grandes fábricas, incorporándose a la huelga los trabajadores de Schlau, La Virginia, Bodegas Giol, Minetti, Algodonera Argentina y Textil Rosario.

El paro fue duramente reprimido. Además de la policía de Rosario, participaron de los violentos sucesos los infantes de Marina, a los que se sumaron los comandos civiles. Fueron detenidos decenas de dirigentes de base y, a pesar del silencio oficial, la prensa internacional confirmaba la muerte de varios trabajadores.

Cuenta Tomado de Vigo que a esa altura:

"*...Rosario era una ciudad en pie de guerra pero sin dirección...*"

(Tomado de Vigo, Juan M. *¡La vida por Perón!* Crónicas de la Resistencia. Citado por Pla, Alberto J. y otros, *Op. Cit.*)

Durante este período de grandes huelgas, el gobierno provincial tratando de apaciguar la rebeldía social, desató una oleada persecutoria contra los activistas del ex Partido Peronista al que el gobierno facto acababa de disolver por "decreto".

Como se sostiene en el libro *Rosario en la Historia* (de Alberto Pla y otros *op. cit.*), el régimen dictatorial lanzó una campaña de inteligencia y delación, destinada a determinar la posición ideológica y el grado de adhesión al peronismo de la ciudadanía, a la vez que se castigaba la acción de quienes eran

considerados perturbadores del orden deteniéndose a un nutrido número de dirigentes políticos y gremiales consustanciados con el peronismo. Los presos fueron trasladados a Buenos Aires, puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), para luego ser confinados en distintas cárceles del sur del país. Paralelamente, se intervinieron los sindicatos locales, se eliminaron los convenios laborales y se eligieron a dedo las nuevas autoridades gremiales.

Estas medidas represivas, junto al creciente encarecimiento del costo de vida, motivaron el recrudecimiento de la protesta social, que en muchas oportunidades se expresaba a través de huelgas. A esa altura de los acontecimientos había asomado el verdadero rostro de la dictadura de Aramburu y Rojas. Lejos habían quedado los tiempos en que Lonardi hablaba de "*ni vencedores, ni vencidos*".

La Resistencia en la "capital del peronismo"

En enero de 1956, desde el exilio, Perón daba a conocer las "*Directivas Generales para todos los Peronistas*".

Esta verdadera declaración de guerra a la dictadura de Aramburu fijaba como objetivo:

> "*...Luchar contra la tiranía mediante la resistencia civil para desgastarla, entre tanto se organizan nuestras fuerzas en la clandestinidad, para luego proceder a la paralización del país y la toma del poder en cualquier forma, incluso provocando el caos...*".
>
> (Perón, Juan Domingo, *Directivas Generales para todos los Peronistas*. Documento interno distribuido clandestinamente, enero de 1956)

A partir de esta clara definición de objetivos, el peronismo logró reorganizarse y se creó el Comando Superior Peronista. La Resistencia entró en una nueva fase, dado que comenzaron a accionar las formaciones clandestinas.

Estas formaciones lanzaron una serie de sabotajes, algunos de los cuales fueron de tal magnitud que en ocasiones merecieron notas y editoriales adversos de la prensa progubernamental como el diario *La Capital* de Rosario, que hasta septiembre de 1955 había sido dirigido por Nora Lagos, una activa militante peronista. A partir del triunfo de la Revolución Libertadora, el diario cambió radicalmente su posición, pasando su control a manos del sector de la familia Lagos que respaldaba al régimen de facto. Refiriéndose a lo que calificaban como bárbaro accionar de las formaciones clandestinas, en su editorial del 25 de marzo de 1956, *La Capital* expresaba:

> "*...Provocar siniestros, apedrear trenes, inutilizar productos de consumo almacenados en depósitos, recurrir, en fin, a todos los medios conocidos para perturbar y amedrentar, sembrando la confusión y muchas veces, la muerte trágica de seres inocentes (...) son planes absurdos...*".
>
> (Diario *La Capital*, Rosario, marzo de 1956)

En junio de 1956, durante esta nueva etapa de la Resistencia, se produjo el alzamiento cívico-militar dirigido por el general Juan José Valle que culminaría con el fusilamiento de 22 militares sublevados, entre ellos el propio jefe insurrecto. A la vez, un grupo de 12 civiles vinculados con los sectores nacionalistas insurgentes eran ametrallados por la espalda en los basurales de José León Suárez.

Conectado con este acontecimiento, el 9 de junio se produjo en Rosario un levantamiento protagonizado por algunos militares, pero con importante apoyo civil. Los rebeldes exigían "*la libertad de todos los presos políticos y el llamado a elecciones en un término no mayor de 180 días*".

Ese día había arribado a la ciudad el general Pedro Eugenio Aramburu a bordo del rastreador *Drumond*, perteneciente a la Armada Argentina. El mandatario concurrió al acto oficial organizado en Plaza San Martín para posteriormente trasladarse al Regimiento 11 de Infantería. Mientras esto sucedía, los insurrectos –fundamentalmente efectivos del mencionado regimiento y comandos de la resistencia– se apoderaron de la emisora LT2, de la central telefónica Sarratea y de varias estaciones ferroviarias. La revuelta fue reprimida por efectivos del Comando del primer Cuerpo de Ejército y del Escuadrón Rosario de Gendarmería Nacional, y los instigadores fueron encarcelados.

Los hechos del 9 de junio marcarían el desarrollo posterior, no sólo de la Resistencia peronista sino de la historia del país. Luego de más de cien años, se volvía a aplicar la pena de muerte en Argentina. Los fusilamientos de los civiles en José León Suárez, magistralmente investigados y relatados por Rodolfo Walsh en su obra *Operación Masacre*, junto a las ejecuciones –en la Penitenciaría Nacional y la ESMA– de los jefes militares revolucionarios, exacerbarían el repudio antidictatorial y profundizarían la brecha que separaba a las dos Argentinas.

No todas las acciones de la Resistencia se circunscribirían a prácticas clandestinas. Rosario y otras ciudades serían también testigos de movilizaciones o actos, algunos espontáneos y otros organizados, conmemorando fechas relevantes para el peronismo.

Fue así como en junio de 1957, a un año del levantamiento del General Valle, nutridas columnas que partieron de las barriadas de la ciudad confluyeron en el Cristo Redentor, para rendir homenaje a los militantes asesinados. Portando antorchas y al grito de "*¡nos pagaron! ¡nos pagaron!*", en alusión a las calumnias que hacía circular la oligarquía diciendo que "Perón le pagaba a la gente y por eso reunía tanta", se realizó el multitudinario acto. A esa altura quedaba claro que en la provincia de Santa Fe, y particularmente en Rosario, la dictadura militar no podía controlar la protesta social. Se confirmaba aquello que oportunamente había expresado Perón definiendo a Rosario como la "capital del peronismo". A partir de ese año y durante décadas el Cristo Redentor fue el lugar natural de encuentro de la militancia peronista.

La Constituyente de 1957: triunfo del voto en blanco

El 20 de septiembre, tras la caída de Perón, los jefes militares insurrectos reunidos a bordo del crucero *17 de Octubre* firmaron un compromiso que obligaba al "*imperio de la Constitución en vigor dentro del concepto de la más amplia libertad y orden*" y además se establecía: "*Se dejará sin efecto la ley que convoca a elecciones de convencionales para la modificación de la Constitución Nacional*". Este compromiso fue ratificado por el general Lonardi en el "decreto" 42 en el que se exaltaba el "*principio de supremacía constitucional*". La autodenominada Revolución Libertadora se comprometía a respetar la Constitución de 1949, a la vez que abortaba el intento peronista de reformarla.

Sin embargo, los partidos políticos que respaldaban al gobierno no apoyaban a Lonardi. El mismísimo Vittorio Codovilla –secretario general del Partido Comunista– sostenía:

> "*...Hay dos corrientes fundamentales en el gobierno, una, la de Lonardi (presidente), que sufre una fuerte influencia clerical y pro imperialista yanqui que la empuja hacia la derecha; otra, la que encabeza el contralmirante Rojas (vicepresidente), que se inclina hacia posiciones democráticas y de cierta resistencia al imperialismo...*".
>
> (Codovilla Vittorio, Revista *Nueva Era*, octubre-noviembre, 1955).

Por esto, mientras los amigos de Lonardi no querían apartarse del compromiso firmado en el crucero *17 de Octubre*, los seguidores de Rojas –con un importante apoyo político– comenzaron a presionar para derogar la Constitución de 1949.

A partir de ese momento se lanzó una campaña organizada por la prensa "democrática" contra la Constitución de 1949, que era consideraba como antiliberal y estatista. Los dirigentes políticos cercanos a la asesora Junta Consultiva Nacional, plantearon la derogación usando todo tipo de improperios para descalificar al régimen peronista. Por ejemplo Luciano Molinas, vocero de la democracia progresista, expresaba que debía derogarse porque:

> "*...entonces casi quedó todo en manos de fascistas y nazistas, cuya teoría y práctica en el gobierno (...) marcan la etapa más ignominiosa de la vida nacional...*".
>
> (Diario *Clarín*, 15 de noviembre de 1955)

En cambio, una pequeña parte de la dirigencia política no peronista, no estuvo de acuerdo en reformar la Constitución de 1949; tal fue el caso de los doctores Oscar Alende y Oscar López Serrot, representantes del sector intransigente de la Unión Cívica Radical.

El gobierno de facto encargó un plan económico a Raúl Prebisch, el mismo que había prestado servicio al régimen dictatorial instaurado en 1930. El 26 de abril de 1956, mediante "decreto-ley", Aramburu aprobó las

recomendaciones expresadas en los documentos *"Moneda sana o inflación incontenible"* cuyo eje era contener la inflación tras la devaluación impidiendo los aumentos de salarios y el *"Plan de reestablecimiento económico"*. Ambos escritos marcaron el retorno de nuestra economía al liberalismo, por lo que al otro día Aramburu derogaría las reformas constitucionales estatistas de 1949, declarando vigente la Constitución Nacional de 1853.

El 12 de abril de 1957, mediante el "decreto" 3838, el gobierno convocó a elecciones de convencionales para reformar la Constitución de 1853, que se realizarían el 28 de julio, de acuerdo a la Ley Electoral vigente en ese entonces.

El Partido Peronista quedaba proscrito y el general Perón, desde el exilio, ordenó a sus simpatizantes votar en blanco en la Constituyente.

Debido a la posición tomada por el líder del movimiento, se instaló dentro del campo popular una discusión acerca de si era conveniente o no tomar esa decisión, discusión que se reiteraría en una versión aumentada en otros momentos históricos, fundamentalmente a partir de la segunda parte de la década del '90, con el avance de lo que se dio en llamar el voto protesta o bronca.

La discusión era y es la siguiente: **"este es un voto tirado que sólo beneficia al partido gobernante"** o **"es una posición válida de denuncia de fraude, que a la vez sirve para acumular fuerzas en pos de una estrategia determinada"**. Perón, a diferencia de la postura que tomaría en las elecciones presidenciales de 1958 (apoyó a Frondizi), advertía que había que denunciar el fraude.

Enfrentando al sector que luego se definiría como la línea blanda, integrado por una parte importante del sindicalismo, la mayoría de los intelectuales y la dirigencia política, el ala representada por John William Cooke junto a los dirigentes de las células clandestinas siguió reivindicando la línea intransigente emanada de la orden de Perón.

Este sector consideraba que el accionar de los comandos clandestinos y las estructuras gremiales debía estar subordinados al objetivo último de la insurrección que permitiera el retorno de Perón. Está claro que Cooke y el resto de la denominada línea dura apostaban por una salida insurreccional, sosteniendo que si legalizaban el fraude concurriendo a las urnas, aun ganando la oposición, se beneficiaba al gobierno dictatorial.

En la otra vereda Arturo Jauretche manifestaba:

> *"...Hay que votar contra el gobierno, no para que triunfe alguno, sino para que el oficialismo sea derrotado. Mas aún; hay que votar contra el gobierno para evitar que el voto en blanco sea nuestra derrota definitiva: el triunfo de los gorilas..."*.
>
> (Revista *Qué*, 9 de julio de 1957)

Raúl Scabrini Ortiz coincidía con Jauretche afirmando:

> *"...¿Permitiremos, cruzados de brazos, que sea sustituida la Constitución del 49 por un texto fraudulento en que se renovarán acrecentados los privilegios del capital extranjero?"; "La Constitución del 53 fue sancionada por legisladores cuyo electorado no superó el 3 por ciento de la población"; "¿Quién pues en el futuro pondrá reparos a lo que se vote en 1957 con el apoyo de dos millones de votos?..."*.
>
> (Revista *Qué*, 9 de julio de 1957)

Por su parte, Domingo Mercante, ex presidente de la Convención Constituyente de 1949, denunciaba que la reforma creaba las condiciones jurídicas para que el Plan Prebisch se aplicara sin tropiezos. Por tanto "*El pueblo argentino debe impedir, por el medio más factible y eficaz que tenga a su alcance, que dicha Asamblea Constituyente realice semejantes propósitos*".

En este marco, el proceso electoral adquirió una especial relevancia para el movimiento peronista. Pese a que la campaña electoral se desarrolló en medio de una gran confusión por el sabotaje de una parte de la dirigencia a la decisión de Perón, los resultados de los comicios reflejaron un triunfo del "votoblanquismo" como modo de impugnación del régimen de facto.

En Rosario, la campaña adquirió grandes dimensiones plasmándose en un amplio triunfo del peronismo. Las bases del partido habían hecho correr de boca en boca la línea de Perón de votar en blanco, mientras en los lugares de reuniones públicas los militantes de la Resistencia distribuían volantes con la consigna "*Orden de Perón-vote en blanco*".

A nivel nacional adhirieron a la propuesta de voto en blanco 2.115.861 voluntades, superando por 10.000 votos a la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP). En tercer lugar, con 1.847.603 sufragios, se ubicó la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), siendo el partido más votado de los que se oponían a la reforma.

La Convención Nacional se reunió en Santa Fe entre el 30 de agosto y el 23 de septiembre. La versión renovada de la Unión Democrática (UCRP, democristianos, demócratas, demócratas progresistas, socialistas, cívicos independientes y comunistas) otorgó los representantes necesarios para garantizar el quórum, transformando en vanos los intentos de la UCRI de impugnar la convocatoria.

Mientras tanto, el partido que había superado los 2.000.000 de votos no podía hacer oír su voz por estar proscrito y los nueve representantes radicales sabattinistas de Córdoba, junto a la totalidad de los delegados de la UCRI, abandonaban la Convención; no obstante, la Constituyente, de hecho en minoría, comenzó a sesionar.

Una vez asegurada la vigencia plena de la Constitución de 1853, luego de incorporar el artículo 14 Nuevo o 14 Bis, en el que se sancionaron los derechos sociales bajo el "espíritu" de la vieja norma, pero fundamentalmente después de borrar del Preámbulo la voluntad de ser socialmente justos, económicamente libres y políticamente soberanos, los diputados conservadores rompieron el quórum determinando el fin de las sesiones de la Constituyente.

Dentro del campo nacional y popular aún hoy persiste el debate acerca del triunfo del voto en blanco en las elecciones constituyentes de 1957. Para algunos fue una mera posición testimonial; "*desgraciadamente el voto en blanco es una actitud política que termina en sí misma*" decía Scalabrini Ortiz. Para otros se trató de una contundente definición que terminó por desestabilizar al régimen dictatorial y ayudó a despejar el camino hacia las también fraudulentas elecciones de 1958.

Frondizi hizo lo contrario de lo que prometió

Las luchas de la clase obrera, los levantamientos cívicos y militares (fundamentalmente el del general Juan José Valle de 1956) y el triunfo del voto en blanco en las elecciones constituyentes de 1957, obligaron al general Aramburu a cumplir la promesa hecha a Arturo Frondizi luego de los fusilamientos de José León Suárez, de convocar a elecciones presidenciales.

El 18 de noviembre, el gobierno de facto llamó a comicios generales para el 23 de febrero de 1958, manteniendo la proscripción del peronismo.

El partido de Perón, una vez más, se vio enfrascado en un ardoroso debate acerca de qué posición electoral debía tomarse. El ala dura representada por Cooke y la mayoría de los dirigentes de las células clandestinas siguió reivindicando la línea insurreccional intransigente emanada de las *Directivas Generales*, sosteniendo la necesidad de reafirmar tanto la "*dinámica revolucionaria como la mística de combate de los comandos clandestinos*", considerados la avanzada de la Resistencia.

Ante esto, el argumento esgrimido por el sector blando se basaba en que, frente a la inviabilidad de la alternativa insurreccional, se hacía necesaria para el peronismo la intervención en la arena electoral. Esta posición, dada la proscripción del partido, implicaba de hecho la negociación de los votos peronistas con el frondicismo u otros sectores.

Perón desde el exilio, a través de la relación de Cooke con Rogelio Frigerio, firmó un acuerdo electoral con Frondizi. Con el "Pacto de Caracas" Perón terminaría aceptando que una salida de tipo insurreccional era prácticamente imposible. Es evidente que se trató de una decisión muy cuestionable o, como sostenían muchos partidarios de la línea dura, totalmente equivocada, máxime teniendo en cuenta que finalmente el gobierno de Frondizi terminó aplicando una política entreguista en lo económico y de represión del movimiento popular, particularmente de los propios trabajadores peronistas.

La posición electoral de volcar los votos a favor de Frondizi, fue resistida por muchos militantes que no se resignaban a abandonar la línea intransigente que venía aplicándose desde 1956, por lo que algunos sectores como el Comando Nacional Peronista llamaron a votar en blanco.

Pero la influencia de Perón sobre las bases seguía intacta y la fórmula Frondizi-Gómez lograba 3.989.478 sufragios, venciendo por un amplio mar-

gen al binomio de la UCRP integrado por Balbín-Del Castillo, que obtuvo 2.526.611. El 1 de mayo de 1958 Frondizi asumía la presidencia de la Nación, hecho al que la dirección del Partido Comunista calificó como "*la entrada del pueblo a la Rosada*".

En relación a su política exterior, el gobierno de Frondizi trataba de presentarse como el impulsor de una línea tercermundista e independiente del imperialismo norteamericano. En el plano interno habría que decir que notorios liberales como Álvaro Alsogaray (que en ese período acuñara la recordada frase "*Hay que pasar el invierno*") y Roberto Alemann estuvieron al frente de la cartera económica, en tanto Acevedo –socio de Martínez de Hoz en Acindar– presidió la Secretaría de Transporte. Éstos llevaron adelante una política económica que terminó beneficiando a los terratenientes, a los intermediarios y a los imperialistas.

Frente a las presiones de los monopolios, para lograr mantenerse en el gobierno, el supuesto independentismo tercermundista de Frondizi siempre terminaba sacrificado a lo que se denominaba "razones de Estado". Por eso, a pesar de haberse opuesto en la reunión de cancilleres de Punta del Este de enero de 1962 a la exclusión de Cuba de la Organización de Estados Americanos (OEA), ante el bloqueo a ese país ordenado por J. F. Kennedy, el 8 de febrero de ese año el gobierno nacional rompía relaciones con La Habana.

Aunque ni bien asumió, Frondizi tomó algunas medidas positivas, como el envío al Congreso de un proyecto de amnistía general o el decreto de aumento de salarios (que blanqueó y generalizó las mejoras logradas por las luchas de los trabajadores desde 1956), ya el 13 de junio de 1958 el gobierno dispuso que fueran rematadas y adjudicadas las empresas estatales que formaban el grupo Dinie.

El 24 de julio, Frondizi anunció la nueva política petrolera basada en contratos con compañías extranjeras, dejando de lado sus posiciones contra las concesiones petroleras, expresadas en su libro *Política y Petróleo* de 1954. Rogelio Frigerio, otro de los dirigentes del desarrollismo, en su carácter de secretario de Asuntos Económicos, fue quien negoció los contratos con las compañías estadounidenses: Banca Loeb, Tennessee y Pan American. Con estos acuerdos comenzaba a asomar la verdadera política del gobierno de Arturo Frondizi.

Tratando de evitar que los trabajadores pusieran en jaque su política petrolera, el 27 de agosto de 1958 el gobierno promulgó la Ley de Asociaciones Profesionales sancionada por el Senado y ese mismo mes fundó Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF), con el propósito de activar la explotación de los yacimientos de carbón de Río Turbio.

En septiembre de ese año, el gobierno debió enfrentar la resistencia de diversos sectores sociales por la promoción de la enseñanza libre, que favorecía la creación de establecimientos educacionales privados. Desbordado por la masiva movilización popular a favor de la enseñanza laica, por la importante huelga petrolera de Mendoza y por la oposición generalizada a

la entrega del petróleo, Frondizi optaría por el camino abiertamente represivo imponiendo el Estado de Sitio por tiempo indeterminado.

En diciembre se aprobaba la nueva ley de inversiones extranjeras, se decretaba la movilización militar de los bancarios en huelga y se liberaba el mercado de cambios, por lo que el dólar subía de 18 a 82 pesos. Sometimiento nacional y represión de la protesta social pasaron a ser los rasgos principales de la política del gobierno desarrollista.

Entre las grandes luchas de esos años sobresalió la huelga de los obreros del ex Frigorífico Nacional Lisandro de la Torre del barrio de Mataderos, realizada a principios de enero de 1959. Ante el violento desalojo de los trabajadores se originó una pueblada que fue duramente reprimida, lo que dio origen a un paro de solidaridad de tres días que paralizó al país, con acompañamiento de las capas medias y los estudiantes.

El intento de copamiento del Regimiento 11

El incumplimiento de los compromisos electorales asumidos por Frondizi en el pacto suscrito con Perón llevaría a que, a mediados de 1960, los organismos de conducción del Movimiento Peronista procedieran a analizar minuciosamente la nueva situación política. De la evaluación realizada surgió la necesidad de encarar un plan de enfrentamiento integral al gobierno en el terreno político, sindical y en el ámbito cívico-militar. Se procuraba por un lado golpear a Frondizi, y por el otro, poner una valla a la cada vez más intensa presión ejercida por los militares antiperonistas.

La conducción del Movimiento conformó el denominado Estado Mayor Insurreccional Peronista constituido por sectores militares, sindicales y comandos clandestinos. El lugar elegido para iniciar la sublevación fue el Regimiento 11 de Infantería de Rosario.

Dante Viel, uno de los integrantes del Estado Mayor Insurreccional, cuenta que tras el copamiento del regimiento:

> *"...se intentaría también la toma de la fábrica militar Domingo Matheu, la de artillería de Puerto Borghi, el arsenal de la localidad de San Lorenzo y la sede local de la Gendarmería..."*
>
> (Citado por Pla, Alberto J. y otros, *Op. Cit.*)

La fecha prevista para ejecutar la operación fue la medianoche del 30 de noviembre de 1960 y la dirección de la misma fue confiada a los militares. Entre los integrantes de las células clandestinas, existía cierta desconfianza en cuanto a la capacidad y grado de compromiso de éstos para llevar a cabo el operativo. Las dudas no eran infundadas ya que, de los relatos de los protagonistas, surgía con claridad que los militares encargados de contactarse con los tanquistas abandonaron la operación tras la muerte del Coronel (RE) Julio Barredo dejando a la insurrección sin los tanques, elemento fundamental para la ejecución de los movimientos tácticos posteriores.

La participación de los civiles fue importante. El cronista del diario *La Capital* expresaba que el arribo de éstos al Regimiento se había producido en "*jeeps, autos particulares, taxis y hasta en bicicletas*". Pero la mayoría de los comandos clandestinos tenían asignadas otras tareas e iban a entrar en acción sólo cuando los mandos militares lo ordenaran. Como se sostiene en *Rosario en la Historia* (de Alberto Pla y otros, *Op. cit.*) debido a la vacilación militar, en esa calurosa y aciaga noche de primavera, nutridos grupos de la Resistencia esperarían vanamente en distintos sitios de la ciudad (sindicatos, clubes, etc.) la llegada de las armas y las órdenes para entrar en acción.

Varias horas después del copamiento, y luego de haber ocupado el Casino donde tomaron como rehenes a varios oficiales, los insurrectos fueron cercados. Después de un intenso tiroteo, y ante la manifiesta superioridad del adversario, el general Miguel Ángel Iñíguez pactó la rendición. El levantamiento dejó como saldo oficial cuatro muertos (tres leales –un sargento y dos soldados– y un coronel (RE) insurrecto), varios heridos y un número importante de militares y civiles detenidos.

En los días posteriores se desató una oleada represiva de la que participó Agustín Feced, por entonces Segundo Jefe de Gendarmería. Este represor continuaría interviniendo en secuestros, torturas, asesinatos y desaparición de personas durante la dictadura militar iniciada en 1976.

Tras la rendición, confirmando el camino represivo impuesto, las radios nacionales difundieron un discurso de Frondizi en el que afirmaba la irrevocabilidad de la revolución de 1955 y dejaba en claro que lo ocurrido en Rosario "*justificaba el estado de sitio y la implementación del Plan Conintes*" (Conmoción interna del estado). El presidente, luego de responsabilizar a la dirigencia gremial, principalmente a la UOM, prometió castigos ejemplares y aclaró que el retorno de Perón era "*imposible*".

Para muchos historiadores, el fracaso del levantamiento marcaría el final de la Resistencia peronista que había durado un lustro, pero abriría paso a una nueva y, tal vez, más profunda y madura oposición, que se fue dando sobre la base de la unidad de peronistas, comunistas, obreros, estudiantes, capas medias, etc., que enfrentaron la política de Frondizi.

La etapa final del gobierno de Frondizi

La larga huelga nacional de los ferroviarios de 196l –duró 42 días– fue la protesta más importante realizada por los trabajadores, ya que marcó el principio del fin del gobierno de Frondizi.

Los obreros de Pérez, en el período previo a esa lucha, resistieron los planes de privatización de los talleres. Los trabajadores, que a principios de la década del '50 se habían opuesto al envío de tropas a Corea, realizaron una profusa campaña contra la entrega de los ferrocarriles, llevando adelante distintas medidas de lucha como la expulsión del general Larkin de los talle-

res. El enviado del Banco Mundial, y principal inspirador de la política ferroviaria de Frondizi, fue echado a piedrazos y bulonazos por los operarios.

El gobierno de Frondizi decretó la movilización militar del gremio y comenzó a perseguir a los ferroviarios. La Gendarmería llevaba violentamente a los trabajadores a los talleres metiendo en las cárceles a los que se resistían a ingresar. Sin embargo, los ferroviarios no pudieron ser doblegados.

En Santa Fe se produjeron algunas luchas, como la que protagonizó el pueblo de Laguna Paiva en defensa del taller ferroviario, que fueron conmovedoras. Los veinte mil habitantes del lugar se volcaron a las vías y con sus cuerpos, palos y piedras detuvieron dos trenes propiciando una severa tunda a los carneros. La policía abrió fuego contra la multitud dejando un saldo de decenas de heridos, lo que generó la ira de los manifestantes que, en represalia, quemaron un tren.

Los ferroviarios de Rosario, por su parte, fueron protagonistas de una protesta que aún hoy se recuerda. En la Avenida Alberdi de esa ciudad se realizó una movilización –una verdadera marea humana cubrió la ancha arteria a lo largo de varias cuadras– encabezada por las esposas, madres, hermanas e hijos de los trabajadores. La marcha fue de tal magnitud que ni la policía y gendarmería juntas pudieron disolverla.

El gobierno, para amortiguar su derrota, recurrió a la mediación del cardenal Caggiano. Producto del diálogo, pero fundamentalmente de la firmeza de los trabajadores, surgiría el "decreto" 11.570 mediante el cual las autoridades realizaron un conjunto de concesiones entre las que sobresalían: dejar de lado las sanciones, pagar con un crédito los sueldos caídos, otorgar un aumento del 20% en los haberes, aceptar la participación de representantes de los distintos sindicatos en el directorio de la empresa, etc.

Debido a las vacilaciones de la dirección sindical, y a pesar de la disconformidad de un sector de los trabajadores, el paro finalmente se levantó. En muchos casos, cuando la empresa no dejaba tomar servicio a algún empleado, la huelga llegó a extenderse durante cinco días más. Asimismo, y como se observaría en Rufino, el accionar represivo continuaría, ya que en una manifestación realizada en esa localidad del sur santafesino caía asesinado Manuel Roca, un obrero foguista del gremio ferroviario.

La huelga ferroviaria de 1961 asestó un severo golpe a los planes del gobierno frondicista. Los enemigos de los ferrocarriles argentinos tuvieron que retroceder y los objetivos privatistas fueron archivados.

Mientras tanto, a pesar de la vigencia del Estado de Sitio, la protesta de la mayoría de la sociedad no cesaba. El movimiento estudiantil seguía bregando en defensa de la educación laica y por mayor presupuesto; y el movimiento obrero –especialmente bancarios, obreros del ex frigorífico Lisandro de la Torre y trabajadores ferroviarios– pugnaba por lograr una mejora salarial y se oponía a las privatizaciones y a la entrega del petróleo.

Asimismo, la unidad –hasta no hacía mucho tiempo difícil de lograr–

entre peronistas, comunistas, obreros, estudiantes y capas medias, no sólo ayudó a enfrentar la política económica y el Plan Conintes de Frondizi, sino que también se hizo extensiva al plano político, cuando desafiando la opinión de sus propias direcciones, peronistas y comunistas resistieron la intervención a la provincia de Buenos Aires tras el triunfo de Andrés Framini en las elecciones de marzo de 1962.

Los continuos cuestionamientos militares a Frondizi, como el ocurrido tras el encuentro que mantuvo con Ernesto Guevara en la residencia de Olivos el 18 de agosto de 1961, se agregaban a la inestabilidad social permanente. Frente a cada planteo de los uniformados, Frondizi realizaba alguna maniobra para mantenerse en el cargo. Por ejemplo, luego de la entrevista con el Che, el presidente apeló a la cadena oficial de radio para explicar los detalles de la conversación tratando de quitar argumentos al reclamo de las Fuerzas Armadas. Pero muchas veces este juego fracasó, y entonces pasó a hacer concesión tras concesión a los militares, no sólo en el terreno económico sino también en el político, realizando permanentes cambios de ministros.

El ciclo del doctor Frondizi entró en su etapa final el 18 de marzo de 1962, cuando fue derrotado por el peronismo –Unión Popular– en once de los dieciocho distritos del país, entre ellos la estratégica provincia de Buenos Aires.

El gobierno había dado seguridades a las Fuerzas Armadas de que esto no sucedería, por eso, a pesar de que al otro día el Poder Ejecutivo intervino Buenos Aires, los altos mandos tomaron la decisión de derrocar a Frondizi.

La división entre legalistas (azules) y golpistas (colorados) abrió paso a la "solución Guido", ideada por Julio Oyhanarte, por entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia. Fue así como antes de que el general Poggi, representante del sector golpista, arribara a la casa de gobierno para asumir el cargo de presidente de la Nación, ya había tomado juramento el doctor Guido quien suscribió un acta secreta mediante la cual se comprometía a anular las elecciones y proscribir al peronismo y al comunismo.

El desarrollismo provincial

En las elecciones de febrero de 1958, en la provincia de Santa Fe, triunfaba la UCRI de manera contundente. Carlos Sylvestre Begnis y José Roberto González obtuvieron el 45,3% de los votos positivos. En segundo lugar se ubicó la UCRP, con el 25% y en tercer término, el PDP, con el 18,5%. En Rosario el triunfo de la UCRI fue categórico, ya que sacó más del doble de votos que la UCRP.

La Constitución Provincial, en ese período, no preveía la elección directa del intendente, que era nombrado por el gobernador con acuerdo de la Legislatura. Sylvestre Begnis designó a Francisco Lecchini como intendente de Rosario, y el representante de la bancada mayoritaria, Luis Cándido Carballo, quedó al frente del Concejo Deliberante.

La UCRI provincial logró la adhesión de la mayoría de los sectores independientes que confiaron en el proyecto de "desarrollo y modernización" de la economía planteado por Frondizi. Fue particularmente importante el apoyo brindado a la UCRI por el grupo denominado "Gente de Radio", que nucleaba a conocidos periodistas como Evaristo Monti, Guillermo Strazza, Raúl Granados, Angelita Moreno, Luis Ángel Truco, Antonio Agri y Alfonso Amigo. Por su parte Luis Cándido Carballo, Miguel Salmen, Héctor Gómez Machado, Luis Méndez, Fernando Viñals, Enrique Spagenberg y Roberto Rosúa, entre otros, aprovechando el pacto Perón-Frondizi, sellaron acuerdos con dirigentes sindicales y barriales peronistas que permitieron a la UCRI instalarse en la periferia de la ciudad.

El empresariado local también acompañó con entusiasmo el proyecto frondicista. Explicando ese apoyo, Israel Berestan, dueño de Villber S.A., por ese entonces la empresa de refrigeración más importante de la provincia, hace poco tiempo sostuvo:

> *"...El electo gobernador de la provincia de Santa Fe, el doctor Carlos Sylvestre Begnis, era un prestigioso médico, vinculado a la Empresa y a sus directores..." y refiriéndose a Luis Cándido Carballo lo definía como "un activo luchador y trabajador inclaudicable, comprometido con la problemática, el bienestar y la cultura..."*.
>
> (Israel Berestan, *Industria Argentina, su origen, desarrollo y destrucción*, Bitácora Ediciones, Buenos Aires, 2002)

Finalmente habría que decir que el Partido Comunista apoyó activamente la fórmula de la UCRI sosteniendo que los radicales intransigentes "*representaban una opción progresista contra el continuismo oligárquico*".

El voto en blanco para castigar a Sylvestre Begnis

Los sectores populares santafesinos, al igual de lo sucedido en el ámbito de la nación, rápidamente pasaron a criticar la política petrolera y de educación del nuevo gobierno.

En septiembre de 1958, la Federación Universitaria del Litoral y la Federación Rosarina de Estudiantes Secundarios llevaron adelante un plan de lucha para derogar el artículo 28 –revalidado por el gobierno de Frondizi– del "decreto" 6403 de 1955, que otorgaba validez a las universidades privadas para expedir diplomas y títulos habilitantes.

Los estudiantes, enfrentando la decisión gubernamental, apoyaron la iniciativa de Risieri Frondizi, hermano del presidente de la Nación y rector de la UBA, de realizar un paro nacional para exigir la derogación del mencionado artículo. El 24 de septiembre, los alumnos reformistas ocuparon prácticamente la totalidad de las facultades y colegios secundarios; como contrapartida, desde los sectores partidarios de la enseñanza libre, se llamaba a repri-

mir la protesta. Mario Strubbia, en representación del Comité Estrada, calificaba como acto "*totalitario*" la toma de los establecimientos educacionales e instaba a "*terminar de una buena vez*" con "*el clima de desorden*".

La policía provincial, por orden del juez federal Héctor Freytes, procedió a la desocupación violenta de los colegios secundarios dejando una importante secuela de heridos. Mientras tanto, desde distintas Comisiones de Padres, se respaldaba a los alumnos y se criticaba a los directores por haber permitido el ingreso de las fuerzas represivas.

Durante los primeros días de octubre, el conflicto dominó el panorama político provincial, siendo la Plaza Pringles el escenario de numerosos actos de defensa de la educación laica. El 7 de octubre, en el marco de la visita a Rosario del vicepresidente Alejandro Gómez, se desató una violenta represión policial con un saldo de varios estudiantes heridos con armas de fuego. Finalmente el gobierno de Frondizi, a pesar de la resistencia desarrollada en todo el país, logró que los legisladores reglamentaran el controvertido artículo.

Debido a esto, en el ámbito de la nación y la provincia comenzaba un proceso de ruptura de amplios sectores sociales con el proyecto desarrollista. En Rosario, en febrero de 1959, era desplazado el intendente Lecchini. El creciente descontento de los habitantes respecto del rumbo económico, sumado a algunos problemas específicos locales, como los reiterados paros de los trabajadores municipales, obligaron a Sylvestre Begnis a firmar un decreto dejando sin efecto el nombramiento del intendente.

El gobernador, alarmado por los resultados de las elecciones de marzo (en Mendoza el peronismo no volcó sus votos a la UCRI), presentó a la Legislatura un proyecto de suspensión de las elecciones comunales por 120 días e intervino la Municipalidad de Rosario, designando a Luis Cándido Carballo como intendente.

La postergación de las elecciones y la posterior convocatoria electoral excluyendo a Rosario, llevaron a Enrique Osella Muñoz, presidente de la Junta Provincial del Partido Justicialista, a sostener que *"la actitud del actual gobierno de la provincia de Santa Fe no es más que el fiel cumplimiento de un plan de orden nacional que responde al propósito de eludir pronunciamientos electorales que constituirán severos repudios a una política contradictoria y perjudicial para los intereses de la Nación y su pueblo"*. La dura posición de Osella Muñoz fue compartida por la mayoría del peronismo que terminó alejándose de los ucristas.

Las elecciones comunales de julio de 1959, no sólo no le dieron el triunfo al oficialismo, sino que mostraron una UCRI en caída libre. Debido a la proscripción del peronismo, se impuso el voto en blanco que fue mayoritario en localidades importantes como Rafaela, Gálvez y San Lorenzo y obtuvo un importante nivel de adhesión en Reconquista, Cañada de Gómez, Casilda y Villa Constitución.

La derrota electoral de Sylvestre Begnis y la resistencia generalizada a la política económica y represiva del gobierno de Frondizi, provocaron una

crisis política que culminó con el alejamiento del vicegobernador José Roberto González. El mandatario renunciante consideró que las banderas de *"orden, legalidad y justicia"* habían sido reemplazadas por la *"interferencia gubernamental en los sindicatos y la despiadada represión a los reclamos de los trabajadores"*. Por último, el vicegobernador señalaba que en lugar de la justicia social la UCRI había instaurado:

> *"...una era de injusticia que condena a la mayoría del pueblo al hambre y a la desesperación y lo que es más grave (...) el programa de estabilización impuesto por los organismos extranjeros que pretende convertirnos en una factoría que nos ha de retrotraer (...) a épocas nefastas e ignominiosas de nuestro pasado..."*
>
> (Citado por Pla, Alberto J. y otros, *Op. Cit.*)

La intendencia de Luis Cándido Carballo

Los rosarinos, a pesar del largo tiempo transcurrido, aún hoy discuten los pro y los contra de la gestión de Luis Cándido Carballo al frente de la Municipalidad. La administración de Carballo tuvo dos etapas. La primera, como interventor, que duró hasta marzo de 1960, y la segunda, como intendente (constitucional), que se extendió hasta el golpe de estado de 1962 que desplazó a Frondizi de la presidencia.

En las elecciones de 1960, si bien el resultado electoral le fue favorable, el voto en blanco se impuso holgadamente con 114.168 sufragantes que optaron por ese camino. Entre los votos positivos, la UCRI derrotó apretadamente a la UCRP por 71.178 a 69.637 sufragios. Como se podrá apreciar, Carballo, en esta última etapa, no contó con un importante respaldo del voto popular.

El Intendente, sin embargo, logró recoger una importante adhesión durante su gestión, lo que le permitió imponerse en las elecciones de gobernador y vicegobernador de 1962 pese al desprestigio de las gestiones de Frondizi y Sylvestre Begnis.

Los lineamientos de la política económica de la ciudad de Rosario se definieron en el marco del plan de estabilización monetaria que había implementado Álvaro Alsogaray. El ministro de Economía de la Nación, Sylvestre Begnis y Carballo acordaron un conjunto de medidas para la ciudad que contemplaban un sustancial aumento de los impuestos, una agresiva política de obras públicas y un drástico recorte de gastos que se lograría mediante la privatización de los servicios públicos, el congelamiento salarial y la suspensión de los ingresos de nuevos empleados a la administración local (reducción de personal).

Esto determinó que la relación entre Carballo y los trabajadores del municipio estuviera signada por la conflictividad, con prolongados paros, uno de los cuales llegó a durar 53 días.

Definida la política económica, habría que reconocer que la gestión de Carballo fue arrolladora, ya que inmediatamente aplicó un elevado aumento de impuestos. Para favorecer la recaudación la Municipalidad, además de poner cobradores a domicilio, modificó el sistema de apremios a los morosos, eliminando recargos y reduciendo la regulación de honorarios y multas.

Según el Intendente, la planta de personal estaba sobredimensionada (se había elevado de 3.728 en 1943 a 6.621 empleados en 1959). En los primeros diez meses de gestión se perdieron 1.391 puestos de trabajo, y antes de las elecciones de marzo de 1960, otros 386 empleados fueron obligados a renunciar. En el año 1960, la incidencia de los salarios en el presupuesto había caído del 70 al 37,7%, y al año siguiente, se redujo al 26,23%, hasta entonces el porcentaje más bajo de la historia del Municipio.

El ajuste salarial, como se desprende de las cifras oficiales, fue importante. Además, y como para ir creando condiciones para reducir aún más el personal, la Municipalidad modificó el horario de trabajo y los empleados pasaron a desempeñarse entre las 12 y las 20.

Paralelamente a este ajuste, se incrementaron los recursos asignados a la obra pública, ya que en el presupuesto de 1960 éstos pasaron de 47 a 294 millones de pesos (aumentaron siete veces), y en el año 1961, el total destinado a este rubro se elevó al 49,18% de los recursos (una de las cifras más altas de la historia del Municipio). Como contrapartida, en el año 1960, los gastos de salud apenas se duplicaron, pasando de diez a cerca de veinte millones de pesos. La importancia que Carballo le asignaba a la obra pública era evidente.

La ciudad de Rosario, desde fines del siglo XIX, no tuvo una transformación tan importante como la que se percibió durante la gestión de Carballo. El avance de las topadoras abrió paso a una serie de obras como la ampliación de Bulevar Rondeau, la demolición del Mercado Central y la construcción del Observatorio Municipal, en el Parque Urquiza.

Se privatizaron varios servicios municipales, entre ellos el transporte y el matadero municipal. Aún hoy se recuerdan las disputas del Intendente con los empleados municipales y los trabajadores de la UTA, a los que consiguió doblegar apoyándose en los sectores pudientes de la sociedad que veían con buenos ojos sus obras y respaldaban abiertamente su gestión.

El apoyo que recibió Carballo de la Sociedad Rural (SR) fue constante, y se expresó claramente en la larga puja que mantuvo con la Cooperativa de Tamberos de Rosario Ltda. (COTAR) por el precio y la pasteurización de la leche. La Municipalidad, que disponía del poder público de fijar valores máximos para los productos de primera necesidad, resistió, con el apoyo de la SR, el aumento del precio dispuesto por la COTAR. Sin este respaldo hubiera sido imposible abastecer a la ciudad del vital alimento y la COTAR seguramente hubiera logrado imponer el aumento.

El duro perfil de Carballo –que se expresó en las múltiples disputas que mantuvo con los empleados y el Concejo– era similar al de los caudillos conservadores de la provincia formados en las enseñanzas de Simón de Iriondo.

Para este tipo de dirigentes, la obra pública y los votos marchan de la mano. Carballo, en el último período de su mandato, intentó proyectarse a nivel provincial. Con este objetivo tomó una serie de medidas contrarreloj, como la gran campaña de desratización, las obras de iluminación y desagües (emprendimiento realizado con los vecinos) y la compra del Banco Ciudad de Rosario.

Carballo encabezó una administración que introdujo cambios profundos en la ciudad; cambios que beneficiaron a los rosarinos en general, pero principalmente a los sectores de mayores recursos, ya que se realizaron sobre la base del esfuerzo de los trabajadores municipales y la mayoría de los habitantes de la ciudad que debieron afrontar altos impuestos.

Las elecciones provinciales de 1961

En Santa Fe, a diferencia del resto del país, las elecciones a gobernador y vicegobernador se adelantaron a diciembre de 1961.

Luis Cándido Carballo y José Cisera encabezaron la fórmula de la UCRI. En la ciudad de Rosario, los candidatos ucristas recibieron el apoyo del "Movimiento de los Independientes", nucleamiento integrado por ciudadanos "notables", empresarios, representantes de entidades barriales, e incluso, por algunos sindicalistas.

A la vez, y por iniciativa de Darío Brunetto, un dirigente vecinalista de Barrio Industrial, treinta vecinales apoyaron públicamente al binomio desarrollista. Como contrapartida, viejos aliados de Carballo tomaron distancia del intendente. Entre ellos sobresalían Enrique Spagenberg, que fue candidato a gobernador por el Movimiento Nacional Radical y Popular (MNRP); y Alejandro Gómez y el ferroviario Vicente Pucci, que encabezaron la fórmula del Partido del Trabajo y el Progreso (PTP).

El "Movimiento de los Independientes", con consignas como "*política de trabajo, de íntima unión entre pueblo y gobierno*" y "*la vida del comité ha sido superada*", fue instalando la candidatura de Carballo. Asimismo, la abundante cantidad de recursos que disponían, les permitió realizar un programa televisivo en Canal 7 denominado *"Santa Fe marca el rumbo"* con el que llegaron a todos los rincones de la provincia.

Por su parte el peronismo, luego de varios años de proscripción, presentó la fórmula Jorge Tarrico-Edmundo Abraham.

Los resultados de las elecciones anticipadas le dieron el triunfo a la UCRI, que obtuvo 299.512 votos (30%). En segundo lugar se ubicó el peronismo con 238.382 sufragios (24%). En cambio en Rosario, la fórmula justicialista se impuso a la UCRI por 112.055 a 101.463 votos; lejos quedaron el PDP y la UCRP con 25.539 y 26.257 sufragios respectivamente. Aunque sin cubrir las expectativas previas, fue particularmente importante la elección realizada por el Partido Comunista –concurrió como Partido del Trabajo y del Progreso (PTP)– que obtuvo el apoyo de 26.187 voluntades. La

UCRI se impuso en el micro y el macrocentro y el peronismo ganó holgadamente en los barrios periféricos.

Carballo, a pesar de haber sido vencido en su ciudad, había realizado una elección interesante. Para el caudillo local no se trató de una derrota sino de una contienda electoral reñida, en la que había enfrentado al justicialismo unificado en la "capital del peronismo". Algo de razón tenía. En 1965, mientras el justicialismo se alzaba con un triunfo en el ámbito de la nación y el MID, su nuevo partido, obtenía apenas el 5,5% de los votos; Carballo –respaldado por 100.000 rosarinos– se imponía en las elecciones de concejales superando claramente a peronistas y radicales.

El modelo desarrollista

El proyecto desarrollista sostiene que las fuerzas productivas, por su solo desarrollo, revolucionan las relaciones de producción y de propiedad sin importar, por tanto, el modo en que se haga.

Los impulsores de esta teoría intentaron lograr ese desarrollo sobre la base de estimular la tecnificación del agro, particularmente del latifundio, y buscaron atraer la inversión del capital imperialista en la sustitución de importaciones. Este proceso se llevó adelante en ramas pocos desarrolladas pero con un potencial mercado interno como, por ejemplo, la industria automotriz con la cual están relacionadas otras como neumáticos, autopartes, petróleo, etc.

Los terratenientes y los grandes intermediarios, en función de sus necesidades de lograr un crecimiento que les permitiera mantener su supremacía sobre el resto de las clases, e inclusive, proyectarse al exterior, luego de la caída de Perón comenzaron a abrazar las ideas desarrollistas. Tras la asunción de Frondizi, deslumbrados por el proyecto de la UCRI, estos sectores apoyaron al nuevo gobierno.

La mayoría de la burguesía agraria e industrial, tanto la media como la chica, también fue seducida y ganada para estas ideas, ya que veía en el desarrollismo la única vía posible para sobrevivir, aunque más no fuera de manera subordinada a los grandes intermediarios asociados a los terratenientes o los propios imperialistas.

Sin embargo, la estrategia de lograr un desarrollo acelerado de las fuerzas productivas, no podía ser garantizada por ninguno de estos sectores; por tanto, el capital imperialista fue convocado a participar como asociado a un supuesto plan de transformar a Argentina en una gran potencia.

Paralelamente a la entrada de capital, se implementó una nueva política cambiaria que trajo una disminución de las exportaciones y provocó un mayor endeudamiento externo. Las empresas, que hasta ese momento contaban con divisas a un tipo de cambio relativamente barato, ahora compelidas a pagar precios mayores, terminaron endeudándose más con sus proveedores.

Además, como la demanda de bienes importados era imprescindible para la continuidad del proceso productivo local, las empresas no tenían otra alternativa que procurar préstamos en el exterior, ensanchándose de esta manera el camino que conducía hacia la desnacionalización.

A partir de 1958, con el acceso de Frondizi al gobierno, se produjo la implementación definitiva de la estrategia desarrollista, que llevó a una disminución de la participación de los asalariados en el Producto Bruto Interno (PBI). En 1954, esta participación era del 45,6%; en 1958, se redujo al 43,3%; y en 1967, cayó al 37,8%. Como se puede observar, la traslación de ingresos de los trabajadores hacia las clases capitalistas fue muy importante. Por ejemplo, en 1959, el salario real cayó casi un 30%.

Como afirmamos al principio de este capítulo, los dos grandes objetivos de la estrategia desarrollista consistían en: la expansión industrial a partir del capital extranjero y la tecnificación del agro, tendiendo a favorecer a los terratenientes en el campo.

En relación al primer objetivo, habría que decir que la entrada del capital imperialista fue estimulada por todos los medios. Se otorgaron facilidades de todo tipo para la inversión extranjera, como la devaluación del peso, ventajas impositivas y crediticias y una legislación de fomento. Un conjunto de elementos confluyeron alentando el ingreso del capital imperialista al país: un interesante mercado interno preexistente, barreras aduaneras proteccionistas, la revalorización de maquinarias que eran obsoletas en los países centrales, la posibilidad de manejo oligopólico de mercados y precios y, fundamentalmente, la Ley de Radicaciones y de Promoción Industrial que analizaremos más adelante.

En lo referido al objetivo de lograr la expansión agropecuaria, el gobierno movilizó recursos hacia algunos sectores del campo, facilitando el otorgamiento de importantes créditos y desgravaciones impositivas para los grandes hacendados y para la mecanización y tractorización del agro. Asimismo, recurrió a la liberalización de los nuevos contratos de arrendamientos. Finalmente, el gobierno facilitó la mejora de los precios agropecuarios; mientras los productos mayoristas no agropecuarios aumentaron entre 1954 y 1960 un 381%, los agropecuarios crecieron un 531%.

Para los desarrollistas, este modelo tenía que ser defendido a rajatabla, aunque fuera a costa de la ruina y empobrecimiento de otros sectores (principalmente los trabajadores) y la entrega del patrimonio nacional. A pesar de su éxito inicial, esta política iba a acarrear una nueva crisis, aún más profunda, que hizo eclosión a fines de 1961 y se extendió hasta 1963. Por último, y tal cual ha sido analizado, el modelo desarrollista abrió paso a un enorme movimiento de protesta social.

Las leyes de Radicaciones y Promoción Industrial

La Ley 14.780 de Radicaciones de 1958 satisfizo plenamente las exi-

gencias del capital imperialista, ya que no establecía ningún tipo de regulación sobre el giro de beneficios y repatriación del capital. Además, la norma aseguraba que todas las operaciones de cambio relacionadas con las radicaciones se llevarían a cabo en el mercado libre. De esta manera, al capital imperialista se le garantizaba divisas, aún cuando la situación económica del país impusiera la necesidad de establecer algún tipo de controles, para evitar el desequilibrio en el balance de pagos.

Los desarrollistas sostenían que la Ley de Radicaciones de 1958, se elaboró sobre la base de la ya analizada Ley 14.222 de Perón de 1953, que también legisló sobre la radicación de capitales imperialistas. Es cierto que ambas normas establecieron ventajas para dicha radicación, por ejemplo, la introducción libre de impuestos de maquinarias y equipos; pero como vimos oportunamente, a diferencia de la Ley de 1958, la norma de 1953 intentaba controlar la radicación efectiva del capital extranjero, imponiendo restricciones al giro de dividendos y la repatriación de capital.

Otro elemento a analizar es la sujeción de los inversionistas a las leyes vigentes en el país. La Ley de 1953 establecía de manera categórica que, tanto las garantías como los derechos y obligaciones de los inversionistas extranjeros, estaban sujetos a las leyes nacionales; en cambio la de 1958, que equiparaba claramente las garantías y derechos de los inversionistas extranjeros a los nacionales, no especificaba en ningún momento si el capital imperialista debía someterse a nuestras leyes en cuanto a las obligaciones.

Evidentemente existían importantes diferencias entre ambas normas; no obstante, lo que no quieren reconocer los desarrollistas, es que la legislación peronista no satisfizo al capital extranjero, siendo éste, el principal motivo por el que ellos se vieron obligados a reemplazarla por la Ley de 1958.

A los pocos días de haberse sancionado la Ley de Radicaciones, se puso en vigencia la Ley 14.781 de Promoción Industrial. La norma, de acuerdo a lo manifestado por el Poder Ejecutivo en los fundamentos enviados al Congreso, tenía el propósito de evitar una situación de inequidad para la industria nacional. Sin embargo, tanto esta ley, como los decretos relacionados con la misma, favorecieron a ramas como petroquímica, celulosa, siderurgia, etc., ramas en las que se concentraba la inversión extranjera.

Al igual que la Ley de Radicaciones, la meneada Promoción Industrial de Frondizi, también favoreció al capital extranjero en detrimento de las empresas nacionales que no tenían posibilidad de acceder a las mencionadas ramas. Muchos sostienen, que el régimen de Promoción Industrial (Ley 14.781 y Decretos reglamentarios) puede ser calificado como régimen de promoción del capital imperialista.

Predominio extranjero en la industria santafesina

Con la diversificación de la actividad económica, se amplió el merca-

do interno y se incrementó la demanda de medios de producción por parte de las nuevas industrias, fundamentalmente textiles y metalúrgicas. A la par, se desarrollaron condiciones favorables para que los capitales extranjeros realizaran inversiones directas en sectores claves de la producción. Las mismas se orientaron hacia las ramas metalúrgicas, petróleo y derivados, químicas, maquinarias pesadas para la agricultura, etc. y, en menor medida, a los sectores ligados al consumo final como alimentos y textiles.

La entrada de una moderna empresa extranjera en una rama de la producción llevaba generalmente a la desaparición de las fábricas locales, que en la mayoría de los casos, ocupaban más mano de obra que la nueva empresa. A la vez, la producción del nuevo establecimiento era superior a la de las fábricas locales desplazadas, debido a los altos recursos tecnológicos y a la mayor explotación de los asalariados.

Las empresas extranjeras fueron imponiendo su tendencia al monopolio en las distintas actividades económicas. Paralelamente, iban creciendo los procesos de integración económica dentro del país y se fortalecían las relaciones de dependencia del capital monopolista.

En la década del '50, Santa Fe recibió una parte importante de la afluencia de capitales extranjeros. De esta manera, un pequeño número de plantas modernas comenzó a absorber la mayor parte de la producción provincial, acentuando las desproporciones regionales en el desarrollo económico provincial.

La Ley 14.780 de Radicación de Industrias y la Ley 14.781 de Promoción Industrial –ambas otorgaban todo tipo de concesiones al capital imperialista– sancionadas por el gobierno de Frondizi en 1958, fueron determinantes para la concreción de estas inversiones.

Asimismo, el buen sistema de comunicación que tenía y tiene la región con Buenos Aires y, fundamentalmente, la existencia de un puerto de ultramar que permite la entrada de materias primas y maquinarias imprescindibles para sostener el proceso productivo, también fueron elementos que alentaron la decisión del capital extranjero de radicarse en nuestra provincia.

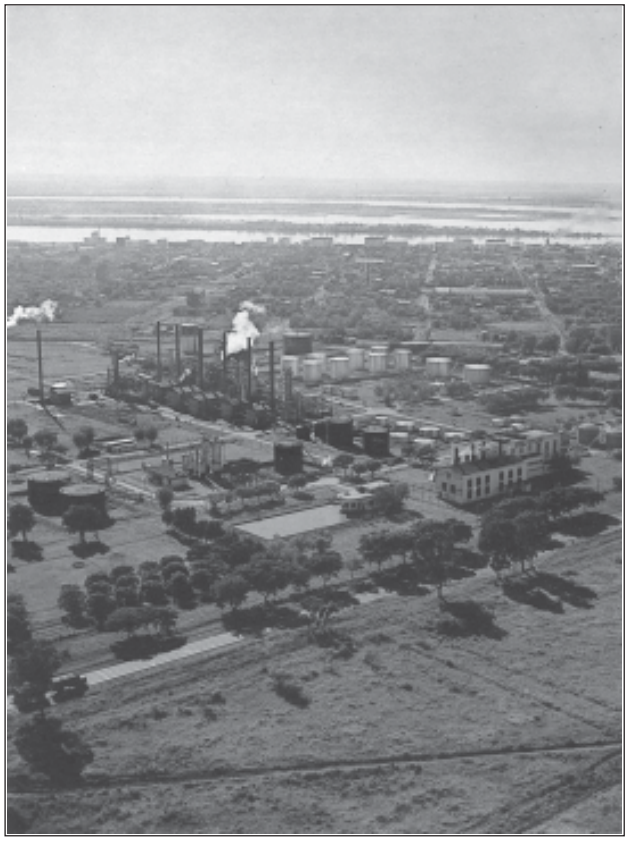
Otro factor importante que estimuló el proceso de inversiones, fue la privilegiada ubicación geográfica de las empresas, ya que las mismas disponían de amplios espacios sobre el Río Paraná, que a la vez operaba como proveedor de agua, elemento vital para el desarrollo de la industria química. Por último, la zona contaba con la existencia de mano de obra calificada originada en colegios y universidades de Rosario, como la Técnica 7, el Politécnico-Industrial (creado como Escuela Industrial de la Nación en 1906 por Ley 5012, y actualmente dependiente de la UNR) y la recientemente creada Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

Con la radicación de empresas extranjeras, el Gran Rosario, que ya lideraba la producción provincial, pasaría a consolidar su supremacía industrial. Como contrapartida, quedaría más clara que nunca la razón que

hacía y hace altamente vulnerable a la economía provincial: la presencia de factores de decisión extraprovinciales, fundamentalmente extranjeros. **Desde la gestión de Sylvestre Begnis hasta la fecha, la mayoría de los gobernantes provinciales, han diagramado sus políticas teniendo en cuenta los intereses de estas empresas.**

Por otra parte, las técnicas importadas aplicadas en las grandes fábricas, fueron determinantes para que se elevara la producción por cada hombre ocupado. Los adelantos tecnológicos permitieron un aumento del producto bruto provincial y, a la vez, paradójicamente, se registraron porcentajes de desocupación cada vez más altos.

Esta asimetría, en los últimos cincuenta años, se fue agravando cada vez más. Por ejemplo, si se analizan las inversiones extranjeras realizadas en los puertos privados durante la última década, se podrá observar que solamente el cinco por mil de las mismas estuvo destinado a mano de obra. A partir de 1980, a pesar del constante aumento de la exportación de granos y aceites, más de tres mil estibadores de Rosario y el Gran Rosario perdieron su fuente de trabajo.



Destilería de YPF en el año 1960, ciudad de San Lorenzo.

Un desarrollo industrial asimétrico

En la provincia de Santa Fe, según datos del Censo Económico de 1960, las inversiones para radicación de establecimientos industriales eran de una disparidad absoluta. Mientras en la región norte, las mismas apenas llegaban al 9%; en la zona central, ascendían al 29%; y en el sur –comprendía el Gran Rosario–, se ubicaban en el 62%. Esta disparidad ya se había hecho evidente durante la década del '50, período en el cual, el sur concentró el 91,3% del total de las inversiones extranjeras realizadas en la provincia. En Rosario y el Gran Rosario, en 1958, se habían invertido 438 millones de pesos; en 1959, la cifra ascendía a 996; y en 1960, alcanzaría los 2.400 millones de pesos. La mayoría de los capitales que ingresaron durante la década (cerca del 80%), estuvieron orientados a la industria química y petroquímica.

Las obras del oleoducto que conectaría Campo Durán (Salta) con San Lorenzo finalizaron en 1960. Este emprendimiento fue determinante para la radicación de fábricas, que transformaron a San Lorenzo en el más importante polo petroquímico de Argentina.

En el Gran Rosario, particularmente en la zona norte, se concentraron varias empresas que utilizaban alta tecnología y mano de obra calificada como la gigantesca petroquímica PASA, Duperial, Electroclor, aceiteras, destilerías y también Fabricaciones Militares.

Este desarrollo industrial fue acompañado por movimientos poblacionales que confluyeron hacia los departamentos Rosario y San Lorenzo. Las nuevas fábricas de la zona norte, no sólo ocuparon mano de obra local, sino que debieron atraer a trabajadores provenientes de la ciudad de Rosario.

Como sostiene Carlos Del Frade, la década del '50 fue de una gran actividad industrial tanto en Rosario como en el Gran Rosario:

> "*...Al ritmo de las sirenas de la Fábrica Militar Domingo Matheu, centenares de talleres metalmecánicos sobre la calle Ovidio Lagos, la metalúrgica Gema y la textil Estexa, en Rosario; Massey Ferguson, John Deere y Jabón Kop en Granadero Baigorria; Celulosa, Porcelana Verbano y Electroclor en Capitán Bermúdez; Fábrica Militar y Sulfacid en Fray Luis Beltrán; Cerámica San Lorenzo y Destilería YPF en San Lorenzo; Indo y toda la actividad de las nuevas terminales en Puerto General San Martín; más la presencia de los talleres ferroviarios y el personal de la Junta Nacional de Granos. Y todavía quedaban por instalarse firmas como Duperial, en San Lorenzo, PASA y Dow en Puerto General San Martín...*"
>
> (Del Frade, Carlos, *Santa Fue, Una provincia robada*, Editorial Ciudad Gótica, Rosario, agosto 2003)

Si a esta acertada reseña le agregáramos que el frigorífico Swift, con su enorme peso económico y político, ya estaba instalado en Rosario, concluiríamos en que la supremacía de las industrias extranjeras en la región

era evidente. Este proceso terminaría de consolidarse con las privatizaciones de las empresas estatales, y particularmente de los puertos, ya que, teniendo en cuenta las exportaciones de los últimos años y la capacidad de almacenaje y el ritmo de carga, las multinacionales Cargill, Bunge y Dreyfus –ubicadas en el Gran Rosario– son actualmente las terminales más importantes de Argentina.

Estas nuevas industrias le imprimieron a la zona un dinamismo que contrastaba con el panorama de estancamiento de las empresas, fundamentalmente nacionales, que estaban instaladas en las urbes.

En Rosario, el conjunto de establecimientos chicos y medianos que referenciaba Del Frade, producían para el mercado interno, en particular para el ya tradicional sector metalmecánico, donde la presencia de las carroceras y las fábricas de maquinarias para el agro era importante. Por ejemplo, la planta de aros de pistón Perfect Circle, abastecía el 65% del consumo total de aros de fabricación nacional.

En Rosario la industria metalmecánica y la alimenticia, ambas vinculadas al mercado interno, eran las más significativas. En la industria metalúrgica, con fuerte presencia en calle Ovidio Lagos, predominaban los pequeños establecimientos que representaban el 72% del total; en cambio los medianos, significaban el 17%; y los intermedios y grandes el 7,5 y 3,5% respectivamente. La mayoría de la industria metalúrgica estaba constituida por pequeños talleres artesanales, que eran atendidos por sus dueños y que asalariaban a lo sumo tres obreros; había una minoría de establecimientos que empleaban a más de 50 operarios; y sólo un puñado de grandes fábricas ocupaba una cantidad significativa de trabajadores.

Si bien la industria en general, especialmente en algunos rubros como alimentación, bebidas, metalmecánica, textil y de confecciones, era una gran proveedora de empleo, las grandes empresas extranjeras de la región, que disponían de tecnología y mano de obra calificada, no ocupaban mucha fuerza de trabajo.

Al sur del Gran Rosario, Villa Constitución y San Nicolás conformaban un importante polo siderúrgico. El Censo de 1974 mostraba que las industrias de esa zona habían crecido considerablemente. Entre 1964 y 1974, en el sector se crearon 10.000 nuevos puestos de trabajo.

SUBLEVACIONES, PUEBLADAS Y CURAS REBELDES

Azules y Colorados

El derrocamiento de Frondizi, ocurrido el 29 de marzo de 1962, no frenó el proceso de luchas obreras y populares. Durante ese período, se generalizaron las ocupaciones de fábricas enfrentando la política del gobierno del Dr. Guido, cuyo ministro de Economía, Federico Pinedo, había liberado el mercado cambiario aplicando un tratamiento de "shock". En un solo día, el aún hoy recordado 10 de abril de 1962, el dólar saltó de 82 a 150 pesos. Poco tiempo después, el 20 de abril, tras el levantamiento del general Rauch, renunció Pinedo y asumió la cartera de Economía Álvaro Alsogaray, quien ejecutó una política de "estabilización" que provocó una caída generalizada del poder adquisitivo de los salarios, además de la pérdida de innumerables puestos de trabajo.

La dirección de la CGT, en un clima de creciente inestabilidad social, se vio obligada a declarar una huelga general en mayo y otra en agosto. Ambas medidas paralizaron el país durante 48 horas y el gobierno respondió cancelando la personería gremial de varios sindicatos e interviniendo otros. De esta forma comenzó un período de persecuciones contra los militantes sindicales que tuvo su pico máximo el 23 de agosto de 1962, cuando fue desaparecido el obrero metalúrgico Felipe Vallese.

En este contexto social, en la cúspide militar se producirían los forcejeos que culminarían con el enfrentamiento armado entre azules y colorados, que no fue otra cosa que la disputa entre distintos sectores de poder. Mientras que la dirección del bando colorado era afín al sector más tradicional de la oligarquía, que tenía sólidas relaciones con el imperialismo británico, los azules, estaban vinculados a otros sectores de la oligarquía, al desarrollismo y a las potencias que disputaban con los ingleses el control de nuestro país.

Los azules, se autodenominaban "modernistas" y proponían un neoliberalismo "eficientizador". Políticamente alentaban la integración del

peronismo por fuera del liderazgo de Perón, fomentando el neoperonismo y desarrollando fluidos contactos con el sindicalismo. Los colorados, por su parte, seguían aferrados al liberalismo tradicional.

El 20 de abril de 1962, como resultado del primer enfrentamiento armado, el general azul Enrique Rauch desplazó al general Poggi de la comandancia del Ejército. El 11 de agosto de ese año, bajo el mando del general Toranzo Montero, los colorados contraatacaron y ubicaron al general Labayrú como Jefe del Estado Mayor.

El 23 de septiembre, y luego de dos días de duros enfrentamientos armados, los azules, bajo la dirección del general Juan Carlos Onganía, derrotaron totalmente al sector colorado. Tras la victoria, lograron imponer en el gobierno títere de Guido, los postulados expresados en el comunicado número 150 de Campo de Mayo, escrito por el periodista Mariano Grondona.

Mientras esto sucedía en Buenos Aires; en Rosario, el 21 de septiembre, el coronel Roberto Fonseca encabezaba un levantamiento contra las autoridades del II Cuerpo de Ejército y tomaba el Regimiento 11, que estaba a cargo del coronel Carlos Luis Folkland. Fonseca instaló el cuartel general en calle 27 de Febrero al 2400.

Con el objetivo de reprimir la sublevación, el día 22, en horas del mediodía, arribaron a la ciudad tropas provenientes del norte provincial al mando del coronel Tisado. Tras horas de extrema tensión, se acordó un alto el fuego hasta el día siguiente. El triunfo en el ámbito nacional del sector azul encabezado por Juan Carlos Onganía, evitó los enfrentamientos locales. Sin embargo, con posterioridad habría nuevos levantamientos militares de sectores colorados de la Marina y la Aeronáutica, como así también enfrentamientos –producto de la disputa interimperialista– entre distintas fracciones de los azules.

El aluvión de votos en blanco condicionó a Illia

En este convulsionado marco, con el peronismo proscrito, el 7 de julio de 1963 se realizaron las elecciones que llevaron a los radicales al gobierno. Arturo Illia, representante del intransigente sabbatinismo cordobés, asumió la presidencia de la Nación.

En la provincia de Santa Fe también se impuso el radicalismo. Aldo Tessio y Eugenio Malaponte fueron ungidos gobernador y vicegobernador respectivamente. En la ciudad de Rosario se repetían los guarismos provinciales y el radical Rodolfo Bercovich fue consagrado intendente. **Sin embargo, a nivel provincial se había impuesto el voto en blanco.**

Pese a su debilidad, dado que asumió con el 25,15% de los votos válidos del padrón electoral, Illia tomó algunas medidas antiimperialistas y contra el latifundio. El nuevo gobierno anuló los contratos petroleros de Frondizi e impulsó reformas como, por ejemplo, las leyes de "Medicamentos" y de "Arrendamiento impuesto a las tierras ociosas de los latifundios", tratando de limitar el poder económico de los monopolios y los terratenientes.

Paralelamente, una parte importante de la sociedad protagonizó importantes movilizaciones, tanto reivindicativas como políticas. En ese período convergieron en la lucha tres sectores fundamentales: los trabajadores organizados, el movimiento estudiantil y los campesinos pobres y medios.

La CGT, encabezada por el dirigente peronista José Alonso, lanzó un plan de lucha que contemplaba una serie de tomas de fábricas simultáneas en todo el país. En el ámbito de la nación, se ocuparon 11.000 plantas con la participación de cuatro millones de obreros; en tanto en Rosario y el Gran Rosario, durante el mes de junio, se tomaron cientos de establecimientos con permanencia de los trabajadores en los mismos. La dimensión política del plan de lucha puso de manifiesto la fragilidad del gobierno radical y, a la vez, la enorme gravitación que iban adquiriendo los sindicatos. El gobierno radical, como sucedió en otros momentos de la historia, apeló a la represión asesinando a los obreros metalúrgicos Mussi, Retamar y Méndez.

Simultáneamente, los estudiantes protagonizaron multitudinarias movilizaciones, como la marcha de solidaridad contra el envío de tropas a Santo Domingo y repudiando la intervención estadounidense en ese país.

El movimiento de protesta también se extendió al campo. En Tucumán, la UCIT (campesinos cañeros) y la FOTIA (obreros del azúcar), firmaron un pacto para enfrentar a la oligarquía de los ingenios azucareros. Como consecuencia de este acercamiento obrero-campesino, la CGT planteó en su programa la necesidad de implementar en el país una Reforma Agraria, acordando con Federación Agraria Argentina y otras organizaciones gremiales del campo luchar por imponer esta medida.

Fue así como el vandorismo, preocupado por el curso de los acontecimientos, cerró un acuerdo con el sector sindical del PC (integraba la dirección de la central obrera) para expulsar de la Secretaría General de la organización gremial al dirigente peronista José Alonso y reemplazarlo por el participacionista Fernando Donaires.

Finalmente, el 28 de junio de 1966, buscando poner fin a esta peligrosa confluencia de las luchas y, a la vez, destituir a un presidente vacilante que no garantizaba el predominio de los intereses de la oligarquía y el imperialismo, el general Juan Carlos Onganía derrocó al gobierno radical instaurando la autodenominada "Revolución Argentina". Los sectores pronorteamericanos y proeuropeos lograron hegemonizar el golpe militar, del que también participó el lanussismo, la corriente militar que junto al sector industrialista de Gelbard y a importantes contingentes de la oligarquía, asoció comercial y políticamente a nuestro país con la Unión Soviética durante la década del '70.

Onganía: un gobierno "todopoderoso"

Entre el 16 y 18 de septiembre de 1969, Rosario fue escenario de un estallido popular de características desconocidas en la historia de la ciu-

dad: el Rosariazo. Esta gigantesca pueblada, junto al Cordobazo, el Correntinazo y otros sucesos similares que ocurrieron en distintos centros urbanos del interior del país, acabaron con los sueños de Juan Carlos Onganía de estabilizar por treinta años un gobierno despótico.

La dictadura surgida del golpe militar de junio de 1966, en el ámbito de la nación, desató la represión del movimiento obrero y popular e implantó un plan económico de estabilización –de tipo ortodoxo y monetarista– confiado a Krieger Vasena, bajo el control del FMI.

El plan apuntó a descargar sobre el pueblo todo el peso de la crisis coyuntural, ya que, luego de una gran devaluación, se congelaron los salarios y los tipos de cambio. Si bien se obtuvo un éxito transitorio contra la inflación, el mismo se logró a costa de enormes sacrificios del pueblo argentino, del agravamiento de la dependencia del imperialismo y de la profundización de la crisis en el campo, que se expresó en el desalojo de miles de chacareros de sus tierras.

Entre las fuerzas del campo popular, durante los años previos a las puebladas del '69, se abrió un rico debate centrado en si era posible o no desarrollar la lucha antidictatorial.

Por un lado se sostenía que se había entrado en un período prolongado de reflujo en las luchas del pueblo argentino, por lo que no había condiciones para enfrentar al gobierno de facto. Era preciso entonces "*desensillar hasta que aclare*", en espera de algún tipo de apertura –un golpe de estado "populista" o "democrático"– que permitiera negociar alguna salida electoral. Esta línea de conciliación con el gobierno de facto, además de recibir el respaldo de sectores peronistas, también era sostenida por una parte de la izquierda.

Otros sectores de izquierda, también ganados por la teoría del reflujo, apuntaron a la organización de una futura guerra popular basada en un foco guerrillero, y dejaron de lado la posibilidad de trabajar para fomentar una salida sobre la base del estallido popular.

Unos años antes, este mismo camino había sido recorrido por sectores de las "formaciones clandestinas" o la llamada línea "dura" del peronismo, que sostenían que en el movimiento obrero y popular no había condiciones para enfrentar al plan Conintes de Frondizi, y optaron por el establecimiento del primer foco de guerrilla rural que conoció nuestro país: los "Uturuncos".

En el otro extremo, otras fuerzas de izquierda integrantes de lo que luego se llamó la "nueva izquierda", a partir de visualizar correctamente el enorme odio popular que generaba la política de la dictadura, planteaban que era preciso trabajar en procura de una pueblada que permitiera una salida revolucionaria al ciclo dictatorial.

Políticamente se vivía un momento complejo, ya que había sido derrotada la huelga ferroviaria y portuaria, dividida la CGT y, como ya señalamos, miles de campesinos habían sido expulsados de sus chacras.

Tanto en Tucumán como en el norte santafesino fueron cerrados va-

rios ingenios azucareros y, a la vez, se reprimía violentamente a los trabajadores y los campesinos perjudicados por los cierres. Estaban intervenidas las universidades, proscritos los partidos políticos y vigente la retrógrada ley anticomunista.

La dictadura de Onganía parecía omnipotente. A casi tres años del golpe de estado de 1966, se había instalado la sensación de que en Argentina habría un gobierno dictatorial durante décadas.

El período previo al Rosariazo

Pero todo cambió de golpe. En abril estalló la pueblada de Villa Ocampo en el norte santafesino y, en una manifestación estudiantil organizada por la Federación Universitaria del Nordeste, el 15 de mayo de 1969 caía asesinado el estudiante Juan José Cabral. Inmediatamente, gigantescas movilizaciones antidictatoriales conmovieron al país y millones de argentinos se incorporaron a la lucha política y social.

Según Juan Echani, en esos años se habían acumulado varios factores que coadyuvaron para que en Rosario se viviera una situación explosiva, a saber:

1) Junto al congelamiento salarial, en distintas empresas de la zona se venía produciendo una oleada de despidos y suspensiones, que afectaba fundamentalmente a los trabajadores de la industria metalmecánica vinculada al mercado interno. A fines de abril un Congreso de Delegados de la UOM de Rosario impuso medidas contra los despidos y suspensiones.
2) A nivel nacional había reaparecido un rebrote inflacionario con un importante incremento en los precios de los combustibles, en las tarifas ferroviarias, en el transporte urbano y en el gas domiciliario, poniendo al desnudo que la estabilidad estaba basada en el ajuste de los sectores populares.
3) Se registraba en la región un crecimiento explosivo de las villas de emergencia. Debido a la crisis agraria, miles de familias de chacareros pobres y de obreros rurales, fundamentalmente del nordeste y del interior santafesino, fueron expulsadas de sus tierras. Mientras el crecimiento poblacional en las villas rosarinas, en el período 1964-1967, fue de 4.200 personas, entre 1967 y 1969 el incremento ascendió a 34.000.
4) Debido al desborde de los arroyos, a principios de 1969 se produjeron en Rosario grandes inundaciones, que afectaron a la población de algunas zonas periféricas humildes. La reiteración del fenómeno puso de relieve la negligencia y el desinterés de los gobernantes y esto abrió paso a importantes protestas sociales como la de Em-

palme Graneros, uno de los barrios más perjudicados. Por ejemplo a principio de 1969, había en Rosario 2.779 refugiados (entre ellos 1.202 niños) "alojados" en condiciones infrahumanas en vagones ferroviarios y galpones; muchas de estas familias habían perdido casi la totalidad de sus pertenencias.

5) Venía creciendo la protesta del movimiento estudiantil universitario, y se vivía un clima de agitación. A mediados de 1968, la Federación Universitaria Argentina lanzó el primer paro nacional contra la dictadura y los estudiantes de todo el país –entre ellos los de Rosario– comenzaron a ganar las calles por sus reivindicaciones.
6) Por último, la crisis agraria con sus secuelas de desalojos rurales, provocó en el sur santafesino una ola de descontento que se centraba principalmente en el plan económico. Aparecieron reclamos contra los altos impuestos y por aumento del precio sostén de los principales productos agrícolas.

(Echani, Juan; *Algunos apuntes sobre el Rosariazo*, Rosario, octubre de 1994)

La "Marcha del Silencio" y el Rosariazo

El 15 de mayo de 1969, como ya se ha señalado, las fuerzas de seguridad asesinaban en Corrientes al estudiante de abogacía Juan José Cabral. La reacción del movimiento estudiantil de Rosario fue inmediata. Se realizaron asambleas en las distintas facultades y el día sábado 17 los estudiantes ganaron las calles. En horas del mediodía, una manifestación que arrancó del Comedor Universitario fue violentamente reprimida, cayendo herido de muerte el estudiante de Ciencias Económicas Adolfo Ramón Bello. El crimen, ejecutado por un oficial de la policía provincial, conmovió a la mayoría de la población, produciéndose en los días posteriores distintas muestras de repudio de parte de diferentes sectores sociales.

El entierro de Bello en Las Rosas, su ciudad natal, fue conmovedor. Miles de personas acompañaron el dolor familiar y la ceremonia se transformó en un gran acto de repudio a la dictadura.

Al día siguiente, el Comité de Lucha Estudiantil convocó a una marcha popular –Marcha del Silencio– para el miércoles 21. La CGT de los Argentinos confluyó con la convocatoria, a la que también adhirieron entidades profesionales, docentes, vecinales, organizaciones religiosas, empresarios, etc.

Tal como había sido diagramada, la manifestación debía arrancar desde plaza 25 de Mayo, marchar por calle Córdoba y realizar un acto frente a la Galería Melipal donde había caído asesinado Bello, para culminar en la sede de la CGT en calle Córdoba entre Moreno y Balcarce.

La policía provincial ocupó desde muy temprano la plaza 25 de Mayo para impedir la realización de la manifestación. No obstante, miles de per-

sonas habían tomado la decisión de marchar y se produjeron multitudinarias sentadas a lo largo de calle Córdoba. Inmediatamente se desató una represión con gases en todo el centro de Rosario. Los sectores contestatarios resistieron, se generalizaron los combates callejeros y la policía fue desbordada. Con barricadas, bolitas, cables atravesados en las calles, automóviles cruzados en las esquinas, piedras y molotovs los manifestantes resistían las cargas de la policía montada.

Se podría afirmar que, tras la retirada policial, el pueblo se adueñó durante varias horas de la ciudad. Pasadas las tres de la madrugada del día 22, al ser declarada "zona de emergencia", Rosario fue puesta bajo control del II Cuerpo de Ejército.

La revista rosarina *Boom* del 10 de junio de 1969, sintetizando la revuelta estudiantil y popular, titulaba en tapa ***"La batalla de Rosario"***.

Mientras se retiraban hacia la Jefatura, frente a la emisora LT8 que permanecía tomada por los manifestantes, las fuerzas represivas asesinaron Luis Norberto Blanco, un obrero metalúrgico de apenas 16 años que había concurrido a la Marcha del Silencio.

Decenas de miles de personas asistieron al entierro del joven obrero. Nunca en la historia de la ciudad se observó un cortejo fúnebre de tal magnitud. La Avenida Alberdi se vio desbordada por la multitud y los ferroviarios abandonaron los talleres para acompañar los restos de su compañero de clase.

La crónica del diario *La Capital* reflejaba el cuadro conmovedor que brindaba el pueblo rosarino escoltando los restos de Blanco en:

> "*...vehículos de todas las categorías, bicicletas, motos, camiones arracimados de juventud obrera, colegiales, jóvenes obreras, etc.*"
>
> (Diario *La Capital*, Rosario, mayo de 1969)

El 6 de septiembre de 1969, el Cuerpo de Delegados de la Unión Ferroviaria de Rosario convocó a un paro para el día 8, exigiendo el levantamiento de la suspensión impuesta al delegado Mario J. Horat, por negarse a firmar el apercibimiento por su participación en los paros del 23 y 30 de mayo. A partir de esta huelga se desencadenaron los sucesos que culminaron con el Rosariazo.

El paro, que también contó con la adhesión de la Fraternidad, se había extendido rápidamente a otras seccionales de la provincia de Santa Fe, Buenos Aires, Tucumán y Córdoba. La huelga fue declarada ilegal por la Secretaría de Trabajo.

La CGT de Córdoba y la de Rosario convocaron a un cese de actividades de 36 horas, en solidaridad con los trabajadores ferroviarios, a partir de las 10 de la mañana del 16 de septiembre. Ese día, la mayoría del pueblo de Rosario salió a la calle con la certeza de que algo trascendente iba a ocurrir.

El Rosariazo comenzó con concentraciones simultáneas en distintos puntos de la ciudad. A media mañana, desde el desbordado local de la

Fraternidad, los trabajadores ferroviarios ganaron la calle para marchar hacia el local de la CGT. A este contingente se sumaron grupos estudiantiles y los obreros de la fábrica alimenticia Minetti y Cía. S.A.

Ni bien comenzó la represión policial, la protesta se extendió como reguero de pólvora. Fueron quemados decenas de ómnibus urbanos e interurbanos cuyos empresarios se habían negado a parar. Los colectivos incendiados sirvieron de barricadas en todos los puntos estratégicos de la ciudad, incluidos los cruces de vías.

Otros grupos de ferroviarios, junto a los obreros cerveceros y vecinos, se atrincheraron en Avenida Alberdi y José Ingenieros barricando toda la zona. En el norte de la ciudad, los trabajadores de Luz y Fuerza marcharon desde la Usina Sorrento por Bulevar Rondeau hacia el centro, lugar en que fueron reprimidos. Ante el accionar policial, los distintos grupos se dispersaban y reaparecían levantando barricadas en distintas esquinas.

En el centro, otra columna de trabajadores de Luz y Fuerza marchó desde la sede de la empresa Agua y Energía ubicada en Catamarca y Sarmiento; los trescientos manifestantes originales, al llegar a Córdoba y Entre Ríos, se habían transformado en miles. En esa intersección se desató la represión y una hora después los enfrentamientos se habían extendido al conjunto del microcentro, principalmente en los alrededores de la Plaza Sarmiento.

Sobre estas refriegas el diario *La Capital* señalaba:

> *"...Era evidente que la acción de los huelguistas superaba los diques de contención de la policía... Así cuando la policía lograba su eliminación en un lugar, surgía en otro sitio con mayor virulencia..."*
>
> (Diario *La Capital*, Rosario, septiembre de 1969)

En tanto la revista *Panorama* definía los primeros enfrentamientos de la siguiente manera:

> *"...A la 9.30 del martes 19 la epidermis urbana de Rosario no presentaba a la vista de cualquier ocasional visitante ninguna alteración, 30 minutos después la imagen quedaba destruida. Veinte focos insurrectos en los accesos periféricos, seis columnas de obreros y estudiantes en el radio céntrico, en total casi 10.000 personas (según fuentes policiales) incendiaban en sentido literal y literario la ciudad..."*
>
> (Revista *Panorama*, Buenos Aires, septiembre de 1969)

Los obreros de la carne marcharon desde el sur de la ciudad y fueron reprimidos en su avance por la calle San Martín, entablándose combates con las fuerzas de seguridad. Los manifestantes se dispersaban y volvían a agruparse, una táctica que les permitía avanzar con dificultades pero sin detenerse.

Desde el Cristo Redentor partió una multitudinaria columna, integrada por trabajadores metalúrgicos del cordón industrial de Ovidio Lagos y estudiantes universitarios, que avanzó por Avenida Pellegrini e ingresó al

macrocentro por calle Maipú. El grueso de los manifestantes, luego de varias refriegas, logró acceder al microcentro participando de los combates que allí se desarrollaban.

Los obreros portuarios, que habían iniciado una movilización desde la intersección de 27 de Febrero y el río, fueron reprimidos a las pocas cuadras por la policía provincial, mientras los obreros y empleados de Obras Sanitarias resistían la embestida de la policía montada en la esquina de Italia e Ituzaingó.

Los estudiantes universitarios de la Facultad de Ingeniería cubrieron de barricadas la Avenida Pellegrini en el tramo que va desde esa Facultad hasta la calle Corrientes.

La movilización en los barrios también fue muy importante. Los vecinos de Empalme Graneros fueron violentamente reprimidos en su intento de marchar hacia el centro de la ciudad; en respuesta, incendiaron un convoy de once vagones procedente del Chaco y con destino a Retiro. Según la crónica periodística, la formación ferroviaria:

> "*...fue abordada por un grupo de manifestantes, entre los que había muchos jóvenes y mujeres...*"
>
> (Diario *La Capital*, Rosario, septiembre de 1969)

En el amanecer del día 17, tras una noche tensa en la que la policía desapareció de las calles y prácticamente todos los barrios periféricos permanecieron controlados por vecinos organizados, las fuerzas represivas cerraron por completo el microcentro y el accionar de los manifestantes se trasladó a otros puntos de la ciudad.

En el segundo día volvieron a producirse serios enfrentamientos en Empalme Graneros, mientras que en la zona oeste los manifestantes incendiaron la estación de ferrocarril Rosario Oeste, ubicada en Paraná y 3 de Febrero, construyeron barricadas en varias esquinas y se apoderaron de 100.000 litros de combustible. Hechos similares sucedieron en el sur y el norte de la ciudad. En Córdoba y Provincias Unidas fue destruida una filial del Citibank.

Al tercer día, y a pesar de que el paro general había concluido, se produjeron choques con la policía en distintos barrios, siendo los más violentos los que tuvieron lugar en Empalme Graneros y Sorrento.

La intervención del Ejército se produjo en las últimas horas del segundo día. El II Cuerpo dispuso "*abrir fuego sin aviso previo ante cualquier desmán*". Según la información oficial, para garantizar la seguridad ingresó a la ciudad una Agrupación de Combate compuesta por 2.000 efectivos al mando del coronel Leopoldo Fortunato Galtieri; según la revista *Panorama* del 7 de octubre de 1969, "*los efectivos arribados fueron 5.000*".

La provincia de Santa Fe, a lo largo de su historia y tal como se ha analizado, fue escenario de históricas protestas como los levantamientos armados radicales de 1893, el Grito de Alcorta, las históricas huelgas de La Forestal, la

pueblada del 17 de octubre o la resistencia peronista a la autodenominada Revolución Libertadora. Pero no cabe duda de que el estallido popular que pasó a la historia con el nombre de ***Rosariazo*** fue el más trascendente.

Como sostiene Juan Echani, el Rosariazo:

> "*...en concordancia con el Cordobazo y otros sucesos similares que ocurrieron en distintos centros del interior del país... hicieron crujir los cimientos, las instituciones y los modos de pensar en la sociedad argentina...*"
>
> (Echani, Juan, *Op. Cit.*)

El Concilio Vaticano II y los curas tercermundistas

La Iglesia Católica no fue ajena a los cambios políticos y sociales que se produjeron en el mundo en la década del '60 (la Revolución Cultural China, la Revolución Cubana, el Mayo Francés, la Primavera de Praga, la resistencia del pueblo de Vietnam a la agresión yanqui, etc.). El Concilio Vaticano II, que se desarrolló entre los años 1963 y 1965 (abierto por Juan XXIII y cerrado por Pablo VI), actualizó las posiciones de la Iglesia en relación al "mundo actual" (Constitución "*Gaudium et Spes*") y sobre cuestiones vinculadas a la liturgia, la libertad religiosa, la educación, la vida sacerdotal, etc.

Los 16 textos elaborados y promulgados en el Concilio Vaticano II, fueron la base doctrinal sobre la que se apoyó la Iglesia post-conciliar. La implementación de las novedades comenzó a realizarse, no sin conflictos, con una gran resistencia de sectores tradicionalistas que se aferraban a una Iglesia cerrada sobre sí misma y se proclamaban poseedores de una verdad cristalizada en el tiempo. Por el contrario, un gran número de laicos, sacerdotes y obispos, se manifestaron a favor de una implementación inmediata de los cambios que proponía el Concilio, renovando toda la vida eclesial y abriéndose al diálogo y a la acción común con diversos sectores de la sociedad.

En mayo de 1966, el Episcopado Argentino emitió una declaración Pastoral titulada *"La Iglesia en el período post-conciliar"* convocando a una renovación; sin embargo, curiosamente, el documento no contenía ni una sola referencia a la realidad histórica argentina, una situación que, en la práctica, contradecía el espíritu del Concilio en el sentido de promover una nueva relación entre la Iglesia y el mundo.

El 15 de agosto de 1967 se conoció el *"Manifiesto de los Obispos del Tercer Mundo"*. El documento llegó a la Argentina a través de monseñor Devoto, obispo de Goya, quien se lo hizo conocer al sacerdote Miguel Ramondetti. El Manifiesto fue traducido del francés y se distribuyó rápidamente a unos 100 sacerdotes, quienes empezaron a enviar cartas y comentarios con una intensidad tal, que abonó la idea de realizar una adhesión pública al Mensaje de los 18 Obispos. Se envió una nota al obispo franciscano brasileño, Dom Helder Cámara, y a los otros 17 obispos, y a cada sacerdote firmante se le remitió la lista de todos cuantos habían adherido hasta ese momento.

Algunos medios de prensa hablaron entonces de los "*Sacerdotes del Tercer Mundo*", nombre que fue cambiado por los mismos curas en 1970 por "*Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo*" (MSTM).

Los días 1 y 2 de mayo, luego de una intensa tarea de promoción llevada a cabo durante los primeros meses de 1968, el MSTM tuvo su Primer Encuentro Nacional en Córdoba, donde estableció su estructura federal y movimientista, elaborando un documento para ser remitido a Medellín (al Papa y al Episcopado Latinoamericanos), donde consignaban:

> "*...América Latina, desde hace siglos, es un continente de violencia. Se trata de la violencia que una minoría de privilegiados, desde la época de la Colonia, practica contra la mayoría inmensa de un pueblo explotado. Es la violencia del hambre, del desamparo y del subdesarrollo. La violencia de la persecución, de la opresión y de la ignorancia. La violencia de la prostitución organizada, de la esclavitud legal, pero efectiva, de la discriminación social, intelectual o económica... Llamamos a esto 'violencia', porque no se trata de la consecuencia fatal e inevitable de un problema técnicamente insoluble, sino del fruto injusto de una situación voluntariamente sostenida...*"
>
> (Citado por Politi, Sebastián, *en "Teología del Pueblo" en Nuevo Mundo, revista de teología latinoamericana*, Ed. Guadalupe, Buenos Aires, 1992)

Más adelante, el documento, que contó con la adhesión de 370 sacerdotes de Argentina y de 562 de Brasil, Perú, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Panamá, Puerto Rico, Nicaragua, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, solicitaba a los obispos reunidos en Medellín un acercamiento de los lineamientos del Concilio a la realidad latinoamericana, con el fin de lograr:

> "*...Que en la consideración del problema de la violencia en América Latina s*e evite por todos los medios equiparar o confundir la violencia injusta *de los opresores que sostienen este 'nefasto sistema'* con la justa violencia *de los oprimidos, que se ven obligados a recurrir a ella para lograr su liberación...*
> *...Que se asegure a los cristianos* un amplio margen de libertad en la elección de los medios *que ellos crean más aptos para obtener esa liberación...*"
>
> (Politi, Sebastián, *Op. Cit*. -destacado en el original)

El MSTM creó el boletín "*Enlace*" destinado al interior del movimiento como "signo de encuentro" e instrumento de acción y revisión "hacia adentro" de las actividades realizadas. Hacia afuera, la presencia fue marcada por acciones de denuncias y actos públicos, en los que comenzaron a destacarse algunos sacerdotes como Ramondetti (primer secretario general), Mujica, Carbone, Bresci, Gera, Vernazza y Concatti.

En 1968, los curas tercermundistas enfrentaron públicamente al presidente de facto, Juan Carlos Onganía, por su plan de erradicación de las villas de Buenos Aires; lo hicieron mediante una carta firmada por 68 sacerdotes que tenían relación directa con los villeros. Algunos de ellos, como Carlos Mujica, vivían en esos precarios asentamientos. En diciembre del mismo año, los miembros del MSTM lograron un gran impacto público con tres jornadas de ayuno (como gesto de penitencia y protesta), integrando a un grupo de laicos y a personas de otras iglesias y suprimiendo en algunos templos la misa de Nochebuena. Declaraban que la Navidad:

> *"... No se trata de un mero recuerdo de un hecho del pasado: la historia se repite. Cristo nace hoy en miles de hombres. Como sucedió en Belén hace veinte siglos, también hoy es rechazado violentamente por una sociedad pensada y construida para beneficiar a una minoría de privilegiados..."*
> (Bresci, D. y Gera, L., *Sacerdotes para el Tercer Mundo. Crónica, documentos, reflexión*. Publicaciones del MSTM, Buenos Aires, 1972)

El Movimiento no permaneció ajeno a la realidad política nacional, ya sea solidarizándose activamente contra la represión de los estudiantes universitarios o de los obreros de la zafra de Tucumán, u organizando, junto a otros sectores de la población, la histórica pueblada de Villa Ocampo, en el norte de Santa Fe.

A lo largo de su existencia, entre 1967 y 1973, el MSTM realizó varios encuentros nacionales en los que se abordaron temas como la lucha armada, el análisis de la teoría marxista, la adhesión al peronismo, la organización popular y el celibato sacerdotal.

Conflictos internos y externos del MSTM

Desde un principio, como ha sucedido en las últimas décadas en el campo popular argentino, en el MSTM coexistieron dos corrientes: una ligada a la experiencia del peronismo, y otra que, con diversos matices, adhería a las posiciones marxistas.

Las dos corrientes evitaban someter su acción pastoral –recordemos que se trataba de sacerdotes– a disciplinas partidarias o de grupos políticos, pero también vivían a diario su compromiso con los oprimidos y enfrentaban a las instituciones (Iglesia, sindicatos, "fuerzas vivas" y Fuerzas Armadas) cuando no encontraban coincidencia entre las declaraciones de los dirigentes y la realidad de las acciones institucionales, ya fueran éstas religiosas, sindicales o políticas.

La corriente que postulaba la adhesión al peronismo contaba con figuras como Carlos Mujica quien, con relación a la vivencia popular, expresó claramente que:

> *"...ya se fue gestando durante el gobierno de Perón, en el sentido que la clase trabajadora empezó a sentirse gente, empezó a sentirse protagonista y esto, con la incorporación además del estudiantado y de otros*

sectores al peronismo, produjo la evolución que lleva a la profundización del peronismo. La reivindicación asciende desde la tercera posición, desde un capitalismo justo por decirlo así, a un socialismo nacional..."
(Mujica, Carlos, *Peronismo y Cristianismo*, Ed. Merlín, Buenos Aires, 1973)

Asimismo, Rolando Concatti, referente del grupo del MSTM de Mendoza, lo expresaba en términos parecidos:

"*La decisión de valorar y de algún modo de asumir el peronismo nace de la voluntad de acabar con tantos 'preámbulos' y dilaciones de nuestro compromiso político. Se trata de discernir "hoy y para hoy" el camino por el que pasa –no en términos ideales sino en términos reales– el proceso y el futuro revolucionario, interrogando y valorando al máximo a las masas trabajadoras, sus certidumbres, sus fidelidades.*
Después de tanto hablar del pueblo se trata esta vez de escucharlo..."
(Concatti, Rolando, *Nuestra opción por el Peronismo*, Publicaciones del MSTM, Mendoza, 1972)

EL MSTM fue un movimiento singular dentro de la iglesia argentina: llevó adelante una línea de compromiso con los pobres y planteó la transformación de la sociedad a la luz de los valores evangélicos. Practicó un método de análisis de la realidad denunciando las injusticias sociales y trató de acercar a la Iglesia a los humildes, especialmente a través de la acción de los "curas villeros" como Carlos Mujica.

El MSTM, a pesar de que se trató de un movimiento que no contaba con apoyo económico, ni del Vaticano, ni de órdenes o instituciones religiosas, llegó a convocar al diez por ciento de los sacerdotes argentinos. Unos pocos obispos, como Zazpe (Santa Fe), Brasca, Angelelli (La Rioja) y Devoto (Goya, Corrientes) les dieron su apoyo, y aunque nunca se incorporaron orgánicamente al movimiento, sus pares del Episcopado jamás se lo perdonaron.

De las críticas más importantes que ha recibido el movimiento pueden señalarse –y es materia opinable– una tendencia a lo contestatario y una falta de definición de la relación entre la acción pastoral y la acción política.

El MSTM se desenvolvió en el marco turbulento de la violencia política, viéndose urgido por la misión sacerdotal, la pertenencia a la institución eclesiástica, el compromiso contra la opresión de las clases explotadas, la discusión entre marxismo y peronismo y las propias vacilaciones de sus miembros con respecto al celibato sacerdotal. Éste, tal vez haya sido el intento histórico más valioso que ha practicado un sector de la Iglesia, tratando de vincular al cristianismo con los intereses de las mayorías populares.

Renuncias en Rosario y represión en Cañada de Gómez

En la ciudad de Rosario se desarrolló un importante movimiento, ligado al MSTM, que convocó a un buen número de sacerdotes con trabajo

social, especialmente en las villas. A poco de conocidas las conclusiones del Concilio Vaticano II y de la Conferencia de Medellín (donde se destacó la participación de Mons. Eduardo Pironio, obispo de Mar del Plata), los sacerdotes manifestaron en una reunión con el arzobispo Guillermo Bolatti, la necesidad de implementar los cambios que también sus comunidades les reclamaban.

El arzobispo no sólo evitó acceder a los pedidos, sino que, a través de un grupo estrechamente ligado a él y al pensamiento tradicionalista, hizo pública la disputa con el MSTM en el diario *La Capital*.

Con el transcurso del tiempo, la relación entre el obispo y los sacerdotes contestatarios se fue deteriorando aún más, y la disputa alcanzó su punto de mayor tensión con la detención de un importante número de curas, frente a la catedral de la ciudad, mientras pedían por la libertad de los presos políticos. Los eclesiásticos disidentes estuvieron detenidos en el Cuartel de Bomberos de Rosario durante tres días.

Simultáneamente, la decisión del arzobispo Bolatti de designar un nuevo sacerdote en Cañada de Gómez, fue resistida por una parte importante de los habitantes del lugar, que ocuparon la parroquia en defensa del padre Armando Amiratti. Entre junio y julio de 1969, se produjeron los hechos que terminaron con la ocupación de la ciudad por parte de 120 agentes de la policía provincial y del II Cuerpo de Ejército, con un saldo de 4 heridos de bala, 29 detenidos y varios contusos. Los feligreses fueron reprimidos con gases lacrimógenos y en la ciudad aparecieron carteles y pintadas que decían *"Renuncie señor arzobispo. Una iglesia nueva, una iglesia de los pobres"*.

Al poco tiempo, el cura Amiratti partía hacia El Chamical donde se desempeñó como colaborador de monseñor Enrique Angelelli, a quien le dio la extremaunción cuando fue asesinado durante la dictadura militar.

Una parte de los religiosos comprometidos con las posiciones contestatarias de la Iglesia fueron asesinados, como sucedió con el padre Mujica, monseñor Angelelli y otros; algunos continuaron en la Iglesia, batallando desde lugares marginales pero defendiendo sus opiniones; y finalmente, una importante cantidad de curas renunció a la institución religiosa para incorporarse a la vida política y social, como sucedió con los treinta sacerdotes santafesinos que dejaron de lado los hábitos con el objetivo de luchar junto al pueblo argentino.

General Obligado: una historia de pobreza y luchas

Prácticamente todos los curas de la diócesis de Reconquista adhirieron al documento de Helder Cámara, publicado en París en 1967, aunque con posterioridad, y ya desatado el conflicto social de Villa Ocampo, ese número se redujo considerablemente. Los sacerdotes Rafael Yacuzzi (Villa Ana), Jorge Mussín, Héctor Beltrán (La Gallareta), Francisco Paco D' Alteroche (Paraje 29), José Clavel (Villa Ocampo), Esteban de Quirini (Vera), además de varios

curas y religiosos del monte identificados con Arturo Paoli, se incorporaron al MSTM. Hombres de la Iglesia como el padre Armando Yacuzzi, de Reconquista, o el cura Andrés Lanson de Villa Ocampo expresaban en la labor pastoral su compromiso social. *"Liberar a los oprimidos"*, un documento elaborado por Lanzón, sintetizaba en parte el pensamiento de esta corriente.

Ya en 1967, el clero de la diócesis se manifestaba públicamente denunciando la "falta de trabajo" de la población del monte. Advertían que "*Fábricas, talleres, han cerrado*" y que esto provocará "*el éxodo masivo de la población del monte y del campo a las ciudades*", para terminar preguntándose "*¿Hasta cuándo el pueblo tendrá que aguantar esta dolorosa situación?*".

Efectivamente, tal como señalaban los sacerdotes, la situación socioeconómica del norte provincial era de extrema gravedad. A esto habría que agregarle que en el "Plan de Estabilización y Desarrollo" de Krieger Vasena se había definido el cierre de los ingenios azucareros debido a la caída del consumo interno y la acentuada disminución del externo. En este sentido, el desaparecido diario Crónica, de Reconquista, explicaba que para la dictadura:

> "*...la producción actual de 960 mil toneladas, industrializadas en 1966, debe ser disminuida a 750.000 toneladas (...) También se acordó erradicar definitivamente cañaverales hasta una producción de 114.000 toneladas de azúcar, lo cual significará la eliminación de alrededor de 1.300.000 kilos de caña de azúcar*"
>
> (Diario *Crónica* de Reconquista, enero de 1967, citado por Borsatti Raúl, *LA REBELIÓN, historia y protagonistas de la marcha que conmovió a la dictadura de Onganía*, Reconquista, diciembre de 1999)

Las consecuencias de estas medidas dispuestas por el gobierno de facto amenazaban con ser muy graves, si se tiene en cuenta que en la provincia, 5.000 trabajadores de fábricas y 7.000 temporales podían llegar a perder su fuente laboral.

Los primeros cierres de ingenios se produjeron en Tucumán (nueve en total). En el norte de Santa Fe, cuando aún en la zona de Villa Guillermina y La Gallareta la población padecía las consecuencias del cierre de fuentes de trabajo de la industria del tanino, se desencadenaba una nueva ola de despidos. El diario *El Heraldo* resumía la problemática del lugar de la siguiente manera:

> "*...El ingenio Tacuarendí se cierra definitivamente; se han producido despidos en el ingenio Welbers Ltda. (Las Toscas) y en la papelera Villa Ocampo. Se ha obligado a retirarse a numeroso personal en condiciones de jubilarse del ingenio Arno y se ha declarado prescindible a un numeroso grupo de obreros de la Fábrica de Vagones de Villa Guillermina. En La Gallareta quedan cesantes 60 obreros. En total se estiman en 650 los desocupados. En cuanto a los cultivos, especialmente caña de azúcar*

y algodón se han reducido notablemente y el número de desocupados en estas actividades llega a unas 800 personas..."

(Diario *El Heraldo*, Vera, marzo de 1968, citado por Borsatti Raúl, Op. Cit.)

Durante el resto del año la situación tendió a empeorar. El primer acto, llamado "Ingenio Tacuarendí", terminó de manera exitosa para el gobierno. El siguiente capítulo tenía como título "Ingenio Arno", fundado en 1939 y del que vivían aproximadamente 65.000 personas. **En este caso la historia sería distinta, ya que el intento de cierre del establecimiento, junto a la crítica situación del resto de las actividades económicas de la zona, daría lugar a una de las pueblades más importantes de la historia provincial.**

El ingenio Arno está ubicado en Villa Ocampo, una localidad que desde su fundación ha luchado denodadamente por su supervivencia. Después de que las expediciones del General Obligado derrotaran a los mocovíes en el Chaco Santafesino, en la zona donde unos años antes Mariano Cabal había construido su feudo, Manuel Ocampo Samanés (cónsul peruano en Argentina) compraba en 1875, a un valor irrisorio, 40.000 hectáreas de tierras y fundaba allí Villa Ocampo.

Una década después, entraban en producción los ingenios Tacuarendí y Manolo. Hacia fines de siglo, en Villa Ocampo, se ponía en funcionamiento un gran aserradero donde se fabricaban durmientes de quebracho para ferrocarril y, además, varias destilerías de alcohol. Muy cerca de allí, sobre el Paraná Miní y sobre el propio Río Paraná, se construyeron dos puertos que, en realidad ya venían funcionando irregularmente, dado que desde allí se había abastecido al ejército nacional durante la Guerra del Paraguay. Posteriormente, con la llegada de La Forestal, tanto el aserradero como el ingenio Manolo, se transformaron en parte de los centenares de fábricas de tanino del imperio. En 1939, luego del retiro del monopolio británico, el ex ingenio Manolo volvía a ponerse en movimiento con el nombre de Arno.

La pueblada de Villa Ocampo

A principios de 1969, los habitantes de Villa Ocampo conformaron la Comisión Coordinadora de Acción de Lucha, con el objetivo de dotar de una dirección al movimiento de protesta que se estaba desarrollando y crecía vertiginosamente.

Las movilizaciones fueron numerosas. Para difundir el grave drama social que se vivía, los pobladores se colocaban a la vera de la ruta 11 entregando volantes con el objetivo de interiorizar a los viajeros sobre la caótica situación que padecían.

Las mujeres organizaron una marcha de ollas vacías –para muchos el primer cacerolazo de la historia argentina– con el objetivo de protestar contra la desocupación, mientras que los jóvenes –estudiantes y obreros– iniciaron una huelga de hambre exigiendo el pago de lo adeudado a los trabajadores del

ingenio. El 10 de enero, convocado por la Comisión Coordinadora, se realizó un acto en la plaza central del que participaron casi 5.000 personas.

Todas estas acciones contaban con el respaldo de la CGT de los Argentinos, que a fines de 1968 había realizado un acto en Reconquista con la presencia de muchos dirigentes nacionales, entre los que se destacaba el telefónico Julio Guillán. Por su parte, las fuerzas vivas (sindicatos, chacareros, comerciantes, estudiantes, iglesia, etc.) de Villa Ana, Malabrigo, Romang, Reconquista, Las Toscas, Florencia, La Gallareta, Tartagal, Villa Guillermina y Fortín Olmos se entrevistaron con los distintos sectores afectados por el posible cierre del ingenio, ofreciéndoles su solidaridad.

El semanario católico *Ocampense* expresaba con indignación:

> "*...Villa Ocampo dio su grito de alerta y hoy se debate entre la vida y la muerte su suerte definitiva. Sin embargo sus hombres y mujeres no se resignan a ser un pueblo fantasma más. Los pueblos que no luchan merecen ser esclavos...*"
>
> (Semanario Católico *Ocampense*, Villa Ocampo, 5 de enero de 1969, citado por Borsatti Raúl, *Op. Cit.*)

El viernes 31 de enero, Villa Guillermina se declaró en pie de lucha realizándose una gran concentración en la plaza central, de la que participaron los trabajadores de los obrajes de la zona.

En febrero, la empresa "La Gallareta Sociedad Anónima Industrial, Comercial y Agrícola" comunicaba el cierre definitivo de los talleres de reparaciones de vagones, por no renovarse el contrato con Ferrocarriles Argentinos. La fábrica había comenzado a funcionar a partir de 1963, tras el cierre de la industria de extracto de tanino que explotaba La Forestal. Este anuncio se agregaba al cese definitivo de las actividades de la fábrica de dulces "Porpeca" de Las Toscas, y de la textil "CICLAR" de Reconquista, y a las dificultades de la "Papelera del Norte", de Villa Ocampo, que continuaba sin resolver sus problemas, o a las del frigorífico "Friar", que reclamaba ayuda oficial y, en caso contrario, amenazaba con cerrar sus instalaciones.

En esta coyuntura, la situación social era explosiva y desde la Iglesia, los gremios, la juventud, los comerciantes, los chacareros, los obreros rurales, etc., se organizó una gran marcha que se realizaría el 11 de abril y que partiría desde los pueblos del norte santafesino para culminar en la capital provincial: **"La Marcha del Hambre".**

Raimundo Ongaro llegó el día 10 de abril a Reconquista para llevar la solidaridad de la CGT de los Argentinos, y esa misma noche, desde los obrajes, partieron los trabajadores hacia Villa Ocampo.

Al día siguiente, la ciudad amaneció ocupada por las fuerzas de seguridad. Ni bien se escuchó el tañido de las campanas de la iglesia –era la señal para que los habitantes salieran de sus casas– una multitud se lanzó a las calles ante la asombrada mirada de los agentes del orden. Encabezaba

la manifestación un sacerdote vestido con camisa ombú, la misma que usaban los trabajadores de la época y los "curas obreros". Era un hombre de profunda raigambre en la zona: el padre Rafael Yacuzzi.

Los manifestantes llevaban una gran bandera nacional y al llegar al Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria del Azúcar entonaron el himno nacional, para luego prorrumpir en cánticos contra la dictadura.

En ese instante se abrieron las puertas del sindicato y apareció Raimundo Ongaro junto al resto de los representantes sindicales nacionales, quienes se fundieron en un emotivo abrazo con los dirigentes del lugar, y enseguida dieron comienzo a la marcha. Tras la masiva columna se alinearon los sulkis y las chatas, vehículos en los que se cargaba el agua potable, las ollas, frazadas, carpas y demás vituallas necesarias para la larga marcha. Al frente, junto a la cabeza de la columna y tirado por caballos iba un carro con altoparlantes para alentar y orientar a los manifestantes.

El comercio cerró sus puertas y las campanas del templo anunciaban que, como sostuvo el periodista local Raúl Borsatti: ***"La Marcha del Hambre se había puesto en marcha".***

Al llegar a la ruta 11, las fuerzas de seguridad comandadas por el comisario Bonora le comunicaron al cura Yacuzzi que tenían la orden de las autoridades nacionales de reprimir. Luego de un breve diálogo, las partes acordaron una tregua y una delegación marchó a la ciudad para entrevistarse con el intendente e intentar destrabar la situación. El mandatario les ofreció la renuncia, que fue rechazada por los vecinos que le aclararon que la protesta no era contra él y que sólo querían que se pusiera a la cabeza de la misma. El intendente rechazó la invitación.

En ese momento de los acontecimientos, comenzaron a circular versiones de que en Villa Guillermina –también ocupada militarmente– los manifestantes habían sido detenidos al tratar de ingresar a la ruta, y que la Aeronáutica estaría reforzando con tropas el aparato represivo montado en las dos localidades.

Hacia las 12, y contra la opinión de Ongaro –que sostenía que la correlación de fuerza no era favorable–, los dos mil manifestantes decidieron marchar cantando "*¡A la ruta! ¡A la ruta!*", mientras la policía y los gendarmes aprestaban sus armas. Minutos después se desató la represión con balas disparadas sobre las cabezas de los manifestantes, gases lacrimógenos, bastonazos, sablazos, etc. La gran bandera nacional era perforada por infinidad de disparos de armas de fuego.

Luego del desbande, la multitud se reagrupó en la plaza central de la ciudad y tras debatir si tomaban el ingenio o el Municipio, optaron por este último camino. La gente enardecida por la irracional represión destrozó la mayor parte del edificio, mientras exigía la renuncia del intendente, que se había negado a encabezar la marcha en reclamo de la libertad de los pobladores presos.

Arrinconado por los vecinos, Alcíbades Sambrana elevaba al gobernador su dimisión, reclamando la pacificación y la libertad de los detenidos. Decía el Intendente que por pedido de un:

> "*...Pueblo indignado por severísima represión sin mirar la presencia de madres y niños me colocan en el trance de elevar a usted mi renuncia al cargo. Como medida de buen gobierno para pacificar los espíritus ruego considerar libertad inmediata de todos los detenidos sin ninguna causa...*"
>
> (Citado por Borsatti, Raúl, *Op. Cit.*)

El mandatario municipal leyó en voz alta su renuncia y los presentes estallaron en un emotivo aplauso. Como respuesta, el gobierno provincial enviaba más efectivos al lugar.

Mientras tanto, Ongaro, acompañado por la dirigencia gremial, daba una conferencia de prensa en la iglesia, lo que motivó que, a pesar de la airada protesta del cura Tibaldo, la policía atacara la institución con gases lacrimógenos.

Pasado el mediodía, los disturbios se generalizaron y se trasladaron a otros puntos de la ciudad. En las refriegas fueron heridos los obreros Dellappupa y Rodríguez.

Hacia la tarde, las fuerzas de seguridad comenzaron a retomar el control de la ciudad. Se libraron órdenes de captura contra catorce vecinos considerados responsables de los sucesos. La lista estaba encabezada por el cura Yacuzzi.

La ciudad, al caer la noche, permanecía ocupada por efectivos policiales, Gendarmería, la Guardia Rural y la Aeronáutica que patrullaban las calles e impedían la formación de grupos para evitar que se reorganizara la protesta. Se allanaron decenas de domicilios de obreros y dirigentes sindicales.

La Federación Argentina de Trabajadores de Imprenta declaraba al gremio en estado de alerta en todo el país, denunciando la detención del secretario general de la seccional Santa Fe, Francisco Yacunizzi, y otros dirigentes. A la vez, el comunicado expresaba con preocupación que "*se desconoce el paradero de Raimundo Ongaro, quien habría sido detenido o secuestrado*".

El dirigente gráfico, tras permanecer escondido en la iglesia, salió de allí vestido con la ropa del cura Tibaldo y en el auto del sacerdote. De esa manera logró confundir a la policía (creía que estaba en el sindicato de papeleros) y eludir el cerco de seguridad montado en torno al templo; posteriormente, el dirigente fue ocultado en el baúl de un auto Dodge Polara, propiedad del abogado Rubén Marín, vehículo con el cual fue trasladado a Reconquista, desde donde tomó un ómnibus hacia Buenos Aires.

El cura Yacuzzi, por su parte, tras permanecer tres días refugiado en una casa del lugar, también consiguió escapar. Luego de pasar por Santa Fe llegó a Buenos Aires, y allí realizó una conferencia de prensa en la sede de la CGT, en calle Paseo Colón.

En otras localidades como La Gallareta, Villa Guillermina o Fortín Olmos también habían sido reprimidos los intentos de realizar la "Marcha del Hambre".

La injustificada violencia policial desatada motivó que la mayoría de las fuerzas políticas, gremiales, sociales y estudiantiles de la provincia repudiaran la represión en el norte santafesino.

Vicente Faustino Zaspe, un obispo que siempre respaldó las luchas en reclamo de justicia, hizo sentir su voz crítica. Refiriéndose a la situación que atravesaba la zona norte de la provincia manifestaba que "*Son problemas que postergan o lesionan derechos humanos: trabajar, tener una familia, educar a los hijos, vivir. Los problemas del norte santafesino pertenecen a esa categoría. Su complejidad interna, anula su realidad humana y, solidarizarse con la situación no es rebeldía al orden establecido. Manifestar esa solidaridad no debiera ser un hecho delictivo*". Más adelante justificaba la pueblada afirmando que: "*todo ciudadano debe respetar las disposiciones legales, pero el valor de éstas reside en la justicia de las estructuras y en el intento de remediar con urgencia sus injusticias*".

La magnitud de la marcha y la inmediata solidaridad de las mayorías provinciales tuvieron un rápido efecto. El 12 de abril, el gobernador Vázquez comunicaba que el "gobierno" nacional había dispuesto por medio de dos "leyes" de fecha 10 de abril, la expropiación de todas las acciones de la Compañía Industrial del Norte (ingenio Arno), con la consiguiente caducidad del mandato del directorio y los síndicos de la empresa. Por otra parte, se confería al "gobierno" provincial la tarea de designar interventor y decidir el funcionamiento de la empresa, pudiendo el funcionario solicitar el auxilio de las fuerzas de seguridad para el cumplimiento de su cometido.

En los considerandos de las "leyes" se expresa "*que la sociedad intervenida se encuentra en la imposibilidad de hacer frente a la próxima zafra, con lo cual se crea un grave problema social tanto por el desempleo de los operarios industriales resultantes, como por la situación de los trabajadores y productores agrícolas, pues la caña no podría ser cosechada*".

La provincia designó interventor al mayor de intendencia (RE) Olegario Nazareno Paiz.

Se suspendieron durante un año todos los juicios por deuda contra el ingenio, y las entidades financieras del Estado se comprometieron a dar prioridad a la atención de los requerimientos de la Compañía Industrial del Norte de Santa Fe, para permitir una explotación normal. En el Departamento Provincial de Trabajo, mientras tanto, se conseguía un acuerdo con los sindicatos del sector, mediante el cual el gobierno regularizaría los retrasos salariales.

Mientras esto sucedía en la provincia, en Buenos Aires, Ongaro y Yacuzzi brindaban una conferencia de prensa en la que denunciaban la grave situación que atravesaba el norte provincial. Entre los presentes se encontraban los periodistas Rodolfo Walsh y Juan Carlos Elorrio, de la revista *"Cristianismo y Revolución"*.

En la entrevista que posteriormente concedió a esta publicación, el párroco ocampense sostiene con satisfacción que:

"...La lección fundamental de esta marcha es que el pueblo se da cuenta de que sus reclamos no son atendidos y que sus sufrimientos no se consideran ni en los despachos ni en los planes oficiales. Nuestro pueblo va tomando conciencia también de que para enfrentar a la fuerza hay que ir con otro tipo de fuerzas (...) Cuando nos enteramos de que no hay 500 millones de pesos para resolver el problema del ingenio Arno, pero que hay 400 millones de pesos para que el gobernador se haga una residencia con dos manzanas de parque, pileta de natación y todo lo que eso significa, nos indignamos... Todo esto forma la conciencia de muchas personas que se dan cuenta de lo que está sucediendo y que no están dispuestas que se siga engañando al pueblo (...) Toda esta lucha nos va enseñando quiénes son nuestros compañeros, quiénes nuestros aliados y quiénes son nuestros enemigos..."

(*Cristianismo y Revolución*, mayo de 1969. Citado por Borsatti, Raúl, *Op. Cit.*)

Yacuzzi regresó de manera clandestina a Villa Ana y se refugió en su iglesia. Ese día, el padre Tibaldo –que desconocía el retorno de Yacuzzi– tenía que celebrar una misa pidiendo por el párroco ausente. En el momento de iniciarse la ceremonia apareció el padre Rafael Yacuzzi quien se fundió en un abrazo con Tibaldo, en medio de aplausos, emociones y lágrimas, celebrando la misa en lugar del cura de Villa Ocampo. Al día siguiente, Yacuzzi fue detenido, llevado a declarar a Vera y posteriormente liberado. Luego de la pueblada, no había condiciones políticas para retener en la cárcel al cura contestatario.

Dos semanas después, Rodolfo Walsh, director del periódico "*CGT*", visitaba el norte provincial encontrándose con el padre Rodolfo Yacuzzi en la iglesia de Santa Ana. El párroco recuerda con emoción que el periodista le "*regaló dos libros de su autoría: 'Operación Masacre' y '¿Quién mató a Rosendo?'*". También cuenta que "*escribió el artículo 'El último tren', porque tomó el trencito que iba de Guillermina a Intiyaco*". A partir de este encuentro comenzó a gestarse una gran amistad entre ambos.

Los reclamos sectoriales que motivaron "La Marcha del Hambre" fueron sintetizados en el documento elaborado por representantes de distintas localidades, en el que se sostenía:

"...Que La Gallareta y Villa Guillermina: no cierren sus vagonerías.
Que Villa Ocampo solucione su problema pagando a cañeros y obreros y funcionando de un modo normal su ingenio.
Que Tacuarendí: tenga su fuente de trabajo que reemplace al ingenio cerrado.
Que en la cuña boscosa se entreguen tierras a verdaderos hacheros y no se los desaloje de los campos que ocupan sin el pago de las indemnizaciones que corresponden.
Que Reconquista: tenga las industrias que absorban la desocupación.
Que Tartagal, Intiyaco, Villa Ana, etcétera, dejen de ser pueblos fantasmas...".

(Declaración de la *Junta Coordinadora-Movimientos Populares*, abril de 1969, citado por Borsatti Raúl, *Op. Cit.*)

Luego de la histórica movilización, La Gallareta lograba que el Estado contratara la reparación de 500 vagones. Con posterioridad, los empresarios Gentile, Andreani y Marzetti se hicieron cargo de "La Gallareta SAICA" y, a partir de 1971, comenzó a funcionar una fábrica de acoplados reemplazando a la vagonera. Tras el fracaso de este emprendimiento se puso en funcionamiento una fábrica de postes de cemento (la última actividad industrial registrada). Hoy, las viejas chimeneas de La Gallareta están dormidas.

En Villa Guillermina, y luego del cierre de la vagonera, la fábrica fue tomada por los empleados que lograron que se les abonara el fondo de desempleo. En sus instalaciones funciona hoy una industria de tableros (madera aglomerada).

Villa Ocampo logró que el ingenio Arno –su principal fuente de trabajo– siguiera funcionando, doblegando las intenciones de Onganía.

A pesar de las enormes dificultades por las que debió atravesar, el ingenio permanece aún en actividad. Luego de la convocatoria de acreedores de 1990, Arno pasó a formar parte de la estructura provincial y luego municipal, recibiendo créditos, subsidios y Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Estos fondos asistenciales generalmente pasaban por las cuentas del dos veces intendente de esa localidad y luego senador nacional, Jorge Massat, originando uno de los mayores escándalos de corrupción de la década del '90. Un escándalo que no sólo involucraba directamente al senador Massat, sino que salpicó al entonces gobernador Carlos Reutemann.

En 1990 se produjeron los cierres de la Papelera Villa Ocampo y la destilería.

Desde aquellas huelgas de La Forestal de 1920-1921, ya analizadas, el norte santafesino fue muy difícil de doblegar. De los combates de la década del '20 acaecidos en Guillermina y en la Picada de El Amargo (Villa Ana), pasando por las grandes experiencias de las Ligas Agrarias o La Marcha del Hambre, con más de 10.000 personas movilizadas en distintas localidades, el norte provincial siempre hizo oír su voz, exhibiendo una rica historia de lucha y rebelión.

EL SEGUNDO CICLO PERONISTA Y EL GOLPE DEL '76

Un período de grandes cambios en el poder

Las gigantescas luchas populares, como la pueblada de Villa Ocampo o el Rosariazo, deterioraron a la dictadura de Onganía, obligándola a retroceder.

En este período crecieron distintas expresiones políticas que entendían que el foco guerrillero era el camino más apto para llegar a la revolución. Estas fuerzas concebían a las masas como meros espectadores de los grandes procesos de cambio, las reemplazaban por el accionar de grupos revolucionarios armados, adoptando de esta manera el camino del terrorismo como forma principal de lucha.

Como contrapartida, desde las bases obreras se inició un proceso de democratización sindical nunca visto antes en el país, que dio origen al desarrollo de una importante corriente clasista.

Sin embargo, a pesar de esta inédita experiencia sindical, los trabajadores, sin su referente ideológico natural debido a las distintas claudicaciones del Partido Comunista, y todavía maniatados por las ideas reformistas adquiridas durante el gobierno peronista, no eran una fuerza capaz de encauzar en un sentido revolucionario el amplio disconformismo de la sociedad, expresado en las históricas movilizaciones de 1969. Al no poder plasmarse una salida revolucionaria, la dictadura logró capear el temporal con los recambios posteriores.

Durante esos años, cada paso que daba el vasto movimiento antidictatorial era acompañado por acciones espectaculares del terrorismo pequeño-burgués, que tenía como objetivo dirigir al movimiento de masas. En muchos casos, estas acciones aisladas eran alentadas por sectores de la dictadura para desplazar a sus rivales.

Por ejemplo, el secuestro seguido de muerte del ex "presidente" del gobierno de facto Pedro Eugenio Aramburu, realizado por Montoneros en

1970, aceleró el desplazamiento de Onganía, muy debilitado, por la Junta Militar, integrada por Lanusse, Gnavi y Rey.

El general azul Roberto Marcelo Levingston, representante argentino ante la Junta Interamericana de Defensa, fue impuesto como presidente de la Nación, asumiendo el 18 de junio. Nueve meses después, Alejandro Agustín Lanusse, el hombre fuerte del Ejército, era designado al frente del gobierno dictatorial logrando retener para sí la comandancia de esa fuerza.

Tras estos vaivenes comenzaba a consolidarse en la cúpula del Ejército un proceso de cambios que tendría mucha importancia política en los años siguientes, y que se expresaría en los importantes acuerdos comerciales firmados por la dictadura de Videla y Viola con la Unión Soviética, potencia que en ese momento ya tenía influencia en el país y que luego del golpe militar de 1976 pasaría a ser el principal socio comercial de Argentina.

Hay que tener en cuenta que los cambios operados se vieron favorecidos por el empantanamiento del imperialismo yanqui en Vietnam. Durante ese período, la situación de Estados Unidos tendía a complicarse cada vez más, no sólo en el mundo sino también en Argentina, donde esa criminal potencia era repudiada y odiada por el conjunto del pueblo.

En 1971, con Lanusse en el gobierno, se firmó en Moscú el convenio comercial entre Argentina y la URSS (de características similares al suscrito ese año con la Comunidad Económica Europea), que daba a esta superpotencia el trato de nación más favorecida; también durante ese período se entregaba el monopolio del aluminio a Aluar-Fate, del grupo Gelbard, y lo mismo sucedía con los aceros especiales que fueron cedidos a Gurmendi-Santa Rosa-Acindar.

En el terreno político, Lanusse intentó armar una salida condicionada convocando al Gran Acuerdo Nacional (GAN), pero las nuevas pueblabas de 1971 y 1972 junto a la movilización del 17 de noviembre de ese año, realizada con motivo del retorno de Perón a la Argentina, abortaron el intento de imponer a Lanusse como candidato del GAN y lo obligaron a negociar con Perón y el líder radical Ricardo Balbín.

Mientras tanto, los levantamientos populares continuaron en todo el país y se extendieron prácticamente hasta las elecciones del 11 de marzo de 1973. Por ejemplo, el segundo Rocazo tuvo lugar apenas unos días antes de la contienda electoral.

Sin atender la importancia de estos procesos de lucha, distintos sectores de la guerrilla persistían con su accionar a través de actos que muchas veces terminaban favoreciendo o perjudicando a algún sector de la dictadura. En marzo de 1972 era secuestrado el director de Fiat Argentina, Oberdam Sallustro, cuyo cadáver apareció el 10 de abril; ese mismo día era muerto en Rosario el general Juan Carlos Sánchez, principal rival del general Lanusse en la interna del arma.

El 22 de agosto se produjo la masacre de Trelew, donde fueron salvajemente fusilados 16 prisioneros que se habían rendido tras su intento de fuga del penal de Rawson.

En noviembre de 1972, Ángel "*Tacuarita*" Brandazza, un militante del Peronismo de Base de Rosario, fue secuestrado cuando salía de trabajar de una fábrica. Mientras era llevado a la sede del SAR, ubicado en la ex Comisaría V de calle Dorrego al 900, en la esquina de Córdoba y Oroño alcanzó a gritar desesperadamente su nombre y su detención. En esa sede policial, y según diversos testimonios, fue objeto de terribles torturas. Dentro del listado de personas desaparecidas, elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), el caso Brandazza figura como el más antiguo.

Las elecciones del 11 de marzo y el retorno de Perón

En este complicado marco, el general Perón –con 76 años de edad– tenía pocas posibilidades de imponer condiciones y, por tanto, debió optar entre su candidatura (que seguramente sería vetada) y el soñado retorno. Al resignar Perón su aspiración electoral para seguir luchando por imponer su dirección, se montaron las fraudulentas elecciones del 11 de marzo de 1973.

En estas condiciones se elaboró un acuerdo entre el peronismo, el frondicismo, el conservadurismo popular y otras agrupaciones que conformaron el Frente Justicialista de Liberación (FREJULI) y llevaron como candidatos a Héctor Cámpora-Vicente Solano Lima.

Esta fórmula obtuvo 5.907.464 votos, el 49,6%, superando ampliamente a la UCR que impulsaba al binomio Ricardo Balbín-Eduardo Gamond y que recibió el apoyo de 2.537.605 sufragios. Fue particularmente importante la cantidad de abstenciones y votos en blanco, ya que 2.425.595 ciudadanos no se presentaron a votar o emitieron un sobre vacío. Como seguramente no se podrá alegar que en esa época primaba el desinterés político, esta significativa cifra de votos contestatarios obedecía a que una gran parte de los que tomaron esa decisión entendían que era necesario que la explosiva situación social condujera hacia algún tipo de salida revolucionaria.

El peronismo provincial concurrió dividido a las elecciones, aunque los dos sectores antagónicos llevaron como candidatos a Cámpora-Solano Lima para las presidenciales.

La fórmula provincial del Partido Justicialista estuvo encabezada por Campos-Bonino, mientras Sylvestre Begnis junto a Eduardo Cuello –vinculado a la UOM– presidieron la entente frentista (FREJULI).

En Rosario, por primera vez, el intendente iba a ser elegido por el voto directo de los ciudadanos, modalidad impuesta por la reforma constitucional de 1962.

Las elecciones, se caracterizaron por la enorme movilización popular que generalmente desembocaba en actos multitudinarios. El cierre de la campaña provincial del peronismo se realizó en Rosario, en la bajada Sargento Cabral. Héctor Campora transmitió un mensaje de Perón, que llama-

ba a "*tapar con votos a la dictadura militar*"; por su parte, el candidato a intendente por el FREJULI, Rodolfo Ruggeri, sostenía que había que votar por la "*única boleta peronista*". La otra lista justicialista –que respondía a Campos y Bonino– llevaba como candidato a Héctor Constanzo.

El triunfo del peronismo fue arrollador en la provincia y en Rosario, aunque para definir al nuevo gobernador debió realizarse una segunda vuelta a la que concurrieron Sylvestre Begnis (provenía del MID) por el frente y el demoprogresista Alberto Natale representando a la Alianza Popular Federalista. El FREJULI obtuvo 762.017 votos contra 437.943 de la Alianza Popular Federalista.

El 25 de mayo, el mismo día de la asunción, el gobierno nacional tomó la decisión de restablecer relaciones diplomáticas con Cuba; asimismo, habría que destacar que al juramento de Cámpora asistieron los presidentes de Chile y Cuba: Salvador Allende y Osvaldo Dorticós.

Esa misma noche, el nuevo mandatario daba curso a un largo reclamo de los sectores populares, otorgando la amnistía de los presos políticos arrojados en las cárceles por la dictadura de Onganía, Levigston y Lanusse.

En la provincia de Santa Fe, la Dirección General de Prensa del Gobierno Provincial dio a conocer un decreto del Poder Ejecutivo por medio del cual también se indultaba a los presos políticos alojados en los penales provinciales.

Los festejos en la provincia y Rosario fueron masivos y se caracterizaron por su combatividad, siendo la consigna más difundida aquella que afirmaba: "*se van, se van y nunca volverán*" (por los militares).

En Santa Fe, como en el resto del país, comenzaron una serie de tomas de edificios públicos –escuelas, facultades, hospitales, reparticiones públicas, radios, televisión e inclusive fábricas– con el objetivo de lograr la salida de los funcionarios de la dictadura. Distintas fracciones del peronismo participaron en esos episodios.

En Rosario se tomaron los colegios Nacionales, los Normales y las escuelas industriales; la sede del Rectorado y todas las facultades; el Hospital Centenario y el Instituto Psiquiátrico Agudo Ávila; la Dirección Provincial de Rentas; el Servicio Público de la Vivienda; la Capitanía de Puertos del Litoral Fluvial y las tres principales radios de la ciudad.

En la zona fueron ocupados los hospitales de Granadero Baigorria, Casilda, Villa Constitución y el Psiquiátrico de Oliveros, en tanto que, en Santa Fe, entre otras reparticiones, se tomó el Registro Civil para deponer a un funcionario acusado de estar involucrado en la muerte de un militante en 1972. Esta iniciativa estuvo liderada por Jorge Obeid, quien a mediados de 1974 rompería con la JP Regional II, fundando la JP Lealtad y que, dos décadas después, se convertiría en gobernador. A partir del año 2003, comenzaría su segundo mandato conduciendo los destinos de la Provincia.

Las expectativas que despertaba Perón en la ciudadanía eran enor-

mes. La CGT de Rosario, con motivo de su retorno definitivo, dispuso un cese total de actividades desde doce horas antes hasta doce horas después del 20 de junio, trasladando a 30.000 personas a Ezeiza, para lo que se afectó el servicio de trenes y se fletaron cientos de colectivos.

La marcha fue conmovedora; desde todos los puntos neurálgicos de la ciudad, desde las facultades, sindicatos, vecinales, etc., se organizaron grupos que partían en todo tipo de vehículos a recibir a Perón en Ezeiza, en lo que sería la movilización popular más numerosa de la historia (se reunieron 2.000.000 de personas).

Perón volvió al país y, haciendo uso de todo su peso político, comenzó a disputar la hegemonía que estaba en poder de los sectores vinculados a Gelbard y Lanusse.

El 13 de julio, como paso previo a la convocatoria de nuevas elecciones, Cámpora y Solano Lima fueron obligados a renunciar asumiendo de forma provisional Raúl Lastiri, que ocupaba el cargo de presidente de la Cámara de Diputados y era un hombre afín al sector de López Rega. El nuevo presidente desplazó a los ministros Esteban Righi (Interior) y Juan Carlos Puig (Relaciones Exteriores) pero debió mantener a José Ber Gelbard en Economía.

El triunfo electoral de Perón

En las elecciones del 23 de septiembre, la fórmula del FREJULI, encabezada por Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón, obtuvo 7.359.139 votos (61,9%) volviendo a derrotar con holgura a la fórmula radical conformada por Ricardo Balbín y Fernando De la Rúa, que fue apoyada por 2.905.719 sufragantes. Una vez más, se registró un alto porcentaje de abstenciones y votos en blanco, ya que 2.436.872 –una cifra prácticamente similar a la del 11 de marzo– de ciudadanos optaron por ese camino.

En Santa Fe, la fórmula frentista fue respaldada por 758.502 votos, el 61,6%. A diferencia de lo que sucedió en la mayoría del país, en segundo lugar se ubicó la Alianza Popular Federalista con el 20,5% de los sufragios, mientras que los radicales fueron relegados al tercer puesto, recogiendo el apoyo del 16% de los votantes.

El 12 de octubre de 1973, tras 18 años de exilio y proscripciones, Perón asumía por tercera vez la presidencia de la Nación. El nuevo mandatario mantuvo a Gelbard en el gobierno, como prenda de unidad con las fuerzas imperialistas, que durante el gobierno de Cámpora reforzaron sus posiciones, los sectores proeuropeos y los vinculados a la Unión Soviética.

No obstante esta concesión, la disputa prosiguió y así, el 25 de septiembre de 1973, a dos días del triunfo electoral, era asesinado el metalúrgico José Ignacio Rucci, secretario general de la CGT, considerado por muchos como la mano derecha del electo Presidente en el movimiento obrero. Idéntica suerte

correrían otros dirigentes gremiales peronistas como Teodoro Ponce, líder metalúrgico de Rosario, e Hipólito Acuña, diputado nacional y secretario adjunto de las 62 Organizaciones de esa ciudad, ambos muertos en 1975.

El asesinato de Rucci tal vez haya sido el golpe político más duro que recibió Perón antes de su muerte. Años más tarde, en su libro *Diario de un clandestino*, Miguel Bonasso contaría cómo dentro de la organización Montoneros le informaron que habían matado al dirigente metalúrgico.

Adelino Romero, dirigente del gremio de la carne, quedó al frente de la CGT y tras su deceso asumió la conducción el textil Casildo Herrera, aquél que el 24 de marzo de 1976, desde Montevideo, afirmó con total desparpajo: "*Me borré*".

La disputa de los sectores proimperialistas con Perón pasó a ser vertiginosa. El 25 de febrero de 1974 viajó a Cuba José Ber Gelbard para firmar quince convenios con el gobierno de ese país, de los que participarían empresas imperialistas como Ford y Fiat. Simultáneamente, se observaba un vasto accionar de la guerrilla con varias operaciones, algunas importantes, como el intento de copamiento del regimiento de Blindados, en Azul, en el que murieron el coronel Gay y el teniente coronel Igarzábal. El 22 de marzo era muerto el sindicalista Rogelio Coria y el 28 de abril el ex juez de la Cámara Federal Penal, Jorge V. Quiroga.

También se asistía a una serie de importantes cambios políticos. El 22 de enero de 1974 renunciaba el gobernador de Buenos Aires, Oscar Bidegain, siendo reemplazado por el dirigente metalúrgico Victorio Calabró.

El 27 de febrero, en Córdoba, eran derrocados el gobernador Ricardo Obregón Cano y el vicegobernador Atilio López por el Jefe de Policía, teniente coronel Antonio Navarro; Perón ordenó la intervención de la provincia nombrando en el cargo al empresario gelbardista Duilio Brunello.

Durante la celebración del 1º de Mayo de 1974, Perón –exasperado por las continuas provocaciones y ataques a su línea política y a sus colaboradores– expulsó a los Montoneros de la concentración realizada en Plaza de Mayo.

El 3 de mayo partía hacia la Unión Soviética la misión oficial encabezada por Gelbard, quien al día siguiente sería condecorado por Brezhnev en el mismísimo Kremlin.

El 11 de mayo, luego de pronunciarse a favor de la verticalidad en el movimiento, era asesinado el cura Carlos Mujica, y el 12 de junio Perón daba en Plaza de Mayo el que sería su último discurso, ante una multitud que había sido convocada apenas unas horas antes.

Tras la muerte de Perón, ocurrida el 1 de julio de 1974, asumía el cargo María Estela Martínez de Perón, su sucesora constitucional. Isabel mantuvo a Gelbard en el gobierno pero se negó a ratificar los convenios firmados por éste con la URSS.

En este último período apareció un nuevo protagonista en la historia argentina, la tristemente célebre "Triple A". Con Perón en vida, un sector

del peronismo impulsó la línea de enfrentar a la guerrilla "aparato contra aparato" y se creó la nueva organización parapolicial antisubversiva.

Rápidamente surgieron otras formaciones anticomunistas dirigidas por los servicios de inteligencia y también bautizadas como "Triple A", que al igual que la oficial desató una ola de asesinatos de dirigentes obreros y populares, con el objetivo de instalar el caos para facilitar el golpe de estado.

Golpismo abierto y caída del gobierno de Isabel

Isabel, en su disputa con el sector gelbardista, se apoyó en la derecha del peronismo impulsando, a la vez, una política de nacionalizaciones.

El 14 de agosto de 1974, la presidenta reemplazó al ministro de Educación Jorge Taiana por Oscar Ivanissevich, y el 6 de septiembre al interventor en Córdoba, Duilio Brunello, por el brigadier Lacabanne.

El nuevo gobierno continuó la política de nacionalizaciones propia del peronismo, aunque atemperada en relación a lo que había sucedido tres décadas atrás. El 1 de octubre se expropiaba la editorial Codees, y en el acto del 17 de octubre, Isabel, junto a la convocatoria a la Gran Paritaria Nacional, anunciaba la argentinización de las empresas Standard Electric, Siemens y la Compañía Italo Argentina de Electricidad.

El 21 de octubre, tras la nueva negativa del gobierno de ratificar los acuerdos comerciales firmados en mayo con Moscú, renunció Gelbard y fue sustituido por Alfredo Gómez Morales, al que se le encomendaría solucionar la crisis económica vigente.

El nuevo ministro, para tratar de contener la inflación, aplicó un plan económico de sesgo liberal que fracasaría a los pocos meses. A principios de 1975, la dirección de la CGT encabezada por Casildo Herrera criticaba en duros términos la política de precios del gobierno nacional; a la par que se agudizaba la disputa entre el sector fascista del gobierno, representado por el ministro López Rega –seguía concentrando poder dado que también retuvo bajo su cargo la Secretaría Privada de la Presidencia–, y el líder metalúrgico y de las 62 Organizaciones, Lorenzo Miguel. Resulta obvio decir que todas estas diferencias eran atizadas por las fuerzas que estaban preparando el golpe de estado.

Gómez Morales renuncia tras el fracaso de su plan económico y es reemplazado por Celestino Rodrigo, que anunció un severo plan económico de ajuste, bautizado por el ingenio popular como el "Rodrigazo". Este plan contemplaba una devaluación del 50%, un aumento de los combustibles cercano al 200% y un alza en las tarifas del 100%. Como contrapartida, el gobierno ofrecía un incremento salarial de apenas el 65%, negándose además a homologar las paritarias.

El programa de ajuste llevó a la dirección de la CGT a realizar una concentración en Plaza de Mayo, el 27 de junio, como así también un paro

general los días 7 y 8 de julio. Finalmente, como consecuencia de estas gigantescas protestas, el gobierno decidió homologar los convenios colectivos de trabajo.

El día 18 de julio renunció el ministro Celestino Rodrigo y esa misma noche, en supuesta misión oficial, emigró del país José López Rega.

En la nueva situación, Isabel Perón logró un pacto con las 62 Organizaciones y los sectores del partido opuestos a López Rega y, procurando obtener apoyo militar, a través del coronel peronista Vicente Damasco, impuso al general Alberto Numa Laplane como comandante en jefe del Ejército.

Producto de estos acuerdos surgiría un nuevo gabinete con presencia de las 62 Organizaciones (Carlos Ruckauf y Antonio Cafiero) y otros sectores del partido (Ángel Robledo, Jorge Garrido, Pedro Arrighi, Corvalán Nanclares y Carlos Emery). Pero la designación del coronel nacionalista Vicente Damasco en Interior fue abiertamente resistida por el Ejército, particularmente por el sector lanussista, lo que obligaría a la renuncia del general Numa Laplane, que fue reemplazado el 28 de agosto por Jorge Rafael Videla.

Los golpistas, que ahora ya disponían del control total del Ejército, aumentaron la presión sobre el gobierno. Isabel Perón, con el argumento de que tenía la "salud deteriorada", fue forzada a tomarse un descanso, y delegó el mando en el presidente provisional del Senado, Italo Argentino Luder, que gobernó entre el 13 de septiembre y el 17 de octubre de 1975. Fue Luder quien, luego del ataque al Regimiento de Formosa realizado por Montoneros, dio a conocer el decreto por medio del cual se habilitaba a las Fuerzas Armadas para "*aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país*".

Unos días después, en octubre de 1975, Videla declaraba en Montevideo, durante la XI Conferencia de Ejércitos Americanos, que "*si es preciso, en Argentina deberán morir todas las personas necesarias para lograr la seguridad del país*".

El dispositivo golpista, que se había puesto en marcha tras el desplazamiento de Gelbard, seguía su avance. El peronismo no controlaba las palancas claves del Estado. Era un gobierno de burguesía nacional, débil y heterogéneo, en el que incluso participaron durante un prolongado período sectores ultraderechistas como el de López Rega; pero también era un gobierno que practicaba una política internacional tercermundista.

Golpistas como Videla (comandante en jefe del Ejército), Viola (jefe del Estado Mayor), Harguindeguy (jefe de la Policía Federal) o políticos como Victorio Calabró (gobernador de la provincia de Buenos Aires) aprovecharon sus posiciones dentro del Estado para promover abiertamente el quiebre del orden constitucional.

Para enfrentar los planes golpistas, Isabel Perón tomó un conjunto de medidas de carácter nacional como la argentinización de la ITT y de las bocas de expendio de Shell y Esso. Asimismo, hizo concesiones importantes a los trabajadores, como las paritarias y la Ley de Contrato de Trabajo (a la fecha, la mayoría de los Convenios Colectivos de Trabajo vigentes son los

firmados en 1975), otorgando, además, créditos blandos o preferenciales a los chacareros pobres y medios.

El gobierno, sin embargo, se apoyó paralelamente en sectores reaccionarios –particularmente en el ámbito educativo y universitario– tomando medidas represivas; medidas que, en muchos casos, fueron alentadas por los propios golpistas. Estas posiciones contribuyeron al aislamiento y desprestigio de Isabel Perón.

El pueblo argentino, por su parte, que tenía y tiene una fuerte conciencia antiimperialista, no se pudo unir para enfrentar el golpe. Como consecuencia de la enorme complejidad de todo el proceso, e influenciados por la propaganda golpista, vastos sectores de las capas medias, e incluso una parte del movimiento obrero, equivocó el enemigo y golpeó centralmente al gobierno peronista.

A esta confusión contribuyeron varios factores. En primer lugar, la presencia en ese gobierno de elementos fascistas como López Rega. En segundo lugar, el accionar abiertamente golpista de muchos dirigentes políticos y sindicales sembró muchas dudas entre las bases; dudas que facilitaron la división del campo popular. Por último, las erróneas posiciones de la mayoría de las fuerzas de izquierda también facilitaron la dispersión, al considerar que la Unión Soviética era una potencia amiga de los pueblos del Tercer Mundo y sostener que el gobierno de Isabel Perón era proyanqui y que, por tanto, debía ser el centro de los ataques políticos. A la vez, consideraban a Gelbard como el exponente más importante de la burguesía nacional, en lugar de un testaferro y amigo de la Unión Soviética, tal cual reconocería con los años hasta el propio Fidel Castro.

Para concluir, habría que decir que a pesar de las divisiones analizadas, el golpe fue resistido por un sector importante del movimiento obrero peronista, por una parte del Partido Justicialista (especialmente el sector de Isabel Perón), por algunas fuerzas de izquierda, como el Partido Comunista Revolucionario (PCR) y por el clasismo sindical. Como mencionamos oportunamente, la corriente obrera que lideraba el Secretario General del SMATA de Córdoba, René Salamanca, extrajo conclusiones acertadas de experiencias históricas anteriores, como las de 1930 o 1955, y enfrentó decididamente el golpe de estado. En asambleas históricas, realizadas en la planta de Santa Isabel, miles de trabajadores mecánicos de la empresa Renault denunciaron los preparativos golpistas contra el gobierno de Isabel Perón.

A partir de las puebladas de 1969, y desde las entrañas del combativo movimiento obrero cordobés, surgieron importantes dirigentes como Tosco, Atilio López o Salamanca, que ofrendaron su vida en defensa de los intereses de los trabajadores. Pero tal vez haya sido Salamanca quien visualizó con mayor claridad el peligro golpista, por lo que en carta abierta enviada "*A los compañeros trabajadores*", en diciembre de 1974 advertía:

"*...En el país se ha ido creando una situación golpista, como en 1955.*

> *Eso obliga a definirse con claridad a todo el mundo. Y yo ya estoy definido.* ***Yo estoy contra el Golpe de Estado venga de donde venga.*** *Y para ser más preciso afirmo que frente a ese golpe que hoy se cocina en la Argentina yo llamo a los compañeros mecánicos y al pueblo a defender la voluntad popular (por el gobierno de Isabel Perón)... en el camino de la liberación del pueblo y de la patria..."*
>
> (Enrique Arrosagaray, Revista *HECHOS Y PROTAGONISTAS de las luchas obreras argentinas*, marzo de 1984, Editorial Experiencia)

A principios del '76, y dejando totalmente en claro quiénes capitaneaban el golpe de estado a nivel nacional, se produjo el primer *lock out* de la historia argentina llevado adelante por la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE), integrada, entre otros, por la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas, la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción, etc.

El 24 marzo de 1976, con el aval de las potencias imperialistas que tenían inversiones e intereses en Argentina; con el aval de los terratenientes, alarmados por las conquistas logradas por los obreros rurales (habían conseguido la jornada de ocho horas) e ilusionados con el comercio de cereales con la URSS, que ya en 1975 era el principal comprador; con el aval de los grandes industriales; con el aval de los chacareros medios y las capas medias urbanas, incluidos la mayoría de los profesionales y estudiantes; se impuso el golpe de estado. Golpe que "traería el orden" y, como decía el diario *La Nación*, "*alejaría el horror de los soviets de fábrica*", que ponían en peligro a nuestra patria.

Una vez más, se demostraba que el proyecto de la burguesía peronista de "reconstruir primero el país en paz" para luego liberarnos, es equivocado e irrealizable. Y también, una vez más, fracasó el intento reformista de lucha contra el imperialismo y los terratenientes.

La dirigencia santafesina cómplice del golpe

El gobierno provincial, encabezado por Sylvestre Begnis, acordó desde un principio con los lineamientos económicos expresados en el Acta de Compromiso Nacional o Pacto Social, elaborados por Gelbard y que más adelante analizaremos con todo detalle. Durante la breve gestión de Cámpora, la relación entre la provincia y la nación fue buena.

Sylvestre Begnis también mantuvo un fluido diálogo con el camporismo provincial, que se expresaba a través de las llamadas "organizaciones de superficie" y que no eran otra cosa que la izquierda del peronismo (la Tendencia o la JP Regional II).

La izquierda peronista tenía un peso político limitado en la provincia, ya que sólo controlaba algunas secretarías y subsecretarías del gobierno provincial y contaba con unos pocos diputados provinciales y algunos concejales. Asimismo, debido a sus concepciones vanguardistas (reivindicaban la guerrilla urbana), y a pesar de poseer un interesante poder de movi-

lización, este sector no había logrado hacer pie en el movimiento obrero, ni en la mayoría de las organizaciones de masas.

Con el desplazamiento de Cámpora, las organizaciones sindicales vinculadas a la UOM comenzaron a cuestionar la política global de Sylvestre Begnis, particularmente la relación de éste con la izquierda en general y con Montoneros en particular. Tras la muerte de Perón, las críticas arreciaron y las diferencias se ensancharon. Cuello, un hombre de la UOM, comenzó a criticar abiertamente al gobernador; el metalúrgico solía repetir hasta el cansancio que él tenía un solo compromiso y era con la UOM.

No habría que descartar que haya sido el vicegobernador quien bregó permanentemente por cerrar las puertas del gobierno a los sectores vinculados a Montoneros, y tampoco que, tal como afirmaban muchos hombres del justicialismo, las muertes del dirigente metalúrgico Teodoro Ponce y del secretario adjunto de las 62 Organizaciones y diputado nacional por el FREJULI, Hipólito Acuña, hayan tenido que ver con esa interna.

La compleja situación imperante en la provincia se vería agravada cuando en abril de 1975, la guerrilla intentó tomar la fábrica de armas de Fray Luis Beltrán. En la fallida operación murieron cinco guerrilleros y el coronel Arturo Costa.

En un clima de enorme tensión política y social, el comandante del Segundo Cuerpo de Ejército, Roberto Eduardo Viola, sentaba claramente su posición sosteniendo que: "*los cuerpos extraños serán expulsados por dura que deba ser la cirugía*".

El 20 de marzo de 1975, como consecuencia de un plan nacional alentado por algunos elementos fascistas del gobierno nacional, era intervenida por la UOM nacional la opositora y combativa seccional Villa Constitución y se llevaría a cabo el más importante operativo represivo del período, con el claro objetivo de liquidar la organización gremial contestataria.

Esta operación fue la continuidad de otras acciones similares en las que se descabezaron organizaciones combativas, fundamentalmente en Córdoba, con el objetivo de poner fin al auge de las luchas iniciadas a partir de 1969.

La presión del peronismo sobre el gobernador fue creciendo a medida que aumentaba la represión y crecía la violencia política, y así, en 1975, no pudiendo resistir la embestida, dejaba su cargo el ministro de Gobierno Roberto Rosúa, un hombre que, aunque había militado en la UCRI, tenía acuerdos y aceitados lazos con la izquierda tradicional y los Montoneros.

Jaqueado por el justicialismo, en el seno del MID se produjo un gran debate acerca de cómo debía enfrentarse la nueva situación. El gobernador, tras ser derrotado internamente, decidió fundar un nuevo partido, Línea Popular, fuerza que posteriormente facilitaría funcionarios a la dictadura instaurada en 1976. Roberto Casis, gobernador de la Provincia a partir de enero de 1982, provenía de esa expresión política.

El justicialismo anunció que la alianza electoral que se expresaba en el FREJULI provincial había concluido, motivo por el cual esa fuerza tomaba la resolución de alejarse del gobierno y pasar a la oposición. Tras esta decisión, se retiraron del gabinete la mayoría de los funcionarios peronistas y Sylvestre Begnis optaría por gobernar con hombres de su nuevo partido, agudizándose así la crisis política provincial.

Las divisiones del peronismo también afectaron la gestión del intendente rosarino Oscar Ruggeri, sometido a todo tipo de presiones desde distintos sectores internos.

Al margen de las disputas internas y de la violencia, durante las tumultuosas jornadas del Rodrigazo la inmensa mayoría del movimiento obrero de la zona se lanzó a la lucha. Los empleados estatales declararon un cese de actividades; idéntica medida tomaron los trabajadores de las empresas del transporte, los docentes, los empleados de comercio, los metalúrgicos y también los obreros del cordón industrial de la zona norte: químicos, petroquímicos, ceramistas, textiles, etc. Demandaban la homologación de los convenios ya acordados y la libre discusión de los restantes. Con o sin acuerdo de las direcciones gremiales, los trabajadores de la provincia, junto al conjunto del movimiento obrero nacional, derrotaron el plan de ajuste y forzaron el alejamiento de Rodrigo y López Rega.

Mientras tanto, la violencia política seguía en ascenso y, en septiembre de 1975, en una sola noche, la Triple A asesinaba en Rosario al procurador peronista Luis Eduardo Lezcano y al abogado radical Felipe Rodríguez Araya.

El golpe de estado, como se ha indicado, ya estaba en marcha, y tanto desde el gobierno provincial como desde el sector gremial opositor, no se denunció ni se enfrentó la maniobra. Del mismo modo en que se había actuado a nivel nacional, sólo algunos núcleos políticos y sindicales –peronistas y clasistas– llamaron a oponerse activamente al plan oligárquico imperialista.

La manifiesta complicidad de la dirigencia política santafesina con el golpe de estado se expresaría con total nitidez tanto en el Concejo Municipal de Rosario como en la Casa Gris. Mientras la prensa del mundo esperaba el desenlace en los lobby de los hoteles, mientras los tanques –la avanzada de la peor tragedia de nuestra historia– se ponían en movimiento para derrocar al gobierno constitucional, los concejales de la ciudad, en una "ardorosa" polémica, debatían –entre otros temas menores– el robo de tapas de tormenta, la explotación de una calesita y el meneado tema de los residuos. Mientras tanto, en la capital provincial, Sylvestre Begnis esperaba al interventor militar en la puerta de la gobernación para entregarle "ordenadamente" el control de la provincia, como si se tratara de una sucesión democrática. Distinta suerte habían corrido otros gobernadores, como Atilio López en Córdoba, o Miguel Ragnone en Salta, que fueron asesinados por bandas armadas que respondían a la Triple A.

Para corroborar la manifiesta complicidad de la dirigencia política santafesina, habría que señalar que, en muchos pueblos y ciudades pequeñas del interior, los jefes comunales e intendentes se mantuvieron en sus cargos.

El programa económico de Gelbard

Tras la asunción de Cámpora, la política económica que aplicó el peronismo fue definida a través del Acta de Compromiso Nacional o Pacto Social, basado en el acuerdo entre las direcciones de la Confederación General Económica y la Confederación General del Trabajo. Como consecuencia de este acuerdo se implementarían una serie de leyes específicas y el llamado *"Plan Trienal para la Reconstrucción y la Liberación Nacional"*.

El Acta de Compromiso Nacional enunciaba como objetivo central de la política del gobierno la justicia social. Proponía una mejor distribución del ingreso –sin cuestionar la base del sistema oligárquico imperialista– y se planteaba un criterio de equidad que significaba que el 50% del ingreso nacional fuera para las mayorías (los asalariados) y el otro 50% para las minorías (los capitalistas y los terratenientes).

A la luz de lo que sucedería luego de varios años –en la actualidad los asalariados perciben un porcentaje apenas superior al 20%–, aquella propuesta sería de un gran impacto o, sencillamente, la panacea. Pero esa cifra era menor a la que recibían los asalariados de naciones que no se caracterizaban, precisamente, por bregar por la justicia social, como España, que distribuía el 56% del ingreso entre los trabajadores, para no hablar de ciertos países desarrollados de Europa, donde los capitalistas habían llegado a reconocer a los asalariados hasta un 70% del ingreso nacional.

Además, habría que recordar que Gelbard, en los objetivos de Reconstrucción, no planteaba un shock distributivo, sino que sostenía que la mejora de la distribución llegaría en cuatro años, a través del Pacto Social. La vigencia de ese pacto significaba, en los hechos, el mantenimiento de los sueldos congelados con el pretexto histórico que usaron y usan los capitalistas y la mayoría de los gobernantes: los aumentos de salarios provocan la inflación.

En este sentido, hay que decir que el trabajo es la única forma de agregar valor. Una parte del valor creado por el trabajo va al obrero como salario, y la otra parte (a la que Carlos Marx llamaba *plusvalía*) se la apropian los dueños de los medios de producción como ganancia. El patrón debe repartir la ganancia con los dueños de la tierra (renta terrateniente), con el banquero que le cobra intereses por los préstamos y con el estado que usa los impuestos para mantener el sistema político. Asimismo, en un país dependiente como el nuestro, los monopolios y banqueros imperialistas actúan desde adentro y desde afuera, para llevarse una porción de la plusvalía. Como consecuencia de esto (se garantiza la renta de varios sectores), los sueldos en Argentina son mucho más bajos que en los países centrales.

El salario, según lo expuesto, no puede producir inflación porque es apenas la distribución de una parte del trabajo realizado. En todo caso, lo que se discute es qué porcentaje del trabajo realizado va como salario, y qué porcentaje va como ganancia para el patrón.

Sin embargo, Gelbard sostenía que los aumentos salariales provocan

inflación, y, por tanto, el Acta de Compromiso Nacional establecía que tanto los sueldos como las jubilaciones serían reajustados de acuerdo al crecimiento productivo. Esto era y es así debido a que toda política que pretenda contener la inflación sin atacar las bases del atraso y la dependencia de nuestra economía, deberá necesariamente asentarse en la explotación de los asalariados.

Al contrario de lo que sucediera durante el primer gobierno peronista, y dejando de lado las expectativas de las grandes mayorías, el nuevo gobierno optó por "contener la inflación" aduciendo que era la condición previa para que en el futuro se pudiera lograr la ansiada redistribución a favor de los asalariados.

Los defensores del Pacto Social de 1973 podrán argumentar que durante la gestión de Isabel Perón se avanzó de manera importante en la redistribución del ingreso, ya que en diciembre de 1975 la participación de los asalariados llegó a cerca del 50% del ingreso nacional. Pero lo que no podrán negar es que las grandes luchas de los trabajadores fueron las que forzaron este nuevo reparto, que se concretó luego de que el mencionado gobierno abandonara la política económica implementada por Gelbard.

Volviendo al análisis del programa económico peronista, se podría afirmar que la postulación de favorecer a la burguesía nacional sólo se limitaba al manejo de algunos resortes de la política económica (nacionalización de los depósitos bancarios, control del comercio exterior y las divisas, etc.) que permitía a las autoridades canalizar a favor del sector industrial los frutos del mantenimiento de la explotación de los asalariados.

En definitiva, durante ese período no se avanzó en la justicia social y menos aún en la liberación nacional. Entonces, como ahora, no se podían hacer reformas serias para favorecer a las mayorías populares sin atacar los intereses del imperialismo, los grandes capitalistas asociados y los terratenientes. En esas condiciones, tampoco era posible asegurar un desarrollo autónomo y sostenido de nuestra economía, por lo que el Pacto Social –que no atacaba a fondo las bases del atraso y la dependencia– terminó siendo una herramienta ineficaz para avanzar por un camino de liberación.

El latifundio y el imperialismo, particularmente el estadounidense, soportaron limitaciones en su poder, aunque durante ese período fueron las mayorías nacionales las que llevaron la mayor carga. Como contrapartida se vieron beneficiados algunos monopolios, incluso imperialistas (industria automotriz), como así también un sector de grandes intermediarios, en particular el grupo Gelbard-Broner y sus amigos.

La nueva legislación económica

El nuevo gobierno peronista lanzó una serie de medidas económicas, instrumentadas a través de normas tendientes a concretar el Pacto Social o Programa CGE-CGT. Para tratar de controlar los efectos nocivos que provo-

caba el dominio del capital monopolista imperialista, se sancionaron leyes referidas al manejo del crédito y del comercio exterior.

En relación al primer tema, se establecía la nacionalización de los depósitos, medida que permitiría al gobierno orientar parte del crédito a los sectores que le interesaba financiar. El capital financiero no se expropiaba, sino que se limitaba; es decir, se intentaba recortar su poderío, manejando a través del Banco Central parte de los fondos para préstamos, reduciendo de esta manera sus ganancias y canalizándolas a favor de algunos grupos intermediarios y del empresariado nacional.

En lo que se refiere al comercio exterior, las nuevas normas planteaban el control de las exportaciones de granos y carnes, reservándose el gobierno el derecho de intervenir las Juntas respectivas "cuando sea necesario". Además, establecían un mayor control sobre las divisas que debían cambiar los exportadores, mantenían el precio que se pagaba por cada dólar (no habría devaluaciones) y formulaban la intención de favorecer a los exportadores nacionales, aunque sin aclarar si los grandes monopolios, como Bunge y Born, entraban dentro de esa categoría.

Asimismo, se sancionó una ley de inversiones extranjeras. Se trataba de una norma muy limitada, ya que sólo proponía corregir los efectos desnacionalizadores o la excesiva fuga de divisas, tratando que la gran industria nacional tuviera una mayor participación en esas inversiones. En el fondo, la nueva ley aceptaba la filosofía desarrollista que sostenía que estos capitales eran importantes para el "desarrollo", alentando la asociación de la gran burguesía intermediaria que representaba Gelbard y su grupo con los monopolios. Así, por un lado proponía reargentinizar algunas empresas y, por el otro, impulsaba medidas de fomento para las compañías mixtas con predominio del capital nacional.

En el tema de la remisión de utilidades, la norma avanzó con respecto a la legislación frondicista, dado que establecía un límite del 12,5% para el giro al exterior de las ganancias. Pero este porcentaje era bastante elevado con relación a la ley peronista de 1953 (fijado en el 8%) y similar a los que las empresas extranjeras remiten normalmente en el mundo.

Además, al capital repatriable se le aplicaba un impuesto progresivo y se creaba un Registro de Inversiones Extranjeras, con lo que tendía a evitarse el falseamiento de la información acerca del origen del patrimonio de las empresas. De este modo quedaba expresado el forcejeo de la gran industria nacional, especialmente del grupo gelbardiano, por desplazar a las empresas extranjeras en determinadas áreas; forcejeo y no camino autónomo por cuanto, como se expresaba claramente en este conjunto de leyes, no se aspiraba a eliminar la acción del imperialismo.

El gobierno justicialista de 1973, según lo analizado en este esquemático resumen, intentó avanzar controlando algunos de los mecanismos del sistema pero sin romper con el latifundio y la dependencia. Se intentaba

favorecer a los sectores que hegemonizaban el FREJULI, tratando de canalizar en su beneficio una parte de la renta de los terratenientes y de las abundantes ganancias de las empresas extranjeras. Además, como vimos más arriba, y debido a que el plan económico se basaba en salarios prácticamente congelados –había un compromiso de redistribución del ingreso a los cuatro años–, la inmensa mayoría de la industria nacional no podía aspirar a expandirse en estas condiciones. Y así acabaron rápidamente las ilusiones de este sector de lograr un desarrollo autónomo con la "colaboración" de los imperialistas.

Las leyes agrarias peronistas

Dentro del paquete de leyes sancionadas hubo cuatro que definían la posición del gobierno frente al problema agrario: **la ley que regía el uso de las tierras aptas para la explotación; la que establecía el impuesto a la renta normal potencial a las tierras aptas; la que suspendía los desalojos hasta el 31 de diciembre de 1974 y la ley de fomento agrario.** Estas leyes se inscribían en el proyecto de reformas que proponía la burguesía intermediaria gelbardiana.

La ley "que regirá el uso de las tierras aptas para la explotación agropecuaria", que declaraba de interés público el "uso racional de la tierra", se orientaba a forzar a los terratenientes a arrendar las tierras improductivas, tratando de hacer avanzar el capitalismo pero manteniendo la propiedad terrateniente.

La ley de "impuesto a la renta normal potencial", por su parte, estaba planteada como alternativa a la expropiación del latifundio, considerando que éste no cumplía con su "función social". Se aspiraba a lograr un mejor uso de la tierra ya que los terratenientes, debido a la presión impositiva, se verían forzados a explotar mejor el suelo o arrendarlo; también se intentaba que el sector agrario aportara más al fisco y, por último, que la norma sirviera como instrumento para modificar la distribución del ingreso.

En lo que se refiere a la ley de "suspensión de los desalojos", era totalmente limitativa; en primer lugar por el corto tiempo de duración (finalizaba el 31 de diciembre de 1974); y en segundo término, porque no contemplaba los problemas reales de los campesinos. Por ejemplo, en caso de juicio por falta de pago, era aplicable por única vez siempre y cuando el arrendatario depositara judicialmente la deuda "*más un 35% para el pago de intereses y las costas del juicio*". Además, a diferencia de la Ley 13.246, de 1948, la nueva norma no estipulaba el derecho del ocupante a adquirir el suelo que había trabajado. En el fondo, se estaba en presencia de una ley concebida de acuerdo a los intereses de los terratenientes.

En cuanto a la ley de "fomento agrario", puede afirmarse que se trataba de una verdadera ficción. En primer lugar, la norma restringía su aplica-

ción a quienes hubieran sido arrendatarios o aparceros durante cinco años consecutivos o diez alternados, disminuyendo a tres años para el caso de compra del campo que se ocupaba.

Además, los chacareros debían acreditar la posesión de "*un capital mínimo de explotación necesario para la empresa que se proponga establecer en el predio que quieran*". Es decir, que si el interesado no tenía capital, no podía acceder al beneficio y, en tal caso, no se le aseguraba la entrega de la tierra que había trabajado. Asimismo, sólo podía comprarla cuando el propietario quisiera venderla, al precio del mercado o, peor aún, al valor de tasación que éste dispusiera.

En definitiva, la "ley de fomento" era viable cuando el terrateniente quería vender y, en ese caso, el arrendatario podía acceder al crédito. Por lo visto, al igual que la ley de "suspensión de los desalojos", esta norma también beneficiaba, en primer lugar, a los grandes propietarios.

La Unión Soviética, el principal socio comercial

Las fuerzas reaccionarias que se instalaron en el poder el 24 de marzo de 1976 coincidieron en cerrar brutalmente el proceso de grandes luchas sociales y políticas abierto a partir de 1969, con el objetivo de terminar con el gobierno peronista y llevar adelante un plan de superexplotación de los asalariados y el pueblo en general, en beneficio de las minorías terratenientes e imperialistas.

La política global de la dictadura en desmedro del mercado interno, con el cierre de miles y miles de industrias, con la pauperización de las mayorías populares, con la ruina de las economías regionales, llevó a que la economía argentina dependiera cada vez más de sus exportaciones de origen agropecuario.

Durante esos años se registró un gran cambio en las relaciones comerciales de Argentina: **la política de la dictadura fue desligando el comercio exterior argentino de su dependencia histórica de los mercados occidentales y lo fue amarrando a la Unión Soviética.**

En 1977, Videla ratificó los convenios firmados por Gelbard con la URSS en 1974, convenios que no habían sido homologados por el gobierno de Isabel Perón. En 1978 se suscribió un acuerdo entre ambas cancillerías con el objetivo de facilitar la realización de consultas políticas periódicas.

En 1979, por primera vez en la historia de los dos países, se realizó un intercambio de visitas militares encabezadas por altos oficiales:

> "*...En agosto llegó a Buenos Aires el teniente general Iván Yacovich Braiko, quien junto a tres coroneles que lo acompañaban, y en presencia del general Viola, fue condecorado con la medalla del Estado Mayor Conjunto...En septiembre una delegación militar argentina encabeza-*

da por el general José Montes, comandante de Institutos Militares visitó Moscú, Leningrado y Kiev. Fue generosamente condecorado..."

(Diario *La Nación*, noviembre de 1979)

En esos encuentros, la dictadura había acordado estudiar la posibilidad de entrenar oficiales argentinos en establecimientos militares de la URSS, y también se comprometió a analizar la compra de armas a esa potencia con el objetivo de equilibrar la balanza comercial altamente favorable a nuestro país.

En 1980, con el embargo cerealero aplicado por Estados Unidos y las potencias occidentales contra la URSS por su invasión a Afganistán, se produjo un salto cualitativo en las relaciones argentino-soviéticas. Ese mismo año, ambos países firmaron el pacto cerealero y a los pocos meses los convenios de carnes y pesca.

Según datos del INDEC, del total de las exportaciones argentinas en el período 1971-1975, el 4,6% iba a la Unión Soviética y el 8,2% a Estados Unidos. Estas cifras se invertirían totalmente en el período 1981-1985, ya que la Unión Soviética pasaría a adquirir el 22,6% de nuestros productos, en tanto que a los Estados Unidos sólo se exportaba el 10,8%.

En el rubro agropecuario, las diferencias se ensanchaban a favor de los soviéticos, de modo tal que la dependencia de la economía argentina de la voluntad de la URSS –el gran comprador de productos primarios que controlaba una parte del comercio mundial– fue muy importante y sólo comparable a lo sucedido en la década del '30, período en el cual dependíamos casi exclusivamente de la voluntad de los imperialistas británicos.

En materia financiera, la dictadura aplicó la "tablita" de Martínez de Hoz. A partir de 1976, con el objetivo de colocar sus excedentes de capital (petrodólares), los Estados Unidos, junto a la banca financiera internacional, empujaban a los países del Tercer Mundo a sobrevaluar sus monedas y ofrecer altas tasas de interés para atraer préstamos. **Era la época de la plata dulce y la bicicleta financiera, un gran negocio para los banqueros acreedores y los distintos grupos imperialistas**.

Durante ese período se fugaron decenas de miles de millones de dólares al exterior y la deuda externa se incrementó cinco veces en siete años. Nunca se conoció el destino de los fondos, dado que las negociaciones fueron secretas y no se rindieron cuentas, por lo que se podría afirmar que esta deuda es ilegítima y fraudulenta, tal cual lo estableció el juez Jorge Ballesteros en el fallo del *"juicio sobre la deuda externa"* promovido por Alejandro Olmos.

En el terreno diplomático, la política de la dictadura argentina –al igual que la chilena– se caracterizó por crear un detonante potencial para un conflicto bélico entre ambas naciones en el Atlántico Sur; conflicto que pudo ser superado gracias a la intervención de la Iglesia y a la enorme movilización popular desplegada en todo el país, siendo Rosario uno de los epicentros de la protesta social contra la guerra injusta.

Se invirtieron miles de millones de dólares para la compra de armas y se instrumentó el Mundial de 1978, a través de una campaña chauvinista, para favorecer los planes belicistas de la dictadura. Al conflicto por el Canal del Beagle habría que ubicarlo en el dispositivo estratégico global para la Tercera Guerra Mundial que montaron Estados Unidos y la Unión Soviética, creando focos de guerra que distrajeran a su rival del punto central de disputa, que en ese entonces se ubicaba en Europa Occidental.

La política hambreadora, entreguista y belicista del gobierno de facto de Videla-Viola, sólo podía ser impuesta por el fascismo y el terror abierto. Argentina jamás había conocido antes, en toda su historia, un régimen terrorista como el instaurado en 1976. Decenas de miles de ciudadanos, en su mayoría obreros, estudiantes, campesinos, profesionales, fueron detenidos por sus ideas políticas y sociales; fueron *chupados*, para luego ser brutalmente torturados y arrojados a las cárceles de la dictadura. **Treinta mil personas fueron desaparecidas.**

Se proscribieron los partidos opositores y se dispuso la veda de la actividad política y sindical. A diferencia del resto de las organizaciones marxistas que fueron declaradas ilegales y disueltas en 1976, las actividades del PC sólo fueron suspendidas, ya que la dictadura lo consideraba un partido parlamentario. Se disolvió el Congreso, se dejaron cesantes a los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de todos los tribunales superiores.

La dictadura ocupó la CGT y la mayoría de los sindicatos, suprimiendo los fueros gremiales. Se intervino la universidad, se eliminaron los centros de estudiantes, se elaboraron listas negras de artistas e intelectuales y se implantó la censura.

¿Qué estaba pasando en Argentina para que la dictadura desatara semejante represión? Desde 1969 se había ido desarrollando un movimiento de protesta social y política de tal envergadura que amenazaba los cimientos mismos del sistema; ergo, los de arriba no podían seguir gobernando con los viejos métodos y debieron recurrir al terror fascista para apagar la protesta.

Impuesto el golpe, los trabajadores –que fueron la columna vertebral del movimiento de protesta antidictatorial– dieron un paso atrás. Sin embargo, poco a poco, pulsando al enemigo aún desconocido, a fines de 1976 fueron surgiendo algunas luchas de los trabajadores como la de Luz y Fuerza, las fábricas automotrices, Standard y La Cantábrica. Luego, en noviembre de 1977, con la gran huelga ferroviaria, se entraría en una nueva fase de la resistencia antidictatorial y a fines de 1978 se produjeron las masivas marchas por la paz con Chile, de la que participaron un gran número de mujeres y jóvenes. Las movilizaciones por la paz fueron de mucha importancia, ya que con la derrota de la política belicista se inició la cuenta regresiva del ciclo dictatorial.

El 27 de abril de 1979, el movimiento obrero realizó la primera huelga nacional. A partir de ese momento comenzaron a generalizarse las luchas,

siendo la larga huelga de los obreros del Frigorífico Swift de Berisso el hito más importante.

También las históricas concentraciones de los chacareros del año 1980, como la de Villa María (Córdoba) y Cañada de Gómez (Santa Fe) contribuyeron al deterioro del gobierno de facto.

Estas importantes luchas, junto a la crisis financiera que se había desatado en el año 1980 conmovieron a la dictadura, ahondando la división y la pugna entre distintos sectores, pero fundamentalmente asestaron un severo golpe a su plan económico.

En la provincia de Santa Fe las luchas también fueron numerosas. Si bien no ha sido posible elaborar un listado exhaustivo, ya que los medios no reflejaban las protestas, durante los primeros años se produjeron una serie de conflictos como los de Celulosa, Cerámica Pilar, John Deere, Sulfacid y Diario *La Capital* en 1976; Luz y Fuerza, John Deere, Cristalerías de Cuyo, Massey Ferguson, Estexa, PASA y ferroviarios en 1977; Jabón Koop, Banco Monserrat y el Frigorífico Swift en 1978; Cimetal, Marieta y UTA en 1979 y bancarios, Estexa y Fader-Messafesa en 1980.

El movimiento democrático, orientado por las Madres de Plaza de Mayo, hizo conocer al mundo los horrores del proceso fascista.

Fue así como hacia fines de 1981, con la dictadura debilitada y totalmente dividida, era desplazado el sector de Videla-Viola y el general Galtieri asumía la presidencia de la Nación.

DE LA ENTREGA DEL '76 A LOS SAQUEOS

El plan económico de la dictadura

El centro del modelo económico de Videla-Martínez de Hoz fue imponer a los asalariados y al conjunto de los sectores populares su plan de superexplotación.

A partir de 1976, la mayoría de las grandes empresas comenzaron a despedir constantemente a sus trabajadores, que fueron expulsados hacia otros sectores de la economía. Un proceso semejante se dio en las empresas estatales, que entre marzo de 1976 y fines de 1980 perdieron 115.000 puestos de trabajo.

El índice de los obreros ocupados en la industria que confeccionó el INDEC con base 1970=100, muestra que el empleo industrial cayó de 119,2 en 1975 a 88,2 en 1980. Al mismo tiempo, la productividad por obrero aumentó de 99,3 a 139,3 durante idéntico período. Simultáneamente, y en este mismo lapso de tiempo, el índice del salario real del peón industrial cayó de 104,4 a 35,5, siendo aún más bajo en los años 1978-1979.

Aun cuando la caída del salario medio no fue tan pronunciada, queda totalmente claro que la superexplotación, tanto por la vía del aumento de la productividad como por la disminución del poder adquisitivo (nivel de vida), ha sido el eje de la política económica del gobierno de facto.

Fue así como las empresas beneficiadas por la dictadura, como por ejemplo Ford, Ingenio Ledesma, Papel Prensa, Acindar, Aluar, Bridas –entre otras– lograron excesivas ganancias; no sucedió lo mismo con las pequeñas, medianas y también algunas grandes empresas que debieron soportar la política de apertura de las importaciones, y sobre todo, de beneficio al capital financiero que con la usura institucionalizada de la tablita terminó absorbiendo gran parte del excedente.

Como contrapartida, a partir de 1976 comenzó un proceso de descapitalización de la industria, con traslado de fondos a la especulación; y luego, como consecuencia de la crisis financiera de 1980, se produjo la fuga de esos fondos al exterior.

La ciudad de Rosario y las localidades que conforman el cordón industrial que bordea el Río Paraná fueron en el pasado, como ya ha sido analizado, uno de los lugares de radicación industrial más importantes del país. Este ciclo, que había comenzado en la década del '30 con la sustitución de importaciones y que se había acelerado a fines de los '50 con las leyes de Promoción y Radicaciones Industriales de Frondizi, se vio interrumpido a partir de 1976, dando paso a un proceso de reestructuración que estuvo vinculado a una reconfiguración del capitalismo.

Las consecuencias de la descapitalización de la industria, tanto en el ámbito local como regional, fueron considerables. No es exagerado sostener que la nueva estrategia económica modificó profundamente lo que había sido durante décadas el perfil productivo de Rosario y el cordón industrial.

Los sectores más afectados fueron las industrias metálicas básicas (además de innumerables talleres, cerraron en Rosario empresas medianas como Chaina y Cura Hnos.); algunos sectores de la industria de la alimentación (como la cervecera, con el cierre de Schlau), o la rama textil (con la quiebra de Estexa); en tanto algunas empresas como Villber ubicada en Villa Constitución y líder a nivel nacional en refrigeración, entraron en una crisis que se transformó en terminal durante el gobierno de Alfonsín. Según datos oficiales, en 1974 había en Rosario 4.892 establecimientos industriales que ocupaban 46.706 obreros y producían más de 420 millones de dólares. Una década después existían 4.054 empresas que ocupaban 38.500 personas y producían 400 millones de dólares de valor agregado. Habían desaparecido 838 establecimientos industriales y se habían perdido 8.206 puestos de trabajo.

Mientras tanto, en el campo, el alza relativa de los precios internacionales junto al aumento de la producción terminó beneficiando fundamentalmente a los grandes propietarios, abriendo paso a un acelerado proceso de concentración de la tierra. Las enormes ganancias que dejaron varias cosechas récord fueron a parar a las arcas de los terratenientes, del sector financiero y de los intermediarios exportadores.

Se podría decir que, sobre la base de la superexplotación de los trabajadores urbanos y rurales, el plan económico de la dictadura "funcionó" durante los primeros años. Se aumentaron las exportaciones, hubo saldo comercial positivo e ingresaron capitales especulativos; esto posibilitó un aumento notable de las reservas y, como contrapartida, de la emisión monetaria. Pero como ésta se volcó a la especulación –se liberaron las tasas garantizando el cobro de los depósitos a través del BCRA–, el resultado fue una persistente inflación pese a los bajos salarios.

Con la quiebra del BIR (grupo Trozzo) y del Banco de los Andes (grupo Greco), detonó la crisis financiera. El gobierno de facto emitió dinero por valor de 5.000 millones de dólares para capear la tormenta. Billones de pesos nuevos se volcaron para salvar a Trozzo, Greco, Piñeiro Pacheco, Oddone, etc. En un principio, estos ignotos banqueros –que no representaban al capi-

tal financiero tradicional– lograron posicionarse gracias a sus relaciones con Gelbard y Graiver, y luego, debido a los lazos que tenían con los generales que hegemonizaron el proceso, consiguieron que sus desconocidas instituciones lideraran el ranking de los depósitos bancarios, superando incluso a la elite de la banca internacional (Citybank, Chase Manhatan Bank, etc.). El vaciamiento de las arcas del Estado fue escandaloso; por ejemplo, con el Banco Los Andes ya prácticamente vaciado, el BCRA le prestó a Greco un billón de pesos nuevos, un dinero del todo irrecuperable.

Con el terremoto financiero cayeron las reservas y con ello el andamiaje de la plata dulce. A partir de ese momento, Martínez de Hoz, Sigaut, Aleman, Dagnino Pastore y Wehbe no pudieron hacer otra cosa que "administrar" la crisis.

Mientras transcurría la emergencia financiera y la economía nacional era un tembladeral, comenzaron a aparecer grietas en los sectores productivos, a la par que se incrementaba el movimiento de protesta social. Por ejemplo, en Rosario, en octubre de 1980, se constituyó la Convocatoria Nacional de Empresas (CONAE), con fuerte presencia de la burguesía nacional, cuya declaración inicial se firmó en el Club Sportivo América de esa ciudad. La nueva entidad nucleaba a distintas organizaciones empresarias del interior e irrumpió en el escenario nacional con un llamativo poder de movilización. Reclamaban "*salvar la situación de emergencia de productores, industriales y comerciantes mediante la consolidación y diferimiento de sus deudas*".

Las entidades representativas de los sectores más concentrados de la economía, como CARZOR, la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Cámara Argentina del Comercio o el Movimiento Industrial Argentino, se opusieron a la iniciativa y sostuvieron públicamente su coincidencia con el programa económico del Proceso.

El surgimiento de la CONAE preocupó a la dictadura que atribuyó al dirigente de la Federación Agraria Argentina (FAA) Humberto Volando una ideología extremista y lo citó al Ministerio del Interior para advertirlo por el tenor de sus declaraciones públicas.

A principios de 1981 se realizaron paros y movilizaciones en distintos lugares de la provincia, en el marco de la jornada de lucha denominada como "Día del Reclamo Nacional para el Cambio". Evaluando la medida de fuerza, la CONAE de Rosario hizo público un comunicado donde ya no se hablaba de correcciones en el rumbo, sino de una oposición frontal a la política económica vigente.

El proceso de entrega de los puertos

Mediante la "ley" 22108/79, la dictadura militar permitió que grupos privados instalaran puertos propios, principalmente en la zona del Gran Rosario, desde los cuales se comenzó a comercializar la mayor parte de las

exportaciones de granos y aceites vegetales de la Argentina. Como vimos en el capítulo anterior, la acentuación del perfil agroexportador de la economía nacional terminó facilitando los procesos de desindustrialización, extranjerización y reprimarización puestos en marcha por la dictadura. De esta manera, los ancladeros y sus instalaciones ubicados sobre el Río Paraná y conectados con el mar, se transformaron nuevamente en objetivos primordiales del imperialismo y los grupos intermediarios locales.

Así surgieron los primeros puertos privados en la zona: Quebracho, de Cargill y Genaro García en 1980; Nidera en 1982; Punta Alvear y FACA Terminal I en 1983; FACA Terminal II en 1986; Vicentín en 1987; Terminal VI en 1988 y Dreyfus en 1992.

El gobierno de Alfonsín, además de otorgar nuevos permisos en el marco de la "ley" de la dictadura, firmó un acuerdo con la Unión Soviética para que una empresa estatal de ese país efectuara el dragado del puerto nacional de Bahía Blanca y el de Quequén, obras que fueron saldadas por medio de la balanza comercial a lo largo de diez años.

En el año 1992, el gobierno de Menem sancionó la Ley 24093 –votada por la mayoría de los legisladores– que "legalizó" los puertos privados habilitados por la dictadura con permisos precarios. La norma también sentó el marco jurídico necesario para la apertura de nuevos puertos, delegando en el Poder Ejecutivo facultades que son exclusivas del Congreso –Art. 67 inciso 9 de la Constitución Nacional– en cuanto a la habilitación de los mismos. De esta manera se crearon las condiciones para transferir al capital privado las cinco instalaciones portuarias más importantes del país: Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca, Quequén y Santa Fe.

La mayoría de los legisladores santafesinos operaron a favor de la privatización de los puertos. Por ejemplo, el diputado por Santa Fe Alberto Natale (PDP) fundamentó su voto positivo sosteniendo:

> "*...Reconocemos la existencia de los puertos privados y los habilitamos plenamente en función de la realidad de esa existencia. Disponemos la transferencia de los puertos nacionales a las provincias y posibilitamos su privatización...*"
>
> (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 3 y 4 de diciembre de 1991. Citado por Echani, Juan, *Los puertos en la provincia de Santa Fe*, Rosario, 2002).

Hacia 1984, el puerto de Rosario, en manos de la Administración General de Puertos, concentraba todavía la mayor parte de las exportaciones de granos del país. Cuatro años después eran las instalaciones privadas del norte del Gran Rosario las que llevaban la delantera, ya que pasaron a absorber el 40% de las exportaciones argentinas de granos, aceites y subproductos.

Un dato interesante a analizar fue la lucha que se desató entre distintos grupos de poder por el manejo de las exportaciones, luchas que incluso se dirimieron con el típico estilo mafioso. Por ejemplo, la Unidad VII de la Junta Nacional de Granos (JNG) estuvo durante años fuera de operaciones.

Esta Unidad –la más moderna de Sudamérica– fue construida en la década del '70, pero cuando concluyeron las obras fue inutilizada por un sabotaje.

A la vez que se liquidaba la Junta Nacional de Granos (ya que prácticamente se habían regalado los dieciséis elevadores que poseía en el territorio nacional), la Unidad VII –orgullo de la región y del país– era puesta en funcionamiento usufructuada por el concesionario privado. Por ese entonces, muchos especialistas sostenían que el atentado a la mencionada Unidad fue parte del proceso de liquidación de la JNG.

Paralelamente a la privatización de los puertos y las instalaciones de la JNG, el gobierno de Menem cedió a favor del Consorcio Hidrovías SA –sociedad conformada por la firma belga Jan de Nul y la local EMEPA SA– las obras de dragado del Río Paraná desde el Río de la Plata hasta Santa Fe. La cesión se hizo por un plazo de diez años que fue prorrogado por Menem en 1997 por ocho años más. El sistema de adjudicación fue por el régimen de concesión por peaje, otorgándole además al concesionario el pago de un subsidio de 40 millones de dólares anuales. Se armó así un negocio de 1.500 millones de dólares (800 millones por peaje y 700 por subsidios).

En octubre del 2001, el gobierno de De la Rúa-Cavallo eliminaba el subsidio de 40 millones, motivo por el cual se abriría un proceso de renegociación. Finalmente, luego de la devaluación, Eduardo Duhalde terminó beneficiando a la empresa concesionaria con la dolarización de sus tarifas para el tráfico internacional, mientras que las mismas eran pesificadas para el movimiento de cabotaje, que representaba sólo el 9% de la facturación de la empresa.

Al concretarse la renegociación con el grupo belga, fue descartada la oferta de la empresa norteamericana Great Lakes Dredge & Dock Company, que había manifestado su interés de quedarse con la concesión a un costo anual no superior al 95% de lo recaudado por peaje a la tarifa actual y sin subsidio del Estado.

También fue desechada la propuesta de la Cámara Argentina de Empresas de Dragado que sostenía que "*las empresas nacionales del sector están en condiciones de realizar los mismos trabajos por menor precio, en pesos, y fundamentalmente con una gran capacidad reactivadora para la economía argentina, y en particular de una industria que hoy se encuentra en vías de desaparición, generando en consecuencia empleo y valor agregado para nuestro país*".

Cuando se analiza la privatización del dragado del Río Paraná habría que tener en cuenta que se trata del segundo convenio más grande de la historia del dragado mundial, convenio en el que aparece beneficiada la empresa belga Jan de Nul, que para algunos especialistas en temas económicos se trataría de un monopolio vinculado al capital inglés.

Rosario, el "reinado" de Cristiani y Natale

Tal como sucedió a nivel nacional, en el ámbito provincial y local las Fuerzas Armadas asumieron el control del aparato del Estado. El coronel José

María González fue el primer interventor provincial siendo reemplazado en abril por el vicealmirante Jorge Aníbal Desimone, quien dirigiría los destinos de Santa Fe hasta 1981. La Marina se había hecho cargo de la Provincia.

La Universidad Nacional de Rosario quedó en manos de un interventor militar, el coronel Sánchez Matorras.

En la intendencia de Rosario, luego de un breve período de poco más de un mes, el coronel Hugo Laciar –primer interventor– cedió su lugar a quien durante un lustro se convertiría en amo y señor de la ciudad y la cara visible de la dictadura: el capitán Augusto Félix Cristiani.

Tanto en el ámbito provincial como local, se implementó una drástica disminución del personal como parte de un proceso de "ajuste" y "racionalización" impuesto por las autoridades militares. La purga dentro de las distintas estructuras estatales se concretó a través de diversos mecanismos, entre los que sobresalía la "ley de prescindibilidad", por la cual en todo el país miles de empleados fueron expulsados de la administración pública.

En Rosario, mientras el intendente Cristiani aseguraba que no habría cesantías injustificadas, en unos pocos meses más de dos mil empleados fueron despedidos, cifra que se incrementó en los años siguientes. Las excusas para tomar estas medidas llegaron a ser inverosímiles. Por ejemplo, un día de fines de 1976, efectivos del Ejército llegados en varios camiones cerraron las puertas de la Municipalidad y en apenas unos minutos ocuparon todas las oficinas. Fueron despedidos –acusados de *ñoquis*– la totalidad de los empleados que en ese momento no estaban en sus puestos de trabajo.

El perfil que intentó mostrar la intervención fue una combinación entre el "orden" generado por la acción represiva y un discurso "eficientista" de la administración del municipio. Cristiani sólo dialogaba con las llamadas "fuerzas vivas" de la ciudad: la Bolsa de Comercio, la Sociedad Rural, la Federación Gremial del Comercio y la Industria, la Asociación Empresaria o el Arzobispado.

A nivel político, sólo el PDP –Natale fue intendente en la última etapa del gobierno de facto– y el MID tenían un fluido diálogo con Cristiani. Debido a que éste no conversaba con los partidos, los encuentros eran personales y se gestaban a través de entidades intermedias, como por ejemplo la Asociación Empresaria de Rosario. Fue precisamente esta institución la que conectó a Cristiani con Carballo, tal vez el más asiduo interlocutor político que tuvo la intervención militar. El propio Carballo fue quien se encargó de explicitar las coincidencias existentes entre su gestión y la de Cristiani. En un reportaje concedido a *Matutino Dominical Rosario*, en octubre de 1981, sostenía:

> *"...en honor a la verdad, debo decir con alegría y con solidaridad que la actual administración del Capitán Cristiani está revisando aquel proyecto que nosotros habíamos hecho (se refiere a su proyecto de plan regulador)... debo recalcar que fue el único gobierno (por el de Cristiani) que no se ocupó*

de destruir lo que nosotros habíamos hecho sino por el contrario retomó muchas de las cosas que nosotros habíamos encarado...".

(*Matutino Dominical Rosario*, Rosario, semana del 4 al 10 de octubre de 1981, citado por Pla, A. y otros, *op. cit.*)

Las numerosas obras ejecutadas en la ciudad con motivo de la realización del Mundial 78 recibieron el caluroso aplauso de los llamados sectores "representativos". Los accesos a la ciudad, el Centro de Prensa en la Plaza Pinasco, la ampliación de las avenidas y los bulevares, la autopista Rosario-San Nicolás y el Hospital de Emergencia Clemente Álvarez fueron las más importantes. Un intendente exultante participaba de las inauguraciones de estas obras mientras el coro de zalameros de las llamadas "fuerzas vivas" que lo acompañaban a todos los actos, junto a la dirigencia política colaboracionista, sostenían que, como ciudad, Rosario vivía una época de desarrollo que nos remitía a lo sucedido durante la gestión de Carballo.

Dejando en claro la ausencia de una política seria de preservación del patrimonio urbanístico, hacia 1980, luego de demoler edificios de alto valor histórico, como el del Banco Nación de Córdoba y San Martín, las palmeras de Bulevar 27 de Febrero (con motivo del ensanche de la avenida) o las instalaciones del ex Mercado Norte, la Municipalidad acuñó el eslogan "*Rosario: ciudad limpia, ciudad sana, ciudad culta*". La imagen de ciudad que quería construir Cristiani tenía como objetivo tapar el terror impuesto sobre la sociedad a partir del golpe de estado de 1976.

También era cierto lo que sostenía el diario *La Capital* cuando afirmaba que "*Rosario es uno de los pocos lugares del país donde el periodismo se ha desenvuelto sin problemas con las autoridades*". La amistad de muchos comunicadores con los hombres del gobierno militar era innegable.

Por ejemplo, con motivo de la realización del campeonato mundial, Evaristo Monti escribía en el diario *La Capital*:

"*...Rosario guardará imborrablemente la escena captada por la televisión y retenida por las fotografías, cuando el teniente general Videla es alzado por la ovación y levanta los pulgares. ¡Videla vino a Rosario! Cuatro veces durante ocho días. Videla fue ovacionado por una multitud que actuó selectivamente... la muchedumbre se ratifica, sabe lo que quiere, cuando le anuncian un ex canciller extranjero (Henry Kissinger, que había venido a Rosario a ver el partido) silba...*".

(Diario *La Capital*, *"Suplemento Deportivo"*, Rosario, 25 de junio de 1978)

Evaristo Monti, un estrecho colaborador de Carballo, compartía con éste su admiración por el Proceso de Reorganización Nacional dejando en claro su postura antiyanqui.

Fue precisamente este importante periodista quien, a través de los micrófonos de LT8, se erigió en uno de los principales voceros político e

ideológico del régimen dictatorial. Aunque no fue el único, dado que la mayoría de los medios colaboraron y algunos hasta lograron posicionarse empresarialmente. Por ejemplo, bajo el paraguas de la dictadura, luego de que Alberto Gollán, actual Cónsul Honorario del Reino Unido en Rosario, facilitara los micrófonos de Canal 3 para que Roberto Eduardo Viola explicara al país el plan de gobierno del segundo turno dictatorial, se conformaba en la ciudad lo que sería el primer "multimedio" del interior del país: *Radiotelevisión del Litoral*.

A partir de abril de 1981, con el falaz argumento de "*facilitar una transición hacia la democracia*" (este tema todavía no estaba instalado en la agenda militar), el PDP aceptaba hacerse cargo de la intervención de Rosario y el Dr. Alberto Natale era nombrado intendente.

A pesar de que Natale intentó tomar distancia de su antecesor –rechazó vivir en la residencia de calle Oroño al 1500 adquirida por Cristiani como vivienda del intendente–, su estilo de gobierno fue similar.

La gestión de Natale podría resumirse de la siguiente manera: **buscar consenso en distintos sectores sociales, sobre todo en las llamadas "fuerzas vivas", asumiendo favorablemente algunas demandas barriales, poniendo especial atención en los problemas del centro y dotando a la ciudad de la mayor cantidad de obras públicas posibles.**

En los dos años de gobierno de Natale, como había sucedido con Cristiani, la acción pública del intendente se tradujo en inauguraciones de obras, algunas visitas a los barrios y la permanente realización de reuniones con las "fuerzas vivas" para revisar los problemas de la ciudad.

La flamante gestión continuó con su política represiva, pese a que desde de la derrota de los planes de guerra con Chile y las crecientes luchas populares, se había comenzado a transitar un nueva etapa política. Un ejemplo fue la promulgación, en noviembre de 1981, de una "ordenanza" sobre Espectáculos Públicos donde se establecía que cuando la Municipalidad considerara necesaria la revisión de la autorización para exhibiciones cinematográficas o teatrales, se debería solicitar que se expida la Comisión Municipal Calificadora de Espectáculos Públicos e Impresos Literarios. Ésta, integrada entre otros por la Liga de la Decencia y la Liga de Madres de Familia, se ocupó en distintos momentos de recalificar y prohibir películas que incluso habían recibido autorización en el ámbito nacional.

La sociedad, sin embargo, estaba cada vez más dispuesta a enfrentar la política de la dictadura.

En noviembre de 1981, coincidiendo con los pasos políticos que se habían dado en Capital Federal, se constituyó en Rosario la Multipartidaria, integrada, entre otras fuerzas, por la UCR, el PJ, la DC, el PI, el MID, el PSP y el PCR (suscribió sólo algunos documentos). En el programa quedaba totalmente claro que la confluencia de distintas fuerzas políticas "*no significa un acuerdo electoral, ya que cada partido convocante conserva su individualidad. Está inspirada en la gravedad de la hora que exige la concurrencia patriótica de todas las fuerzas de signo nacional para superar la crisis*".

El programa de la Multipartidaria exigía "*suprimir la legislación que restringe las actividades políticas y culturales*" y en su primer punto reclamaba: "*Que es imprescindible y urgente volver a la plena vigencia de las instituciones republicanas, a través de un proceso electoral sin condiciones ni condicionamientos de ninguna naturaleza*".

La represión en Santa Fe

Tal como lo expresaba Feced, la acción represiva encontró su fundamento más sólido en la "guerra" no convencional desatada contra las organizaciones armadas. Sin embargo, la embestida represiva implementada por la dictadura tuvo su blanco principal en el conjunto de la sociedad y principalmente en el movimiento obrero. Como sostenían los organismos de derechos humanos "*Las calles, las fábricas, las escuelas, las universidades, los sindicatos y los domicilios de los ciudadanos se convirtieron en los campos de batalla de esta singular 'guerra'*". Guerra que no fue tal ya que, a pesar de la propaganda oficial que repetía hasta el cansancio que "*se había descabezado la subversión*", los procedimientos y allanamientos coordinados por las fuerzas policiales y militares continuaron prácticamente hasta la derrota del régimen dictatorial.

El informe de la delegación Santa Fe de la CONADEP estableció que en Rosario y su zona de influencia el número de desaparecidos fue menor que en otras ciudades del país. Por otra parte, el mencionado informe también reconoce que "*Rosario constituye el lugar en donde más torturados hubo (...) y que en muchos casos se transformaron en asesinatos*".

Los detenidos estaban diseminados en distintos centros clandestinos, siendo el más importante de todos el que funcionaba en el subsuelo de la Jefatura de Policía, que llegó a albergar a 1.800 personas y que estaba comandado por Feced, el jefe del Servicio de Informaciones. Los otros centros de detención reconocidos de Rosario y su zona de influencia fueron: el Batallón 121; la Fábrica de Armas "Domingo Matheu"; la Fábrica de Armas de Fray Luis Beltrán; el Comando del II Cuerpo, con sede en Córdoba y Dorrego, hoy ocupado por "*Rock & Fellers*"; La Calamita, localizada en Granadero Baigorria; la Escuela Técnica Magnasco de Rosario; La Quinta de Funes, ubicada en esa ciudad, donde habría dos centros más; los albergues de Acindar en Villa Consitución y La Intermedia en La Ribera.

La sociedad se fue enterando con cuentagotas de la represión desatada en Santa Fe. Los diarios casi siempre transcribían de forma textual los comunicados del II Cuerpo de Ejército que, en general, detallaban allanamientos y "enfrentamientos" con "subversivos". La reconstrucción de estos casos hecha por los organismos de derechos humanos y la CONADEP demostró que esos "enfrentamientos" se trataron en realidad de fusilamientos de ciudadanos indefensos –ejecutados luego de pasar por los centros de detención clandestinos donde fueron brutalmente torturados– para luego ser enterrados en calidad de NN.

En la Provincia hubo casos paradigmáticos que por su magnitud no lograron ser ocultados ante la opinión pública, como el fusilamiento de siete supuestos militantes montoneros producido en la localidad de Ibarlucea; la llamada "Masacre de Los Surgentes", en la que fueron asesinados en octubre de 1976 siete detenidos que se encontraban alojados en la Jefatura de Policía de Rosario; o la matanza ocurrida el 31 de diciembre del '76 en un edificio de calle Balcarce al 700, que fue bombardeado por las fuerzas represivas con bazookas con un saldo de cinco muertos, de los cuales tres eran mujeres que fueron arrojadas por las ventanas del departamento.

Los grupos de poder de Rosario no sólo acompañaron con entusiasmo la gestión de Cristiani al frente de la Municipalidad, sino también la política represiva de la dictadura. Mientras la mayor parte de la sociedad permanecía silenciada por el terror, las "fuerzas vivas", la Iglesia, el principal diario local, los canales de TV, la mayoría de las emisoras radiales, se convirtieron en voceros que legitimaban el nuevo orden social que la dictadura había impuesto, justificando plenamente la represión.

En marzo de 1978, con motivo del alejamiento por "razones personales" de Feced de la jefatura de la Unidad Regional II, se sucedieron una serie de saludos de adhesión y agradecimiento por parte de estos sectores al genocida renunciante. El intendente Cristiani, la cara visible del Proceso de Reorganización Nacional, cedió los salones del Palacio Municipal para que las "fuerzas vivas" representadas por el Sr. Roberto Murdocca, presidente de la Federación Gremial del Comercio y la Industria, expresara su reconocimiento a la gestión de Feced.

En septiembre de 1979, con la visita de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) a la Argentina y a Rosario, comenzó a quedar más clara en la opinión pública la magnitud de lo que estaba sucediendo. La visita de la CIDH fue precedida por comunicados y declaraciones de hostilidad de numerosos sectores pro dictatoriales. En este sentido, y aprovechando la estrecha relación de César Luis Menotti con las autoridades militares, se intentó transformar el júbilo popular desatado por la obtención del Campeonato Mundial Juvenil disputado en Japón, en movilizaciones contra los representantes de la CIDH; en toda la Argentina se repartían obleas con el eslogan "Los argentinos somos Derechos y Humanos".

Las Madres de Plaza de Mayo desde un principio habían denunciado, tanto en el ámbito local como en el exterior, las bárbaras violaciones a los derechos y la integridad de las personas que se cometían en el país. De todos modos, la visita de la CIDH constituyó un punto de inflexión en este tema. El mundo tomó conocimiento de las atrocidades cometidas por la dictadura militar, comenzando un período de enormes presiones internacionales sobre los genocidas, que tuvo su máxima expresión en la designación, en el año 1980, de Adolfo Pérez Esquivel, un militante por los derechos humanos que había estado desaparecido, como Premio Nobel de la Paz.

La Guerra de Malvinas

Hacia fines de 1981 y principios de 1982 era evidente que el escenario político se había modificado. Las reglas del juego seguían siendo impuestas por el gobierno militar, pero la dictadura comenzaba a ser jaqueada desde distintos frentes, lo que daba lugar a una aceleración de la crisis política. En diciembre de 1981, la Multipartidaria hizo público un documento que se titulaba *"Antes de que sea tarde"* y pocos días después anunció una campaña de movilización y esclarecimiento de la población.

En enero de 1982, con la intención de mostrar un "cambio", fue designado al frente del Ejecutivo provincial Roberto Casis, hombre perteneciente a Línea Popular (el partido fundado por Sylvestre Begnis). Línea Popular (LP) junto al Partido Demócrata Progresista (PDP) fueron las dos fuerzas políticas provinciales más abiertamente procesistas.

En febrero, mientras la Multipartidaria comenzaba a realizar actos en el interior del país y se multiplicaban las reuniones opositoras, la CGT liderada por Ubaldini llamó a una movilización que se realizaría en Plaza de Mayo.

Durante el mes de marzo, y en todo el país, se sucedieron reuniones que tenían como objetivo preparar la marcha organizada por la CGT opositora. Fue así como el 30 de marzo de 1982, convocadas por la CGT, se realizaron grandes manifestaciones antidictatoriales en las principales ciudades de la República, principalmente en Buenos Aires.

En Rosario, la "CGT-calle Italia" convocó a una movilización que tenía como objetivo llegar a Plaza 25 de Mayo y que, ante el impedimento policial, debió marchar por peatonal Córdoba hacia el oeste, rumbo a la sede de la central gremial. Los momentos de mayor tensión se vivieron en las esquinas de Córdoba y Entre Ríos y Córdoba y Corrientes, lugares donde los organismos represivos atacaron a los participantes.

Las movilizaciones en Buenos Aires y el resto del país, de modo semejante a lo sucedido en Rosario, fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad.

Apenas 48 horas después de estos hechos, el 2 de abril, en cuanto se conoció la noticia de la recuperación de las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur para la soberanía nacional, una multitud se movilizó a lo largo y a lo ancho de la República.

Ese día, en Rosario, el comandante en jefe del II Cuerpo de Ejército, el general Juan Carlos Trimarco, organizó una ceremonia en la Plaza 25 de Mayo para manifestar el apoyo de la sociedd a las Fuerzas Armadas por la iniciativa de recuperar las islas. El personal municipal, trabajadores de distintos sindicatos, vecinalistas, alumnos de diversas escuelas y una entusiasta ciudadanía (sectores sociales medios y altos) se hicieron presentes en el lugar. El propio intendente fue aplaudido por la multitud cuando apareció en las escalinatas de la Municipalidad y posteriormente debió saludar desde los balcones del Palacio de los Leones. Este episodio de acercamiento

entre las Fuerzas Armadas, los políticos colaboracionistas y el pueblo se reiteró en varias oportunidades, demostrando que a partir de la recuperación de las islas había cambiado la contradicción principal en el país.

El pueblo se unificó transitoriamente en pos del objetivo de recuperar las islas, dejando de golpear tácticamente a la odiada dictadura, y durante un breve período las contradicciones que habían atravesado la escena política y social durante los últimos años quedaron diluidas en el marco del supraconflicto.

A partir de la recuperación de las islas se generó un consenso social pocas veces observado. Ciudadanos anónimos, militantes de distintos partidos políticos, de organizaciones sociales, de agrupaciones estudiantiles, etc., engrosaron las listas de voluntarios dispuestos a combatir en Malvinas, y mediante una movilización popular casi nunca antes registrada en la historia local, una multitud empapada se concentraba frente a Canal 5 –que había organizado un programa ómnibus de solidaridad– para donar las más diversas pertenencias al Fondo Patriótico.

La recuperación de Malvinas conmovió a la sociedad argentina y produjo un profundo remezón patriótico y antiimperialista. La posterior agresión inglesa y la lucha de nuestro pueblo contra la misma, reafirmaron aún más esos sentimientos.

Tras la derrota sobrevino una política desmalvinizadora tendiente a que el pueblo argentino olvidara la guerra; la misma, que fue llevada adelante por el último turno dictatorial y los gobiernos democráticos que se sucedieron, fundamentalmente el alfonsinista, tuvo que ver con la profundidad de los sentimientos nacionales que se removieron a partir del desembarco.

Nunca antes había quedado tan claro para nuestro pueblo que la Argentina es un país dependiente, con una parte de su territorio nacional sometido al dominio colonial; y, a la vez, es un país disputado por las grandes potencias.

En el momento de la agresión inglesa, la Comunidad Económica Europea nos impuso un boicot económico. Los estadounidenses, después del juego artero de su secretario de estado, Alexander Haig, ayudaron a los británicos a preparar el ataque. La actitud hipócrita de Estados Unidos tenía que ver con el temor de que se encendiera una hoguera en su patio trasero. Por su parte, los soviéticos, que supuestamente nos brindarían información satelital, no hicieron uso de su derecho a veto en las Naciones Unidas contra la acción de los ingleses. Luego suspendieron la compra de nuestros productos agropecuarios, presionando por obtener concesiones de nuestro país a cambio de una hipotética ayuda, que nunca existió. Es más, la Unión Soviética nunca reconoció la soberanía argentina en Malvinas.

China también se abstuvo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con la diferencia de que posteriormente apoyó la soberanía argentina sobre las islas. También quedó totalmente claro para nuestro pueblo

que los únicos amigos de Argentina eran los países del Tercer Mundo, particularmente Cuba, Perú y Venezuela.

La guerra por imponer la soberanía nacional en las islas Malvinas, Georgia y Sándwich del Sur, desde el punto de vista nacional, fue esencialmente justa. Fue la guerra entre un país oprimido (Argentina) que se atrevió a levantarse en armas contra el país opresor (Inglaterra).

Es cierto que en Argentina el poder estaba en manos de una dictadura prooligárquica y proimperialista. Pero a semejanza de lo que sucedió en 1806 y 1807 con las invasiones inglesas –en ese entonces nuestro país estaba sometido por el colonialismo español– el pueblo ubicó con justeza al enemigo principal, por encima de las pretensiones de la dictadura de utilizar la guerra para blanquear los 30.000 desaparecidos e intentar perpetuarse en el poder.

Definido correctamente el enemigo táctico, en las islas miles de jóvenes combatientes –soldados, suboficiales y algunos oficiales patriotas– enfrentaron heroicamente con las armas en las manos la agresión imperialista, y en el continente, el pueblo argentino protagonizó una de las mayores movilizaciones de su historia. Esta oleada patriótica que conmovió al país tropezó con la línea política y militar que adoptó la dictadura, línea contraria a la que requería una guerra nacional. **La dirección de las Fuerzas Armadas, que por su historia y sus intereses de clase era incapaz de garantizar la unidad nacional que exigía la guerra, trabajó para evitar que el apoyo pasivo que brindaba el pueblo argentino, se transformara en activo.**

En este contexto, la única posibilidad que tenía la Nación de enfrentar con éxito la agresión, pasaba por organizar al pueblo para enfrentar al imperialismo inglés. Una firme posición de las organizaciones políticas, gremiales, sociales, etc. tratando de imponer el no pago de la deuda externa a los ingleses, la nacionalización de las estancias de su propiedad y la incautación de los bienes de sus compañías y bancos, seguramente hubiera ayudado a que el pueblo tomara en sus manos el conflicto y simultáneamente hubiera reforzado el respaldo de las naciones amigas, obligando a definirse a aquellas que vacilaban desconfiando de la voluntad de la dictadura de luchar hasta el fin.

En definitiva, el resultado de la guerra podría haber sido distinto, si se la hubiera concebido como una lucha prolongada que hubiera conmovido a toda América. La unión nacional contra la agresión imperialista exigía que el pueblo argentino tomase en sus manos la defensa de la patria, movilizándose y rescatando las mejores tradiciones de lucha por la independencia nacional, **como sucedió en las dos primeras invasiones inglesas, en las que el pueblo y la nación en armas derrotaron al colonialismo británico.**

Este camino no fue el que se impuso, y quienes pelearon con patriotismo vieron malogrado su empeño, debido al claudicante accionar de una dictadura que era un instrumento fundamental del sistema de sometimiento nacional.

Rosario: contraofensiva y conmoción por bárbaros crímenes

Tras la derrota de Malvinas, el régimen de facto comenzó a transitar su último tramo en un clima de creciente agitación política y social.

Además de los constantes reclamos sindicales, desde comienzos de 1982 comenzó a desarrollarse un poderoso movimiento de deudores hipotecarios afectados por la indexación dispuesta por la Circular 1050 y las amenazas de remates hipotecarios.

En la ciudad de Rosario y en el resto de la Provincia, los damnificados elevaron petitorios y organizaron concentraciones exigiendo la modificación del sistema usurario. La larga lucha culminó con un triunfo parcial pero importante de los demandantes, cuando a fines de ese año el gobierno nacional anunció la modificación de la disposición, excluyendo del sistema a los créditos para vivienda única que otorgaba el Banco Hipotecario Nacional.

También durante ese año, los trabajadores comenzaron a exigir reivindicaciones que excedían el marco del aumento salarial, como los reclamos de los maestros de AMSAFE, CTERA y UDA que, al pedido de una recomposición de sueldos, le incorporaron la exigencia de incrementar el presupuesto educativo.

Por su parte, el movimiento obrero rosarino estaba dividido. Por un lado se ubicaba la "CGT-calle Italia", orientada por el dirigente panadero Hugo Ortolán y vinculada a la combativa CGT Brasil, liderada por el cervecero Saúl Ubaldini; por el otro, la "CGT-calle Córdoba", conducida por el Secretario General del Sindicato de la Carne, Gerardo Cabrera, con posiciones cercanas a las sustentadas por la dialoguista CGT Azopardo.

Esta división no impidió la creciente movilización obrera. La disputa establecida entre el gobierno militar y el frente sindical condujo, hacia septiembre de 1982, a la realización de un paro general de las dos centrales sindicales, fijado con un día de diferencia para protestar por la situación socioeconómica.

La CGT Azopardo levantó la medida de fuerza y sólo se concretó el paro por "Paz, pan y trabajo" de la CGT Brasil. En Rosario, la movilización fue masiva y unió la sede de la "CGT-calle Italia" y la Plaza 25 de Mayo, participando, además de los sindicatos, el movimiento estudiantil, diversas asociaciones profesionales, sectores de la Iglesia e incluso dirigentes empresariales.

A fines de 1982, la CGT Brasil organizó un multitudinario acto en el Patio Cívico del Monumento a la Bandera que congregó más de 10.000 personas, y la CGT Azopardo convocó a un paro para el 6 diciembre al que rápidamente adhirió la CGT combativa.

El mes de diciembre se inició con el tercer paro nacional, convocado por las centrales sindicales, que contó con un amplio acatamiento a nivel nacional y local; y acabó con la impactante "*Marcha por la Democracia y la*

Reconstrucción Nacional", organizada por la Multipartidaria en Capital Federal, de la que participaron más de 100.000 personas.

El acto de la Multipartidaria en Rosario también logró reunir una importante cantidad de ciudadanos, que manifestaron su apoyo a una inmediata democratización y criticaron duramente la "concertación" presentada por las autoridades militares, descargando los dardos contra los partidos amigos del régimen de facto.

Hacia fines de 1982, el ex intendente Cristiani visitó Rosario con el argumento de saludar a algunos amigos. En realidad, tanto el gobernador Casis como el intendente Natale le habían comunicado a las autoridades militares la decisión de retirarse de esos cargos con el objetivo de ser protagonistas en el proceso electoral que asomaba, por lo que Cristiani pretendía realizar un intento para volver a la Intendencia.

Ya con la dictadura aislada y en retirada, el empresario Víctor Cabanellas, representante de las "fuerzas vivas", ex presidente de la Bolsa de Comercio y en su juventud militante del PDP, fue designado como sucesor de Natale. Por su parte, el rufinense Héctor Salvi, ex secretario de la Gobernación durante la gestión de Casis, asumió como gobernador de Santa Fe.

El 28 de marzo de 1983, las dos centrales sindicales organizaron una medida de fuerza que tuvo un respaldo contundente. En Rosario y el cordón industrial adhirieron los trabajadores de la industria, los servicios y el comercio, no funcionó el transporte ni hubo atención en los bancos, y los establecimientos comerciales y la administración pública permanecieron cerrados. No atendieron las estaciones de servicio, no salieron los diarios y los trabajadores de radio y televisión adhirieron con paros parciales; tampoco hubo espectáculos públicos. El acatamiento fue superior al 90%. La enorme movilización de los trabajadores y el pueblo argentino asestó un severo y definitivo golpe a la dictadura, que ya estaba negociando su retirada.

Asimismo, se realizaron importantes actos el 30 de marzo –a un año de la represión de Galtieri– y, luego de un prolongado período, se volvió a conmemorar el 1 de Mayo en todo el país. En octubre de 1983, con la CGT ya reunificada, se realizó el quinto y último paro nacional contra el régimen dictatorial.

A medida que la protesta social se desarrollaba y se tornaba incontrolable, la dictadura, que no se resignaba a aceptar definitivamente su derrota, apelaba a sus métodos favoritos para acallar la protesta social. A mediados de abril se produjo el último caso de secuestro y desaparición de personas, que tuvo por escenario la ciudad de Rosario.

En un procedimiento realizado en un bar de la calle Córdoba y Ovidio Lagos, varios hombres armados detuvieron a dos militantes peronistas que habían estado vinculados a Montoneros: Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi. Ambos, al momento de la detención, integraban la agrupación Intransigencia y Movilización que orientaba el catamarqueño Vicente

Leónidas Saadi. La inmediata movilización de los familiares, organismos de derechos humanos, partidos políticos e inclusive, del consulado italiano (Cambiasso tenía doble nacionalidad), no evitaron el desenlace tan temido. Pocos días después, la policía de la provincia de Buenos Aires informaba que en un "enfrentamiento" armado ocurrido en las inmediaciones de la ciudad de Zárate "*habían sido abatidos dos activos militantes montoneros*". En realidad fueron fusilados por un comando policial del que participaba el por entonces suboficial Luis Patti.

La nutrida movilización de repudio –convertida en una emotiva "Marcha del Silencio"– en respuesta a los asesinatos de Cambiasso y Pereyra Rossi, reclamando el esclarecimiento y castigo a los responsables, fue un claro indicador de la temperatura social y política que vivía la ciudad.

La sociedad local se vio conmovida a los pocos días por otro bárbaro crimen. El 22 de mayo de 1983, era asesinado con un certero golpe que le seccionó el duodeno, Enriquito Imhoff, un niño de apenas dos años de edad, hijo del médico psiquiatra Jorge Imhoff y la contadora Graciela Benedetto, ambos militantes del Partido Comunista Revolucionario (PCR). Algunos sectores de los servicios de inteligencia acusaron a núcleos rivales de la SIDE de ser responsables de ese brutal asesinato, aún hoy no esclarecido.

La desindustrialización del país

Hasta mediados de la década del '70, y por más de 25 años, la tasa anual promedio acumulativa de la industria se había ubicado en torno al 4%, mientras el sector agropecuario exhibía una tasa anual de crecimiento del 2%.

Según datos del Censo Industrial de 1985, en la última década la industria manufacturera había caído un 8%, aunque como veremos más adelante, no todos las ramas fueron afectadas por igual. Durante ese mismo período, el sector agropecuario mostraba un magro crecimiento del 15%, insuficiente para que se transformara en el motor del conjunto de la economía nacional. Estos datos marcaban con total claridad que el excedente del sector terrateniente no se reinvertía en el campo, pero tampoco era derivado a la industria.

Ésta también se vio afectada en cuanto a la absorción de fuerza de trabajo. Durante el período 1935-1948, debido a la sustitución de importaciones, la mano de obra industrial creció de 500.000 a 1.200.000 obreros y en 1974 había superado el millón y medio de trabajadores. Según datos del mencionado Censo de 1985, las proyecciones hechas sobre la base de la Encuesta Trimestral del INDEC daban cuenta de que, debido al proceso de desindustrialización, la cantidad de trabajadores ocupados había caído a poco más de 1.000.000.

La disminución del número de operarios tenía que ver con el proceso de desintegración –"modernización" decían los procesistas– de la industria consumado por el régimen militar.

Para tener una idea acabada de los cambios operados durante el período 1976-1983 sería conveniente cotejar los censos industriales de 1974 y 1985. De los 140.000 establecimientos que había en 1963, se pasó a 126.000 en 1974, para caer a 109.000 en 1985. El ritmo de disminución creció del 10 al 14%, afectando fundamentalmente a los pequeños establecimientos, cayendo también la participación de éstos en el total del valor de la producción, lo que marcaría que se habría concretado un proceso de concentración industrial.

Este proceso se reflejaría claramente en los datos del Censo Industrial de 1985. Mientras en un extremo, menos del 2% de las empresas concentraban el 66% del volumen total de la producción industrial, en el otro, un 82% de los establecimientos cubría apenas un 7% de la misma.

Por otra parte, las firmas que ocupaban más de 100 obreros, aunque también habían reducido la cantidad de sus empleados, aumentaron su participación en el valor total de la producción. Esto quiere decir que en el sector se había incrementado la producción por obrero ocupado, por tanto la tan meneada "modernización" de Martínez de Hoz fue selectiva, ya que favoreció a los monopolios imperialistas que vieron acrecentada su participación en la producción, reduciendo personal y elevando tanto la productividad como la superexplotación de sus trabajadores.

También convendría recordar que esta "modernización selectiva" se logró con créditos subsidiados, salvatajes puntuales, estatización de las deudas privadas contraídas con el exterior, etc. Todo fue parte de planes minuciosamente concebidos por la dictadura, que indudablemente no intentaron revertir los gobiernos posteriores.

Según datos del mencionado Censo Industrial de 1985, las ramas más afectadas fueron las vinculadas al consumo masivo de bienes en el mercado interno. Los rubros cuero, madera, muebles, textil y confecciones cayeron más de un 30%. La construcción registró una baja de un 27%. El crecimiento de algunos servicios como electricidad, gas y agua permitió que los productos químicos –en particular petróleo y carbón– hayan sido la única rama vinculada al mercado interno que registró una mejora. También crecieron las industrias alimenticias y de metálicos básicos, vinculadas al mercado externo. Además de Cargill, Dreyfus, Bunge y Born y Swift, entre las diez primeras exportadoras del país se encontraban Aluar-Fate, Siderca y Acindar.

La huida de Alfonsín

Las elecciones del 30 de octubre de 1983 fueron proscritivas y condicionadas. La dictadura logró salvaguardar la "continuidad jurídica" asegurando que se mantuviera la estructura institucional, jurídica, represiva y económica montada a partir de 1976. La "continuidad jurídica" fue aceptada por los dirigentes y los candidatos tanto de la UCR como del PJ. Esto explica que pasadas más de dos décadas de la retirada de la dictadura, el

pueblo argentino todavía siga padeciendo la ilegítima y fraudulenta deuda externa, o que muchos cuadros pertenecientes a distintas fuerzas de seguridad, que participaron en la represión, continúen prestando servicios de manera activa o, incluso, que algunos ex represores ocupen cargos en distintas esferas del orden nacional, provincial, municipal o en el estamento legislativo.

En el gobierno de Alfonsín siguieron predominando los sectores económicos hegemónicos del autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional" y, por tanto, esa administración podría ser considerada como proterrateniente, promonopolista y proimperialista.

El proceso electoral del 30 de octubre –la fórmula radical encabezada por Raúl Alfonsín y Víctor Martínez obtuvo el 51,82% de los votos contra apenas un 40,16% del justicialismo, que postulaba a Ítalo Luder y Deolindo Bittel– afectó, sin duda, a las luchas que se habían profundizado en el último período dictatorial, ya que despertó fuertes expectativas reformistas en amplias capas de la sociedad, incluso en la clase obrera.

Sin embargo, en un lapso muy corto de tiempo esta situación se fue revirtiendo, y a partir de la reorganización de los cuerpos de delegados de fábricas y las comisiones internas, se fue gestando un nuevo ciclo de auge de luchas. Con 3.500 huelgas y 13 paros nacionales desarrollados entre 1984 y 1989, el movimiento obrero fue el motor de la lucha popular contra los planes del gobierno de Alfonsín. La histórica huelga de 18 días de la fábrica Ford de General Pacheco dirigida por los delegados y la Comisión Interna, en la que los obreros pusieron en funcionamiento la producción, trascendió lo gremial para convertirse en lucha política contra el hambre.

A partir de la huelga de Ford, seguida muy atentamente por el conjunto de los trabajadores, se abrió un gran debate en la mayoría de las empresas del conurbano bonaerense y del resto del país sobre la cuestionada política económica del gobierno radical, debate que se hizo extensivo al terreno de los derechos humanos, donde se registraron fuertes críticas por la impunidad a los genocidas de la dictadura.

Durante ese período se abrió un proceso de grandes luchas obreras, de movilizaciones de mujeres, estudiantiles y docentes como la Marcha Blanca de 1988. También el movimiento campesino protagonizó importantes protestas, tanto en la pampa húmeda como en otras regiones del país.

En abril de 1987 estalló la crisis militar de Semana Santa; crisis estimulada por la política alfonsinista de beneficiar a los generales lanussistas en detrimento de los sectores malvineros, y cuyo detonante fue la negativa de algunos oficiales partícipes de la represión a presentarse a declarar en los juicios que se habían iniciado.

Se produjo una profunda fractura en las Fuerzas Armadas que puso en evidencia la existencia de una poderosa corriente nacionalista que enfrentaba a los mandos militares (los generales de escritorio). Asimismo, luego del ***"¡Felices Pascuas! La casa está en orden"***, quedó totalmente claro para la

mayoría de la población que Alfonsín no era garantía para impedir un golpe de Estado; es más, pocos días después su gobierno logró la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, normas que recién fueron declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia en junio de 2005.

Estas leyes cerraban toda posibilidad de continuar con los procesos judiciales contra los represores de la dictadura que no habían sido miembros de las juntas militares, y dado que éstas ya habían sido juzgadas, las normas alfonsinistas daban por concluido el capítulo más sangriento de la historia nacional. Poco tiempo después, otro presidente constitucional, Carlos Saúl Menem, otorgaba el indulto a los jefes del régimen militar del '76.

La derrota electoral de Alfonsín en las elecciones legislativas de 1987 junto al triunfo de Menem en las elecciones internas del Partido Justicialista realizadas en julio de 1988, abrieron una nueva situación política en el país. La formación del Frente Justicialista de Unidad Popular (FREJUPO), integrado por once partidos e innumerables comités de apoyo, también significó un duro golpe para el gobierno de Alfonsín, desbordado ya por el hambre y la hiperinflación.

Las luchas de los trabajadores, la rebelión militar nacionalista que debilitó a la cúpula procesista y el FREJUPO –el frente político que posteriormente se impondría en las elecciones presidenciales– fueron los tres afluentes que convergieron para derrotar al alfonsinismo.

Estos tres afluentes, asestando un duro golpe a los intereses nacionales y populares, fueron hegemonizados por diferentes corrientes burguesas que terminaron traicionando y pasándose a las filas de los enemigos del pueblo y la nación. Este es un dato clave para comprender lo que sucedió luego de las elecciones nacionales del 14 de mayo de 1989 cuando, tras la huida de Alfonsín, Carlos Menem junto a la cúpula justicialista pasaron a impulsar las políticas neoliberales que se impondrían durante la década del '90.

El fracaso de la política económica radical

En su primera etapa, el gobierno alfonsinista venía actuando con una supuesta sensibilidad social apelando al llamado "gradualismo", método aplicado durante la gestión de Martínez de Hoz con el objetivo de contener la inflación. A diferencia de lo sucedido en la época de Videla, el "gradualismo" en el nuevo marco democrático caracterizado por las crecientes demandas de los trabajadores, no lograba ni siquiera frenar el ritmo de la inflación.

A raíz de esto, a mediados de 1985, el gobierno radical a través de su ministro Sourrouille dio un viraje en su política económica anunciando el final de la emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal, un estricto congelamiento de precios y salarios, y la creación de una nueva moneda: el austral.

Como ya ha sido analizado, la inflación en nuestro país está dada por la permanencia del latifundio en el campo y la dependencia de nuestra

economía respecto del imperialismo. La renta terrateniente junto a los enormes beneficios del capital monopolista, principalmente imperialista, absorben el grueso del esfuerzo de la producción nacional, esfuerzo que es derivado a la especulación o directamente se va del país, debido a las ventajas otorgadas por nuestra legislación que, prácticamente, no opone reparos a la salida de capitales.

Por esto, el intento de disminuir la inflación sólo restringiendo la emisión monetaria, trae como consecuencia la falta de dinero en la producción a la par que se vigoriza la especulación; por otro lado la mayor emisión monetaria –manejada discrecionalmente por los latifundistas y monopolistas– en general no estimula la producción y sólo se traduce en mayores precios, es decir inflación. En ambos escenarios, ya sea emitiendo o frenando la circulación, el gobierno radical fracasó rotundamente en sus promesas de frenar la inflación.

En distintos períodos, a principio de 1985 con Grinspun, a mediados de 1986 con Sourrouille, y nuevamente a principios de 1988, el gobierno radical había pretendido cubrir el déficit fiscal apelando a la ya reiterada y fracasada receta de aumentar los derivados del petróleo y las tarifas, a un ritmo superior al de los precios. Como siempre sucede, los aumentos arrastraron a los demás precios con la consiguiente aceleración inflacionaria, los asalariados fueron los principales perjudicados y el déficit fiscal aumentó. Con inflación o con recesión, si no se ataca a la especulación y la usura, siempre el ingreso de los asalariados termina siendo la "variable del ajuste".

Precisamente el gobierno de Alfonsín no atacó a estos factores del atraso y la dependencia y, más aún, pensó que garantizando una elevada renta terrateniente y beneficios a los monopolios y al capital financiero, se podría frenar la inflación e inclusive lograr un determinado desarrollo económico.

En este criterio se basó Grinspun para aplicar su receta antiinflacionaria. Esta política provocó una redistribución de los ingresos a favor de la renta agraria y la usura, en desmedro de los asalariados y jubilados con sueldos fijos (hasta cuando se indexaban iban por detrás de los precios); también se vieron perjudicados los chacareros y la industria nacional (por el aumento de los arrendamientos y la usura que terminaban por comerse la ganancia y el capital).

Está claro que con el "gradualismo" no se resolvía ni se pueden resolver los problemas inflacionarios. Pero el "shock" aplicado el viernes 14 de junio de 1985, conocido como Plan Austral, si bien logró una disminución drástica de los índices, no acabó con la inflación y agrandó la brecha económica que separaba a los argentinos.

Por otro lado, los sectores económicos que estaban detrás del gobierno –intermediarios, terratenientes e imperialistas– **conocieron anticipadamente las medidas, apresuraron una generalizada remarcación de precios y embolsaron cientos de millones de pesos especulando con la corrida cambiaria del día jueves 13 de junio, favorecida por los "técnicos" del Ministerio de Economía.**

El sábado 15, el ministro Sourrouille afirmó que "*el gobierno tuvo mucho que ver con el aumento de la carne, porque no podía haber congelamiento sobre precios deprimidos*". Pero indudablemente el ministro no mostró la misma sensibilidad con los sueldos y jubilaciones, que cargaron nuevamente con el ajuste. Desde ya, la suba de los precios producida por la remarcación, no fue contemplada en el congelamiento salarial. Recién en septiembre de 1986, el INDEC reconocería que la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores desde la entrada en vigencia del Plan Austral había sido del 30%.

Como siempre ha sucedido con los planes de estabilización que se practican sin afectar los intereses terratenientes e imperialistas, el gobierno a través del congelamiento, impuso una drástica reducción de los salarios reales. Los niveles de marginalidad eran tan grandes que por ese entonces se entregaban cinco millones de cajas del Plan Alimentario Nacional (PAN).

En este marco, la reforma monetaria –un instrumento vital para frenar la especulación y favorecer la producción– no pasó de ser una mera maniobra política para ganar tiempo, dado que la desindexación y el control de precios permitieron reducir temporariamente el ritmo inflacionario, pero no redujeron la proporción de valor agregado que se llevaban los terratenientes y el imperialismo.

Por otra parte, como ya se ha analizado, la escasez de dinero termina afectando la producción, ya que hace crecer la proporción que se lleva la usura, e inevitablemente, más temprano que tarde se vuelve al ciclo inflacionario. Esto sucedió con el Plan Austral que, en un principio, fue respaldado por la población que se sentía agobiada por una espiral inflacionaria que amenazaba con transformarse en hiperinflación.

En septiembre de 1985, se realizó en Rosario el 73º Congreso de Federación Agraria Argentina. Allí su titular, Humberto Volando, fijó –con fuerte oposición interna del Distrito VI– la posición de acompañar la puesta en marcha del Plan Austral, sosteniendo que le "*preocupa la campaña de confusión y desprestigio que se viene realizando desde sectores que sustentan actitudes reñidas con lo democrático, lo nacional y lo popular*".

Desde la vereda de enfrente, la CGT resolvía convocar a un paro y movilización "*en defensa de la producción y el trabajo*", reclamando también una moratoria en el pago de la deuda externa. Si bien la medida de fuerza fue exitosa, en noviembre el radicalismo, con el consenso generado por el nuevo programa económico, lograba otro importante triunfo en las elecciones legislativas.

En total se realizaron seis huelgas generales contra el Plan Austral. El 9 de octubre de 1986 la CGT convocó a un nuevo paro general; a esa altura ya era tan evidente la fragilidad del modelo económico radical, que hasta Franja Morada reconocía la legitimidad del reclamo. También el Movimiento de Vecinalistas de Rosario (MOVER) convocaba a "*Organizar, movilizar y resistir los tarifazos*". Por su parte las Pymes, en el Segundo Congreso realizado en Rosario en noviembre de 1986, consideraron al plan como "agotado".

En julio de 1987, el gobierno anunciaba la desregulación estatal, las privatizaciones en el sector químico y petroquímico, como así también la apertura del área petrolera a la actividad privada. A estas definiciones de carácter antinacional, habría que sumarles la ya nada novedosa reducción salarial de los empleados estatales, de los haberes previsionales y el aumento de las tarifas públicas. Estas medidas influyeron en la contundente derrota del radicalismo en los comicios legislativos de 1987.

Luego de las elecciones volvieron a incrementarse los precios, razón por la cual el gobierno reconocía el fracaso del Plan Austral y con el respaldo de la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC) lanzaba el Plan Primavera, en el que se desdoblaba el tipo de cambio: a partir de ese momento habría un dólar oficial y otro libre.

Los programas de Alfonsín, tanto el "gradualismo" de Grinspun como el Plan Austral de restricción monetaria y congelamiento de precios y salarios, habían fracasado. Se desataba la hiperinflación y Rosario era conmovida por un fenómeno inédito: los saqueos.

En la provincia triunfó el PJ y en Rosario la UCR

En la ciudad de Rosario, la fórmula radical encabezada por Alfonsín-Martínez obtuvo 267.070 votos, seguida por el binomio peronista Luder-Bittel con 237.727 sufragios. En el plano nacional, la elección estuvo totalmente polarizada dado que nueve de cada diez votantes optaron por uno de estos partidos.

En el ámbito provincial, en medio de denuncias de fraude por un supuesto "corte de luz" producido en el centro de cómputos, se impuso la fórmula justicialista encabezada por José María Vernet (ex asesor del gobierno militar de Ulloa en Salta) y Carlos Aurelio Martínez, superando por estrecho margen al radicalismo, que llevaba como candidatos a Aníbal Reynaldo y Porfirio Carreras. En Rosario, y en las elecciones a gobernador y vice, el PJ se imponía por algo más de 10.000 votos sobre la UCR.

Sin embargo, lo que realmente sorprendió a la opinión pública fue el triunfo de la UCR en Rosario –ciudad de profunda raigambre peronista– que consagró al doctor Horacio Daniel Usandizaga, un ex concejal que desde 1965 no militaba políticamente, como nuevo intendente. Ángel D'Ambrosio, secretario de Gobierno de la Municipalidad durante el período 1983-89, describió muy bien las expectativas partidarias anteriores al triunfo de Usandizaga:

> *"...Rosario era una ciudad que no se iba a ganar, era un absurdo. Acá ofrecías el octavo puesto de concejal y la gente te puteaba. Sacamos dieciocho..."*.
>
> (Un día de emoción. *Historia Política de Santa Fe 1990-1991*, Instituto de Estudios Sociales, Rosario, 1995. Citado por Pla, Alberto y otros, *Rosario en la historia*, UNR Editora, Rosario, 2000)

A pesar de contar con la primera minoría, en esta ciudad las relaciones entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante fueron difíciles y conflictivas. Es que para el imaginario popular, y con sobrados argumentos, con Usandizaga reaparecía en la ciudad el estilo de los caudillos conservadores, partidarios de la obra pública, que tuvieron en las figuras de Carballo y Cristiani a sus máximos exponentes.

Un ambicioso programa de inversiones de fondos públicos y una manera frontal y directa de comunicación con los vecinos, iban a caracterizar la gestión del nuevo intendente.

Entre sus obras se destacaron el estabilizado de las calles de tierra y la pavimentación de numerosas arterias. Se instalaron semáforos, se extendió la red de gas natural y se realizaron obras de zanjeo en diferentes barrios. El reemplazo de los antiguos focos por lámparas de mercurio y sodio tal vez se haya convertido en el estandarte de los cambios usandizaguistas. Asimismo, a través del Servicio Público de la Vivienda, se impulsó la construcción de económicas unidades habitacionales destinadas a los sectores de menores recursos.

No obstante, siguiendo el ejemplo de sus "iluminados" antecesores, el centro de la ciudad fue el sector al que el intendente le prestó mayor atención y recursos. A través de importantes inversiones se embellecieron los espacios públicos, particularmente toda la zona del Monumento. Se remodeló y amplió la peatonal Córdoba, como así también la calle San Martín. Asimismo se inauguraron importantes obras como el centro de convenciones Patio de la Madera y el Centro Cultural Leandro N. Alem.

A pocos meses de haber asumido, Usandizaga tuvo que enfrentar un conflicto con los trabajadores municipales –que por entonces percibían muy bajos salarios– que se prolongó durante sesenta días. El intendente tildaba de vagos a los empleados, en tanto se mantenía intransigente en su negativa de otorgar un incremento salarial. Con el apoyo de muchos vecinos del centro de la ciudad, que coincidían con sus posiciones contrarias a los trabajadores, logró superar el conflicto. Para estos sectores su imagen salió fortalecida dado que con el "*Vasco*" iba asomando un intendente "emprendedor" y un buen "administrador". En cambio, para otros, comenzaba a emerger el verdadero rostro antipopular de Usandizaga.

En abril de 1986, mientras se registraban intensas precipitaciones en toda la región, y luego de haber llovido 125 milímetros, se inundaban distintos barrios de la ciudad de Rosario obligando a la evacuación de los vecinos, que eran ubicados en la Sociedad Rural, Newells Old Boys, Rosario Central y el Club Provincial.

La inmensa solidaridad de la ciudadanía local contrastaba con la apatía oficial, tanto provincial como local. Los funcionarios no sólo no se ponían a la cabeza de la solidaridad, sino que miraban para otro lado a la hora de asumir responsabilidades. Un comunicado del Movimiento Vecinalista

de Rosario (MOVER) decía: *"no se puede echar la culpa sólo a la naturaleza, sino que además hay responsabilidad de parte de los gobernantes"*.

Como consecuencia de las inundaciones y de la falta de respuestas oficiales, los vecinos de Empalme Graneros reunidos en una masiva asamblea crearon el movimiento NUMAIN "Nunca Más Inundaciones". Simultáneamente, unos 7.000 pobladores cortaron la ruta en Villa Gobernador Gálvez, y el 20 de junio, en medio de los actos del Día de la Bandera, grupos de damnificados de distintos barrios irrumpieron en el Monumento portando carteles con los mismos reclamos.

Luego de siete años de intensas luchas, el NUMAIN y otras organizaciones de inundados lograron la firma del Acta que obligaba a la Nación, la Provincia y la Municipalidad a enviar partidas presupuestarias para la construcción de una presa que regulara las aguas, y un canal aliviador o derivador del cauce del Arroyo Ludueña. Las obras se realizaron en terrenos ubicados entre las localidades de Funes y Pérez.

A principios de 1987, Usandizaga enfrentaba un segundo período de conflictos con los trabajadores municipales, quienes le hicieron juicio al Municipio en reclamo del cumplimiento de leyes provinciales (Estatuto y Escalafón del Personal Municipal y Paritarias) que les otorgaban una recomposición salarial que el intendente jamás reconoció.

El gobierno local se negaba a ponerlas en práctica argumentando que eran leyes del gobierno de facto y, por tanto, inconstitucionales, ya que además violaban la autonomía municipal. Sin dudas, era y es justo derogar todo el andamiaje jurídico montado por el proceso militar, pero lo único que pretendía el intendente era tabicar toda posibilidad de aumento salarial a los empleados municipales. Usandizaga fue un político que jamás puso en tela de juicio la "continuidad jurídica" de la dictadura, ni cuestionó sus leyes fundamentales como las de fomento industrial de Desimone y Casis (favorecen al capital extranjero), "leyes" que hasta hoy siguen vigentes.

En la misma línea de razonamiento se ubicaba el intendente con respecto al Fondo de Asistencia Educativa (FAE) creado por "decreto" provincial, por tanto violatorio de la autonomía municipal.

El FAE tenía como fin ayudar al mantenimiento de los edificios escolares, tanto nacionales como provinciales y locales, a través de una comisión tripartita integrada por Intendentes, Directores de Escuelas y Cooperadoras.

Esta comisión estaba encargada de administrar los fondos provinciales y municipales destinados a este fin. El conflicto con el FAE se inició en el año 1986, cuando el intendente ordenó suspender los aportes exigidos por "ley" del gobierno de facto. La cuestión se dirimió en los estrados judiciales y la Municipalidad se vio obligada a ejecutar el pago de los fondos correspondientes.

También fue muy criticada la participación del intendente Usandizaga en los sucesos de Semana Santa de 1987. En Rosario, se movilizaron masivamente los partidos políticos, el movimiento estudiantil, algunos sindi-

catos y las entidades defensoras de los Derechos Humanos, que realizaron una multitudinaria concentración en el Monumento a la Bandera. El intendente Usandizaga exhibió un muy bajo perfil y días después, ante los medios, reivindicó la cara más fascista del reclamo militar sosteniendo que los uniformados en la *"llamada guerra sucia combatieron en cumplimiento de órdenes y tratando de ser útiles a la patria"*.

En esa histórica jornada, y en cuanto se conoció la claudicación de Alfonsín, una parte importante de los manifestantes se retiraron desilusionados e irritados del Monumento a la Bandera.

Horacio Usandizaga designó como subsecretario de Cultura a Rafael Ielpi, reconocido poeta rosarino que en el año 1972 había compuesto junto a José Luis Bollea una obra poético-musical que refería a la situación vivida a principios del siglo XX en el norte santafesino: la devastación ambiental, la explotación y las luchas de los hacheros, y la expoliación de las riquezas por parte del capital inglés. La Forestal –obra reeditada con gran éxito en los ochenta por el cantautor Enrique Llopis– está considerada como una de las mejores expresiones del arte rosarino.

Según el propio Ielpi, su gestión "*estuvo orientada a ayudar a la gente a vencer los fantasmas del pasado*". Con este objetivo, desde Cultura se organizaron encuentros masivos en distintos puntos de la ciudad, tendientes a lograr que la población se apropiara de las calles, plazas y lugares públicos. Algunas de aquellas propuestas continuaron hasta el presente, como por ejemplo el Encuentro de Colectividades, que desde 1985 se ha transformado en el evento cultural más importante y masivo de los que se realizan en esta ciudad.

Por su parte, la Provincia, en esa misma línea de pensamiento, el día de la primavera de 1987 organizó en el Monumento a la Bandera un recital que reunió 100.000 personas. "Santa Fe en tu corazón" –la consigna que presidió la convocatoria– se prolongó desde el mediodía del 21 de septiembre hasta pasada la medianoche, y convocó a figuras de la nueva trova rosarina como Juan Carlos Baglietto, Silvina Garré, Lalo de los Santos, Fito Páez, Adrián Abonizio, Jorge Fandermolle y a pioneros del rock nacional como Lito Nebbia o el mismísimo Quique Llopis, ovacionado en aquellos tiempos.

Lejos parecían haber quedado las épocas en que los rockeros, perseguidos por las fuerzas de seguridad, apenas si podían presentarse en lugares cerrados, los que en reiteradas oportunidades, y usando distintos argumentos, fueron clausurados. La Guerra de Malvinas llevó a la dictadura a prohibir la difusión de música extranjera por las radios, y esto le permitió a la trova rosarina proyectarse masivamente. También a partir de Malvinas fue aumentando el compromiso de estos músicos con la causa nacional y fundamentalmente con los reclamos del pueblo. Como reflejan las crónicas periodísticas de esa primavera de 1987, Fito Páez, en medio de una ovación, cantó: "*ni un analista, ni un doctor, ni un cura, ni Stubrin ni el gobernador te solucionan los problemas*". A esa altura, Rosario había salido de la larga noche dictatorial.

Los saqueos

En la tarde-noche del 28 de mayo de 1989 se iniciaron en Rosario los saqueos, que rápidamente se extendieron al Gran Buenos Aires, Capital Federal, Mendoza, Tucumán, Salta y Santa Fe. Algunos días antes se habían producido hechos similares en la provincia de Córdoba. Ese día Alfonsín hablaba al país para anunciar las medidas de un "Plan de emergencia". Las mismas generaron un masivo rechazo de la población, lo que motivó que en la zona sur de Rosario comenzaran los saqueos, que durante tres días se extenderían al conjunto de la ciudad y a localidades vecinas como Villa Gobernador Gálvez y Capitán Bermúdez.

Grandes supermercados, depósitos de mercaderías, como así también medianos y pequeños comercios fueron arrasados por hombres, mujeres, ancianos y hasta niños de diferente extracción social.

En un primer momento, las fuerzas de seguridad exhibieron una actitud pasiva. Pero hacia la tarde del día 29, cuando los diputados y senadores nacionales ratificaron el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) estableciendo el "Estado de Sitio" en todo el país y el "Estado de Emergencia" en el Departamento Rosario –un virtual toque de queda entre las 19 y las 7 horas–, la situación se modificó drásticamente.

Según datos oficiales, en Rosario actuaron más de 4.000 efectivos de Gendarmería Nacional, Prefectura Nacional-Albatros, Policía Federal y Policía Provincial; éstos, por orden del gobernador Víctor Félix Reviglio, debían reprimir con armas de fuego a las "*bandas armadas, ladrones y técnicos subversivos*". El saldo del accionar de las fuerzas de seguridad fue de 7 muertos, 94 heridos y 1400 detenidos, 28 de los cuales fueron puestos a disposición del PEN.

El presidente Alfonsín, el intendente Usandizaga y el gobernador Reviglio habían dejado de lado la principal causa de la protesta: el hambre de la población.

En lugar de tratar de aliviar las penurias de miles de ciudadanos estableciendo mediante ley la Emergencia Alimenticia, los responsables políticos de la Nación, la Provincia y la Municipalidad presionaron a los legisladores para que "legalicen" la represión. Éstos, salvo honrosas excepciones, acataron las órdenes votando las leyes autoritarias.

Desde el poder se acusaba a los "agitadores" de izquierda de ser los mentores de los saqueos. En tanto desde este sector se coincidía en responsabilizar a la descomunal miseria imperante ya sea producto de la política de "*hambre y entrega alfonsinista*", o del "*robo que los grupos financieros realizan contra el pueblo*", amparados en la legalidad vigente.

Si bien es cierto que hubo indicios de que en los inicios de los saqueos trabajaron algunos grupos organizados, en particular servicios de inteligencia, el enorme grado de adhesión –participaron decenas de miles de rosarinos– y su prolongada duración, indican que se trató en lo esencial de un movimiento espontáneo.

Las causas del estallido habría que ubicarlas en la política proterrateniente y proimperialista del gobierno de Alfonsín, política que generó una enorme brecha entre los sectores más altos y más bajos de la sociedad.

Los grandes grupos intermediarios "nacionales" y las empresas transnacionales, junto a los terratenientes y al sector financiero se convirtieron en los principales beneficiarios del modelo económico imperante. Al mismo tiempo, las grandes mayorías sufrían la hiperinflación que provocaría la destrucción de la moneda, la dureza de los programas de ajuste que trajo consigo la disminución de la calidad de vida, la inseguridad y la exclusión social, además del incontrolable crecimiento de la deuda externa.

Los saqueos fueron la consecuencia directa de estas políticas. Fue el camino que escogieron algunos sectores populares ante la imposibilidad de tener acceso a un derecho tan elemental como la alimentación.

EL ARGENTINAZO: SANTA FE HIZO LA PUNTA

Los cambios en el mundo y la traición de Menem

El triunfo electoral de Menem abrió una gran esperanza en el pueblo argentino, especialmente en los trabajadores, que confiaban en que por primera vez en muchos años hubiera una política a favor de los intereses populares.

Pero los postulados de contenidos nacionalistas y reformistas levantados por Menem en la campaña electoral, fueron abandonados al poco tiempo de asumir la presidencia. Las incumplidas promesas de salariazo y revolución productiva significaron un serio revés para el conjunto de los trabajadores. La traición de Menem, un dirigente de raigambre peronista, abrió un período de confusión en el seno del movimiento obrero y popular, confusión facilitada por la complicidad de la cúpula de la CGT que había sido copada por dirigentes colaboracionistas.

El viraje del gobierno de Menem se produjo en el momento en que se desmoronaba la Unión Soviética. Con la caída de la URSS, el mundo bipolar gestado al finalizar la II Guerra Mundial llegó a su fin, dando paso a un mundo multipolar en el que cohabitaban varias potencias económicas –esto se manifestó claramente en Argentina con la disputa interimperialista por el control de las empresas privatizadas– pero solamente había quedado en pie una superpotencia política, económica y militar: Estados Unidos.

Era un momento particular de la historia en el que Francis Fukuyama se apresuró en definir: "*que el fin de los regímenes de Europa oriental era el fin de todo esfuerzo por construir una alternativa al sistema socieconómico de occidente*". El capitalismo liberal se convertiría, según Fukuyama, en el horizonte insuperable de ésa y de todas las épocas por venir. Es decir **la historia había llegado a su fin**.

Durante ese período, las recetas keynesianas de intervención estatal, proteccionismo económico y pleno empleo fueron abandonadas y reemplazadas por las concepciones neoliberales de Friedrich Von Hayec y Milton

Friedman, que en medio de la fiebre fukuyamista, fueron elevadas a la categoría de Pensamiento Único.

Menem llevó adelante una política liberal privatizadora, de entrega del patrimonio nacional. Con el nuevo gobierno se pasó de una economía fuertemente estatista a una de mercado y desregulada. Se liquidaron ramas enteras de la producción nacional –particularmente las más avanzadas tecnológicamente– que eran vitales para un desarrollo autónomo. También se vio afectada la industria liviana como la metalúrgica, textil o del calzado, con la consiguiente expulsión del mercado laboral de decenas de miles de trabajadores y la liquidación de miles de empresas (especialmente chicas y medianas).

Regiones enteras del país fueron sumidas en la miseria y casi la totalidad de las provincias debieron soportar una severa crisis financiera. Por último, el menemismo arrasó con las conquistas obreras logradas durante más de un siglo de luchas.

En el plano nacional como en las provincias, la inmensa mayoría de la dirigencia partidaria justicialista prestó su colaboración a este proyecto neoliberal. A los pocos meses de asumir el nuevo gobierno, se rompió la alianza que lo había sostenido electoralmente: el FREJUPO. Por su parte, la corriente militar nacionalista que se había fortalecido durante el gobierno radical fue disgregada, en tanto **Menem coronaba con los indultos la impunidad de los genocidas de la dictadura, impunidad que se había iniciado con las leyes de "Obediencia Debida" y "Punto Final", ambas sancionadas por el gobierno de Alfonsín.**

Aprovechando la nueva situación internacional abierta a partir de la caída del Muro de Berlín (se registró un pronunciado debilitamiento del socialimperialismo soviético en el mundo y en Argentina), el imperialismo norteamericano logró imponer la refinanciación de la deuda externa a través del Plan Brady, como así también penetrar profundamente en la economía, en otras esferas como las Fuerzas Armadas y de Seguridad y en la política nacional. Este avance se dio en dura lucha con otros imperialismos –principalmente europeos– que lograron usufructuar las políticas de privatizaciones iniciadas a principios de la década del '90.

También habría que decir que Menem, junto al presidente de Brasil, Cardozo, dieron un fuerte impulso al MERCOSUR, organismo que se transformó en un instrumento importante para instalar una economía de mercado, desregulada, de libre empresa, al servicio de los intereses de un puñado de monopolios. Indudablemente, se trataba y se trata de un negocio para los grandes grupos económicos.

Por ejemplo, en Rosario, a más de un año de haberse firmado el Tratado entre los países sudamericanos, apenas el 10% de las empresas pequeñas y medianas poseían información completa sobre el nuevo marco jurídico-económico del Mercosur

La política liberal produjo una recomposición de los precios que favo-

recieron abiertamente al sector de servicios, afectando a los asalariados y a la producción de bienes, que de representar el 50% del PBI en 1989, cayó a menos del 35% al final del gobierno menemista. El único rubro productor de bienes que mejoró su posición en esa década fue la construcción.

Como contrapartida, los sectores vinculados a la actividad primaria, principalmente agropecuario, caza y pesca, lograron reposicionarse.

En relación a la orientación del comercio exterior, como consecuencia del derrumbe de la URSS y determinadas políticas proteccionistas de la Unión Europea (UE), los países latinoamericanos, fundamentalmente Chile y Brasil, pasaron a absorber más de la mitad de nuestras exportaciones. Este cambio demostró lo erróneo del razonamiento de la oligarquía local, que históricamente creyó conveniente amarrar comercialmente al país a un único comprador de nuestros productos primarios. Esto sucedió con Inglaterra durante décadas, con la URSS desde fines de los '70 y la mayor parte de los '80 y puede llegar a suceder ahora con China, a partir de los recientes convenios comerciales firmados con esa potencia imperialista.

Al final de la década menemista, Argentina lograba diversificar las ventas de sus productos. Las compras de Estados Unidos se habían mantenido en torno al 10% de nuestras exportaciones, en tanto la Unión Europea (UE) absorbía alrededor de un 20%, con España, Italia, Holanda y Alemania como principales compradores. Por su parte, China fue incrementando sus compras a un ritmo elevado, particularmente por sus importaciones de granos y aceites –la comercialización de este subproducto actualmente se ha desacelerado– de soja.

La de Menem fue la primera experiencia en la historia del Partido Justicialista en la que se practicó una política antipopular y proimperialista. El peronismo, desde su origen, además de la burguesía nacional, contuvo en su seno a sectores proimperialistas y proterratenientes, como así también a trabajadores y campesinos pobres.

Aunque dentro del justicialismo hayan coexistido y coexistan distintas clases sociales, la política de Perón primero y la de Isabel Perón después, pese a tener algunos aspectos reaccionarios en el terreno democrático, fue una política de tipo nacionalista y de reformas a favor del pueblo. Ambos gobiernos, aún haciendo concesiones importantes, lidiaron desde sus posiciones reformistas tanto con el imperialismo –especialmente el norteamericano– como con los terratenientes.

En cambio, la línea aplicada por la dirección peronista encabezada por Menem fue antagónica con los intereses populares y con la doctrina del movimiento, ya que dejó de lado las mejores tradiciones contestatarias expresadas durante la primera gestión de Perón (1946-1955) y la segunda experiencia justicialista (1973-1976), en la resistencia a la Libertadora y la política entreguista de Frondizi, como así también en las luchas contra todas las dictaduras militares y el alfonsinismo.

En un país como el nuestro, de profunda raigambre peronista y con

una enorme tradición de lucha, hubiera sido difícil, por no decir imposible, que el plan liberal de entrega del patrimonio nacional hubiera podido ejecutarse sin el respaldo de las estructuras de la dirección peronista, que utilizando el enorme prestigio acumulado lograron confundir y dividir al pueblo.

Impacto del neoliberalismo en la producción y el trabajo

Tras el fracaso de la "concertación" de precios con los monopolios, intentada por los directivos de Bunge y Born instalados en el Ministerio de Economía, a fines de 1989 se desembocó en un período hiperinflacionario.

Erman González, el nuevo ministro de Economía, luego de incautar todos los depósitos a plazo fijo y caja de ahorro existentes al 28 de diciembre de 1989, orientó la economía hacia una política abiertamente liberal. A principios de 1990 lanzó el Plan Bonex, que tenía como objetivo imponer el canje obligatorio de los depósitos confiscados y de toda la deuda interna del Estado Nacional por títulos públicos en dólares.

Esta medida fue sugerida por Domingo Felipe Cavallo, por entonces canciller del gobierno de Menem, quien a partir de enero de 1991 se convertiría en el nuevo ministro de Economía.

Cavallo lanzó el "Plan de Convertibilidad" que consistía en poner al dólar como moneda rectora, con una paridad fija con el peso. Esa paridad se sustentaba en la liberación de las importaciones (apertura económica), la refinanciación usuraria de la deuda externa (Plan Brady) y la enajenación del patrimonio estatal (privatizaciones); éstas eran las "patas" sobre las que se asentaba el modelo económico de Menem y Cavallo.

Durante cuatro años, desde 1991 a 1994 el PBI creció ininterrumpidamente entre un 6% (1993) y un 8,6% (1991). En la provincia de Santa Fe, aunque con índices menores a la media nacional, la expansión también fue importante. El crecimiento económico se sostuvo en gran medida con el ingreso de capitales especulativos.

Se trató de un incremento basado en la adquisición y modernización de empresas de servicios, la mayoría recientemente privatizadas, por ejemplo Telecomunicaciones, Energía Eléctrica, Gas o Transporte Aéreo. Además, se observó una reconstrucción del stock de algunas fábricas debido al crecimiento del consumo –los sectores medios y altos volcaron parte de sus ahorros en la adquisición de bienes durables como automóviles y electrodomésticos– y la renovación de equipos.

A través del crédito, una parte de los asalariados también accedió al consumo, pero el aumento del mismo pronto iba a mostrar sus límites debido a la marcada tendencia a racionalizar generando desocupación.

Durante ese período se produjo una avalancha de importaciones, que al no ser compensadas con las exportaciones, provocó un fuerte déficit de la balanza comercial.

Sectores básicos como petroquímica, celulosa, acero, química, maquinarias y herramientas trabajaban con una gran capacidad ociosa, con alto riesgo de terminar en un proceso de quiebra o de extranjerización. Por ejemplo, a comienzo de los '90, en el Gran Rosario estaban radicadas varias fábricas carroceras, pero debido a la apertura de las importaciones esta rama industrial ingresó a mediados de la década en una profunda crisis. En 1995, las principales firmas locales del sector se declararon en quiebra o en convocatoria de acreedores, por lo que cientos de trabajadores perdieron su fuente laboral.

Mientras la mayoría de la pequeña y mediana industria se endeudaba para sobrevivir, las abundantes inversiones en grandes centros comerciales y supermercados crearon un clima de "boom consumista", instalando en la sociedad argentina la cultura del *shopping*.

El magnate George Soros realizaba grandes inversiones en el país y también en Rosario, donde lograba adquirir a bajos precios los excelentes terrenos del Parque Scalabrini Ortiz, ubicados frente al Río Paraná y que pertenecían al Estado Nacional.

Además, en 1996, se instalaba en esta ciudad la cadena francesa de supermercados Carrefour; en 1997, el supermercado Norte, del grupo Exxel; en 1998, la chilena Jumbo adquiría la ex planta textil Estexa y también en ese año desembarcaron las cadenas nacionales Coto y Libertad. Unos años antes, la empresa chilena Falabella había absorbido a La Favorita, la tienda más importante y tradicional de Rosario.

Estas inversiones llevaron a la quiebra a miles de pequeños y medianos comercios y también a grandes supermercados de capitales rosarinos como Reina Elena y San Cayetano. Según la Encuesta Permanente de Hogares, en 1993 existían en Rosario 15.667 locales comerciales, de los cuales el 34% se dedicaba a la venta minorista de almacén y bebidas. En seis años desaparecieron aproximadamente 8.500 locales.

No obstante, las inversiones extranjeras más importantes registradas durante ese período en el Gran Rosario, y que analizaremos más adelante, fueron realizadas por las multinacionales del cereal y la empresa automotriz General Motors.

En 1995, producto de la devaluación mexicana –el "tequila"– en nuestro país se agudizaron la recesión y el desempleo, que trajeron como consecuencia la crisis financiera y fiscal. Argentina fue la única economía del continente que redujo el nivel de actividad en 1995, clara demostración de los límites del "modelo" económico impuesto por Menem y Cavallo.

Como consecuencia del "tequila", hasta el pujante sector inmobiliario entró en un proceso de estancamiento. La inestabilidad de los ingresos con una clara tendencia al congelamiento o caída, las elevadas tasas de interés y las altas exigencias en materia de garantías de las entidades financieras, coadyuvaron para que se frenara la demanda. Hay que tener en cuenta que las tasas en dólares estaban ubicadas entre el 15 y el 18% y se exigían 1.500

pesos o dólares de ingreso por grupo familiar para poder acceder a un crédito inmobiliario.

Entre 1994 y 1997, la transformación del sistema financiero provocó una reducción de las entidades bancarias, que de 205 pasaron a 141. Se produjo un proceso de quiebras, concentración y extranjerización que fue importante a nivel nacional como así también en el ámbito provincial. El Banco Río fue comprado por el Santander de España; el Francés y el Crédito Argentino, por el también español Bilbao Vizcaya; el Roberts por el Hong Kong & Shangai Bank Corporation (HSBC); y el Quilmes por el canadiense Nova Scotia.

Paralelamente, se registraron quiebras (vaciamientos) como la del Banco Integrado Departamental (BID), cuya casa central estaba ubicada en la ciudad de Venado Tuerto o el caso del Banco Comercial Israelita (una histórica entidad financiera rosarina) que fue comprado por el Banco Bisel, que a su vez ya había sido absorbido por el grupo francés Crédite Agricole.

También muchas compañías de seguros corrieron similar suerte; hubo algunos cierres importantes como el de General Paz o la aseguradora de Federación Agraria Argentina, en tanto otras firmas fueron adquiridas por grandes cadenas internacionales. Este proceso se hizo extensivo a los medios de comunicación y a vastos sectores de la economía. La concentración y extranjerización fue muy importante en el sector de la alimentación, donde la empresa francesa Danone compró Bagley, La Serenísima y Villa del Sur o Villavicencio; y la norteamericana Nabisco logró apropiarse de Terrabusi y Canale.

A partir del segundo semestre de 1998, comenzaba una nueva recesión que se profundizaría con la crisis financiera internacional desatada por Brasil tras la devaluación del Real, medida tomada sin previo aviso a los socios del Mercosur.

Éste fue un duro momento para la economía argentina. La balanza comercial se tornó deficitaria, con una merma de las exportaciones a Brasil que alcanzó el 5,9%. Las ventas cayeron abruptamente, las tasas de interés mostraron un fuerte repunte y la recesión llegó a niveles superiores a los alcanzados luego del la crisis mexicana del "tequila".

El PBI tuvo una fuerte caída del 4,5%. El sector de la construcción y el comercio retrocedieron un 8,5 y un 9,5% respectivamente, en tanto las inversiones en máquinas-herramientas y construcciones industriales cayeron un 10,2%.

El déficit fiscal llegó a 6.200 millones de dólares, cifra muy superior a la acordada con el FMI. En octubre de ese año la desocupación en el Gran Rosario alcanzó un inusitado 16,8%, y la deuda externa superó los 112.000 millones de dólares.

Frente a la magnitud de la recesión, el gobierno no tuvo respuestas tendientes a la reactivación. Al mismo tiempo que la mayoría de los sectores económicos afectados por la crisis de Brasil quedaban desguarnecidos, el gobierno de Menem sólo atinaría a proteger a la industria automotriz que había suspendido a 10.000 operarios, poniendo en marcha el Plan Canje.

La merma de las ventas, la insoportable presión impositiva, la imposibilidad de acceder al crédito y la pérdida de competitividad llevaron a que 1999 haya sido un año récord en cuanto a concursos y quiebras. En los Tribunales de Rosario se presentaron más de 1.400 pedidos, lo que implicó una suba de más del 60% en relación al año anterior.

Por entonces, la inmensa mayoría de la población asumía con total claridad que la Convertibilidad –ya agotada luego de la crisis del "tequila"– tenía que llegar a su fin.

Concesiones al capital extranjero: la radicación de GM

Como se mencionaba en el capítulo anterior, la radicación de la fábrica automotriz General Motors Corporations (GM) en la localidad de Alvear, junto a las obras –construcción de nuevas plantas o ampliación de las existentes– encaradas por las multinacionales del cereal, fueron las inversiones extranjeras más importantes realizadas en la zona durante la década del '90. Las multinacionales obtuvieron tanto del Estado Nacional como del Provincial beneficios a los que jamás podría haber accedido el capital local (la burguesía nacional), dejando en evidencia el peso y la penetración del imperialismo en la economía argentina.

Cuando se analiza la radicación de GM se puede observar el *modus operandi* de las empresas extranjeras, que a cambio de la inversión exigen y obtienen todo tipo de prebendas. También queda totalmente claro el papel de los distintos gobiernos de turno que presurosamente sancionan las leyes que permiten otorgar esas concesiones.

El 30 de agosto de 1995, a través de una carta de intención, la empresa GM manifestó su interés de radicarse en territorio provincial. Ésta fue suscripta entre el gobierno de Santa Fe representado por el entonces gobernador Carlos Reutemann, la Comuna de Alvear y la empresa Provencorp SA, carta que fue ratificada por Ley 11.286 del 2 de noviembre de ese año.

En ese documento, la Provincia se comprometía por un plazo de 10 años a partir de la fecha en que la planta entrase en producción a escala industrial (lo cual ocurrió en 1997), a otorgar incentivos para favorecer la radicación de la empresa automotriz.

En la cláusula 2ª de la citada carta, están detallados los incentivos otorgados a la empresa:

"*Exenciones impositivas*" (inciso 2.1), "*Otros beneficios*" (inciso 2.2) y "*Bonificaciones tasa de interés y honorarios hasta la suma total de U$S 53.000.000*" (inciso 2.3).

En relación a las "*Exenciones impositivas*", la Comuna de Alvear aportó la franquicia del ciento por ciento y sin plazo, de las tasas de Derecho de Registro e Inspección, Inmuebles, ocupación del Dominio Público y suministro de Servicios Públicos.

La Provincia, por su parte, otorgó exenciones del ciento por ciento de los impuestos a los Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario y también del Aporte Patronal Ley 5.110 y la Patente Única sobre Vehículos.

En el capítulo "*Otros beneficios*", la Provincia concedió a la empresa automotriz los siguientes privilegios: traslados de los residuos líquidos desde la planta de tratamientos hasta su disposición final; se construyeron y se pavimentaron nuevos caminos de acceso a la planta y los perimetrales; se facilitó el uso de escuelas públicas para la capacitación del personal; se entregaron 160.000 metros cúbicos de suelo tosca sobre camión para compactación, de modo de facilitar las tareas de construcción; se comprometieron créditos para edificar casas para personal gerencial; se otorgó el 25% de descuento para transporte de carga en los peajes de la autopista Rosario-Santa Fe y el túnel subfluvial; se dio asistencia para el diseño de paisajismo y se proveyeron los árboles para el perímetro de la planta industrial.

En tanto las "*Bonificaciones tasa de interés y honorarios hasta la suma total de U$S 53.000.000*" serían computadas a la fecha de otorgamiento de una o más líneas de préstamos, que GM obtuviese para sufragar los costos de construcción y equipamiento de sus plantas.

El 23 de noviembre de 1995 se dictó el Decreto 3324 –concebido a la medida los intereses de la empresa– con el objetivo de incluir la exención del pago del Impuesto de Sellos sobre los contratos de fusión de empresas, del Aporte Patronal Ley 5.110 y de la Patente Única sobre Vehículos. Este decreto entró en vigencia luego de la aprobación de la mencionada Ley 11.286, que ratificó la carta de intención suscrita en 1995 por las partes. Se hizo necesario "fabricar" esta medida ya que el Artículo 14 del "decreto" Nº 3856/79, que reglamenta la "ley" de Promoción Industrial Nº 8.478 dictada por la dictadura y aún hoy vigente, no preveía exceptuar a las empresas de las citadas exenciones.

Dos semanas más tarde, el 6 diciembre, por Resolución 596 del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio (MAGIC), se declaraba a GM "*comprendida en el régimen de la Ley Nº 8.478 y disposiciones complementarias*", eximiéndosela de los citados aportes patronales y del pago de la patente automotor "*para los automóviles, remolques o acoplados de propiedad de la empresa*" y del "*Impuesto de Sellos en la fusión de Provencorp SA y General Motors de Argentina SA*".

Como se puede observar, las ventajas obtenidas por la empresa fueron enormes. Paralelamente, en abril de 2005, con motivo del intento de la automotriz de cesantear a 320 trabajadores, tomó estado público la información que daba cuenta que si se sumaran todos los rubros estipulados en la carta de intención, en los últimos 10 años la sociedad argentina a través del estado nacional, provincial y comunal aportó cerca de 100 millones de dólares para subvencionar el emprendimiento de GM.

Estas cifras fueron suministradas por el ministro de la Producción de la provincia Roberto Ceretto, quien confesaba ante los medios que: "*El Estado Nacional puso 85 millones de dólares en efectivo en subsidio de las tasas de interés para los créditos que tomó GM con el fin de levantar el complejo industrial del Gran Rosario*". Además, Ceretto aclaró que "*inicialmente el aporte iba a ser*

de 53 millones de dólares –eso indicaba la carta de intención– pero hubo unos ajustes y terminó siendo de casi 85 millones". Por último, el funcionario sostuvo que a este dinero habría que agregarle las *"obras públicas como caminos que rodean a la planta, iluminación, accesos, desagües, provisión de energía eléctrica, entre otros aportes que hizo la Provincia"* (Diario *El Ciudadano* 28 de abril de 2005).

Las ventajas conseguidas por GM no son un ejemplo aislado. Las recientes inversiones realizadas en la provincia por Cargill, Dreyfus o el grupo Noble (un *trader* cerealero chino) estuvieron acompañadas por un sinnúmero de concesiones otorgadas por los gobiernos de Reutemann y Obeid.

Irrupción del socialismo en una provincia justicialista

En 1989 el peronismo había realizado en Rosario el acto más masivo y emotivo de toda la campaña electoral. Con motivo de la visita de Carlos Menem y Eduardo Duhalde a la ciudad, decenas de miles de personas se volcaron a las calles para saludar al "menemóvil". Otros tantos concurrieron a cada uno de los actos que se realizaron, ya sea en Barrio Rucci al comienzo de la jornada, o los organizados espontáneamente durante el recorrido de la caravana, o el multitudinario cierre llevado a cabo en el monumento a Eva Perón, en cercanías del Sindicato de la Carne.

El 14 de mayo, este sentimiento popular se tradujo en una verdadera avalancha de votos a favor del binomio del FREJUPO, tanto en el conjunto de la provincia como en la ciudad de Rosario.

Tras el triunfo peronista, y tal como lo había anunciado con el recordado *"si gana Menem me voy"*, el 22 de mayo Usandisaga renunciaba a la intendencia de la ciudad de Rosario, haciéndose cargo de la misma, con carácter de interino, el concejal de la UCR Carlos Ramírez. Comenzaba así un período de transición que culminaría el 26 de noviembre con el llamado a elecciones para elegir intendente.

El bioquímico Héctor Cavallero, cofundador en 1972 del Partido Socialista Popular (PSP) y del Movimiento Nacional Reformista (MNR), concejal y presidente del bloque socialista a partir de 1983, derrotó al candidato justicialista Alberto Joaquín. Éste, en 1964, había organizado la JP de Rosario, y tras el retorno a la democracia se había desempeñado como administrador de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) para luego, a partir de 1987, ocupar el ministerio de Obras, Servicios Públicos y Viviendas de la Provincia.

El resultado de la contienda electoral deparó una sorpresa, ya que en la última elección de 1987, en medio de una gran polarización, Usandizaga había sido reelecto con el 50%, Gualberto Venesia del PJ lograba el 40% de los sufragios, en tanto el PSP obtenía un magro 3,7%. A dos años de estos comicios, los socialistas se alzaron con un triunfo histórico siendo respaldados por el 39% de los votos.

Las razones de este inesperado crecimiento habría que ubicarlas en

primer lugar, en la situación socieconómica que vivía la mayoría de la población, y en segundo término, en los altos niveles de corrupción imperantes en ese momento, tanto a nivel nacional como provincial.

La política alfonsinista de hiperinflación hizo estragos en Rosario. Según datos del IPEC, hacia 1980 en esta ciudad se podían contabilizar 100.000 pobres, cifra que se duplicaría en 1990. Como consecuencia de esta creciente pauperización, Rosario asistió a un fenómeno nuevo y significativo de movilidad social descendente. Familias que vivían en una condición habitacional digna, alquilando casas en los barrios, debido a la crisis se vieron obligados a trasladarse a "asentamientos irregulares" conocidos como villas miseria.

Como se analiza en el libro "*Rosario en la historia*" (de Alberto Pla y otros, *Op. cit.*), estos nuevos indigentes se sumaron a los pobres estructurales –los tradicionales habitantes de las villas– que provenían de zonas carenciadas del país como Chaco y Corrientes. Debido a la falta de trabajo, la imposibilidad de acceder a la tierra, las inundaciones y la crisis de las economías regionales, y a diferencia de las décadas anteriores, en este período se registró un sensible aumento del flujo migratorio proveniente del Chaco, con marcado predominio de familias de originarios, fundamentalmente Qom (Tobas).

Las primeras migraciones Tobas comenzaron a principios de los '60; otro contingente importante arribó en la década siguiente, pero fueron las grandes inundaciones de 1983 las que llevaron a estos grupos a instalarse en forma masiva en nuestra ciudad. Barrios como Empalme Graneros (en torno a las vías de los FFCC Mitre y Belgrano entre J.J. Paso y Avenida Génova), o en menor medida Villa Banana y otros asentamientos, fueron los lugares a los que pudieron acceder estas familias. Según datos oficiales, en el año 1990 vivían en Rosario 1.800 originarios Tobas. Actualmente, esa cifra se ha multiplicado, ya que son 23.000 los miembros de esa comunidad que residen en la ciudad, siendo el Barrio Toba ubicado en la zona sur-oeste, el más numeroso.

La segunda razón del significativo crecimiento electoral del PSP hay que ubicarla en el descontento de la población con la corrupción, que salpicaba no sólo a la administración nacional del radicalismo (Nosiglia, Mazzorín, Reynaldo, etc.) sino también a los gobiernos provinciales justicialistas de Vernet y Reviglio, en cuyas gestiones aparecían los grandes sospechados del imaginario popular: los ex vicegobernadores Martínez y Vanrell. El ingeniero Joaquín era considerado por la población, que demandaba un estilo de gobierno transparente, como parte de ese estado de descomposición moral.

La crisis económica y la corrupción explicarían cómo el justicialismo, que obtuvo un triunfo arrollador en mayo, en apenas unos meses había perdido una cantidad muy alta de adhesión.

Cavallero, al asumir el cargo, agradeció la ayuda del gobierno nacional para enfrentar la pobreza. "*Ya han llegado los camiones con 50.000 cajas de alimentos, que serán distribuidas por las entidades intermedias... El presidente Menem nos pidió transparencia*" decía el intendente.

A dos años de gestión, Cavallero exhibía orgulloso que "*80.000 niños eran alimentados diariamente, y no hubo ningún caso de corrupción*". Además de la Municipalidad, otras instituciones como la Iglesia, a través de Cáritas o Emaus, contribuirían desde distintas parroquias y centros comunitarios a enfrentar el hambre; en este sentido el trabajo de algunos sacerdotes como el caso de Edgardo Montaldo, de barrio Ludueña, aún son recordados por la población.

Cavallero, a través del secretario del área Hermes Binner, prestó especial atención a la salud y sanidad de la población, destinando a esa esfera una parte significativa del presupuesto. Además, desarrolló una serie de obras tendientes a mejorar la calidad de vida de los habitantes de los barrios, y a diferencia de su antecesor Usandizaga comenzó a pagar el FAE, con cuyos fondos se construyeron 40 nuevas aulas y se repararon cerca de 100 más.

Su gestión debió enfrentar la amenaza de la reaparición de la epidemia del cólera, una enfermedad del siglo XIX. La ciudad había tenido el primer brote en el año 1867, cuando Argentina integró junto a Brasil y Uruguay la Triple Alianza, desatando una sangrienta guerra de agresión contra Paraguay. En aquel entonces fueron arrojados al Río Paraná 30.000 cadáveres, que contaminaron las aguas originando la epidemia. En Rosario, ese año murieron 420 vecinos víctimas del cólera.

El gobierno de la Unidad Socialista, gracias a una intensa campaña de prevención, logró evitar que la ciudad se convirtiera en un foco epidémico.

Con el socialismo estabilizado en la ciudad, con la capital provincial gobernada por una fuerza política adversa al oficialismo provincial, el presidente Menem decidió buscar como candidato a gobernador a alguien que expresara el pragmatismo instalado en el país: Carlos Reutemann.

Frente a la complicada situación partidaria (el PJ estaba totalmente fragmentado), la Ley de Lemas era un instrumento imprescindible para la concreción de este objetivo. Con el respaldo del sector radical que respondía a Horacio Usandizaga, el justicialismo logró imponer la novedosa norma por 25 a 24 votos.

En 1991, a pesar de que Horacio Usandizaga fue el candidato más votado, Carlos Reutemann era consagrado gobernador de la Provincia de Santa Fe para el período 1991-1995.

En las elecciones a concejales de 1993, Honestidad, Trabajo y Eficiencia (HTyE) presentaba dos sublemas: uno encabezado por el secretario de Salud de la Municipalidad de Rosario Hermes Binner, y el otro por la secretaria general del Sindicato de Amas de Casa, Rita Colli. Esta división en el seno de HTyE era el resultado de la intención del intendente Héctor Cavallero de conformar una alianza entre su partido y el justicialismo.

El resultado de las urnas fue contundente, el sublema de Hermes Binner se alzó con un amplio triunfo y Rita Colli ni siquiera pudo lograr una banca en el Concejo.

En el ámbito nacional, el presidente Menem lograba coronar su sueño de poder acceder a un segundo mandato. A través de un acuerdo secreto sellado con Alfonsín –acuerdo gestado entre Luis Barrionuevo y "*Coty*" Nosiglia– conocido públicamente como Núcleo de Coincidencias Básicas (NCB) o Pacto de Olivos, se había resuelto reformar la Constitución Nacional y habilitar la reelección presidencial.

La elección de constituyentes estuvo caracterizada por el desinterés de la población, que se expresó en un ausentismo de casi el 35% del total del padrón electoral. El PJ logró la primera minoría y en Santa Fe siete agrupaciones políticas participaron de la Reforma.

Uno de los temas habilitados por la Convención reformadora fue la tan meneada cuestión de la autonomía de los municipios, tantas veces planteada por Rosario. El artículo 123 de la nueva Carta Magna sostiene: "*Cada provincia dicta su propia constitución, conforme lo dispuesto por el artículo 5 asegurando la autonomía municipal...*".

No obstante este nuevo artículo, Rosario sigue sujeto al marco jurídico que impone la Constitución de la provincia de Santa Fe, por tanto, hasta que ésta no sea modificada, la ciudad puede conservar su naturaleza autárquica (contemplada en el texto actual), pero le falta definir las características para su desenvolvimiento. Con el objetivo de reglamentar la autonomía de los municipios, la reforma de la Constitución Provincial fue uno de los reclamos centrales de las distintas administraciones socialistas de Rosario al gobierno provincial.

La Reforma Constitucional habilitaba la reelección presidencial. En 1995, Carlos Menem derrotaba ampliamente a José Octavio Bordón y era reelegido como presidente de los argentinos. Se había impuesto a nivel nacional, provincial e inclusive en ciudad de Rosario, lugar donde se vaticinaba una derrota del candidato del PJ.

Héctor Cavallero, muy cercano al menemismo, provocaba en el seno del PSP un intenso debate acerca de cómo debía posicionarse el partido frente al gobierno nacional (propiciaba un acercamiento), y al ser derrotado en las internas, abandonó esa fuerza política fundando una nueva agrupación: el Partido del Progreso Social (PPS), que en las elecciones a gobernador de 1995, participó como un sublema del peronismo avalado por Carlos Menem.

En los comicios del 3 de septiembre de ese año, la ciudadanía santafesina asistía atónita a la "caída del sistema" de recuento de votos del Correo Central de Rosario. En medio de denuncias entrecruzadas de fraude, Usandizaga, Obeid y Cavallero se adjudicaban el triunfo en las elecciones. Luego de treinta y cinco días de intensas negociaciones, los distintos sectores en pugna aceptaron el triunfo de Jorge Obeid que fue consagrado como nuevo gobernador.

En Rosario, una vez más, el justicialismo era derrotado en las elecciones municipales. La Alianza Santafesina integrada por el PSP, la UCR y el PDP, lograba imponer a Hermes Binner como intendente.

A pesar de que la crisis generada luego de la devaluación mexicana ya afectaba la producción y comenzaba a revertirse el ciclo de crecimiento económico, el peronismo nuevamente triunfaba en las elecciones nacionales.

Las causas de este triunfo habría que ubicarlas en el balance que hacía la mayoría de la sociedad del "Plan de Convertibilidad", que redujo a niveles mínimos la inflación. En 1990 el aumento del índice de precios al consumidor había alcanzado el 1.343%; durante el primer año de la Convertibilidad cayó al 84,1% y en el año 1994 se había ubicado por debajo del 4% anual. La población, castigada durante años por la hiperinflación, encontró en la estabilidad un alivio y la posibilidad de acceder al consumo a través del crédito.

Fue así cómo, además del tradicional voto popular peronista, importantes sectores de la población siguieron brindando su apoyo incondicional a la gestión de Menem; en tanto otros, que ya venían enfrentando su política, por ejemplo en el terreno educativo con las grandes marchas contra la Ley de Educación Superior, seguían creyendo en la Convertibilidad y electoralmente optaron por la opción del Frepaso. En Rosario, estas franjas sociales aportaron decisivamente al triunfo de la Alianza Santafesina en las elecciones a intendente de septiembre de ese año.

Dos años después, con motivo de los comicios legislativos, se formalizaba a nivel nacional la unidad entre la UCR y el FREPASO que daba origen a la Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación. Con Graciela Fernández Meijide encabezando las listas de candidatos a legisladores, la Alianza, entre otros resultados favorables, lograba derrotar al PJ en su tradicional bastión de la provincia de Buenos Aires.

La huelga ferroviaria de 1991

Luego de la decisión del gobierno de Menem de abandonar el programa del FREJUPO que establecía la defensa de las empresas estatales como "*palancas decisivas del desarrollo autónomo*", comenzaba una campaña dirigida por el ministro Dromi para crear opinión en la sociedad a favor de la desnacionalización de las empresas del Estado. Esta campaña, que contaba con la complicidad de dirigentes gremiales como el ferroviario Pedraza, sembró confusión sobre las bondades de las privatizaciones en importantes sectores populares.

La derrota del gremio telefónico, con masivos despidos en su lucha contra la entrega de ENTEL, junto a las privatizaciones de Austral y Aerolíneas Argentinas pusieron en guardia a los trabajadores ferroviarios, que eran señalados como los principales generadores del déficit estatal.

En realidad, en los últimos años, el gremio había sufrido una drástica reducción de personal. En 1948 cuando se nacionalizaron los ferrocarriles había 235.000 trabajadores. La dictadura militar instaurada en 1976 despidió a 60.000, hacia 1983 quedaban solamente 100.000 empleados, en tanto al momento del inicio de la huelga la planta de personal se había reducido a 70.000.

A fines de 1990, comenzaba a hablarse de una primera tanda de cesantías de 5.000 empleados, lo que generó un clima de gran agitación en el gremio. El día 12 de febrero se realizaron reuniones en los talleres, decidiéndose abandonar las tareas e ir al paro. El día 13, en masivas asambleas realizadas en los talleres de Pérez y Rosario, se decidía un cese de actividades de 38 horas a partir de las 10 de ese mismo día. Los obreros de Pérez marcharon a pie hasta la sede de la Unión Ferroviaria, lugar donde eran aguardados por los trabajadores de Rosario que habían cortado la calle durante tres horas.

En histórica asamblea de 2.000 ferroviarios se decidió constituir, al margen de la dirección del gremio, una Comisión de Lucha que tendría a su cargo la coordinación de las medidas aprobadas. Además de rechazar las cesantías, los asambleístas se pronunciaron por un adelanto de 1.000.000 de australes para cada empleado y decidieron la expulsión de Pedraza, secretario general de la Unión Ferroviaria, del gremio. Con las primeras cesantías comenzó el paro por tiempo indeterminado, desatándose una lucha que se extendió por cuarenta y cinco días.

La solidaridad del resto del movimiento obrero junto a la mayoría de la población fue importante, y sin ésta, seguramente hubiera sido imposible mantener la huelga por tanto tiempo. Durante ese período se concretaron 18 asambleas, dos movilizaciones por las calles de la ciudad y una marcha dentro de los Talleres de Rosario. El 1 de marzo, aniversario de la nacionalización de los ferrocarriles, se realizó un acto en Pérez y posteriormente se organizaron dos festivales de solidaridad con la lucha, de los que participaron varias bandas locales.

Sobre la base del compromiso de la empresa de otorgar un aumento de sueldo del 112% y reincorporar a los 120 despedidos, la Comisión de Lucha decidió suspender la medida de fuerza. Si bien se logró una sustancial mejora salarial y fueron reincorporados 101 trabajadores, quedaron cesantes 19 dirigentes, entre ellos los dos principales impulsores de la medida de fuerza: Fazzari y Gutiérrez.

La gran huelga ferroviaria de 1991 no fue una huelga más, fue una de las más prolongadas de la historia del gremio y desde ya la más importante de ese período. Junto a la gran lucha de 1990 de los trabajadores estatales jujeños nucleados en el SEOM dirigido por Carlos "*Perro*" Santillán, que culminó con la renuncia del gobernador De Aparici; junto a la resistencia de los trabajadores a la privatización del Astillero Río Santiago; junto a otras importantes luchas como la de los mineros de Sierra Grande, los telefónicos, los metalúrgicos de Siderca y Somisa; la huelga ferroviaria de 1991 dejó una profunda huella en la noche negra del menemismo, que se extendió desde 1990 hasta fines de 1992.

La derrota de la política menemista

A partir de 1993, y principalmente luego de la recesión económica de

mediados de 1994, se reinició con fuerza un proceso de reactivación de las luchas populares, con picos notables como el caso del Santiagazo de diciembre de 1993 o la primera Marcha Federal; estas luchas comenzaron a esmerilar el hasta ese momento omnímodo poder menemista.

Durante 1994 y 1995 se desarrollaron en Jujuy importantes luchas de trabajadores municipales y estatales, en tanto Tierra del Fuego fue el epicentro de la rebelión de los obreros metalúrgicos. En una movilización realizada en abril de 1995, fue muerto el obrero de la construcción Víctor Choque.

En ese período también crecieron las luchas en el campo, particularmente de los pequeños y medianos productores de la pampa húmeda, proceso en el cual surgió, en junio de 1995, el Movimiento de Mujeres en Lucha (MML) enfrentando los remates de las chacras por falta de pago de las deudas usurarias.

El lunes 6 de septiembre de 1995 se realizaba el primer paro general conjunto de la CGT, el Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA) y la Central de Trabajadores Argentino (CTA). La medida fue respaldada por la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

En Buenos Aires, el cese de actividades que se inició a partir de las 12, se complementó con una marcha a la Plaza de los Dos Congresos. La protesta se dio en el marco de una fuerte discusión entre el dirigente gremial menemista de la UOCRA Gerardo Martínez, que no cuestionaba el plan económico sino la implementación del mismo, y el representante del Sindicato de Camioneros y referente del MTA, Hugo Moyano, que planteaba su oposición al plan de "*hambre y desocupación de Menem y Cavallo*". Con esta posición coincidían la CTA de Víctor de Genaro y la CCC de Carlos "*Perro*" Santillán.

En Rosario, el cese de actividades fue de 24 horas, participando de la medida de fuerza prácticamente la totalidad de los gremios locales. No circuló el transporte de pasajeros urbano e interurbano de media y larga distancia; no hubo actividad bancaria, de los Tribunales, del comercio, ni la industria metalúrgica; los docentes vinculados al SADOP no dictaron clases en tanto los maestros nucleados en AMSAFE trabajaron normalmente. Algunas organizaciones como el Sindicato Argentino de Televisión (SAT) viajaron a Buenos Aires para participar del acto central.

También adhirió al paro el "Congreso de la Cultura, el Trabajo y la Producción" integrado, entre otros, por Federación Agraria Argentina, la Central de los Trabajadores Argentinos, la Federación Universitaria Argentina y el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos.

Algunas entidades empresariales como CAME (Coordinadora de Actividades Mercantiles Empresarias) y la CGE (Confederación General Económica) se comprometieron a no descontar el día de trabajo. En el otro extremo del arco empresarial, la Unión Industrial Argentina (UIA) ratificó la quita del jornal correspondiente y el presentismo a todos los trabajadores que acataran la medida de protesta.

A partir de este paro se sucedió una serie de importantes luchas del movimiento obrero contra las medidas antipopulares dispuestas por el gobierno, como el recorte de las asignaciones familiares, la flexibilización laboral, la desregulación de la obras sociales, el aumento de la edad jubilatoria para la mujer, etc.; siendo particularmente importante la marcha de protesta del 26 de julio de 1996 organizada por la Central de Trabajadores Argentinos, la Corriente Clasista y Combativa y otras fuerzas opositoras contra esas medidas de ajuste.

El estallido de la pueblada de Cutral Co y Plaza Huincul de mediados de 1996, marcó el inicio de un nuevo momento en la lucha popular contra la política menemista.

En septiembre de ese año, Daer, que había desplazado a Martínez de la conducción de la CGT oficialista, lanzaba un paro de 36 horas. En respuesta, Menem sancionaba por decreto la flexibilización laboral y la conducción gremial redoblaba la apuesta disponiendo la realización de otro paro, que se realizó el día 26 de diciembre.

El 12 de abril de 1997, fue salvajemente reprimida por parte de Gendarmería Nacional y la Policía Provincial una protesta de los docentes neuquinos, con el lamentable saldo de la muerte de una manifestante de 33 años, Teresa Rodríguez, varios heridos de bala y decenas de intoxicados por los gases lacrimógenos. La CTERA y la CONADU respondieron convocando a un paro nacional docente, en tanto la mayoría del arco político, gremial y social opositor al gobierno menemista repudió la represión exigiendo un paro nacional.

El 11 de julio de 1997 se realizó la "Marcha Nacional por Trabajo para Todos" (Segunda Marcha Federal), convocada por la CTA, la CCC, el MTA y la FUA, y el 14 de agosto se efectuó un nuevo paro nacional. En el norte del país se sucedieron masivas puebladas como las de General Mosconi y Tartagal en Salta, y Libertador General San Martín en Jujuy.

En 1999, las protestas y movilizaciones aumentaron. En Rosario, la UIA lanzó desde el Monumento a la Bandera la campaña del "Compre Nacional", en tanto los obispos de la Iglesia Católica se pronunciaban en contra de "*los efectos sociales del modelo*".

Comenzaba a pergeñarse desde un sector del poder un bloque devaluacionista, que tenía como objetivo descargar la crisis sobre las mayorías, bloque que recién lograría imponer su hegemonía cuando Duhalde desplazó a Rodríguez Saa de la presidencia, y Remes Lenicov y Mendiguren pasaron a dirigir la economía argentina.

Previamente, en 1999 la Alianza, que llevaba a Fernando De la Rúa y Carlos "*Chacho*" Álvarez como candidatos a presidente y vice, derrotaba a la fórmula justicialista encabezada por Eduardo Duhalde y Ramón "*Palito*" Ortega, que en la interna partidaria habían abortado los intentos reeleccionistas de Menem.

En la provincia de Santa Fe, entretanto, volvía a imponerse el peronismo,

consagrando como gobernador a Carlos Alberto Reutemann; y en Rosario era reelecto Hermes Binner, el candidato de la Alianza Santafesina.

Nos aproximábamos al fin del siglo XX. Había culminado la década menemista. Rosario, por entonces, tenía aproximadamente 962.000 habitantes y la desigualdades eran evidentes.

Según datos proporcionados por Carlos del Frade, periodista e investigador rosarino, los estratos sociales de mayores ingresos que representaban apenas el 7% de la población, se apropiaban del 30% del PBI de la región; en el otro extremo 300.000 personas recibían apenas el 8% del PBI. (Del Frade Carlos, *El vecino*, Rosario, 2000).

La crisis era enorme, no sólo afectaba a la producción sino también al trabajo. Entre los sectores económicos más golpeados se destacaba el rubro indumentaria juvenil, ya que decenas de miles de jóvenes habían sido expulsados a la marginalidad. Los cierres y quiebras de empresas eran frecuentes. Algunas fábricas como los frigoríficos Nelson y Ardeol directamente dejaron de operar, pero el caso más paradigmático y de mayor repercusión en la región, fue la quiebra de Massey y Fergusson, última fábrica de tractores que cerró sus puertas luego de acumular un abultado pasivo, millonario en dólares. Con el cierre, quedaron excluidos del mercado laboral 241 trabajadores.

De acuerdo a datos referidos por Juan Carlos Tizziani, tomados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), al finalizar el siglo el Gran Rosario registraba una desocupación del 18,5%, la segunda más alta de la década, y un subempleo que se ubicaba en el 12,4%. Como consecuencia de esta inédita caída de la actividad económica, 92.014 personas fueron arrojadas a la marginalidad total, en tanto otras 62.259 pasaron a trabajar menos de 35 horas semanales. (Tizziani Juan Carlos "*El desempleo en la última década, cosecharás tu siembra*", Rosario, julio de 2000).

En el área educativa, la situación también era crítica ya que a los establecimientos de enseñanza primaria asistían 115.000 alumnos, mientras 93.000 habían desertado sin completar sus estudios básicos. Estos datos reflejaban las secuelas de la década menemista.

Los conflictos agrarios durante la década

Durante la década del '90 se produjo una acelerada pauperización de amplios sectores rurales de la pampa húmeda. En un principio, cuando desde el gobierno nacional se dictaron las principales medidas orientadas a la desregulación del sector, las organizaciones gremiales agrarias no enfrentaron con medidas concretas los planes que afectarían fundamentalmente a los pequeños y medianos chacareros. Por ejemplo, al analizar el accionar de Federación Agraria Argentina en los inicios de la década menemista, recogiendo opiniones de Ponce de León, César Isla sostiene:

> "*...ante la disolución de las juntas reguladoras, la eliminación del precio sostén, el vaciamiento del INTA, etc., sus principales dirigentes* (por FAA) *se limitaron a responder con discursos 'inofensivos' y ´testimoniales', sin siquiera llamar a una sola medida de fuerza de cumplimiento efectivo. Esta actitud permisiva luego va a ser adoptada en diferentes oportunidades y a lo largo de toda la década por las sucesivas direcciones de la entidad...*"
>
> (Isla César, *El Movimiento de Mujeres en Lucha y el Plan de Convertibilidad*, UNR Editora, Rosario, 2004)

Sin embargo, luego de la tregua concedida en el primer período menemista, las organizaciones gremiales agrarias promovieron definiciones encontradas. Las entidades representativas de los grandes terratenientes como la Sociedad Rural Argentina (SRA), o Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) –que históricamente albergó a grandes propietarios del interior con contradicciones con la dirección de la SRA–, respaldaron el modelo impuesto, dado que compartían en líneas generales los objetivos económicos, políticos e ideológicos del gobierno de Carlos Menem. A pesar de estas posiciones muchos productores nucleados en CRA, y afectados por el modelo, participaron de movilizaciones opositoras.

Por su parte, Federación Agraria Argentina (FAA), organización que agrupa a los pequeños y medianos propietarios, luego de las vacilaciones del primer período, durante la década menemista sostuvo distintas posiciones. Superada la confusión y tregua inicial, la gestión de Humberto Volando se inclinó a enfrentar las políticas neoliberales, en cambio en el período en que el radical René Bonetto dirigió la entidad, la misma se manifestaba con discursos y acciones que, en líneas generales, tendían a acompañar las políticas oficiales.

Las bases de la organización, a medida que iban quedando claros los efectos negativos del plan económico implementado, fueron desarrollando importantes luchas que, en general, eran impuestas desde los distritos más combativos y luego sostenidas por las direcciones gremiales, como el "tractorazo" realizado en Plaza de Mayo el 27 de julio de 1993, del que participaron productores nucleados en FAA y CONINAGRO e inclusive algunos terratenientes menores provenientes de las filas de CRA. Por supuesto, la SRA brilló por su ausencia en la protesta.

En el año 1994, estas mismas organizaciones comenzaron un paro que se extendió por diez días, con grandes movilizaciones llevadas adelante en diversas zonas del país. La dura medida de fuerza que tuvo su epicentro en la provincia de Santa Fe, contó con una importante adhesión en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Río Negro, Mendoza, Entre Ríos y San Luis. Durante ese paro se generalizaron los cortes de ruta –característica principal de las luchas agrarias de la década– en todo el país. En pleno conflicto, cuando retornaba de un piquete, en un trágico accidente ocurrido en la autopista Rosario-Santa Fe perdía la vida Mariano Echaguibel,

combativo dirigente agrario de FAA y titular de la filial Maciel de esa entidad.

Hacia 1995, la situación en el agro comenzó a tensarse. La crisis llevó a que miles de explotaciones agropecuarias fueran hipotecadas, mientras que para afrontar las deudas financieras, muchos pequeños y medianos productores vendieron sus campos y otros directamente tuvieron que soportar el remate de su propiedad. Esta situación originó la desaparición de miles de establecimientos, llevando a la radicalización política e ideológica a vastos sectores sociales del campo.

Para Azcuy Ameghino, por ese entonces las entidades gremiales no tenían:

> *"...una política específica para enfrentar los remates en ciernes, y mucho menos un repertorio de tácticas concretas destinadas a paralizarlos y neutralizarlos una vez iniciada la acción judicial..."*
>
> (Azcuy Ameghino, Eduardo, *Las reformas económicas neoliberales y el sector agropecuario pampeano, 1991-1999*, Revista Ciclos en la Historia, la Economía y la Sociedad N° 20, Buenos Aires, 2000)

Las luchas agrarias de 1993 y 1994, junto a la desesperante situación económica de miles de pequeños y medianos productores asfixiados por las usurarias deudas financieras, fueron los detonantes de la irrupción en el campo argentino del **Movimiento de Mujeres en Lucha.**

Protagonismo de la mujer agraria: el papel del MML

Este movimiento irrumpió en las luchas agrarias de la pampa húmeda con un accionar novedoso: **parar los remates de los campos de los pequeños y medianos productores endeudados.** La metodología empleada por la bisoña organización, junto a la particularidad de que se trata de un movimiento integrado solamente por mujeres, repercutió enormemente en la sociedad argentina.

El origen del Movimiento de Mujeres en Lucha (MML) hay que ubicarlo en el mes de junio de 1995 en Winifreda, La Pampa, lugar donde se intentaba realizar el remate de un campo perteneciente a la familia Cornelis.

La esposa del dueño de la chacra a ejecutar, ganada por la desesperación, se dirigió a la radio del pueblo, y reclamó desde ese micrófono la solidaridad de los vecinos para evitar el desalojo. Rápidamente, respondiendo al llamado de Lucy de Cornelis, se congregó una importante cantidad de personas dispuestas a impedir el remate.

La concurrencia comenzó a rezar y a entonar las estrofas del Himno Nacional, logrando a través de ese método impedir la concreción de la subasta y dando inicio a lo que sería la principal característica operativa del movimiento. Con el tiempo se fueron incorporando otras formas de protesta que tenían como objetivo obstruir el acto de remate. La mujeres del movi-

miento repartían volantes que denunciaban la connivencia de la Justicia, con las fuerzas de seguridad y los usureros del lugar, o fotografiaban a los posibles compradores con el propósito de *escracharlos* posteriormente.

La irrupción del transgresor modo de protesta impuesto por el MML tuvo un alto impacto en la opinión pública en general, y particularmente entre los sectores agrarios. En este novedoso escenario, el 3 de junio de 1995 se realizó en Santa Rosa (La Pampa) una asamblea de la que participaron mujeres de chacareros y productores agrarios, con el objetivo debatir los posibles modos de enfrentar la política oficial de ejecución de prendas e hipotecas y remates de campos.

Posteriormente, el 21 de septiembre de 1995, en una nueva asamblea realizada en Santa Rosa, se fundó el Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha (MMAL) nombrándose a Lucy de Cornelis como presidenta del flamante nucleamiento. Con los años, dicho nombre fue perdiendo vigencia pasando a denominarse Movimiento de Mujeres en Lucha (MML).

En la mencionada asamblea constitutiva se convocó a un nuevo encuentro a realizarse el 7 de octubre. Para que participen del mismo, se cursaron invitaciones a distintas autoridades de la provincia de La Pampa y de la Nación. A pesar de las enormes expectativas que se habían generado en torno a la presencia de los funcionarios, éstos no concurrieron al evento, provocando un enorme malestar entre las 600 mujeres presentes.

En la asamblea fundacional de septiembre de 1995, Lucy de Cornelis manifestaba:

> *"...Mi esposo no reaccionó porque es de las personas que creen que las deudas hay que pagarlas, (...) Pero nosotros nos endeudamos porque le creímos a Menem que decía que había que modernizarse (...) yo sentía que eran factores externos los que nos estaban arrebatando nuestras cosas. Por eso con un grupo de mujeres decidimos luchar juntas y hacernos fuertes..."*
>
> (Diario *La Arena*, Santa Rosa, La Pampa, 22 de setiembre de 1995. Citado por Isla, César, *Op. Cit.*)

Aun cuando el documento fundacional se reducía exclusivamente al tema de las obligaciones financieras, ya que todavía el Movimiento no atacaba abiertamente el modelo económico, está claro que el discurso de Lucy de Cornelis ya ubicaba a la política nacional como responsable del endeudamiento en el sector agrario.

Las promesas incumplidas del gobernador Marín a Lucy de Cornelis, y la ausencia de funcionarios en las reuniones constitutivas del Movimiento impactaron negativamente en las fundadoras, quienes ya no intentaron buscar respuestas que llegaran desde "arriba" y optaron por la confrontación.

El proceso de incorporación a la lucha fue complejo, ya que las mujeres que iniciaron el Movimiento eran inexpertas en política. Al respecto Ana Galmarini, vicepresidenta del MML a nivel nacional y titular del mismo en la provincia de Santa Fe, afirmaba lo siguiente:

> "*...Tiene una particularidad el movimiento de las mujeres, que es que la mayoría son mujeres que nunca habían salido a pelear ni por un grano de arroz, porque la mujer del campo es muy sometida, muy de participar en la economía familiar pero desde la cocina...*"
>
> (Bidaseca, Karina, *El Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha: cuando la vida cotidiana de las mujeres rurales se politiza.* Ponencia presentada en las Cuartas Jornadas de Investigadores de la Cultura. Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Buenos Aires, 2000)

No obstante estas dificultades, desde su fundación el MML trabajó firmemente con el objetivo de impedir la ejecución de los bienes hipotecados. En un principio, al parar un remate las mujeres luchaban exclusivamente por la tierra, pero rápidamente pasaron a criticar el modelo y más tarde a cuestionar el papel de algunos dirigentes como René Bonetto.

Además, el MML participó activamente del conjunto de las movilizaciones del pueblo argentino, contra las políticas de Menem primero y de De la Rúa después. Mientras detenían los remates exigiendo el recálculo y condonación de la deuda, reclamaban el precio mínimo sostén en origen para los cereales y oleaginosos y planteaban con firmeza la defensa del Banco Nación, movilizándose en reiteradas oportunidades contra la privatización del mismo. También se opusieron firmemente al latifundio y a la extranjerización de la tierra, siendo la provincia de Santa Fe uno de los bastiones del movimiento.

De la fundación del MML participó Federación Agraria Argentina, por ese entonces dirigida por Humberto Volando. Ambas organizaciones redactaron un documento peticionando a las autoridades "*la inmediata suspensión de los embargos y ejecuciones*", "*el congelamiento de los juicios en trámite*" y "*la revisión de la legitimidad de las deudas acumuladas*" (Diario *La Tierra* 5 de octubre de 1995).

Tras un breve período, y luego de que René Bonetto reemplazara a Humberto Volando, esta organización gremial tomaría distancia del Movimiento, conformando una nueva organización: Mujeres Federadas. El objetivo de la nueva táctica era evitar que las mujeres del campo se incorporaran masivamente al MML.

Durante la gestión de Bonetto, la aseguradora de Federación Agraria Argentina fue a la quiebra perjudicando al conjunto de los afiliados, y simultáneamente miles de productores fueron expulsados de sus chacras, lo que abriría paso a un proceso de concentración y extranjerización de la tierra. Mientras esto sucedía, Bonetto no sólo no ponía en pie de lucha a la organización gremial, sino que trabajaba activamente en el seno de la misma para tratar de impedir que la experiencia del MML fuera abrazada por el conjunto de los afiliados.

Las posiciones políticas e ideológicas de Bonetto recién serían comprendidas en toda su dimensión a partir de 1999, cuando cumplió funciones como colaborador del presidente Fernando De la Rúa. En ese período integró el directorio del Banco Nación, para pasar a desempeñarse poste-

riormente en el Ministerio del Interior como encargado de distribuir los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), acompañando la gestión de Carlos Mestre, uno de los responsables directos de los asesinatos del 19 y 20 de diciembre de 2001.

Por último, habría que decir que recién en el Congreso de Federación Agraria Argentina realizado en 2004, la organización gremial reivindicó plenamente el accionar del Movimiento de Mujeres en Lucha.

Se abre una situación revolucionaria

El gobierno de la Alianza, tal como sucediera a partir de 1976, no tocó los intereses de la oligarquía y los monopolios intermediarios e imperialistas. En general continuó profundizando la política practicada por Menem, agravando los ya de por sí difíciles problemas sociales que sufría la mayoría de la población.

El pueblo, luego de superar un breve período de confusión, se lanzó nuevamente a la lucha, multiplicándose los reclamos de los distintos sectores afectados por la política de De la Rúa y Álvarez. Se intensificó el camino de las puebladas, con paros activos y cortes de ruta, ocupaciones de fábricas con amenazas de cierre, de escuelas, y facultades, etc.

El gobierno de la Alianza, frente a los legítimos reclamos, apeló a las fuerzas represivas, afinando tanto los instrumentos jurídicos como los de inteligencia para utilizarlos contra los activistas y las organizaciones populares, continuando y acentuando en este terreno la política de Menem.

Las elecciones legislativas del 14 de octubre de 2001 desnudaron la realidad política del país. El PJ obtuvo 4.604.169 sufragios, la UCR 3.120.848 y 10.594.668 ciudadanos optaron por el camino de la abstención, el voto en blanco o nulo, cifra inédita en la historia argentina, inclusive superior a la alcanzada por el peronismo en los años de proscripción. Este era un claro indicio que evidenciaba que se había ido configurando una situación revolucionaria objetiva, que estallaría con la pueblada del 19 y 20 de diciembre, que pasó a la historia con el nombre de Argentinazo.

Esta pueblada ya se había insinuado en marzo de 2001, cuando De la Rúa reemplazó a Machinea por Ricardo López Murphy como ministro de Economía. Frente al ajuste, centrado fundamentalmente en la educación, una oleada de protestas sacudió al país.

Se volvió a constituir la Mesa de Enlace (CTA, MTA y CCC) y el movimiento de desocupados pasó a ocupar el centro de la escena política nacional. El corazón de este movimiento estaba en La Matanza, desde donde los desocupados de la CCC y la FTV-CTA llamaron en agosto y septiembre a dos asambleas nacionales piqueteras que convocaron a tres semanas de lucha que conmovieron al país.

Tanto la jornada de protesta nacional del 12 de diciembre, en la que se realizaron cortes de rutas en todo el país, como el paro activo del día 13,

fueron los detonantes que abrieron paso a una serie de acontecimientos que culminaron con la caída del presidente De la Rúa. En esos dos días habían confluido los obreros ocupados, los desocupados y jubilados, los estudiantes, los cuentapropistas, los comerciantes, los productores de la ciudad y del campo, como así también los ahorristas afectados por la expropiación de los depósitos bancarios (corralito) ordenada por el gobierno nacional.

Mientras esto sucedía, los máximos referentes del radicalismo y del justicialismo, Alfonsín y Duhalde, ante la evidencia del derrumbe del gobierno de De la Rúa trabajaron en forma conjunta buscando una transición ordenada. Ya era público que a principios de diciembre se había barajado la posibilidad de llamar a una "concertación" o "acuerdo nacional", nominando a Eduardo Duhalde como ministro "coordinador" investido de "superpoderes", aunque manteniendo a De la Rúa como presidente formal o títere.

Para asegurar la transición, con o sin De la Rúa, se designó al misionero Ramón Puerta, como titular del Senado.

El Argentinazo

En los días previos al Argentinazo se habían producido saqueos en algunos lugares como el Gran Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza y Santa Fe. Desde las gobernaciones de Buenos Aires (dirigida por Ruckauf) y otras provincias, utilizando el hambre y la desesperación de la población, primero se alentaron los saqueos orientándolos contra los pequeños y medianos comercios, para luego desatar una violenta represión producto de la cual aparecieron las primeras víctimas.

Instalado el caos, con el acuerdo de Menem, Duhalde y Ruckauf, el 19 de diciembre De la Rúa decretó el Estado de Sitio. Ése fue el detonante de la más grande rebelión popular de nuestra historia, cuya envergadura sobrepasó los planes de Duhalde y Alfonsín, ya que puso en fuga a un presidente y amenazó con barrer al conjunto de las instituciones que sustentan el estado oligárquico imperialista.

El Presidente anunció la medida –Estado de Sitio– y de inmediato los sectores populares ganaron las calles para repudiarla, extendiéndose las protestas al conjunto de la Nación. En Capital Federal, grandes contingentes de capas medias y jóvenes se juntaron en los barrios, marcharon cacerolas en mano por distintas avenidas y llenaron la Plaza de Mayo, instalando la tan temida consigna*: **¡Que se vayan todos!***

Por primera vez en la historia argentina, era desafiada abiertamente la sacrosanta Constitución Nacional, que en su artículo 22 sostiene: "*El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición*".

Eran decenas de miles los sediciosos que ese día, en las principales plazas y calles del país, desconocían el poder constituido ensayando nuevas formas de democracia directa. Sus reclamos eran compartidos por la mayoría de los argentinos.

Como respuesta a la hasta allí pacífica movilización, el gobierno daba la orden de desalojar Plaza de Mayo, transformando el lugar en una "zona liberada" a la represión. Espontáneamente, desde los barrios se encolumnaron numerosos contingentes de jóvenes, quienes se organizaron en el microcentro para enfrentar el accionar represivo. Los durísimos combates se extendieron hasta la tarde del día 20 haciendo fracasar los intentos del gobierno de "liberar" la Plaza de Mayo y sus adyacencias. Aislado totalmente, inclusive sin el apoyo de su propio partido, De la Rúa debió renunciar huyendo en helicóptero.

Tanto el gobierno nacional como los distintos gobiernos provinciales, especialmente el de Santa Fe, reprimieron violentamente las protestas, dejando un saldo de decenas de muertes.

El gobierno de Reutemann ordena la criminal represión

En el conjunto del país, el Argentinazo tuvo características disímiles. En Santa Fe, la situación ya era explosiva desde los primeros días de diciembre. En el sur provincial se organizó un vasto movimiento de resistencia a las medidas económicas implementadas por Cavallo.

En Chabás, el jueves 6 de diciembre se realizó una asamblea de la que participaron las instituciones del lugar, contando la misma con la adhesión del presidente comunal. Los vecinos acordaron realizar una movilización el lunes 10 con cortes de ruta, con el objetivo de bloquear la entrada de los bancos exigiendo el traspaso de todas las deudas contraídas a pesos y la suspensión de los remates por 180 días. A la vez, se resolvió dejar de pagar los créditos bancarios hasta que se devolvieran los depósitos a los ahorristas "acorralados".

El lunes a las 6 de la mañana, los organizadores despertaron a la población con 80 bombas de estruendo. Inmediatamente el Sindicato de Camioneros resolvía cortar las principales esquinas con los vehículos de carga, en tanto la mayoría de los habitantes del lugar se volcaba a la plaza principal donde a partir de las 8, se realizó un acto en el que hablaron el párroco del pueblo, el presidente comunal, una representante del Movimiento de Mujeres en Lucha y el coordinador de la Comisión de Emergencia (organización que nucleaba a las distintas instituciones convocantes). A las 10,30 la multitud se trasladó a la ruta con el objetivo de impedir un remate solicitado por el Banco Bisel. Debido a la falta de garantías, a las 11 la jueza actuante decidía la suspensión del mismo. A esa altura de los acontecimientos, la policía estaba totalmente desbordada limitándose a observar lo que sucedía.

El viernes 14 cortaron la ruta 9 los fabricantes de muebles de Correa y Cañada de Gómez. El lunes 17, una semana después del levantamiento de Chabás, los habitantes de Firmat, Bigand, Carrera, Sanford, Elortondo, Arteaga

y San José de la Esquina bloquearon la entrada a los bancos, obligando a la suspensión de las actividades. Éste era el clima que se vivía en el sur santafesino en los días previos al Argentinazo.

En Rosario, el lunes 10 y el miércoles 12, se realizaron escraches a los bancos City y Río como así también a la Bolsa de Comercio; en tanto el apagón y cacerolazo del día 12 tuvieron amplia repercusión, ya que durante 45 minutos la ciudad cambió su fisonomía debido al bullicio y masividad de la protesta.

En la provincia, el paro del día 13 tuvo un altísimo acatamiento, realizándose importantes concentraciones en Casilda, Villa Constitución y Rosario. En ésta, el día 14 comenzaron los saqueos, que en un principio estuvieron orientados hacia pequeños y medianos comercios. En algunos barrios como Empalme Graneros, participaron de los mismos centenares de vecinos, produciéndose enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

La crisis era muy grave. En el Gran Rosario el desempleo llegaba al 22,8% (una cifra jamás conocida), y la subocupación rondaba los 18 puntos. Teniendo en cuenta que éstos eran datos oficiales se podría afirmar que la falta de trabajo afectaba a cerca de la mitad de la población. Según el ministro de Hacienda Juan Carlos Mercier "*en la primera semana de diciembre, la recaudación cayó a la mitad*".

Ante este sombrío panorama, y con la latente amenaza de los saqueos, algunas organizaciones piqueteras como la CCC, se movilizaron hacia el centro de la ciudad reclamando al gobierno provincial que declarara con urgencia la "Emergencia Alimentaria". El gobernador Reutemann no prestó atención al pedido.

Luego de cinco días de mucha tensión, el 19 se desbordaba el tejido social y la actividad productiva de la ciudad se paralizaba. Las zonas norte, oeste y sur fueron copadas por multitudes que exigían solución al problema del hambre. Se registraba una altísima presencia de mujeres y niños en las protestas. En algunos casos, la participación popular era masiva. Según la crónica periodística "*más de cuatro mil personas ocuparon Avenida Perón entre el 4400 y el 5100*".

Hacia la media tarde, la ciudad estaba totalmente paralizada; habían cerrado los negocios del centro y de la periferia, en tanto los ómnibus y taxis prácticamente no circulaban. La proliferación de multitudes comenzaba a marcar una clara tendencia: el repliegue policial.

En esta situación, la policía recibió la orden del poder político de desatar la represión. El saldo: siete muertos, todos con armas de fuego; más de cien heridos, treinta con balas 9 mm; y centenares de detenidos. Algunos casos testimoniaban el accionar de las fuerzas de seguridad. A Juan Delgado lo fusilaron en Pasco y Necochea desde un metro de distancia, luego de caer herido tras recibir una bala de goma. Claudio "*Pocho*" Lepratti fue asesinado de un tiro en la garganta, mientras observaba los incidentes desde la terraza de la Escuela 756 (lugar donde trabajaba) y pedía desesperadamente a la policía que tuviera cuidado cuando disparaba porque había muchos chicos.

La represión policial motivó que los organismos de Derechos Humanos denunciaran ante las Naciones Unidas la seria violación de los "derechos humanos" y del "Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos" que en Argentina tiene rango constitucional. No obstante esto, a cuatro años de los sucesos, no se ha avanzado en el esclarecimiento de estos crímenes y la mayoría de los responsables directos (poder político y jefes de los organismos de seguridad) ni siquiera han sido citados a declarar.

Mientras el presidente De la Rúa daba su mensaje al pueblo argentino comunicando su decisión de decretar el Estado de Sitio, Rosario se asemejaba a una ciudad fantasma.

Sin embargo, según refiere la crónica periodística, "*bastó que la diariera de calle Dorrego al 300 saliera a la calle con una jarra y un tenedor, para que a los pocos minutos comenzara a poblarse la Plaza San Martín*". Lo mismo sucedió en Plaza 25 de Mayo, en el Monumento y en otros lugares de la ciudad, desatándose de esta manera el cacerolazo del día 19. A pesar del Estado de Sitio y del terror previo que vivió la ciudad con un saldo de siete muertos, el pueblo masivamente ganó las calles, permaneciendo hasta altas horas de la madrugada como protagonista de esa histórica pueblada.

Con las fuerzas de seguridad replegadas, el día 20, en Rosario se vivió una jornada más tranquila. La ciudad seguía atentamente los sucesos de Capital Federal y hacia las 20, miles y miles de personas salieron a festejar al Monumento la caída de Fernando De la Rúa. **Se observaba a un pueblo movilizado que había protagonizado el hecho político más trascendente de los últimos cien años: el Argentinazo.**

Algunas conclusiones del Argentinazo

Al carecer de una organización y una dirección política unificada, la pueblada del 19 y 20 de diciembre no pudo imponer un nuevo gobierno que impulsara una salida a favor de los intereses populares. Varios elementos coadyuvaron para que el pueblo no lograra evitar la salida "acordada" entre distintos sectores de poder, expresados políticamente por Duhalde, Alfonsín e Ibarra.

En primer lugar, el movimiento obrero organizado –totalmente dividido– no participó como tal en el levantamiento. Tanto el sector "propatronal" de Daer como el "rebelde" de Moyano habían convocado a un cese de actividades para el día 21 de diciembre. Ambas organizaciones procedieron como la dirección de la CGT en 1945. Ésta había convocado a un paro para el día 18, mientras tanto el pueblo, dando la espalda a la conducción gremial protagonizó la histórica gesta del 17 de octubre.

En segundo término, salvo en la región sur de Santa Fe, en Entre Ríos y, en menor medida, en algunas zonas del sur del país, el movimiento campesino tampoco participó organizadamente de la pueblada.

◀ Convocatoria del "Movimiento en Defensa de la Vivienda Única" en Casilda convocando al paro del 13 de diciembre de 2001, a pocos días del Argentinazo.

En tercer lugar, la neutralidad de las Fuerzas Armadas puso un claro límite al estallido. La fracción nacionalista, a pesar de haber resistido las presiones de De la Rúa para incorporar a los militares a la represión, no se sumó a la protesta. Nuevamente quedó demostrado que sin la participación del sector patriótico y popular de las Fuerzas Armadas, es muy difícil garantizar el éxito de un levantamiento popular.

Por último, habría que señalar que no hubo un centro coordinador encargado de orientar las diversas formas de protesta expresadas en esas jornadas. La mayoría de los que participaron en los saqueos y en los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad lo hicieron de manera espontánea, o a los sumo unidos en pequeños grupos. Pero también se pudo observar que una parte de los manifestantes accionó de manera organizada.

Los manifestantes lograron contener e incluso hacer retroceder a las fuerzas de seguridad, pero la falta de coordinación fue notoria. **Esto se expresó con total claridad en la disgregación de las fuerzas populares (políticas, gremiales, etc.) que, salvo algunas excepciones, no previeron la magnitud del descontento popular, y por tanto no estuvieron preparadas para un desenlace de las características del Argentinazo.**

Una vez más quedó demostrado que sólo con la unidad de los trabajadores, las capas medias, los estudiantes, los profesionales e intelectuales, los sectores patrióticos y democráticos de las Fuerzas Armadas, las entidades que nuclean a campesinos pobres y medios o la pequeña y mediana industria, se puede garantizar una salida a favor de los intereses del pueblo y de la nación. Ésta es la principal enseñanza que dejó el Argentinazo.

El Casildazo y la "Marcha de los pueblos del sur a Rosario"

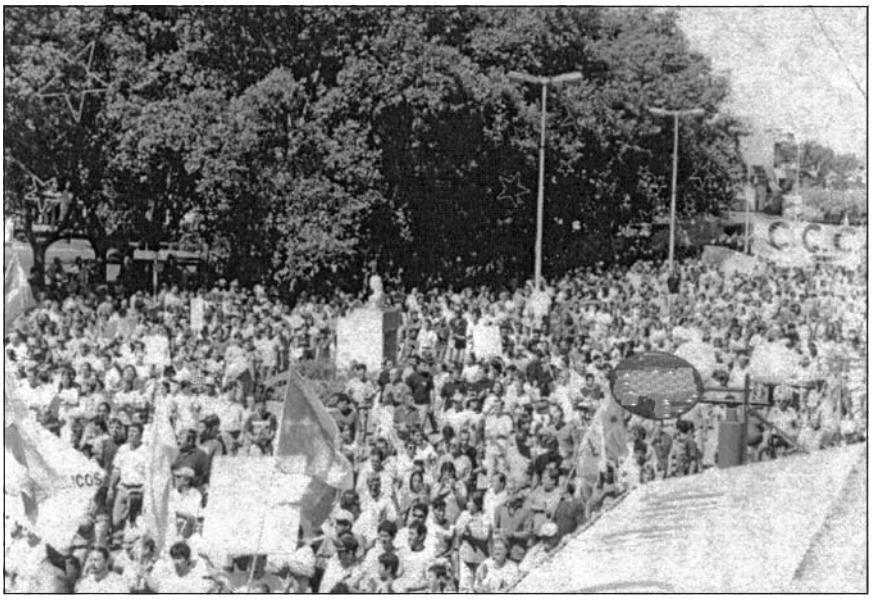
El 15 de enero de 2002, a menos de un mes de la caída del gobierno de De la Rúa, el pueblo de Casilda protagonizó un paro general activo convocado por diversas organizaciones sociales, del agro y de trabajadores. La medida contó con el respaldo del Centro de Comerciantes, que recomendó cerrar los negocios.

El descontento social era generalizado. A la crisis imperante a nivel nacional había que agregarle algunos detonantes locales, que transformaban la de por sí complicada situación en explosiva. Además de estar paralizada la comercialización de granos, las empresas metalúrgicas del lugar (todas vinculadas al campo), sin excepción, habían entrado en convocatoria.

A la difícil situación que atravesaban el campo y la agroindustria se le sumaba que los más de cuatrocientos maquinistas agrícolas de la zona que cosechaban en distintas regiones del país volvían a Casilda sin dinero, con cheques que resultaban incobrables, debido a que se había cortado la cadena de pagos. Una situación similar vivía el gremio de camioneros.

Muchos sostienen que la pueblada de Casilda fue un grito de desesperación de toda una comunidad. Era realmente conmovedor observar cómo familias enteras se volcaban a las calles exigiendo cambios. Desde los distintos barrios, miles y miles de personas –un tercio de la población– marcharon sobre el centro. Y comenzó el Casildazo.

Tras la consigna "Contra el poder financiero usurario, basta de hambre y desocupación, en defensa de la producción nacional" la población se adueñó de la ciudad y descargó su indignación de forma "contundente" y "precisa" contra las instalaciones de los principales responsables y beneficiarios de la crisis: los bancos Bisel, Credicoop, Galicia, Nación y Santa Fe SA. Los edificios de estas entidades financieras fueron destrozados. Una situación similar se registró en las sedes de los organismos recaudadores de impuestos (AFIP-DGI y Rentas Provinciales) y de las prestadoras de servicios (Aguas Provinciales y Empresa Provincial de la Energía) que también fueron arrasadas.



▲

La multitud avanza por la calle Buenos Aires durante el Casildazo (15 de enero de 2002)

Hay que destacar que ninguna casa, auto o comercio de la ciudad fue afectado, dejando totalmente en claro el alto grado de organización y conciencia que había alcanzado la pueblada.

La represión provocó más indignación aún, ya que miles de nuevos manifestantes se volcaron a las calles, respaldando a los cientos de jóvenes que la enfrentaron con piedras. Las fuerzas de seguridad se dividieron por la negativa de la policía local a actuar contra los vecinos. A pesar de que los enfrentamientos dejaron algunos heridos y detenidos, el pueblo volcado a las calles vivió con entusiasmo la jornada. Los comercios no volvieron a abrir. Ante la llegada de los canales nacionales, los habitantes se ubicaban frente a los edificios arrasados, exhibiendo el orgullo de haber protagonizado un serio llamado de atención a tanta indiferencia de las autoridades. Finalmente, en horas de la noche, los manifestantes marcharon a la Jefatura de Policía y lograron la liberación de todos los detenidos.

La pueblada de Casilda, por su carácter masivo, por el importante grado de conciencia alcanzado por los participantes y por las implicancias políticas que trajo –Reutemann dijo: "*Yo a Casilda no voy más*"–, ha sido uno de los acontecimientos más trascendentes de la historia política y social de Santa Fe. El Casildazo tuvo una amplia repercusión nacional e inclusive internacional, ya que algunos importantes medios extranjeros como la BBC de Londres enviaron corresponsales para recoger material.

▲

Cabeza de la marcha por la calle Buenos Aires durante el Casildazo (15 de enero de 2002).

Temiendo la reiteración y extensión de esta experiencia, desde distintos sectores del poder provincial se lanzó una campaña de difamación, pocas veces observada, contra la dirección del movimiento. El gobierno de Reutemann trataba de confundir e imponer un clima de intimidación ante el anuncio de una movilización sobre Rosario –la "Marcha de los pueblos del sur a Rosario"–, organizada desde distintas localidades y ciudades del sur santafesino, que se realizaría el 17 de enero. Ese día se desplegaron en la Ruta 33 y en los accesos a la ciudad de Rosario 350 gendarmes y 650 efectivos de la policía provincial.

Los manifestantes, sorteando todo tipo de provocaciones, lograron llegar hasta Plaza San Martín para luego entrevistarse en la sede local de la Gobernación con Reutemann. Éste, ante los dirigentes de la convocatoria, dejaría totalmente en claro que respaldaba la política del nuevo gobierno nacional encabezado por Duhalde, y que en el marco económico imperante era imposible prometer soluciones.

LAS GRANDES REGIONES

Santa Fe posee un poderoso potencial económico

La provincia tiene una superficie de 133.007 km^2, Su densidad poblacional es de 22,5 habitantes por km^2, y actualmente el índice de urbanización es del 91,4%. Posee 363 centros urbanos contenidos en 19 departamentos, y según datos del Censo Nacional de 2001, en la provincia viven 2.997.376 habitantes que representan el 9,19% de la población nacional. El clima es cálido en la región norte, templado al sur, húmedo al este y subhúmedo al oeste. La temperatura media anual es de 15 grados en la región sur y 21 en el norte.

El territorio provincial abarca sólo el 4,8% de la superficie total del país. Los datos del Censo Agropecuario 2001 indican que Santa Fe posee el 21% del área cultivada del territorio nacional siendo su Producto Bruto Geográfico (PBG) el 8% del total general, por lo que además del evidente perfil agrícola está considerada como una de las más ricas de Argentina. En la provincia además, coexisten diversas regiones productivas que abarcan desde la agricultura primaria hasta la ganadería extensiva, pasando por los cultivos industriales, forestales, agrícolas, hortícolas y una gran producción lechera. Asimismo posee una fuerte presencia industrial y de servicios.

En el norte y noroeste, tanto las pasturas naturales como las implantadas, posibilitan el desarrollo ganadero extensivo. En el sur, predominan los suelos con buenos niveles de fertilidad que poseen excelentes condiciones para el desarrollo de la agricultura. En la región del noroeste se destacan las tierras aptas para el cultivo del algodón, caña de azúcar y arroz. En tanto los arenosos suelos del este y sureste, posibilitan el crecimiento de cultivos hortícolas, cítricos y forestales.

La zona sur, una de las áreas agrícolas más importantes del país, aporta el 45,20% del valor de la producción provincial. La gran cuenca lechera, ubicada en la zona central, suma el 30,57% de lo producido. En tanto la extensa zona norte que se destaca por la cría de bovinos y muchos

de los cultivos industriales (azúcar, algodón, arroz, etc.), aporta el 24,3% del Producto Bruto Provincial (PBP).

Santa Fe se caracteriza por tener una fuerte producción agrícola concentrada en cereales y oleaginosos. Es la primera productora de soja (casi 40% del total nacional); la segunda de trigo (10%) y sorgo (21%); la tercera de maíz (16%), cebada (7%), arroz (5,5%), algodón (5%) y la cuarta de girasol (5,5%).

La ganadería se basa fundamentalmente en la cría de animales vacunos en forma extensiva en el norte provincial, desarrollándose de manera intensiva en el centro y sur, a través del engorde o invernada. Según datos del mencionado Censo Agropecuario de 2001, el total de ganado ascendía a 7.000.000 de cabezas y en general –salvo las recientes experiencias del método "feed lot"– los mismos se alimentan en condiciones naturales sin contaminante alguno.

Desde 2001, en la provincia no se registran focos importantes de infección de aftosa. Se ha erradicado la brucelosis bovina, estando el ganado libre de encefalitis espongiforme bovina (enfermedad conocida como de la "vaca loca"). Las carnes santafesinas se caracterizan por su alto valor nutritivo y muy buena calidad, tornándolas altamente competitivas en el mercado mundial.

A pesar del brote de aftosa de 2001, durante 2002 se faenaron cerca de 2.000.000 de cabezas, lo que representa el 20% del total nacional. En la provincia se encuentran los principales frigoríficos exportadores del país, que ese año vendieron al exterior por un valor de 200 millones de dólares. No obstante el nuevo brote de la enfermedad desarrollado en la provincia de Salta (pocos meses después de que el país recuperara el estatus oficial de país libre de aftosa con vacunación), durante el año 2003 continuaron aumentando las ventas de carnes a otros países. La industria frigorífica se ha recuperado actualmente de la crisis registrada en 2001, no sólo por la reapertura de los principales mercados internacionales, sino por la competitividad producto de la devaluación (benefició a los exportadores) que terminó afectando a los asalariados, jubilados y a quienes producen para el mercado interno.

La provincia cuenta con dos importantes zonas lecheras, la central que aporta el 90% del total provincial y la del sur que contribuye con el 10%. La cuenca lechera ubicada en el centro de Santa Fe es la más importante de América Latina, y el área de asentamiento de las principales industrias lácteas del país. La calidad de la leche santafesina está avalada por la dieta de sus animales, constituida por pastos frescos y sin contaminantes, en campos libres de aftosa y brucelosis. Con el objetivo de promocionar el nivel de los suelos, en el año 2000 la Provincia sancionó la Ley Nº 10.522 que beneficia a aquellos productores que adhieran a prácticas conservacionistas de los suelos, favoreciéndolos con la desgravación de hasta el 100% del impuesto Inmobiliario Rural.

La producción anual de leche supera los 2.500 millones de litros, sobre un total nacional de 8.600 millones. En Santa Fe, el promedio histórico

de producción de grasa butirosa por hectárea ha sido de 125 y actualmente se ubica en 150 kilogramos. Sobre un total nacional de 1.755.000 cabezas, la cantidad de vacas lecheras llega aproximadamente a las 600.000, y de los más de 15.000 tambos que hay en el país, 5.500 están ubicados en la provincia, ocupando aproximadamente 500.000 hectáreas.

Las condiciones naturales del territorio provincial son muy propicias para el desarrollo forestal, tanto de los montes nativos (principalmente utilizados como recurso energético, y en menor medida, para la provisión de madera para industrias), como de bosques cultivados, cuyo destino es la industria de molienda y muebles. En relación a la capacidad industrial instalada para la transformación de productos forestales, Santa Fe se ubica tercera en el país, con una importante inserción de las industrias de tableros, celulosa, aserraderos, construcción y muebles. La superficie de montes nativos supera el millón de hectáreas, con un crecimiento anual promedio de aproximadamente cincuenta metros cúbicos por hectárea.

Las excepcionales condiciones ambientales mencionadas han permitido el establecimiento de especies arbóreas de climas templado a subtropical, en tanto la calidad de los suelos y la profunda tradición agropecuaria han facilitado el cultivo de especies con alto valor maderero, mejorando la rentabilidad de los mismos. Además, Santa Fe cuenta con un Régimen de Promoción establecido por la Ley Nº 11.111 que promueve las inversiones forestales. El Régimen, conocido como Plazo Fijo Forestal, consiste en el pago por parte de la Provincia de una bonificación anual equivalente a la aplicación de la tasa Prime –que anualmente fija el Poder Ejecutivo– por el término de 10 años y sobre los costos netos de forestación. A pesar de este importante incentivo, la fuerte expansión de la soja junto a sus buenos precios y rindes, ha conspirado contra este tipo de inversiones.

Según datos del Censo Agropecuario 2001, en la provincia existe una base productiva de 300.000 colmenas que representan el 6% de la producción nacional, encontrándose en manos de aproximadamente 1.200 productores (8% del total nacional).

Por su parte, la fruticultura participa del Producto Bruto Agrícola (PBA) provincial con un 10,46% y el 8% de la superficie de la provincia se encuentra cultivada con frutas y hortalizas, produciendo aproximadamente unas 265.000 toneladas por año.

Además de las industrias basadas en los recursos naturales, la provincia desarrolló también otras ramas de gran relevancia, entre las que se destacan: la siderúrgica, que presenta fuertes conexiones con el resto del aparato industrial; maquinarias y equipos; productos químicos y petroquímicos y automotrices. Aunque con menor importancia, también es significativa la producción de caucho y plásticos y la refinación de petróleo.

En la provincia se producen aproximadamente 1,1 millón de toneladas de laminados no planos. La misma se destina al mercado interno y en

menor medida a la exportación. Producen para el mercado local la totalidad de las numerosas fundiciones y laminadoras de la zona central de la provincia. En cambio Acindar, si bien abastece a la mayoría del mercado interno, también exporta importantes cantidades.

El núcleo fabril principal está ubicado en la zona de Rosario, Gran Rosario y puertos aledaños. Otros centros importantes son el de Villa Constitución, Rafaela, Villa Gobernador Gálvez y el polo industrial Avellaneda-Reconquista.

Durante 2003 las exportaciones provinciales alcanzaron los 4.900 millones de dólares, ubicándose Santa Fe en el segundo lugar a nivel nacional detrás de Buenos Aires. La provincia exportó principalmente Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), las que alcanzaron el 71%; por su parte las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) se ubicaron en el 13%, en tanto el rubro Energía y Combustible llegó al 2%. Paralelamente ese mismo año se registró una leve caída de la exportación de productos primarios.

La producción santafesina durante 2003 tuvo el siguiente destino: Asia (33%), África (10%), Mercosur (10%), resto de Latinoamérica (8%), NAFTA (7%) y resto del mundo (2%).

La provincia de Santa Fe, en su límite este, se extiende a lo largo de más de 700 kilómetros de costas sobre el Río Paraná. En su región oriental se encuentran numerosos embarcaderos y puertos con óptimas condiciones para la navegación internacional. Existen excelentes acuíferos subterráneos, en especial en el este y en el centro sur.

La carencia de una política hídrica provincial ha impedido la planificación a mediano y largo plazo de obras de previsión de inundaciones y saneamientos de los suelos. Debido al manifiesto desinterés oficial, hasta hoy no se han realizado las obras de relevancia en el norte provincial, en la denominada zona de los Bajos Submeridionales; como así tampoco las tareas necesarias para detener el desborde de las lagunas La Picasa y Melincué, cuyo crecimiento terminó afectando a localidades del sur.

La región de los Bajos Submeridionales representa una llanura deprimida de 10.700.000 hectáreas, que sufre permanentes inundaciones y sequías agravadas por las características de los suelos, como así también por una serie de factores que la confinan a una situación de marginalidad económica, social y productiva. Las obras del Plan Federal de infraestructura están paralizadas.

Norte-Centro-Sur: una división tradicional

La provincia se ha dividido tradicionalmente en tres grandes zonas que comprenden los departamentos del norte, el centro y el sur de nuestro territorio.

La región norte o Bajos Submeridionales ocupa el 42% de la superficie provincial e incluye a los departamentos 9 de Julio, Vera, General Obligado

y San Javier. Se trata de un territorio despoblado que contiene apenas el 9% de los habitantes de la provincia. Exhibe fuertes características de subdesarrollo y su Producto Bruto Global (PGB) es muy bajo. La excepción la conforma el Polo Industrial Reconquista-Avellaneda, ubicado a orillas del Río Paraná, en el departamento General Obligado.

El centro ocupa el 37,3% de la superficie provincial e incluye los departamentos La Capital, Garay, San Justo, San Jerónimo, Las Colonias, San Cristóbal, San Martín y Castellanos. La zona tiene un importante Polo Industrial con centro en Rafaela, cabecera de la cuenca lechera más importante del país, y junto al Polo Industrial Santa Fe de la ciudad capital, conforman los dos grandes ejes fabriles de la zona central. En esta región habita el 32,5% de la población provincial, siendo su desarrollo económico bastante significativo.

El sur abarca el 20,7% del territorio provincial e incluye los departamentos Belgrano, Caseros, Constitución, General López, Iriondo, Rosario y San Lorenzo. Rosario y su área metropolitana conforman un cordón industrial y un sistema portuario regional con alrededor de 25 terminales exportadoras, que en su conjunto generan un alto valor de producción. La región contiene el 58,6% de la población de la provincia. La estructura productiva es preponderantemente agroindustrial. Cuenta con un desarrollado y moderno sector transformador de la producción primaria.

La especialización dominante está en la industria manufacturera de agroalimentos y sus derivados, definidos por cinco encadenamientos: granos, carnes, leche, hierro y químicos, que le permiten a la región lograr una interesante inserción en el mercado internacional. Los molinos harineros y las aceiteras se ubican como la avanzada de la industria alimenticia. Este sector, a pesar de ser un ejemplo de producción con Valor Agregado para la exportación (33% del total), paradójicamente ocupa muy poca mano de obra.

Las cuatro grandes regiones

Sin dejar de lado la división tradicional, y teniendo en cuenta la actividad económica predominante y la densidad poblacional, se podría dividir la provincia en cuatro grandes regiones.

Una zona urbana-industrial-costera que comprende la franja costera central y sur provincial. En esta área están incluidos los centros urbanos que van desde Puerto General San Martín hasta Villa Constitución, en el límite sur de la provincia. También ubicamos en esta región al complejo urbano Santo Tomé-Santa Fe.

En segundo lugar definimos una región agrícola que incluye los departamentos del sur provincial, a excepción de las áreas pertenecientes a la zona anterior.

La tercera región es la tambero-pecuaria-industrial que comprende la zona central de la provincia, con exclusión del departamento La Capital y el extremo sur de San Cristóbal.

Finalmente, en los departamentos de la zona norte provincial, incluido el norte del departamento San Cristóbal, ubicamos una zona a la que denominamos pecuario-boscosa.

Esta división se fue definiendo a partir de la segunda mitad del siglo XX; y a pesar de la irrupción del "boom sojero" y la conformación de algunos nuevos cordones agroindustriales, como el de Las Parejas, en lo fundamental, este mapa se mantiene.

La región urbano-industrial-costera

En esta región se encuentran Rosario y Santa Fe, los dos grandes centros urbanos de la provincia. Estas ciudades han tenido un proceso de desarrollo distinto.

Santa Fe ha crecido al influjo de su carácter de capital provincial, por tanto sede gubernamental. Se estructuró como concentración a partir de sus funciones administrativas y su crecimiento ha sido más lento que el de Rosario.

Rosario, por su parte, se expandió en la época del desarrollo económico nacional, conocido como de "desarrollo hacia afuera" y su conformación se dio a partir de sus funciones de intermediación y prestación de servicios privados. El complejo Rosario-Gran Rosario, ha sido y es el centro portuario y de comercialización a través del cual se envía hacia el mercado mundial la producción agropecuaria de la región. Asimismo es el centro de un nudo ferroviario creado en función de esas necesidades, y hoy, desde el poder nacional y provincial se proyectan grandes inversiones en rutas y ferrocarriles, como las del Plan Circunvalar, destinadas a facilitar la salida de las riquezas.

Simultáneamente, en épocas en las que el crecimiento de la economía nacional se sustentaba en el desarrollo de la industria sustitutiva de importaciones, Rosario, a diferencia del resto de la provincia, fue elegida como lugar para la instalación de muchas empresas. Finalmente, cuando tras la caída del primer gobierno de Perón, se produce la invasión masiva de capitales extranjeros, algunas grandes fábricas se instalaron en la zona del Gran Rosario. El proceso de reconversión industrial de las últimas décadas, con el desmantelamiento de gran parte de la infraestructura industrial instalada, ha determinado una profunda crisis en aquel próspero cordón industrial. No obstante sigue vigente como el área de mayor concentración urbana de la provincia. Por lo expuesto, a las funciones de intermediación y prestación de servicios privados habría que sumarle la de transformación de materias primas.

Todo esto ha contribuido a que Rosario y el Gran Rosario conformen un conglomerado económico de múltiples actividades: un núcleo intermediario, comercializador y exportador de la producción agropecuaria de la región y además la sede de un dinámico proceso industrial.

En la región urbano-industrial-costera se concentra más de la mitad de los habitantes de la provincia; en tanto la población rural –un escaso porcenta-

je en relación a ambos conglomerados– se dedica a la producción de flores, frutas, hortalizas y legumbres con destino al abastecimiento de las ciudades. Estas actividades se llevan a cabo en el denominado cinturón verde que rodea al ejido urbano y que se extiende desde San Lorenzo hasta Villa Constitución. En la región costera se obtienen buenos rindes de zanahorias, lechugas, papas, duraznos, naranjas, etc. En Coronda se producen excelentes frutillas para la exportación con un extraordinario rendimiento que alcanza los 42.000 kilogramos por hectárea. En la zona de la capital provincial la producción más importante es la de tomates con una superficie sembrada de 1.000 hectáreas.

La actividad económica más relevante de esta región es la industrial. En los departamentos La Capital, San Jerónimo, San Lorenzo, Rosario y Constitución se concentra cerca de la mitad de los establecimientos industriales de la provincia y la mayor parte (60%) de los obreros ocupados del sector.

Como ya hemos visto, hacia 1935 Rosario tenía un grado importante de diversificación de las actividades industriales, con un gran peso de las alimenticias, ligadas al mercado interno y a la exportación (fundamentalmente de carnes). Al mismo tiempo, las industrias metalúrgicas crecían al compás de la sustitución de las importaciones y en los barrios de Rosario se radicaron cientos de talleres, algunos de los cuales se transformaron en importantes industrias, hecho indicativo de que los capitales locales iniciaron la industrialización liviana.

Con la política de desindustrialización aplicada por la dictadura instaurada en 1976, Rosario ha sido, sin duda, la ciudad más castigada por este proceso de liquidación fabril. Las consecuencias de estas políticas se expresaron en el cierre de fábricas que fueron orgullo de los rosarinos, como el caso de Villber, Chaina, Cura Hnos., Schlau o Estexa, entre otras.

Las actividades terciarias han sido y son también de gran importancia, al punto de que en esta zona se desarrolla la mayor cantidad de actividad bancaria, comercial, financiera, asistencial, cultural, recreativa, etc. de toda la provincia. Además, hay que destacar que esta región concentra la mayor parte de los recursos provinciales destinados a la atención de la salud, y también es la más favorecida en materia educacional, localizándose en ella los dos grandes centros universitarios de la provincia.

Desde mediados de la década del '30, a partir de la instalación de la destilería de YPF, San Lorenzo se transformó en área industrial. Este departamento fue el principal receptor de las grandes plantas modernas radicadas alrededor de los años sesenta. Ramas como papel, químicas y derivados del petróleo, y metalúrgicas ligadas a la producción de maquinarias para el agro, fueron las más beneficiadas.

En el departamento Constitución, en cambio, el crecimiento industrial se originó en la década del '50, ligado al desarrollo de la siderurgia. Actualmente el eje Villa Constitución-San Nicolás es uno de los principales cen-

tros de la industria pesada argentina. Ya entre los censos industriales de 1954 y 1963, la participación de este departamento en el valor agregado industrial de Santa Fe había crecido a más del triple.

Actualmente, Acindar –empresa que pasó a manos de capitales brasileños y europeos– abastece de acero a todo el país, produce laminados no planos, destinados principalmente a la construcción. La actividad química se ubica especialmente en San Lorenzo y sus alrededores con terminales propias en los puertos de la zona. También es importante el desarrollo de la industria petroquímica que orienta sus ventas al mercado externo, frente a un deprimido mercado interno.

Con la radicación de General Motors (GM) –produce autos para el mercado interno y externo– se promovió un aumento de demanda de subsectores de autopartes, metalmecánica y de servicios. A pesar de que se radicaron algunas plantas de autocomponentes, fundamentalmente en Rosario, la gran mayoría de las autopartes que utiliza GM son importadas. Asimismo, entre las principales empresas exportadoras de manufacturas de origen industrial de la Argentina se encuentran John Deere, Cerámica Alberdi, Acindar, Sulfacid y la mencionada General Motors, empresas ubicadas en Rosario y el Gran Rosario.

Por su parte, el departamento La Capital ha venido perdiendo peso en representatividad industrial. Segundo en importancia en 1935 –detrás de Rosario–, actualmente es superado también por San Lorenzo, Castellanos y Constitución. Tuvo un lento crecimiento entre 1935 y 1954 y un virtual estancamiento entre 1954 y 1963. El cierre de la planta Fiat en la década del ‘80, y el de los talleres ferroviarios producto de la privatización de los ‘90, complicaron aún más esta situación.

También habría que agregar que a partir de la década del ‘60, departamentos no considerados en esta franja como General López y Castellanos, tuvieron un incremento productivo que habla de un proceso de relativa desconcentración geográfica de la producción industrial santafesina.

Con la expansión de la soja, en el Gran Rosario se ha radicado el mayor complejo industrial aceitero del país. En 2002, el 66,4% de la industria aceitera nacional estaba localizada en la provincia de Santa Fe. La exportación de aceites constituye más del 85% del total nacional y la venta al exterior de subproductos (pellets y harinas) representan el 93% del mencionado total. Bunge SA, Cargill SACI, Dreyfus, Pérez Companc (a través de Molinos Río de la Plata SA controla Santa Clara), Vicentín SAIC, General Deheza SAICA, Buyatti SAICA, ConAgra y Nidera SA controlaban el 98% de la capacidad de molienda instalada en la provincia. La gran mayoría de estas empresas están localizadas en el Gran Rosario.

Por último, en esta región convergen las dos grandes líneas ferroviarias existentes. El ferrocarril Belgrano SA, que une Buenos Aires con Santa Fe extendiéndose hasta Resistencia, Barranqueras hacia el norte y hacia La

Quiaca por el noroeste, hasta llegar a Chile y Bolivia; y el Nuevo Central Argentino que comunica la provincia con el norte y Buenos Aires. Como ya se ha analizado con todo detalle, el trazado de la red ferroviaria está vinculado al proceso productivo agrícola, posibilitando la llegada del cereal a los puertos. La conexión vial Rosario-Victoria, recientemente habilitada, contribuye a la conformación definitiva del corredor bioceánico. El compromiso asumido por el gobierno nacional, junto a los gobiernos de Santa Fe y Córdoba de finalizar en el año 2007 la autopista Rosario-Córdoba, de cumplirse, dará un fuerte impulso a toda la Región Centro.

La región agrícola

Esta región, con más del 75% de la población residente en los pueblos y ciudades de la zona, se encuentra fuertemente urbanizada. Este proceso se acentuó a partir de la década del '60 por la tendencia de los productores agropecuarios a transferir su domicilio a los pueblos o ciudades de la región; este traslado se vio facilitado en un primer momento por el incremento de los ingresos del sector, como producto del aumento de los rindes y, más tarde, por la irrupción de la soja. El mejoramiento de la infraestructura vial junto al crecimiento de la producción de automotores ayudaron al desplazamiento poblacional.

La actividad agropecuaria –mayoritariamente sojera– es el motor de la economía lugareña, pero también habría que señalar que en algunos departamentos ha habido una importante evolución de la producción industrial. Tal es el caso de General López, que a partir de 1950 ha registrado un incremento de los establecimientos metalúrgicos, dedicados a la producción de máquinas y herramientas livianas para la agricultura. La mayoría de estas empresas fueron en sus comienzos pequeños talleres, que se beneficiaron tanto con el proceso de sustitución de importaciones como de cierto apoyo financiero estatal. A la vez, se ha ido desarrollando la industria alimenticia –frigoríficos regionales, molinos, lechería, etc.– ligada al mercado interno regional y nacional.

En algunas ciudades de otros departamentos, como Casilda, Cañada de Gómez o Las Parejas, se registraron procesos similares al de General López. Por ejemplo, en Las Parejas está radicada la empresa Búfalo –pionera en la provincia en la fabricación de implementos agrícolas– que actualmente exporta sembradoras, especialmente a Sudáfrica. No obstante estos ejemplos, el aporte industrial de la región es ínfimo en relación al valor agregado del sector en el total provincial.

Hasta la década del '50, la región presentaba una distribución similar entre ganadería y agricultura, predominando en ésta el cultivo de cereales y oleaginosos, sobre todo maíz (77% del total), trigo y girasol. No obstante esa paridad, el mayor valor generado por una hectárea agrícola en relación a una

destinada a la actividad pecuaria, hizo que la región se transformara desde esa época en eminentemente agrícola. Hacia fines de la década del '50, utilizando algo menos de la mitad de la superficie total, la agricultura aportaba más de las dos terceras partes del valor de la producción del sector agropecuario.

En esa década, en los departamentos San Martín y General López predominaba la invernada y en el resto de la región las producciones mixtas. Además, en un radio de 150 kilómetros alrededor de Rosario, se encontraba la segunda zona tambera de la provincia –el epicentro estaba ubicado en Roldán y Zavalla– con aproximadamente 2.000 establecimientos con más de 100.000 vacas lecheras, en su mayoría Holando Argentino. Esta situación comenzó a revertirse a partir de los '70 con la irrupción de la soja; posteriormente, la expansión de este cultivo condujo a la desaparición de todos los tambos de la región.

Una situación similar se registró en la zona chanchera del sudoeste santafesino y del este cordobés, cuyo epicentro estaba ubicado en Chañar Ladeado (departamento Caseros) y Corral de Bustos (Córdoba). El desarrollo sojero también llevó a la desaparición de la mayoría de los establecimientos dedicados a la cría de cerdos.

En Argentina, la producción histórica de porcinos era de 3.700.000 cabezas anuales. Durante la Segunda Guerra Mundial el requerimiento de cerdos (el cebo del mismo se usa para la fabricación de la nitroglicerina que mezclada con un cuerpo inerte forma la dinamita) por parte de los países beligerantes, llevó a que la producción nacional aumentara en 1943 a 7.000.000 de cabezas.

La expansión de la soja también afectó, del mismo modo, a otras zonas chancheras del país, motivo por el cual la producción nacional se redujo a 1.250.000 cabezas, cifra que apenas alcanza para abastecer el 40% del mercado interno.

Actualmente, la producción está monopolizada por los grandes frigoríficos. Por ejemplo, Paladini posee 7.000 madres en Villa Amelia.

Desde el punto de vista económico, es absurdo que nuestro país tenga que importar carne de cerdo. Una chancha madre genera, cada año y medio, un promedio de 1.800 kilos, mientras que durante ese mismo lapso de tiempo, una vaca produce 250 kilos. Esto se debe a que el período de gestación del cerdo es de apenas tres meses, tres semanas y tres días y, a diferencia de lo que sucede con la vaca, su lechigada es numerosa y la alimentación sumamente económica.

El "boom sojero", a la vez que llevó a la destrucción de la cuenca lechera y chanchera del sur santafesino, desencadenó una especie de fiebre productiva de este cereal, que condujo a la desaparición de la chacra mixta como unidad productiva. Salvo en el caso del departamento General López, en la región agrícola la propiedad de la tierra está relativamente desconcentrada, registrándose, incluso, algunos problemas de minifundio.

En el área de educación, en la gran mayoría de los lugares es posible acceder a la enseñanza secundaria, y en las ciudades importantes (Casilda, Firmat, Venado Tuerto, Cañada de Gómez, Coronda, etc.) funcionan centros educativos de nivel terciario y universitario.

La sanidad –con las limitaciones originadas en los bajos presupuestos– presenta índices similares o superiores a los nacionales; no obstante esto, los casos de urgencias y de alta complejidad deben ser atendidos en Rosario o Santa Fe.

La región tambero-pecuaria-industrial

En los departamentos Castellanos, Las Colonias, San Martín, sudoeste de San Cristóbal, oeste de San Jerónimo Norte, norte de La Capital y sur de San Justo se encuentra ubicada la zona tambera más importante de la provincia. Esta zona, integrada con el vecino distrito de San Justo en Córdoba y el de Rivadavia en Santiago del Estero, se ha transformado en el corazón tambero de Argentina. El departamento Castellanos produce el 31% del total provincial, seguido de cerca por Las Colonias con el 25%. Esta cuenca genera el 90% de la producción de Santa Fe, y en la misma operan tres de las cinco principales industrias lácteas del país. El volumen producido es del orden de los 7.000.000 de litros diarios, sobre un total nacional de 19.000.000.

La leche obtenida en la región se orienta fundamentalmente a la industrialización. Más del 60% de la misma se utiliza para la elaboración de quesos, el 30% para leche en polvo, el 6% se consume como leche fluida y el resto se destina a la fabricación de dulce de leche.

La región exporta el 40% del volumen total producido, lo que representa el 38% de la exportación nacional. La provincia muestra una alta especialización en la producción de quesos y leche en polvo, que representaron más del 90% del valor exportado de productos lácteos durante el año 2002.

La importancia de la producción lechera en esta zona, se aprecia en el hecho de que la región aporta más de las dos terceras partes del valor de la producción del rubro correspondiente.

El tambo logra la utilización óptima de las praderas artificiales, incorporando como actividad secundaria la invernada, en tanto la combinación tambo-industria lechera es la que marca el ritmo del conjunto de la economía regional.

El temor a que el "boom sojero", tal como sucedió con otras actividades, termine afectando la producción lechera de la zona ha llevado al INTA de Rafaela a realizar estudios comparativos sobre rentabilidades. Esta investigación ha determinado que en los tambos de baja producción el cultivo de soja ofrece más ventajas que la producción lechera, pero en los establecimientos de mediana y alta producción, la probabilidad de superar la renta lechera con este cultivo no son alentadoras en lo inmediato y menos en el futuro.

En esta región, el sector industrial se encuentra relativamente desarrollado y es el segundo en importancia de la provincia. Hay un importante número de Pymes dinámicas orientadas al mercado interno como así también al externo. Además de la producción lechera, el tejido productivo de la región se encuentra conformado fundamentalmente por los sectores metalmecánico (maquinarias, autopartes y bienes de capital para la agroindustria); frigoríficos; lácteos; y curtiembres.

Hay, además, fundiciones y laminadoras que abastecen principalmente a pequeños mercados de la industria metalmecánica. En esta zona también se concentra la mayoría de las empresas autopartistas del centro santafesino.

Aun cuando el crecimiento industrial se verifica en el conjunto de la región, históricamente el departamento Castellanos ha sido la locomotora de la economía zonal. Ya en 1963, este departamento participaba con un 7,7% del total provincial.

Con 82.000 habitantes y 1.800 comercios, Rafaela es la ciudad más pujante. Posee 375 industrias, de las cuales 80 destinan parte de su producción al mercado externo por un valor aproximado a los 200 millones de dólares.

La empresa Williner, fundada en 1928, produce la marca Ilolay y es la más importante de la zona. Con 1.000 empleados, esta industria láctea exporta el 50% de los 380 millones de litros anuales de leche que transforma en una variada línea de producción. Otras empresas emblemáticas de la ciudad son Edival (700 trabajadores) y Basso (563 trabajadores). Ambos establecimientos, con cerca de cincuenta años de actividad, se dedican a la fabricación de válvulas para motores. Por su parte Red Megatone, que nació en la década del '80 de la fusión de Bazar América de Rafaela y Electrónica Megatone de Santa Fe, tiene 152 sucursales distribuidas en 19 provincias.

En Rafaela funcionan varias escuelas técnicas, los centros del INTA y del INTI, y cuatro Universidades, entre ellas la sede regional de la Tecnológica (UTN).

Desde esta ciudad han surgido figuras que se han proyectado nacionalmente como el industrial José Luis Basso, actual vicepresidente de la UIA, o el doctor Ricardo Lorenzetti, integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También han nacido en Rafaela políticos influyentes de la provincia como el socialista Binner o el justicialista Perotti.

La región pecuario-boscosa-industrial

Durante la última década del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, la actividad económica fundamental de la región fue la explotación de la riqueza forestal (quebracho colorado), que a partir de 1906 fue realizada casi exclusivamente por la compañía inglesa La Forestal.

Las plantas productoras de tanino más importantes estaban ubicadas en los departamentos Vera y General Obligado. Tras el retiro de la compa-

ñía inglesa que llevó al cierre de las fábricas de extracto de quebracho, Vera quedó prácticamente sin industrias y, producto de la crisis de la mayoría de las papeleras y las destilerías, la participación industrial de General Obligado se redujo a algunas explotaciones de tableros (maderas aglomeradas) o industrias alimenticias regionales, como las aceiteras de la zona de Reconquista o el ingenio Arno de Villa Ocampo, cuya historia y presente ha sido analizado en detalle.

En la década del '60 la actividad forestal, aunque conservaba cierta importancia, era superada por la ganadería, que revestía y reviste características totalmente distintas a las de otras regiones. Se trata de explotaciones concentradas en grandes extensiones de pastos naturales, ya que sólo un pequeño porcentaje de la superficie ganadera está cultivada con forrajes.

El carácter extensivo de la ganadería norteña se aprecia en el siguiente dato: a pesar de contar con el 45% de la superficie ganadera de la provincia, la región genera un porcentaje mucho menor del valor de la producción pecuaria provincial. El ganado de la zona es de inferior calidad en relación al de otras regiones y la utilización de pastos naturales, junto al clima menos propicio, se traducen en una menor productividad. En esta zona se ha desarrollado mucho el cebú, y sus cruzas, de mayor resistencia a los climas cálidos y a las enfermedades, y de menores exigencias alimenticias.

Hasta la irrupción de la soja, en la región se realizaba el grueso de los cultivos industriales de la provincia (caña de azúcar y algodón) aunque también tenían importancia los granos de sorgo y el lino.

Actualmente, en el norte, fundamentalmente en el polo industrial Avellaneda-Reconquista, existen numerosos establecimientos dedicados a la transformación de materias primas agrícolas. En estos se procesan aceites, carnes, leche, algodón y azúcar.

La empresa más poderosa de este polo es Vicentín, que en 2004 fue la séptima exportadora del país. Sus orígenes se remontan al año 1929; durante el primer período la firma funcionó como acopiadora de algodón y almacén de ramos generales, posteriormente en 1937 inauguró la primera planta desmotadora de algodón y en 1943, la empresa comenzó con la fabricación de aceites vegetales y la industrialización de semillas de lino, algodón y maní. Pero el gran despegue de Vicentín comenzó en el año 1966 cuando incorporó en la producción de aceites, el proceso de extracción con solventes.

En 1979 puso en marcha una segunda planta industrial en Ricardone, en el sur santafesino, y a partir de 1987 la empresa comenzó a operar desde su propia terminal de embarque, erigida en la ciudad de San Lorenzo, junto al Río Paraná.

En los '80, Vicentín comenzaría la expansión en el rubro del algodón, con la adquisición de nuevas plantas desmotadoras en Avellaneda (Santa Fe), Bandera (Santiago del Estero), El Colorado (Formosa), y General Pinedo y Villa Ángela (Chaco), que actualmente desarrollan la actividad bajo el

nombre de Algodonera Avellaneda SA. Durante 1998, la empresa ingresó al competitivo mercado interno argentino gracias a la comercialización de sus aceites de girasol y de oliva.

En febrero de 2000, con la adquisición de una hilandería (Hilandería Reconquista) situada en el Parque Industrial de Reconquista, Vicentín y Algodonera Avellaneda lograban integrar verticalmente todos los procesos referidos a la producción de algodón: acopio, desmotado, comercialización de fibra e hilado y tejido. Finalmente la compañía incursionó en el mercado de productos agroquímicos con la producción de herbicidas (glifosato) e insecticidas.

Como se ha señalado, la empresa Vicentín SACI es, holgadamente, la de mayor peso económico de la zona. Algodonera Avellaneda e Hilandería de Algodonera Avellaneda (ambas pertenecientes al grupo) son una de las tres plantas industriales de algodón más importantes del país. Las seis plantas de Algodonera Avellaneda, ubicadas en Avellaneda, Villa Ángela, El Colorado, General Pinedo (dos plantas) y Bandera, desmotan tres mil toneladas por día. Por su parte, Hilandería, además de exportar, produce y lanza al mercado interno tejidos de punto, jersey, interlock, piqué, algodón 100%, elastizados, plush y mezclas.

En la planta de Vicentín, en Avellanda, se realizan actualmente tareas de acopio y almacenamiento de cereales; además, la firma cuenta con una refinería que procesa el aceite crudo proveniente de las plantas localizadas en San Lorenzo, aceite que posteriormente es envasado para la comercialización en el mercado interno. La fábrica de Avellaneda cuenta con una capacidad de almacenamiento de 145.000 toneladas. Por su parte la planta de Ricardone dispone de la más moderna estructura que permite operar con semillas de soja, algodón y girasol, disponiendo de un oleoducto de 4.500 metros de longitud que transporta el aceite vegetal producido hasta la terminal de embarque, ubicada en San Lorenzo. Allí opera una planta de extracción de solventes con una capacidad de molienda diaria de 6.000 toneladas. Actualmente, Vicentín –una de las empresas más importantes del país– ocupa la séptima posición en el ranking nacional de exportaciones, con ventas por 733 millones de dólares.

La otra gran empresa del polo agroindustrial de la zona norte provincial es Buyatti, una gran aceitera ubicada en Reconquista, que emplea a 200 trabajadores en esa ciudad y 100 más en distintas localidades de Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero donde la firma posee plantas más pequeñas.

DE LA DEVALUACIÓN AL "BOOM SOJERO"

La devaluación: un gigantesco saqueo

Tras la caída de De la Rúa se sucedieron varios gobiernos hasta que, finalmente, la mayoría parlamentaria repudiada en las elecciones de octubre de 2001 impuso a Duhalde como presidente de la Nación. Aparentemente, se trataba de un gobierno fuerte ya que contaba con el apoyo y la participación de representantes del justicialismo, el radicalismo y el Frepaso. A la vez, el desprestigio de esa dirigencia política y la disconformidad social imperante debilitaban al gobierno de emergencia.

Con la presidencia de Duhalde se inició una nueva fase de superexplotación de los trabajadores y saqueo de la economía nacional. La devaluación impulsada por el nuevo gobierno benefició a los terratenientes y a los monopolios imperialistas ligados a la exportación, es decir, a la venta de bienes al exterior. Los precios de estos bienes se incrementaron paralelamente al aumento del valor del dólar, mientras que los salarios y otros precios de la economía se mantenían atados a la moneda devaluada. De esta manera se institucionalizó el saqueo de todos los sectores de ingresos fijos, desde los asalariados y los jubilados hasta aquellos que tenían depósitos atrapados en el "corralito".

El gobierno sostenía que el precio del dólar a 1,40 pesos sería transitorio, pero el FMI junto a los terratenientes y los exportadores exigían la "liberación" del control de cambio. Duhalde terminó acordando y cediendo frente a los reclamos. La especulación contra el peso no pudo ser contenida con las reservas que habían sido desvalijadas por la fuga de los depósitos convalidada por De la Rúa y Cavallo, lo que produjo una fenomenal disparada del dólar que beneficiaría aún más a los terratenientes y los exportadores. Además de la depreciación de los salarios, jubilaciones y pensiones, el impacto inflacionario trajo aparejado un tremendo ajuste, tanto del gasto público nacional como de los gastos provinciales y municipales.

De esta manera se puso en marcha una gigantesca transferencia de recursos de las franjas sociales que percibían ingresos fijos (trabajadores,

jubilados, profesionales, cuentapropistas, etc.) y de los sectores vinculados al mercado interno hacia los grandes terratenientes y monopolios vinculados a las exportaciones.

Este proceso fue acompañado de una pesificación de todas las deudas contraídas en dólares, sin diferenciar a los que se habían beneficiado o perjudicado con la devaluación. Quienes dependían de sus salarios o jubilaciones, o del mercado interno para colocar sus productos, no recibieron ventaja alguna de la pesificación que, en cambio, permitió a los grandes grupos monopolistas lograr una sustancial licuación de sus deudas; por ejemplo, el grupo Techint, que había contraído obligaciones con los bancos por 812 millones de dólares, vio cómo su pasivo –transformado a pesos– se reducía a 232 millones de dólares. Grandes monopolios como Telecom, Pérez Companc, Repsol, Telefónica, etc., obtuvieron similares beneficios.

La pesificación con devaluación favoreció a un selecto y reducido grupo de deudores, fundamentalmente a los grandes exportadores, que son los que disponen de dólares por sus ventas al exterior, y a los monopolios imperialistas porque pueden traerlos desde sus casas centrales.

Además de beneficiar a estos sectores, el gobierno de Duhalde destinó miles de millones de pesos para compensar a los bancos por las diferencias en el cambio (pesificación asimétrica), lo que también contribuiría a una mayor devaluación del peso, con el consiguiente robo inflacionario en perjuicio de los sectores populares, la producción nacional, los depositantes pesificados y acorralados, como así también del presupuesto nacional y sus equivalentes provinciales y municipales.

La devaluación ha garantizado a los grandes terratenientes y monopolios exportadores que por cada dólar vendido al exterior reciban alrededor de tres pesos, en vez de uno, como antes. Al mismo tiempo, sus deudas fueron transformadas a pesos a costa de un mayor endeudamiento público (emisión de nuevos bonos). La pregunta sería ¿quién pagó y paga esta gigantesca transferencia? En primer lugar, los asalariados y jubilados a través de la inflación que redujo sustancialmente sus haberes. En segundo lugar, los que tienen ingresos en pesos y dependen del mercado interno totalmente retraído y, por último, los depositantes bancarios cuyos ahorros fueron devaluados y acorralados.

Las retenciones dispuestas por el gobierno no se orientaron a aliviar a los sectores populares otorgando aumentos de sueldos o jubilaciones. Sirvieron para regular el reparto del saqueo entre los sectores dominantes, como sucedió con las compensaciones otorgadas al sector financiero, o para pagar la usuraria deuda externa. A pesar del default, en los últimos tres años se abonaron 10.000 millones de dólares a los organismos financieros internacionales. A esto hay que agregar otros 10.000 millones de dólares abonados anticipadamente y sin ninguna clase de quita para la cancelación total de la deuda argentina con el Fondo Monetario Internacional.

Origen y consolidación del proceso de sojización

El campo argentino está transitando un acelerado proceso de sojización, que se desarrolla afectando las producciones regionales y provocando un marcado auge de la deforestación. Este proceso fue impuesto por una pequeña minoría, que es la principal beneficiaria del "boom sojero", sostenido por la alta tecnología, la concentración de la tierra y la riqueza, la degradación ambiental y la evasión impositiva.

En 1976, con la dictadura militar instalada en el poder, se iniciaba el camino de desindustrialización nacional. En ese período, la soja, debido a la creciente demanda mundial de aceite y de harina (su principal subproducto), comenzó a sembrarse comercialmente. Fue así como en la región pampeana se inició un período de crecimiento de la superficie cultivada, que se consolidaría a mediados de la década del '90**.**

Con la desregulación ideada y llevada adelante por Domingo Cavallo, ministro de Economía del gobierno de Carlos Menem, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) se vio obligado a informar su colección de germoplasma –la base genética de la especie– a las multinacionales productoras de semillas. De esta manera se entregaron los ricos secretos de la producción nacional, y el INTA, el organismo encargado de generar tecnología para llevarla a los chacareros a través de los agentes de extensión, se transformó en una figura decorativa al servicio de Monsanto y las grandes cerealeras como Cargill y Bunge. Al disolverse la Junta Nacional de Granos (JNG), que garantizaba a los productores el precio mínimo sostén en origen, estas grandes empresas comenzaron a ejercer el control de calidad como así también a manejar la exportación de los granos.

En 1996, Felipe Solá, secretario de Agricultura del gobierno de Carlos Menem, autorizó la semilla de soja RR inventada por la multinacional estadounidense Monsanto. RR significa resistente al Roundup, marca comercial del herbicida total glifosato, también desarrollado por Monsanto. La multinacional norteamericana, a partir de 2004, luego de lograr la supremacía en el mercado nacional, comenzó a presionar para recaudar regalías por el uso de sus semillas, argumentando que en Estados Unidos cobraba 14 dólares y en Brasil 7 dólares por tonelada de soja RR.

En ese período, además, se impuso el sistema de labranza de siembra directa. Este sistema se realiza con una máquina moderna y, a diferencia de la labranza tradicional, abre un pequeño surco depositando la semilla y el fertilizante. Este novedoso método, que no da vuelta toda la tierra, deja siempre el suelo cubierto del rastrojo del cultivo anterior. De esta manera se logra impedir la erosión producida por el viento y el agua. Con la transformación de los métodos de siembra se redujeron los costos; por un lado se usa menos gasoil y con la aparición del glifosato –mata todo vegetal menos la soja– se dejaron de usar otros herbicidas.

Los especialistas en temas agrarios sostienen que la siembra directa,

la soja RR y el herbicida a base de glifosato fueron los pilares del proceso de sojización. Este proceso se ha consolidado de tal manera que en la cosecha 2002-2003, sobre un total de 70 millones de toneladas producidas, 35 fueron de soja. Hay que indicar, asimismo, que en razón de que la soja y sus derivados –aceites y harinas– son escasamente consumidos en Argentina, la economía nacional se encuentra en una situación endeble debido a que el grueso de la producción agraria pasó a depender del mercado externo que el país no controla.

Esto no es nuevo, ya que una situación similar se produjo con el quebracho, explotado y comercializado fundamentalmente por La Forestal. Tal como fue analizado en capítulos anteriores, el emporio británico metió el ferrocarril en lo más hondo del Chaco creando pueblos y fábricas para la extracción del tanino, dejando de lado cualquier otra actividad económica y cuando le fue más rentable la planta de mimosa en África, abandonó el país. En unos años, miles de desocupados y pueblos fantasmas reemplazaron el "progreso" de los ingleses. Al país le quedó el daño ecológico y social, y a los británicos las ganancias extraordinarias del período en que se desarrolló la explotación.

La expansión de la soja, tal como sucedió con el quebracho, afectó a otros sectores de la producción como el sorgo, las batatas, arvejas y lentejas; los montes frutales y las verduras. Es indudable que el crecimiento de las áreas sembradas ha sido muy importante. Según datos oficiales publicados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA) durante el ciclo 2001-2002 la soja pasó a representar el 42,7% de la superficie sembrada y el 44,4% de granos cultivados nacionalmente.

En la última década, en Santa Fe se ha incrementado un 38% el total de tierras destinadas a la agricultura (principalmente soja) y los cultivos de soja representan un 90% del total. Algo similar sucedió en provincias con menos tradición agrícola como Chaco, Formosa, Salta o Santiago del Estero. Por ejemplo en Chaco, la soja ha desplazado al cultivo de algodón. En Santiago del Estero, Salta y Tucumán se ha producido una avalancha de compras de tierras con montes, los que estaban habitados por pequeños productores, en su mayoría criadores de chivos.

Al drama de los campesinos desalojados habría que agregar que se pasó a talar indiscriminadamente montes para sembrar soja, contraviniendo las más elementales leyes de conservación de suelos. Estas tierras no soportarán una agricultura continua y el aumento del escurrimiento de agua desde estas zonas hacia Chaco y Santa Fe es apenas una muestra de lo que podría llegar a suceder. Para muchos especialistas ambientales se estaría en presencia de un proceso de devastación, erosión y desertización estructural de los suelos sometidos al sistema de siembra directa y cultivo de soja RR.

El crecimiento del cultivo de soja dio lugar a la aparición, en nuestra zona, de una cantidad importante de aceiteras en las cercanías de los puer-

tos del Río Paraná. Ahora China e India –principales compradores de nuestros aceites de soja– han comenzado a arancelar este producto. Este ejemplo evidencia la precariedad del llamado "complejo de la soja". Su crecimiento se dio por las necesidades del mercado externo controlado por las grandes potencias y desligado del mercado interno.

Concentración de tierras y evasión inmobiliaria

El "boom sojero" se desarrolla en un país donde la concentración de tierras es impresionante. Según datos del Censo Agropecuario 2001, los 936 terratenientes más poderosos tienen 35.515.000 hectáreas, y en el otro extremo 137.021 agricultores poseen solamente 2.288.000.

Benetton (900 mil), Cresud (460 mil), Bunge (260 mil), Amalia Lacroze de Fortabat (220 mil) poseen 2 millones de hectáreas, una superficie similar al territorio de Bélgica. También tienen importantes extensiones los Bemberg, con 143.000 hectáreas, Whertein –presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Cámara de Comercio Argentino-China–, con 98.000 y la familia Blaquier, con 45.000. De las 35 familias tradicionales que en el censo del año 1913 concentraban la mayor parte de las tierras, 30 siguen siendo grandes propietarios. Se destacan los Anchorena, con 40 mil hectáreas, y los Gómez Álzaga con 60 mil.

En Santa Fe, la situación es similar. Los 17 principales terratenientes son propietarios de 617.000 hectáreas y los 6.133 chacareros más pequeños tienen 158.000. El ejemplo de Santa Cruz es por demás de elocuente. Sobre 19.841.000 hectáreas, los 269 terratenientes más importantes poseen 11.490.000.

Los planes económicos aplicados en distintos períodos de nuestra historia –como sucedió en los '90– han contribuido no sólo a mantener, sino a profundizar el proceso de concentración de tierras. A tal punto esto es así, que tomando como base los Establecimientos Agropecuarios Productivos (EAP) de más de 5.000 hectáreas, observamos que en el Censo Agropecuario de 1913, 5.300 terratenientes eran dueños del 48% de las tierras, y en el Censo 2001, algo más de 6.000 son propietarios de casi el 50% de las mismas.

Lejos quedó el avance parcial en la redistribución de la tierra, logrado con la sanción de la Ley 13.246. En 1948, en Alcorta, en una histórica concentración, 14.000 productores agropecuarios habían saludado la decisión del gobierno de Perón de promulgar esa ley, que entre otros beneficios establecía la duración de los arriendos en cinco años, con opción a tres años más. Simultáneamente, el Banco Nación otorgaba una línea de créditos para la adquisición de campos. Esto posibilitó que miles de chacareros accedieran a la propiedad de la tierra. Por el contrario, hoy se puede observar que se está volviendo a una concentración similar a la de principios de siglo.

Para Eduardo Basualdo –economista de la Federación Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)–, los estudios del Censo 2001 "*con-*

cluyeron que los resultados obtenidos son relativos y que había una concentración muy superior a la esperada".

El economista sostiene que, hasta 1996, el buen precio internacional de los granos mantenía alto el valor de los campos. Sin embargo, a partir de ese momento comenzó un ciclo de bajos precios que provocó una nueva vuelta de tuerca sobre la situación de los pequeños y medianos productores que, presionados por los bancos, en muchos casos vendieron sus propiedades hasta por un 30% menos de su valor real. De esta manera comenzó una tendencia hacia una mayor concentración.

Basualdo explica, además, que por razones impositivas –para evadir el impuesto inmobiliario– los terratenientes comenzaron a dividir las tierras. Por ejemplo, la familia Whertein tiene sus campos a nombre de 40 sociedades distintas. Claro que, tomando en cuenta las unidades territoriales, aun cuando figuren a nombre de distintas compañías, se llega a la conclusión de que Whertein tiene 98.000 hectáreas. Ya sea por su carácter regresivo o por la gran evasión, en Santa Fe, en el año 2004, la recaudación por el Inmobiliario Rural fue de 40 millones de pesos. Según el especialista en temas económicos Rubén Milito, el mencionado gravamen representa "*menos del uno por ciento del dinero necesario para el funcionamiento del estado*" (Diario *Rosario/12,* 29 de agosto de 2004).

De acuerdo a lo expuesto por Basualdo, es probable que las conclusiones del Censo 2001 no sean correctas y la concentración de tierras sea aún mayor. A pesar de las leyes de herencia o el propio desarrollo del capitalismo, hoy –como ha sucedido a lo largo de la historia– el latifundio se mantiene incólume en el campo argentino.

Terratenientes y *pooles* de siembra

Con la irrupción de la soja, se abrió la posibilidad de hacer el doble cultivo trigo-soja en un año. Aprovechando esta situación, muchos contratistas lograron obtener significativas ganancias. Sin embargo, los grandes propietarios se adueñaron rápidamente del proceso de sojización. Primero establecieron la modalidad de contratos cortos de seis meses o un año. Luego impusieron el sistema de quintales fijos por hectárea y más tarde el pago por adelantado. De esta manera lograron evitar los riesgos de las contingencias climáticas y además usufructuaron los intereses del arriendo adelantado.

A partir de 2002, con la suba de los precios internacionales, los grandes latifundistas fueron los principales beneficiarios. A pesar de la baja de precios registrada en 2004, los arriendos que se pagan en la región pampeana siguen siendo alrededor del 40% de lo cosechado. En las tierras más fértiles se ha llegado a abonar hasta 15 quintales fijos de soja por hectárea.

Según datos del INTA y otras instituciones estatales y privadas que publica el Instituto Agrario de Asistencia Jurídica y Contable del Distrito VI de Federación Agraria Argentina, el 75% de la producción de granos es realizada por arrendatarios.

El Instituto Agrario, basándose en datos oficiales, difunde los resultados de la campaña 2002-2003 de los cuatro cultivos: soja, trigo, maíz y girasol. Las cifras dan cuenta de que se sembraron 24.416.000 hectáreas, con una producción de 66.100.000 toneladas por un valor de 33.544,5 millones de pesos. De este total, el 75% –21.158,4 millones de pesos–, es producido por contratistas. Si éstos pagan a los propietarios, como mínimo, el 40% de la cosecha, se llega a la siguiente conclusión: los dueños de la tierra recibieron 10.063,5 millones de pesos sólo por el hecho de poseer los títulos de propiedad.

A diferencia de los agricultores que buscan agregar a sus campos parcelas de tierra a fin de lograr una superficie mínima para poder sobrevivir, en los últimos años han aparecido empresas que arriendan decenas de miles de hectáreas en forma individual o en asociaciones. Son conocidas con el nombre de *pooles* de siembra. Entre los más poderosos se encuentran El Tejar o grupos como el de Gustavo Grobocopatel –que se autodenomina irónicamente un "sin tierra"– que en 2004 arrendaba 173.000 hectáreas.

Estas empresas contratan productores que por un lado no pueden comprar campos y por el otro están en manifiesta desventaja frente a los *pooles* para poder arrendar. Su gran poder económico les permite sembrar científicamente, dado que disponen de datos históricos del comportamiento meteorológico, a los que le agregan la información obtenida de distintos sistemas satelitales. De esta manera, arriendan campos poniéndose al resguardo de las calamidades climáticas. Compran en grandes cantidades, explotan el trabajo de los contratistas y usan sus maquinarias, lo que les ha permitido abaratar notablemente los costos. Al igual que en el caso de los terratenientes estas empresas se benefician notablemente con el "boom sojero".

Los puertos del Gran Rosario

En el año 2003, de los puertos instalados en la provincia de Santa Fe salía más del 85% de las oleaginosas (granos, aceites y subproductos) y el 60% del total de los cereales que exporta nuestro país, porcentaje que subía al 70% en el caso del maíz y al 96% del sorgo. La mayor parte de las exportaciones estaba y está bajo dominio de capitales extranjeros.

La capacidad de almacenaje y ritmo de carga para cereales y subproductos de las principales empresas portuarias del gran Rosario está muy desarrollada, y en el último período se ha acrecentado la concentración de los puertos. Teniendo en cuenta la capacidad de almacenaje y el ritmo de carga; Bunge, Cargill y Dreyfus son las terminales más importantes.

Bunge controla el 50% –la otra mitad está en manos de AGD– de Terminal 6. En ésta, funcionan cinco muelles: Bajos de la Alumbrera, T6 Norte, Muelle de Barcazas, T6 Sur y Resinfor. Tiene una capacidad de almacenaje de 900.000 toneladas entre granos y subproductos y una capacidad de molienda

de 9.000 toneladas diarias. T6 Norte tiene un ritmo de carga de 700 y 400 toneladas por hora de granos y subproductos. En T6 Sur el ritmo es de 2.000 y 1.500 toneladas por hora. De Resinfor se exporta solamente aceite. Bunge también es propietaria de La Plata Cereal. Allí funcionan dos muelles: Pampa y Dempa. El primero tiene un ritmo de carga de 2.000 y 1.400 toneladas por hora en cereales y subproductos y el segundo de 900 y 700 toneladas por hora.

En puerto "El Quebracho", de Cargill, funcionan tres muelles: Muelles para Barcas, Muelle Viejo y el Muelle de Fertilizantes. Esta empresa puede llegar a almacenar 1.000.000 toneladas de granos y subproductos y tiene una capacidad de molienda de 9.500 toneladas diarias. El Muelle Viejo registra un ritmo de carga de 1.700 y 1.200 toneladas por hora en cereales y subproductos. Al Muelle de Fertilizantes llegan los productos de Monsanto y se cargan aceites. En Rosario, Cargill junto a la estadounidense ADM embarcan desde las Unidades VI y VII de la ciudad (son del Estado y están concesionadas a Servicios Portuarios) y desde la Unidad III (también del Estado pero cedida directamente a Cargill). Este monopolio también exporta desde Punta Alvear donde tiene un comodato por veinte años y un ritmo de carga de 2.000 toneladas por hora.

En la planta de Dreyfus de General Lagos se puede almacenar 510.000 toneladas de granos y 240.000 de subproductos, con un ritmo hora de carga de 2.500 y 2.000 toneladas respectivamente.

Estos datos corresponden al mes de diciembre de 2004 y se modifican permanentemente debido a las fuertes inversiones que realiza este sector exportador.

En 2004, durante la época de cosecha, a los puertos del gran Rosario ingresaban más de 10.000 camiones por día. Las plantas de la zona procesaban 25.000 toneladas de soja por día. Actualmente está en curso un proceso de remodelación de las instalaciones de las grandes empresas que realizarán fuertes inversiones –se hicieron anuncios por 530 millones de dólares– en la zona. Cargill está remodelando sus instalaciones de puerto "El Quebracho", tiene decidido realizar una inversión de 200 millones de dólares para la nueva planta (en construcción) de Villa Gobernador Gálvez y destinará 5 millones de dólares en una fábrica de malta en Alvear (cervezas premium); Bunge comenzó a realizar obras –destinará 100 millones de dólares– en Ramallo. También están previstas importantes inversiones –80 millones de dólares– de Pérez Companc en el puerto de Molinos Río de la Plata. Vicentín invertirá 40 millones de dólares en su planta de Ricardone. Pero lo novedoso es la radicación en la zona del Grupo Noble –un *trader* cerealista con sede en Hong Kong– que invertirá 25 millones de dólares para la construcción de un puerto (a punto de operar) de granos en Timbúes.

La tecnología de las grandes terminales es de punta. La soja ingresa a las plantas en camiones y vagones –se descarga automáticamente– y pasa a un depósito donde se seca la semilla. Luego se la muele, se hace la extrac-

ción de aceites y se traslada la mercadería mediante máquinas a sus respectivos depósitos. Este ciclo se desarrolla en apenas 300 metros y en una hora se procesan aproximadamente 1.000 toneladas.

Al igual que en el ingreso, la salida de granos y subproductos es rápida. Cada barco tiene una capacidad de carga de alrededor de 43.000 toneladas y recibe 2.000 por hora.

Salvo algunas terminales de Estados Unidos, en el mundo no hay puertos tan rápidos como los de nuestra zona. Hoy Argentina exporta tecnología portuaria, principalmente a Brasil.

"Descontroles" aduaneros, evasión fiscal y especulación cambiaria

Los controles de carga son realizados por la Aduana. Por su parte la Prefectura vigila cada barco (condiciones de seguridad, seguros, calados de salida, etc.). Hasta fines del siglo pasado los controles se realizaban de acuerdo al ingreso de camiones que informaba la cerealera. Las empresas, para evadir entraban tres cargas con el mismo camión e informaban una. Por cada camión que no declaraban evadían 17.000 pesos. Era tan escandalosa la maniobra que se debió modificar el sistema.

Actualmente se practican los denominados controles "métricos". Los inspectores aduaneros tendrían que ubicarse en las cintas que sacan los cereales de los silos verificando la calidad y especie, en las balanzas controlando el peso previo a la descarga en las bodegas, y adentro mismo de los barcos para examinar mediante el método DRAFT. Éste es considerado muy efectivo por los expertos, aunque inusual en los controles de la Aduana: permite determinar la carga de un buque en función de su flotabilidad, ya que a mayor carga la nave va más hundida.

Estas medidas serían aparentemente más seguras; sin embargo, los sindicatos portuarios en reiteradas oportunidades han denunciado que la evasión continúa, ya que en la mayoría de los casos se cargan los barcos sin la presencia de los inspectores aduaneros, que eligen "al azar" el lugar y momento de los controles.

Ausencia o deficiencias en los controles, falta de personal y sobornos por parte de las empresas, son moneda corriente dentro del mundo de los puertos. Según datos que maneja el Ministerio de Economía, debido a las maniobras de triangulación sumadas al fraude de las facturas truchas y el contrabando estimulado por la falta de controles oficiales, la evasión de las cerealeras llegaría al 40%.

Tanto la AFIP como la Aduana han denunciado en reiteradas oportunidades por evasión a las multinacionales del cereal que operan en el país, monopolizando las exportaciones de granos y aceites argentinos.

En julio de 2002, el titular de la Aduana Mario Das Neves reveló ma-

niobras de subfacturación de empresas cerealeras y petroleras. Señaló que desde marzo de ese año comenzó a funcionar una denominada "matriz de riesgo de exportación" que permite analizar el universo de las exportaciones, los volúmenes operables y las actividades económicas que se desarrollan. Este sistema permitiría detectar la falta de coincidencias entre los ingresos al fisco y las ventas. Finalmente, el funcionario consideró que "*estas maniobras son una inmoralidad*" si se tiene en cuenta que "*las retenciones están siendo destinadas a subvencionar los Planes Jefes y Jefas de Hogar*".

En octubre de 2002, el titular de la DGI Horacio Castagnola declaró ante los medios que estaban investigando maniobras de triangulación y no descartó futuras denuncias penales. Manifestó que este tipo de operatoria se venía realizando sistemáticamente desde la devaluación, y aunque no dio nombres, trascendió que la lupa estaba orientada a tres de los mayores *traders* de cereales: Cargill, Dreyfus y Alfred Toepfer.

A raíz de estas denuncias, los titulares de la AFIP, Alberto Abad, y de la Aduana, Mario Das Neves, ordenaron a los especialistas tributarios y aduaneros del Ministerio de Economía investigar cuáles eran las empresas comprometidas en las maniobras de triangulación de exportaciones y a qué monto ascendía la evasión.

La investigación detectó, por ejemplo, que Cargill Argentina vendía granos a Cargill Uruguay a un precio mucho más bajo que el del mercado internacional y Cargill Uruguay los revendía al precio internacional a Brasil. De esta manera concluyeron que había certezas de que los embarques se hacían directamente hacia el destino final y que la exportación a los paraísos fiscales era ficticia.

En diciembre de 2002, los técnicos de Economía elevaron al ministro Lavagna un estudio con las conclusiones de los investigadores. Según el mismo, en el primer semestre de ese año y sobre una muestra del 40% del total de las exportaciones, se detectó una subfacturación de 558,85 millones de dólares. Ésta, en millones de dólares, se componía de la siguiente manera: Aceites de girasol 15,29; Aceites de soja 35,84; Aluminio 3,10; Carnes 88,79; Fibras de algodón 4,06; Maíz 16,75; Pescados y mariscos 113,45; Petróleo crudo 124,49; Soja 53,30; Sorgo 1,57; Trigo 102,22. Si se tiene en cuenta que este cálculo fue realizado sobre el 40% de las exportaciones, se podría afirmar que la subfacturación del primer semestre de 2002 superó los 1.000 millones y las cerealeras subfacturaron 400 millones de dólares durante ese período.

Con estas maniobras las empresas realizarían una doble evasión. Por un lado pagarían menos retenciones y, por el otro, menos impuestos a las Ganancias en Argentina, dejando las utilidades en las filiales radicadas en los paraísos fiscales.

Otra de las maniobras que practicarían las multinacionales cerealeras para estafar al fisco sería la presentación de facturas de proveedores inexistentes, para luego reclamar a la DGI el reintegro de IVA sobre los montos exportados.

En octubre de 2002, distintos medios –entre ellos *Clarín* y *Página/12*– informaron que por este motivo, la DGI efectuó una denuncia en el Juzgado Penal Económico Número 4, por evasión agravada contra Cargill. Ahora bien, si uno verifica el "Listado de Denuncias Penales relevantes radicadas en el año 2002" que publica la AFIP en Internet, se podrá observar que no se registró ningún tipo de denuncia contra Cargill. O bien para la AFIP este tipo de evasión no era relevante o directamente la información fue errónea.

Por último, habría que agregar el tema de la especulación en la liquidación de divisas. Las cerealeras, por el régimen cambiario vigente, deben ingresar al país los dólares que cobran por las exportaciones quince días después del embarque de la mercadería. Por ejemplo, durante la crisis cambiaria de 2002, momento en que la moneda norteamericana tocó los cuatro pesos y se especulaba con un dólar a ocho, las grandes cerealeras no liquidaron divisas. Éste es un tema importante no sólo como maniobra económica sino como presión política, ya que este sector exportador tiene un peso decisivo para comprimir o descomprimir el mercado cambiario.

También en esos difíciles meses de 2002 se habló de imputaciones penales contra los exportadores por demoras en la liquidación de divisas. Al igual que en el tema de las facturas falsas, las denuncias por especulación en la liquidación de divisas tampoco aparecieron en el "Listado de Denuncias Penales relevantes radicadas en el año 2002" que proporciona la AFIP.

A pesar de estos antecedentes, a partir de 2004 cuando el dólar se desvalorizaba en relación al peso el gobierno nacional, a través del Banco Central, compraba abultadas sumas de la moneda norteamericana para favorecer al sector exportador, inclusive al alto precio de que comenzara a desarrollarse un ciclo inflacionario, como sucedió durante la segunda parte de 2005.

Ineficiencia del Estado o un Estado al servicio de los exportadores

Si se verificaran los Listados de Denuncias de la DGI del año 2002 y 2003, se observará que no aparecía ninguna de las principales exportadoras de cereales. Las amenazas que en su momento hicieron Castagnola, Das Neves o Abad no pasaron de denuncias periodísticas. Por lo que se puede observar hasta hoy, al igual que en el pasado el poder político argentino no ha tomado medidas contra la evasión.

Esto no es nuevo en Argentina. En mayor o menor medida, desde el momento en que la dictadura comenzó un proceso de destrucción de la JNG (la eliminó Cavallo en 1991), los sucesivos gobiernos terminaron claudicando frente al poder omnímodo de las grandes cerealeras, entregándoles los puertos –como sucedió a partir de 1976 y se profundizó con el gobierno de Menem– y no tomando ningún tipo de medidas contra la evasión.

Como se puede apreciar en el estudio que los técnicos de Economía elevaron a Lavagna en diciembre de 2002 (ver "Descontroles aduaneros…"), en las maniobras de evasión habrían incurrido la mayoría de los exportadores. Además de las cerealeras; también participaron de triangulaciones las petroleras, los frigoríficos, las empresas pesqueras, del aluminio, etc. Esta evasión millonaria se dio en un país fundido, según expresaban Duhalde y Kirchner refiriéndose a la situación económica. La habrían llevado adelante Cargill, Bunge, Swift, Aluar, Repsol, Bridas, Techint, etc.; empresas que han tenido y tienen posiciones hegemónicas en el poder desde 1976 hasta hoy.

El gobierno nacional cuenta con elementos más que suficientes para probar las maniobras de subfacturación de las grandes cerealeras. Para corroborar esta afirmación, basta con repasar las declaraciones hechas en el año 2003 por los funcionarios de Economía para allanar el camino en la Legislatura a la reforma del Impuesto a las Ganancias.

Alberto Abad, titular de la AFIP, señaló que un estudio de los últimos cinco años del Impuesto a las Ganancias pagado por las exportadoras de cereales determinó "*que están significativamente por debajo de la media del resto de las empresas que tributan en la Argentina*". Agregó que cuando se triangulan operaciones "*se pagan impuestos a las ganancias por 5 y en el exterior por 8*". "*Esos 3 pesos de diferencia en la base imponible lo están perdiendo el trabajo argentino y los productores nacionales que generaron esos cereales*" (Diario *La Nación,* 16 de julio de 2003).

Según la AFIP, el sistema de Ganancias vigente habría facilitado maniobras entre las siete mayores cerealeras del país que pagaron "*entre 1997 y 2003 solo 19 millones de dólares por Ganancias, cuando les hubiera correspondido desembolsar unos 400 millones*" (Diario *Clarín,* 18 de marzo de 2003).

Como se ve, a pesar de disponer de contundentes pruebas, tal como ocurriera en el pasado, no se ha avanzado en la lucha contra la evasión.

Obeid ¿un gestor de los exportadores?

En el Gran Rosario se encuentra radicado el mayor complejo industrial aceitero de la República Argentina. Estas instalaciones marcan el perfil productivo elegido en la provincia de Santa Fe, que es de neto corte agro-industrial. Se trata de un modelo que está caracterizado por fuertes inversiones de capital, pero con escasa incorporación de mano de obra. El promedio de inversión alcanza a 500 mil dólares por cada puesto de trabajo generado. Según datos del Sindicato de Aceiteros de Puerto General San Martín el costo laboral llega apenas al 7 por mil. Pese a esta situación, las autoridades provinciales siguen insistiendo en darle prioridad a este sector de la economía.

Mientras que las principales aceiteras acumulan fabulosas ganancias, a pocos kilómetros de donde se encuentran ubicadas las plantas industriales viven centenares de miles de personas por debajo de la línea de la pobreza, y cerca del 30% de la población activa tiene problemas laborales. Teniendo en cuenta estos datos, se torna inevitable analizar el comportamiento del gobierno provincial frente a esta asimétrica realidad.

El gobernador Jorge Obeid, continuando con la política de su antecesor, Carlos Reutemann, ha dado permanentemente la espalda a los problemas de las mayorías santafesinas. Este hecho se puede apreciar en la falta de respuestas a los inundados de la ciudad de Santa Fe y otras localidades del norte, en las continuas disputas salariales que su gobierno mantiene con los trabajadores del sector estatal, particularmente el docente, o en la falta de asistencia a los sectores productivos locales.

Al mismo tiempo, y en reiteradas oportunidades, Obeid ha respaldado al sector exportador. En sus numerosas visitas a la Bolsa de Comercio de la ciudad de Rosario, donde recibe aplausos y elogios, reclama permanentemente por una rebaja de las retenciones a las exportaciones agropecuarias. A mediados de 2004 anunció que junto a la Nación, la Provincia va a poner dinero de sus arcas para la concreción del Plan Circunvalar, iniciativa que consiste en la construcción de un sistema ferroviario que permita rebajar los costos de flete de las transnacionales del sector exportador. En sintonía con las posiciones del gobernador el ministro de la Producción, Roberto Ceretto, sostuvo en Las Parejas que *"las retenciones que aplica el gobierno nacional a la producción generan fuertes desequilibrios y además son un robo"* (Diario *La Capital,* 6 de abril de 2005).

En 2004, el grupo chino Noble y el francés Dreyfus decidieron instalar sus plantas en la localidad de Timbúes, a orillas del Río Coronda. El jefe comunal, Néstor Sánchez, derogó la ordenanza de 1996 que eximía a las cerealeras de pagar el Derecho de Registro e Inspección (DREI) y exigió a los *traders* cerealeros que lo abonaran. Las empresas se negaron públicamente a afrontar dicha tasa exigiendo "*reglas de juego claras*" y "*seguridad jurídica*" para los inversores, a la vez que solicitaban un trato preferencial, similar al acordado con el gobierno provincial. Éste, a cambio de las inversiones, se había comprometido a realizar las obras de infraestructura para favorecer el acceso a los futuros puertos y el suministro eléctrico para el inicio de las obras. Además, Roberto Ceretto, ministro de la Producción de Santa Fe, confirmó que ambas compañías "*están incluidas dentro del régimen de promoción industrial de la provincia que las exime del pago de Ingresos Brutos y Ley 5.110"*. (Diario *La Capital,* 5 de enero de 2005).

En medio de la discusión –ahora ya pública– entre la comuna de Timbúes y las empresas cerealeras, Obeid presionó a favor de las multinacionales para que *"la Comuna retroceda en su decisión y ratifique la vieja ordenanza de promoción industrial"* (Diario *La Capital,* 5 de enero de 2005) y fue todavía más lejos al referirse de forma genérica a los jefes comunales e intendentes advirtiéndoles "*que no jueguen a hacerse millonarios con este tipo de inversiones*" (Diario *La Capital,* 5 de enero de 2005). Pese a las presiones del gobierno provincial, Néstor Sánchez se mantuvo firme y finalmente logró que las empresas se comprometieran a abonar entre 60 y 70 mil pesos mensuales en concepto de DREI, una suma cercana al 70% que originalmente reclamaba la Comuna.

En abril de 2005, en su visita a la República Popular China, el gober-

nador Obeid interesó a los capitales de esa potencia para que participen en la concreción de los proyectos elaborados por la Región Centro (Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos), todos vinculados al eje de la hidrovía Paraná-Paraguay y al corredor bioceánico.

La modernización, e incluso la reubicación de una parte del sistema portuario existente (los puertos de Santa Fe y Diamante), el Plan Circunvalar y las obras que permitirán en un futuro unir Porto Alegre (Brasil) con Valparaíso o Coquimbo (Chile) a través de un túnel a realizarse en la provincia de San Juan, son emprendimientos destinados a facilitar la salida de la región de los productos primarios (cereales, aceites y carnes) los cuales, no por casualidad, mayoritariamente tienen como destino a China.

Estas políticas evidencian que las gestiones del gobernador Jorge Obeid, lamentablemente son muy similares a las realizadas en 1863 por el entonces ministro Guillermo Rawson a favor de las concesiones ferroviarias a los ingleses, analizadas oportunamente.

El sistema tributario de la Provincia y de Rosario

El artículo 127 del Código Fiscal de la provincia de Santa Fe (Ley 3.456) especifica que "*no constituyen Ingresos Brutos gravados por este impuesto, los generados por las siguientes actividades:*" y en el inciso c se detalla que están exentas "*las exportaciones, entendiéndose por tales la actividad consistente en la venta de productos y mercaderías efectuadas al exterior por el exportador con sujeción a los mecanismos aplicados por la Administración Nacional de Aduanas*". De esto se desprende que el sector económico más poderosos y pujante –el exportador– no paga Ingresos Brutos.

El gobierno provincial sostiene un sistema tributario altamente regresivo, beneficiando a los sectores más poderosos en detrimento de los más humildes. Mientras cualquier cuentapropista o comerciante debe contribuir por cada actividad o venta realizada con el 3,5% en concepto de Ingresos Brutos, el sector aceitero no tributa porque se encuentra exento.

Desde ya que toda exención de gravámenes debe ser pensada como gasto tributario. Este es un concepto económico que explica el esfuerzo que hacen todos los contribuyentes para un sector de la economía que deja de aportar. Esto equivale a decir que el beneficio de la exención no sólo debe verse como un ingreso que deja de percibir el fisco sino también como un gasto por parte del Estado.

Esta situación es tan arbitraria e injusta que un plomero que emite una factura de 100 pesos por una reparación en un edificio deberá contribuir con el 3,5%, mientras que Cargill por una venta de aceite de un millón de dólares no paga nada.

El argumento de defensa que utilizan las aceiteras es que ya están pagando más del 20% de retenciones, y que la culpa de que ese dinero no

llegue a la Provincia es del sistema de coparticipación de Argentina, que deja todos los impuestos de Aduana en manos del Estado Nacional.

El plomero pensará en el 21% de IVA que pagó por su llave inglesa de origen chino con la cual desarrolla su trabajo: este impuesto sí es coparticipable, pero Cargill también recibe el beneficio de la devolución del IVA, así que no deja nada para coparticipar.

Asimismo, en Rosario y debido a una denuncia hecha oportunamente por el ex concejal Alberto Cortés, quedó demostrado que la administración socialista de la ciudad es tan permeable a la presión del lobby sojero como el gobierno provincial. La denuncia del mencionado edil sostenía que durante la gestión de Binner el Poder Ejecutivo impulsó una modificación en la forma de cobro del tributo municipal conocido como Derecho de Registro e Inspección (DREI). Esta modificación implicaba una suba en la alícuota pagada por este impuesto pero también promovía una reducción en la base imponible.

Hasta el 12 de abril del 2002, las cerealeras abonaban el 6,5‰ de cada venta hecha en Rosario. Después de la modificación –impulsada por el socialismo con el aval justicialista– las empresas pasaron a pagar el 15‰ de la ganancia bruta. Según la investigación del entonces concejal Cortés, esto trajo aparejado que la recaudación de este impuesto creció en valor nominal (pesos), pero bajó al 30% en valor real (dólares) divisa con la cual se desarrollan las operaciones de exportación.

Los números indican que en el cuatrimestre junio-septiembre del 2001, Cargill tributó 104 mil dólares, mientras que en el mismo período del año 2002 pagó 31 mil y Dreyfus abonó en esos períodos 7.500 y 1.900 respectivamente. Cuando la ordenanza fue aprobada, Boglione, titular de la Bolsa de Comercio, señaló "*que esta decisión permite que las cerealeras sigan operando en Rosario y así se preservan los puestos de trabajo en nuestra ciudad*".

Es probable que Reutemann-Binner antes, y Obeid-Lifschitz ahora, hayan tenido o tengan muchas diferencias cuando discuten temas políticos provinciales o locales, pero a la hora de tratar con los dueños del "boom sojero" esas diferencias, sin dudas, se diluyen.

El "boom sojero": ¿Panacea nacional o nueva forma del saqueo?

La política de entrega del patrimonio nacional y profundización de la dependencia (apertura de la economía, desregulación y privatizaciones) aplicada en Argentina desde 1976 por los sucesivos gobiernos, ha producido importantes cambios en la economía de Santa Fe. El capital financiero internacional, por intermedio de las grandes corporaciones que operan en el mundo y sus representantes o testaferros locales, se ha ido apoderando de lo fundamental del sector agroalimentario y de los puertos, pasando a controlar el área más importante de la economía provincial.

Los productores y trabajadores de vastas regiones fértiles de la provincia y del país han sido transformados en tributarios de un puñado de gigantescos monopolios, que tienen en sus manos el poder de decisión sobre qué debe producirse en la provincia. Estos grupos también han subordinado el comercio exterior y la propia navegación de nuestros ríos.

Sus representantes han uniformado la producción agraria en unos pocos cultivos de exportación (soja en Santa Fe), habiendo desaparecido desde hace varios años la chacra mixta. Además controlan las semillas, muchas de ellas modificadas genéticamente (como vimos en el caso de la soja) y los agroquímicos. Como sostiene Juan Echani:

> "*...al ceder el Estado su función reguladora para proteger al pequeño y mediano productor, son esos monopolios los que fijan los precios y las condiciones de pago de los granos que compran y de las semillas y agroquímicos que venden, expoliando al productor...*"
>
> (Echani, Juan, *Los puertos en la provincia de Santa Fe*, Rosario, 2002)

A la vez, los productores deben afrontar precios monopólicos por la compra de otros insumos bajo control extranjero, tales como combustibles, comunicaciones, vehículos de transporte, repuestos, etc. Fue así como un gran número de pequeños y medianos chacareros e incluso algunos terratenientes menores pasaron a depender de la usura bancaria y financiera. Decenas de miles fueron expulsados de sus campos a pesar de que con la pesificación y la devaluación muchos deudores pudieron regularizar sus hipotecas.

Estos monopolios se han beneficiado enormemente con la política devaluacionista del gobierno de Duhalde. La ganancia cambiaria –a una relación de 1 dólar = 3 pesos– está estimada en más de cinco mil millones de pesos anuales, libre de retenciones. A la vez, los exportadores están en condiciones de maniobrar con las divisas obtenidas del comercio exterior, no ingresándolas al país o haciéndolo en el momento más favorable a sus intereses, como ha sido analizado con motivo de los vaivenes cambiarios de 2002.

Las ventas de estos grupos al exterior casi no pagan impuestos. La Nación les reintegra el IVA, la Provincia los eximió del impuesto sobre los Ingresos Brutos y, como ya analizamos, mediante la subfacturación de exportaciones (utilizando casas matrices o filiales en otros países) o directamente el contrabando, evaden el Impuesto a las Ganancias. Para ello utilizan la corrupción que opera plenamente en relación a los funcionarios gubernamentales (de los más altos niveles del poder político y la esfera impositiva y aduanera) que debieran controlarlos.

El único impuesto que pesa sobre sus ventas son las retenciones a las exportaciones (del orden del 20% para granos y el 5% para los subproductos de la industria aceitera). Pero la posición dominante de estos monopolios en el mercado les ha permitido trasladar las retenciones a los agricultores.

Desde 1976, los sucesivos gobiernos santafesinos no sólo han adherido sumisamente a las políticas aplicadas desde el gobierno nacional, sino que han actuado como voceros de estos intereses. En los últimos años, tanto el gobierno de Reutemann como el de Obeid han sostenido la política de apertura externa que destruyó la industria provincial orientada al mercado interno. Todas las decisiones de estos gobiernos en materia de política fiscal, de privatizaciones, de obras públicas, de tarifas, etc., han sido favorables a los monopolios exportadores.

Si bien el "boom sojero" fue uno de los pilares de la recuperación de la economía nacional ya que trajo aparejada una importante reactivación del sector agroindustrial, **una vez más ha quedado demostrado que la dependencia y el latifundio han impedido que este ciclo favorable de los precios internacionales ayude a la expansión del mercado interno, facilitando el desarrollo de la industria nacional y provincial**.

Por un lado, el gobierno nacional ha escogido el erróneo camino de reconocer y pagar la ilegítima y fraudulenta deuda externa. Esto ha significado que los casi tres mil millones de dólares que deja el agro –retenciones agropecuarias y Ganancias– hayan sido destinados íntegramente al pago a los supuestos "acreedores".

Por otro lado, en el campo la mayor parte de los beneficios generados por el "boom sojero" (buenos precios internacionales) fue a parar a los bolsillos de los grandes propietarios (ver Concentración de las tierras...), que históricamente le han dado la espalda al mercado interno. Si a esto se le suman las enormes ganancias de los exportadores de granos y subproductos, se podrá concluir que el "boom sojero" no ha redundado en beneficio de las grandes mayorías que viven con muchísimas dificultades o directamente sumergidas en la pobreza.

Las inundaciones

A fines de abril de 2003 se producían las inundaciones más grandes de la historia de la provincia de Santa Fe. Según datos de la mayoría de las organizaciones sociales las aguas sesgaron la vida de varias decenas de personas –aún hoy no se conoce el número con precisión– dejando en la intemperie a más de cien mil santafesinos en la capital provincial y poblaciones aledañas. Las pérdidas materiales fueron estimadas en miles de millones, cifra muy superior a la requerida para canalizar el Salado y realizar el proyecto Bajos Submeridionales. Tanto las viviendas como la infraestructura de la capital y ciudades y localidades próximas sufrieron daños enormes, siendo también cuantiosas las pérdidas de cosechas y animales en las zonas rurales.

Es cierto que la inundación es un fenómeno provocado por la naturaleza, y nunca en el último siglo había llovido tanto en tan poco tiempo en esta zona del país. Pero también es cierto que hubo negligencia oficial, ya que

este fenómeno es recurrente: desde el siglo XVII hay referencias históricas de grandes inundaciones con cambios bruscos del cauce del Salado, que fueron registradas en los mapas de los Jesuitas de aquella época, y a las que jamás se le prestó atención. Tampoco se podrá negar que en reiteradas oportunidades reparticiones oficiales y entidades académicas, como la Universidad Nacional del Litoral (UNL), el Instituto Nacional de Agua (INA) y el Instituto Nacional de Limnología (INL) señalaron que el fin del período de El Niño traería grandes lluvias, a la vez que advertían de la sobresaturación de los terrenos de la extensa cuenca del Río Salado. También se sabe que la UNL, el INTA y el INA, desde 1992 venían presentando proyectos de obras para contener posibles inundaciones del mencionado río.

Además, habría que recordar que hace 142 años, cuando Juan Bautista Alberdi propuso canalizar el Río Salado, el gobernador de Santiago del Estero, Taboada, puso la piedra fundamental de esta obra que jamás se realizó. Algo semejante sucedió con la propuesta de canalización del Río Bermejo hecha por Bernardino Rivadavia cuando gestionó el empréstito con la Baring Brothers, en 1822, y cuyo proyecto de desarrollo, terminado hace 50 años, está "cajoneado" en algún despacho oficial.

El canal Norte-Sur del plan de canalización del Bermejo, de Pichanal (Salta) al puerto de Santa Fe, coincide desde Tostado (norte provincial) con el cauce del Salado que viene desde el dique Cabra Corral (Salta), pasando por Santiago del Estero. Con la realización de este proyecto, que incluye la canalización de la cuenca sur del Río Salado, se podría lograr un escurrimiento ordenado de sus aguas hacia el Río Paraná, obra vital teniendo en cuenta que a la altura de Tostado esa cuenca se satura (el terreno no absorbe más agua) si diluvia más de 80 milímetros, y con las inundaciones llovió más de 200 milímetros en pocas horas y 1.200 en cuatro meses. Los técnicos de la Comisión del Bermejo, que estaba integrada por los mandatarios provinciales de la cuenca, han dicho que el gobernador Reutemann nunca apoyó la obra porque "no veía qué beneficio podía traerle a la provincia de Santa Fe".

Ante la falta de planificación, distintas intendencias, y fundamentalmente importantes terratenientes de la región, han realizado canalizaciones parciales con el objetivo de resolver la situación en sus territorios, trasladando las aguas a zonas menos protegidas. Además, la construcción de un parapeto de defensa contra las inundaciones del Río Paraná terminó llevando todo el cauce del Salado a la ciudad capital, donde la acumulación de agua se potenció debido al terraplén de la Avenida de Circunvalación. Éste tuvo que ser volado en tres puntos, para facilitar el escurrimiento de las aguas hacia el Río Paraná.

A este desquicio en materia de política hidráulica, que ha potenciado el peligro de las inundaciones, se agregó en la última década, como producto de las reducciones presupuestarias y la desidia de los gobiernos de turno, el constante deterioro del sistema de alerta basado en mediciones hidrométricas. Embarcados de lleno en la campaña electoral con vistas a las elecciones del

14 de mayo de 2003, ninguna autoridad advirtió que ya el domingo 27 de abril se estaban fisurando las defensas de la ciudad de Santa Fe, y que 100 kilómetros aguas arriba el caudal que traía el Salado era de ¡3.000 metros cúbicos por segundo! De esto se desprende que las autoridades dispusieron de dos días para evitar al menos las pérdidas humanas y una parte de las materiales (mobiliarios y pertenencias personales de los inundados).

Finalmente, a la falta de previsión se sumó la inoperancia del gobierno para proceder ejecutivamente en la emergencia, lo que provocó un malestar generalizado en la población. En este marco, el gobernador Reutemann optó por militarizar la ciudad, preocupándose más por reprimir que por hacerse cargo de las pérdidas y necesidades sufridas por los damnificados. Durante esos dramáticos días, como ha sucedido en ocasiones similares, habría que destacar la inmensa solidaridad del conjunto del pueblo santafesino y del resto de la nación, canalizada a través de distintas organizaciones no gubernamentales.

En el año 1961, Fernando Birri –director de cine de origen santafesino– filmó *Los inundados*. El objetivo de ese emprendimiento, que había sido proyectado por el entonces flamante Instituto de Cine de la Universidad Nacional del Litoral, era difundir las graves consecuencias económicas y sociales que provocaban las inundaciones. La vera del Río Salado, en el norte de la provincia, fue el lugar escogido por Birri para la realización del filme. Como si se tratara de un capricho del destino, el rodaje debió suspenderse debido a la repentina crecida del río que cubrió totalmente los dieciocho ranchos montados por la producción y que serían utilizados durante la filmación. Según refiere el especialista cinéfilo rosarino Fernando Varea "*el desborde del Salado convenció al realizador acerca del nombre que iba a llevar su obra: Los inundados*".

Los inundados, basada en un cuento del también santafesino Mateo Booz, relata las peripecias de una familia que tras perderlo todo, incluso su casilla, termina en el interior de un vagón ferroviario que accidentalmente se pone en marcha, dando inicio a un periplo que lleva a los protagonistas a recorrer varios lugares para finalmente volver al punto de partida.

Las imágenes, a pesar de que en todo momento Birri intentó restarle dramaticidad al relato, son conmovedoras y similares a lo que sucedió en 2003 en Santa Fe. Muebles, elementos de cocina (ollas y platos) y demás artículos del hogar flotando sobre el agua; políticos que no interrumpen la campaña e ignoran a los inundados; hambre; el dramático reparto de ropa y comida; y una reflexión realizada por el protagonista –Dolores Gaitán– a la medida de estos tiempos: "*los políticos son todos iguales, puras promesas nomás*". Ésta, y no otra, es la amarga sensación que quedó en la población provincial luego de las inundaciones. Y no por renegar de la política, sino por llegar a la conclusión de que la Provincia está gobernada por una dirigencia que expresa los intereses de los terratenientes, los intermediarios y el imperialismo y da la espalda a las grandes mayorías.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL Y ESPECÍFICA

LIBROS

Academia Nacional de la Historia, *Nicasio Oroño, Síntesis biográfica, primera parte 1852-1864*, Buenos Aires, 1972.

ALEM, Leandro y otros; *La Revolución del '90*, Editorial La República, Buenos Aires, 1956.

ALEM, Leandro; *Autonomismo y centralismo*, Ediciones Raigal, Buenos Aires, 1954.

ÁLVAREZ, Juan; *Ensayo sobre la historia de Santa Fe*, Ed. Malena, 1910.

ÁLVAREZ, Juan; *Historia de Rosario. 1689-1939*, UNL, Santa Fe, 1981.

ÁLVAREZ, Juan; *La guerras civiles argentinas*, Eudeba, Buenos Aires, 1972.

ÁVILÉS, Víctor; *Gobernantes de Santa Fe desde 1810 hasta 1940*, Instituto de Investigaciones Históricas Brig. Gral. Estanislao López, Rosario, 1960.

BALVÉ, Beba; *Acerca de la relación: resistencia-lucha armada-huelga política de masas e insurrección proletaria"*, Cicso, Buenos Aires, 2004.

BARRETO, Félix; *Dr. Simón de Iriondo*, El Litoral, Santa Fe, 1933.

BELGRANO, Manuel; *Escritos Económicos*, Raigal, Buenos Aires, 1954.

BERESTAN, Israel; *Industria Argentina, su origen, desarrollo y destrucción*, Bitácora Ediciones, Buenos Aires, 2002.

BIBLIOTECA POPULAR VIGIL, *Santa Fe: el paisaje y los hombres*, Ed. Biblioteca, Rosario, 1971.

BORSATTI, Raúl; *LA REBELIÓN, historia y protagonistas de la marcha que conmovió a la dictadura de Onganía,* Reconquista, diciembre de 1999.

BRESCI, D. y GERA, L.; *Sacerdotes para el Tercer Mundo. Crónica, documentos, reflexión*. Publicaciones del MSTM, Buenos Aires, 1972.

BUSANICHE, José Luis; *Estanislao López y el federalismo del litoral*, Buenos Aires, 1927.

CAMPOLIETI, Roberto; *La chacra argentina*, Buenos Aires, 1914.

CÁRCANO, Miguel A.; *Evolución histórica del régimen de la tierra pública, 1810-1916*, Eudeba, Buenos Aires, 1972.

CARRASCO, Gabriel; *Descripción geográfica y estadística de la provincia de Santa Fe,* Stiller & Laas, Buenos Aires. 1886.

CERVERA, Manuel M.; *Historia de la ciudad y provincia de Santa Fe*, Ed. La Unión, Santa Fe, 1907, 2 v.

CERVERA, Manuel M.; *Boceto histórico. Colonización Argentina. Fundación de Esperanza,* Esperanza, 1906.

CHÁVEZ, Fermín; *General Ángel Vicente Peñaloza, El Chacho*, Ed. Crisis, Buenos Aires, 1975.

CONCATTI, Rolando; *Nuestra opción por el Peronismo,* Ediciones del MSTM, Mendoza, 1971.

DE MARCO, Miguel A.; DE MARCO, Miguel Ángel (h), PASQUALI, Patricia S., TICA, Patricia A., *Historia de Santa Fe*, Librería Apis, Rosario, 1992.

DE PAOLI, Pedro; *Sarmiento y su gravitación en el desarrollo nacional*, Ediciones Theoría, Buenos Aires, 1964.

DEL FRADE, Carlos; *Santa Fue, Una provincia robada*, Editorial Ciudad Gótica, Rosario, agosto 2003.

DÍAZ MOLANO, Elías; *Nicasio Oroño, colonizador*, Plus Ultra, Buenos Aires, 1972.

DIECIDUE, Antonio; *Netri, líder y mártir de una gran causa*, Federación Agraria Argentina, Rosario, 1969.

ECHAGÜE, Carlos; *El socialimperialismo ruso en la Argentina*, Ediciones Agora, Buenos Aires, 1984.

ECHANI, Juan; *Algunos apuntes sobre el Rosariazo*, Rosario, octubre de 1994.

ECHANI, Juan; *Los puertos en la provincia de Santa Fe,* Rosario, 2002.

EFIMOV, A. y FREIBERG, N.; *Historia de la época del capitalismo industrial*, Ed. Problemas, Buenos Aires, 1941.

ENSINCK, Oscar L.; *Historia económica de la provincia de Santa Fe,* Servicio de Publicaciones de la UNR, Rosario, 1985.
FALCÓN, Ricardo, *Orígenes del Movimiento Obrero (1857-1889)*, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1984.
GALLO, Ezequiel; *La pampa gringa*, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1983.
GÁLVEZ, Manuel; *Vida de Hipólito Irigoyen*, Editorial Tur, Buenos Aires, 1959.
GARCÍA SERRANO, Thomas; *Esteban Piacensa, Apuntes biográficos*, Librería y Editorial Ruiz, Rosario, 1966.
GASTIAZORO, Eugenio; *Historia Argentina, Introducción al análisis económico/social,* Tomos I, II y III (1980), Tomo IV (2004), Ediciones Agora, Buenos Aires.
GONZÁLEZ ARZAC, Alberto; *La Convención Constituyente de 1957*, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1980.
GORI, Gastón; *Colonización suiza en la Argentina. Colonizadores de San Carlos hasta 1860*, Santa Fe, 1947.
GORI, Gastón; *Vagos y malentretenidos*, Ed. Rodolfo Alonso, Buenos Aires, 1974.
GRELA, Plácido; *El grito de Alcorta, historia de la rebelión campesina* de 1912, Ed. Tierra Nueva, Rosario, 1958.
GRELA, Plácido; *Loma de Avila*, Ed. de la Sociedad de Historia de Rosario, Rosario, 1981.
INFANTE, Carlos; *Los orígenes de Casilda. Nota biográfica de don Carlos Casado del Alisal*, Rosario, 1944.
ISLA, César; *El Movimiento de Mujeres en Lucha y el Plan de Convertibilidad*, UNR Editora, Rosario, 2004.
JAURETCHE, Arturo; *FORJA y la década infame*, Arturo Peña Lillo, Buenos Aires, 1974.
LAGOS, H. M.; *Don Pascual Chabás, su vida y su obra (1850-1910)*, Buenos Aires, 1967.
LALLEMANT, Germán Ave; *La clase obrera y el nacimiento del marxismo en la Argentina*, Editorial Anteo, Buenos Aires, 1974.
LENIN, Vladimir Ilich; *El Imperialismo fase superior del Capitalismo-Obras Completas*, Ed. Cartago, Buenos Aires 1965.
LEVENE, Ricardo; *Investigación acerca de la historia económica del Río de la Plata*, Biblioteca Humanidades, La Plata, 1922.
LOZZA, Arturo Marcos; *Tiempo de huelgas, los apasionados relatos del campesino y ferroviario Florindo Moretti*, Editorial Anteo, Buenos Aires, 1985.
LUNA, Félix; *El '45, crónica de un año decisivo*, Ed. Sudamericana, España, 1999.
MARTÍNEZ SARASOLA, Carlos; *Los hijos de la tierra, Historia de los indígenas argentinos*, Emecé, Buenos Aires, 1998.
MIATELLO, Hugo; *La chacra santafesina en 1905*, Buenos Aires, 1905.
MITRE, Bartolomé; *Historia de Belgrano y la independencia argentina*, Editorial Estrada, Buenos Aires, 1971.
MONTOYA, Alfredo; *Historia de los saladeros argentinos desde 1810 a 1869*, Eudeba, Buenos Aires, 1969.
MORENO, Mariano; *Plan de operaciones que el gobierno provisional de las Provincias Unidas del Río de la Plata debe poner en práctica para consolidar la grande obra de nuestra Libertad e Independencia*
MUJICA, Carlos; *Peronismo y Cristianismo*, Editorial Merlín, Buenos Aires, 1973.
ODDONE, Jacinto; *La burguesía terrateniente argentina*, Ediciones Libera, Buenos Aires, 1975.
OGGIER, P. Gabriel; S.V.D. y JULLIER, Emilio; *Historia de San Jerónimo Norte*, Ed. Apis, Rosario, 1984.
OLMOS, Alejandro; *Todo lo que Ud. quiso saber sobre la deuda Externa y siempre se lo ocultaron*, Editorial de los Argentinos, Buenos Aires, 1985.
ORTIZ, Ricardo; *Historia de la economía de la Argentina, Ed. Plus Ultra, Buenos Aires*, Buenos Aires, 1971.
PARRISH, Woodbine; *Buenos Aires y la Provincias del Río de la Plata*, Ed. Solar, Buenos Aires, 1958.

PEÑA, Milcíades; *Antes de Mayo*, Ed. Fichas, Buenos Aires, 1975.
PEÑA, Milcíades; *De Mitre a Roca*, Ed. Fichas, Buenos Aires, 1968.
PERÓN, Juan Domingo; *Directivas Generales para todos los Peronistas.* Documento interno distribuido clandestinamente, enero de 1956.
PLA, Alberto y otros; *Rosario en la historia*, UNR Editora, Rosario, Tomo I (1999) y Tomo II (2000).
POLITI, Sebastián; *Teología del pueblo, Una propuesta argentina de teología latinoamericana 1967-1975*, en "Nuevo Mundo", Ediciones Castañeda-Editorial Guadalupe, Buenos Aires, 1992.
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN. Subsecretaría de Informaciones, *El campo recuperado por Perón*, Buenos Aires, 1952.
PUIGROSS, Rodolfo; *Los caudillos de la Revolución de Mayo*, Ed. Corregidor, Buenos Aires, 1971.
RAMOS, Jorge Abelardo; *Historia de la Nación Latinoamericana,* Tomos I y II, Arturo Peña Lillo Editor SRL, Buenos Aires, 1968.
ROSA, José María; *Historia Argentina*, Editorial Oriente, Buenos Aires, 1976.
SCALABRINI ORTIZ; *Historia de los ferrocarriles argentinos*, Ed. Plus Ultra, Buenos Aires 1971.
SCALABRINI ORTIZ; *Política británica en el Río de la Plata*, Ed. Plus Ultra, Buenos Aires 1971.
SCOBIE, James R.; *Revolución en las pampas, Historia social del trigo argentino 1860-1910*, Editorial Solar/Hachette, Buenos Aires, 1968.
VAREA, Fernando; *El cine argentino en la historia argentina 1958-1998*, Ed. Del Arca, Rosario, 1999.
VARGAS, Otto; *Conferencias, aportes al estudio del marxismo y la revolución argentina*, Ed. Del Instituto Marxista-Leninista-Maoísta de la Argentina, Buenos Aires, 2005.
WEINBERG, Félix; en su *Estudio Preliminar* a la obra de Juan Hipólito Vieytes: *Antecedentes históricos de la Revolución de Mayo*, Raigal, Buenos Aires, 1956.

DIARIOS

La Capital, El Ciudadano y la Región, La Tierra y Rosario/12 (Rosario); *La Nación, La Prensa, Crítica, La Opinión y Clarín* (Buenos Aires).

REVISTAS

Boom y El Vecino (Rosario); *Panorama, Qué, Nueva Era, Hechos y Protagonistas, Ciclos de la Historia, la Economía y la Sociedad, Cristianismo y Revolución y CGT* (Buenos Aires).

PONENCIAS E INVESTIGACIONES

El Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha: cuando la vida cotidiana de las mujeres rurales se politiza. Bidaseca, Karina; 4ª Jornadas de Investigación de la cultura. Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Buenos Aires, 2000.

"Hacia la equidad territorial de la provincia de Santa Fe". Comisión de Urbanismo del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe. Distrito 2. Investigación presentada a CPAU. Buenos Aires, 2003.

ÍNDICE

A modo de reconocimiento 7
Prólogo
Movimiento de Mujeres en Lucha 9
A modo de introducción: La historia como pasión y compromiso
Alejandro Hugolini 11

EL PERÍODO COLONIAL
Conformación de la nueva sociedad 15
La fundación de Santa Fe 18
Escaso desarrollo económico y extrema pobreza 20
La economía en el período previo a las colonizaciones 22
La ganadería en la etapa colonial 24
Las primeras estancias 25
Santa Fe: "puerto preciso" 26
Los originarios santafesinos 28
La sociedad colonial 30

EL FEDERALISMO CLAUDICANTE DE SANTA FE
Los sucesos revolucionarios de 1810 33
De las disputas a la declaración de la Independencia 34
Cuando Santa Fe derrotó a Belgrano 37
La claudicación de López y el ocaso de Artigas 39
La izquierda de Mayo 40
Artigas y López: dos posturas frente al centralismo 41
Buenos Aires mantuvo la supremacía sobre Santa Fe 44
La derrota unitaria y la Convención de Santa Fe 45
Santa Fe apoya a Urquiza 47
Se consolida el modelo oligárquico 49

LAS COLONIZACIONES ABREN UNA ERA DE CAMBIOS
Supremacía de los autonomistas sobre los liberales 51
Los grandes propietarios exigen seguridad jurídica 53
Diferentes modelos de colonización 54
Los terratenientes imponen los arrendamientos 57
Los primeros flujos inmigratorios 59
Se modifica la vieja geografía colonial 61
Colonia Esperanza. La primera experiencia 62
La colonización privada, fundación de La Candelaria 63
Predominio de los inmigrantes italianos 65
La agricultura extensiva condicionaba la vida en las chacras 67
Concentración y subdivisión de tierras 69
Los principales colonizadores 72
Escasa asistencia de los bancos 74

GENOCIDIO, ROBO Y REBELIONES

Las primeras luchas de los inmigrantes 77
La pueblada de Humboldt y los levantamientos de 1893 79
Algunas conclusiones del proceso de colonización 83
La expansión territorial: campaña de Obligado 85
La resistencia de los pueblos originarios 87
La culminación del reparto (robo) de la tierra fiscal 91
Los nuevos príncipes del latifundio 94
Cómo opera el imperialismo 97
Los ferrocarriles facilitan la penetración extranjera 98

SANTA FE ENFRENTÓ EL MODELO OLIGÁRQUICO

La generación del '80 107
Algunos rasgos de su proyecto económico y político 109
Las secuelas del modelo conservador 111
Desarrollo ganadero e irrupción de los frigoríficos 112
Se consolida el estado oligárquico provincial 113
Con la crisis de 1890 irrumpe el radicalismo 115
A partir de 1890 comienza un período revolucionario 118
Triunfo de la revolución y contraofensiva del "régimen" 121
El papel del movimiento obrero en las revoluciones de 1893 127

EXPANSIÓN ECONÓMICA, PERO PARA POCOS

El boom cerealero 131
Rosario y su "época de oro" 133
Los puertos en la provincia de Santa Fe 138
El nuevo puerto de Santa Fe 139
El puerto de Rosario 140
Origen de los pueblos de la Provincia 142
La rebelión agraria de Alcorta 145
La rebelión obrera de La Forestal 149
Algunas conclusiones del modelo del '80 153

LA CRISIS DEL '30 POSIBILITA EL AUGE INDUSTRIAL

La preeminencia agropecuaria antes de la crisis 157
Rosario define su perfil fabril 158
Las gestiones radicales previas a la crisis 161
La debacle económica mundial 164
El golpe de 1930 166
Crece la industria y se desarrolla una gran cuenca lechera 167
Proteccionismo y asfalto para impulsar la producción 169
Dos años, cinco gobernadores 171
La gestión de la Democracia Progresista 172
Los gobiernos de Iriondo y Argonz 174
Los comunistas y los conflictos europeos 177
El golpe de Estado de 1943 178

SE IMPONE LA BURGUESÍA INDUSTRIAL

El 17 de octubre de 1945 183
El proceso de sustitución de importaciones 186
Se consolida la industria provincial 188
El papel del peronismo en el desarrollo industrial 190
Las nacionalizaciones del gobierno peronista 192
Disputas en el peronismo provincial: Saadi profundiza la división 194
La Constitución Provincial de 1949 198
Guerra de Corea: los ferroviarios se oponen a Perón 198
Los enfrentamientos con la Iglesia 200
Los bombarderos a Plaza de Mayo 201
El golpe del 16 de septiembre 203

LA RESISTENCIA Y EL VOTO EN BLANCO

Se reinstala el modelo liberal 205
Durante dos años Santa Fe no da tregua 206
La Resistencia en la "capital del peronismo" 209
La Constituyente de 1957: triunfo del voto en blanco 211
Frondizi hizo lo contrario de lo que prometió 214
El intento de copamiento del Regimiento 11 216
La etapa final del gobierno de Frondizi 217
El desarrollismo provincial 219
El voto en blanco para castigar a Sylvestre Begnis 220
La intendencia de Luis Cándido Carballo 222
Las elecciones provinciales de 1961 224
El modelo desarrollista 225
Las Leyes de Radicación y Promoción Industrial 226
Predominio extranjero en la industria santafesina 227
Un desarrollo industrial asimétrico 230

SUBLEVACIONES, PUEBLADAS Y CURAS REBELDES

Azules y Colorados 233
El aluvión de votos en blanco condicionó a Illia 234
Onganía: un gobierno "todopoderoso" 235
El período previo al Rosariazo 237
La "Marcha del Silencio" y el Rosariazo 238
El Concilio Vaticano II y los curas tercermundistas 242
Conflictos internos y externos del MSTM 244
Renuncias en Rosario y represión en Cañada de Gómez 245
General Obligado: una historia de pobreza y luchas 246
La pueblada de Villa Ocampo 248

EL SEGUNDO CICLO PERONISTA Y EL GOLPE DEL '76

Un período de grandes cambios en el poder 255
Las elecciones del 11 de marzo y el retorno de Perón 257
El triunfo electoral de Perón 259
Golpismo abierto y caída del gobierno de Isabel 261

La dirigencia santafesina cómplice del golpe 264
El programa económico de Gelbard 267
La nueva legislación económica 268
Las leyes agrarias peronistas 270
La Unión Soviética, el principal socio comercial 271

DE LA ENTREGA DEL '76 A LOS SAQUEOS

El plan económico de la dictadura 275
El proceso de entrega de los puertos 277
Rosario, el "reinado" de Cristiani y Natale 279
La represión en Santa Fe 283
La Guerra de Malvinas 285
Rosario: contraofensiva y conmoción por bárbaros crímenes 288
La desindustrialización del país 290
La huida de Alfonsin 291
El fracaso de la política económica radical 293
En la provincia triunfó el PJ y en Rosario la UCR 296
Los saqueos 300

EL ARGENTINAZO: SANTA FE HIZO LA PUNTA

Los cambios en el mundo y la traición de Menem 303
Impacto del neoliberalismo en la producción y el trabajo 306
Concesiones al capital extranjero: la radicación de GM 309
Irrupción del socialismo en una provincia justicialista 311
La huelga ferroviaria de 1991 315
La derrota de la política menemista 316
Los conflictos agrarios durante la década 319
Protagonismo de la mujer agraria: el papel del MML 321
Se abre una situación revolucionaria 324
El Argentinazo 325
El gobierno de Reutemann ordena la criminal represión 326
Algunas conclusiones del Argentinazo 328
El Casildazo y la "Marcha de los pueblos del sur a Rosario" 330

LAS GRANDES REGIONES

Santa Fe posee un poderoso potencial económico 333
Norte-Centro-Sur: una división tradicional 336
Las cuatro grandes regiones 337
La región urbano-industrial-costera 338
La región agrícola 341
La región tambero-pecuaria-industrial 343
La región pecuario-boscosa-industrial 344

DE LA DEVALUACIÓN AL "BOOM SOJERO"

La devaluación: un gigantesco saqueo 347
Origen y consolidación del proceso de sojización 349

Concentración de tierras y evasión inmobiliaria 351
Terratenientes y *pooles* de siembra 352
Los puertos del Gran Rosario 353
"Descontroles" aduaneros, evasión fiscal y especulación cambiaria 355
Ineficiencia del estado o un estado al servicio de los exportadores 357
Obeid ¿un gestor de los exportadores? 358
El sistema tributario de la Provincia y de Rosario 360
El "boom sojero": ¿Panacea nacional o nueva forma del saqueo? 361
Las inundaciones 363

Bibliografía 367

Del genocidio y robo de tierras al "boom sojero"

Diseño Gráfico Integral
UNR EDITORA
EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
Secretaría de Extensión Universitaria

Urquiza 2050 - (S2000AOB) Rosario - Santa Fe - República Argentina
Edición de 1000 ejemplares
Abril 2006